

En la Ciudad de México, siendo las 10:00 horas del día 25 de abril de 2018, se reunieron en el salón de sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, esquina Periférico Sur, Colonia Arenal Tepepan, a fin de celebrar sesión ordinaria del Consejo General las señoras y señores: Doctor Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente; Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles y Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, Consejeros Electorales; Diputado Jorge López Martín, Diputada Mariana Benítez Tiburcio y Diputada Lorena Corona Valdés, Consejeros del Poder Legislativo; Licenciada Joanna Alejandra Felipe Torres, representante suplente del Partido Acción Nacional; Maestro Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional; Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; Maestro Pedro Vázquez González, representante propietario del Partido del Trabajo; Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante propietario de Movimiento Ciudadano; Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza; Licenciado Horacio Duarte Olivares, representante propietario de MORENA (así como el representante suplente, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas); Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante propietario de Encuentro Social; Ciudadana Fernanda Caso Prado, representante de la Candidata Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana, Ciudadana Margarita Ester Zavala Gómez del Campo y Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana, Ingeniero Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Asimismo, concurre a la sesión el Licenciado Edmundo Jacobo Molina, Secretario del Consejo del Instituto Nacional Electoral.

---

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muy buenos días, señoras y señores Consejeros y representantes, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del Consejo General, convocada para el día de hoy. \_\_\_\_\_

Por lo que le pido al Secretario del Consejo, verifique si hay quórum legal para sesionar. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Consejero Presidente, me permito informarle que no tenemos quórum para sesionar. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Colegas, integrantes del Consejo General, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y del artículo 15, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Sesiones del Consejo General y en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 7, párrafo I, inciso f) y h) del mismo ordenamiento, y toda vez que no contamos con la presencia del número de integrantes del Consejo General que se requiere para poder sesionar, me permito convocar a realizar la sesión extraordinaria a las 10 horas con 35 minutos del día de hoy, a efecto de desahogar el orden del día. \_\_\_\_\_

Por lo anteriormente señalado, Secretario del Consejo, le pido que informe por escrito a los integrantes del Consejo respecto a la hora y fecha de la sesión. \_\_\_\_\_

Gracias. \_\_\_\_\_

**(Receso)** \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** El Secretario del Consejo, ha informado sobre la reanudación de la sesión convocada para el día de hoy, y habiéndose cumplido la hora señalada para ello, procederemos a desahogar el orden del día previsto. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, continúe con la sesión, por favor. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Consejero Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el

propósito de evitar la votación del permiso correspondiente, y así entrar directamente a la consideración de los asuntos.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Le pido que proceda a formular la consulta sobre la dispensa que propone.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, está su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, y así entrar directamente a la consideración de los mismos, en su caso.\_\_\_\_

Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor.\_\_\_\_\_

Aprobada por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros y representantes, me permito informar a ustedes que mediante oficio de fecha 16 de abril del presente, suscrito por el Doctor Enrique Ochoa Reza, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, se comunicó la designación del ciudadano Ramón Tonatiúh Medina Meza como representante suplente de ese partido político.\_\_\_\_\_

Es el caso que estando presente procede tomarle la protesta de Ley, por lo que ruego a todos ustedes ponerse de pie.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Ciudadano Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, ¿Protesta usted

guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como la Ley General de Partidos Políticos y desempeñar leal y patrióticamente la función que se le ha encomendado?\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Maestro Tonatiúh Medina Meza:** ¡Sí protesto!\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Confío en que en el desempeño de esta importante encomienda usted se apegará a los principios rectores de la función electoral y contribuirá con ello al fortalecimiento y consolidación del Sistema democrático del país.\_\_\_\_\_

Sea usted bienvenido.\_\_\_\_\_

Continúe con la sesión, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Consejero Presidente el siguiente asunto se refiere al orden del día.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el orden del día.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martín, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martín:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

A efecto de solicitar una moción en el sentido de que el punto 11 del orden del día, que se refiere específicamente a la realización del Segundo Debate, pueda ser remitido al punto 1 del orden del día, me parece que el ejercicio que vivimos del Primer Debate tiene tal trascendencia que valdría la pena que las señoras y los señores Consejeros Electorales valoraran el poder comenzar con este punto a efecto de poder transmitir el enorme reconocimiento, y me parece que en el primer punto así sería, de orden que los partidos políticos tenemos al gran trabajo de todos los integrantes de este Instituto.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputado.\_



Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que someta a consideración del Consejo General y en votación económica consulte si se aprueba el orden del día con la modificación sugerida por el Diputado Jorge López Martín.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Con gusto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros Electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día, tomando en consideración la propuesta del Diputado Jorge López Martín, a fin de que el punto 11 del orden del día original con el que se convocó a esta reunión pase a ser el número 1 y, en consecuencia, recorrer el resto de los puntos del orden del día.\_\_\_\_\_

Quienes estén por la afirmativa con esta modificación, sírvanse manifestarlo.\_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**(Texto del orden del día aprobado)**\_\_\_\_\_

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**\_\_\_\_\_

**CONSEJO GENERAL**\_\_\_\_\_

**SESIÓN ORDINARIA**\_\_\_\_\_

**ORDEN DEL DÍA**\_\_\_\_\_

**25 DE ABRIL DE 2018**\_\_\_\_\_

**10:00 HORAS**\_\_\_\_\_

1.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Benito Nacif Hernández) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la Presidencia de la República del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el Anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a

fin de incluir a los moderadores designados. (Comisión Temporal encargada de Coordinar la realización de debates en la elección Presidencial)\_\_\_\_\_

2.- Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria, extraordinarias y especial celebradas los días 14 (2 sesiones), 23 (2 sesiones), 28 (2 sesiones), 29 y 30 de marzo, así como 4 (2 sesiones) y 5 de abril de 2018.\_\_\_\_\_

3.- Informe Sobre el Cumplimiento de Acuerdos, Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las Solicitudes Generadas en las Sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. (Secretaría Ejecutiva)\_\_\_\_\_

4.- Informe que presenta el Secretario del Consejo General en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.\_\_\_\_\_

5.- Sexto Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018.\_\_\_\_\_

6.- Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de campaña, así como para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección popular correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave.\_\_\_\_\_

6.1.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Presidente Municipal en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.\_\_\_\_\_

6.2.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión del

informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local, Pablo Raúl Moreno Carrión, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.\_\_\_\_\_

6.3.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. Ricardo Meza Cervantes, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Apaxco, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de México.\_\_\_\_\_

6.4.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.\_\_\_\_\_

6.5.- Proyecto de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de la aspirante al cargo de Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.\_\_\_\_\_

7.- Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de queja y administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales. (Comisión de Fiscalización)\_\_\_\_\_

7.1.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral Respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de

fiscalización, instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado como INE/P-COF-UTF/22/2014.\_\_\_\_\_

7.2.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-585/2015 respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, en contra del Partido Acción Nacional y su otrora candidata a jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF.\_\_\_\_\_

7.3.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, instaurado en contra del Partido Revolucionario Institucional y su entonces precandidato a gobernador del estado de Yucatán, en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC.\_\_\_\_\_

7.4.- Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática, identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB.\_\_\_\_\_

8.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)\_\_\_\_\_

9.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral)\_\_\_\_\_

10.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Informes que presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en materia de Participación Ciudadana y Cultura Cívica. \_\_\_\_\_

10.1.- Informe sobre las actividades realizadas por la DECEyEC en el marco del Plan de Impulso a la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Cultura Cívica en el Proceso Electoral 2017-2018, en especial de los planes conjuntos INE-OPL en las entidades en esta materia. \_\_\_\_\_

10.2.- Informe Trimestral sobre los avances en el desarrollo y puesta en marcha del Programa Anual 2018 de actividades de implementación y evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2033. \_\_\_\_\_

11.- (A petición del Consejero Electoral, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez) Sexto Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 22/03/18 al 20/04/18. (Comisión de Capacitación y Organización Electoral) \_\_\_\_\_

12.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena a la Junta General Ejecutiva elaborar e implementar un marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. \_\_\_\_\_

13.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Segundo informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los procesos electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los Órganos Electorales del Instituto. \_\_\_\_\_

14.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempo en Radio y Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018; en el estado de Nuevo León. \_\_\_\_\_

15.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) 8vo Informe mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. (Secretaría Ejecutiva)\_\_\_\_\_

16.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, para la ampliación del periodo de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de un aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local MR de la Ciudad de México y tres aspirantes a candidatos independientes a diversos cargos en el Estado de México, en cumplimiento de las sentencias TECDMX-JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 y ST-JDC-0129-2018. (Comisión de Fiscalización)\_\_\_\_\_

17.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018.\_

18.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización.\_\_\_\_\_

18.1.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente ST-RAP-20/2017, interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México en contra del Dictamen Consolidado INE/CG523/2017 y la Resolución INE/CG524/2017, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.\_\_\_\_

18.2.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-165/2017, interpuesto por el C. Juan Antonio Salazar Oviedo, en contra de la Resolución INE/CG301/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).\_\_\_\_\_

18.3.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-193/2017, interpuesto por el C. Efraín Pérez Ramos, en contra de la Resolución INE/CG301/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).\_\_\_\_\_

18.4.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-196/2017, interpuesto por el C. Pascual Miramontes Plascencia, en contra de la Resolución INE/CG301/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).\_\_\_\_\_

18.5.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-453/2017, interpuesto por el C. Antonio Ayón Bañuelos en contra del Dictamen Consolidado y de la Resolución identificados con los números INE/CG299/2017 e INE/CG301/2017, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).\_\_\_\_\_

18.6.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal Electoral, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SG-RAP-35/2017, interpuesto por el C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, en contra de la Resolución INE/CG170/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.\_\_\_\_\_

18.7.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-76/2017, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG520/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.\_\_\_\_\_



- 18.8.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SM-RAP-79/2017, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG520/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.\_\_\_\_\_
- 18.9.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-759/2017, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la Resolución identificada con el número INE/CG520/2017, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.\_\_\_\_\_
- 18.10.- Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da cumplimiento a la sentencia de la H. Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente SG-JDC-105/2018, interpuesto por el C. Pablo Arana Pérez en contra de la Resolución número INE/CG198/2018.\_\_\_\_\_
- 19.- (A petición del Consejero Electoral, Dr. Ciro Murayama Rendón) Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, con corte al 22 de abril de 2018. (Comisión de Fiscalización)\_\_\_\_\_
- 20.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, marzo de 2018. (Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)\_\_\_\_\_

- 21.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el número adicional de boletas para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero emitan su voto durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como su resguardo y destrucción en los términos del libro sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. (Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero)\_\_\_\_\_
- 22.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, marzo 2018. (Comisión del Registro Federal de Electores)\_\_\_\_\_
- 23.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. (Comisión del Registro Federal de Electores)\_\_\_\_\_
- 24.- (A petición del Consejero Electoral, Lic. Enrique Andrade González) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los “Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”. (Comisión del Registro Federal de Electores)\_\_\_\_\_
- 25.- (A petición del Consejero Presidente, Dr. Lorenzo Córdova Vianello) Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes

de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los partidos políticos nacionales y Coaliciones.\_\_\_\_\_

26.- Asuntos Generales.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Consulto a ustedes en este momento y lo preguntaré al término o al llegar al punto correspondiente si alguien desea agendar algún Asunto General.\_\_\_\_\_

De no ser el caso, insisto, luego más tarde haré la consulta respectiva, le pido que dé cuenta del primer punto del orden del día, Secretario del Consejo, gracias.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El primer punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la Presidencia de la República del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el Anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los moderadores designados.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández:** Muchas gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Buenos días a todos.\_\_\_\_\_

Este Proyecto de Acuerdo tiene 2 objetivos, en primer lugar, proponer a este Consejo General la designación de las personas que fungirán como moderadores del Segundo Debate Presidencial, que se celebrará el próximo 20 de mayo en la Ciudad de Tijuana, Baja California.\_\_\_\_\_

La Comisión Temporal de Debates presenta la siguiente propuesta: Un grupo de moderadores formado por Yuriria Sierra y León Krauze, ambas propuestas

profesionales de la comunicación, con una trayectoria consolidada. Yuriria Sierra es periodista y conductora del programa de televisión Imagen Noticias con Yuriria Sierra y del programa radiofónico “Al cierre”; publica diariamente la columna “Nudo gordiano” en el periódico Excélsior. León Krauze conduce los noticieros de Univisión en Los Ángeles California y es columnista del periódico El Universal, destaca en su trayectoria como analista internacional especializado en la política estadounidense, desde 1996 ha cubierto elecciones presidenciales en Estados Unidos para diversos medios de habla hispana.\_\_\_\_\_

Con esta propuesta se da cumplimiento al Acuerdo del Consejo General INE/CG123/2018, que en su Resolutivo Décimo señala que los formatos específicos deberán contemplar la participación entre 2 y 4 moderadores, así como procurar la paridad de género en su designación.\_\_\_\_\_

Los 2 periodistas propuestos estarán desde luego, eso es opinión de la Comisión Temporal de Debates a la altura del reto que implica el Debate Presidencial con público presente, con el formato de asamblea; es la primera vez que se realizará en México un Debate Presidencial con este formato.\_\_\_\_\_

El segundo objetivo del Proyecto de Acuerdo es la modificación a la escaleta del Segundo Debate, contenido en el Anexo 3 del Acuerdo INE/CG388/2018, al definir el número de moderadores que participarán en este ejercicio, lo consecuente es que se refleje en las interacciones que tendrán con la y los candidatos, por ello, se ajusta la escaleta del Segundo Debate Presidencial.\_\_\_\_\_

No quisiera dejar pasar la oportunidad de agradecer los comentarios positivos que se hicieron en la mesa de la sesión del lunes pasado, respecto al Primer Debate Presidencial, extendiendo estas valoraciones a los integrantes de la Comisión Temporal de Debates, incluidos los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo, a los integrantes de la Mesa de Representantes, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Comunicación Social y a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos; todos trabajaron arduamente durante varios meses previos a la celebración del Primer Debate y, desde luego, en la preparación de los 2 debates que tenemos por delante.\_\_\_\_\_

En los próximos días estaremos haciendo una revisión de lo acontecido y evaluaremos la posibilidad de hacer ajustes en el trabajo de producción de los debates restantes para que cumplan las expectativas de la ciudadanía como una herramienta fundamental para el ejercicio del voto informado y razonado. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martín, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martín:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Con toda la honestidad intelectual, quienes representamos a partidos políticos siempre o regularmente estamos atentos a cualquier especie de falla o de omisión de este Instituto Nacional Electoral, pero, sin embargo, me parece, que por una obligada responsabilidad tenemos que reconocer el trabajo, no solamente de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de Debates en las Elección Presidencial, quienes estuvimos presentes en este ejercicio observamos un gran trabajo de todo el personal adscrito a este Instituto Nacional Electoral, por lo tanto, queremos reiterar desde el Partido Acción Nacional, y dejar patente, nuestro más amplio reconocimiento a la labor desempeñada por todos y cada uno de los integrantes de este Instituto. \_\_\_\_\_

Es de alta relevancia el ejercicio que se generó, voy a utilizar una frase de un periodista norteamericano en un momento dado, en el que en los Estados Unidos se generó un debate en la Elección, en donde resultó ganador William Clinton y mencionó que: "...los debates televisivos arrancan la verdad en los Procesos Electorales..." \_\_\_\_\_

Esta frase, es evidente que fue el resultado de este ejercicio y, por lo tanto, hay que destacar que será fundamental para el desarrollo del proceso democrático, pero será también fundamental para la valoración y el contraste de quienes habrán de decidir en la mayor Elección que habrá de celebrarse en nuestro país. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, dejamos patente el reconocimiento, subrayamos que el rating, la audiencia que tuvo ha sido de las mayores en la historia de nuestro país y esto, sin lugar a dudas es parte, insisto, del gran trabajo y de la labor del personal del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Diputado Jorge López Martín. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA. \_\_\_\_\_

**El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muy buenos días a todas las personas presentes. \_\_\_\_\_

A nosotros nos parece que se había definido un formato en donde se establecieron 3 moderadores, ahora se cambia a 2. Nosotros queremos insistir para que el equilibrio dentro del Debate, respecto a los moderadores, se tenga bien dado en la inclusión de otro moderador, nosotros habíamos sugerido a Jorge Ramos, que me parece que va muy bien con los temas que aquí ya están establecidos. \_\_\_\_\_

Entonces, se dijo en la Comisión Temporal de Debates, ahora se insiste y se pone a consideración de los Consejeros del Consejo General si es posible que se incluya un tercer moderador como habíamos dicho, Jorge Ramos que, en términos cuantitativos y cualitativos tiene las mayores audiencias en los temas que se van a tratar de la Frontera Norte y en los Estados Unidos. Ésa sería una de las primeras cuestiones que hay que decir. \_\_\_\_\_

Respecto a las referencias que han estado haciendo sobre la verdad, bueno, ahí va saliendo la verdad, es todo lo que tendría que decir. \_\_\_\_\_

Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:**

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenos días, Consejeras, Consejeros, representantes. \_\_\_\_\_

Luego de la realización exitosa de este Primer Debate Presidencial y a 7 meses de la instalación de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de Debates en la Elección Presidencial en el Partido del Trabajo consideramos que se cumplió el objetivo de adecuar los debates mexicanos en una perspectiva novedosa como ya se señaló, mejorándose los niveles de producción, la conducción y la participación de todos los Candidatos. \_\_\_\_\_

El formato realizado el domingo pasado puso a los Debates que organiza esta autoridad electoral en una línea nacional e internacional moderna, con la inclusión de ciertos elementos que generaron mayor dinamismo y flexibilidad, lograron una mayor discusión y confrontación de ideas e interacción espontánea entre los participantes. \_\_\_\_

La moderación estuvo dentro de los parámetros contemplados. Consideramos que este nuevo estilo llegó hoy para quedarse, sin embargo, y en congruencia con nuestras posiciones planteadas por el Partido del Trabajo en la Comisión Temporal de Debates, expresamos que no se ha logrado darle vida al Considerando 17 del presente Proyecto, el cual es más claro en torno a que en la selección de las personas que fungirán como moderadores se tomarían en cuenta criterios tales como la probada trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político, conforme a las reglas básicas aprobadas por este Consejo General en el Acuerdo respectivo INE/CG562/2017. \_\_\_\_\_

Las propuestas que aquí se presentan fueron elaboradas por los Consejeros Electorales y solo puestas a consideración de los partidos políticos y de los representantes sin posibilidades de sugerir o revisar diversas personalidades de la conducción. \_\_\_\_\_

Existen comentaristas o analistas políticos provenientes del sector de la prensa escrita que ellos estarían a la altura de la conducción de los Debates, lo cual crearía un equilibrio en la participación de las personas que funjan como moderadores. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Diputada Lorena Corona, Consejera del Poder Legislativo del Partido Verde Ecologista de México. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera suplente del Poder Legislativo, Diputada Lorena Corona Valdés:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

En principio el Partido Verde Ecologista de México, está muy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se está planteando y adicional, empecé ahora sí que de manera privada a felicitar a cada uno de los miembros del Consejo General. Cuando llegué no me alcanzó el tiempo y creo que hay que decirlo públicamente, el Debate fue muy bueno, el Debate realmente cumplió todos los propósitos que hemos nosotros aquí discutido. \_\_\_\_\_

Qué bueno que todas estas discusiones han sido fructíferas. Hemos llegado creo todos a muy buen puerto, pero sobre todo no dejar de felicitar cómo el Consejo General ha hecho esto en una forma impecable y excelente. \_\_\_\_\_

Muchas felicidades, gracias Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputada Lorena Corona. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buen día a todas y todos. \_\_\_\_\_

Nueva Alianza no propone ni veta moderadores. \_\_\_\_\_

Consideramos que el ejercicio realizado en Comisiones en este mismo Consejo General, nos arroja a una buena conclusión en el Primer Debate. \_\_\_\_\_

Será labor de las personas que son designadas por ustedes y responsabilidad de ellas mismas, asumir con objetividad y entereza la función que se les está encomendando. \_\_\_\_\_



Asumir con altura de miras en el momento trascendente que les tocará participar en el Proceso Electoral más complejo de la historia del país. \_\_\_\_\_

Nosotros consideramos que fue un éxito y nos sumamos a las voces que desde la sesión anterior han estado haciendo eco del evento del domingo. \_\_\_\_\_

La organización de dicho Debate es una muestra de que puede haber conductores de este tipo de eventos serios, incisivos y a la vez respetuosos. Creo que, es un buen avance. \_\_\_\_\_

En su momento señalé que nos encontramos en una etapa de transición en el desarrollo de este tipo de formatos y es una excelente forma de seguir avanzando. \_\_\_\_

Reglas novedosas, ahora se proponen 2 profesionales del medio que se harán cargo de la conducción del Segundo Debate, está en manos de ellos, dado que sale de este Consejo General la aprobación del Proyecto de Acuerdo, está en manos de ellos y en la dimensión de su propio prestigio personal, de su preparación y de las capacidades que desarrollen el día del Debate la labor que van a desempeñar. \_\_\_\_\_

Concluyo señalando que la labor, por lo menos de esta representación partidaria, ha sido y será siempre la de acompañar, garantizando que las labores, que las actividades de la autoridad, en este caso de los moderadores, insisto, no proponerlos ni vetarlos, pero sí asegurar que se ciña su trabajo a los principios de la materia. \_\_\_\_\_

Sería cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

De mi parte quiero expresar mi reconocimiento a los candidatos, a la candidata y, por supuesto, a los partidos políticos por haber participado en este Primer Debate y, sobre todo, haberse ajustado al Modelo que se diseñó de manera conjunta para transformar estos importantes ejercicios que suelen realizarse en el Proceso Electoral. \_\_\_\_\_

Creo que, el Debate nos ha dejado algunas lecciones para poder revisar puntos muy específicos del formato, por eso me permito proponer que el Proyecto de Acuerdo

incluya un punto adicional que mandate a la Comisión Temporal de Debates, que se revisen particularmente 2 aspectos, que me parecen importantes, uno es revisar la posibilidad, eso es un tema que tendrá que evaluar la Comisión Temporal de Debates, hay que revisar la posibilidad de que en los 3 segmentos de interacción directa entre los candidatos pudiera existir algunos segundos adicionales para que pudieran redondear en esa parte los candidatos. \_\_\_\_\_

Pienso que podría ser una bolsa adicional de 30 segundos, pero no estoy seguro de ahora proponerlo así, me gustaría que técnicamente lo podamos revisar en la Comisión Temporal de Debates para saber cuál sería la implicación directa en todo el ejercicio del Debate. \_\_\_\_\_

En la parte de interacción, 3 segmentos de interacción que tienen los candidatos entre sí, me parece que es uno de los aspectos más favorables del Debate. Creo que ahí faltó un poco de tiempo para que algunos de ellos pudieran redondear ideas. \_\_\_\_\_

Entonces, propongo que la Comisión Temporal de Debates revise técnicamente ese apartado. \_\_\_\_\_

También cuando se concluía la intervención de un minuto, fijamos una regla de que las intervenciones de los candidatos y la candidata no podrían tener más de un minuto seguido, y entonces había una interrupción con el micrófono. \_\_\_\_\_

Pienso que a lo mejor la Comisión Temporal de Debates podría revisar si técnicamente en vez de cerrar el micrófono, el moderador hace un llamado con una ligera tolerancia de segundos con cargo a la bolsa total del propio candidato o la candidata. Esos 2 detalles de orden técnico me parece que podrían mejorar el desahogo del Debate. \_\_\_\_\_

Por eso propondría que se le ordenara a la Comisión Temporal de Debates que revise estas cuestiones y, de ser el caso, las incluya en el formato de este Segundo Debate que tendremos en Tijuana el próximo 20 de mayo. \_\_\_\_\_

Me parece que eso, insisto, mejoraría sensiblemente el ejercicio que tenemos previsto para ese día. \_\_\_\_\_

Por lo demás, celebrar que es un ejercicio en el cual, insisto, se han observado puntualmente las reglas y ha servido para conocer de manera más precisa las

propuestas de la candidata y los candidatos y, sin duda, servirán como un referente para que los ciudadanos decidan su voto razonado y libre rumbo al día 1 de julio. \_\_\_\_\_  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde Ecologista de México. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Herrera Martínez:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenos días a todas y a todos. \_\_\_\_\_

Muy breve, quiero empezar primero con un comentario que creo que es muy importante hacerlo, y creo que no debe de convertirse ya en una costumbre en que las sesiones de este Consejo General no empiecen a la hora que son convocadas; creo que todos los integrantes del Consejo General merecemos respeto y debemos de empezar a tiempo. \_\_\_\_\_

Por otro lado, nosotros acompañamos, sin duda, el Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo, pero además, queremos reconocer el esfuerzo que hizo este Instituto, la Comisión Temporal de Debates, los partidos políticos, los representantes de cada uno de los candidatos a efecto de que se llevara a cabo el Primer Debate. \_\_\_\_\_

Sin duda, este Primer Debate de este Proceso Electoral, es el parteaguas de hacia dónde queremos ir, ya quedaron atrás esos monólogos acartonados donde poco interés generaban en los ciudadanos. Consideramos que este cambio de dinámica de los Debates, sin duda da para más, pero hemos empezado con el pie derecho, y, sin duda, los ciudadanos así lo han visto, la prensa ha dado cuenta de ello, los comentaristas, los analistas, y los círculos sociales en las redes, el Debate fue diferente, tuvo materia, sin duda pudo tener más, pero insisto, estamos empezando con el pie derecho, y ojalá que por ese camino sigamos, y como todo en la vida, esto es perfectible. \_\_\_\_\_

Sin duda, quiero reiterar el reconocimiento al Instituto y a todo su personal, no solamente a las señoras y señores Consejeros Electorales y a los Directores, también

a la gente de apoyo que estuvo trabajando desde muy temprano y hasta muy tarde el día del Debate, brindando, como siempre, su mejor esfuerzo en atención de las cosas. Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenos días a todas y a todos. \_\_\_\_\_

Empezaría haciendo una referencia, efectivamente, al Primer Debate Presidencial que tuvimos este domingo, y me parece que desde el Instituto Nacional Electoral, desde esta mesa de Consejeros Electorales, de esta mesa de Consejo General, también se merecen un amplio reconocimiento quienes fungieron como moderador y moderadoras en el Debate Presidencial, sin duda este Consejo General apostó por un formato en el que el papel que jugaba la moderación era un papel relevante; por primera vez en la historia de México tuvimos participación activa no solo de contendientes, sino de moderadores, el moderador y las moderadoras. \_\_\_\_\_

Hubo muchas dudas sobre la incorporación de 3 moderadores en el Debate Presidencial, dudas respecto de si esto podía llegar a afectar el desarrollo del Debate mismo, y me parece que lo que vimos el domingo nos permitió advertir que la presencia de Denise Maerker, de Sergio Sarmiento y de Azucena Uresti, que me parece que fue muy destacada su presencia, su intervención y su participación en la moderación del Debate, lo que nos permitió fue contar con 3 estilos periodísticos que favorecieron la agilidad del Debate, y que favorecieron los cuestionamientos a los propios contendientes. \_\_\_\_\_

En este sentido, sin duda alguna, hay elementos que se tendrán que ajustar, hay algunas cuestiones que debemos ver para mejorar algunos elementos que todos advertimos en el propio Debate que pueden ser objeto, ya sea cuestiones de producción, cuestiones de tiempo, comparto la propuesta que formula el Consejero

Electoral Marco Antonio Baños en cuanto a que se haga una revisión en la Comisión Temporal de Debates, sobre si hay ajustes específicos a hacer.\_\_\_\_\_

Comparto digamos, el diagnóstico de los elementos a atender, creo que lo que valdría la pena es dar una orden, digamos, amplia a la Comisión, para ver cuál es la mejor solución, porque creo que los puntos que pone sobre la mesa el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, sin duda son elementos que advertimos que podrían llegar a dar una mayor agilidad al propio Debate y creo que, analizando eso junto con cualquier otro elemento que pudiera ser de mejora en la Comisión, pudiéramos traer a esta mesa del Consejo General una propuesta de ajuste, si fuese necesario, en los términos para poder tenerlo de la mejor forma, o aprobarlo en la misma Comisión de Debates.\_\_\_\_\_

No hago diferencia en ese punto, a lo que voy es: este Consejo General puede ordenar que se haga una revisión sobre los puntos que tenemos coincidencia en que son puntos que valdría la pena analizar posibles mejoras y, buscar la mejor solución en el marco de la discusión de la Comisión Temporal de Debates.\_\_\_\_\_

Me parece, ahora vale la pena pasar a lo que será el Segundo Debate, el Segundo Debate Presidencial, el día de hoy se trae a la mesa de este Consejo General la aprobación de quienes fungirán como moderador y moderadora para este Segundo Debate, se trae ya la escaleta, incluyendo a estos 2 moderadores y me parece que vale la pena precisar algunas diferencias que tiene este Segundo Debate, respecto del primero.\_\_\_\_\_

En el Primer Debate Presidencial, la gran novedad era, precisamente, la participación activa de la moderación.\_\_\_\_\_

En este Segundo Debate Presidencial, por supuesto que conservamos esa participación activa de la moderación, por supuesto que se busca dar un paso adelante.\_\_\_\_\_

Pero, este Consejo General, ya había decidido un cambio adicional, que se debe destacar, que será la participación activa de la ciudadanía en, tanto en la presencia en el propio foro del Debate como en la formulación de preguntas a los candidatos y a la candidata; éstos fueron esquemas de participación que fueron previamente definidos

por el Consejo General, precisamente para ir abonando e ir avanzando de un Debate al siguiente y éste es el formato que tendrá este Debate, para atender precisamente la temática de “México en el mundo”, con los subtemas que ya habían sido aprobados: “Comercio Exterior e Inversión”; “Seguridad Fronteriza y Combate al Crimen Transnacional” y “Derechos de los Migrantes”.\_\_\_\_\_

Me parece que, sin duda alguna, son temas que afectan y atañen a las ciudadanas y a los ciudadanos y que será muy relevante poder conocer las preguntas que éstos formulen a los Candidatos y a la Candidata, y sin duda, las respuestas que, a su vez, éstos den a los planteamientos de la ciudadanía.\_\_\_\_\_

En el Tercer Debate, hemos decidido que también habrá participación ciudadana, pero no una participación presencial, sino vía redes sociales, y así vamos avanzando de un formato al siguiente para abonar a un ejercicio que, me parece que fue y debe ser, muy útil para abonar al derecho de las ciudadanas y a los ciudadanos a contar con la mayor información posible para la emisión de su voto el día 1 de julio.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Muy buenos días.\_\_\_\_\_

En este punto nosotros, como Coalición, hemos sido claros, consistentes, primero respecto al tema del número de moderadores, me parece que desde el Primer Debate aun sin dejar de reconocer, como lo dije el lunes aquí en esta mesa también, que había sido muy positivo el resultado del Primer Debate que también externamos un reconocimiento a los moderadores que hicieron un gran trabajo en la conducción del mismo.\_\_\_\_\_

Nosotros siempre en la mesa pusimos el tema de que lo mejor era que hubiera 2 moderadores, aquí los integrantes de esa mesa y representantes no me van a dejar

mentir, siempre fue nuestra petición sin importar el nombre, es decir, no hablábamos en ese momento de ningún nombre en particular, simplemente que nos parecía que al haber ya tantos candidatos más otras 3 personalidades, se hace más complejo, se pone un ingrediente más y que lo importante era que los protagonistas fueran los Candidatos y creo que lo fueron, fueron en esta ocasión y se cumplió el objetivo de que la ciudadanía tuviera acceso en 2 horas a un Debate que se fue muy rápido por lo dinámico, ¿No?\_\_\_\_\_

Entonces, en el sentido del tema de la moderación me parece que acompañamos, o sea es positiva la decisión de que en éste se decida que sean 2 moderadores y, desde luego, se tiene que hacer la modificación en la escaleta, lo cual es procedente.\_ Acompañaría los comentarios del Consejero Electoral Marco Antonio Baños y de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, me parece que sí, y lo anunciaba el lunes, deja varias lecciones este Debate, insisto, un Debate muy positivo, un Debate bien hecho, bien realizado, felicito por todos los detalles que se cuidaron en la organización de este Debate, pero sí mi reflexión al final compartida con mucha gente con la que he platicado, es que sí sería positivo que viéramos que se intente en la Mesa de Representantes discutir cómo sería posible lograr que tuvieran un tiempo más los candidatos para debatir entre ellos, es decir, en el segundo segmento, porque en algunos casos nos quedamos con ganas de que concluyera una idea alguno de ellos, de que se cerrara esa idea y por las cuestiones del tiempo que también fue una observación que nosotros vinimos haciendo desde el principio en la mesa, antes de que se probara el primer formato.\_\_\_\_\_

Entonces, creo que sería muy positivo que se admitiera, se permitiera, se nos diera esa posibilidad de que se revisara en ese punto en particular, ¿Por qué?, porque va a, creo que va a abonar en el Debate que se vaya a ver en esta segunda ocasión, va a permitir una discusión un poco más completa por parte de los candidatos y creo que al final de cuentas eso va también a permitirle a la ciudadanía ver un mejor Debate, todavía mejor del que ya vimos.\_\_\_\_\_

Entonces, en ese sentido es mi comentario.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputada Mariana Benítez. \_\_\_\_\_

Permítanme antes de continuar dando la palabra, saludar a los jóvenes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que encabezan y dan vida a una iniciativa que el propio Instituto Nacional Electoral ha respaldado, que ha cobrado carta de naturalización en los Procesos Electorales previos, me refiero a voto informado. \_\_\_\_\_

Bienvenidos sean ustedes, un gusto tenerlos por aquí. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Juan Miguel Castro Rendón, representante de Movimiento Ciudadano. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Movimiento Ciudadano, Licenciado Juan Miguel Castro Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenos días a todas y a todos. \_\_\_\_\_

El Primer Debate tuvo una audiencia de más de 10 millones de ciudadanos, lo que comprometió y obliga a que el Segundo Debate sea similar o mejor. \_\_\_\_\_

Por nuestra parte, tanto a Yuriria Sierra como a León Krauze, profesionales de la Comunicación, estamos seguros y esperamos buenos resultados de su participación. \_

Una cuestión que nos interesa. \_\_\_\_\_

El día de ayer varias organizaciones de la Sociedad Civil, se pronunciaron porque el Instituto promoviera un Cuarto Debate. Ojalá la Comisión, en su oportunidad, atienda esta inquietud y se vea la posibilidad. \_\_\_\_\_

Recuerdo desde que se inició esta cuestión de los Debates aquí en la mesa, tanto el Licenciado Jorge Herrera como su servidor, señalamos por qué 3 y no 5. Hay que atender esta petición de la Sociedad Civil. \_\_\_\_\_

Una duda que creo que el más indicado sería el Presidente de la Comisión Temporal de Debates que nos podía explicar y sería muy bueno para todos, cómo se van a elegir a esos 42 ciudadanos que van a hacer las preguntas o a los ciudadanos que van a estar cuestionando a los candidatos. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_



Tiene el uso de la palabra el Licenciado Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática. \_\_\_\_\_

**El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Solo para reconocer el esfuerzo del Instituto, de la Comisión de Debates, el desempeño de los candidatos y, desde luego, de los moderadores. \_\_\_\_\_

En este punto particular respecto a los próximos moderadores, será muy importante que continúe esta gran expectativa de la sociedad y de los medios de comunicación. \_

Me parece que es fundamental que esta cultura del Debate, de la tolerancia, de las ideas, pero sobre todo de tener un voto informado que haya libertad de expresión para manifestar, pero también la tolerancia para poder discernir y comparar las diferentes propuestas y plataformas, va a enriquecer la vida democrática de los mexicanos. \_\_\_\_\_

Bienvenida la cultura de los Debates, pero no solo de los Debates Presidenciales. Quisiera reivindicar que también tengamos muy en cuenta que México es plural, diverso y muy heterogéneo en cuanto a su composición regional, cultural, económica y sería importante que pudieran realizarse debates por lo menos para Senadores. \_\_\_\_

Será importante también conocer propuestas, Debates seguramente de Elecciones Locales, de Gobernadores, pero por lo menos de Senadores me parece que es viable, es factible y que hay expectativa también de los ciudadanos de conocer el desempeño y de qué planteamientos, qué agenda legislativa tienen y, por lo menos en la Ciudad de México, el Estado de México, estados con una densidad poblacional y una alta presencia en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal y con medios de comunicación podría enriquecer también la participación de los ciudadanos y de la sociedad, organizando algunos Debates para los que aspiran a llegar a la Cámara de Senadores. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenos días a todos y a todas. \_\_\_\_\_

Creo que, vale la pena recordar que desde que concebimos estos 3 Debates pensamos en 3 formas distintas de participación ciudadana. En el primero, a través de encuestas y sondeos de opinión que se hicieron llegar a las moderadoras y al moderador para que pudieran ellos elaborar en plena libertad las preguntas que iban a realizarse y las preguntas, sobre todo, de seguimiento específicas que iban hacer a los candidatos y a la candidata. \_\_\_\_\_

En el segundo pensamos en un público que estuviera presente en el set de grabación que pudiera hacer preguntas a la candidata y a los candidatos. \_\_\_\_\_

Por último, pensamos una participación a través de redes sociales en donde esperamos que exista una gran participación, particularmente de las y los jóvenes haciendo cuestionamientos que les interesen a la candidata y a los candidatos. \_\_\_\_\_

Comparto las propuestas que ha hecho el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, me parece que atienden algunas áreas de oportunidad, que todo mundo pudimos observar en el desarrollo del Primer Debate. \_\_\_\_\_

Justamente, además nosotros pensamos que después del primer ejercicio pudiéramos hacer algunos pequeños ajustes, como estos que está proponiendo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, con la finalidad de favorecer el dinamismo de los próximos Debates. \_\_\_\_\_

Entonces, desde luego, que acompañe sus propuestas. \_\_\_\_\_

Con relación a los moderadores, a la moderadora y el moderador que se nos están proponiendo, he revisado su currículum, me parece que tienen una gran trayectoria periodística, creo que se respalda por su labor que han desempeñado. \_\_\_\_\_

Sobre todo, quiero destacar que advierto a 2 profesionales, que me parece que van a poder estar a la altura de las circunstancias, de la moderación que tendrán que hacer para el próximo Debate. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, acompañaría las propuestas, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

Permítanme intervenir solamente para recordar un par de puntos, que creo que es importante tener en cuenta, sobre todo si se asume que los Debates Presidenciales que está organizando, uno de ellos ya se realizó obviamente, pero los que vendrán forman parte de un conjunto integral de replanteamiento de la figura y del rol de los Debates Presidenciales, el propósito lo hemos insistido en muchas ocasiones, fue el de convertir en los Debates en un espacio de interacción entre los propios contendientes, la y los candidatos a la Presidencia de la República; pero también en donde los propios moderadores jugaran, como se ha insistido, un rol mucho más activo del que jugaban en el pasado, sin que esto devenga en un rol protagónico de Debate, los protagonistas del Debate, por supuesto, son la y los candidatos. \_\_\_\_\_

Creo que, es importante señalar que, más allá del buen resultado, me atrevo a decirlo así, del primer ejercicio realizado el domingo pasado que, sin lugar a dudas, nos deja una experiencia importante para enfrentar los Debates por venir. Creo, en todo caso, como se ha comentado públicamente, constituye ya un buen punto de referencia respecto de lo que, serán los Debates en el futuro y reconociendo que hay detalles que pueden, sin lugar a duda, mejorarse, me parece que es, sin embargo, importante señalar desde ahora que cada uno de los Debates, si bien tienen un piso común, cada uno de los 3 Debates que organizaremos en este Proceso Electoral, si bien tienen un piso común, es decir, una lógica, en términos de formato, que permita una interacción y una actuación dialéctica de los propios contendientes, y aquí el rol de los moderadores, como hemos señalado, es fundamental. \_\_\_\_\_

También es cierto que cada uno de los Debates implicará la introducción de una serie de innovaciones que nos permitirán al final de este Proceso Electoral, poder generar una evaluación hacia futuro bajo la premisa, que como señalaba el representante del Partido de la Revolución Democrática, es decir, estos Debates tienen un propósito específico, y por cierto, esos Debates, como hemos dicho, no son para los candidatos, no son para la autoridad electoral, son para que las y los ciudadanos contemos con

mayor información respecto de la personalidad, y por supuesto de los diagnósticos y propuestas de la y los Candidatos Presidenciales.\_\_\_\_\_

Pero, también tenemos un, digamos, dilema como sociedad democrática, que es que la cultura del Debate se enraíce, se arraigue y se difunda y se practique en los más distintos ámbitos de la vida social, por supuesto, de manera estelar durante las campañas electorales.\_\_\_\_\_

Dicho esto, creo que es importante, y por eso he querido intervenir, señalar que si bien la base sobre la cual se articulará el Segundo Debate el próximo 20 de mayo en la ciudad de Tijuana es la misma que la del Primer Debate, el formato incorporará también ahora, la presencia, como es conocido por todos ustedes, de público presente, por primera vez, hasta donde la memoria me alcance, en un Debate Presidencial, pero hasta donde la memoria me alcanza, también creo que por primera vez en un Debate Político Electoral en México, que serán responsables de formular las preguntas respecto de las cuales se pronunciarán la y los Candidatos.\_\_\_\_\_

El Tercer Debate, por su parte, a realizarse el 12 de junio en la ciudad de Mérida, es un formato en el que la presencia del público, como en el de Tijuana, ya no ocurrirá, volveremos desde esa perspectiva, a tener un formato, probablemente más similar visualmente al que tuvimos el domingo pasado. Pero, introducirá, a la vez, como es conocido, como lo ha aprobado este Consejo General, la novedad de que las preguntas, que será responsabilidad, como ha ocurrido en todos los casos, de los moderadores seleccionar y plantear a la y los candidatos, provendrán del ámbito de las redes sociales.\_\_\_\_\_

La idea es que al final estos 3 Debates, si bien, repito, con un piso común en términos de formato y dinamismo, aportarán cada uno de ellos elementos específicos particulares para poder, no solo al final de este Proceso Electoral hacer un balance, sino, como decía, enriquecer en la discusión pública, o como nos gusta decir, en el Debate de los Debates, elementos asideros que nos permitan, en el futuro, ir mejorando paulatinamente este tipo de ejercicios, que son consustanciales e indispensables para la democracia.\_\_\_\_\_

Pero, me importa señalar desde ahora estas diferencias para que no se genere la impresión de que cuando lleguemos a Mérida, al Tercer Debate, se esté asumiendo que hay una regresión al primer formato, porque el segundo eventualmente no funcione, es decir, desde ahora y así estuvo planteado desde la Comisión y desde este Consejo General, cada uno de los Debates Presidenciales tiene sus particularidades, cada uno de los Debates tendrá su propia identidad.\_\_\_\_\_

De modo tal que, el Primer Debate, sea evaluado, como está ocurriendo, en sus méritos; el segundo en los propios y el tercero en los que le correspondan; y, en conjunto, tener una visión integral, insisto, con la mayor cantidad de elementos posibles para que la cultura del Debate, por lo menos de los debates electorales, ojalá y esto se difunda, se enriquezca a partir de estos 3 ejercicios hacia el futuro.\_\_\_\_\_

Pero, es importante señalar que si no hay público presente en el Debate de Mérida, no es porque desde ahora estemos claudicando a esta modalidad de Debates hacia el futuro, sino porque desde el principio se pensó que lo más oportuno, es que en esta nueva etapa de los Debates, en concreto de los presidenciales, se pueda contar con 3 formatos distintos, repito, que tienen un propósito de enriquecer las experiencias y la perspectiva a futuro de la autoridad electoral que está encargada, y de los partidos políticos y de la sociedad en general, dado que nosotros estamos encargados por mandato legal de organizar Debates Presidenciales.\_\_\_\_\_

Creo que, es importante desde ahora, señalar, insisto, que se trata de un ejercicio incremental, el Primer Debate nos deja una experiencia importante de cara al segundo, el segundo seguramente lo hará de cara al tercero, bajo la premisa de que cada formato, cada debate, tiene su propio, sus propias modalidades y, por ello, identidad.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante suplente de MORENA.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Solo insistir en que por favor, se someta a votación la propuesta que hemos hecho de que se incluya si, como se dice, los moderadores generaron dinamismo en el debate, a Jorge Ramos como un tercer moderador, quisiera decir que, además de que, como lo han visto, es implacable con los entrevistados, me parece que no hay ninguna duda de eso, sería una muy buena adición a esto que han estado denominando como dinamismo en los Debates que, según se dice, ha sido incluido mucho por los moderadores. \_\_\_\_\_

Entonces quiero solicitar la votación, gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias a usted, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Empezaría diciendo que la propuesta que nos presenta el Consejero Electoral Marco Antonio Baños para modificar este Proyecto de Acuerdo, incorporando un Resolutivo donde se delegue a la Comisión Temporal de Debates la atribución de revisar la bolsa de tiempo en el segmento de discusión libre, me parece muy atinada y creo que eso puede hacerlo la Comisión sin necesidad de tener que regresar al Consejo General junto con los aspectos ya relacionados con los criterios de moderación y de producción para la duración de la primera intervención y de los participantes tanto en el primer segmento como en el segundo segmento. \_\_\_\_\_

Respecto al método para seleccionar al público presente en el Segundo Debate inicia con una selección de carácter aleatorio, es decir, mediante un sorteo de 600 personas de acuerdo con ciertas cuotas de edad y género, principalmente de la Ciudad de Tijuana, Baja California, y a través de una agencia de reclutamiento y de opinión pública se harán entrevistas a esas 600 personas y nos quedaremos con el 10 por ciento que tiene un poco más de lo que podemos acomodar en el set, porque la experiencia muestra que muchas de las personas que en un principio se muestran interesadas en participar, al final del día pueden tener pánico escénico, muchas

circunstancias que hacen que el número total al final se vaya reduciendo después de que ya te has quedado con los 60. Se cuidará en todo momento quienes, que al final haya representatividad por los diferentes estratos que tuvo la muestra original que es con la que se hizo el reclutamiento. \_\_\_\_\_

Finalmente, me gustaría referirme a la propuesta que hace la representación de MORENA que fue también discutida en Mesa de Representantes y en la Comisión Temporal de Debates. Me parece que Jorge Ramos tiene todos los méritos para ser moderado en éste y en cualquiera de los debates; tiene una carrera muy destacada y la razón por la cual no lo estamos incluyendo no es porque tenga menos mérito que los que hemos seleccionado para el Primer Debate o los que estamos proponiendo para el Segundo Debate, tiene que ver primero, con el hecho de que el número que consideramos apropiado para este formato específico donde va a ver preguntas desde el público es un número menor al que tuvimos en el Primer Debate, es decir, solo 2 personas porque tendremos otras más del público formulando preguntas y consideramos que ése es el mejor equilibrio para la audiencia, es la razón por la cual estamos proponiendo 2 en este caso en particular. Creemos que quienes estamos proponiendo hacen una buena sinergia, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva Alianza. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Consejero Presidente, en esta segunda ronda concluir tal vez anticipadamente lo que advierto como un sentir general, que es el que tenemos que transitar el de la cultura del spot a la cultura del Debate. \_\_\_\_\_

Vamos en pasos sucesivos acercándonos a muchas conclusiones válidas que permitirán, en su momento, al Legislador, espero, tomar las mejores decisiones

respecto al Sistema, al Modelo de Comunicación Política que tenemos en nuestro país. \_\_\_\_\_

De lo que escucho me llama la atención y acompaño, porque creo que es una muy buena propuesta la formulada por el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, en el sentido de que como lo refería el Consejero Electoral Benito Nacif, revisar esa bolsa. Esa bolsa de tiempo que permita tal vez una mayor interacción en el segundo bloque a los contendientes, así como lo externado por el representante del Partido de la Revolución Democrática, coincidir es un hecho de que la cultura del Debate debe de minar a todos los niveles, a todos los niveles políticos. \_\_\_\_\_

Considero que el presentarse ante la ciudadanía, el llegar y hacer propuestas, no nada más el llegar y hacer propuestas de cómo eventualmente sería una gestión, una labor de gobierno permite a su vez una mayor exigencia de parte de la ciudadanía. \_\_\_\_

No es el caso cuando no se hacen propuestas y nada más se llega ahí. \_\_\_\_\_

Entonces, en este entendido y acompañando también la inquietud del Licenciado Camerino Eleazar Márquez, propiciar, fomentar la cultura del Debate, hacer los escenarios para que no sé si en el ámbito de las Juntas Locales y creo que algo se había trabajado ya al respecto en la Comisión Temporal de Debates, en el ámbito de las Juntas Locales, en su caso, para la Elección de Senadores, pudieran generarse algunos espacios, algunos mecanismos de difusión no tan sofisticados como los que estamos con reglas tan precisas tal vez, pero sí propiciar, sí fomentar estos espacios de deliberación propios de toda democracia contemporánea. \_\_\_\_\_

Sería cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le voy a pedir que someta a votación el punto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Con gusto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_



Les propongo a ustedes 2 votaciones: Una en lo general, y una en lo particular, por lo que hace al Punto de Acuerdo Primero en virtud de la propuesta que hizo el representante de MORENA. \_\_\_\_\_

Incluyendo en ésta en lo general, la propuesta del Consejero Electoral Marco Antonio Baños con los comentarios de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 1, tomando en consideración en esta votación en lo general, las sugerencias del Consejero Electoral Marco Antonio Baños, a fin de incorporar un nuevo Punto de Acuerdo en los términos por él expresado. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Ahora, someto a su consideración el Punto de Acuerdo Primero. \_\_\_\_\_

Primero, en los términos del Proyecto originalmente circulado. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, de ese Punto de Acuerdo en esos términos, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG393/2018) Pto. 1** \_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA DESIGNACIÓN DE LAS PERSONAS QUE FUNGIRÁN COMO MODERADORES DEL SEGUNDO DEBATE A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, ASÍ COMO LA MODIFICACIÓN A LA ESCALETA CONTENIDA EN EL ANEXO III DEL ACUERDO INE/CG388/2018, A FIN DE INCLUIR A LOS MODERADORES DESIGNADOS**

**A N T E C E D E N T E S**

- I. Expedición del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.** El 7 de septiembre de 2016, mediante Acuerdo INE/CG661/2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.
- II. Modificación al Reglamento de Elecciones.** El 5 de septiembre de 2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG391/2017, mediante el cual modificó diversas disposiciones del Capítulo XIX de Debates del Libro Tercero del Reglamento de Elecciones.
- III. Creación de la Comisión Temporal.** El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, por el que se establece la integración de las Comisiones Permanentes, Temporales y otros Órganos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como la creación de las Comisiones Temporales de Debates y para el Fortalecimiento de la Igualdad de Género y No Discriminación en la participación política en el marco del Proceso Electoral 2017-2018.
- IV. Instalación de la Comisión Temporal y aprobación del Plan del Trabajo.** El 27 de septiembre de 2017 se instaló la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial y se aprobó su Plan de Trabajo.

- V. Aprobación de modificación al Reglamento de Elecciones.** El 17 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial aprobó el Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral mediante el cual se modifica el numeral 4 del artículo 307 del Reglamento de Elecciones y se adiciona el numeral 5 a dicho artículo. El 22 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG565/2017, el Consejo General aprobó dichas modificaciones.
- VI. Aprobación de las reglas básicas por el Consejo General.** El 22 de noviembre de 2017, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG562/2017, por el que se emiten las reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores.
- VII. Aprobación de criterios específicos por el Consejo General.** El pasado 28 de febrero de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG123/2018, que contiene los criterios específicos para la definición de formatos y realización de los tres debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
- VIII. Registro de Candidaturas.** El pasado 29 de marzo de 2018, en sesión especial, el Consejo General aprobó el registro de las candidaturas a la Presidencia de la República de Margarita Ester Zavala Gómez del Campo como candidata independiente; Ricardo Anaya Cortés de la Coalición “Por México al Frente”; José Antonio Meade Kuribreña de la Coalición “Todos por México”, y de Andrés Manuel López Obrador de la Coalición “Juntos Haremos Historia”.
- IX. Designación de representantes de la y los candidatos para asistir a Mesa de Representantes.** Mediante oficio INE/P-CTD/013/2018 de fecha 30 de marzo de 2018, el Consejero Presidente de la Comisión Temporal de Debates solicitó a la y los candidatos la designación de sus representantes ante la Mesa de Representantes. Mediante diversos oficios, se notificó la designación de la Lic. Fernanda Caso Prado, representante de la candidata

independiente, Margarita Zavala Gómez del Campo; el Lic. Jesús Ramírez Cuevas y la Lic. Nohemí Verónica Beraud Osorio, representantes propietario y suplente del candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador; el Dr. Francisco Javier Guerrero Aguirre y la Dip. Mariana Benítez Tiburcio, representantes propietario y suplente del candidato de la Coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña; y el Mtro. Fernando Rodríguez Doval, representante del candidato de la Coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés.

- X. Instalación de la Mesa de Representantes.** El pasado 4 de abril de 2018 se celebró la sesión de instalación de la Mesa de Representantes. A dicha sesión asistieron la totalidad de las personas designadas por la y los candidatos presidenciales, así como la y los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión Temporal de Debates.
- XI. Aprobación del formato específico del Primer Debate y otros elementos en común de los tres debates presidenciales por el Consejo General.** El pasado 5 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo identificado con la clave INE/CG383/2018, referente al formato específico y la designación de las personas que fungirán como moderadores del Primer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, así como los mecanismos de participación ciudadana, reglas de moderación y producción e inclusión de lengua de señas mexicanas para los tres debates presidenciales del Proceso Electoral Federal 2017-2018. En su Punto de Acuerdo NOVENO, se ordenó a la Comisión Temporal de Debates a aprobar, en un plazo de siete días, los formatos específicos del Segundo y Tercer Debate presidencial a fin de someterlos a consideración del Consejo General.
- XII. Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.** El 9 de abril de 2018, en sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se aprobó la sentencia recaída a los expedientes de los Juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, identificados con las claves SUP-JDC-186/2018 y su acumulado SUP-JDC-201/2018.

- XIII. Registro de la candidatura de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.** En acatamiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los expedientes identificados con las claves SUP-JDC-186/2018 y el acumulado SUP-JDC-201/2018, el pasado 10 de abril, el Consejo General aprobó el registro de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón como candidato independiente a la Presidencia de la República, mediante Acuerdo INE/CG384/2018.
- XIV. Incorporación de representante a la Mesa de Representantes.** El pasado 10 de abril, el Consejero Presidente de la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial, mediante oficio INE/P-CTD/019/2018 de fecha 10 de abril, solicitó al candidato independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón nombrar a su representante ante la Mesa de Representantes. Mediante escrito sin número de fecha 11 de abril, el candidato independiente designó al C. Javier Náñez Pro como su representante ante el Consejo General, la Mesa de Representantes y demás Comisiones.
- XV. Primera sesión de la Mesa de Representantes.** La primera sesión de la Mesa de Representantes se efectuó el 11 de abril de 2018. A dicha sesión asistieron los representantes de las cinco candidaturas.
- XVI. Ajuste al formato del Primer Debate y modificación del horario del Segundo Debate, así como la aprobación de los formatos específicos del Segundo y Tercer Debate presidencial por el Consejo General.** El pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los diversos INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el formato específico del Primer Debate y el cambio de horario del Segundo Debate, además se aprueban los formatos específicos del Segundo y del Tercer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con la clave INE/CG388/2018.
- XVII. Aprobación de la designación de personas que fungirán como moderadoras del Segundo Debate presidencial y ajuste a la escaleta correspondiente para incluirlos por la Comisión Temporal de Debates.** El 20 de abril de 2018, la Comisión Temporal encargada de coordinar la

realización de debates en la elección presidencial aprobó el Proyecto de Acuerdo del Consejo General por el que se aprueba la designación de las personas que fungirán como moderadores del segundo debate a la Presidencia de la República del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como la modificación a la escaleta contenida en el anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los moderadores designados.

## **CONSIDERANDOS**

### **Competencia del Instituto Nacional Electoral**

1. De conformidad con los artículos 41, Base V, Apartado A, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numeral 2; 31, numeral 1 y 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad son principios rectores.

Como autoridad en la materia electoral, el Instituto es independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño. El Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales.

Asimismo, el Apartado B del referido artículo constitucional determina las atribuciones que le corresponde desempeñar al Instituto Nacional Electoral tanto en las elecciones federales como en las locales.

2. El Instituto tiene, entre otros fines, contribuir al desarrollo de la vida democrática, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, así como ejercer las funciones que la Constitución le otorga en los Procesos Electorales Locales, llevar a cabo la promoción del voto, así como coadyuvar a la difusión de la educación cívica y la cultura democrática; lo

anterior con base en el artículo 30, numeral 1, incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

3. El artículo 34, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala que el Instituto cuenta con órganos centrales, los cuales son: el Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva.
4. Los artículos 42, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 10, numerales 1 y 2 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral establecen que el Consejo General integrará las comisiones temporales que considere necesarias para el desempeño de sus atribuciones, las que siempre serán presididas por un Consejero Electoral. Asimismo, se señala que en el Acuerdo de creación de la Comisión Temporal se precisará el objeto de la misma, sus atribuciones, así como los plazos o condiciones a los que esté sujeta su existencia.
5. El artículo 306 del Reglamento de Elecciones establece que los debates que organice el Instituto para cualquier tipo de elección se ajustarán, en lo conducente, a las reglas previstas en el Capítulo XIX del propio Reglamento.

### **Competencia del Consejo General**

6. Como lo señala el artículo 44, numeral 1, incisos gg) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, son atribuciones del Consejo General, aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos, así como dictar los Acuerdos necesarios para hacer efectivas las atribuciones señaladas en la ley.
7. De conformidad con el artículo 218, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene como atribución organizar debates obligatorios entre todos los candidatos a la Presidencia de la República. Para ello, el Consejo General ha definido las reglas, fechas y sedes de los debates entre la y los candidatos presidenciales correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, siempre con respeto al principio de equidad entre ellos.

8. Las reglas básicas aprobadas mediante Acuerdo identificado con la clave INE/CG562/2017, tienen como objetivo modernizar los formatos de los debates presidenciales, incluyendo directrices que habrán de flexibilizar estos ejercicios democráticos y marcar una diferencia respecto a la manera en que previamente se han realizado.
9. De conformidad con el artículo 307, numeral 4, del Reglamento de Elecciones le corresponde al Consejo General la designación de las personas que fungirán como moderadores de cada debate a más tardar treinta días antes de la fecha de la celebración del mismo.
10. El pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG388/2018, por el que se modifican los diversos INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el formato específico del Primer Debate y el cambio de horario del Segundo Debate, además se aprueban los formatos específicos del Segundo y del Tercer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018. En su Resolutivo SEGUNDO, el citado acuerdo estableció una modificación al horario del Segundo Debate Presidencial, para que este se lleve a cabo el 20 de mayo de 2018 a las 21:30 horas (hora del centro).

### **Competencia de la Comisión Temporal**

11. El artículo 307, numerales 1 y 3 del Reglamento de Elecciones prevé que el Consejo General creará una comisión temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial, integrada con un mínimo de tres y un máximo de cinco Consejeros Electorales del Consejo General, donde los representantes de los partidos políticos podrán participar con voz, pero sin voto, y cuyas atribuciones son:
  - a) En la primera sesión de la Comisión Temporal aprobará un plan de trabajo donde se especifique, por lo menos, el método para la selección de los moderadores con criterios objetivos y la ruta para el desarrollo de los debates.



- b) Elaborar la propuesta de reglas básicas para la celebración de los debates y someterla a consideración del Consejo General.

La propuesta de reglas básicas incluirá, por lo menos, los elementos siguientes:

- I. La instancia que operará el debate;
- II. Número de debates;
- III. El lugar y la fecha en que se celebrarán;
- IV. Reglas específicas sobre, entre otros elementos, la moderación de los debates, las características de las preguntas, la interacción entre los participantes, y en su caso, la participación de la ciudadanía.

La propuesta de reglas básicas deberá ser aprobada por el Consejo General antes del inicio de las precampañas.

Para ello, de manera previa se analizarán en la Comisión Temporal las opiniones y observaciones que presenten los partidos políticos.

- c) Someter a consideración del Consejo General la propuesta de persona o personas que fungirán como moderadores.
  - d) Resolver las cuestiones no previstas respecto a la organización de debates.
- 12.** Adicionalmente, en el Acuerdo de reglas básicas identificado como INE/CG562/2017, se instruyó a la Secretaría Técnica de la Comisión Temporal de Debates para que iniciara los trabajos para la selección de las y los moderadores de cada debate entre la y los candidatos a la Presidencia de la República.
- 13.** El presente Acuerdo tiene como propósito que el Consejo General designe a las personas que fungirán como moderadores del Segundo Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, correspondiente al Proceso Electoral Federal 2017-2018 y, en consecuencia, modifique la escaleta contenida en el Anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de incluir a los moderadores designados en la misma.

### **Designación de las personas que fungirán como moderadores en el Segundo Debate Presidencial**

14. De conformidad con el Acuerdo INE/CG562/2017, se estableció que para la conducción de los debates se podrá contemplar la coparticipación de dos o más moderadores.
15. En el Acuerdo DÉCIMO del diverso identificado como INE/CG123/2018, se determina que cada uno de los formatos deberán contemplar la participación de mínimo dos y máximo cuatro moderadores. Conforme a esta consideración y a los requerimientos en materia de producción, se establece el número de moderadores que participarán en el Segundo Debate Presidencial, tal y como se señala a continuación:

<b>Debate</b>	<b>Número de personas que fungirán como moderadores</b>
Segundo debate	2

Con esta determinación se busca que exista un equilibrio en la participación de las personas que fungirán como moderadores del debate y que la y los candidatos tengan oportunidad de interactuar con todas las figuras de moderación durante el desarrollo del mismo. Asimismo, se busca que con este número de moderadores se privilegie en mayor medida la participación del público en el auditorio. Además, se buscará la paridad en la designación de las y los moderadores.

16. El trabajo de los moderadores se llevará a cabo conforme a las reglas generales de moderación establecidas en el Acuerdo INE/CG383/2018, así como los Criterios Específicos de Moderación aprobados por la Comisión Temporal Encargada de Coordinar la Realización de Debates en la Elección Presidencial el pasado martes 17 de abril.
17. Conforme a las reglas básicas aprobadas por el Consejo General en el Acuerdo INE/CG562/2017, en la selección de las personas que fungirán como moderadores se tomaron en cuenta los criterios objetivos siguientes:
  - Probada trayectoria en el ejercicio periodístico o el análisis político.

- Experiencia en la conducción de programas noticiosos, de debate o análisis político en medios electrónicos.
  - Conocimiento de los temas de la coyuntura nacional.
18. En atención a los criterios señalados en el considerando anterior, este Consejo General designa como moderadores del Segundo Debate Presidencial a las personas siguientes:
- **Yuriria Sierra Solorio.** Periodista y conductora de Imagen TV en el programa de televisión "Imagen Noticias con Yuriria Sierra" y de Imagen Radio en el espacio radiofónico "Al Cierre". En el periódico Excélsior publica diariamente su columna "Nudo Gordiano". Estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Fue conductora de "Titulares de la Tarde" en Excélsior TV, "Segunda Emisión de Noticias" de Cadena Tres, "Planeta 3 ¡A chaleco!" y editora de "Contextos", suplemento de política en Milenio Diario. Ha colaborado en Nexos, Milenio Semanal, Etcétera y Chilango.
  - **León Krauze Turrent.** Periodista, conductor y escritor. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Tecnológico de Monterrey y Maestro en Humanidad y Pensamiento Social por la Universidad de Nueva York. Actualmente conduce los noticieros de Univisión en Los Ángeles, California. Columnista del diario El Universal. Fue columnista en Milenio Diario, Animal Político y El País América. Escribe con frecuencia en la revista Letras Libres y lo ha hecho también en *Newsweek*, *Washington Post*, El País, *The New Republic*, *Los Angeles Times* y otras publicaciones. Analista de la política internacional, especializado en la política estadounidense. Desde 1996 ha cubierto las elecciones presidenciales estadounidenses para diversos medios de habla hispana. Inició su carrera radiofónica en W Radio, primero como conductor de la Tercera Emisión de "Hoy por Hoy" y posteriormente en la Segunda Emisión. En 2010 fue conductor de "Hora 21", el noticiario estelar que abrió transmisiones con el canal FORO TV. Desde 2013 hasta la actualidad dirige el noticiario local de mayor rating en Estados Unidos, en la estación KMEX de Univisión en Los Ángeles. En julio del 2013, entrevistó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Ha

escrito 6 libros entre los que se encuentran *La Casa Dividida*, un estudio sobre la política estadounidense bajo George W. Bush, *El Vuelo de Eluán*, una novela de ficción, y el más reciente *Historias Perdidas*. En 2013 ganó dos premios Emmy: uno por su reportaje de "Madres Deportadas" y otro por el noticiario "Solo a las once" de Univisión, Los Ángeles. Por el mismo noticiario, León Krauze también ganó el premio Edward R. Murrow.

### **Ajuste a la escaleta del Segundo Debate presidencial**

19. El pasado 16 de abril de 2018, el Consejo General aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se modifican los diversos INE/CG383/2018 e INE/CG562/2017 con el propósito de ajustar el formato específico del Primer Debate y el cambio de horario del Segundo Debate, además se aprueban los formatos específicos del Segundo y del Tercer Debate entre la candidata y los candidatos a la Presidencia de la República, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con la clave INE/CG388/2018. El Anexo III de dicho Acuerdo contiene la escaleta del Segundo Debate presidencial. Sin embargo, en ella no se especifica el número de moderadores que intervendrán en el mismo.
20. En consecuencia, el presente Acuerdo modifica el Anexo III del Acuerdo INE/CG388/2018, a fin de integrar en la escaleta a las dos personas designadas como moderadores del Segundo Debate presidencial (M1 y M2). La escaleta modificada está contenida en el Anexo I que forma parte integral del presente Acuerdo.
21. De conformidad con el Acuerdo referido, para determinar el orden de participación de las personas que fungirán como moderadores se realizará un sorteo en sesión privada de la Comisión Temporal de Debates, a más tardar el 20 de mayo. A dicha sesión se invitará como testigo al titular del Órgano Interno de Control del Instituto, así como a un representante de la Oficialía Electoral para dar fe de los hechos. En el sorteo se respetará la confidencialidad que amerita el tema.

En razón de los Antecedentes y Considerandos expresados, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, Base V, Apartados A, párrafo primero y B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, numeral 1; 30, numerales 1, incisos a) y g) y 2; 31, numeral 1; 34, numeral 1; 35; 42, numeral 1, y

44, numeral 1, incisos gg) y jj), 218, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 10, numerales 1 y 2 del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; 306 y 307 del Reglamento de Elecciones, este Consejo General emite el siguiente:

## **ACUERDO**

**PRIMERO.** Se determina que el número de moderadores para el Segundo Debate Presidencial será de dos, por tanto, se designan a las personas siguientes:

- Yuriria Sierra Solorio.
- León Krauze Turrent.

Las personas designadas cumplen con los requisitos establecidos en el Acuerdo INE/CG562/2017, por el que se emitieron las reglas básicas para la realización de los debates entre las y los candidatos a la Presidencia de la República durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como los criterios objetivos para la selección de las y los moderadores

**SEGUNDO.** Se aprueba la modificación a la escaleta del Segundo Debate presidencial contenida en el Anexo II del Acuerdo INE/CG388/2018, para incluir a las dos personas designadas como moderadores. La escaleta modificada está contenida en el Anexo I que forma parte integral del presente Acuerdo.

**TERCERO.** Se instruye a la Comisión Temporal encargada de coordinar la realización de debates en la elección presidencial a revisar la posibilidad de aumentar la bolsa de tiempo por candidatura en los segmentos de discusión libre entre la y los candidatos en hasta 30 segundos para que la o el candidato pueda cerrar la idea que está exponiendo o terminar de contestar alguna pregunta, así como la posibilidad de dejar los micrófonos abiertos en los mismos segmentos durante un tiempo razonable, siendo la o el moderador quien señale que el tiempo está por agotarse o se ha agotado.

**CUARTO.** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

**QUINTO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo del Instituto a realizar las gestiones necesarias para la publicación del contenido del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral.

## ANEXO I

SEGUNDO DEBATE PRESIDENCIAL					
MÉXICO EN EL MUNDO					
Bloque		Dinámica	Turno de participación	Parcial	Acumulado
Introducción al debate a cargo de M1				00:01:00	00:01:00
Primer Bloque: Comercio exterior e inversión	Segmento 1	Pregunta ciudadana 1	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	0:01:30
		Respuestas	C4	00:01:00	0:02:30
			C1	00:01:00	0:03:30
			C3	00:01:00	0:04:30
			C2	00:01:00	0:05:30
			C5	00:01:00	0:06:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C1		00:02:00	0:08:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	0:09:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C4		00:02:00	0:11:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	0:11:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C2		00:02:00	0:13:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	0:14:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C5		00:02:00	0:16:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	0:16:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C3		00:02:00	0:18:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	0:19:00
		Tiempo de referencia réplicas		00:05:00	0:24:00
	Segmento 2	Pregunta ciudadano 2	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	0:24:30
		Discusión libre con moderación activa a cargo de M2	Empezando con C2, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión	00:10:00	0:34:30
		Tiempo de referencia moderador		00:01:00	00:35:30
Segundo Bloque: Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional	Segmento 1	Pregunta ciudadana 3	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	0:36:00
		Respuestas	C1	00:01:00	0:37:00
			C3	00:01:00	0:38:00
			C4	00:01:00	0:39:00
			C5	00:01:00	0:40:00
			C2	00:01:00	0:41:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C2		00:02:00	0:43:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	0:43:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C5		00:02:00	0:45:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	0:46:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C4		00:02:00	0:48:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	0:48:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C1		00:02:00	0:50:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	0:51:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C3		00:02:00	0:53:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	0:53:30
		Tiempo de referencia réplicas		00:05:00	0:58:30
	Segmento 2	Pregunta ciudadano 4	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	0:59:00
		Discusión libre con moderación activa a cargo de M1	Empezando con C4, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión	00:10:00	1:09:00
		Tiempo de referencia moderador		00:01:00	01:10:00

## ANEXO I

Tercer Bloque: Derechos de los migrantes	Segmento 1	Pregunta ciudadana 5	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	1:10:30
		Respuestas	C5	00:01:00	1:11:30
			C4	00:01:00	1:12:30
			C2	00:01:00	1:13:30
			C3	00:01:00	1:14:30
			C1	00:01:00	1:15:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C3		00:02:00	1:17:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	1:18:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C2		00:02:00	1:20:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	1:20:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C5		00:02:00	1:22:30
		Tiempo de referencia M1		00:00:30	1:23:00
		M2 Preguntas de seguimiento + respuesta C1		00:02:00	1:25:00
		Tiempo de referencia M2		00:00:30	1:25:30
		M1 Preguntas de seguimiento + respuesta C4		00:02:00	1:27:30
	Tiempo de referencia M1		00:00:30	1:28:00	
	Tiempo de referencia réplicas		00:05:00	1:33:00	
	Segmento 2	Pregunta ciudadano 6	Un ciudadano del público realiza una pregunta	00:00:30	1:33:30
		Discusión libre con moderación activa a cargo de M2	Empezando con C5, cada candidatura contará con una bolsa de tiempo de 2:00 minutos y cada participación deberá durar máximo 1:00 minuto para incentivar la discusión	00:10:00	1:43:30
		Tiempo de referencia moderador		00:01:00	01:44:30
Bloque de cierre		C3	00:01:00	1:45:30	
		C2	00:01:00	1:46:30	
		C1	00:01:00	1:47:30	
		C4	00:01:00	1:48:30	
		C5	00:01:00	1:49:30	
Conclusión del debate a cargo de M1			00:01:00	1:50:30	

\* C1= Candidato 1, C2= Candidato 2, C3= Candidato 3, C4= Candidato 4, C5= Candidato 5.

\* M1= Moderador 1, M2= Moderador 2.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Le pido se sirva proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la Aprobación, en su caso, de los Proyectos de Acta de las sesiones ordinaria, extraordinarias y especial celebradas los días 14 (2 sesiones), 23 (2 sesiones), 28 (2 sesiones), 29 y 30 de marzo, así como 4 (2 sesiones) y 5 de abril de 2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración los Proyectos de Acta mencionados. \_\_\_\_\_

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acta de este órgano colegiado, consignadas en el punto número 2 del orden del día. \_\_\_\_\_  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobadas por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el Cumplimiento de Acuerdos,



Dictámenes, Resoluciones y la Atención a las Solicitudes Generadas en las Sesiones de Consejo General del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. \_\_\_\_\_

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta el Secretario del Consejo, en cumplimiento al artículo 36 del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

Al no haber intervenciones, damos por recibido el Informe. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Sexto Informe que presenta la Coordinación de Asuntos Internacionales sobre las actividades relativas a la atención de los visitantes extranjeros en el Proceso Electoral Federal y Concurrente 2017-2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración este Informe. \_\_\_\_\_

Si no hay intervenciones sobre el mismo, permítanme antes de continuar, con independencia de que conozcamos el Informe, creo que es importante señalar un dato, que es el fundamental del mismo, que hasta el momento tenemos ya acreditados 112 visitantes extranjeros, de los cuales 58 son mujeres, 54 hombres, y que provienen todos ellos de 33 países, 17 del Continente Americano, 8 de países europeos, 4 de países asiáticos, 3 representantes, 3 visitantes provenientes de África y uno de Oceanía. \_\_\_\_\_

Estamos frente a una de las observaciones internacionales, desde el punto de vista de visitantes acreditados, por supuesto, el período sigue abierto para que esta

acreditación, las solicitudes y la acreditación eventualmente ocurra, como en el número de países presentes, digámoslo así, en las misiones de observación internacional, que supera el que se tuvo en 2007 y en 2003, coloca ya a la observación internacional del presente Proceso Electoral como una de las más altas de nuestra historia, me parece que es importante señalarlo, se trata de un proceso que está concitando la atención de la comunidad especializada a nivel internacional. Dentro de estos visitantes encontramos nombres de primerísimo nivel en el ámbito internacional, de personalidades en el ámbito internacional, lo cual, por un lado, como decía, demuestra el interés que está suscitando en el mundo este Proceso Electoral, nuestro Proceso Electoral, pero también por otro lado constituye una de las garantías de la cadena de confianza que desde hace 24 años, sistemáticamente se presenta durante los Procesos Electorales, y que junto con la observación nacional implica un mecanismo de vigilancia, de auditoría, de generación de contextos de exigencia a las autoridades electorales, y al final del día, también de constatación de la calidad democrática de nuestras elecciones. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de Campaña, así como para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano a diversos cargos de elección popular correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario y Extraordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Veracruz de Ignacio de la Llave, mismo que se compone de 5 apartados. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, consulto a ustedes si desean reservar para su discusión en lo particular algún apartado del presente punto del orden del día, o bien, si alguien desea hacer una ronda de discusión en lo general. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Reservaría el 6.1, por favor.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** ¿Alguien más?\_\_\_\_\_  
¿Alguien plantea una ronda de discusión en lo general?\_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, por favor tome la votación correspondiente a los Proyectos de Dictamen Consolidado, identificados en el orden del día con los números de apartado 6.2 al 6.5.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización, y Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados en el orden del día como los apartados 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, tomando en consideración en el caso del último apartado, la fe de erratas asociada al mismo.\_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables.\_\_\_\_\_

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**INE/CG394/2018**\_\_\_\_\_

**Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión del informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local, Pablo Raúl Moreno Carrión, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.**\_\_\_\_\_

**(Texto de la Resolución aprobada INE/CG395/2018) Pto. 6.2**\_\_\_\_\_

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DEL ASPIRANTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL, PABLO RAÚL MORENO CARRIÓN, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN LA CIUDAD DE MÉXICO**

**VISTO** el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

**ANTECEDENTES**

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las

campañas de los aspirantes y candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-.

- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. El cinco de febrero dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto mediante el que se expidió la Constitución Política de la Ciudad de México (Constitución Local).
- V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de representación proporcional.
- VI. El siete de junio dos mil diecisiete, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto que contiene las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México respecto del diverso por el que se abrogó el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral del Distrito Federal y se expidió el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (Código de la Ciudad) y la Ley Procesal Electoral para Ciudad de México; y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y del Código Penal para el Distrito Federal.
- VII. El veinte de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG328/2017 el que se aprueba la demarcación territorial de los Distritos electorales uninominales locales en que se divide la Ciudad de México y sus respectivas cabeceras distritales.

- VIII.** El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
- IX.** El seis de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la Declaración Formal de los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- X.** El seis de septiembre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-038/2017, aprobó la Convocatoria dirigida a la ciudadanía y partidos políticos a participar en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, para elegir Jefa o Jefe de Gobierno; Diputadas y Diputados del Congreso de la Ciudad de México; Alcaldesas y Alcaldes, así como Concejales de las dieciséis demarcaciones territoriales, cuya Jornada Electoral se celebrará el primero de julio de 2018.
- XI.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.
- XII.** En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática , Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

- XIII.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018.
- XIV.** El catorce de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-040/2017, por el que se ajustaron las fechas y plazos para recibir la documentación necesaria para el registro de candidaturas en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

- XV.** En esa misma sesión, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ ACU-CG-041/2017, aprobó la convocatoria a las ciudadanas y ciudadanos de la Ciudad de México interesados en participar en el registro de candidaturas sin partido a los diversos cargos de elección popular, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018. En dicho acuerdo se estableció que las y los aspirantes a candidaturas sin partido para los cargos de Diputada o Diputado, Alcaldesa o Alcalde y Concejales, contarían con 60 días, contados a partir del 9 de diciembre de 2017 hasta el 6 de febrero de 2018.

Asimismo, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-042/2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó los Lineamientos para el registro de candidaturas sin partido para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018; documento que contiene el rubro de los topes de gastos que a continuación se detallan:

Cargo	Tope de gastos de apoyo ciudadano en el Distrito local XV
Diputado Local	\$221,735.74

- XVI.** El seis de octubre de dos mil diecisiete en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, declaró formalmente el Inicio del Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
- XVII.** El nueve de octubre de dos mil diecisiete el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo ECM/ACU-CG055/2017, aprobó la ampliación del plazo para la recepción de solicitudes, en el caso de aspirantes a una candidatura sin partido a la Jefatura de Gobierno y se modifica el periodo para la obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017- 2018 en la Ciudad de México.
- XVIII.** El veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG475/2017, por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo



INE/CG596/2017, por el que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- XIX.** El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
- XX.** En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo CF/013/2017, con el que se definen los Límites de Financiamiento Privado que podrán recibir los Aspirantes a una Candidatura Independiente durante la obtención del apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales Ordinario 2017-2018.
- XXI.** El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-096/2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la procedencia de solicitudes de registro como registro como aspirantes a candidaturas sin partido a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, presentadas hasta el 3 de diciembre de 2017.
- XXII.** El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-098/2017, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó la procedencia de las solicitudes de registro como aspirantes a candidaturas sin partido a Diputaciones por el principio de mayoría relativa, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, presentadas del 4 al 9 de diciembre de 2017.

- XXIII.** El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por el cual se emitieron los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificados único que deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
- XXIV.** El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.
- XXV.** El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG85/2018, mediante el cual se determinó no enviar oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.

Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil dieciocho, los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo de referencia, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-21/2018 y SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el acuerdo impugnado.

- XXVI.** El ocho de febrero de dos mil dieciocho se recibió en la Oficialía Electoral y de Partes del Instituto Electoral de la Ciudad de México, un escrito signado por el ciudadano Pablo Raúl Moreno Carrión, a través del cual solicitaba, entre otras cosas, la reposición del plazo para recabar apoyos ciudadanos, ya que en su concepto fue disminuido por la fecha en que se emitió el respectivo Acuerdo del Consejo General en el que se determinó

la procedencia de su registro, así como la ampliación de plazo para recabar apoyos ciudadanos.

- XXVII.** El trece de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-032/2018, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dio respuesta al escrito de petición signado por el C. Pablo Raúl Moreno Carrión, quien entre otras cosas, solicitó la reposición de seis días, dado que su registro procedió de manera posterior. A lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México respondió que existía una imposibilidad jurídica y material para otorgar a la y los aspirantes un plazo adicional al de la fecha límite para recabar el apoyo ciudadano requerido, dado que, se otorgaron dos plazos para la presentación de las solicitudes de registro como aspirantes a una candidatura sin partido a Alcaldías y Diputaciones, así como dos fechas para la aprobación de las mismas.
- XXVIII.** El diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, ante la respuesta del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México el C. Pablo Raúl Moreno Carrión interpuso un juicio para la protección de los derechos político-electorales ante la Sala Regional Ciudad de México con número de expediente SCM-JDC-78/2018.
- XXIX.** El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Regional Ciudad de México resolvió revocar el acuerdo de clave IECM/ACU-CG-032/2018, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, dado que ésta omitió tomar en consideración que fue una circunstancia provocada por el propio Consejo General la que contravino en perjuicio del actor los principios rectores de la materia, en específico, los de certeza e igualdad ante la ley, pues injustificadamente lo colocó en una posición de desventaja en tanto que no existía posibilidad material de que contara con la totalidad del plazo para recabar los apoyos ciudadanos.
- XXX.** El nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México, mediante el Acuerdo IECM/ACU-CG-054/2018, aprobó, en acatamiento a lo ordenado en la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, dictada el 9 de marzo de 2018, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave SCM-JDC-78/2018, se determinó procedente ajustar los plazos para la obtención de apoyo ciudadano y los relacionados con las

etapas del proceso de registro del ciudadano Pablo Raúl Moreno Carrión como aspirante a candidato sin partido a la Diputación al Congreso Local de la Ciudad de México, por el Distrito Electoral Local 15, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, otorgándole un periodo adicional de seis días para recabar apoyo ciudadano, contados a partir del diez y hasta el quince de marzo de dos mil dieciocho.

- XXXI.** El catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, mediante el Acuerdo INE/CG144/2018, aprobó modificar los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local 2017-2018, en el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 03 del consejo municipal electoral 10 Apaxco, del acuerdo CG/AC-031/18 del Instituto Electoral del Estado de Puebla, y acuerdo IECM-ACUCG-054-2018 del Instituto Electoral de la Ciudad de México, en cumplimiento a las sentencias ST/JDC/48/2018, SCM-JDC-75/2018, y SCM-JDC-78/2018, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- XXXII.** Una vez integrado el Dictamen Consolidado, la Unidad Técnica de Fiscalización elaboró el Proyecto de Resolución respectivo, el cual fue presentado por la Unidad Técnica de Fiscalización el catorce de abril de dos mil dieciocho. Lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, inciso a), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En la décima primera sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral se aprobó la presente Resolución por mayoría de votos de las Consejeras Electorales Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización Doctor Ciro Murayama Rendón.

## **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten (aspirantes).

**2.** Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

**3.** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

**4.** Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

**5.** Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.

**6.** Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral Federal y Local ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda.

**7.** Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

**8.** Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente mediante la integración exclusiva de Consejeros Electorales designados por el Consejo General, contando con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

**9.** Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.

**10.** Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.

**11.** Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.

**12.** Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.

**13.** Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos de actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano.

**14.** Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a cargos de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios.

**15.** Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera.

**16.** Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.

**17.** Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a presentar los Informes de ingresos y gastos de los actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos.

**18.** Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el

cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

**19.** Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:

- a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
- b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
- c. Presentación del Informe
- d. Notificación de oficio de errores y omisiones
- e. Respuesta al oficio de errores y omisiones
- f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
- g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
- h. Presentación al Consejo General
- i. Aprobación del Consejo General

**20.** Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los aspirantes a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputado Local y Alcalde que se ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.

**21.** Es preciso aclarar que el aspirante a candidato independiente en la Ciudad de México presentó el informe de ingresos y gastos del periodo de obtención del apoyo ciudadano, por lo que cumplió con lo establecido en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la LGIPE, tal como se muestra:



Cons.	Cargo	Nombre del aspirante	Fecha límite de presentación del Informe	Presentación de Informe		Fecha de desistimiento
				En tiempo	Extemporáneo	
3.4.1	Diputado Local MR	Pablo Raúl Moreno Carrión	05-04-2018	x		

**22.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, respecto del **aspirante único que no fue omiso** este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

**23.** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Por lo que hace a la capacidad económica del aspirante a candidato independiente, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada por el aspirante de manera específica, en el informe de capacidad económica.

**24.** Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.

En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por falta cometida por los candidatos independientes y/o aspirantes a candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.

**25.** Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Jefe de Gobierno, Diputado Local y Alcalde en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Organismo Público Local Electoral de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes a candidatos independientes cuando así se determine.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales-

**26.** El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización<sup>1</sup> corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier*

---

<sup>1</sup> La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

*disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

#### **Tesis LXXVII/2016**

**MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.-** *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.*

#### **Quinta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.—Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.—Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable:*

*Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.*

No obstante lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

Ahora bien, como ya se hizo referencia en el **Considerando 20** de la presente Resolución, el plazo establecido para el C. Pablo Raúl Moreno Carrión para la obtención de apoyo ciudadano comenzó en el mes de diciembre del año dos mil diecisiete, encontrando como fecha límite el mes de marzo de dos mil dieciocho, tal como se detalla en la tabla siguiente:

Cargo	Plazo
Diputado Local MR	9 de diciembre de 2017 a 15 de marzo de 2018

Cabe señalar que esta autoridad electoral no consideró para efecto de sanción aquellas conductas en las que el monto involucrado correspondió a un importe menor a una Unidad de Medida y Actualización vigente en dos mil diecisiete; por lo que la sanción queda sin efectos dado que su monto resulta de una importancia menor para el total de la sanción a imponer al sujeto infractor.<sup>2</sup>

**27.** Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de

---

<sup>2</sup> La sanción queda sin efectos toda vez que la misma corresponde a un monto menor a una Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo señalado en el considerando 27 de la resolución de mérito.

obtención del apoyo ciudadano, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo al Informe de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por lo que hace al sujeto obligado ahí señalado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por el sujeto obligado.

En tal sentido, el Dictamen Consolidado<sup>3</sup> representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.

**28.** Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través

---

<sup>3</sup> Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que *“Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos...”*.

de la cuenta que cada uno de los sujetos obligados tiene autorizada en el Sistema Integral de Fiscalización.

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de dichos sujetos obligados, así como cumplir con la expedita con que se deben sustanciar los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata, por tal razón este Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a los sujetos obligados de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y Resolución de mérito.

**29.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo ciudadano del aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, el sujeto obligado acreedor a la imposición de diversas sanciones son es el siguiente:

## 29.1 Diputado Local

### 29.1.1 Pablo Raúl Moreno Carrión

Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos obligados por apartados específicos, en los términos siguientes:

#### 29.1.1 PABLO RAÚL MORENO CARRIÓN

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. Pablo Raúl Moreno Carrión** son las siguientes:

- a) 2 Faltas de carácter formal: **Conclusiones 1 y 2.**
- b) Imposición de la sanción.

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

- a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal: **Conclusiones 1 y 2.**

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
1	<i>"El sujeto obligado omitió presentar 4 estados de cuenta bancarios."</i>	<i>"Artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización."</i>
2	<i>"El sujeto obligado omitió presentar 4 conciliaciones bancarias"</i>	<i>"Artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización."</i>

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia

de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.<sup>4</sup>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron subsanadas.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.

---

<sup>4</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.



- c) Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

## **CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

<b>Descripción de la irregularidad observada (1)</b>	<b>Acción u omisión (2)</b>	<b>Normatividad vulnerada (3)</b>
<i>Conclusión 1. El sujeto obligado omitió presentar 4 estados de cuenta bancarios.</i>	<i>Omisión</i>	<i>Artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.</i>
<i>Conclusión 2. El sujeto obligado omitió presentar 4 conciliaciones bancarias.</i>	<i>Omisión</i>	<i>Artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.</i>

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede, identificadas con el número **(1)**, contraviniendo, en cada caso, la normatividad señalada en la columna **(3)**.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en la Ciudad de México, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.<sup>6</sup>

En las conclusiones 1 y 2 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización, el cual se tiene por reproducido como si a la letra se insertasen.

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e

---

<sup>6</sup> En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado en cuestión.

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado

funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que, como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **b)** del presente considerando.

**b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

**Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada

supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

### **Conclusiones 1 y 2.**

Del análisis realizado a las conductas infractoras cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.



- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>7</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

---

<sup>7</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; **II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	1	Forma	N/A	10 Uma	\$754.90
a)	2	Forma	N/A	10 Uma	\$754.90
<b>Total</b>					<b>\$1,509.80</b>

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los aspirantes a candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada directamente por los aspirantes, de manera específica, en el informe de capacidad económica,

en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

Ingresos	Sanción
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el aspirante<sup>8</sup>, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Sanción de acuerdo a su capacidad económica
\$257,600.00	Hasta \$12,880.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Pablo Raúl Moreno Carrión** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **20 (veinte)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$1,509.80 (un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.)**.

---

<sup>8</sup> Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **29.1.1** de la presente Resolución, se impone a la **C. Pablo Raúl Moreno Carrión, en su carácter de aspirante a candidato independiente**, la sanción siguiente:

**a) 2 Faltas de carácter formal: Conclusión 1 y 2.**

Una **multa** equivalente a **20 (veinte)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$1,509.80 (un mil quinientos nueve pesos 80/100 M.N.)**.

**SEGUNDO.** En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la multa determinada se hará efectiva una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por la aplicación de la misma serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**TERCERO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Organismo Público Local de la Ciudad de México.

**CUARTO.** Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos al interesado, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

**QUINTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución.

**SEXTO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, de la Sala Regional con sede en la Ciudad de México y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**SÉPTIMO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**OCTAVO.** Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado estado.

**INE/CG396/2018** \_\_\_\_\_

**Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. Ricardo Meza Cervantes, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Apaxco, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el Estado de México.** \_\_\_\_\_  
**(Texto de la Resolución aprobada INE/CG397/2018) Pto. 6.3** \_\_\_\_\_

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PERIODO DE OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DEL C. RICARDO MEZA CERVANTES, ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE APAXCO, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE MÉXICO**

**VISTO** el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano del C. Ricardo Meza Cervantes, aspirante a candidato independiente al cargo de Presidente Municipal de Apaxco, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Mexico.

**ANTECEDENTES**

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las

campañas de los aspirantes y candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y local-.

- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. El veintiocho de junio de dos mil catorce, mediante decreto número 248 de la Quincuagésima Octava legislatura del Estado de México, se expidió el Código Electoral del Estado de México.
- V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de representación proporcional.
- VI. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
- VII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG398/2017, a través del cual ejerce la facultad de atracción para fijar los criterios tendentes a garantizar los principios de imparcialidad en el uso de recursos públicos y equidad en la contienda para los Procesos Electorales 2017-2018.
- VIII. El seis de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se realizó la Declaración

Formal de los procesos electorales ordinarios iniciarán la primera semana de septiembre del año anterior al de la elección y concluirán con los cómputos y declaraciones que realicen los consejos del Instituto, o con las resoluciones que, en su caso, pronuncie el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

- IX.** El seis de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, se aprobó el Acuerdo IEEM/CG/164/2017, por el que se aprueba el Convenio General de Coordinación y Colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado de México, con el fin de establecer las bases de coordinación para hacer efectiva la realización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en el Estado de México, para la renovación de los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos, cuya Jornada Electoral será el primero de julio de 2018 y, en su caso, los mecanismos de participación ciudadana.
- X.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.
- XI.** En sesión extraordinaria celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática , Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP639/2017 y SUP-RAP-640/2017,



respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

- XII.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Federal 2017-2018.
- XIII.** El veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/165/2017, a través del cual se aprueba el Calendario del Proceso Electoral de las Elecciones de Diputados y miembros de los Ayuntamientos 2017-2018.
- XIV.** El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México, aprobó el Acuerdo IEEM/CG/182/2017, mediante el cual se determinan los topes de gastos que pueden erogar quienes aspiren a una Candidatura Independiente en la etapa de obtención del apoyo ciudadano, para el Proceso Electoral 2017-2018.

### **Tope de gastos para la etapa de apoyo ciudadano por municipio 2017-2018**

MUNICIPIO		TOPE GASTOS 2015 (PESOS)	10% Art. 107 CEEM (PESOS)
010	Apaxco	455,188.50	45,518.85

- XV.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete el Acuerdo INE/CG475/2017, por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
- XVI.** En sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
- XVII.** El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
- XVIII.** En la misma sesión de la Comisión de Fiscalización se aprobó el Acuerdo CF/013/2017, con el que se definen los Límites de Financiamiento Privado que podrán recibir los Aspirantes a una Candidatura Independiente durante la obtención del apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Federal y Locales Ordinario 2017-2018.
- XIX.** En sesión extraordinaria celebrada el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria, aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017, por el que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al Proceso

Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018.

- XX.** El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por el cual se emitieron los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificado único que deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
- XXI.** El veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, el C. Ricardo Meza Cervantes entre otros presentaron ante el Consejo Municipal Electoral 10 Apaxco su manifestación de intención para contender en la elección para integrar el ayuntamiento de Apaxco para el Proceso Electoral 2017-218, como candidatos independientes.
- XXII.** El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.
- XXIII.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG43/2018 a través del cual se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de México.
- XXIV.** Con fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG85/2018, por el que se determinó no enviar el oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular.

Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil dieciocho los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG85/2018, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-21/2018, SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el acuerdo impugnado.

- XXV.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG91/2018 a través del cual se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de México.
- XXVI.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de fecha catorce marzo de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG144/2018 por el que se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de México, Puebla y la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 03 del Consejo Municipal Electoral 10 Apaxco, del acuerdo CG/AC-031/18 del Instituto Electoral del Estado de Puebla y acuerdo IECM-ACU-CG-054-2018, del Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento a las sentencias ST/JDC/48/2018, SCM-JDC-75/2018, y SCM-JDC-78/2018, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- XXVII.** En la Décimo Primera Sesión Extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la Revisión de Informes de los Ingresos y Gastos de los aspirantes a Candidatos Independientes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que nos ocupa, y su respectiva Resolución, por cuatro votos a favor, de los Consejeros Electorales

presentes, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente de dicha Comisión el Doctor Ciro Murayama Rendón, lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales.

### **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten. (aspirantes)
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional Electoral, que es autoridad en la materia e independiente en sus decisiones y funcionamiento. Mientras que el Apartado B, penúltimo párrafo del mismo ordenamiento máximo dispone que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

4. Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
6. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para el Proceso Electoral Federal y Local ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda.
7. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
8. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

9. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva.
10. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estarán a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
11. Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
13. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y gastos de actos tendientes a recabar el apoyo ciudadano.
14. Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes

a cargos de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios.

15. Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera.
16. Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.
17. Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a presentar los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos.
18. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen a las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
19. Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:
  - a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
  - b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
  - c. Presentación del Informe
  - d. Notificación de oficio de errores y omisiones
  - e. Respuesta al oficio de errores y omisiones



- f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
- g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
- h. Presentación al Consejo General
- i. Aprobación del Consejo General

- 20.** Que de conformidad con el Acuerdo INE/CG596/2017, el plazo del periodo para la obtención de apoyo ciudadano respecto de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Diputados Locales y Presidentes Municipales en el estado de México es el siguiente:

Cargo	Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano
Ayuntamientos	04 de marzo al 02 de abril de 2018.

- 21.** Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera al sujeto obligado que se ubique en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registre operaciones, presente los avisos de contratación y agenda de eventos, suba evidencia y presente el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos que se ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.
- 22.** Lo anterior le fue notificado al C. Ricardo Meza Cervantes, por el Ayuntamiento de Apaxco, por lo que el SIF fue habilitado para que presentaran su informe de ingresos y egresos.

ASPIRANTES	PERIODO PARA PRESENTACIÓN DE INFORME
Ricardo Meza Cervantes	05 de abril de 2018

- 23.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, respecto del aspirante en comento, este Consejo General analizó el Informe del sujeto obligado en un apartado específico en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano del

sujeto obligado en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de México.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación, e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto que se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó la garantía de audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

En ese sentido, una vez presentado el informe respecto de los ingresos y gastos para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de México, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y analizar toda la información y documentación presentada por el sujeto obligado. Aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por el aspirante y se efectuó una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos; en su caso, se hizo del conocimiento del aspirante las observaciones que derivaron de la revisión realizada.

- 24.** Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.

En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de un candidato independiente, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por la falta cometida por el candidato independiente, deber ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de la multa que se le impone, el recurso económico para sufragarla emana de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos

políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.

25. Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso a); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Diputado Local y Ayuntamientos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Instituto Electoral del estado de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes a candidatos independientes cuando así se determine.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales.

26. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización<sup>1</sup> corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

---

<sup>1</sup> La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *"para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal."*

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “*A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.*”

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

***Tesis LXXVII/2016***

***MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.-*** En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.

### **Quinta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— Promovientes: Partido Revolucionario Institucional y otros.—Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.*

No obstante, lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

En este contexto, el catorce de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto, aprobó la Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de Apoyo Ciudadano de las y los Aspirantes al cargo de Senador de Mayoría Relativa, correspondiente al Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-

2018, en el cual se aprobó la aplicación, para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de esa anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta 60/100 M.N.), lo anterior, en virtud de la temporalidad en la cual se desarrolló la etapa periodo para la obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral que nos ocupa.

En función de lo anterior, al existir una temporalidad para recabar el apoyo ciudadano que comienza en diciembre de la anualidad dos mil diecisiete y que culmina en el año dos mil dieciocho, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA's) vigente a partir del uno de marzo de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha diez de enero de la misma anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

27. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de obtención del apoyo ciudadano, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por el sujeto obligado y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analiza la conclusión sancionatoria contenida en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al Ayuntamiento, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por lo que hace al sujeto obligado ahí señalado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por el sujeto obligado.

En tal sentido, el Dictamen Consolidado<sup>2</sup> representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.

- 28.** Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través de la cuenta que cada uno de los sujetos obligados tiene autorizada en el Sistema Integral de Fiscalización.

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de dichos sujetos obligados, así como cumplir con la expedites con que se deben sustanciar los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata; por tal razón, este Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a los sujetos obligados de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y Resolución de mérito.

---

<sup>2</sup> Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que *“Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos...”*.

Esta expedite y certeza se logra con la notificación que se realice del Dictamen y Resolución por medio del Sistema Integral de Fiscalización.

- 29.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó el informe del sujeto obligado por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes a los cargos de Diputado Local y Ayuntamientos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de México.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les impone al sujeto obligado por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos (LGPP), Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), así como el Reglamento de Fiscalización (RF) vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, el ente fiscalizable acreedor a la imposición de diversas sanciones es el siguiente:

## **Ayuntamientos**

### **29.1 C. Ricardo Meza Cervantes.**

Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizará en el orden descrito el sujeto obligado por apartados específicos, en los términos siguientes:



### 29.1 C. Ricardo Meza Cervantes.

Previo al análisis de la conclusión sancionatoria descrita en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de la irregularidad encontrada en la revisión del Informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México, se procederá a realizar su demostración y acreditación.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones reflejadas encontradas en la revisión de la obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México, se desprende que la irregularidad en que incurrió el **C. Ricardo Meza Cervantes** es la siguiente:

a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**

b) Imposición de la sanción.

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 1.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
1	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.”</i>	\$15,928.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que

presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión)
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores, durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México.

En el caso a estudio, al no realizar los registros contables en tiempo real corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, conforme a lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.<sup>3</sup>

#### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron**

El sujeto obligado omitió realizar registros contables en tiempo real durante el periodo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada:

*“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación.”*

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de

---

<sup>3</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por haber omitido realizar registros contables en tiempo real, se vulnera sustancialmente la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización<sup>4</sup>.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que el sujeto obligado cumpla en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de

---

<sup>4</sup> "Artículo 38. 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.(...) 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto."

registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo

real, el ente político obstaculizó la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado multicitado se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en el artículo 38 numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y certeza en la rendición de cuentas, con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

#### **f) La singularidad de la falta acreditada**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad y certeza en la rendición de cuentas.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **b)** del presente considerando.

#### **b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN**

**Por lo que hace a la conclusión 1.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de la infracción cometida, a efecto de garantizar que en el supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

#### **a) Conclusión 1**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió registrar las operaciones contables en tiempo real durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir realizar los registros contables en tiempo real, durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de México.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$15,928.00 (Quince mil novecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.).**
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>5</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>5</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. **Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean la irregularidad, la cual ha quedado plasmada en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomenta el tipo de conducta ilegal o similar cometida.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de la conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, el monto a imponer sería el siguiente:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	1	Operaciones en tiempo real	\$15,928.00	3%	\$403.00
Total					\$403.00 <sup>6</sup>

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

---

<sup>6</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciocho.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el aspirante<sup>7</sup>, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Egresos (B)	Diferencia (A-B=C)	Capacidad Económica (30% de C)
\$114,780.00	\$100,000.00	\$14,780.00	\$4,434.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

---

<sup>7</sup> Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Ricardo Meza Cervantes** por lo que hace a la conducta observada es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **5** (cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$403.00 (Cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **29.1** de la presente Resolución, se impone al **C. Ricardo Meza Cervantes, en su carácter de aspirante a candidato independiente**, la sanción siguiente:

**a) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**

Con una multa equivalente a **5** (cinco) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$403.00 (Cuatrocientos tres pesos 00/100 M.N.)**.

**SEGUNDO.** Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos anexos al interesado, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

**TERCERO.** Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado estado.

**CUARTO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**QUINTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución.

**SEXTO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento del Tribunal Electoral del estado de México, la Sala Regional correspondiente y a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**INE/CG398/2018**

**Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.**

**(Texto de la Resolución aprobada INE/CG399/2018) Pto. 6.4**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES AL CARGO DE GOBERNADOR CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE PUEBLA**

**VISTO.** El Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de los Ingresos y Gastos para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.

**ANTECEDENTES**

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos relativas a los Procesos Electorales, Federal y Local, así como de las campañas de los candidatos.

- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. En sesión ordinaria, celebrada el veintidós de diciembre del dos mil quince, fueron aprobados mediante Acuerdo CG/AC-035/15 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla diversos ajustes al Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
- V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de representación proporcional.
- VI. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
- VII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG390/2017 por el que se aprueban el plan y calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- VIII. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de

Fiscalización sería integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.

- IX.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP-639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

- X.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017 por el cual se aprueba el plan integral y calendarios de



coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018.

- XI.** El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG475/2017, por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017, por el que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018

- XII.** El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/033/2017, se aprobaron los ajustes a los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Puebla y el Calendario para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

- XIII.** El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

- XIV.** En sesión ordinaria, celebrada el tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-034/17 por el cual se declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, convocando a elecciones ordinarias para renovar los cargos de la Gubernatura del Estado, diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos.

- XV.** En sesión ordinaria, celebrada el tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-035/17 aprobó los topes de gasto de las precampañas electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- XVI.** El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
- XVII.** En sesión ordinaria celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo CF/012/2017, la Comisión de Fiscalización aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las precampañas y de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018.
- XVIII.** El primero de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, aprobó el Acuerdo CG/AC-041/2017 por el que se estipularon los Lineamientos para las y los aspirantes a las candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y emite la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes para renovar los cargos de la gubernatura del estado, diputaciones al congreso local y ayuntamientos.
- XIX.** Mediante decreto de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha dos de octubre de mil novecientos diecisiete, se expidió la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

- XX.** Mediante decreto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha dos de octubre de dos mil, se expidió el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
- XXI.** Mediante decreto de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
- XXII.** El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG/597/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como precampaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- XXIII.** El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por medio del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificados único que deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
- XXIV.** El seis de enero del dos mil dieciocho, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla aprobó el Acuerdo CG/AC-001/18 por el que se pronuncia respecto de las manifestaciones de intención presentadas por parte de las y los ciudadanos interesados en contender bajo la figura de candidatura independiente para el proceso Electoral Estatal Ordinario 2017-2018.
- XXV.** Los días dieciocho, veintidós de enero de dos mil dieciocho, Israel de Jesús Ramos González, Enrique González Sánchez y José Jorge Trinidad Morales Alducín, respectivamente solicitaron la ampliación del plazo de treinta días para recabar apoyo ciudadano al instituto Electoral del estado de Puebla, que emitió los acuerdos CG/AC-008/18, CG/AC-009/18 por lo que manifestó la imposibilidad jurídica y material de ampliar el plazo para recabar el apoyo ciudadano.

Posteriormente, se presentaron recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del estado de Puebla, que, en sesión de seis de febrero de dos mil dieciocho, resolvió confirmado los acuerdos CG/AC-008/18 y CG/AC-009/18 del Consejo General del Instituto Electoral de Puebla.

Inconformes con lo anterior, los C. Israel Jesús Ramos González y C. Enrique Cárdenas Sánchez, presentaron sendos recursos de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla.

- XXVI.** El día veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, José Jorge Trinidad Morales Alducín solicitó la ampliación del plazo de treinta días para recabar apoyo ciudadano al Instituto Electoral del estado de Puebla, que emitió el Acuerdo INE/CG133/2018.
- XXVII.** El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.
- XXVIII.** El siete y nueve de febrero de dos mil dieciocho, Israel de Jesús Ramos González y Enrique González Sánchez, aspirante a candidatos Independientes en el estado de Puebla, promovieron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los juicios radicados con los números SUP-JDC-44/2018 y SUP-JDC-46/2018, y posteriormente se acordó su acumulación.
- XXIX.** El veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante Resolución a los expedientes SUP-JDC-44/2018; SUP-JDC-46/2018 y Acumulados, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la ampliación de los plazos establecidos para apoyo ciudadano, el cual será por un periodo de treinta días.
- XXX.** El veintiocho de febrero de dos mil dieciocho fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, por votación unánime el acuerdo CG/AC-028-2018 en el cual se da cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado como SUB-JDC-44/2018 y SUB-JDC-46/2018, acumulados, acordándose la ampliación por treinta días más al periodo para la obtención de firmas de apoyo ciudadano del 01 al 30 de marzo de

dos mil dieciocho, a todos los aspirantes a candidatos independientes al cargo de gubernatura del estado de Puebla, esto es del 01 al 30 de marzo de dos mil dieciocho.

- XXXI.** El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG85/2018, por el que se determinó no enviar el oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular.

Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil dieciocho los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG85/2018, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-21/2018, SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el acuerdo impugnado.

- XXXII.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG91/2018 a través del cual se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de Puebla.

- XXXIII.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de fecha catorce marzo de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG144/2018 por el que se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de México, Puebla y la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 03 del Consejo Municipal Electoral 10 Apaxco, del acuerdo CG/AC-031/18 del Instituto Electoral del Estado de Puebla y acuerdo IECM-ACU-CG-054-2018, del Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento a las

sentencias ST/JDC/48/2018, SCM-JDC-75/2018, y SCM-JDC-78/2018, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**XXXIV.** En la décimo primera sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la revisión de informes de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que nos ocupa, y su respectiva Resolución, por unanimidad, de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez, el Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de dicha Comisión el Doctor Ciro Murayama Rendón, lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales.

## **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional electoral, el cual de conformidad con el Apartado A, primer párrafo de la base en cita, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo principios rectores en el ejercicio de su función la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
4. Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontrarán a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
6. Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, para el Proceso Electoral Federal y Local Ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda.
7. Que el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia,

imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

8. Que de conformidad con el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
9. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva.
10. Que el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las fiscalizaciones de las finanzas de los aspirantes a candidatos independientes estarán a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
11. Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.
12. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes emiten respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y



procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.

13. Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley en cita, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.
14. Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a cargos de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios.
15. Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera.
16. Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.
17. Que los aspirantes a candidatos independientes están obligados a presentar los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos.
18. Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen a las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición de las sanciones

correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

- 19.** Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:

  - a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
  - b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
  - c. Presentación del Informe
  - d. Notificación de oficio de errores y omisiones
  - e. Respuesta al oficio de errores y omisiones
  - f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
  - g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
  - h. Presentación al Consejo General
  - i. Aprobación del Consejo General
- 20.** Que de conformidad a los recursos de apelación interpuestos por los C. Israel de Jesús Ramos González y Enrique Cárdenas Sánchez respectivamente, en el cual solicitaron la ampliación del plazo para recabar apoyo ciudadano al Instituto Electoral del Estado de Puebla que emitió los acuerdos CG/AC-008/18 y CG/AC-009/18, por lo que se manifestó la imposibilidad jurídica y material de ampliar el plazo para recabar el apoyo ciudadano.
- 21.** Que los mencionados aspirantes a candidatos independientes al cargo de Gobernador del Estado de Puebla, presentaron los recursos de apelación ante el Tribunal Electoral Local identificados como TEEP-A-012/2018 y TEEP-A-014/2018, mismos que se resolvieron confirmar los acuerdos emitidos por el Instituto Electoral del estado.
- 22.** Que se presentó juicio de protección de los derechos políticos electorales, suscritos por los C. Israel de Jesús Ramos González y Enrique Cárdenas Sánchez respectivamente, en contra de las sentencias emitidas por el Tribunal Local, mismas que en sesión de la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se resolvió lo siguiente:

“(…)

- I. *Se revocan las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla en los recursos de apelación TEEP-A-012/2018 y TEEP-A-014/2018.*
- II. *En plenitud de jurisdicción se decreta la inaplicación del artículo 201 ter, apartado c, fracción IV, inciso b) del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla. Se ordena dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con copia certificada de la presente ejecutoria, en conformidad con lo previsto en el artículo 99, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*
- III. *Se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que en plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de la presente ejecutoria dicte un acuerdo en el que otorga a todos los aspirantes a candidaturas independientes a cargo de Gobernador una ampliación de treinta días más para recabar los apoyos ciudadanos que marca la norma. Este acuerdo deberá tener en cuenta los ajustes que sean necesarios en relación con los plazos para revisión del cumplimiento de los requisitos de los aspirantes y el registro respectivo, así como los atinentes a la fiscalización de ingresos y gastos que efectúa el Instituto Nacional Electoral.*
- IV. *Se da vista al Instituto Nacional Electoral para el efecto de que, en su oportunidad, dicte un acuerdo en el que considere el acuerdo que dicte el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla en cumplimiento a esta ejecutoria y ajuste los plazos necesarios para la fiscalización de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes a la gubernatura en cuestión.*  
(...)"

23. Que en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral del Estado, dicto en sesión especial con fecha del 28 de febrero de 2018, el acuerdo CG/AC-028-18 por el que se acordó la ampliación por treinta días más al periodo para la obtención de firmas de apoyo ciudadano del 01 al 30 de marzo de dos mil dieciocho, a todos los aspirantes a candidatos independientes al cargo de gubernatura del estado de Puebla, esto es del 01 al 30 de marzo de dos mil dieciocho.
24. Que es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ordena que la fiscalización de los informes que le han rendido respecto al plazo de treinta días que han concluido, y posteriormente efectuar la fiscalización de los ingresos y egresos del plazo concebido para lo cual podrá elaborar un Dictamen Consolidado que

deberá ser de tres días antes del inicio de campaña, es decir, el 29 de abril de dos mil dieciocho.

- 25.** Que actualmente la Unidad Técnica de Fiscalización ya notifico el oficio de errores y omisiones a los candidatos independientes a la gubernatura del estado de Puebla, respecto de los informes rendidos, los cuales tienen hasta el 4 de marzo para dar respuesta. En este sentido, las observaciones, respuestas y conclusiones de dicho periodo de conclusión de apoyo ciudadano se incluirán en el Dictamen Consolidado de informe de ingresos y egresos que presenten los aspirantes del plazo adicional de obtención de apoyo ciudadano.
- 26.** Que, en la mencionada sentencia emitida por la Sala Superior, si bien es cierto que el recurso ciudadano del que emana, solo fue promovido por dos aspirantes a candidatos independientes, es la propia sala quien otorga el beneficio concedido de la ampliación treinta días a todos los aspirantes a candidaturas independientes al cargo de gobernador del estado de Puebla, tal y como se puede advertir en el Considerando QUINTO. Efectos, numeral de la propia sentencia.
- 27.** Que, en virtud de lo ordenado por la Sala Superior, se deberá ajustar los plazos para la fiscalización a los ingresos y gastos del nuevo periodo concedido a los aspirantes a candidatos independiente, tomando en consideración que dicho periodo concluye el 30 de marzo de dos mil dieciocho y que los dictámenes consolidados deberán aprobarse tres días antes del inicio de las campañas para cargo de Gobernador del estado de Puebla que es el veintinueve de abril de dos mil dieciocho, por lo que estos plazos serán, por ende de menor duración en relación al primer periodo, sin que esta determinación constituya una afectación directa a los aspirantes al cargo en mención, pues como ya se acoto, es en acatamiento a la Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 28.** Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y

agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos que se ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe

- 29.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, respecto de los 3 aspirantes que no fueron omisos, este Consejo General analizó cada uno de los Informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los sujetos obligados en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Puebla.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación, e investigación, con el objeto de verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto que se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó la garantía de audiencia a los aspirantes a candidatos independientes, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

En ese sentido, una vez presentados los informes respecto de los ingresos y gastos para la obtención de apoyo ciudadano de las y los aspirantes, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla, el órgano fiscalizador procedió a clasificar y analizar toda la información y documentación presentada por los sujetos obligados. Aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los aspirantes y se efectuó una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos; en su caso, se hizo del conocimiento de los aspirantes las observaciones que derivaron de la revisión realizada.

- 30.** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa,

considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de los aspirantes a candidatos independientes para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada directamente por los aspirantes, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

<b>Ingresos</b>	<b>Sanción</b>
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

En razón de lo anterior, los aspirantes que presentaron información fueron los siguientes:

<b>Aspirante a Candidato Independiente</b>	<b>Ingresos (A)</b>	<b>Porcentaje a considerar (B)</b>	<b>Capacidad económica (A*B)=C</b>
Israel de Jesús Ramos González	\$58,074.00	Amonestación pública	Amonestación pública
José Jorge Morales Alducin	\$94,000.00	Amonestación pública	Amonestación pública
Enrique Cárdenas Sánchez	\$2,913,744.00	25%	\$728,436.00

Resulta necesario aclarar que para el caso concreto de los aspirantes, el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un aspirante al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de **5,000** (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.

En consecuencia, en aquellos casos que la sanción a imponer supere el monto máximo que la legislación establece para los aspirantes, en estricto cumplimiento a los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a **5,000** (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización.

31. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Por lo que hace a la capacidad económica de los aspirantes a candidatos independientes, la autoridad electoral tomó en consideración la información presentada por los aspirantes, de manera específica, en el informe de capacidad económica.

32. Que en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.

En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetro previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por la falta cometida por los candidatos independientes, deber ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.

- 33.** Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Instituto Electoral del estado de Puebla para que en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes a candidatos independientes cuando así se determine.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales

- 34.** El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización<sup>1</sup> corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de*

---

<sup>1</sup> La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*



*cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

***Tesis LXXVII/2016***

***MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.-*** *En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.*

***Quinta Época:***

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución*

*Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.— Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.*

No obstante, lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

En este contexto, para la imposición de las sanciones respectivas a la presente Resolución, el valor con el que se aplicarán las mismas en virtud de que la temporalidad en la cual se desarrolló **la etapa de apoyo ciudadano de los aspirantes a gobernador**, la cual se llevó a cabo en dos periodos, comprendiendo el primer periodo del seis de enero al ocho de febrero y el segundo periodo del primero al treinta y uno de marzo de la presente anualidad, esto en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, será la Unidad de Medida y Actualización (UMA) **vigente a partir del primero de febrero de dos mil**

**diecisiete y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de esa anualidad, mismo que asciende a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).**

35. Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes del periodo de obtención del apoyo ciudadano, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, por lo que hace al sujeto obligado ahí señalado, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por el sujeto obligado.

En tal sentido, el Dictamen Consolidado<sup>2</sup> representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente Resolución.

36. Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través de la cuenta que cada uno de los sujetos obligados tiene autorizada en el Sistema Integral de Fiscalización.

---

<sup>2</sup> Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que *"Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos..."*.

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales de dichos sujetos obligados, así como cumplir con la expedites con que se deben sustanciar los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata; por tal razón, este Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a los sujetos obligados de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y Resolución de mérito.

Esta expedites y certeza se logra con la notificación que se realice del Dictamen y Resolución por medio del Sistema Integral de Fiscalización.

- 37.** Que conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizaron los informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo ciudadano de los aspirantes a candidatos independientes al cargo de Diputados y Ayuntamientos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Puebla.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia al aspirante a candidato independiente, elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones e irregularidades son los siguientes:

37.1 Israel de Jesús Ramos González.

37.2 Enrique Cárdenas Sánchez

37.3 José Jorge Trinidad Morales Alducín.

### **37.1 ISRAEL DE JESÚS RAMOS GONZÁLEZ.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. Israel de Jesús Ramos González**, son las siguientes:

**a) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**

**b) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 2.**

**c) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 3**

**d) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones 4 y 6**

**e) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 5**

**f)** Imposición de la sanción.

**a)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión
1	<i>“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Gobernador en el estado de Puebla, en ejercicio a la garantía de audiencia”</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie presentación extemporánea del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a la entrega extemporánea del informe de ingresos y egresos durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla vulneró lo establecido en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión
2	<i>"El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración."</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del Sistema Integral de Fiscalización, 1 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de

Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando lo establecido en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

**c)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a); 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
3	"El sujeto obligado reportó egresos de forma subvaluada por un importe de \$23,612.00."	\$23,612.00

DATOS DEL COMPROBANTE						
NÚMERO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE REPORTADO	IMPORTE DETERMINADO POR LA AUTORIDAD	DIFERENCIA (SUB-VALUACIÓN)
3106	09-02-18	Multi Car	Aportación de Vehículo	\$1.00	\$16,000.00	\$15,999
3160	09-02-18	José Luis López Lozano	renta de casa de campaña	\$1.00	\$1,000	999
3106	09-02-18	Manuel Torres Torres HPF Muebles S.A	renta de mobiliario y equipo de oficina	\$1.00	\$6,615.00	\$6,614
			<b>TOTAL</b>		<b>\$ 23,615</b>	<b>\$23,612</b>

Es importante señalar algunas consideraciones que fueron plasmadas en el Dictamen Consolidado, respecto al método para determinar la subvaluación, para mayor claridad respecto al monto involucrado:

En el caso específico de las erogaciones realizadas por el C. Israel de Jesús Ramos González, por concepto de renta de casa de campaña, renta de automóvil, renta de mobiliario y equipo de oficina, se aplicaron los criterios establecidos en los artículos 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.



Derivado del análisis realizado, esta autoridad llegó a la conclusión que el aspirante a candidato independiente, al **reportar precios por debajo de los costos de mercado**, por un importe de \$23,612.00 (veintitrés mil pesos seiscientos doce 00/100 M.N.), incumplió con lo dispuesto en el artículo 380, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; con relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización.

Esto es así, pues el sujeto obligado reportó gastos que, como quedó demostrado en el análisis realizado en el Dictamen Consolidado, están por debajo del costo de mercado, actualizando con ello una subvaluación que en términos de lo dispuesto por los artículos aplicables constituye **un ingreso de origen prohibido**.

De la falta descrita en el apartado correspondiente, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del aspirante a candidato independiente, contemplada en los artículos en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 429, numeral 1, 430, 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertir el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie, reportar gasto por debajo del valor de mercado, , en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, para que en un plazo de siete días presentara las aclaraciones que estimara pertinentes.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violentan el artículo 380, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; con relación al artículo 54, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización; y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método y para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis las conducta infractora, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que corresponda, atento a las particularidades que se presenten.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la falta consistente en una **subvaluación**.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

En este orden de ideas, los aspirantes a candidatos independientes tienen la obligación de conformidad con los artículos 380, numeral 1, inciso a); 446, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales así como el artículo 27 y 28 del Reglamento de Fiscalización de reportar gastos con un valor razonable, situación que en los hechos no acontece, toda vez que el sujeto obligado reportar gastos por encima del valor de mercado, en específico por concepto de \$23,612.00 durante el periodo de Apoyo Ciudadano en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

**d)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
4	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$14,042.54"</i>	\$14,042.54

No.	Conclusión	Monto involucrado
6	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$116.00”</i>	\$116.00

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real, en este orden de ideas, dichas conductas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado diversas conductas que violentan el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de la sanción en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el análisis temático de las irregularidades, al omitir reportar operaciones en tiempo real durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora de los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 5.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
5	<i>"El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de propaganda por un monto de \$20,880.00"</i>	\$20,880.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de reportar egresos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado la conducta que violenta los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente en incumplir con su obligación de reportar egresos durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario

2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando lo establecido en los artículos 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 127 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

#### **f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

##### **Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3,4, 5 y 6.**

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con a los bienes jurídicos tutelados de certeza y transparencia en la rendición cuentas, adecuado control en la rendición de cuentas, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, principio de legalidad. certeza, transparencia y equidad en el uso de los recursos, principio de legalidad, certeza en la rendición cuentas, certeza y transparencia en la rendición de cuentas de los recursos. por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.

Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha sanción es la **Amonestación Pública**.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL"**, esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

*"Registro No. 192796*

*Localización: Novena Época*

*Instancia: Segunda Sala*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999*

*Página: 219*

*Tesis: 2a./J. 127/99*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** *Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a*

*considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.*

*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>3</sup> pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro **"MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA"**, la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

---

<sup>3</sup> Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.



**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."*

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
a)	1	Informa extemporáneo presentado derivado de la garantía de audiencia
b)	2	Reporte extemporáneo de evento
c)	3	Subvaluación
d)	4	Tiempo real
e)	5	Egreso no reportado
d)	6	Tiempo real

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. Israel de Jesús Ramos González** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

### 37.2 ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. Enrique Cárdenas Sánchez** son las siguientes:

a) 6 Faltas de carácter formal: **conclusiones 2, 3, 4, 6, 7 y 8.**

b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 5.**

c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 1.**

d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 9.**

e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 10.**

f) Imposición de la sanción.

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal.

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
2	<i>"El sujeto obligado omitió presentar el contrato de donación o comodato."</i>	107 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
3	<i>"El sujeto obligado omitió presentar el contrato de prestación de servicios y el aviso de contratación."</i>	131, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
4	<i>"El sujeto obligado omitió presentar el informe de gastos pormenorizados de su propaganda en páginas de internet, por un importe de \$5,012.24."</i>	246 inciso e) del Reglamento de Fiscalización.
6	<i>"El sujeto obligado omitió presentar la representación en formato PDF del comprobante digital."</i>	39, numeral 6, segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización.
7	<i>"El sujeto obligado, omitió presentar las muestras correspondientes."</i>	39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización.
8	<i>"El sujeto obligado, omitió presentar el contrato de prestación de servicios."</i>	131 del Reglamento de Fiscalización.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.<sup>4</sup>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción

<sup>4</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron subsanadas.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en cada caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de las faltas.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de las faltas.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la

calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

## CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

### a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.<sup>5</sup>

Descripción de la irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
Conclusión 2. “El sujeto obligado omitió presentar el contrato de donación o comodato.”	Omisión	107 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 3. “El sujeto obligado omitió presentar el contrato de prestación de servicios y el aviso de contratación.”	Omisión	131, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

<sup>5</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

Descripción de la irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
Conclusión 4. <i>“El sujeto obligado omitió presentar el informe de gastos pormenorizados de su propaganda en páginas de internet por un importe de \$5,012.24.”</i>	Omisión	246 inciso e) del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 6. <i>“El sujeto obligado omitió presentar la representación en formato PDF del comprobante digital.”</i>	Omisión	39, numeral 6, segundo párrafo del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 7. <i>“El sujeto obligado, omitió presentar las muestras correspondientes.”</i>	Omisión	39, numeral 6 del Reglamento de Fiscalización.
Conclusión 8. <i>“El sujeto obligado, omitió presentar el contrato de prestación de servicios.”</i>	Omisión	131 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede, identificadas con el número **(1)**, contraviniendo, en cada caso, la normatividad señalada en la columna **(3)**.

Dichas irregularidades se llevaron a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados.

En las conclusiones 2, 3, 4, 6, 7 y 8 el aspirante en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 39, numeral 6, 107 numeral 1, 131 y 246 inciso e) del Reglamento de Fiscalización los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertasen.

De la valoración de los artículos señalados se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la autoridad fiscalizadora tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los aspirantes a candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la



autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el sujeto infractor, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen privado del sujeto obligado en cuestión.

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del Sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de una diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los aspirantes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los aspirantes a candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto; y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,

como se expuso en el inciso d), se trata de faltas que solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **LEVE**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
5	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable 20 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$ 170,824.39."</i>	\$170,824.39

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de

Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos mencionados.

Así tenemos que en términos del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención que persigue el precepto normativo en comento.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral, se advierte la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.

Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la “*gravedad de la infracción*”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de gobernador del estado de Puebla.

Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

<b>Total de operaciones registradas en el periodo a revisión (A)</b>	<b>Umbral de cumplimiento <math>B=(A*80/100)</math></b>	<b>Nombre del aspirante</b>	<b>Operaciones registradas por el aspirante (C)</b>	<b>Porcentaje del aspirante respecto al total <math>D=(C*100/B)</math></b>
106	84.8	ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ	73	86.08%
		<b>TOTAL</b>	<b>73<sup>6</sup></b>	<b>86.08%</b>

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad fiscalizadora 20<sup>7</sup> operaciones, dentro del periodo normal excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.

No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas en la ley.

Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro, precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras

<sup>6</sup> La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada, radica en que el número de los eventos sumados por los aspirantes que se mencionan en el cuadro es la más cercana al 80% que se pide como cumplimiento.

<sup>7</sup> El aspirante registro 73 operaciones en el SIF, sin embargo, únicamente fueron objeto de observación 20 de ellos.

que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente radica en sus características personales, su ideología individual.

De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado.

En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una **Amonestación Pública**.

Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó la operación el sujeto obligado, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL**", esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es

innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada *a priori* por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

"Registro No. 192796

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

Página: 219

Tesis: 2a./J. 127/99

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.



*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>8</sup>, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA**", la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** *No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la*

---

<sup>8</sup>Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

*infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."*

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. Enrique Cárdenas Sánchez** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión
1	<i>“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 55 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración.”</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso en estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente en reportar dentro del módulo de agenda de actos públicos del Sistema Integral de Fiscalización, 55 eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea, la cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018, vulnerando lo establecido en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de la infracción por parte del aspirante, no pasa inadvertido al Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias **la intención** y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó **conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación** que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido, incurrió en una infracción, al acreditarse la afectación al bien principio del adecuado control en la rendición de cuentas, el cual se traduce en la especie, en la inobservancia de reportar de manera oportuna los eventos para lograr la obtención del apoyo ciudadano que le permitan contender de forma independiente por un cargo de elección popular.

En cuanto a la sanción, la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse **de la gravedad o levedad** del hecho infractor.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la “*gravedad de la infracción*”, es decir, **si el sujeto obligado realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización**; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Visto lo anterior, se desprende que el sujeto obligado referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de legalidad en la aplicación y destino de los recursos, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

No pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga al sujeto obligado deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide garantizar de forma idónea el manejo de los recursos de manera oportuna durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados en tiempo y forma, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el umbral del 80% de la totalidad de eventos registrados en el periodo en revisión al cargo de Gobernador del estado de Puebla.

Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de los eventos registrados por todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

Total de eventos registrados en el periodo a revisión (A)	Umbral de cumplimiento $B=(A*80/100)$	Nombre del aspirante	Eventos registrados por el aspirante (C)	Porcentaje del aspirante respecto al total $D=(C*100/B)$
87	69.6	ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ	86	123.56%
		<b>TOTAL</b>	<b>86<sup>9</sup></b>	<b>123.56%</b>

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten acreditar que, si bien es cierto que el sujeto obligado registró ante la autoridad fiscalizadora 55<sup>10</sup> eventos **con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea**, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.

No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia entre ambos tipos de sujetos obligados radica en que los aspirantes a candidatos independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas en la ley.

Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro, precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente radica en sus características personales, su ideología individual.

<sup>9</sup> La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada, radica en que el número de los eventos sumados por los aspirantes que se mencionan en el cuadro es la más cercana al 80% que se pide como cumplimiento.

<sup>10</sup> El aspirante registró 86 eventos en el SIF, sin embargo, únicamente fueron objeto de observación 55 de ellos.

De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado.

En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una **Amonestación Pública**.

Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general respecto a la obligación de informar con la antelación debida los eventos del sujeto obligado, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al sujeto obligado no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL**", esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada *a priori* por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

"Registro No. 192796

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

Página: 219

Tesis: 2a./J. 127/99

Jurisprudencia Materia: Administrativa

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.

Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente:



*José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.  
Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>11</sup>, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA**", la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia: Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** *No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la*

---

<sup>11</sup> Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

*imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."*

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. Enrique Cárdenas Sánchez** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
9	<i>"El sujeto obligado contrató con el proveedor/prestador de servicios JAWHAR SA DE CV, el cual no está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de \$31,900.00"</i>	\$31,900.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie el haber contratado con un proveedor/prestador de servicios Jawhar SA de CV, el cual no está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días, para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

#### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una **acción** consistente en contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, durante el periodo de obtención de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando lo establecido en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado contrató bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **acción** consistente en contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, atentando a lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.<sup>12</sup>

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

El sujeto obligado violentó la normatividad electoral al contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. De ahí que el aspirante a candidato independiente contravino lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refiere la irregularidad observada

Conclusión	Monto involucrado
<i>“El sujeto obligado contrató con el proveedor/prestador de servicios JAWHAR SA DE CV, el cual no está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de \$ 31,900.00”</i>	\$31,900.00

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores

---

<sup>12</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, se vulnera sustancialmente el principio de legalidad que debe regir en todo Proceso Electoral.

En este caso, la falta sustancial trae consigo la imposibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito viola el valor antes establecido y con ello, afecta a persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto.

En la conclusión que se analiza el sujeto obligado en comentario vulneró lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del RF<sup>13</sup>.

Del artículo señalado se desprende que los partidos políticos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, tienen la obligación de celebrar operaciones únicamente con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores.

El Registro Nacional de Proveedores es el instrumento de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización verificar a las personas físicas y morales que celebren contratos de bienes y servicios con los partidos políticos, aspirantes a candidatos independientes, candidatos, coaliciones y candidatos independientes.

En ese sentido, los proveedores que deseen brindar bienes o servicios a los partidos políticos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes deben inscribirse en el padrón del Registro Nacional de Proveedores (RNP) del Instituto Nacional Electoral.

---

<sup>13</sup> "Artículo 82.

(...)

2. Los partidos, coaliciones, precandidatos, candidatos, aspirantes y candidatos independientes, solo podrán celebrar operaciones con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, numeral 2 del presente Reglamento."

De esa forma para que los proveedores estén en posibilidad de realizar el registro es necesario que accedan al portal del Instituto Nacional Electoral, en el apartado del Registro Nacional de Proveedores, para lo cual será necesario que cuente con la firma electrónica (Fiel) que el Servicio de Administración Tributaria proporciona.

Con lo anterior se busca tener un medio de control previo a la realización de operaciones, que permita verificar los datos proporcionados por los proveedores y así estar en aptitud de comparar esta información con la obtenida por el Servicio de Administración Tributaria, con la finalidad de garantizar que los sujetos obligados realicen operaciones con personas físicas y morales que se encuentren al corriente en sus obligaciones fiscales, garantizando la legalidad de las operaciones realizadas durante un ejercicio determinado, en el caso, durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, por ello la necesidad de contar con un esquema de seguimiento de gastos y registro en línea con padrón de proveedores.

Todo ello en concordancia con la Reforma en Materia Político Electoral de 2014, la cual contempló entre los nuevos tipos penales de la materia, cuyo sujeto activo es son los proveedores que proporcionen bienes o servicios durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano sin formar parte del padrón de proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo, lo que se encuentra contemplado en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, artículo 7, fracción XXI.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia del artículo del Reglamento de Fiscalización referido, vulnera la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante el periodo de obtención del apoyo ciudadano, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los aspirantes de contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores es garantizar que su actividad se desempeñe en apego a los cauces legales.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto obligado se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en el artículo 82, numeral 2 del RF, siendo esta norma de gran trascendencia para garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado y el adecuado destino de los recursos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real al bien jurídico tutelado, arriba señalado, consistente en contratar bienes y servicios con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, cuyo objeto infractor concurre directamente en la imposibilidad de garantizar la legalidad de las operaciones realizadas por el sujeto obligado durante un ejercicio determinado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real del interés jurídico protegido por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la legalidad, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 82, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización.



**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

**e)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 380, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con relación al artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 10.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
10	<i>"El sujeto obligado omitió realizar verazmente el registro contable de 8 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$212,999.40"</i>	\$212,999.40

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie las inconsistencias al registrar la temporalidad en la que se realizaron las operaciones en tiempo real, en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 380, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con relación al artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los sujetos obligados, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos mencionados.

Así tenemos que en términos del artículo 380, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se desprende que los aspirantes tienen la obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Por lo que hace al artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, los sujetos obligados tienen la obligación de realizar los registros contables en tiempo real; obligación acorde al nuevo modelo de fiscalización materia de la reforma político electoral señalada previamente, de modo que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata. En consecuencia, la omisión del registro contable en los términos aludidos, retrasa el cumplimiento de la intención que persigue el precepto normativo en comento.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, forman parte de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre en el marco temporal establecido para tales efectos, el movimiento de sus recursos, vulnera de manera directa los principios antes referidos, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

En este orden de ideas se tiene que, tras analizar los registros contables realizados por los sujetos obligados en la plataforma desarrollada por esta autoridad electoral, se advierte la inconsistencia en las fechas señaladas, aunado a la extemporaneidad en una parte de ellos, y cuya irregularidad consecuente, debe ser valorada a la luz de las circunstancias fácticas expuestas.

Así, se tiene que la Sala Superior estimó mediante la sentencia emitida en el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-454/2012, que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la “*gravedad de la infracción*”, es decir, si el aspirante realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; esto es, determinar si la gravedad de la falta es de tal magnitud para que sea sujeta a imposición de las sanciones contempladas en el artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo las consideraciones fácticas y normativas expuestas, en el caso en concreto existen elementos que permitan a la autoridad concluir un ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado, considerando que el aspirante se encuentra en el umbral del 80% de la totalidad de eventos en el periodo en revisión al cargo de Gobernador del estado de Puebla.

Lo anterior es tangible al analizar la totalidad de las operaciones reportadas por todos los sujetos obligados durante el periodo revisado por la autoridad fiscalizadora, tal y como se muestra en el cuadro siguiente:

Total de operaciones registrados en el periodo a revisión (A)	Umbral de cumplimiento $B=(A*80/100)$	Nombre del aspirante	Operaciones registrados por el aspirante (C)	Porcentaje del aspirante respecto al total $D=(C*100/B)$
106	84.8	ENRIQUE CÁRDENAS SÁNCHEZ	73	86.08%
		<b>TOTAL</b>	<b>73<sup>14</sup></b>	<b>86.08%</b>

En consecuencia, esta autoridad advierte elementos idóneos que permiten acreditar que, si bien es cierto, el sujeto obligado registró ante la autoridad fiscalizadora 8<sup>15</sup> operaciones con inconsistencias en la temporalidad del reporte, mismas que excedían los tres días posteriores en que se realizó la operación, también es cierto que durante todo el periodo en revisión tuvo un ánimo de cumplimiento respecto de sus obligaciones en materia de fiscalización y, por ende de satisfacer el principio de rendición de cuentas.

No se omite destacar que los aspirantes a candidatos independientes, son sujetos obligados que no pueden ser equiparados a los precandidatos postulados por un partido político, ya que si bien, persiguen esencialmente la finalidad de contender en el procedimiento electoral; no obstante, la principal diferencia específica entre ambos tipos de sujetos obligados, es justamente que los aspirantes a candidatos independientes agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas en la ley.

Las diferencias específicas justifican el trato diferenciado para su registro, precisamente porque se refieren al elemento de la representatividad: las organizaciones aspirantes a ser constituidas como partidos políticos no se presentan ante los electores con precandidatos para recabar las firmas necesarias para contar con respaldo ciudadano, sino que tienen otros mecanismos para demostrar su representatividad; en cambio, la presencia personal del aspirante a

<sup>14</sup> La diferencia entre el umbral del 80% y la cifra arrojada, radica en que el número de los eventos sumados por los aspirantes que se mencionan en el cuadro es la más cercana al 80% que se pide como cumplimiento.

<sup>15</sup> El aspirante registro 106 operaciones en el SIF, sin embargo, únicamente fueron objeto de observación 8 de ellos.

candidato independiente es esencial para buscar el respaldo ciudadano desde que pretende su registro. Esto se debe a que el fundamento de la representatividad que pueda llegar a obtener un partido político, es su ideología partidista; mientras que el fundamento de la representatividad del aspirante candidato independiente radica en sus características personales, su ideología individual.

De tal manera, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones previstas en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracciones II, III, IV y V de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, no resultan aplicables porque la gravedad de la falta se encuentra atenuada ante el evidente ánimo de cumplimiento sistemático del sujeto obligado.

En consecuencia, la sanción a imponer corresponde a una **Amonestación Pública**.

Se enfatiza que los criterios adoptados por este Instituto, respecto a la infracción objeto de análisis y las consideraciones aquí vertidas, no fijan un criterio general respecto a la obligación de reportar dentro de los tres días siguientes a que realizó la operación de los sujetos obligados, ya que será motivo de estudio cada caso en concreto.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia "**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA**

**VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL**", esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada *a priori* por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

"Registro No. 192796

Localización: Novena Época

Instancia: Segunda Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999

Página: 219

Tesis: 2a./J. 127/99

Jurisprudencia Materia(s): Administrativa

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a

*cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.*

*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la amonestación pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>16</sup>, pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en amonestación pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro "**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA**", la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** *No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la*

---

<sup>16</sup>Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

*imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.*

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla."*

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. Enrique Cárdenas Sánchez** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción



I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Electoral del Poder Judicial de la Federación.

#### **f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

**Por lo que hace a las conclusiones 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

#### **Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7 y 8.**

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.

- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.
- Que al tratarse de diversas faltas existió pluralidad en la conducta por el sujeto obligado.

### **Conclusión 9**

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar los ingresos obtenidos durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en contratar con los proveedores/prestadores de servicios Jawhar SA de CV, el cual no está inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, por un monto total de **\$31,900.00** (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 M.N.), durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad y el plazo de revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$31,900.00** (treinta y un mil novecientos pesos 00/100 M.N.).
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>17</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, se considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días Unidades de Medida y Actualización, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los

---

<sup>17</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; **II. Con multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización**, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	2	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
a)	3	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
a)	4	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
a)	6	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
a)	7	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
a)	8	Forma	N/A	10 UMA por conclusión	\$754.90
d)	9	Contratar bienes y servicios con proveedores no inscritos en el RNP	\$31,900.00	2%	\$638.00
<b>Total</b>					<b>\$5,167.40</b>

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, del análisis al informe de capacidad económica que se encuentra obligado a presentar el aspirante<sup>18</sup>, se advirtió lo siguiente:

Ingresos (A)	Capacidad Económica (25% de A)
\$2,913,744.00	\$728,436.00

Toda vez que dicha información fue proporcionada directamente por el aspirante de conformidad con el artículo 16, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, constituye una documental privada que únicamente hará prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del veinticinco por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica.

---

<sup>18</sup> Artículos 223, numeral 5, inciso k) y 223 Bis del Reglamento de Fiscalización.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Enrique Cárdenas Sánchez** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **68** (sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$5,133.32** (cinco mil ciento treinta y tres pesos 32/100 M.N.).

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

### **37.3 JOSÉ JORGE TRINIDAD MORALES ALDUCÍN**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. José Jorge Trinidad Morales Alducín** son las siguientes:

- a) 2** Faltas de carácter sustancial o de fondo: **conclusiones 1 y 7.**
- b) 5** Faltas de carácter formal: **Conclusiones 2, 3, 5, 8 y 9.**
- c) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 4.**
- d) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 6.**
- e)** Imposición de la sanción.

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias infractoras de los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión
1	<i>“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Gobernador en el estado de Puebla, en ejercicio a la garantía de audiencia.”</i>
7	<i>“El sujeto obligado presentó fuera de tiempo el informe para el periodo de obtención de apoyo ciudadano al cargo de Gobernador en el estado de Puebla, en ejercicio a la garantía de audiencia.”</i>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie presentación extemporánea del informe de obtención de Apoyo Ciudadano; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado dos conductas que violentan los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que las faltas corresponden a la entrega extemporánea del informe de ingresos y egresos durante el primer y segundo periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando lo establecido en los artículos 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) del presente considerando.

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal.

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
2	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta bancario y/o detalle de movimientos de la cuenta bancaria del mes de febrero 2018.”</i>	<i>251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.</i>
3	<i>“El sujeto obligado omitió presentar las conciliaciones bancarias.”</i>	<i>251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.</i>
5	<i>“El sujeto obligado omitió presentar los recibos foliados de REPAP.”</i>	<i>134, numeral 4, del Reglamento de Fiscalización.</i>
8	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el estado de cuenta correspondiente al mes de marzo correspondiente a la cuenta bancaria reportada.”</i>	<i>251, numeral 2, inciso c) del Reglamento de Fiscalización.</i>
9	<i>“El sujeto obligado omitió presentar la conciliación bancaria correspondiente al mes de marzo de la cuenta bancaria reportada.”</i>	<i>251 numeral 2, inciso c), del Reglamento de Fiscalización.</i>

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de



los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.<sup>19</sup>

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de obligaciones por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento los supuestos que se actualizan con su conducta; en este orden de ideas, las conductas arriba descritas se hicieron del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, las observaciones realizadas no fueron subsanadas.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobaron diversas faltas de forma, mismas que han sido señaladas en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió las diversas faltas de forma que aquí han sido descritas durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral, faltas que no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representan un indebido manejo de recursos.

---

<sup>19</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **e)** el presente considerando.

**c)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
4	<i>"El sujeto obligado registró aportaciones de simpatizantes en especie, por concepto de un bien inmueble para casa de obtención de apoyo ciudadano, no obstante, omitió presentar la documentación comprobatoria del ingreso, por un importe de \$2.500.00."</i>	\$2,500.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de presentar la documentación soporte que compruebe los ingresos reportados y obtenidos; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

#### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que la falta corresponde a una **omisión** consistente en no presentar la documentación contable y legal que soporte los ingresos, la cual tuvo verificativo durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando lo establecido en el artículo 96, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **e)** del presente considerando.

**d)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

No.	Conclusión	Monto involucrado
6	<i>“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$12,464.00 (doce mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.).”</i>	\$12,464.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **e)** el presente considerando.

#### **e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

##### **Por lo que hace a las conclusiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.**

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte del aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que el aspirante referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de Adecuado control en la rendición de cuentas, certeza y transparencia en la rendición cuentas y principio de legalidad, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Respecto de la capacidad económica del aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.

Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha sanción es la **Amonestación Pública**.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse al aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL"**, esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

*"Registro No. 192796*

*Localización: Novena Época*

*Instancia: Segunda Sala*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999*

*Página: 219*

*Tesis: 2a./J. 127/99*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Si bien es cierto que de

*conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.*

*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>20</sup> pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

---

<sup>20</sup> Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro **"MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA"**, la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**



*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.”*

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
a)	1	Informe Extemporáneo presentando derivado de la garantía de audiencia
a)	7	Informe Extemporáneo presentando derivado de la garantía de audiencia
b)	2	Forma
b)	3	Forma
b)	5	Forma
b)	8	Forma
b)	9	Forma

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
c)	4	Ingreso no comprobado
d)	6	Tiempo Real

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. José Jorge Trinidad Morales Alducín** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## RESUELVE

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 37.1 de la presente Resolución, se impone al **C. Israel de Jesús Ramos González, en su carácter de aspirante a gobernador**, la sanción siguiente:

- a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 2.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 3**
- d) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **Conclusiones 4 y 6**
- e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 5**

Una **amonestación pública**.

**SEGUNDO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 37.2 de la presente Resolución, se impone al **C. Enrique Cárdenas Sánchez, en su carácter de candidato a gobernador**, las sanciones siguientes:

- a) 6 Faltas de carácter formal: **Conclusiones 2, 3, 4, 6, 7 y 8.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 9.**

Una **multa** equivalente a **68** (sesenta y ocho) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$5,133.32** (cinco mil ciento treinta y tres pesos 32/100 M.N.).

- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 5.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 1.**
- e) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **Conclusión 10.**

Una **amonestación pública.**

**TERCERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **37.3** de la presente Resolución, se impone al **C. José Jorge Trinidad Morales Alducín, en su carácter de candidato a gobernador**, las sanciones siguientes:

- a) 2 Faltas de carácter sustancial o de fondo: **conclusiones 1 y 7.**
- b) 5 Faltas de carácter formal: **Conclusiones 2, 3, 5, 8 y 9.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 4.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 6.**

Una **amonestación pública.**

**CUARTO.** En términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las multas determinadas se harán efectivas una vez que haya sido legalmente notificada la Resolución de mérito; los recursos obtenidos por las aplicaciones de las mismas serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, en los términos de las disposiciones aplicables.

**QUINTO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto Electoral del estado de Puebla.

**SEXTO.** Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos a los interesados, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

**SÉPTIMO.** Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado estado.

**OCTAVO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**NOVENO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución.

**DÉCIMO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**INE/CG400/2018** \_\_\_\_\_  
**Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de la aspirante al cargo de Ayuntamiento correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.** \_\_\_\_\_  
**(Texto de la Resolución aprobada INE/CG401/2018) Pto. 6.5** \_\_\_\_\_

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LA C. ANGELES NAVARRO RUEDA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EN EL ESTADO DE PUEBLA**

**VISTO.** El Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de los Ingresos y Gastos para la obtención de apoyo ciudadano de la c. Ángeles Navarro Rueda al cargo de Presidente Municipal de Puebla correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Puebla.

**ANTECEDENTES**

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos; asimismo, es autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las

finanzas de los partidos políticos relativas a los Procesos Electorales, Federal y Local, así como de las campañas de los candidatos.

- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. En sesión ordinaria, celebrada el veintidós de diciembre del dos mil quince, fueron aprobados mediante Acuerdo CG/AC-035/15 del Consejo General diversos ajustes al Reglamento de Precampañas Electorales del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
- V. El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, en la segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización, se aprobó el Acuerdo CF/005/2017, a través del cual se expiden los Lineamientos para la Operación y Funcionalidad del Sistema Integral de Fiscalización que deberán observar los partidos políticos, coaliciones, aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatos independientes y candidatos de representación proporcional.
- VI. El veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto aprobó la Resolución INE/CG386/2017, por el que se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los Procesos Electorales Locales concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2018.
- VII. El cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG390/2017 por el que se aprueban el plan y calendario integral del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

- VIII.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017, el cual contiene la integración de las Comisiones Permanentes y Temporales del Consejo General de este Instituto, y por el cual se determinó que la Comisión de Fiscalización sería integrada por la Consejeras Electorales Pamela San Martín Ríos y Valles y Adriana Favela Herrera y los Consejeros Electorales Marco Antonio Baños Martínez y Benito Nacif Hernández, y presidida por el Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón.
- IX.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

Inconformes con el acuerdo referido, el doce y quince de septiembre de dos mil diecisiete, los partidos políticos de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Movimiento Ciudadano, Morena, Verde Ecologista de México y Acción Nacional, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG409/2017, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-623/2017, SUP-RAP-626/2017, SUP-RAP-628/2017, SUP-RAP-629/2017, SUP-RAP-639/2017 y SUP-RAP-640/2017, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, determinando la modificación del acuerdo impugnado para los efectos precisados en la ejecutoria.

El cinco de enero de dos mil dieciocho, en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por votación unánime fue aprobado el Acuerdo INE/CG04/2018, por el que se modifica el diverso INE/CG409/2017, mediante el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-623/2017 y acumulados.

**X.** El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017 por el cual se aprueba el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018.

**XI.** El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG475/2017, por el que se aprueba el Ajuste a los plazos para la Fiscalización de Precampaña y Obtención de Apoyo Ciudadano, correspondientes a los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017, por el que se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano a los cargos federales, correspondientes al Proceso Electoral Federal 2017-2018, y se aprobó el ajuste a los plazos para la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano y precampaña en las entidades federativas, correspondientes a los Procesos Electorales Locales 2017-2018 concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018

**XII.** El diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/033/2017, se aprobaron los ajustes a los plazos establecidos en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Puebla y el Calendario para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

**XIII.** El veinte de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG476/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.



- XIV.** En sesión ordinaria, celebrada el tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-034/17 por el cual se declaró el inicio del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, convocando a elecciones ordinarias para renovar los cargos de la Gubernatura del Estado, diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos.
- XV.** En sesión ordinaria, celebrada el tres de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, mediante Acuerdo CG/AC-035/17 aprobó los topes de gasto de las precampañas electorales para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- XVI.** El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se celebró la quinta sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Fiscalización, en la cual se aprobó el Acuerdo CF/012/2017, por el cual se determinan los alcances de la revisión y se establecen los Lineamientos para la realización de las visitas de verificación, monitoreo de anuncios espectaculares y demás propaganda colocada en la vía pública, diarios, revistas y otros medios impresos, internet y redes sociales derivado de la revisión de los Informes de Precampaña, Apoyo Ciudadano y Campaña del Proceso Electoral Federal y Local Ordinario 2017-2018, así como los Procesos Extraordinarios que se pudieran derivar de dicho proceso.
- XVII.** En sesión ordinaria celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo CF/012/2017, la Comisión de Fiscalización aprobó el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las precampañas y de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Federales y Locales 2017-2018.
- XVIII.** El primero de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, aprobó el Acuerdo CG/AC-041/2017 por el que se estipularon los Lineamientos para las y los aspirantes a las candidaturas independientes para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 y emite la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en postularse como candidatas y candidatos independientes para renovar los cargos de la gubernatura del estado, diputaciones al congreso local y ayuntamientos.

- XIX.** Mediante decreto de la Vigésima Tercera Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha dos de octubre de mil novecientos diecisiete, se expidió la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
- XX.** Mediante decreto de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha dos de octubre de dos mil, se expidió el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.
- XXI.** Mediante decreto de la Quincuagésima Novena Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y soberano de Puebla, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de fecha treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.
- XXII.** El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG/597/2017, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran como precampaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.
- XXIII.** El dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, en sesión ordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG615/2017, por medio del cual se emiten los Lineamientos para dar cumplimiento a las especificaciones del identificados único que deben contener los anuncios espectaculares de conformidad con el artículo 207, numeral 1, inciso d) del Reglamento de Fiscalización.
- XXIV.** El seis de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, se pronunció respecto de la manifestación de intención presentada por la C. Ángeles Navarro Rueda, de contender al cargo de Presidente Municipal de Puebla, otorgándole la calidad de aspirante a candidata independiente por el cargo a Miembro del Ayuntamiento de Puebla.

- XXV.** El veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/001/2018 por el que se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización el procedimiento a seguir ante el incumplimiento de presentación del Informe de Ingresos y Gastos de los sujetos obligados que aspiren a un cargo de elección popular a nivel Federal o Local.
- XXVI.** El veintisiete de enero de dos mil dieciocho, la C. Ángeles Navarro Rueda, solicitó por escrito al Instituto Electoral del Estado de Puebla, una ampliación del plazo otorgado para recabar el apoyo ciudadano por treinta días más, así como la disminución del porcentaje solicitado para ser registrada como candidata independiente.
- XXVII.** El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Instituto Electoral del Estado, mediante Acuerdo CG/AC-011/2018, consideró negar la petición hecha por la promovente.
- XXVIII.** El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG85/2018, por el que se determinó no enviar el oficio de errores y omisiones a las personas que omitieron presentar su informe de ingresos y gastos en materia de fiscalización y que aspiran a un cargo de elección popular.

Inconformes con el acuerdo referido, el dos y cuatro de febrero de dos mil dieciocho los partidos políticos del Trabajo y Morena, presentaron sendos recursos de apelación para controvertir el Acuerdo INE/CG85/2018, mismos que quedaron radicados en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con los expedientes identificados con las claves SUP-RAP-21/2018, SUP-RAP-23/2018, respectivamente, para posteriormente ser turnados a la ponencia del Magistrado José Luis Vargas Valdez, para los efectos legales correspondientes.

Desahogado los trámites correspondientes, la Sala Superior resolvió los recursos referidos, en sesión pública del catorce de febrero de dos mil dieciocho, determinando confirmar el acuerdo impugnado.

- XXIX.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión ordinaria del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG91/2018 a través del cual se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales

Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de Puebla.

- XXX.** El cuatro de febrero de dos mil dieciocho, promovió Recurso de Apelación ante el Tribunal Electoral Local identificado como TEEP-A-016/2018, que en sesión de doce de febrero de dos mil dieciocho, resolvió confirmando el acuerdo CG/AC-011/18 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
- XXXI.** El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, la C. Ángeles Navarro Rueda, promovió Juicio para la Protección de los Derecho Político Electorales del Ciudadano, que fue remitida a la Sala Regional correspondiente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, por acuerdo del dieciocho de febrero, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley Héctor Romero Bolaños ordenó integrar el expediente SCM-JDC-75/2018, y turnarlo a la Ponencia de la Magistrada María Guadalupe Silva Rojas, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley de Medios.

- XXXII.** Con fecha ocho de marzo de dos mil dieciocho, la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción con sede en la Ciudad de México, resolvió el juicio ciudadano identificado con la clave SCM-JDC-75/2018, en el sentido de revocar la sentencia del Tribunal Electoral y acordó la ampliación por 10 días más al periodo para la obtención de firmas de apoyo ciudadano, así como la reducción al 1% del porcentaje requerido de firmas de la lista nominal como medida racional para acreditar el mencionado apoyo ciudadano
- XXXIII.** El diez de marzo de dos mil dieciocho, en Sesión Especial del Instituto Electoral del Estado de Puebla, emitió el Acuerdo CG/AC-031/2018 por el que, en cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó la ampliación por 10 días al periodo para la obtención de firmas de apoyo ciudadano de la C. Ángeles Navarro Rueda, aspirante a candidata independiente al cargo de Ayuntamiento del estado de Puebla, modificándose del once al veinte de marzo de dos mil dieciocho, así como la reducción al 1% del porcentaje requerido de firmas de la lista nominal y determinó la dispersión territorial correspondiente.

**XXXIV.** El Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de fecha catorce marzo de dos mil dieciocho, aprobó el Acuerdo INE/CG144/2018 por el que se modifican los plazos de fiscalización para la obtención de apoyo ciudadano de los Procesos Electorales Locales 2017-2018, concurrentes con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en la entidad federativa de México, Puebla y la Ciudad de México, conforme a lo dispuesto en el acuerdo 03 del Consejo Municipal Electoral 10 Apaxco, del acuerdo CG/AC-031/18 del Instituto Electoral del Estado de Puebla y acuerdo IECM-ACU-CG-054-2018, del Instituto Electoral de la Ciudad de México en cumplimiento a las sentencias ST/JDC/48/2018, SCM-JDC-75/2018, y SCM-JDC-78/2018, emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**XXXV.** En la décimo primera sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de Dictamen Consolidado la revisión de informes de los ingresos y gastos de los aspirantes a candidatos independientes correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 que nos ocupa, y su respectiva Resolución, por unanimidad, de los Consejeros Electorales integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez, el Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de dicha Comisión el Doctor Ciro Murayama Rendón, lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales

## **CONSIDERANDO**

- 1** El artículo 35, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en relación con el artículo 7, párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), establece que es derecho del ciudadano “Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral

corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación.

- 2 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
- 3 Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.
- 4 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional electoral, el cual de conformidad con el Apartado A, primer párrafo de la base en cita, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo principios rectores en el ejercicio de su función la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- 5 Que de conformidad con el artículo 41, Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontrarán a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el

Consejo General del Instituto Nacional Electoral no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.

- 6 Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los gobernadores, miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
- 7 Que el Artículo Transitorio SEGUNDO, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que, para el Proceso Electoral Federal y Local ordinario, la Jornada Electoral deberá celebrarse el primer domingo de julio del año que corresponda.
- 8 Que el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
- 9 Que de conformidad con el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
- 10 Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetará a la convocatoria respectiva.

- 11** Que el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los aspirantes a candidatos independientes estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
- 12** Que el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.
- 13** Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes emiten respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
- 14** Que de conformidad con el artículo 377 de la Ley en cita, el Consejo General a propuesta de la Unidad Técnica de Fiscalización determinará los requisitos que los aspirantes deben cumplir al presentar su informe de ingresos y egresos de actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.
- 15** Que de conformidad con los artículos 378 y 380, numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los aspirantes a cargos de elección popular deberán presentar informes de ingresos y gastos en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios.

Aspirante	Cargo	Entidad	Municipio	Tope de gastos del periodo para la obtención de apoyo ciudadano
Ángeles Navarro Rueda	Presidente Municipal	Puebla	Puebla	\$346,796.67



- 16** Que de conformidad con el artículo 425 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización, tendrá a su cargo la revisión de los informes que los aspirantes presenten sobre el origen y destino de los recursos y de actos de apoyo ciudadano, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera.
- 17** Que de conformidad con el artículo 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establecen las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los aspirantes.
- 18** Que la aspirante a candidata independiente está obligada a presentar los Informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano. Dicho informe deberá dar cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos.
- 19** Que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les imponen a las leyes de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine la imposición de las sanciones correspondientes, de conformidad con la Ley de Partidos, Ley General de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.
- 20** Que la fiscalización del periodo de obtención de apoyo ciudadano para la presentación y revisión de informes, comprende las etapas siguientes:
- a. Periodo para la obtención de apoyo ciudadano
  - b. Fin de la etapa de apoyo ciudadano
  - c. Presentación del Informe
  - d. Notificación de oficio de errores y omisiones
  - e. Respuesta al oficio de errores y omisiones
  - f. Dictamen y Resolución a cargo de la UTF
  - g. Aprobación de la Comisión de Fiscalización
  - h. Presentación al Consejo General

i. Aprobación del Consejo General

- 21** Que de Conformidad con el Acuerdo CG/AC-041/17 emitido por el Instituto Electoral del Estado de Puebla la obtención de apoyo ciudadano deberá realizarse durante el periodo comprendido entre el ocho de enero al seis de febrero del año dos mil dieciocho, sin embargo, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, mediante Resolución al expediente SCM-JDC-75/2018, la Sala Superior del Tribunal Electoral aprobó la ampliación de los plazos establecidos para apoyo ciudadano, el cual será por un periodo de diez días.
- 22** Que inconforme con el mencionado periodo para la obtención de firmas así como del porcentaje requerido para el registro del aspirante a candidato independiente, la C. Ángeles Navarro Rueda, solicitó la ampliación del referido periodo de obtención de firmas, así como la reducción del porcentaje requerido, dado que considera que éste resulta excesivo e implica un obstáculo para la participación de la ciudadanía bajo este sistema de postulación de candidaturas, ante el Instituto Electoral del Estado de Puebla, que emitió el Acuerdo CG/AC-011/2018, en el que consideró negar la petición hecha por la promovente toda vez que no tiene la atribución de inaplicar lo dispuesto por el artículo 201 Quater, fracción I, inciso c), del Código Local, y la imposibilidad jurídica de ajustar el periodo para la obtención de firmas.
- 23** Que la C. Ángeles Navarro Rueda, presentó Recurso de Apelación ante el Tribunal Electoral Local identificado como TEEP-A-016/2018 que resolvieron confirmar el acuerdo emitido por el Instituto Electoral del Estado.
- 24** Que se presentó escrito de Juicio de Protección para los Derechos Político Electorales, suscrito por la C. Ángeles Navarro Rueda, en contra de la sentencia emitida por el Tribunal Local, misma que en sesión de fecha 8 de marzo del 2018, la Sala Regional correspondiente a la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió lo siguiente

*“(...) Con base en las consideraciones sustentadas por esta Sala Regional, se revoca:*

- *La sentencia impugnada, emitida por el por el Tribunal responsable en el expediente TEEP-A-016/2018.*
- *El Acuerdo CG/AC-011/18, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Puebla. En consecuencia y dado el sentido de la presente Resolución:*

*1. Se ordena al Consejo General que, en un plazo de tres días naturales contados a partir de la notificación de este fallo, emita un Acuerdo en el que considerando como exigencia el porcentaje establecido en la presente sentencia –uno por ciento- determine la dispersión territorial a la que deberá ajustarse la actora -en el entendido de que tal dispersión deberá ser proporcional al porcentaje de firmas que se ha establecido en el presente fallo-.*

*Asimismo, en dicho Acuerdo se deberá otorgar a la actora un periodo adicional de diez días para la recolección del apoyo de la ciudadanía.*

*2. El Consejo General del Instituto local, deberá ajustar, de ser el caso, los plazos relativos a su calendario electoral y los que sean inherentes, en relación con la revisión de los apoyos ciudadanos y 20 de la fiscalización de los recursos utilizados por la actora para la obtención de tales apoyos, a efecto de garantizar que emita la correspondiente determinación sobre la procedencia o improcedencia de su registro en la candidatura independiente.*

*3. A fin de que la autoridad electoral competente ejerza sus facultades de fiscalización, la actora estará vinculada a cumplir con sus obligaciones, de manera adicional a los informes que, en su caso, debió presentar.*

*4. Se vincula al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que, en cumplimiento a la presente ejecutoria y, de ser el caso, ajuste los plazos para la fiscalización del periodo para la obtención de apoyo ciudadano en lo correspondiente a la elección en la cual participa como aspirante la actora.*

*Asimismo, se le vincula para que tome las acciones pertinentes a fin de que la actora esté en posibilidad de utilizar la aplicación móvil en los plazos que se establezcan.*

*5. El Consejo General del Instituto local deberá informar a esta Sala Regional sobre el cumplimiento de esta sentencia, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que ello ocurra.*

(...)”

- 25** Que, en virtud de lo ordenado por la Sala Superior, se ajustan los plazos para la fiscalización a los ingresos y gastos del nuevo periodo concedido a la C. Ángeles Navarro Rueda, aspirante a candidata independiente, del 11 al 20 de marzo de 2018, sin que esta determinación constituya una afectación directa a la aspirante al cargo en mención, pues como ya se ha mencionado, es en acatamiento a la Resolución dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
- 26** Que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los aspirantes a los cargos de Diputados Locales y Ayuntamientos que se ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.
- 27** Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Por lo que hace a la determinación de la capacidad económica de la aspirante a candidata independiente para hacer frente a las sanciones impuestas, la autoridad electoral tomó en consideración la información

presentada directamente por la aspirante, de manera específica, en el informe de capacidad económica, en el cual se determinó tomar en cuenta el ingreso y un porcentaje creciente a saber:

Ingresos	Sanción
\$0 a \$100,000.00	Amonestación pública
\$101,000.00 a \$300,000.00	Hasta el 5%
\$301,000.00 a \$600,000.00	Hasta el 10%
\$601,000.00 a \$1,000,000.00	Hasta el 15%
\$1,000,001 a \$1,500,000.00	Hasta el 20%
\$1,500,001 en adelante	Hasta el 25%

En razón de lo anterior, la aspirante que presentó información fue la siguiente:

Aspirante a Candidato Independiente	Ingresos (A)	Porcentaje a considerar (B)	Capacidad económica (A*B)=C
Ángeles Navarro Rueda	\$0.00	Amonestación pública	\$0.00

- 28 Que, en ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas, ha considerado que no se puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica distinta, por lo que no se puede exigir que la legislación les atribuya un trato igual.

En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetro previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de individualizar una sanción por la falta cometida por los candidatos independientes, deber ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.

- 29** Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso a); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); y 192, numerales 1 y 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes al cargo de Gobernador correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Instituto Electoral del estado de Puebla para que, en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los aspirantes a candidatos independientes cuando así se determine.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales.

- 30** El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido, la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización<sup>1</sup> corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del*

---

<sup>1</sup> La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

*presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente Resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

En sesión pública celebrada el primero de septiembre de dos mil dieciséis, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la tesis que se cita a continuación:

***Tesis LXXVII/2016***

***MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.-*** En los artículos 26 y 41, Base V, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; segundo, tercero y quinto transitorio del Decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos respecto de los Procesos Electorales Federales y locales; que la nueva Unidad de Medida y Actualización sustituiría la medición en base al salario mínimo, así como la obligación de todas las autoridades nacionales y estatales de adecuar sus disposiciones jurídicas para ese efecto, por lo que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización. En ese sentido, el cálculo y determinación del monto de las multas que se impongan por infracciones a las disposiciones en materia electoral deben realizarse de acuerdo al valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de imponerlas.

### **Quinta Época:**

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-84/2016.—Actor: Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato.— Autoridad responsable: Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.—30 de marzo de 2016.—Unanimidad de votos.— Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-182/2016 y acumulados.— Promoventes: Partido Revolucionario Institucional y otros.— Autoridad responsable: Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.—22 de junio de 2016.— Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Secretarios: Jorge Alberto Medellín Pino, Ramiro Ignacio López Muñoz y Juan Guillermo Casillas Guevara.*

No obstante, lo anterior, al resolver el recurso de apelación con la clave alfanumérica SUP-RAP-759/2017, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó el criterio con respecto al valor de la Unidad de Medida impuesto como sanción debe ser el vigente al momento de la comisión de la infracción, y no el que tiene esa Unidad de Medida al momento de emitirse la resolución sancionadora, en razón de que, de esa manera se otorga una mayor seguridad jurídica respecto al monto de la sanción, pues se parte de un valor predeterminado precisamente por la época de comisión del ilícito, y no del que podría variar según la fecha en que se resolviera el procedimiento sancionador correspondiente, en atención a razones de diversa índole, como pudieran ser inflacionarias.

En consecuencia, determinó en la misma resolución, dejar sin efectos jurídicos la tesis relevante del rubro **MULTAS. SE DEBEN FIJAR CON BASE EN LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE AL MOMENTO DE IMPONERLA.**

En este contexto, para la imposición de las sanciones respectivas a la presente Resolución, el valor con el que se aplicarán las mismas en virtud de que la temporalidad en la cual se desarrolló **la etapa de apoyo ciudadano de la aspirante a ayuntamiento**, esto en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, será



la Unidad de Medida y Actualización (UMA) **vigente a partir del primero de febrero de dos mil dieciocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha diez de enero de esa anualidad, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).**

- 31** Que conforme a lo señalado en los artículos 9, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Fiscalización y 8, numeral 1, inciso e), segundo párrafo del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como en lo establecido en el Manual de Usuario del SIF aprobado mediante Acuerdo CF/017/2017, se estima oportuno ordenar que la notificación de la Resolución de mérito y el Dictamen Consolidado correspondiente se haga a través de la cuenta que el sujeto obligado tiene autorizada en el Sistema Integral de Fiscalización.

Por ello, en aras de salvaguardar los derechos político-electorales del sujeto obligado, así como cumplir con la expedites con que se deben sustanciar los procedimientos vinculados a procesos electorales, en consonancia con el nuevo modelo de fiscalización derivado de la reforma político electoral, que implica que el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos de los sujetos obligados se ejecuta de manera casi inmediata; por tal razón, este Órgano Colegiado considera necesario hacer del conocimiento a la sujeto obligado de manera expedita las determinaciones objeto del Dictamen y Resolución de mérito.

Esta expedites y certeza se logra con la notificación que se realice del Dictamen y Resolución por medio del Sistema Integral de Fiscalización.

- 32** Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó el informe de la sujeto obligada por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo ciudadano de la aspirante a candidata independiente al cargo Ayuntamiento, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en Puebla.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por el sujeto obligado, así como el cumplimiento de las diversas

obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a la aspirante a candidata independiente, asimismo elaboró el Dictamen Consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, el ente sujeto de fiscalización que presentó observaciones e irregularidades es el siguiente:

### 32.1 Ángeles Navarro Rueda

#### 32.1 ANGELES NAVARRO RUEDA

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen Consolidado correspondiente y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el **C. Ángeles Navarro Rueda** son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter formal: **conclusión 1.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 2.**
- c) Imposición de la sanción.

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal.

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
1	<i>“El sujeto obligado omitió presentar el contrato de donación o comodato debidamente requisitado”.</i>	107, numeral 1 del RF.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados en materia electoral, no representan un indebido manejo de recursos.<sup>2</sup>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, la conducta arriba descrita se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en el Dictamen Consolidado se comprobó una falta de forma, misma que ha sido señalada en el presente estudio, lo conducente es individualizar la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

---

<sup>2</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que el sujeto obligado cometió la falta de forma que aquí ha sido descrita durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulnerando así lo establecido en la normatividad electoral; falta que no acredita una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, únicamente su puesta en peligro, esto es, no representa un indebido manejo de recursos.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **c)** del presente considerando.

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización:

No.	Conclusión	Monto involucrado
2	<i>"El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 3 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$2,850.50 (Dos mil ochocientos cincuenta pesos 50/100 M.N.)"</i>	\$2,850.50

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte de la aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la omisión de registrar operaciones en tiempo real en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En el caso a estudio, se tiene que por cuanto hace al sujeto obligado referido en el análisis temático de la irregularidad, al omitir reportar operaciones en tiempo real durante el periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Puebla, vulneró lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **c)** del presente considerando.

### **c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

#### **Por lo que hace a las conclusiones 1 y 2.**

Una vez que ha quedado acreditada la comisión de las infracciones por parte de la aspirante, no pasa inadvertido para este Consejo General que la sanción que se le imponga deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa.

En razón de lo anterior, esta autoridad debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor, es decir, si realizó conductas tendientes al cumplimiento efectivo de la obligación que le impone la norma en materia de fiscalización; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Visto lo anterior, se desprende que la aspirante referida incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación a los bienes jurídicos tutelados de adecuado control en la rendición de cuentas y; principio de legalidad y certeza en la rendición cuentas, por consecuencia, se vulnera la legalidad como principio rector de la actividad electoral, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Respecto de la capacidad económica de la aspirante, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, de los expedientes que obran agregados a la revisión del informe de ingresos y gastos del periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano del sujeto infractor, se advierte que esta autoridad no obtuvo información del Servicio de Administración Tributaria, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Informe de Capacidad Económica y/o los últimos tres estados de las cuentas que tenga activas en el sistema financiero, que permitiera determinar que cuenta con los recursos económicos suficientes para que haga frente a la imposición de una sanción de carácter pecuniario, por lo que lo procedente es imponer la sanción mínima.

Así que la obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable.

En esta tesitura, la autoridad electoral no cuenta con evidencia suficiente que permita determinar que el sujeto infractor cuenta con recursos económicos suficientes para hacer frente a la imposición de sanciones de carácter pecuniario.

En ese orden de ideas, la autoridad debe considerar para la imposición de una sanción, que se haga efectiva, pues de lo contrario no se alcanzaría la finalidad del procedimiento administrativo, ni tampoco tendría objeto la sanción, puesto que la misma sería de imposible aplicación. De encontrarnos en este supuesto, la autoridad administrativa debe optar por aquella sanción que no sea pecuniaria a efectos de que pueda ser perfeccionada y por lo tanto aplicable, por lo que dicha sanción es la **Amonestación Pública**.

Así las cosas, al haberse determinado que la sanción que debe imponerse a la aspirante no es pecuniaria, resulta innecesario considerar el estudio relativo a que la imposición de la sanción afecte sus actividades, ya que la misma no vulnera su haber económico.

Ahora bien, con independencia de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-585/2011, ha sostenido los criterios en el sentido de que una vez acreditada la infracción cometida la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes, cabe señalar que en el caso específico la omisión a dicha calificación no vulnera las garantías de los entes infractores.

En efecto, de forma similar a lo señalado por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia de rubro **"MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL"**, esta autoridad considera que al resultar aplicable la Amonestación Pública como la sanción idónea, es innecesario llevar a cabo la calificación de la falta y el análisis respecto de la imposición de la sanción para su graduación.

Lo anterior, toda vez que al tratarse de la menor de las sanciones establecidas en el Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, su imposición se encuentra justificada a priori por el puro hecho de la existencia de una violación y no requiere de mayores estudios en cuanto a la naturaleza de ésta última, dado que dichos estudios únicamente resultan necesarios para determinar una sanción más gravosa. Conviene transcribir la tesis citada:

*"Registro No. 192796*

*Localización: Novena Época*

*Instancia: Segunda Sala*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, Diciembre de 1999*

*Página: 219*

*Tesis: 2a./J. 127/99*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR**

**VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.** Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.

*Contradicción de tesis 27/99. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 22 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Mara Gómez Pérez.*

*Tesis de jurisprudencia 127/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y nueve."*

En efecto, lo transcrito en la anterior tesis resulta aplicable al caso en concreto pues la Amonestación Pública es considerada en el derecho administrativo sancionador electoral como la sanción mínima a imponer<sup>3</sup> pues es evidente que no existe pena que resulte de menor rigor que la sanción de referencia.

En este orden de ideas, conviene precisar que se cumple a cabalidad con lo establecido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, en el caso concreto, la motivación para efecto de la imposición de la sanción consistente en Amonestación Pública, la constituye la

---

<sup>3</sup> Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl, *Manual de Derecho Penal*, Filiberto Cárdenas editor y distribuidor, 2a. Edición, México, D.F. 1994, pág. 7011.



verificación de la infracción y la adecuación de la norma que prevé la sanción correspondiente, sirviendo como apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito con el rubro **"MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA"**, la cual para efectos ilustrativos se transcribe a continuación:

*"Novena Época*

*Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito*

*Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta IX, Enero de 1999*

*Página: 700*

*Tesis: VIII.2o. J/21*

*Jurisprudencia Materia(s): Administrativa*

**MULTA MÍNIMA EN MATERIA FISCAL. SU MOTIVACIÓN LA CONSTITUYE LA VERIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN Y LA ADECUACIÓN DEL PRECEPTO QUE CONTIENE DICHA MULTA.** No obstante que el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación prevé la obligación de fundar y motivar la imposición de las multas, de las diversas fracciones que la integran se deduce que sólo exige esa motivación adicional, cuando se trata de agravantes de la infracción, que obligan a imponer una multa mayor a la mínima, lo cual no sucede cuando existe un mínimo y un máximo en los parámetros para la imposición de la sanción toda vez que atento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considera que en la imposición de la multa mínima prevista en el artículo 76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, la motivación es la verificación de la infracción y la cita numérica legal lo que imperativamente obliga a la autoridad fiscal a que aplique las multas en tal situación, así como la ausencia, por exclusión, del pago espontáneo de contribuciones, caso fortuito o fuerza mayor, que no se invocó ni demostró, a que se refiere el artículo 73 del ordenamiento legal invocado, como causales para la no imposición de multa.

**SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.**

*Revisión fiscal 991/97. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 14 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: José Martín Hernández Simental.*

*Revisión fiscal 186/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 28 de mayo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías H. Banda Aguilar. Secretario: Rodolfo Castro León.*

*Revisión fiscal 81/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretaria: Laura Julia Villarreal Martínez.*

*Revisión fiscal 137/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 2 de julio de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.*

*Revisión fiscal 207/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos Número 15 de Torreón, Coahuila. 6 de agosto de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Elías Álvarez Torres. Secretario: Antonio López Padilla.”*

Derivado de lo expuesto, respecto de las conductas siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta
a)	1	Forma
b)	2	Tiempo Real

Por todo lo anterior, la sanción que debe imponerse al aspirante **C. Ángeles Navarro Rueda** es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una **Amonestación Pública**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## RESUELVE

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **32.1** de la presente Resolución, se impone a la **C. Ángeles Navarro Rueda, en su carácter de aspirante a candidato independiente**, la sanción siguiente:

**a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 1.**

**b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.**

Una **amonestación pública**.

**SEGUNDO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto remita la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con sus Anexos respectivos a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificada al Instituto Electoral del estado de Puebla.

**TERCERO.** Notifíquese electrónicamente la presente Resolución y el Dictamen Consolidado con los respectivos Anexos al interesado, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

**CUARTO.** Publíquese una síntesis de la presente Resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que ésta haya causado estado.

**QUINTO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SEXTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente Resolución.

**SÉPTIMO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Corresponde ahora el análisis, discusión y votación del Proyecto de Dictamen y el respectivo Proyecto de Resolución, identificado en el orden del día con el número de apartado 6.1, mismo que fue reservado por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, quien tiene el uso de la palabra.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Buenos días a todas las personas.\_\_\_\_\_

Acompaño en lo general el Dictamen Consolidado y el Proyecto de Resolución que están a nuestra consideración en este apartado 6.1, sin embargo, le solicitaría al Secretario Ejecutivo que en lo particular pueda someter a votación de este Consejo General la Conclusión 1, que corresponde a la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática y la Conclusión 4 que se atribuye a la Coalición Partido Revolucionario Institucional-Partido Verde Ecologista de México, en donde se propone sancionar un gasto no reportado por el pago de servicios a los representantes generales y de casilla que se desempeñaron el día de la Jornada Electoral.\_\_\_\_\_

Como lo sostuve también en la Comisión de Fiscalización, en donde se aprobaron estos documentos, mi disenso para no acompañar el análisis efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización estriba en que, desde mi punto de vista, dichas observaciones se plantearon de forma equívoca y, por lo tanto, a las Coaliciones no se les permitió realizar una adecuada defensa.\_\_\_\_\_

En el Proyecto de Resolución se considera que, aun cuando las coaliciones registraron los formatos de representantes en el Sistema Integral de Fiscalización y se adjuntó la documentación comprobatoria, aun así se observan discrepancias, ya que, mientras los formatos señalan que los servicios de los representantes fueron prestados de manera gratuita, tras realizar la verificación in situ, y practicar diversas entrevistas, aparentemente los mismos representantes manifestaron en los cuestionarios de la Unidad Técnica de Fiscalización que sí habían recibido un pago y,

por tal razón el Proyecto de Resolución propone que ambas Coaliciones sean sancionadas, y creo que, en este caso concreto, deberíamos de hacer alguna reflexión.

---

Aquí, en el caso concreto, tenemos los recibos, bueno, los formatos que las coaliciones subieron al Sistema, en esos formatos se está diciendo que desempeñaron las personas el cargo de representantes de manera gratuita, pero también tenemos unos documentos que son unos cuestionarios para representantes de casilla o generales, que se levantaron el propio día de la Jornada Electoral, que fue el 18 de marzo; y, desde mi punto de vista, tendríamos que hacer una confrontación de estos 2 documentos porque, en unos declaran las mismas personas que esa representación fue de manera gratuita, pero en las entrevistas que se les realizaron el día de la Jornada Electoral, dicen que recibieron una cantidad de dinero en efectivo y, desde mi punto de vista, creo que estamos ante documentos que tiene valores probatorios distintos.

---

Para mí el formato que está de comprobante de representación general o de casilla que se subieron al Sistema Integral de Fiscalización (SIF), es el que tendría valor, porque, además, están presentando la documentación de la identificación de cada una de estas personas, sin embargo, en la entrevista creo que tenemos ahí varias deficiencias.

---

Primero, se dice el nombre del auditor, pero ese, que llevó a cabo la entrevista, pero ese auditor tampoco firma esta hoja donde consta la entrevista; luego, tampoco se está acompañando ningún documento de identificación de la persona que supuestamente fue entrevistada, y creo que, en estos casos, entonces ante estos 2 documentos, tendríamos que otorgarle un valor probatorio, desde mi punto de vista, mayor al formato comprobante que se subió al Sistema.

---

Pero, además, aquí también tenemos algunas otras circunstancias, por ejemplo, hay una persona, bueno, voy a decir el nombre simplemente para la identificación, Manuel Jared Delgadillo Rodríguez, que él en su formato, asegura que fue la representación de forma gratuita, pero en el cuestionario que se le aplicó él dice que, dice: “recibe pago por ser representante”, señaló el cuadrito que “sí”, luego la cantidad dice: “mil

pesos”. Pero, después esta misma persona dice que supuestamente fue el domingo 18 de marzo de 2018, pero dice él: “aclaro, no se ha recibido el pago”.\_\_\_\_\_

Entonces, aquí tenemos una contradicción de la propia persona que está haciendo la manifestación de que supuestamente sí recibió un pago, entonces anota una cantidad, pero él mismo en la hoja dice que no ha recibido ningún pago, y la Unidad Técnica de Fiscalización no fue a constatar posteriormente si lo recibió o no lo recibió, porque entonces en ese momento todavía no lo había recibido.\_\_\_\_\_

Pero, además, si nosotros queremos partir de la base de que estos cuestionarios tienen valor probatorio y les estamos dando mayor fuerza convictiva que los formatos que están en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), entonces tendríamos primero que mejorar este documento, porque también tendría que ser firmado por el Auditor y también tendríamos que tener una identificación anexada para constatar que efectivamente se tuvo la entrevista que se dice y no solamente señalar aquí los datos. Pero, también si vamos a partir de la base, entonces en que este documento tiene valor probatorio pleno que sería el cuestionario, entonces mi otra pregunta sería: ¿Por qué la Unidad Técnica de Fiscalización no observó unas supuestas cantidades en efectivo que dicen algunas de estas personas que también recibieron, pero por concepto de alimentos?\_\_\_\_\_

Entonces, y esto sí es muy importante porque si tenemos un documento, ese documento va a tener, y le vamos a dar fuerza probatoria, entonces le vamos a tener que dar fuerza probatoria a todo lo contenido en ese documento y no solamente a una parte del documento, ¿A qué me refiero?, por ejemplo, en el caso de una persona que se llama Niza Monserrat Hernández Barrios, ella en el formato de representantes declara que hizo la representación de forma gratuita, en el cuestionario dice que sí recibió una cantidad de 500 pesos por ser representante, pero también dice que recibió apoyo para alimentos, dice: “sí” y la cantidad de 500 pesos.\_\_\_\_\_

Así tenemos otras y no entiendo, entonces, en este caso por qué sí nos sirve este cuestionario para sancionar en el caso concreto al Partido de la Revolución Democrática, porque supuestamente no dijo que había pagado 500 pesos en efectivo

a esta persona por ser representante, pero no se hizo ninguna observación en relación con lo que dice el mismo formato de que recibió 500 pesos para alimento.\_\_\_\_  
Entonces, me parece que necesitamos hacer una evaluación con más conciencia de los documentos que nosotros estamos teniendo y, desde mi punto de vista, el documento que tiene que dar, tener mayor fuerza probatoria son los formatos, o sea que subieron las coaliciones, los partidos políticos, al propio Sistema.\_\_\_\_\_  
Tengo conciencia más bien de que hay un precedente que es el SUP-RAP-135 de 2016 de la Sala Superior, donde dijo que sí se podían tomar en cuenta los cuestionarios, pero en aquella circunstancia a ésta, ¿Por qué?, porque en aquel asunto no teníamos los formatos subidos al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y entonces lo único que teníamos era los cuestionarios y entonces ese cuestionario por ser el único documento, entonces se le dio valor probatorio.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Miren, como Presidente de la Comisión de Fiscalización, quisiera explicar de qué se trata este asunto y, al mismo tiempo, reivindicar el trabajo de la Unidad Técnica, porque el Proyecto de Resolución que está a nuestra consideración fue votado por la Comisión de Fiscalización y en ese momento se avaló el trabajo de la Unidad Técnica. En todo caso, me parece que si hay observaciones, debería ser a la propia Comisión más que a la Unidad Técnica, porque insisto lo que aquí traemos fue respaldado por la Comisión.\_\_\_\_\_

¿De qué se trata el asunto? Afortunadamente para el primero de julio de 2018, tenemos ya un Acuerdo acerca de cómo se van a reportar los gastos de Representantes de Casilla y Representantes Generales. \_\_\_\_\_

Pero, en estas 3 Elecciones Extraordinarias en Municipios de Veracruz, aplicamos los mismos procedimientos para verificar si se trató de un servicio gratuito el de

representación u oneroso que seguimos en los Procesos Electorales Ordinarios de 2017. \_\_\_\_\_

Los partidos políticos presentan cuando se trata de servicios gratuitos y desinteresados, voluntarios, presentan formatos que cada partido político hace. Nosotros como autoridad un elemento que tenemos para verificar la veracidad del dicho del partido políticos, es la realización de encuestas el día de la Jornada Electoral por parte de personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, a través de las cuales se visitan las casillas, se identifica al representante y se le pregunta: ¿Tú en qué condición vienes aquí? Eso se contrasta con los formatos. \_\_\_\_\_

Por eso es que tenemos 2 documentos, en efecto, bien lo señala la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, uno que entregan los actores políticos y otro que genera la autoridad electoral en sus visitas. \_\_\_\_\_

Es como si en un acto de campaña un partido político nos informa: Tuve 4 autobuses para mover a mis simpatizantes y nosotros tenemos un Acta de Verificación donde encontramos 5 o 6 autobuses. \_\_\_\_\_

¿A qué le damos validez siempre? A la información generada por la autoridad. \_\_\_\_\_

Cuando un partido político nos dice: Gasté tanto con este proveedor y hacemos una circularización y resulta que el proveedor nos informa que recibió un monto de recursos superior al que nos declara el partido político, ¿Qué hacemos? \_\_\_\_\_

Damos por buena la circularización que hace la Unidad Técnica de Fiscalización y sancionamos el desfase, la diferencia de gasto. \_\_\_\_\_

¿Aquí qué tenemos? Lo que a nosotros ante la autoridad el día de la Jornada Electoral declararon los representantes de los partidos políticos y lo contrastamos con los formatos que mandaron. \_\_\_\_\_

Si un representante directamente nos dice: Estoy cobrando, me están pagando. Tenemos su declaración, se la damos por buena, aunque el partido político nos haya dicho que era gratuita; de hecho lo que estamos encontrando es que no necesariamente el partido político nos declaró la verdad cuando dijo que eran servicios gratuitos, porque la persona que presta el servicio, dice: Me están pagando, me prometieron un pago y me lo deben. Pero, el hecho de que no se pague a un



prestador de servicios, no quiere decir que no se haya recibido el servicio o hecho el gasto, sino tendríamos que reducir a los gatos de los partidos políticos todos los pasivos o de los candidatos. Eso sería incorrecto. \_\_\_\_\_

Entonces, ¿Qué es lo que hicimos? Fíjense ustedes, se trata de Municipios no muy grandes, eso nos permitió que las encuestas fueran mucho más abarcadoras que en otros casos, en Camarón de Tejeda visitamos, encuestamos el 100 por ciento de las casillas, en el Municipio de Emiliano Zapata, Veracruz el 87 por ciento de las casillas y en Sayula de Alemán el 58 por ciento de las casillas. \_\_\_\_\_

De esa evidencia, de lo que nosotros recogimos encontramos inconsistencias en la declaración de los partidos políticos, y por eso estamos tomando por bueno lo que nosotros levantamos, eran los representantes que ahí estaban acreditados ante casilla, los acreditaron los partidos políticos ante el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral les dio su nombramiento, y por eso estaban ahí dentro de las casillas que se les encontró, ellos firmaron un documento, no les pedimos la fotocopia de la Credencial, porque había que tomar a la persona, llevarla a buscar una fotocopidora, hubiera, incluso, sido vulnerar el derecho del partido político a estar vigilando la Elección. \_\_\_\_\_

Simplemente para cerrar, un recordatorio, en 2018 lo que tendremos es que siempre que se trate de un servicio de una representación onerosa se va a tener que informar desde que se registre el representante, y eso ya se va directamente al Sistema Integral de Fiscalización, y no hay que generar recibos. \_\_\_\_\_

En el caso de los representantes gratuitos se tendrá que llenar el formato que la propia autoridad les va a generar y que van a poder imprimir, descargar del Sistema Nacional del Registro de Representantes, y se va a permitir que por cada representante oneroso no sea necesario presentar uno de los gratuitos, de tal manera que entre más pago se declare, menos necesidad de estar recabando los formatos, los formatos van a tener un código para que, incluso, puedan ser leídos por lectores ópticos y así acreditar la gratuidad y facilitarle el trabajo a los partidos políticos, que son quienes tienen representación ante la casilla. \_\_\_\_\_

Entonces es un modelo que será más ágil, es un modelo que construimos en los últimos meses, pero en este caso simplemente le estamos dando la conclusión, el efecto al método de trabajo que hemos venido siguiendo, comprueba vía encuestas, no puede ser al 100 por ciento, no puede ser censal, por escasez de recursos, no podemos estar desde Fiscalización en todas las casillas, comprueba si los dichos son veraces. Tenemos elementos de prueba, que es la declaración del prestador de servicio, de que le dijeron que le iban a pagar o le pagaron, le tomamos por bueno el dicho a la persona que ejerce la representación directamente. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral **Ciro Murayama**. \_\_\_\_\_

Consejero Electoral **Ciro Murayama**, el representante de Encuentro Social desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor **Ciro Murayama Rendón**:** Sí. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el Licenciado **Berlín Rodríguez Soria**, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado **Berlín Rodríguez Soria**:** Muchas gracias por aceptar la pregunta. \_\_\_\_\_

Este tema es un tema de mucha importancia para nosotros como partido político, sobre todo por el criterio que está comentando que se va a adoptar respecto de las manifestaciones del funcionario de casilla. \_\_\_\_\_

Mi pregunta va encaminada a saber si el funcionario de casilla, el representante nos firma el formato diciendo que va a ser gratuito y el día de mañana nos cambia esa situación ante una visita de un verificador de la Unidad Técnica de Fiscalización, y dice: “sí me van a dar dinero”, usted comenta que el partido político le está mintiendo a la autoridad, pero la manifestación es del ciudadano, del representante de casilla, él por un lado dice: “es gratuito” y después dice: “no, sí me van a dar dinero”. Él es el que está variando, en un momento dado, hipotéticamente hablando, sobre esa situación ¿Cuál va a ser el criterio en ese caso? Ésa sería mi pregunta. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Para responder, tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, **Ciro Murayama.**\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Explicué con claridad que hacia adelante se cambió la manera, entonces conjugaría el verbo en pasado. \_\_\_\_\_

Entonces cuál ha sido el criterio, o en presente, cuál está siendo el criterio; el que tenemos en cualquier otro caso de Fiscalización, los partidos políticos declaran, y nosotros contrastamos el dicho de los partidos políticos con proveedores, con las personas que hicieron la representación. Si difiere el dicho del partido político y del proveedor, o si difiere el dicho del partido político y su representante, a quién hemos estado atendiendo: al representante que el partido político acreditó, no es un ciudadano ajeno al partido, es el que ustedes acreditaron, y él el día de la Jornada Electoral dice: “me están pagando”. Le creemos, y lo firma así. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral **Ciro Murayama.**\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, **Alejandra Pamela San Martín.**\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

En los mismos términos que lo señalé en la Comisión de Fiscalización, por supuesto que acompaño en este punto, acompaño los Dictámenes, pero en particular en este punto, acompaño el criterio que está en el Dictamen que se somete a consideración de este Consejo General. \_\_\_\_\_

Pero, me parece que no podemos empezar esta discusión como si el día de hoy hubiera nacido el problema, o como si el día de hoy fuera la primera vez que este Consejo General conoce de un asunto similar. \_\_\_\_\_

En el 2015 también hicimos cuestionarios en casilla, tuvimos a representantes de partidos políticos que nos dijeron que sí habían recibido un pago y un formatito que

nos decía que no habían recibido un pago y le creímos a lo que nos dijo el representante, porque el formato se presenta, y se dice que lo firmó el representante del partido político, y no tenemos por qué dudarlo. El detalle es cuando llegamos con el representante y el representante nos aclara que haya sido posterior, anterior, cambiaron de opinión, pero que esa representación, ese día que la está ejerciendo sí tiene un costo, sí implica un pago, entonces ese costo, ese pago tiene que ser reportado por los partidos políticos. Si no fue reportado por los partidos políticos, se considera un gasto no reportado.\_\_\_\_\_

Pero, esto pasó en el 2015, también pasó en el 2016, no pasó en el 2017 porque fuimos a una revisión distinta respecto de la representación, de los gastos de representación en la casilla y de Representantes Generales por los oficiosos que se abrieron, etcétera.\_\_\_\_\_

Pero, no es la primera vez que aplica el criterio que hoy se está poniendo sobre la mesa, éste ha sido el criterio que se ha usado no solo en casos similares, como lo refiere el Consejero Electoral Ciro Murayama, también en el caso de la representación de otra casilla. ¿Cuál es tal vez la diferencia? Que como en este caso estábamos ante una Elección Extraordinaria, la cobertura que se tuvo respecto de las casillas porcentualmente fue mucho mayor que la cobertura que se puede tener en una Elección Ordinaria, pero la práctica, el procedimiento y la forma de actuar de la Unidad fue exactamente la misma, el criterio que adoptó la Comisión de Fiscalización en su mayoría fue exactamente el mismo; y ése es el criterio que se está sometiendo a este Consejo General, que ya ha sido aprobado anteriormente.\_\_\_\_\_

Me parece que tenemos que mirar lo que se está señalando, con independencia de que haya un formato que diga que no ha recibido el pago, lo que está señalando es que hay un pago asociado a esa representación, el que no fue gratuita y desinteresada esa representación, sino que se estableció una contraprestación por parte del partido político, y en este caso debo señalar: no estamos dejando a los partidos políticos en estado de indefensión. Los resultados de esta verificación al igual que los resultados de cualquier otra verificación que realizó la autoridad si implicaban

una consecuencia para el partido político, como en este caso, fueron hechos del conocimiento del partido político en el oficio de errores y omisiones. \_\_\_\_\_

Si en este caso que se señala de “acordamos que me pagarían tanto”, no se hubiera pagado, se tendría que haber acreditado en ese momento, en respuesta al oficio de errores y omisiones, porque ésta es la información que tenemos de los propios representantes, se dice: no hay una copia de una Credencial para Votar, tampoco está obligado que en una visita de verificación haya copia de una Credencial para Votar, por una razón muy simple y logística, están en la casilla, están ejerciendo su representación, ya se señalaba. \_\_\_\_\_

En este caso lo que sí hay son datos de identificación y no podemos tampoco obviar, ¿Cómo puede estar alguien en el interior de la casilla? No puede estar cualquiera todo el tiempo en el interior de la casilla, para que alguien esté permanentemente al interior de la casilla o A) es funcionario de la Mesa Directiva de Casilla; o B) es observador u observadora electoral; o C) es representante de los partidos políticos; son quienes puede estar en el interior de la casilla y para que puedan ejercer el derecho al voto llevan su Credencial para Votar y llevan su identificación respecto del partido político en las dimensiones que estaban permitidas, etcétera, etcétera. \_\_\_\_\_

Están en una lista, digamos, con nombre propio y apellido para que puedan ejercer el derecho al voto o no en la casilla, la relación está al interior de la casilla. Entonces, no hay falta de certeza respecto de con quién se está llevando a cabo la diligencia, ¿Con quién se está, quién está llenando ese cuestionario? Lo que sí hay es una falta de coincidencia entre un formato que se presentó y el dicho del propio representante respecto del pago de esta representación. \_\_\_\_\_

Me parece que, el procedimiento que se siguió es el procedimiento adecuado, lo voy a acompañar, incluso debo de señalar que me parece que fue una buena idea, teniendo un universo tan pequeño de casillas, acudir a un porcentaje tan alto de las casillas; me hubiera gustado incluso que se hubiera podido acudir a más, pero me parece que sí es de llamar la atención que se haya acudido al menos en el peor de los casos digamos, en el Municipio en el que menos casillas se acudió fue el 58 por ciento de las casillas; en otro Municipio fue el 100 por ciento de las casillas, las que fueron

visitadas y en otro el 87 por ciento de las casillas; creo que esto, lo que busca es precisamente contrastar.\_\_\_\_\_

Muchas veces se ha señalado en esta mesa del Consejo General que la fiscalización tiene que trascender de ser una fiscalización de gabinete a buscar, verificar en campo las cosas que ocurren, lo que se está haciendo en este punto, es precisamente eso: fiscalizar. No solamente verificar el acompañamiento de documentación, sino verificar que lo que esa documentación ampara esté soportado con la realidad y, en este y en todos los casos, me parece, que la obligación de hacer el reporte original no es de esta autoridad, la obligación es de los propios contendientes, de los propios partidos políticos, de los propios candidatos, pero la obligación de verificar, la obligación de realizar los procedimientos de monitoreo, de constatación de la información proporcionada, sí es una obligación de esta autoridad, y no encuentro que se haya incumplido con una de las reglas que hemos establecido para el desarrollo de esas actividades y, en cambio, sí se llevó a cabo el procedimiento en los términos que se ha llevado en los distintos Procesos Electorales anteriores, y con la conclusión a la que hemos arribado en los distintos Procesos Electorales anteriores.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Jorge Herrera desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Por supuesto que sí.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tienen el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de México.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Herrera Martínez:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Escuché con atención su intervención y hay algo que me hace mucho ruido dice: el partido político reporta que no hubo, o sea que ese servicio que presentó alguna persona como Representante de Casilla, que lo presentó por escrito, que puso su nombre, su Credencial de Elector, su firma, y se anexó, incluso, una copia de la Credencial de Elector, dice que no se paga. \_\_\_\_\_

El día de la Jornada Electoral, personal de la Unidad hace un tipo de encuesta, que no es un acta, y ahí resulta que dice que sí, y usted dice: “bueno, se les da el derecho de audiencia para que acrediten el no pago”; perdón ¿Cómo podemos acreditar el no pago?, es una carga negativa ¿No?, o sea, ¿Cómo podemos acreditar el no pago?, porque el no pago ya lo acreditamos con el formato debidamente requisitado, donde constan todos los datos de la persona, e incluso se anexa su Credencial de Elector. \_\_\_\_\_

Por su respuesta, muchas gracias. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muchas gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Efectivamente el partido anexó un formato, ese formato se presume que está firmado por el Representante ante la Casilla, porque aparece el nombre y asumiríamos que, si trae el nombre, trae la credencial, la firma debe corresponder, hay un acto de buena fe, por parte de la autoridad, respecto de que corresponde, el detalle es que después tenemos el dicho, en persona, de ese mismo representante señalando que sí recibió un pago. \_\_\_\_\_

Los elementos que se puedan tener para acreditar que el dicho del ciudadano es falso, ésa es una carga de la prueba que tendría que tener el partido político, claro, presentó el formato, de acuerdo, ese formato no se presentó porque el ciudadano acudiera en un primer momento con la autoridad y le señalara que iba a ser gratuito y desinteresado, es un formato que anexó el partido político, pero después la autoridad sí acudió con el representante y fue el representante directamente quien dijo que sí recibió un pago. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Había una pregunta primero del representante de Encuentro Social, es la segunda pregunta. \_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Si. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muchas gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Aquí estamos de acuerdo en que se debe fiscalizar, se debe verificar, innegable, es una situación que aplaudimos, reconocemos y necesitamos. \_\_\_\_\_

Sin embargo, aquí lo que nos preocupa es precisamente esa regla de valoración de pruebas, con el objeto de que se vuelva justa una determinación por parte del Instituto. \_\_\_\_\_

Si nosotros partimos de esa hipótesis, creemos que se estaría violando incluso el principio de presunción de inocencia, porque el partido político está presentando un documento firmado por el Representante de Casilla. Si él el día de mañana por capricho, por lo que sea cambia de parecer, estaría prácticamente perjudicándonos. \_

La pregunta es: ¿Eso no viola el principio de presunción de inocencia de un partido político que está justificando con un documento la gratuidad, con independencia de que esta persona cambie después de parecer? \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_



**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Me parece que más bien desvirtúa el dicho del partido político. La autoridad actuó de buena fe. Nos presentan un formato, se le cree al partido político que ese es el formato. El ciudadano no es que cambió de opinión, es que cuando se le preguntó nos informó que sí había recibido un pago. \_\_\_\_\_

Si esto fue porque el partido político cambió de opinión y el partido político decidió primero que no le iba a pagar y luego que sí le iba a pagar o cualquier otra circunstancia, desconozco lo que llevó a que el partido político presentara un formato inicial y que el ciudadano nos informara que sí recibió el pago. \_\_\_\_\_

Lo que sí conozco es que tenemos la constancia de que cada uno de los ciudadanos a los que entrevistamos, nos señalaron en los casos que están siendo objeto de señalamiento, que sí recibieron el pago correspondiente y el pago que se está considerando un gasto no reportado. \_\_\_\_\_

Aquí regreso porque el representante del Partido Verde Ecologista de México dice: No me contestaste, la carga de demostrar cómo se acreditan las cuestiones, es de los propios partidos políticos no es de la autoridad. La autoridad no es quien determina cómo se defiende un partido político. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Licenciado Jorge Herrera desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted? \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Sí. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tienen el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera Martínez, representante del Partido Verde Ecologista de México. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Herrera Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

O sea, mi respuesta no fue recibida, o sea, la respuesta no la recibí porque no me dijo cómo te acredito esa parte, porque lo primero ya lo cumplí. \_\_\_\_\_

Pero, una nueva pregunta. \_\_\_\_\_

¿Revisó las firmas, Consejera? Porque la firma de un formato que tengo aquí de un partido político, es más coincidente la del formato con la credencial que la del papelito este de encuesta que no tiene ni siquiera requisitos legales. \_\_\_\_\_

¿Cómo puede ser que ustedes le den validez a este papelito? A éste que viene con la firma que sí se parece más, por lo menos es igual a la de la Credencial de Elector y digan que el partido político no dijo la verdad, porque después hay un formato que no sé quién llenó. \_\_\_\_\_

O sea, no sé ni siquiera si verdaderamente esa persona realizó la encuesta, porque qué cree, ni siquiera lo firma. ¿Cómo puede darle validez a esto? \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Entiendo que no recibió la respuesta que quería, le di la respuesta a la pregunta, si esa no le satisface, lo entiendo y lo respeto, pero la respuesta se la di. \_\_\_\_\_

Ahora, en cuanto a qué firma se parece más o qué firma se parece menos, la verdad lo desconozco, hasta este momento no, tampoco perito en grafoscopia tampoco soy, pero lo que sí sé es cómo se levantó el segundo formato, y el segundo formato, el de la entrevista, lo levantó personal de la Unidad Técnica de Fiscalización, que fue comisionado para realizar esa actividad que tuvo frente así a la persona, y puede ser que la firma no le haya salido tan parecida, que le salió un poco más chueca o que tenía más temblorosa la mano porque estaba cansada la persona que firmó. El detalle es que firmó en presencia del funcionario de la Unidad Técnica de Fiscalización

precisamente luego de llenar el cuestionario correspondiente en el que señaló que sí había recibido un pago. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva Alianza. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Miren, no pretendo arar en el desierto y mucho del desgaste de este órgano, es porque a veces entramos a discusiones que parecen, no digo que sea, que parecen no tener pies ni cabeza. No es el caso. \_\_\_\_\_

Estamos en la discusión, es el apartado 6.1, un Dictamen, una Resolución en el cual advierto la necesidad de precisar los alcances de un criterio justo; creo que sobre eso está o debe versar la discusión, el establecimiento de un criterio justo, que no es novedoso, como ya se ha referido aquí, no obstante, me saltan algunas cuestiones. \_\_\_\_

El criterio justo lo entiendo como algo que evita tanto la simulación, como la arbitrariedad, coincido y difiero a la vez, por difícil que parezca, con lo señalado por el Consejero Electoral Ciro Murayama. En lo que coincido, el Consejero Electoral Ciro Murayama refiere que es una cuestión de tiempos, efectivamente, la diferencia que tengo con este criterio, que a mi entender es injusto, porque pudiera parecer arbitrario, es el pretender sancionar una conducta que no se acredita a su Comisión, y creo que ese es el punto de toda esta discusión. \_\_\_\_\_

Entiendo y comparto la necesidad de que se implemente este procedimiento de validación, de corroborar, de comprobar si efectivamente los partidos políticos erogamos algún pago o no a los representantes acreditados ante Mesa Directiva de Casilla, esa no debiera ser la Litis. \_\_\_\_\_

Entiendo que ese procedimiento consiste en que personal, un Capacitador-Asistente Electoral, no sé, del propio Instituto acuda a la Mesa Directiva de Casilla y llene un formulario, como el que tengo en la mano, más allá de los elementos de validez o de

los elementos de existencia que pudiera adolecer o no este formato, el procedimiento que está establecido. \_\_\_\_\_

El punto concreto de esta inquietud respecto del criterio justo, sobre el cual estamos hablando radica en la conducta propiamente que se prevé sancionar. \_\_\_\_\_

Si tú en un primer momento, como partido político manifestaste que no realizaste ningún pago y en el momento de la comprobación a esa manifestación hay un formato que establece por parte de tu representante lo contrario, esto es que ya recibió un pago, puedo tener eventualmente, por acreditada esa conducta, puedo entender la aplicación de la disposición, la dimensión de la sanción, la temporalidad, como refería el Consejero Electoral Ciro Murayama. Lo que no me parece lógico jurídicamente, en un ámbito de aplicación de derecho es lo siguiente, y me voy al cuestionario, este formato dice: “¿Cuántos pagos recibirá, le proporcionarán o proporcionaron algún recibo de pago?” y aquí es donde ya no comparto el criterio. \_\_\_\_\_

La conducta se colma o no se colma para poder ser sancionada. Hasta donde sé, en este ámbito administrativo no se pueden sancionar tentativas de hechos ilícitos, se sancionan los hechos ilícitos, no las tentativas, no las expectativas, y creo que éste es el punto fino de la discusión, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, más allá de todos los elementos aledaños que ha referido, con los cuales podría coincidir, salvo esto que estoy señalando, el punto fino, como lo estableció el Consejero Electoral Ciro Murayama, son los tiempos en la Comisión de un eventual hecho ilícito como es el reportar a la autoridad, información discordante, “no pagué” y que al momento en el que van con el ciudadano, con el representante dice: “no, sí, sí me pagaron”. \_\_\_\_\_

De ahí a que digan: “me van a pagar” y que bajo esa presunción, digo, en días pasados estábamos hablando de presunciones argumentativas y esas cuestiones, que con base en las presunciones se pueda tener como cierta, o como válida una conducta acreditada, ni cierta ni válida, se tenga por acreditada una conducta futura, creo que no es jurídicamente sostenible dicha argumentación. \_\_\_\_\_

Sobre estos elementos, sobre estos parámetros es que externo la necesidad de fijar un criterio justo que permita sancionar conductas que se llevan a cabo y no expectativas o tentativas de conductas que no necesariamente puedan acontecer.\_\_\_\_  
Sería cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Representante Marco Alberto Macías Iglesias, el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Con todo gusto.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Gracias señor representante.\_\_\_\_\_

Después de haber escuchado la intervención de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y la de mis compañeros representantes, y después de que hace algún tiempo usted habló sobre la película de Precog, ¿Me permito hacerle la siguiente pregunta: cree usted que el encuestador materialmente puede probar lo dicho?\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva Alianza.\_\_\_\_\_

**El C. representante Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_  
El personal designado por la autoridad electoral únicamente puede dar no sé si fe, puede constatar los hechos que le constan, y si para el caso es realizar un cuestionario al ciudadano acreditado ante Mesa Directiva de Casilla, los efectos se

restringen al contenido de dicho cuestionario y, a mi entender, sobre hechos que ya acontecieron y no sobre hechos futuros de realización incierta. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde Ecologista de México. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Herrera Martínez:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Sin duda, no recibí elementos para que fortalecieran este criterio, sin embargo, sí considero que el representante de Encuentro Social sí conjugó en el bien el verbo, porque si bien es cierto esto se refiere a una Elección Extraordinaria, para el proceso del 1 de julio de este año tendremos no el formato que tradicionalmente se venía usando, sino un QR (Quick Response) donde va la firma de la persona, pero también va a haber el cuestionario para Representantes de Casilla que adolece de muchas cosas. \_\_\_\_\_

Bien lo decía el representante de Nueva Alianza, están prejuzgando por qué es un acto de realización incierta. Pero, hay algo que es muy importante porque esto es el dicho del representante que fue abordado por personal de la Unidad Técnica, que de ninguna manera cuestiono su trabajo, que quede claro, pero sí pierde de vista la Comisión, sin duda, porque me contesta la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín que no checaron siquiera si las firmas coincidían, entonces ¿Cómo juzgan? Al “ahí se va, este sí y este no”. \_\_\_\_\_

Segundo, la prueba confesional, que esto sería una prueba confesional en materia electoral solo se admite cuando versa en declaraciones que consten en un acta levantada ante Fedatario Público, Jurisprudencia 11 de 2002. \_\_\_\_\_

Creo que, estamos ante algo que puede significar un problema grave para este Proceso Electoral, ya lo mencionaban mis compañeros, qué sucede si el día de la Jornada Electoral se sacan la lengua, se enojan y dicen: “ahora vamos a fregarlo y vamos a decir que sí cobramos”, a la carga de prueba, la carga de la prueba es para

mí, no, perdón los que están afirmando son ustedes y el que afirma tiene que probar, y aprueban con un documento que además dice: “sí, sí me van a pagar”. ¡Ah, entonces ya tenemos una bola de cristal donde vamos a adelantarnos al futuro y vamos a decir: “mira, ahí le está entregando”! O sea, cosas tan ilógicas que dice: “me van a pagar”, no se ha recibido el pago y lo voy a recibir en efectivo, o sea a esto le dan valor probatorio para sancionar a un partido político, para desvirtuar el dicho que obviamente en buena fe el partido político acreditó, incluso con la Credencial de Elector y la firma autógrafa del representante, y sin tomar en cuenta la buena fe del partido con un cuestionario que tiene, repito, muchas carencias desde el punto de vista legal, dicen: “¡ah!, nosotros tomamos por bueno esto y te sanciono”. En el mejor de los casos, creo que no sucedió, pero dice la Consejera Electoral que nos dan el derecho para controvertir esto. \_\_\_\_\_

¿Cómo te acredito el “no pago”? Ése es el problema, ya te acredité el no pago desde el inicio con el formato, la Credencial de Elector y la firma de la persona. ¿Cómo puedo acreditarle el no pago? Tendré que ir con el representante y hacerle un no recibo, o sea, dame un no recibo para que le acredite al Instituto Nacional Electoral que no recibiste el pago, porque no te hice el pago. \_\_\_\_\_

Creo que, el tema no es un tema menor, es un tema que tenemos que establecer criterios claros, porque esto puede generar graves problemas, no hay certeza en este documento, al cual está dándole total validez la Comisión de Fiscalización, diciendo que lo que el partido político dijo es mentira y lo que el encuestador les trajo, que repito, no dudo de su trabajo, pero nadie me garantiza que este documento no haya sido llenado en un escritorio por cuestiones de movilidad, a lo mejor no le dio tiempo, porque todos los datos ya los tienen. Sin embargo, quien lo levanta ni siquiera lo firma, o sea es increíble, y ustedes sí le dan validez para sancionar a un partido político. \_\_\_\_\_

¿Dónde queda la presunción de inocencia del partido político? En ningún momento quedó claro si se recibió o no se recibió, sin embargo, el partido político está aportando documentos probatorios con mucho mayor fuerza, mayor solidez, con más asidero, como son: la firma autógrafa y la copia de la Credencial de Elector. No creo

que esto aparezca por arte de magia y aquí desgraciadamente este cuestionario, no da luz de si fue real o no, creo que hay un tramo en esta situación que no está siendo cubierto desde el punto de vista legal; y por eso considero que, si bien es cierto, como lo dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama, esto ya lo votó la Comisión de Fiscalización, no sabía que tuvieran la verdad definitiva. \_\_\_\_\_

Creo que, en este tema, los Consejeros Electorales que votaron a favor de esto se equivocaron. \_\_\_\_\_

Es cuanto Consejero Presidente, muchas gracias. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muy buenas tardes a todas y a todos. \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo con la apreciación de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, sí es un tema que puede ser relevante, justamente para la fiscalización de las próximas elecciones, pero además creo que es un caso que sí vale la pena comentar, porque llaman la atención algunas de las cuestiones que han sido cuestionadas. \_\_\_\_\_

Una en realidad sí son declaraciones del mismo ciudadano, una la presenta el partido político y la otra la presenta la Unidad Técnica de Fiscalización, pero es el mismo ciudadano el que está diciendo, en un momento dice “no recibo pago”, la firma y además anexa una copia de la Credencial de Elector; esto desde luego, así lo presenta el partido político y, en otro momento, el mismo ciudadano dice aparentemente que va a recibir un pago, pero que ni siquiera dice que ya lo recibió, incluso en el mismo formato hace la aclaración de que no ha recibido ningún pago, pero que probablemente lo recibiría. \_\_\_\_\_

Entonces, creo que aquí tenemos 2 declaraciones de un mismo ciudadano, presentadas una por el partido político y otra por la Unidad Técnica de Fiscalización, y creo que, lo que se debió de haber hecho, aunque no está previsto y a la mejor no tenemos las condiciones para hacerlo, ante 2 cuestiones que son contradictorias,



tendríamos que haber tenido alguna prueba o más pruebas, para determinar en cuál estaba diciéndonos o no la verdad; y una de las valoraciones que hubiéramos podido hacer era la de la firma, si le queríamos dar valor probatorio a una de las 2 declaraciones, teníamos que tener más elementos para hacerlo, y creo que por lo menos ese elemento tendría que haber sido el cotejo de la firma para saber si era el mismo ciudadano, por lo menos, el que nos estaba diciendo esto. \_\_\_\_\_

Porque lo que también es cierto es que en el cuestionario, no está firmado por el representante de la autoridad de la Unidad Técnica de Fiscalización. \_\_\_\_\_

Entonces, esto disminuye, desde mi punto de vista, su valor probatorio. \_\_\_\_\_

Creo que, por eso el caso llama la atención. Desde luego, estaría de acuerdo con la Consejera Electoral Adriana Favela, por no sancionar esta conducta. \_\_\_\_\_

Pero, además también ya en los anexos, me imagino, de los Dictámenes en donde viene el nombre de este ciudadano, dice: “¿Recibió pago? Sí, la cantidad de 1 mil pesos. Recibió pago en efectivo”, cuando el mismo ciudadano en su segunda declaración nos dice que no había recibido todavía el pago. Entonces, incluso vamos más allá de lo que dice este ciudadano en su segunda declaración. Él dice: “Voy a recibir pago”. Ya la Unidad Técnica de Fiscalización está diciendo: “Sí recibió el pago en efectivo”. \_\_\_\_\_

Entonces, de esto no hay ningún documento de que sí recibió el pago y por eso creo que el asunto del tema vale la pena comentarlo, porque desde luego si queremos sancionar una conducta, debemos de ser muy precisos en tener todos los elementos para poderlo hacer y, desde mi punto de vista, en este caso no se están dando. \_\_\_\_\_

Entonces, creo que por eso sí es algo que debemos de cuidar. En todo caso, si le vamos a dar mayor valor probatorio a lo que nos digan el día de la Jornada Electoral, vale la pena fortalecerlo con otras pruebas y con otros elementos que nos permitan llegar a las conclusiones a las que se llegaron en este caso en concreto. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:**  
Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Efectivamente, coincido con lo manifestado por el Consejero Electoral Enrique Andrade, sobre todo porque efectivamente se trata de una doble manifestación en un primer momento por el ciudadano, no es que el partido político le esté mintiendo a la autoridad electoral, sino que nosotros como partidos políticos recibimos la manifestación que hace el propio ciudadano firmado por él, es una manifestación de voluntad del ciudadano y al que están castigando es a nosotros como partidos políticos. \_\_\_\_\_

Pero, después cuando ya acude una autoridad de la Unidad Técnica de Fiscalización a hacer esa verificación, habría que ver. Finalmente está recabando una declaración, una confesión y hay reglas para eso. \_\_\_\_\_

Es sabido en el ámbito del Derecho Penal que se toman como reglas para la aplicación del Derecho Electoral que las confesiones deben ser vertidas ante una autoridad facultada para poderla recabar, no lo puede hacer cualquiera. \_\_\_\_\_

Es el caso de la Policía Judicial, cuando recaba la declaración de un delincuente, carece de validez porque no fueron rendidas ante el Ministerio Público. \_\_\_\_\_

Entonces, aquí estamos recabando una declaración de un ciudadano donde ni siquiera tenemos la certeza de que efectivamente se trate de una persona legalmente facultada para recabar la declaración del ciudadano y por lo mismo, darle los efectos que debiera de ser, circunstancia que no ocurre en el caso en concreto y que por consecuencia lógica sí nos deja en estado de indefensión, perdón por contradecir la afirmación de uno de los Consejeros Electorales, pero claro que sí. \_\_\_\_\_

Creo que, aquí el problema es, uno, buscar la eficacia de la aplicación de la Ley Electoral por parte de la autoridad. Por el otro lado, tener la seguridad jurídica del partido político o del ciudadano, tenemos que buscar un equilibrio entre una y otra, pero no podemos nosotros hacer que bajo esta regla de valoración de pruebas que se

quiere establecer aquí, el día de mañana se convierta prácticamente en el atropello de derechos constitucionales. \_\_\_\_\_

Efectivamente, creo que hay un dilema de la autoridad de cómo resolver y cómo juzgar esta situación. Desde nuestro punto de vista, no se está juzgando de manera adecuada ni con las reglas de valoración de pruebas esta circunstancia en perjuicio de los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Eso es todo, muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias a usted, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martín, Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martín:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Primero, suscribir los argumentos de mis compañeros representantes de los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Quiero traer 2 reflexiones también para la valoración de las señoras y señores Consejeros Electorales. \_\_\_\_\_

En este momento hay investigaciones respecto de firmas falsas en este Instituto Nacional Electoral por diversas cuestiones. Lo fundamental es que hay muchas jurisprudencias que establecen que los actos que no lleven consigo la firma autógrafa del sujeto es o son anticonstitucionales. Estamos viendo una disparidad respecto del reporte inicial del partido político con el cuestionario levantado en un segundo momento por el personal de la Unidad Técnica. \_\_\_\_\_

También creo que esto parte de un principio de convicción de infracción, y no de un principio en donde debe de prevalecer la inocencia, eso me parece que hay que revisar. \_\_\_\_\_

Pero, además, se corre el riesgo, y todos los que hemos caminado las secciones electorales, porque éste no es un asunto de índole de una candidatura a la Presidencia de la República, aquí estarán sujetos de esta disposición candidatos a Diputados Locales, a Diputados Federales, etcétera. Se corre el riesgo de generar un

comercio de suplantación de identidad, si todos conocemos que desgraciadamente se da el fenómeno de la compra de credenciales, cómo sabemos que no el día de la Jornada Electoral que no suceda, que algún personaje perverso pueda llegar a solicitarle la firma a un Representante de Casilla a través del pago económico de cierta cantidad de dinero con el ánimo de afectar o al candidato o al partido político. \_\_  
Todos estamos, y aquí quiero ser muy enfático, a favor de la fiscalización más rigurosa. También hay que reconocer el trabajo de la Comisión, lo dejo así también de manera muy puntual. \_\_\_\_\_

Sin embargo, sí creo que por los elementos que se han vertido por esta posibilidad que planteo que pueda generar este criterio, sería pertinente, es la solicitud muy puntual que quiero plantearle a la mesa, poder retirar el punto y generar una mesa, o en la propia Comisión a efecto de que se puedan valorar estos argumentos y poder establecer un mecanismo que no vulnere ninguna cuestión de derecho y que permita poder encausar un debido proceso a efecto de que se genere una rigurosa fiscalización, pero sin generar ningún daño, insisto, al derecho, pero también al escenario y al ejercicio que llevarán a cabo los candidatos y los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputado Jorge López Martín. \_\_\_\_\_

Diputado Jorge López Martín, el Consejero Electoral Ciro Murayama desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted? \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Jorge López Martín:** Adelante, Consejero Electoral. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Gracias, Diputado Jorge López Martín. \_\_\_\_\_

¿Sabe de qué monto estamos hablando en los Dictámenes que estamos proponiendo? \_\_\_\_\_

Segundo, dice usted que se retire el punto sin afectar el derecho, ¿Tiene usted claro que se trata de un Dictamen de campaña que está sujeto a tiempos legales y de los cuales depende la calificación de 3 elecciones?, ¿Habría o no afectación a derecho si este punto se retira y no cumplimos con los plazos que la Ley mandata en materia de fiscalización? \_\_\_\_\_

Por sus respuestas gracias. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra el Diputado Jorge López Martín. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero del Poder Legislativo, Diputado Jorge López Martín:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Primero, sí conozco los montos aquí los tengo, son de todos los partidos políticos, hay por ejemplo, una del Partido Nueva Alianza de 8 mil 100 pesos. Sí conozco los montos, aquí los tengo Consejero Electoral, pero lo que nos preocupa, es el precedente que como criterio se pueda generar a los siguientes Procesos Electorales. Segundo, Retirar el punto a efecto de que se precisen, se aclaren y se enriquezca este mecanismo, porque no estamos en contra, lo que queremos es que se pueda precisar, pero no veo que haya ningún daño ni ninguna cuestión que vulnere el punto que se está discutiendo por posponerlo. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputado Jorge López Martín. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Diputada, Consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, Diputada Mariana Benítez Tiburcio. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Me parece que en este punto coincido con todos los representantes, y desde luego, con el criterio de la Consejera Electoral Adriana Favela. \_\_\_\_\_

Entiendo la atribución que tiene este Instituto Nacional Electoral de llevar a cabo la fiscalización adecuada de los recursos que utilizan los partidos políticos, y más tratándose de las campañas, en la Campaña Federal, la Campaña Presidencial. Sin

embargo, me parece que sí es importante que este Instituto no pierda de vista una cosa, no pueden llevarse a cabo procedimientos de fiscalización violentando garantías. Me parece que aquí claramente lo que advertimos es un desequilibrio procesal, porque es la palabra, dice la Consejera Electoral Pamela San Martín: “La autoridad, el Instituto Nacional Electoral actúa de buena fe”. No lo ponemos en duda, pero también pongámonos del lado de los partidos políticos y valoremos que son 2 partes y que una parte es el Instituto, con las atribuciones que tiene, y por otro lado está el partido político, es un procedimiento en donde debe ser de estricto derecho y no puede haber una valoración indebida de estas pruebas que se recaban en perjuicio de los partidos políticos. Por eso digo que se trata de un claro desequilibrio procesal que ustedes, digamos aquí están discutiendo con este criterio.\_\_\_\_\_

Coincido en que es adecuado que la autoridad tiene que realizar esta encuesta, esta valoración para certificar, comprobar lo que los partidos políticos remiten en esas solicitudes donde reportan que un representante es oneroso gratuito; en eso hasta ahí estamos de acuerdo. Sin embargo, en darle valor a un documento que no tiene ni circunstancias de modo, tiempo, lugar, no viene la firma autógrafa del funcionario que la recaba, elemento fundamental en cualquier procedimiento, que lleva a cabo una autoridad.\_\_\_\_\_

Me parece que sí llamamos a la reflexión en esto, no por llevar a cabo una fiscalización estricta de partidos políticos generemos atropellos y sin querer ser estridente, de verdad aquí estaríamos ante un atropello, porque no solo se está valorando indebidamente esta prueba, que ya dije, no tiene los elementos mínimos para darle certeza a la información que ahí se contiene, sino que además, hacen una indebida valoración, porque suponiendo que ese documento tuviera algún otro elemento de convicción ahí se dice que no se ha recabado, que no se ha entregado el recurso y entonces en la Resolución, no obstante lo que ya hemos dicho y las irregularidades de este documento, además se infiere que ya se entregó arbitrariamente contrario a lo que contiene ese documento.\_\_\_\_\_

Me parece que es a todas luces preocupante, en serio, preocupante. Insisto, no por llevar a cabo una fiscalización de partidos políticos cometamos arbitrariedades, el

Instituto realiza una tarea verdaderamente compleja a partir, no se diga de esta Reforma, a partir del 2014. Pero, no podemos de verdad en un ánimo de darle cuentas a la ciudadanía de la fiscalización de los partidos políticos y además cumpliendo la normativa electoral, generar estos desequilibrios, es claramente violatorio de garantías el concederle valor a un documento de esa naturaleza y además el hacer una valoración porque no solo es el valor del documento, el hacer una valoración indebida de una causal así. \_\_\_\_\_

Ahora, ¿Por qué es tan importante?, porque claro, o sea aquí habla el Consejero Electoral Ciro Murayama del monto, pero el tema no es el monto, el tema es el precedente, el tema es el criterio que va a seguir este Instituto en los subsecuentes procedimientos de fiscalización. \_\_\_\_\_

Sinceramente, me sumo a las voces de los partidos políticos, en que se reflexione en este criterio, y que en este caso en particular se retire para una posterior revisión. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputada Mariana Benítez. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran presentes y que nos siguen. \_\_\_\_\_

Quiero manifestar mi posición sobre el tema que estamos discutiendo en esta mesa, para decir que coincido con el criterio, pero no coincido con la forma argumentada en la propia Resolución por las siguientes razones: \_\_\_\_\_

Primero. Me parece que estamos perdiendo de vista que estamos frente a 2 medios de prueba distintos que provienen de una misma fuente de prueba, si distinguimos conforme se hace en la teoría de la prueba, lo que son las fuentes y medios de prueba tenemos que, la fuente de esta prueba es la declaración propia de una persona, una misma persona. \_\_\_\_\_

Segundo. El medio de prueba, tenemos 2 medios de prueba distintos: un formato CRGC y una declaración levantada in situ, por la misma persona; si esta declaración está presentada a nuestro expediente tenemos que hacer una distinción. No todos los casos tenemos la oposición del medio de prueba, solo tenemos determinados 4 casos, en el caso del Partido Verde Ecologista de México, Partido Revolucionario Institucional de este supuesto, nada más, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, que son los formatos que se levantaron in situ, no hay un formato CRGC, entonces no tenemos la oposición de los medios de prueba, solo tenemos un medio de prueba, una fuente de prueba, que es la declaración que rindió el ciudadano y, sobre la base de la cual se debe cuantificar el criterio. ¿Por qué? Porque estamos atendiendo a la naturaleza esencial de la Unidad Técnica de Fiscalización.\_\_\_\_\_

Se dice que el fiscalizador no firma, es que en el Procedimiento de Fiscalización hay un oficio que avala y que autoriza a estas personas para que vayan a hacer este levantamiento de los cuestionarios, entonces debería de ser en estos supuestos; y eso debe quedar claro en las Resoluciones, la distinción en los que hay la oposición exclusivamente.\_\_\_\_\_

Evidentemente, el medio de prueba tiene que ser valorado conforme a las reglas de la lógica y la sana crítica como en todos los elementos probatorios, ¿Acorde a qué?, a que se trata de un documento privado que por sí mismo no hace prueba plena y que tiene que ser relacionado con los demás.\_\_\_\_\_

Si no hay un documento que se le oponga, si existe un oficio a través del cual se autorizó a la persona, o personas a ir a levantar in situ estos cuestionarios, ahí, al no existir un elemento de prueba que se le oponga, tenemos la racionalidad para darle el valor.\_\_\_\_\_

Vamos a entrar al tema de la oposición, que son menos y que deben de quedar claros de cuáles son las circunstancias.\_\_\_\_\_

Aquí como ya lo había dicho, tenemos oposición de la misma persona en su declaración en momentos distintos, por un lado, en el formato, ella lo que está diciendo es que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que desempeñaré, en futuro, dice: "...desempeñaré el cargo de forma gratuita, voluntaria y desinteresada..."\_



Así está el formato. Pero, también tenemos un formato, un medio de prueba en el que la misma persona a partir de las preguntas que se le hace, señala por un lado que sí recibe apoyo por alimentos, que no recibe nada para traslado de casilla, porque se trasladó a pie, y que si recibe un presente pago por ser representante, señala que sí y señala la cantidad. \_\_\_\_\_

No veo una oposición clara, una contradicción clara. En una dice: Lo voy a desempeñar, pero en este momento que lo está ejerciendo está señalando que sí lo está recibiendo, salvo el caso en el que dice que en el futuro se le va a pagar. \_\_\_\_\_

Aquí es muy interesante porque las reglas de valoración de prueba tienen que ver con la eficacia probatoria de estos documentos que tenemos a la vista. \_\_\_\_\_

Cuando existe de una misma fuente de prueba igualdad en la situación del medio de prueba, seguimos las reglas de valoración de la lógica y la sana crítica. \_\_\_\_\_

Como no hay otros medios de prueba que nos den más luz respecto a si recibió o no, entonces el siguiente grado de argumentación es que debemos de aplicar las reglas de las máximas de experiencia. \_\_\_\_\_

¿Qué son estas máximas de experiencia? Son los medios, las normas, los principios aceptados cotidianamente de lo que deriva el acontecer ordinario de las cosas. Es decir, lleva la presunción de lo ordinario. Hay un principio básico en la valoración de pruebas. Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. \_\_\_\_\_

¿Qué es lo ordinario? Pasaríamos al siguiente grado de argumentación. \_\_\_\_\_

¿Qué es lo ordinario? Que los partidos políticos les paguen a todos sus representantes, parecería que esa no es la regla ordinaria. \_\_\_\_\_

Lo ordinario es que los partidos políticos pagan a algunos de los representantes de los partidos políticos. \_\_\_\_\_

¿Qué es lo ordinario? Que los partidos políticos les paguen antes o después de que ejerzan el cargo. \_\_\_\_\_

Lo ordinario es que se les paga el día de la Jornada Electoral. \_\_\_\_\_

Lo extraordinario es que lo hagan en 2 pagos, en días posteriores. La regla general y la lógica, nos indica que es el mismo día de la Jornada Electoral. \_\_\_\_\_

Ahora tenemos que tener una presunción de derecho. \_\_\_\_\_

¿Qué es lo ordinario, que esta autoridad haga? Que confronte con proveedores o con las personas interesadas los pagos. Eso lo podemos presumir de todo el Reglamento de Fiscalización. \_\_\_\_\_

¿Por qué? Porque la mirada es corroborar lo que los partidos políticos están reportando a la autoridad, a efecto de evitar posibles errores o simulaciones. En todo caso, por ejemplo, con los propios proveedores. \_\_\_\_\_

Si es así, cuál es la hipótesis más plausible, tomando en cuenta los propios documentos que en algún momento cuando se firmó este formato se pudo haber señalado que se iba a realizar de manera gratuita. \_\_\_\_\_

Pero, si al ciudadano le dieron el dinero, no lo iba a rechazar. \_\_\_\_\_

Lo ordinario es que en ese momento lo reciba y ejerza el cargo. \_\_\_\_\_

De ahí que le daría mayor eficacia, no valor, tienen el mismo valor probatorio y están sujetos a las mismas reglas de valoración, son documentos privados que provienen de una misma fuente de prueba, que deben ser valorados en torno a los demás medios de prueba y acorde, en su caso, con las máximas de experiencia. \_\_\_\_\_

Por eso me inclinaría a darle mayor eficacia probatoria al documento recabado por esta autoridad. Continuaré en la siguiente ronda. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas, representante de MORENA. \_\_\_\_\_

**El C. representante suplente de MORENA, Licenciado Jaime Miguel Castañeda Salas:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

La verdad es que tiene razón el Consejero Electoral Ciro Murayama cuando dice que el monto es mínimo, también hay razón en decir que existe un problema en la concepción del criterio. En realidad lo que tendría son preguntas en el tema. \_\_\_\_\_

Hay que recordar para poder tomar también decisiones, están confrontados en este tema 2 criterios, luego se nos suele olvidar, no vi que nadie en la mesa lo mencionara, y me parece que es importante recordárselos a los Consejeros Electorales. Uno, que

se tomó en el Estado de México respecto a este tema que tiene que ver con los Representantes de Casilla, en los oficios que se abrieron. Otro que se contrapuso, también es Veracruz, es cierto, se contrapuso al primer criterio de Sala Superior en Coahuila en donde se hizo una determinación en donde fue parte de los elementos de la validación del no rebase del tope. \_\_\_\_\_

Tendría varias preguntas. Primero, este último criterio que es en el que se tomó los apoyos o gastos en casilla, ¿Es el que se está aplicando? Nosotros tendríamos mucho que decir en ese sentido, no quisiera citar a nadie, un Consejero Electoral dijo que se habían hecho criterios distintos, se habían tomado criterios distintos. Es una duda que a nosotros nos queda. \_\_\_\_\_

¿No será, segunda pregunta, que se está aplicando el criterio que se aplicó en el Estado de México, y no el que revocó la Sala Superior? No quiero ahondar en la discusión jurídica sana o insana, sana, si quieren, entre el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, pero la última palabra que se dio fue lo de Coahuila, y existía la contradicción. \_\_\_\_\_

Me parece que todo lo que se está diciendo en la mesa tiene mucha relevancia por esos 2 puntos, más lo que dijo el Consejero Electoral Ciro Murayama de cómo lo pretende arreglar. Me parece que, incluso, tiene que ver mucho con la discusión de Coahuila. \_\_\_\_\_

Nosotros sí podemos decir que hicieron un trato diferenciado, y ésta es la tercera pregunta, ¿No sería bueno dejar muy claro un criterio para no tener valoraciones disímbolas? Porque aquí hay 2 o 3 argumentos que tienen que ver con valoración de prueba y la forma en que se va tomando en cuenta. \_\_\_\_\_

También en Coahuila y en la última Resolución del Reglamento de Fiscalización, y con esto concluyo, hay una discusión que no debe ser menor y que debe ser tomada en cuenta respecto a la fe pública que tiene el Instituto en sus verificaciones, y por lo menos, la Sala Superior, y de nuevo la vuelvo a poner en la mesa, dijo que no, y revocó esa parte. Dijo que los datos de la comprobación eran los que eran entregados y que con eso se hacía la fiscalización y no con las verificaciones. \_\_\_\_\_

Entonces, sí tenemos un entramado bastante interesante jurídicamente hablando en este punto, y ahí tengo mis preguntas, quisiera dejarlas ahí y me parece que el asunto sí tiene que estar resuelto con certeza. \_\_\_\_\_

Me parece que en realidad lo que aquí se está diciendo no tiene, o tiene muy poco que ver con este punto en concreto, tiene que ver con lo que viene. Con lo que viene, la verdad es que por más que se hizo un esfuerzo, esta parte sí va a generar controversia porque en los 2 instrumentos que tenemos lo que nos están diciendo, anticípenos, díganos, denos mayor claridad de si esto va a ser gratuito o esto va a ser pagado, pero este punto en concreto no está totalmente resuelto, me parece que es importante que se discuta, por lo menos, el dilema que se presenta, con todo esto que está en frente. \_\_\_\_\_

¿Por qué? Sí, sí es cierto, no, la autoridad, tiene elementos de presunción, y elementos de prueba, pero con el último criterio de Sala Superior cómo quedan establecidos, y luego, todavía para hacerlo más emocionante, está esta contradicción Coahuila-Estado de México. \_\_\_\_\_

Creo que, sí debería haber una precisión clara, no es venir a decir que el asunto está resuelto, creo que sí hace falta, coincido en que es un asunto que todavía tendrían ahí que explorarse, porque si no, para tener certeza sobre el caso, y creo que se ha avanzado mucho, para que luego no se mencione que no hemos avanzado. Pero, sí, éste es un punto por dilucidar. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

En algunas cosas hay mucha razón de los representantes de los partidos políticos, en el sentido de que este tema ha suscitado discusiones intensas con relación a cómo se comprueba la relación que hay entre los representantes de los partidos políticos en las casillas y los propios partidos políticos, es decir, si esta representación se realiza en

forma gratuita como cargo a la militancia, como establecen los Estatutos de algunos partidos políticos, o bien, si se realiza con algún pago que se le entrega a estos representantes. \_\_\_\_\_

Ya lo ha dicho con claridad la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, es generalmente durante la Jornada Electoral cuando se les hace el pago respectivo, pero también depende mucho del mecanismo que el partido político elija. Han utilizado Contratos de dispersión a través de monederos electrónicos, han utilizado otras formas de pago a los representantes. \_\_\_\_\_

En las elecciones pasadas, de 2017, en las 4 entidades, efectivamente, tuvimos que desahogar un procedimiento específico de revisión de esta relación entre los representantes de los partidos políticos y los partidos políticos respecto a cómo se les había pagado. \_\_\_\_\_

Pero, creo que este tema tiene que ser analizado, y lo voy a decir con respeto a las posiciones divergentes, pero creo que tiene que ser analizado no a la luz de las normas que rigieron y la mecánica que rigió la elaboración de esta Resolución, por qué; porque recientemente, como todos sabemos, se han emitido los Lineamientos que establecen la forma en la cual se van a cubrir los gastos que los partidos políticos realicen durante las Jornadas Electorales, particularmente el tema de la representación de los partidos políticos; y, por otro lado, en el Sistema Informático que estamos desarrollando para el registro de los representantes ante las Mesas Directivas de Casilla de los propios representantes, hemos incluido un apartado que establece con claridad si ese representante está siendo pagado o está participando de manera gratuita. \_\_\_\_\_

En los Lineamientos específicos que hacen obviamente un cumplimiento, un mandato específico del Reglamento que nos ordena emitir esos Lineamientos en el artículo 2.3 se estableció ahora que cuando no hay ningún pago, el formato se tiene que subir al Sistema y ese formato es un formato simplificado que ahora solamente contiene el nombre de la persona o contendrá el nombre de la persona, la clave de elector de la persona, un Código QR (Quick Response) y la firma específica de la persona. \_\_\_\_\_

Esas cuestiones están claramente señaladas en el Reglamento y obviamente serán la base sobre la cual se determine la regla que establecimos ahí, es decir, si un partido político dice que le pagó a un representante y manifiesta la cantidad que le pagó, ya tiene derecho a uno que no será necesario comprobar si se le pagó o no se le pagó y así hasta llegar al 50 por ciento, en su caso. Esa parte está ahí, si es gratuito, entonces tendrán que subir todos los formatos con la modalidad que está aquí. \_\_\_\_\_

El otro punto que me parece que es el de la discusión es: ¿Qué certeza tienen los partidos políticos respecto a que si la verificación que se realiza durante la Jornada Electoral, es levantada por el personal debidamente acreditado por la Unidad Técnica de Fiscalización? En eso acompaño las preocupaciones que han manifestado los partidos políticos, pero eso me parece que se resuelve de una manera muy sencilla, el Consejo General debe ordenarle a la Comisión de Fiscalización que revise el formato específico y que se incluya la firma específica del verificador, porque si no estaríamos en una reproducción de discusiones de esta naturaleza. \_\_\_\_\_

Creo que, ése es el punto central, creo que no es tampoco la emisión de un criterio genérico, es la Resolución de un caso, sí, pero es un caso que ya no se va a repetir porque la mecánica de revisión de los gastos de los representantes está sujeta a una condición distinta a partir de la acreditación de los Lineamientos. Lo que me parece más complicado es que se ordenara, por ejemplo, que se supriman las verificaciones de parte de la Unidad Técnica de Fiscalización, porque ahí lo que estaríamos haciendo sería simple y llanamente quitar un elemento de comprobación de parte de la Unidad Técnica respecto de los gastos que realizan los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Entonces, comparto el hecho de que debe haber absoluta certidumbre respecto de la persona que levanta la declaración del representante, en este caso, lamentablemente no viene en la firma. \_\_\_\_\_

La Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala ha hecho una explicación de por qué sí debería de darse como válida, como eficaz esa prueba, pero me parece, insisto, que tenemos que subsanar en lo subsecuente esta situación. Se resuelve en opinión de esa manera, es decir, dándole una instrucción a la Comisión para que verifique con la

Unidad Técnica de Fiscalización que el formato respectivo de los verificadores incluya la firma correspondiente. \_\_\_\_\_

Esa parte me parece subsana la preocupación que de manera legítima expresan aquí los representantes de los partidos políticos; y la otra es ver cómo vamos a operar con el nuevo Sistema donde, insisto, desde la acreditación de los representantes ante las Mesas Directivas de Casilla, los partidos políticos van a indicar si esa relación es gratuita con cargo a militancia, o bien si es una participación que esté pagada por los propios partidos políticos obviamente el formato también tiene nuevas características, es un formato que en los Lineamientos está descrito cuáles son los contenidos centrales, hemos reducido de manera sensible el universo tan abigarrado de requisitos que traíamos para esos formatos. \_\_\_\_\_

Entonces, sería de la idea de que el Proyecto de Resolución puede ser aprobado, pero con la condición de que estos formatos se rehagan, que se incluya esa firma de los verificadores para certeza obviamente de los partidos políticos y, me parece que tendríamos que atenernos a las nuevas condiciones en las cuales se va a hacer la comprobación de la gratuidad, en su caso, o bien del pago que se le hace a los representantes de los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenas tardes a todas y a todos. \_\_\_\_\_

Solo para manifestar que acompaño la propuesta que proviene de la Comisión de Fiscalización, simplemente anotaría que la esencia de este criterio que se está discutiendo, ya lo conocemos en materia de Procedimientos Ordinarios Sancionadores, es relevante la espontaneidad de respuesta cuando acudimos a ciudadanos, ese elemento aquí está presente, y diría incluso que el número coincidente de respuestas también es relevante. \_\_\_\_\_

Usando estos criterios de los que hablaba la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala de máximas de la experiencia, es evidente que no podía haber habido una inducción a tantas personas para que contestaran en perjuicio de los partidos políticos, no podría concebirse ese escenario, entonces, el tema de espontaneidad y el tema de un gran número de muestras, y dentro de ellas, coincidencias en los cuestionarios, a tal grado que se dijo aquí en un Municipio fue el 100 por ciento de las casillas, me parece que sostiene el criterio que aquí se ha estado discutiendo.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid, representante del Partido de la Revolución Democrática.\_\_\_\_\_

**El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Sí, nada más para coincidir con la preocupación de todos los colegas representantes de los partidos políticos, pero también reconocer la obligación que tenemos de ser fiscalizados y lo que preocupa es el precedente o el criterio que pueda generarse si no hay certeza también para los partidos políticos, en razón de que, en muchas ocasiones, los Representantes de Casilla lo hacen de manera voluntaria y que esto deberíamos de tener en igualdad de condiciones, tanto el auditor como los formatos, la forma idónea de probarlo y de acreditarlo, con el propio recibo que el partido político tenga.\_\_\_\_\_

Para ello, me parece que será importante que se generen Lineamientos para los propios verificadores, auditores y que no se pueda prestar a cuestiones unilaterales o subjetivas, que pueda llegar a afectar, incluso rebases de topes de campaña; ésta es una genuina preocupación para el proceso que vamos a tener. Por eso digo que no son los montos, sí hay que atender los tiempos, sino más bien, hay que prevenir el proceso mayor que viene y que son grandes cantidades de recursos y que la realidad los partidos políticos y la coaliciones, por lo complejo de ser una elección concurrente, tenemos que ver cómo vamos a rendir las cuentas y los montos, pero también tener



certeza del desempeño y de la objetividad y la legalidad con la que van a actuar los auditores. \_\_\_\_\_

Por eso propongo que se generen Lineamientos y que este punto lo podamos también volver a discutir ya en un momento para tener los Lineamientos que den certeza y cumplir con la fiscalización y los tiempos que prevé el propio Reglamento. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la Candidata Independiente Margarita Ester Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. representante de la candidata independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Ciudadana Fernanda Caso Prado:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Muy buenas tardes. \_\_\_\_\_

Es básicamente una pregunta. Consultar si se tiene previsto utilizar el Sistema de Verificación en Línea para hacer este tipo de consultas que permitiría obtener la captura de una fotografía de la casilla en la que se está levantando la encuesta, una fotografía tal vez del propio representante, si éste lo permitiera. Tener mayores elementos de comprobación que pudieran darle certeza a los partidos políticos y, en su caso, incluso implementar algún Sistema similar al que se utilizó para la captura de las firmas de los apoyos ciudadanos que permitiera en la propia aplicación levantar la firma del representante del partido político que pudiera corroborar la aceptación de estos dichos que se asientan. \_\_\_\_\_

Es una consulta, saber si se ha discutido o si se prevé como posibilidad. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señora representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Sí, nada más para brevemente hacer una referencia a lo que comentaba la Consejera Electoral Claudia Zavala respecto de las reglas de valoración de pruebas. \_\_\_\_\_

Creo que, ahí también aparte de atender a las reglas de la experiencia, también es importante considerar que hay un principio de derecho cuando en casos de duda el famoso in dubio pro reo que en caso de duda se debe de absolver al reo. \_\_\_\_\_

Si en este caso existe una duda y la duda es razonable, tendrá que absolverse al partido político, sobre todo si estamos partiendo de 2 manifestaciones que provienen de una misma persona no del partido. \_\_\_\_\_

Porque aquí el partido político no es el que está mintiendo, es muy probable que quien nos esté mintiendo sea el propio ciudadano que está acudiendo como representante de casilla o representante general. \_\_\_\_\_

Eso es también una regla que existe en el derecho para poder resolver y determinar en justicia una circunstancia que se presenta dudosa. \_\_\_\_\_

Es nada más para hacer referencia a eso. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Licenciado Berlín Rodríguez Soria La Consejera Electoral Claudia Zavala desea hacerle una pregunta, ¿La acepta usted? \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:** Sí, claro. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Gracias, representante. \_\_\_\_\_

Fíjese que me llama la atención que invoca el principio de presunción de inocencia. \_\_\_\_

En mi argumentación estoy trabajando los principios para la valoración de la prueba y las cargas probatorias. \_\_\_\_\_

De acuerdo con el principio que invoqué en carga probatoria no en responsabilidades administrativas, porque aquí no estamos en el tema de responsabilidades administrativas, justo la carga de la prueba, el principio de presunción de inocencia se revierte frente al ordinario. \_\_\_\_\_

Lo ordinario se presume, lo extraordinario se prueba. Son presunción de inocencia y las reglas ordinarias en carga de la prueba. \_\_\_\_\_

¿No usted cree que en este caso estamos específicamente en valoración de pruebas y tenemos que atender a los principios de carga probatoria? \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Sí, claro, creo que en un primer momento sí hay que atender a esa regla de la valoración de pruebas y de las cargas de las pruebas que tiene cada parte, pero al final en caso de que haya duda sí tendría que atenderse a un principio, en caso de duda absolverse al reo. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Creo que, aquí no es el problema de en qué número de casillas se hizo la entrevista o no, ese no es un problema. Tampoco lo que han dicho algunos otros compañeros de que en 2015 teníamos este criterio, no, lo que pasa es que ni siquiera teníamos un formato de representantes, estamos en una situación totalmente distinta. \_\_\_\_\_

Ahora, no es el monto involucrado lo importante, aquí es el criterio, ¿Por qué? Porque en el caso de la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática se supone que se pagaron 2 mil 500 pesos a los representantes, y la sanción es de 3 mil 750, sí es un monto muy bajo. En el caso de Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, son 5 mil 540 lo que se supone que se pagó, y la sanción sería 8 mil 300. \_\_\_\_\_

Entonces si hay alguien que dice que el monto es muy menor, entonces si es tan menor, hay que quitar la sanción, eso tendría que ser la conclusión. \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho la Consejera Electoral Claudia Zavala, nada más que no con la conclusión, ¿Por qué? Efectivamente, tenemos 2 documentos que son firmados por exactamente la misma persona, este documento que es el comprobante de representación está firmado por la persona que iba fungir como representante, el cuestionario de la entrevista también está firmado por la persona que iba a fungir como representante. \_\_\_\_\_

Por eso está la contradicción, en uno dice que va ser de manera gratuita en el comprobante, y en otro dice que supuestamente le pagaron. Por eso tenemos que hacer la constatación de o cuál documento le vamos a dar mayor valor probatorio. \_\_\_\_

Ahora, si lo que importa es lo ordinario, si ustedes revisan lo que sucedió en la Coalición Partido Acción Nacional-Partido de la Revolución Democrática, de 46 entrevistas que se hicieron a los representantes solamente 3, o sea el 6 por ciento dice que le pagaron, y todos los demás dicen que no lo pagaron. Entonces lo ordinario tendría que ser que no les pagaron, y que estas personas por alguna circunstancia, que desconocemos, dijeron que sí, pero que tampoco lo acreditaron, esa tiene que ser la cuestión, sobre todo, vuelvo a insistir, en el caso de la casilla, de Manuel Jaret Delgadillo Rodríguez, que él dice, ¿Recibe pago por ser representante? Dice que sí, 1 mil pesos, pero dice: Aclaro que no se ha recibido el pago. \_\_\_\_\_

Entonces a lo mejor había una promesa de pagar, tal vez pudo haber existido, no lo sé, pero lo cierto es que él mismo está diciendo que ni siquiera recibió el pago. Eso es lo importante de estas cuestiones. \_\_\_\_\_

Ahora, no coincido tampoco en el hecho de que porque simplemente existe un oficio que ordena la verificación eso ya le da valor a este documento, ¿Por qué? Porque no tiene la firma del verificador. Tampoco tenemos un Acta donde conste que el verificador estaba haciendo precisamente esta entrevista, que esto fue lo que firmó la persona, el representante, pero que él en su Acta estuvo levantando circunstancias de modo, tiempo y lugar, que él identificó muchas cosas más para poderle dar un valor probatorio mayor a este documento.\_\_\_\_\_

Entonces, insistiría, creo que en ese caso concreto estamos ante una persona que está manifestando una cuestión de que iba a desempeñarse como representante de manera gratuita y otra donde dice que le iban a pagar, sin tampoco aportar ningún elemento de prueba que acredite esa circunstancia.\_\_\_\_\_

Vuelvo a repetir, en el caso, por lo menos, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, de 46 entrevistas, solamente 3 dicen que sí les pagaron y todos los demás dicen que no les pagaron.\_\_\_\_\_

También les decía que había una inconsistencia en relación con la cantidad de dinero que recibieron por alimentos.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

En la Comisión de Fiscalización la verdad es que no caímos en esos 1 mil pesos que se declararon de alimentos, tampoco nos lo señaló en su momento la Consejera Electoral Adriana Favela, creo que tiene razón, hay que incorporarlo también para ser congruentes.\_\_\_\_\_

Por otro lado, quisiera, simplemente hacer un recordatorio de cuál ha sido el tema de los Representantes de Casilla; tuvimos 4 oficiosos de las 4 elecciones ordinarias del año pasado, y ahí encontramos que los partidos políticos omitieron declarar gastos

que se comprobaron en esos procedimientos por 21.5 millones de pesos. Es decir, esto de que hay un Representante de Casilla que va gratuito y de repente como que se llena de maldad y cuenta que el partido político le pagó, me parece una explicación un tanto fantasiosa. O que es algo tan improbable que un Representante de Casilla cobre después de hacer su trabajo; no, los propios representantes de los partidos políticos nos dijeron: “oye, es que el problema es que algunos no se presentan, por eso les pagamos ya que hagan su trabajo” me parece bien. \_\_\_\_\_

Entonces, que sea disparatado que digan: “Me dijeron que me iban a pagar 1 mil pesos cuando acabara, me tuve que presentar en la casilla, tuve que llevar el Acta de Representación, que es lo que le hace falta al partido político”, Me parece totalmente normal y legítimo, es decir, de toda legitimidad. \_\_\_\_\_

Pero, entonces, el que se esté tratando de construir un discurso de victimización de los sujetos obligados por el hecho de que nosotros tomemos providencias para simplemente no dar por bueno el 100 por ciento de los recibos sin más, porque dicen: “trae la firma, ¿la Verificaron?”. A ver, ustedes nos mandan los recibos, los formatos, y esa firma no la llevamos con un perito grafoscópico para después dárselas por buena, actuamos de buena fe, y es la misma firma que recabamos del representante que ustedes acreditaron, y bien lo dice la Consejera Electoral Adriana Favela, la gran mayoría confirma el dicho de los partidos políticos, pero cuando resulta que no, nosotros no volteamos hacia otro lado, porque hemos detectado, y ahí están los oficiosos de 2017, que hay una práctica en la que han incurrido los distintos partidos políticos, y no estoy levantando falsos, porque ahí están las conclusiones de esta autoridad y las confirmaciones del Tribunal Electoral, en la enorme mayoría de los casos de que los partidos no suelen reportar los recursos que en efecto pagan, y tan es así que el caso ASISMEX que resolvimos este año es de una trama de financiamiento paralelo para pagar la representación en las casillas, no digo que todo mundo vaya a incurrir en eso, lo que digo es que la autoridad debe de verificar el dicho de los partidos políticos y hay una fórmula para que esto no nos genere un problema nunca más, que los representantes que ustedes declaran gratuitos lo sean y

que los que pueden decir que les pagaron, no lo digan ellos, también lo digan ustedes y comprueben cómo les pagaron y eso es totalmente legal y correcto.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Licenciado Javier Náñez Pro:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Buenas tardes a todas y todos.\_\_\_\_\_

Quisiera coincidir y diferir en ciertos puntos con lo manifestado por algunos Consejeros Electorales. Primero que nada, manifiesto coincidir con la parte de la firma, de que basta con la firma de la persona a la cual le hicieron esta verificación en persona para acreditar que realmente sí era esa persona, sí me parece suficiente que esté esta firma y no necesariamente la firma del verificador.\_\_\_\_\_

Por otro lado, y con una preocupación de este tipo de verificaciones que se hace sobre la legitimidad de lo que ya han manifestado anteriormente los ciudadanos en algún escrito o de alguna otra forma, sí me preocupa y no nada más en lo que respecta a los Representantes de Casilla, porque este método de verificar la veracidad de los dichos de ciudadanos en el tema que acontece, no nada más sucede en el tema de los Representantes de Casilla, también se utiliza en otros procesos como, por ejemplo, en la etapa de recolección de apoyo ciudadano de los independientes, incluso y en otros muchos, en otras etapas en donde también se vaya a verificar si realmente costó o no costó algo y si representó esto una omisión o no de algún candidato, de algún partido político con relación a los gastos que tiene permitidos o no.\_\_\_\_\_

En este sentido, quisiera manifestar que me parece insuficiente que una sola declaración de un solo ciudadano tenga el poder suficiente como para generarle de

manera inmediata y sin la convicción de mayores elementos una sanción a un ente político, ya sea partido político o Candidato Independiente, que solamente la propia voz de la persona que diga: “ah, no, siempre sí me pagaron”, ya sea más que suficiente sin ningún elemento adicional, sin algún recibo, sin testigos adicionales de la persona como para que eso sea suficiente para ya imputarle una sanción, porque estamos hablando de Derecho Administrativo sancionador que tiene principios equiparables a los del Derecho Penal por Jurisprudencia de la Suprema Corte.\_\_\_\_\_

Entonces, no es poca cosa los elementos probatorios que se utilicen para generarle una sanción, una responsabilidad a un ente político ya sea partido político o ya sea un Candidato Independiente, creo que debiese de estar fortalecido, probatoriamente hablando con elementos que complementen el dicho del ciudadano, porque partiendo de una buena fe, no tendrían por qué mentir en primer lugar, pero si vas a usar eso para sancionar a un partido político por no haber declarado un gasto, considero que debiera de haber elementos adicionales, porque si no, consideraría que existe una alta posibilidad de que, en juicio, si se llega a impugnar, simplemente vaya a haber una carencia de elementos probatorios como para que se sostenga este criterio que está en este momento proyectando tomar esta Consejo General del Instituto Nacional Electoral.\_\_\_\_\_

Ésta es mi opinión y la manifiesto porque pienso que esto puede extrapolarse, no solamente al tema de los Representantes de Casillas, sino, en general a cualquier procedimiento de verificación que haga la Unidad Técnica de Fiscalización sobre partidos políticos y/o Candidatos Independientes.\_\_\_\_\_

Muchas gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_



Se ha dicho en esta mesa que en estos casos el partido político no es el que está mintiendo, que quien probablemente está mintiendo es el ciudadano, pregunto: ¿Por qué mentiría el ciudadano? ¿Qué razón habría para mentir? Hago la misma pregunta: ¿Por qué mentiría el partido político? Porque esto se suma a topes, y entonces empezamos a hacer un recuento histórico, les propongo que hagamos un recuento histórico.\_\_\_\_\_

Antes de 2012, los gastos de representación ante la Casilla siempre se habían considerado, no lo decía en ningún lugar, pero se habían considerado gastos ordinarios, casualmente ahí siempre se reportaban gastos, casualmente.\_\_\_\_\_

De pronto vino, en 2012, el caso MONEX, que tuvo que ver con gastos que se dijo que se destinaron al pago de representación, y en una discusión muy amplia, en el Consejo General del Instituto Federal Electoral se terminó diciendo que eso era un gasto de campaña, por circunstancias particulares.\_\_\_\_\_

A partir de eso, y fueron varios millones, y a partir de eso se modifica, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pasamos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales deciden los partidos políticos, es un gasto ordinario, conoce la Corte y la Corte dice: “no es un gasto que es exclusivo de campaña, por ende, suma a topes, tiene que considerarse como gasto de campaña”. ¡A que no saben qué, “por obra y gracia del espíritu santo” o por arte de magia, resulta que ya nadie le paga a los representantes! Aquello por lo que siempre se pagaba, ahora resulta que nunca se paga, claro, seguimos teniendo los mismos problemas, porque seguimos teniendo a funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que nos renuncian, señalándonos que los partidos les pagan más por llevar a cabo la representación; seguimos teniendo ese esquema, incluso tuvimos que modificar los Lineamientos para la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, para establecer un momento en el que no podían pasar de ser designados como funcionarios a ser representantes de partido político ante una Casilla o como Representantes Generales.\_\_\_\_\_

Todo esto no surgió porque alguien tuviera mucha imaginación y pensara que tal vez eso iba a ocurrir, fue el transcurso de los acontecimientos, después, bien se señala, el caso de los oficiosos del año pasado, también ahí se identificó que habían gastos que no habían sido reportados por parte de los partidos políticos, y es en ese contexto también en el que estamos haciéndonos la misma pregunta: ¿Por qué un representante que está trabajando para un partido político de mala fe y con mala intención va a querer responder un cuestionario de una forma que solo busca perjudicar a aquel que le está pagando o a aquel que no le está pagando pero que tiene tanta cercanía, tanto apego, que está actuando todo un domingo, desde la mañana hasta la madrugada, todo el domingo sin recibir un peso. Pero, aquel por el que está haciendo esa actividad, que le está dedicando el día entero le tiene tan mala fe que va a declarar que sí me pagó cuando dice que no me pagó. Es poco probable que eso ocurriera. \_\_\_\_\_

Pero, si más allá de si es poco probable, si es muy probable con independencia y suscribo toda la discusión acerca de las reglas de la prueba, etcétera, y las cargas probatorias, lo que me parece que no podemos obviar es: Sí tenemos un dicho de un ciudadano. Un dicho del ciudadano que está en la Casilla ese día, el día de la Jornada Electoral, el día que llegó a una hora y se irá varias horas después y ese día nos está diciendo: Sí voy a recibir pago. Sí recibí pago. Se me contrató para realizar estas actividades. \_\_\_\_\_

Ese es el dicho que estamos dando por bueno, el dicho de quien nos señala “sí me van a pagar”, “sí me pagaron”. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante del Partido Revolucionario Institucional. \_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Me preocupa que quede en el ambiente la idea que estamos construyendo un argumento de victimización. \_\_\_\_\_

Hay que recordar que este asunto de representantes, lo que ahora nos une, es un asunto que desde el año pasado nos ha venido disminuyendo como partidos políticos. Recordemos que independientemente de que tanto los partidos políticos como la autoridad han obrado de buena fe, tampoco hay que olvidar que el año pasado en las Elecciones Locales recibimos de la autoridad un correo electrónico en el cual se nos pedía no subir al Sistema algunos datos. \_\_\_\_\_

Eso de inicio nos generó muchas millonarias extraordinarias que después tuvimos que pelear, evidentemente tuvo que cambiar el criterio para que esto cambiara. \_\_\_\_\_

Entonces, no me convence el hecho de que nosotros estemos construyendo este argumento. \_\_\_\_\_

Sí apoyamos el hecho, permítanme decirlo de otra forma. Me queda claro que la autoridad no obra de mala fe, pero tampoco los partidos políticos. O sea, esa idea no debe de quedar en el ambiente. \_\_\_\_\_

Nosotros quedamos en la indefensión cuando en un oficio que tampoco hay que disminuir, no cubre los elementos propios de modo, tiempo y lugar. Eso es lo que ha estado aquí en la mesa. \_\_\_\_\_

Creo que, tenemos el derecho de exponerlo, pero también tenemos el derecho de recordar qué es lo que nos trae aquí. \_\_\_\_\_

Entonces, es el deseo de mi representado apoyar, sin duda, la posición que traen sobre la mesa la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela y el Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Jorge Herrera, representante del Partido Verde Ecologista de México. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido Verde Ecologista de México, Licenciado Jorge Herrera Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Creo que, el tema que nos tiene ahora debatiendo esto, reitero, verdaderamente es trascendente, en reiteradas ocasiones he manifestado, y muchos otros representantes de partido político, que lo que más nos conviene es que tengamos reglas y criterios claros. \_\_\_\_\_

Si en este tema no se están, desde mi punto de vista, agotando los extremos del debido proceso de la legalidad, porque no coincido en que este cuestionario el cual, reitero, respeto el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización, pero no aporta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como debería de ser en un Acta, para que el dicho de esa persona pudiera ser considerado por la autoridad administrativa. \_\_\_\_\_

Creo que, estamos a tiempo de que quede un criterio claro, sin duda, coincido con el representante del Partido Revolucionario Institucional, no estamos tratando de construir un argumento de victimización. No, lo que queremos es que sea un tema que quede claro, eso es lo que queremos, y creo que hemos coincidido todos los representantes de los partidos políticos y algunos Consejeros Electorales en que existe una controversia entre un documento presentado de buena fe por los partidos políticos en el que va la firma y la copia de la Credencial de Elector de quien fungió en ese entonces como representante y, así se llama, un cuestionario levantado in situ en la casilla, y que además habla de un hecho de realización incierta. Creo que ese es el problema. \_\_\_\_\_

Creo que, estamos ante la oportunidad de corregir algo que puede generar un problema más grave, son muchas las casillas que serán instaladas, muchos los representantes, recuerden que ahora, incluso, puede haber 2 propietarios por cada partido político. \_\_\_\_\_

Creo que, es un tema que debemos de cuidar y, sin duda, en el ánimo de que existan menos controversias a futuro. \_\_\_\_\_

Creo que, si quedamos claros, si se puede corregir, porque no se ha dado una valoración, desde mi punto de vista, que agote la carga probatoria de uno y otro documento; podemos llegar a generar un problema gravísimo para el día 1 de julio de

este año. Creo que ese es el clamor que todos tenemos de que esto no vaya a generar una situación que pueda poner en riesgo el resultado de una elección toda vez que un criterio aplicado, como creo que se está aplicando mal, pueda generar un rebase de tope de Gastos de Campaña. \_\_\_\_\_

Estamos en el momento de que quede algo claro, no se trata del monto de las multas, a lo mejor sí son muy bajos que, sin duda, afectan. Creo que, el tema es el criterio que se tiene en cuanto a la valoración que se está haciendo, reitero, los partidos políticos y también la autoridad están obrando de buena fe, vamos a encontrar un criterio, un mecanismo que pueda dar luz de cuál documento puede prevalecer, fortaleciendo este criterio con algo. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Mi premisa no es que existe mala fe, tan es así que de 131 en casillas que se aplicaron los cuestionarios, son muy pocos casos los que tenemos sobre la mesa que tienen que ver con un conflicto de pruebas en contradicción, pruebas, exactamente, y que las reglas de valoración de prueba, son las que me llevan a concederle mayor eficacia probatoria a uno de los documentos que provienen de una misma fuente. \_\_\_\_\_

Creo que, el ejercicio que se hizo, generalmente todos dijeron que no se les pagó, por eso no tenemos mayores conflictos que estos que están sobre la mesa. \_\_\_\_\_

Me ha aclarado la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que en los casos del Partido de la Revolución Democrática sí existen algunos formatos, vamos, más allá de si existen o no los formatos, la misma base argumentativa tendría que ser valorada; propondría que el esquema argumentativo de los Proyectos cambiara para hacer esta valoración en ese sentido, de que tenemos la misma fuente de prueba, de que existe el medio de prueba, entra en contradicción y que, posteriormente debemos aplicar, atendiendo las reglas de la lógica y la sana crítica la valoración de la prueba,

atendiendo a las cargas probatorias que se debe dar para que el esquema argumentativo quede claro en cuanto a que es lo que se confronta y cómo se está valorando la eficacia probatoria de estos formatos. \_\_\_\_\_

Me parece que podría caminar, porque coincido con el criterio que estamos haciendo, no la forma en que lo estamos presentando, sobre todo, porque en una parte se habla y se dice de una falsedad, me parece que no hay falsedad en los documentos, lo que hay son manifestaciones opuestas de una misma persona en estos documentos y en esta representación. \_\_\_\_\_

Entonces, tener claro que no estamos en un procedimiento administrativo sancionador, lo que estamos aplicando aquí es un Procedimiento de Fiscalización en el que lo que lleva implícito es el cumplimiento de obligaciones y la consecuencia jurídica por el incumplimiento de esas obligaciones. \_\_\_\_\_

¿Es ilícito pagar a los representantes de los partidos políticos? No, no es ilícito, estamos en otro nivel de problema; es lícito destinar eso, y efectivamente, afortunadamente ahora el Modelo para las elecciones que vienen es diferente, ya está de conocimiento, fue votado en este Consejo General, ya tenemos conocimiento de lo que va a ser. \_\_\_\_\_

Creo que aquí, tampoco, no hay una incertidumbre, a los representantes de los partidos políticos en Veracruz se les anunció que el día 18 iban a ir la autoridad a aplicar unos cuestionarios para revisar el pago respecto de los Representantes de las Casillas. Todos los representantes tuvieron claridad de eso, porque la Unidad Técnica de Fiscalización se los hizo saber. \_\_\_\_\_

Quiero que recordemos, el acto de autoridad lleva implícito, salvo cuando se demuestra lo contrario, lleva implícito el principio de validez, y eso es una tesis ya muy consolidada en la Sala Superior, porque lleva implícito la presunción de validez. \_\_\_\_\_

Qué es lo que pasa; se levantaron unos cuestionarios, no se levantó Acta. Lo que reitero es: tenemos la misma fuente, que es la declaración de una sola persona respecto de lo que iba a pasar y lo que pasó ese día, por eso le doy y le concedo mayor eficacia a su declaración segunda en que asume que le pagaron y dice cuánto, y creo que sí en el Proyecto de Resolución debemos de ser muy claros en esa

valoración de prueba porque no estamos presumiendo la mala fe de los partidos políticos o al menos en mi percepción y en mi análisis no es así, al contrario, al haber mayores coincidencias implica eso. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más de manera muy breve. Uno, que no estaría de acuerdo en que se incluyeran ahora nuevos conceptos para imponer alguna sanción en virtud de que, no se le ha dado la garantía de audiencia al sujeto que estuviera implicado, la verdad es que no sé ni de qué partido político se trata pero sí creo que no podríamos ahora en la discusión meter nuevas sanciones o nuevos conceptos de sanción, y por lo demás, creo que el tema realmente se reduce a mejorar estas formas de verificación, a darle mayor garantía de que es una situación de que el verificador sí se acredita como cualquier autoridad que se levanta este formato que se acredita que es el ciudadano que está firmando, en fin, creo que sí habría que cuidar esto, esto sí puede suceder en la Elección del 1 de julio porque sí va a haber verificaciones de lo que digan los partidos políticos en el formato con el QR (Quick Response), va a haber la verificación y es lo que preocupa, creo que esta verificación no sea tan simple como la que se está presentando ahora y que en el momento no sanciona pero sí imponer multas cuando se tenga la duda de cuándo dijo la verdad el ciudadano, porque finalmente también esto se reduce, hay un momento en que está diciendo una cosa y otro momento en que está diciendo otra. \_\_\_\_\_

Entonces, independientemente de que la votación pareciera que no va a ser favorable, creo que sí deben de fortalecerse estas verificaciones con alguna situación que dé más confianza de que tenemos la prueba idónea de cuándo el ciudadano está diciendo una situación y cuando está diciendo otra si cuando se lo dice al partido

político o cuando se lo dice a la Unidad Técnica de Fiscalización, creo que a esto se reduciría. \_\_\_\_\_

Por lo demás, lo que decía la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, creo que también coincido en el sentido de que esta forma de valorar las pruebas entre lo ordinario y extraordinario, lo ordinario en realidad lo que nos están demostrando las entrevistas es que no se paga. En ese sentido, tendríamos que tomar esto en cuenta y no asumir que sí se paga porque en elecciones anteriores y hace muchos años sucedían otras cosas. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Berlín Rodríguez Soria, representante de Encuentro Social. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Encuentro Social, Licenciado Berlín Rodríguez Soria:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más para apuntar, ahí así muy concreto. \_\_\_\_\_

Primero, si le vamos a dar validez a la segunda versión del ciudadano, ¿Qué caso tiene recabar la primera? De entrada creo que ahí hay una falta de criterio. \_\_\_\_\_

Segundo, nosotros en Encuentro Social, hemos esgrimido aquí argumentos de carácter legal, los cuales creemos y estamos haciendo valer la defensa de derechos, jamás hemos aquí establecido un discurso de victimización, simplemente estamos haciendo argumento este derecho, por lo que no aceptamos que se genere un ambiente de esa naturaleza, no queremos entrar en esa dinámica. \_\_\_\_\_

Tercero, de acuerdo en lo que argumentó en su última intervención la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ella mencionaba una serie de circunstancias que ocurren previo a una situación sobre este tema que estamos discutiendo, eso vamos a partir de que suponiendo sin conceder que fuera verdad, eso no justifica que no se deba juzgar conforme a derecho simplemente conservando las garantías que todo gobernado debe tener y que como partido político también gozamos. \_\_\_\_\_



No es tampoco una justificación que porque suceden las circunstancias de la manera que ella las refiere, que por eso ahora tengamos entonces que juzgar e imponer multas, brincándonos las reglas de valoración de pruebas. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Creo que, hacía referencia a la cuestión del apoyo para alimentos que supuestamente dicen las personas que recibieron en efectivo, porque lo que me parece cuesta arriba es que este formato te pueda servir para supuestamente acreditar que le pagaron por ser representante, pero no te sirva para acreditar que se le pagó como gastos de alimentos en efectivo. \_\_\_\_\_

En ese caso tenemos ahí a una persona que se llama Niza Monserrat Hernández Barrios. Pero, desafortunadamente la Unidad Técnica no hizo esta observación en el oficio de errores y omisiones. \_\_\_\_\_

Entonces, creo que eso no se les podría ahora contabilizar a los partidos políticos o no entiendo que lo haya hecho de esa manera. \_\_\_\_\_

Creo que, además es que el problema va a seguir subsistiendo aunque tengamos un nuevo formato y que ya se haya aprobado por el Consejo General, porque va a seguir dándose la circunstancia. \_\_\_\_\_

Si en el formato dicen que fue gratuito o bien, que se le pagó alguna cantidad en concreto, pero si en la entrevista dicen que fue oneroso o no coincide la cantidad que se manifestó en el formato con lo que diga en la entrevista, de todos modos vamos a seguir teniendo el mismo problema. \_\_\_\_\_

Entonces, sí necesitamos mejorar nuestra actividad de verificación y además de este formato tendría que haber un Acta circunstanciada con todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que constara la verificación. \_\_\_\_\_

Pero, de todos modos, al tener esta contraposición entre lo que declaran en un formato que se sube al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y lo que están haciendo en la verificación, me parece que deberíamos de ir con el ciudadano involucrado, y entonces sí que nos dijera: Cuál de estos 2 documentos, cuál de estas 2 manifestaciones es realmente la verdadera para que no quedara ninguna duda. \_\_\_\_\_  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más para referir que el caso de la persona Niza Monserrat, es de los oficios que se le dio vista al Partido de la Revolución Democrática y en el otro caso de los 1 mil pesos, también se dio vista. Lo que pasa es que la Unidad Técnica de Fiscalización al ser gasto en alimento y al haber una factura en alimento lo había dado por bueno. \_\_\_\_  
Ahora que se revisa que la declaración es haberlo recibido en efectivo y la factura es que se entregó en especie el alimento no puede ser el mismo y por eso es que habiéndose observado, lo único que estaríamos cambiando es el criterio que la valoración que hizo de la respuesta, la Unidad Técnica de Fiscalización en su momento porque no lo hicimos en la Comisión, no habíamos caído en cuenta, pero estamos a tiempo de corregirlo. \_\_\_\_\_

Ahora, diría, si nosotros decimos que hay que quedarnos siempre con el dicho del partido y que no lo podemos revisar ni contrastar, estaríamos renunciando a todo el Modelo de Fiscalización, es que sería quedarnos de brazos cruzados, y toda declaración del partido es válida, para qué hacemos verificación de espectaculares, para qué contrastamos con el Sistema Bancario, con el Servicio de Administración Tributaria si las facturas fueron emitidas, no a ver, actuamos de buena fe, pero la buena fe no se traduce en una autoridad omisa en su obligación de revisar la veracidad. \_\_\_\_\_

Solo en los casos en donde hay diferencia entre lo que en un primer momento dicen los actores políticos y la evidencia que se recaba, entonces eso se observa en el oficio de errores y omisiones, se da derecho de audiencia, y cuando no quedan satisfechas las observaciones de la autoridad se sanciona como en este caso. \_\_\_\_\_  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral **Ciro Murayama**. \_\_\_\_\_

Al no haber intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. .

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Con gusto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Les propongo a ustedes 3 votaciones, una por lo que hace a la propuesta del Diputado Jorge López Martín, a fin de retirar el Proyecto. \_\_\_\_\_

¿Ya la retiró? Perfecto, entonces queda fuera. \_\_\_\_\_

Tendríamos 2 votaciones, una en lo general, separando de esta votación en lo general las conclusiones una de 4, de acuerdo en la exposición de la Consejera Electoral **Adriana Margarita Favela** para ser esto votado en lo particular. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Dictamen Consolidado y que presenta la Comisión de Fiscalización y Proyecto de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 6.1, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente y excluyendo de la misma las Conclusiones 1 y 4. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, de aprobarlo en lo general, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. \_\_\_\_\_

11 votos. \_\_\_\_\_

Aprobado en lo general por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado **Enrique Andrade González**, Maestro **Marco Antonio Baños Martínez**, Doctora **Adriana Margarita Favela Herrera**, Doctor **Ciro Murayama Rendón**, Doctor **Benito Nacif**

Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Ahora someto a su consideración las Conclusiones 1 y 4 con los argumentos de la Consejera Electoral Claudia Zavala para fortalecer la argumentación en los términos por ella presentado, y la propuesta del Consejero Ciro Murayama para considerar los 1 mil pesos a los que hizo referencia en su segunda intervención, impactando a la Conclusión 1, como se ha señalado. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, del sentido del Proyecto con estas consideraciones, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Son aprobadas las Conclusiones 1 y 4 por 9 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 2 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Doctora Adriana Margarita Favela Herrera), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. \_\_\_\_\_

**INE/CG402/2018**\_\_\_\_\_

**Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña al cargo de Presidente Municipal en los Municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.**\_\_\_\_\_

**(Texto de la Resolución aprobada INE/CG403/2018) Pto. 6.1**\_\_\_\_\_

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018**

**VISTO** el Dictamen Consolidado que presenta la Comisión de Fiscalización al Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Presidente Municipal en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

**ANTECEDENTES**

- I. Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce, se reformó el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone, en su Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo, que el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos. Asimismo, es autoridad en materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento, así como profesional en su desempeño, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- II. En el citado Decreto, en su artículo 41, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 6, así como penúltimo párrafo del mismo Apartado, se establece que corresponde al Consejo General del Instituto Nacional Electoral la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, así como de las

campañas de los candidatos, relativas a los Procesos Electorales -federal y locales.

- III. El veintitrés de mayo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en cuyo Libro Cuarto, Título Segundo, Capítulos Cuarto y Quinto, se establecen las facultades y atribuciones de la Comisión de Fiscalización y de la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, así como las reglas para su desempeño y los límites precisos respecto de su competencia.
- IV. En sesión extraordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG663/2016, por el que se aprueba el calendario y plan integral de coordinación de los Procesos Electorales Locales 2016-2017.
- V. En sesión extraordinaria celebrada el siete de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG664/2016, por el que se ratifica a las consejeras y los consejeros electorales de los cuatro Consejos Locales de las entidades de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz para los Procesos Electorales Locales 2016-2017.
- VI. Mediante decreto de la Sexagésima Tercera legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz, el primero de julio de dos mil quince, se expidió el Código Número 577 Electoral para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- VII. En sesión extraordinaria celebrada el siete de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG238/2016, por el que se aprueba el Plan y Calendario integral para el Proceso Electoral Ordinario 2016-2017.
- VIII. En sesión ordinaria celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil dieciséis, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG282/2016, por el que se ajusta el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

- IX.** El veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo INE/CG875/2016, por medio del cual se reformó y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.

En sesión extraordinaria celebrada el quince de marzo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo INE/CG68/2017, por el cual se modificó el Acuerdo INE/CG875/2016, en acatamiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-51/2017 y acumulados.

- X.** El cuatro de junio de dos mil diecisiete, se celebró la jornada electoral correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en la que se eligió a las y los Ediles de los 212 Ayuntamientos del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- XI.** Que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al dictar la sentencia de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, en el juicio SX-JRC-105/2017, determinó declarar la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Sayula de Alemán.
- XII.** En la sesión pública de resolución de este diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, la Sala Xalapa del TEPJF confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) que anuló la elección del municipio de Camarón de Tejeda, por rebase de topes de gastos de campaña.
- XIII.** Que a través de la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, emitida en los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano SX-JDC648/2017 y de revisión constitucional electoral SX-JRC- 117/2017 Acumulados, la Sala Xalapa del TEPJF, revocó, la sentencia de 12 de agosto del presente año, emitida por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de inconformidad RIN-93/2017 y su acumulado JDC 309/2017, que modificó el cómputo municipal, y confirmó la declaración de validez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave, así como la expedición de la constancia de mayoría y validez a favor de las fórmulas de candidatos postuladas por el partido político MORENA. Y declaró la nulidad de la elección de integrantes del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Veracruz de Ignacio de la Llave.

- XIV.** El catorce de diciembre de dos mil diecisiete, el Congreso del estado de Veracruz emitió la Convocatoria a Elección Extraordinaria para los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, Veracruz de Ignacio de la Llave, determinando el inicio del Proceso Electoral Local Extraordinario para el tres de enero de 2018 y el día de la Jornada Electoral para el dieciocho de marzo del mismo año.
- XV.** El veinte de diciembre de diecisiete, al resolver el recurso de reconsideración SUPREC-1378/2017, la Sala Superior del TEPJF determinó que es correcta la interpretación realizada por la Sala Regional Xalapa respecto que dicho rebase fue determinante para el resultado de la elección, ya que se actualizaron elementos constitucionales establecidos en el artículo 41 Constitucional.
- XVI.** El tres de enero de dos mil dieciocho, quedó formalmente instalado el Consejo General del OPLE, y con ello, dio inicio el Proceso Electoral Extraordinario 2018 para la renovación de los integrantes de los Ayuntamientos de los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Organismo Público Local en el estado de Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/CG001/2018, mediante el cual aprobó el calendario para Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

- XVII.** En sesión extraordinaria celebrada el diez de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/CG016/2018, por el que se aprueba el cálculo del financiamiento público de campaña que corresponde a los partidos políticos y candidatura independiente para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.

En sesión extraordinaria celebrada el mismo día, el mencionado Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, emitió el Acuerdo OPLEV/CG018/2018, por el que se aprueba solicitar al H. Congreso del estado de Veracruz, el presupuesto para el Proceso Electoral



Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda.

- XVIII.** El treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG42/2018, por el que se ajustan los plazos para la fiscalización de las precampañas y campaña para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 al cargo para la presidencia municipal, en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- XIX.** En sesión extraordinaria el nueve de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG066/2018, por el que resuelve procedente el registro del Convenio de Coalición Total integrada por los Partidos Políticos Nacionales Acción Nacional y de la Revolución Democrática bajo la denominación “Veracruz, el Cambio Sigue”, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
- XX.** En sesión extraordinaria celebrada el mismo día, el mencionado Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG067/2018, por el que resuelve procedente el registro del Convenio de Coalición Total integrada por los Partidos Políticos Nacionales Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México bajo la denominación “Por un Veracruz Mejor”, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán.
- XXI.** En sesión extraordinaria celebrada el mismo día, el mencionado Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG068/2018, por el que resuelve procedente el registro del Convenio de Coalición Flexible integrada por los Partidos Políticos Nacionales del Trabajo, MORENA y Encuentro Social bajo la denominación “Juntos Haremos Historia”, para el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el municipio de Emiliano Zapata.
- XXII.** En sesión extraordinaria celebrada el quince de febrero de dos mil dieciocho, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, aprobó el Acuerdo OPLEV/CG074/2018, por el que se

determinan los topes de gastos de campaña para la elección de ediles de los tres Ayuntamientos de la entidad federativa en cita, en el Proceso Electoral Extraordinario 2018.

- XXIII.** En la décima primera sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Proyecto que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Presidente Municipal en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018; así como la respectiva Resolución, por cuatro votos a favor de la Consejera Electoral Lic. Pamela San Martín Ríos y Valles, así como de los Consejeros Electorales, Dr. Benito Nacif Hernández, Mtro. Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización el Dr. Ciro Murayama Rendón y un voto en contra de la Consejera Electoral, Dra. Adriana Favela Herrera.

## **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base II, primero y penúltimo párrafos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales; fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y en las campañas electorales; así como ordenará los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten.
2. Que el artículo 41, párrafo segundo, Base IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata que la Ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las reglas para las precampañas y las campañas electorales.

3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41, Base V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Nacional electoral, el cual de conformidad con el Apartado A, primer párrafo de la base en cita, se encuentra dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, siendo principios rectores en el ejercicio de su función la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
4. Que de conformidad con el Apartado B, inciso a), numeral 6; así como su penúltimo párrafo, establece que corresponde al Instituto Nacional Electoral, para los procesos federales y locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos y candidatos, por lo que dichas funciones se encontraran a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. La Ley desarrollará las atribuciones del Consejo para la realización de la función en cita, así como la definición de los órganos técnicos dependientes del mismo, responsables de realizar las revisiones e instruir los procedimientos para la aplicación de sanciones correspondientes. Finalmente, en cumplimiento de sus funciones el Consejo General del no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal, para lo cual contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.
5. Que de conformidad con el artículo 116, fracción IV, inciso a) del referido ordenamiento, establece que las elecciones de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo.
6. Que de conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.
7. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo

General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.

8. Que el artículo 51, numeral 1, inciso t) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como atribución del Secretario Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, preparar para la aprobación del Consejo General, el proyecto de calendario integral de los procesos electorales ordinarios, así como de elecciones extraordinarias, que se sujetara a la convocatoria respectiva.
9. Que de conformidad con el artículo 190, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por conducto de la Comisión de Fiscalización.
10. Que de conformidad con el artículo 192, numeral 1, incisos d) y e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ejercerá las facultades de supervisión, seguimiento y control técnico y, en general, todos aquellos actos preparatorios a través de la Comisión de Fiscalización, quien revisará las funciones y acciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización con la finalidad de garantizar la legalidad y certeza de los procesos de fiscalización.
11. Que de conformidad con el artículo 196, numeral 1 y 428, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Unidad Técnica de Fiscalización es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes que los partidos políticos, aspirantes y candidatos independientes respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de dichos institutos políticos.
12. Que de conformidad con el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracciones I, II y III de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos políticos deberán presentar informes de campaña en los plazos establecidos y con los requisitos de comprobación necesarios, para cada uno de los candidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña,

especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.

13. Que el artículo 80 de la Ley General de Partidos Políticos, establece las reglas a las que se sujetará el procedimiento para la presentación y revisión de los informes de los de los sujetos obligados.
14. Que de conformidad con el artículo 33 fracción XXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, el proceso Ordinario Faculta al Congreso a Convocar a elecciones extraordinarias de Ayuntamientos cuando resulte procedente.
15. Que los partidos políticos y candidatos independientes obligados a presentar los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos que postulen al cargo de Presidente Municipal de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (Ayuntamientos), correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, son aquellos con registro o acreditación local; siendo, por tanto, los sujetos que harán frente a las obligaciones que resultaren de la presente Resolución.

Por tanto, toda mención a los partidos políticos y candidatos independientes, se entenderá realizada a aquellos con registro o acreditación local, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

16. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socio económicas del ente infractor.

Bajo esta tesitura, debe considerarse que los partidos políticos y candidatos independientes sujetos al procedimiento de fiscalización que cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante el Acuerdo OPLEV/CG016/2018 emitido por el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, se les asignó como financiamiento público para actividades extraordinarias en el ejercicio 2018, los montos siguientes:

Sujetos Obligados	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido Acción Nacional	\$ 205,457.00
Partido Revolucionario Institucional	\$ 182,527.00
Partido de la Revolución Democrática	\$ 85,879.00
Partido Verde Ecologista de México	\$ 77,738.00
Partido MORENA	\$ 178,689.00
Partido del Trabajo	\$ 14,605.00
Movimiento Ciudadano	\$ 14,605.00
Nueva Alianza	\$ 13,656.00
Encuentro Social	\$ 13,656.00

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>	Resolución de la Autoridad	Monto de la sanción	Montos de deducciones realizadas	Montos por saldar	Total por saldar
<b>Partido Acción Nacional</b>	<b>INE/CG592/2016</b>	\$1,440,609.82	\$ -	\$1,440,609.82	<b>\$1,440,609.82</b>
	<b>INE/CG303/2017</b>	\$4,000.97	\$ -	\$4,000.97	<b>\$2,194,425.41</b>
\$30,271.49		\$ -	\$30,271.49		
\$21,839.49		\$ -	\$21,839.49		
\$16,213.91		\$ -	\$16,213.91		
\$11,237.24		\$ -	\$11,237.24		
\$18,300.33		\$ -	\$18,300.33		
\$61,832.44		\$ -	\$61,832.44		
\$54,391.88		\$ -	\$54,391.88		
<b>MONTO QUE CORRESPONDE AL PARTIDO, RESPECTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA DE LA COALICIÓN TOTAL "VERACRUZ EL CAMBIO SIGUE"</b>					

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>	<b>Resolución de la Autoridad</b>	<b>Monto de la sanción</b>	<b>Montos de deducciones realizadas</b>	<b>Montos por saldar</b>	<b>Total por saldar</b>
		\$1,165,626.00	\$ -	\$1,165,626.00	
		\$21,212.69	\$ -	\$21,212.69	
		\$321,058.97	\$ -	\$321,058.97	
		\$205,230.64	\$ -	\$205,230.64	
		\$140,842.96	\$ -	\$140,842.96	
		\$122,366.40	\$ -	\$122,366.40	
		<b>\$3,635,035.23</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$3,635,035.23</b>	<b>\$3,635,035.23</b>
<b>Partido Revolucionario Institucional</b>	<b>INE/CG303/2017</b>	\$8,303.90	\$ -	\$8,303.90	<b>\$19,969,806.51</b>
		\$1,293.62	\$ -	\$1,293.62	
		\$7,751.63	\$ -	\$7,751.63	
		\$236,283.70	\$ -	\$236,283.70	
		\$2,287,347.00	\$ -	\$2,287,347.00	
		\$192,499.50	\$ -	\$192,499.50	
		\$6,925.20	\$ -	\$6,925.20	
		\$126,630.90	\$ -	\$126,630.90	
		\$45,930.78	\$ -	\$45,930.78	
		\$2,729.78	\$ -	\$2,729.78	
		\$54,711.45	\$ -	\$54,711.45	
		\$1,017,974.15	\$ -	\$1,017,974.15	
		\$871,228.34	\$ -	\$871,228.34	
		\$374,935.14	\$ -	\$374,935.14	
		\$7,850.96	\$ -	\$7,850.96	
		\$12,816.05	\$ -	\$12,816.05	
		\$46,978.99	\$ -	\$46,978.99	
<b>MONTO QUE CORRESPONDE AL PARTIDO, RESPECTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA DE LA</b>		\$66,375.68	\$ -	\$66,375.68	

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>	<b>Resolución de la Autoridad</b>	<b>Monto de la sanción</b>	<b>Montos de deducciones realizadas</b>	<b>Montos por saldar</b>	<b>Total por saldar</b>
<b>COALICIÓN PARCIAL "QUE RESURJA VERACRUZ"</b>		\$18,520.87	\$ -	\$18,520.87	
		\$11,713,481.34	\$ -	\$11,713,481.34	
		\$888,441.81	\$ -	\$888,441.81	
		\$1,127,098.21	\$ -	\$1,127,098.21	
		\$117,734.20	\$ -	\$117,734.20	
		\$462,791.28	\$ -	\$462,791.28	
		\$34,760.36	\$ -	\$34,760.36	
		\$238,411.67	\$ -	\$238,411.67	
<b>Partido Revolucionario Institucional</b>	INE/CG302/2017 INE/CG303/2017	\$50,958.06		\$50,958.06	<b>\$50,958.06</b>
<b>COA PRI-PVEM</b>	INE/CG302/2017 INE/CG303/2017	\$127,049.56	\$ -	\$127,049.56	<b>\$127,049.56</b>
<b>Partido Revolucionario Institucional</b>	INE/CG524/2017*	\$7,500.00	\$ -	\$7,500.00	<b>\$3,427,421.97</b>
<b>SANCIONES POR QUEJAS Y OFICIOSOS</b>	Rebase de tope de gasto de Campaña	\$217,260.22		\$217,260.22	<b>\$217,260.22</b>
	Egreso no reportado	\$1,509.80		\$1,509.80	<b>\$1,509.80</b>
		<b>\$20,374,084.15</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$20,374,084.15</b>	<b>\$23,794,006.12</b>
		\$1,437,570.63	\$1,356,158.71	\$81,411.92	
	INE/CG303/2017	\$1,962.74	\$ -	\$1,962.74	
<b>MONTO QUE CORRESPONDE AL PARTIDO, RESPECTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA DE LA COALICIÓN TOTAL "VERACRUZ EL</b>	INE/CG303/2017	\$14,947.02	\$ -	\$14,947.02	
		\$10,761.63	\$ -	\$10,761.63	
		\$7,989.57	\$ -	\$7,989.57	
		\$5,537.27	\$ -	\$5,537.27	
		\$9,017.67	\$ -	\$9,017.67	



En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>					
	Resolución de la Autoridad	Monto de la sanción	Montos de deducciones realizadas	Montos por saldar	Total por saldar
<b>CAMBIO SIGUE"</b>		\$30,468.56	\$ -	\$30,468.56	
		\$26,802.15	\$ -	\$26,802.15	
		\$574,374.00	\$ -	\$574,374.00	<b>\$574,374.00</b>
		\$10,417.62	\$ -	\$10,417.62	
		\$158,227.04	\$ -	\$158,227.04	
		\$101,129.47	\$ -	\$101,129.47	
		\$69,401.79	\$ -	\$69,401.79	
		\$60,297.28	\$ -	\$60,297.28	
<b>SANCIONES POR QUEJAS Y OFICIOSOS</b>	Aportación de ente prohibido	\$13,135.26		\$13,135.26	<b>\$13,135.26</b>
	Egreso no reportado	\$8,756.54		\$8,756.54	<b>\$8,756.54</b>
	Egreso no reportado	\$4,000.97		\$4,000.97	<b>\$4,000.97</b>
	Gastos sin objeto partidista	\$1,056.86		\$1,056.86	<b>\$1,056.86</b>
	Egreso no reportado	\$15,173.49		\$15,173.49	<b>\$15,173.49</b>
	Aportación en especie de persona desconocida	\$53,608.24		\$53,608.24	<b>\$53,608.24</b>
	Egreso no reportado	\$75,180.65		\$75,180.65	<b>\$75,180.65</b>
	Rebase de tope de gasto de Campaña	\$114,874.80		\$114,874.80	<b>\$114,874.80</b>
	Egreso no reportado	\$14,645.06		\$14,645.06	<b>\$14,645.06</b>
	Egreso no reportado	\$11,323.50		\$11,323.50	<b>\$11,323.50</b>
	Egreso no reportado	\$6,794.10		\$6,794.10	<b>\$6,794.10</b>
		<b>\$2,837,453.91</b>	<b>\$1,356,158.71</b>	<b>\$1,481,295.20</b>	<b>\$23,107,010.10</b>

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>	<b>Resolución de la Autoridad</b>	<b>Monto de la sanción</b>	<b>Montos de deducciones realizadas</b>	<b>Montos por saldar</b>	<b>Total por saldar</b>
Monto que corresponde al Partido, respecto de la sanción impuesta a la coalición "Para Mejorar Veracruz"	INE/CG592/2016	\$67,513.31	\$34,242.69	\$33,270.62	\$33,270.62
Partido Verde Ecologista de México	INE/CG303/2017	\$1,509.80	\$ -	\$1,509.80	\$3,915,041.43
		\$2,929,012.00	\$ -	\$2,929,012.00	
		\$122,293.80	\$ -	\$122,293.80	
		\$82,742.61	\$ -	\$82,742.61	
		\$3,971.10	\$ -	\$3,971.10	
MONTO QUE CORRESPONDE AL PARTIDO, RESPECTO DE LA SANCIÓN IMPUESTA DE LA COALICIÓN PARCIAL "QUE RESURJA VERACRUZ"	INE/CG303/2017	\$377.45	\$ -	\$377.45	
		\$674.60	\$ -	\$674.60	
		\$2,472.84	\$ -	\$2,472.84	
		\$3,493.82	\$ -	\$3,493.82	
		\$974.89	\$ -	\$974.89	
		\$616,526.83	\$ -	\$616,526.83	
		\$46,728.31	\$ -	\$46,728.31	
		\$59,327.20	\$ -	\$59,327.20	
		\$6,197.19	\$ -	\$6,197.19	
		\$24,360.00	\$ -	\$24,360.00	
		\$1,829.69	\$ -	\$1,829.69	
		\$12,549.30	\$ -	\$12,549.30	
Partido Verde Ecologista de México	INE/CG302/2017	\$11,854.36	\$ -	\$11,854.36	\$11,854.36
	INE/CG303/2017				

En este sentido, el partido político cuenta con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica: <b>PARTIDO POLÍTICO</b>					
	Resolución de la Autoridad	Monto de la sanción	Montos de deducciones realizadas	Montos por saldar	Total por saldar
COA PRI-PVEM	INE/CG302/2017 INE/CG303/2017	\$127,049.56	\$ -	\$127,049.56	\$127,049.56
		<b>\$4,121,458.66</b>	<b>\$34,242.69</b>	<b>\$4,087,215.97</b>	<b>\$4,087,215.97</b>
		\$20,001,075.50	\$1,186,758.08	\$18,814,317.42	<b>\$45,395,639.68</b>
		\$1,391,280.70	\$ -	\$1,391,280.70	
		\$1,750,949.23	\$ -	\$1,750,949.23	
		\$5,789,592.47	\$ -	\$5,789,592.47	
		<b>\$2,119.32</b>	\$ -	\$2,119.32	
		<b>\$5,812,708.75</b>	\$ -	\$5,812,708.75	
		\$213,752.01	\$ -	\$213,752.01	
		\$4,797,324.24	\$ -	\$4,797,324.24	
		\$82,932.38	\$ -	\$82,932.38	
		\$2,421,566.24	\$ -	\$2,421,566.24	
		\$3,865,988.03	\$ -	\$3,865,988.03	
		\$453,108.89	\$ -	\$453,108.89	
	INE/CG302/2017 INE/CG303/2017	\$420,931.75	\$1.00	\$420,930.75	<b>\$420,930.75</b>
		<b>\$47,003,329.51</b>	<b>\$1,186,759.08</b>	<b>\$45,816,570.43</b>	<b>\$45,816,570.43</b>
Partido del Trabajo	INE/CG657/2016	\$4,962,236.18	\$464,990.00	\$4,497,246.18	<b>\$4,497,246.18</b>
	INE/CG302/2017 INE/CG303/2017	\$1,452.00		\$1,452.00	\$1,452.00
		<b>\$4,963,688.18</b>	<b>\$464,990.00</b>	<b>\$4,498,698.18</b>	<b>\$4,498,698.18</b>

Visto lo anterior, esta autoridad tiene la certeza que los partidos políticos y candidatos independientes con financiamiento tienen la capacidad económica suficiente con la cual pueden hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérsele en la presente resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos y candidatos independientes, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

Cabe señalar que, en el caso de las sanciones impuestas a los partidos políticos y candidatos independientes con acreditación local considerando la capacidad económica del ente nacional, la ejecución de las sanciones se realizará por la autoridad electoral nacional, por lo que se procederá al cobro de las sanciones conforme a los criterios establecidos por el Instituto Nacional Electoral para los efectos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ahora bien, por lo que hace a la capacidad económica de los partidos políticos y candidatos independientes que recibieron financiamiento público estatal, con la finalidad de no afectar las actividades ordinarias del mismo, el pago de las sanciones económicas que en su caso se impongan se realizará en términos del Acuerdo INE/CG61/2017.

Esto es, las sanciones económicas impuestas con base en la capacidad económica estatal, deberán ejecutarse por el Organismo Público Local de la entidad federativa, para lo cual dicho organismo deberá considerar, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, apartado B del Acuerdo INE/CG61/2017, lo siguiente:

- Una vez que las sanciones impuestas por la autoridad electoral nacional queden firmes, sea por determinación de la autoridad jurisdiccional correspondiente o por que las mismas no hayan sido materia de impugnación, las sanciones se harán efectivas a partir del mes siguiente en que queden firmes.

- De conformidad con lo anterior, el Organismo Público Local deberá llevar el registro de las notificaciones realizadas a los sujetos obligados en la entidad federativa correspondiente, de las sanciones impuestas con cargo al financiamiento público estatal, en los formatos que para tal efecto proporcione la Dirección Jurídica de este Instituto, en cumplimiento del artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

El área competente de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales informará a los Organismos las sanciones que hayan quedado firmes.

Para lo anterior, la Unidad Técnica de Vinculación deberá remitir oportunamente las constancias de notificación correspondientes a la Dirección Jurídica.

- Para la ejecución de las sanciones el Organismo Público Local deberá considerar un descuento económico que no puede exceder del 50% (cincuenta por ciento) del financiamiento público mensual que reciba el instituto político en la entidad para el desarrollo de sus actividades ordinarias.

Conforme lo anterior, el Organismo Público Local fijará las sanciones a ejecutar en el mes correspondiente; considerando en todo momento, que de existir un conjunto de sanciones firmes pendientes de cobro por un importe superior al 50% del financiamiento público del partido político, éstas deberán ser cobradas conforme al orden en que quedaron firmes, en el entendido que no podrá descontarse un importe menor al equivalente al porcentaje antes mencionado; por lo que de acuerdo al monto de sanción, podrá acumular para su ejecución el número de sanciones necesarias hasta que queden completamente pagadas.

- Las sanciones impuestas y cobradas con recursos provenientes del financiamiento público estatal deberán de ser destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación de la entidad federativa correspondiente en términos de las disposiciones aplicables, por lo que se estará a lo establecido en el resolutivo respectivo, en términos de lo dispuesto en

el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

- El Organismo Público Local verificará en el plazo de 15 días hábiles siguientes a que estén firmes las sanciones impuestas a los precandidatos, si los sujetos obligados realizaron el pago de forma voluntaria; para lo cual deberá atender la forma de pago que ordene la presente Resolución; para ello, dicho Organismo pondrá a disposición de los sujetos obligados las formas o procedimientos que les faciliten realizar el pago.
- Los OPLE deberán emitir un informe al corte de cada mes, que contenga las sanciones cobradas en dicho periodo, mismo que será hecho del conocimiento de la Unidad de Vinculación del Instituto, en términos de lo dispuesto en el Lineamiento Sexto, Apartado B, numeral 2 del Acuerdo INE/CG61/2017.

Por otra parte, en caso que las sanciones económicas sean impuestas con base en la capacidad económica federal, deberá procederse en términos de lo dispuesto en el Acuerdo INE/CG61/2017, en lo específico en el Lineamiento Sexto, apartado B, numeral 1, incisos c) y d) en relación al Apartado A del mismo Lineamiento.

17. Que en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán del Veracruz de Ignacio de la Llave, para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

➤ **Coalición “Veracruz, el cambio sigue”**

El Consejo General del Organismo Electoral del estado de Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG066/2018 aprobado en sesión extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la denominación de la Coalición presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación de la Coalición “VERACRUZ, EL CAMBIO SIGUE” para el Proceso Electoral Extraordinario 2018, consecuentemente en dicho convenio se determinó el porcentaje de participación de los partidos integrantes.

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en efectivo, así como el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la coalición será el siguiente:

Origen Partidario del candidato	Partido Político	Financiamiento público para gastos de campana	Porcentaje de Aportación	Aportación	Total	Porcentaje de aportación de acuerdo a los recursos aportados
PAN PRD	PAN	\$205,457.00	100%	\$205,457.00	\$291,336.00	70.52%
	PRD	\$85,879.00	100%	\$85,879.00		29.48%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, '**COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE**'<sup>1</sup>.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

18. Que en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán del Veracruz de Ignacio de la Llave se registró ante el Organismo Público Local, para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

➤ **Coalición “Por un Veracruz mejor”**

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG067/2018 aprobado en sesión extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la denominación de la Coalición presentada por los Partidos

<sup>1</sup>Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación de la Coalición “POR UN VERACRUZ MEJOR” para el Proceso Electoral Extraordinario 2018, consecuentemente en dicho convenio se determinó el porcentaje de participación de los partidos integrantes.

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en efectivo, así como el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la coalición será el siguiente:

Origen Partidario del candidato	Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación	Total	Porcentaje de aportación de acuerdo a los recursos aportados
PRI PVEM	PRI	\$182,527.00	88%	\$160,623.76	\$169,952.32	88%
	PVEM	\$77,738.00	12%	\$9,328.56		12%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, ‘**COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE**’<sup>2</sup>.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

19. Que en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán del Veracruz de Ignacio de la Llave se registró ante el Organismo Público Local, para tal efecto, en el convenio de coalición correspondiente se estableció el monto de recursos que cada uno aportaría.

#### ➤ Coalición “Juntos haremos historia”

<sup>2</sup>Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.



El Consejo General del Organismo Electoral del estado de Veracruz mediante Acuerdo OPLEV/CG068/2018 aprobado en sesión extraordinaria de fecha nueve de febrero de dos mil dieciocho, determinó la procedencia de la denominación de la Coalición presentada por los Partidos Políticos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, bajo la denominación de la Coalición “JUNTOS HAREMOS HISTORIA” para el Proceso Electoral Extraordinario 2018, consecuentemente en dicho convenio se determinó el porcentaje de participación de los partidos integrantes.

Es así que los recursos aportados por los partidos integrantes de la coalición en efectivo, así como el criterio de distribución de las sanciones pecuniarias impuestas a los partidos integrantes de la coalición será el siguiente:

Origen Partidario del candidato	Partido Político	Financiamiento público para gastos de campaña	Porcentaje de Aportación	Aportación	Total	Porcentaje de aportación de acuerdo a los recursos aportados
PT MORENA PES	PT	\$14,605.00	100%	\$14,605.00	\$206,950.00	7.06%
	MORENA	\$178,689.00	100%	\$178,689.00		86.34%
	PES	\$178,689.00	100%	\$178,689.00		6.60%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, ‘**COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE**’<sup>3</sup>.

En consecuencia, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

<sup>3</sup>Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P.R. Electoral, Pág. 128.

20. Que al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-0038/2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9, apartado 1, incisos d) y e), del Reglamento de Fiscalización, cuando se trate de partidos políticos nacionales, los cuales cuentan con representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, opera la regla especial establecida en el numeral 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (en atención al principio de que la regla especial prevalece sobre la general), y la única excepción lo será cuando se acredite que existe engrose, o bien, el partido político no hubiera contado con representantes durante la sesión en la que el órgano electoral haya dictado la resolución, ya sea por la ausencia de sus representantes, o bien, porque no tenga registrados o acreditados, en cuyo caso, se debe notificar en el domicilio que se haya señalado para los efectos.

Que del análisis a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Egresos de los Candidatos a los cargos de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, se desprende que los sujetos obligados, **entregaron en tiempo y forma** (salvo las excepciones señaladas en las irregularidades analizadas en el cuerpo del Dictamen Consolidado y la presente Resolución) **el señalado informe** de conformidad con lo que establecen los artículos 192, numeral 1 incisos c) y l), 196 numeral 1, 199, numeral 1, incisos a), c) d) e) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 25, numeral 1 inciso s); 79, numeral 1, inciso b); 80, numeral 1, inciso d); 81, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; así como 235, numeral 1, inciso a); 237, 243, 244, 245, 246, 247, 289, numeral 1, inciso d); 290, 291, numeral 3; y 296 del Reglamento de Fiscalización.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados -partidos políticos y precandidatos-; así como el cumplimiento de éstos de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto les impone la normativa de la materia y, en su caso, que este Consejo General determine, de conformidad con la Ley de

Partidos, Ley de Instituciones, el Reglamento y demás disposiciones aplicables.

En ese sentido, la autoridad electoral procedió a clasificar y analizar toda la información y documentación presentada por los sujetos obligados, aunado a lo anterior, se realizó la verificación de lo reportado por los institutos políticos con los precandidatos y autoridades y se efectuó una conciliación con la información obtenida del Sistema de Monitoreo de Espectaculares, medios Impresos e internet; por lo que en su caso, se hizo del conocimiento de los entes políticos las observaciones que derivaron de la revisión realizada, mismas que fueron atendidas por éstos en el momento procesal oportuno.

Por lo anterior, habiéndose verificado el cumplimiento de las obligaciones que la normativa electoral les impone a los sujetos obligados, y en virtud que del análisis, revisión y comprobación de los informes respectivos no se desprende conclusión sancionatoria alguna, este Consejo General concluye que no ha lugar a imponer sanción respecto a los Informes de Campaña de los candidatos de partidos políticos y candidatos independientes a los cargos de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán de Tejeda en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, que a continuación se detallan:

- Partido Acción Nacional
- Partido Revolucionario Institucional
- Partido de la Revolución Democrática
- Partido del Trabajo
- Partido Verde Ecologista de México
- Partido Movimiento Ciudadano
- Partido MORENA

21. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; en ese sentido,

la determinación del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización<sup>4</sup> corresponde al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en la presente resolución en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización.

El diez de enero de dos mil dieciocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente a partir del uno de febrero de dos mil dieciocho, mismo que asciende a \$80.60 (ochenta pesos 60/100 M.N.).

En función de lo anterior, al existir una temporalidad de campaña que comienza el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho y culmina el catorce de marzo de la citada anualidad, se considerará para la imposición de las sanciones respectivas, el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha diez de enero de la misma anualidad.

---

<sup>4</sup> La Unidad de Medida y Actualización es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

- 22.** Que de acuerdo con lo establecido en los artículos 44, numeral 1, inciso aa); 190, numeral 2; 191, numeral 1, inciso g); 192, numerales 1 y 2; y 200, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Precampaña respecto de los ingresos y gastos de los precandidatos de los partidos políticos y candidatos independientes a los cargos de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, según el Dictamen que haya elaborado la Unidad Técnica de Fiscalización.

Así, una vez aprobado el Dictamen Consolidado y la Resolución respectiva, se informará al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para que en el ámbito de sus atribuciones, en su caso, ejecute las sanciones económicas impuestas o, niegue o cancele el registro de los precandidatos cuando así se determine.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos y reglas locales -prevaleciendo las Leyes Generales.

- 23.** Que es trascendente señalar que el Dictamen Consolidado es el documento emitido por la autoridad fiscalizadora que contiene el resultado de las observaciones realizadas en el marco de la revisión de los informes de campaña, en las cuales se advierten los errores o irregularidades que se actualizaron con las conductas realizadas por los sujetos obligados y, en su caso, las aclaraciones presentadas para atender cada una de ellas.

Consecuentemente, en la resolución de mérito se analizan las conclusiones sancionatorias contenidas en el Dictamen Consolidado relativo a los informes de precampaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que hace a los sujetos obligados ahí señalados, mismas que representan las determinaciones de la autoridad fiscalizadora una vez que se ha respetado la garantía de audiencia y se han valorado los elementos de prueba presentados por los sujetos

obligados. En tal sentido, el Dictamen Consolidado<sup>5</sup> representa el desarrollo de la revisión de los informes en sus aspectos jurídicos y contables; por lo que forma parte de la motivación de la presente resolución.

En este contexto, el principio de legalidad contemplado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se cumple con precisar la irregularidad cometida y los preceptos legales aplicables al caso; así como la remisión a las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en el Dictamen Consolidado que forma parte integral de la Resolución que aprueba este Consejo General; es decir, tiene como propósito que los sujetos obligados conozcan a detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la conducta, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir en su caso, la decisión de la autoridad, permitiéndole una real y auténtica defensa.

24. Que, conforme a lo señalado en el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizó cada uno de los informes de los sujetos obligados por apartados específicos en los términos establecidos en el Plan de Trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para la fiscalización de las campañas de los partidos políticos, en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

En virtud de lo anterior, la autoridad ejerció sus facultades de revisión, comprobación e investigación, con el objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las diversas obligaciones que en materia de financiamiento y gasto se les imponen a los sujetos obligados por normatividad electoral; y una vez que la autoridad realizó los procedimientos de revisión establecidos por las disposiciones legales y otorgó su garantía de audiencia a los partidos políticos y candidatos independientes, elaboró el dictamen consolidado correspondiente.

Consecuentemente, derivado de la valoración a las observaciones realizadas se analizaron las conductas en ellas descritas y, en su caso, este Consejo General determinará lo conducente respecto de cada una de ellas, de conformidad con la Ley General de Partidos Políticos, Ley General de

---

<sup>5</sup> Cabe señalar que en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-181/2010, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sostuvo que *"Las autoridades, en estricto apego al referido mandamiento constitucional, siempre deben exponer con claridad y precisión las razones que les llevan a tomar sus determinaciones. Ello puede tener lugar en el cuerpo de la propia resolución, o bien, en documentos anexos..."*.

Instituciones y Procedimientos Electorales, el Reglamento de Fiscalización vigente al momento en que sucedieron los hechos y demás disposiciones aplicables.

En este contexto, los entes sujetos de fiscalización que presentaron observaciones e irregularidades en las precampañas a los cargos de los Ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siguientes:

- 24.1 Partido Nueva Alianza.
- 24.2 Partido Encuentro Social.
- 24.3 COA “Veracruz, el cambio sigue”
- 24.4 COA “Por un Veracruz mejor”
- 24.5 COA “Juntos haremos historia”

Así, de conformidad con el Dictamen Consolidado correspondiente, este Consejo General analizará en el orden descrito cada uno de los sujetos obligados por apartados específicos, en los términos siguientes:

#### **24.1. PARTIDO NUEVA ALIANZA.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el Partido Nueva Alianza son las siguientes:

- a) 2 Faltas de carácter formal: **Conclusiones 1 y 7.**
- b) 3 Faltas de carácter sustancial: **Conclusiones 2, 3 y 4.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 5.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 6.**

A continuación se desarrollan los apartados en comentario:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. **Conclusiones 1 y 7**

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
1	<i>"El sujeto obligado omitió presentar las muestras correspondientes."</i>	Artículos 205, 207, numeral 7, 211, 214, numeral 2, 215, numeral 1, inciso f) y 291, numeral 1, del RF.
7	<i>"El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias"</i>	Artículos 54, numeral 4, 5, 6 y 8 59, numeral 1, 96, numeral 1, 102 numeral 3, 127, 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j) y 277, numeral 1, inciso e), del RF.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus



candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el partido haya omitido presentar las muestras correspondientes y presentar la totalidad de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo

establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar

al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>6</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

---

<sup>6</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de*

*presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, la respuesta del partido político no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, partido político, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 16** de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, y en la columna (2) se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
1. El sujeto obligado omitió presentar las muestras correspondientes.	Omisión
7. El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias.	Omisión

#### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron**

El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede identificadas con el número (1), contraviniendo lo dispuesto en los artículos 205, 207, numeral 7, 211, 214, numeral 2, 215, numeral 1, inciso f) y 291, numeral 1, del RF y 54, numeral 4, 5, 6 y 8 59, numeral 1, 96, numeral 1, 102 numeral 3, 127, 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j) y 277, numeral 1, inciso e), del RF. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

<i>"El sujeto obligado omitió presentar las muestras correspondientes"</i>
<i>"El sujeto obligado omitió presentar la totalidad de los estados de cuenta y conciliaciones bancarias"</i>

**Tiempo:** Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, presentados por el referido sujeto.

**Lugar:** Las irregularidades se actualizaron en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.



#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados<sup>7</sup>.

En las conclusiones 1 y 7 el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 54, numeral 4, 5, 6 y 8, 59, numeral 1, 96, numeral 1, 102 numeral 3, 127, 205, 207, numeral 7, 211, 214, numeral 2, 215, numeral 1, inciso f), 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j), 277, numeral 1, inciso e) y 291, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

#### **Reglamento de Fiscalización**

*“Artículo 54.*

*Requisitos para abrir cuentas bancarias*

*(...)*

*4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos registrados en los estados de cuenta bancarios.*

*5. Las partidas de cuentas bancarias no conciliadas se deberán registrar en un reporte denominado “conciliación bancaria”, que deberá revelar el mes que se*

---

<sup>7</sup> En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”*

*concilia y el número de cuenta bancaria, las partidas se deberán clasificar en:*

- a) Cargos del sujeto obligado no correspondidos por el banco.*
- b) Cargos del banco no correspondidos por el sujeto obligado.*
- c) Abonos del sujeto obligado no correspondidos por el banco.*
- d) Abonos del banco no correspondidos por el sujeto obligado. Instituto Nacional Electoral 91*

*6. Se deberá verificar mensualmente que partiendo del saldo en cuentas contables, más la suma de los cargos no correspondidos del sujeto obligado y del banco, menos la suma de los saldos de los abonos no correspondidos por el sujeto obligado y del banco, se llegue al saldo existente en la cuenta bancaria.*

*(...)*

*8. Las cuentas bancarias para precampaña y campaña, podrán abrirse a partir del mes inmediato anterior al inicio del proceso electoral y se deberán cancelar a más tardar durante el mes posterior a la conclusión del mismo.”*

*“Artículo 59.*

*Cuentas bancarias para candidatos*

*1. Para la administración de los recursos en efectivo que los precandidatos y candidatos reciban o utilicen para su contienda, el partido o coalición deberá abrir una cuenta bancaria para cada uno.”*

*“Artículo 96.*

*Control de los ingresos*

*1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.”*

*“Artículo 102.*

*Control de los ingresos en efectivo*

*(...)*

*3. Los estados de cuenta respectivos deberán conciliarse mensualmente, por lo que junto con las mismas conciliaciones se remitirán a la Unidad Técnica cuando ésta lo solicite o lo establezca el Reglamento. La Unidad Técnica*

*podrá requerir que presenten los documentos que respalden los movimientos bancarios que se deriven de sus estados de cuenta...”*

*“Artículo 127.*

*Documentación de los egresos*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*

*3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.”*

*“Artículo 205*

*Muestras de propaganda utilitaria*

*1. Los partidos, coaliciones, precandidatos, aspirantes, candidatos y candidatos independientes, deberán conservar y presentar muestras de la propaganda cuando la Unidad Técnica lo solicite y deberán incorporar en el Sistema de Contabilidad en Línea, una imagen de las muestras referidas.”*

*“Artículo 207*

*Requisitos para la contratación de anuncios espectaculares*

*(...)*

*7. El partido, coalición, aspirante o candidato independiente, deberá conservar y presentar muestras y/o fotografías de la publicidad utilizada en anuncios espectaculares en la vía pública a solicitud de la Unidad Técnica...”*

*“Artículo 211*

*Propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos*

*1. Los comprobantes de los gastos efectuados por los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, en propaganda en diarios, revistas y otros medios impresos, deberán incluir una relación de cada una de las inserciones que ampara la factura, las fechas de publicación, el tamaño de cada inserción o publicación, el valor unitario de cada inserción o publicación y el nombre del candidato beneficiado con cada una de ellas. Los partidos o coaliciones deberán conservar la página completa de un ejemplar original de las publicaciones que contengan las inserciones en diarios, revistas y otros medios impresos que realicen en cada una de las campañas electorales, así como todos aquellos que realicen durante los periodos que comprenden las campañas electorales, aun Instituto Nacional Electoral 187 cuando no se refieran directamente a dichas campañas. Cada una de las inserciones deberá contener la leyenda “inserción pagada” seguida del nombre de la persona responsable del pago. La página con la inserción deberá anexarse a la documentación comprobatoria y presentarse junto con ésta a la Unidad Técnica cuando sea solicitada, en relación con lo señalado en el artículo 76, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos.*

*2. En caso de aportaciones en especie por este concepto, las inserciones deberán contener el nombre del aportante responsable del pago, debiendo coincidir con el nombre indicado en la leyenda “inserción pagada”.*

*“Artículo 214.*

*Propaganda exhibida en salas de cine*

*(...)*

*2. Deberán conservar y presentar muestras del contenido de la propaganda proyectada en las salas de cine...”*

*“Artículo 215.*

*Propaganda exhibida en internet*

*1. Los partidos, coaliciones, aspirantes y candidatos independientes, deberán contar con los contratos y facturas correspondientes a la propaganda exhibida en Internet manifestado en los informes de campaña. Así como una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente:*

*(...)*

*f) Deberán conservar y presentar el material y muestras del contenido de la propaganda exhibida en Internet.”*

*“Artículo 237.*

*Requisitos generales de los informes*

*1. Los informes deberán:*

- a) Incluir la totalidad de ingresos y gastos realizados durante el ejercicio objeto del informe.*
- b) Considerar para su elaboración a la totalidad de registros contables incorporados en el Sistema de Contabilidad en Línea.*
- c) Tener soporte documental de la totalidad de operaciones.*
- d) Ser soportados por balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el Reglamento.*
- e) Presentar la primera versión y última del informe debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas o su equivalente.”*

*“Artículo 243.*

*Sujetos obligados*

*1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal o local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones federales y locales registradas, deberán presentar:*

- a) Informe por la campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.*
- b) Informe por cada fórmula de candidatos a Senadores de la República por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.*
- c) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.*
- d) Informe por la campaña del candidato a Gobernador o Jefe de Gobierno de la Entidad Federativa de que se trate.*
- e) Informe por cada candidato a ocupar cargo en el ayuntamiento, Jefatura Delegacional, Junta municipal o Presidente de comunidad de que se trate.*
- f) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados al Congreso Local o Asamblea Legislativa, de la Entidad Federativa.*

*2. Los candidatos por el principio de representación proporcional que realicen gastos de campaña, deberán presentar el informe respectivo.*

*3. Los gastos reportados por los candidatos plurinominales, deberán identificar la campaña beneficiada de los candidatos de mayoría relativa, los cuáles serán prorrateados entre las campañas beneficiadas de la circunscripción correspondiente, según lo establecido en el artículo 218 del Reglamento.*

*4. Para efecto de las candidaturas comunes y alianzas partidarias, se deberá presentar un informe por cada uno de los partidos políticos integrantes de la misma.”*

*“Artículo 244.*

*Formatos en el que se reportan*

*1. Los informes de campaña deberán reportarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea, con base en los formatos “IC” o “IC-COA”, según corresponda, incluidos en el Reglamento y deberán incluir la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos, desde que éstos son registrados como tales hasta tres días antes de celebrarse la jornada electoral.*

*2. Los partidos políticos y coaliciones deberán presentar los informes de campaña conforme a las reglas dispuestas en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos.*

*3. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, presentarán los informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir del inicio la etapa de campaña, dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de cada periodo.*

*4. El procedimiento para la revisión de los informes se sujetará a las reglas dispuestas en el artículo 80, numeral 1, inciso d) de la Ley de Partidos y 287 del Reglamento.*

*5. El responsable de finanzas al que hace referencia el artículo 43, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos, junto con el candidato, serán responsables del cumplimiento de la presentación de los informes y comprobación de ingresos y gastos reportados, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley de Partidos.”*

*“Artículo 245.*

*Contenido de los informes*

*1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del periodo que se reporta.*

*2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección correspondiente y hasta el fin de las campañas electorales, con cortes parciales cada treinta días.”*

*“Artículo 246.*

*Documentación anexa de informes presentados*

*1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea:*

*(...)*

*j) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas señaladas en el Reglamento, incluidas las establecidas para gastos de campaña, así como las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses que hayan durado las campañas electorales.”*

*“Artículo 277.*

*Avisos a la Unidad Técnica*

*1. Los partidos políticos deberán realizar los siguientes avisos a la Unidad Técnica:*

*(...)*

*e) La apertura de cuentas bancarias o de inversión, de cualquier naturaleza, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54, numeral 2 del Reglamento.”*

*“Artículo 291.*

*Primer oficio de errores y omisiones*

*1. Si durante la revisión de los informes anuales la Unidad Técnica advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo notificará al sujeto obligado que hubiere incurrido en ellos, para que en un plazo de diez días contados a partir*

*del día siguiente a dicha notificación, presenten la documentación solicitada así como las aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes...”*

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el partido político, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.



Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico

descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobando las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en diversas conductas infractoras imputables al ente político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos que participaron en el proceso electoral para ganar un cargo de elección popular.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

#### **a singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta que se traduce en la existencia diversas **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de diversas faltas, las cuales, aun cuando sean distintas y vulneren diversos preceptos normativos, solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de las conductas a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que las faltas de forma cometidas por el sujeto obligado deben calificarse como **LEVES**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las infracciones cometidas, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando **16** de la presente resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de las faltas analizadas.

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que las conductas infractoras fueron cometidas con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culpable de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se ha analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>8</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **20 (veinte)** Unidad de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$1,612.00 (mil seiscientos doce 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así

---

<sup>8</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones 2, 3 y 4.**

A continuación se presentan, las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

### **Monitoreo en internet**

#### **Conclusión 2**

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de producción y edición de 2 videos por un monto de \$3,248.00”.*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de producción y edición de un video**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.



Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

## **Visitas de verificación**

## **Recorridos**

### **Conclusión 3**

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de una hora de perifoneo en 3 vehículos por un monto de \$295.80”.*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de una hora de perifoneo en 3 vehículos**; el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

## Jornada electoral

### Conclusión 4

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyos para transporte y alimentos por un monto de \$270.00”.*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de apoyos para transporte y alimentos**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar

la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la

finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>9</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

---

<sup>9</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para*

*entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel*

*Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.



En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con las irregularidades identificadas en las **conclusiones 2, 3 y 4** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en **omitir reportar gastos realizados por el concepto de Monitoreo en internet, Visitas de Verificación (Recorridos) y Jornada Electoral**, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79,

numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El Partido Nueva Alianza omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a:

Descripción de las Irregularidades observadas
2. <i>“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de producción y edición de 2 videos por un monto de \$3,248.00”. Conclusión 2</i>
3. <i>“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de una hora de perifoneo en 3 vehículos por un monto de \$295.80”. Conclusión 3</i>
4 <i>“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyos para transporte y alimentos por un monto de \$270.00”. Conclusión 4.</i>

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** Las irregularidades se actualizaron en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.<sup>10</sup>

Es preciso mencionar que la *ratio essendis* de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

*“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”*

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no

---

<sup>10</sup> Entenderlo de distinta manera, se traduciría en una actividad inocua, en tanto que los monitoreos carecerían de razón; según se enfatiza en la sentencia recaída al SUP-RAP 133/2012.

obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen los partidos políticos en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues

igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del proceso electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

*“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”*

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los

valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente<sup>11</sup>:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el

---

11 Criterio sostenido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SX-RAP-4/2016

cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valuará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En las conclusiones en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

### **Ley General de Partidos Políticos**

#### *“Artículo 79*

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*



*b) Informes de Campaña:*

*1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;  
(...)"*

### **Reglamento de Fiscalización**

*"Artículo 127*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad."*

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos, vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativas previstas en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas señaladas es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en **faltas de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su

cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150%** (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado **\$3,813.80 (tres mil ochocientos trece pesos 80/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$5,720.70 (cinco mil setecientos veinte pesos 70/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad **\$5,720.70 (cinco mil setecientos veinte pesos 70/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

c) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 5.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **INGRESOS**

### **(Registro de operaciones fuera de tiempo)**

#### **Conclusión 5**

*“5. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 4 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo normal, por un importe de \$7,872.00.”*

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización por un importe de \$7,872.00.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco

días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*”, del Título Octavo “De la Fiscalización de Partidos Políticos” de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior*”.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>12</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de realizar los registros contables en tiempo real, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de

---

<sup>12</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.



responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de*

*informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada

*y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

*Tercera Época:*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala\_Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

### A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 5** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos

realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El Partido Nueva Alianza omitió realizar sus registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al Partido Nueva Alianza, sucedieron durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la

certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión 5 el sujeto obligado en comentario, vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

#### **Reglamento de Fiscalización**

##### **“Artículo 38**

##### ***Registro de las operaciones en tiempo real***

*1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.*

*5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.*

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los registros contables en tiempo real.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y,

en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.



En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 5, es la certeza en el origen y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en una falta **de fondo/faltas** de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando **16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

### **Conclusión 5**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$7,872.00 (siete mil ochocientos setenta y dos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>13</sup>

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.60 (trescientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.)**.

---

<sup>13</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

d) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 6.**

<b>No.</b>	<b>Conclusión</b>	<b>Monto involucrado</b>
6	<i>“El sujeto obligado omitió realizar verazmente el registro contable de 1 operación en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$4,000.00.”</i>	\$4,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, contados a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada; sin embargo, la observación realizada no fue subsanada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación

soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los precandidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, precandidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III del Título Octavo **“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”** de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el partido haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los precandidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones (según la temporalidad), pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de

ingresos y gastos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral), según sea el caso que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos y los precandidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea el partido político o coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>14</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los precandidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es,

---

<sup>14</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los precandidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que*



*realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del sujeto obligado, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación<sup>15</sup>:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es

---

<sup>15</sup> Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia transcrita tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

*inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, la respuesta del partido político no fue idónea para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, partido político, pues éste no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la

individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta **(inciso A)** y, posteriormente, los elementos para la imposición la sanción **(inciso B)**.

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión 6 del Dictamen Consolidado, se identificó que el partido político omitió realizar el registro contable de sus operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a la omisión de cumplir con su obligación de reportar verazmente a la autoridad la temporalidad en la que realizó operaciones contables, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, vulnerando lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

#### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron**

**Modo:** El sujeto obligado omitió reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó operaciones contables, durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que vulneró lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

*“El sujeto obligado omitió realizar verazmente el registro contable de 1 operación en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$4,000.00.”*

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al partido político, surgió del procedimiento de revisión de los Informes de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña relacionados con el proceso electoral mencionado.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado sujeto obligado, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó operaciones contables.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial por no reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó operaciones contables se vulnera la certeza, legalidad y transparencia que constituyen, en una interpretación teleológica, los fines a los que propende la norma transgredida. Debido a lo anterior, el infractor de mérito vulneró los valores antes establecidos y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza y la transparencia en el origen de los recursos.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.<sup>16</sup>

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto

---

<sup>16</sup> Ley General de Partidos Políticos "Artículo 25 1. Son obligaciones de los partidos políticos: a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de los ciudadanos. Reglamento de Fiscalización "Artículo 38 1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento. 5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto".

obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, los artículos citados tienen como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Por su parte, de la lectura del artículo 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos se desprende que los institutos políticos tienen la obligación de conducirse bajo las disposiciones normativas de la materia, siendo garantes en todo momento del cumplimiento de los principios que rigen el Estado Democrático, en este sentido tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y destino de los recursos que se hayan utilizado para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad de tal precepto normativo es tutelar los principios de transparencia y certeza en el uso de los recursos que deben de prevalecer en los procesos federales electorales, al establecer con toda claridad que los partidos políticos tienen las siguientes obligaciones: registrar contablemente sus egresos, soportar

todos los ingresos y egresos con la documentación que expida el sujeto obligado o que sea expedida a nombre de él, con la información de la contraparte respectiva, y entregar la documentación veraz antes mencionada con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables, entre otras.

Del análisis previo, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulnera directamente la certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo sujeto a revisión para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los entes políticos el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

Por tanto, se trata de normas que protegen un bien jurídico de un valor esencial para la convivencia democrática y el funcionamiento del Estado en sí, esto, porque los partidos políticos son parte fundamental del sistema político electoral mexicano, pues son considerados constitucionalmente entes de interés público que reciben financiamiento del Estado y que tienen como finalidad, promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de manera que las infracciones que cometa una institución política en materia de fiscalización originan una lesión que resiente la sociedad e incide en forma directa sobre el Estado.

En este orden de ideas, al actuar voluntariamente fuera de los cauces legales al reportar sin veracidad e intentar engañar a la autoridad fiscalizadora sobre el destino de los recursos, se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales



protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al omitir reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó operaciones contables se obstaculizó la función fiscalizadora de la autoridad electoral con la prontitud y exactitud prevista en la normatividad electoral, es decir, se impidió garantizar la transparencia y claridad necesarias en el manejo de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza como principio rector de la actividad electoral.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, **de forma oportuna**, de las operaciones contables de los sujetos obligados, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales, a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.

Al actuar de forma distinta, el sujeto obligado en cuestión viola los valores antes establecidos y afecta a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva la certeza del adecuado manejo de los recursos.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el partido político vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, las normas transgredidas son de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza, legalidad y transparencia en la rendición de cuentas de los partidos políticos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con la obligación de comprobar el origen y destino de los recursos.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en el artículo 25 numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos con relación al 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

### **Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe considerarse, **GRAVE ORDINARIA**.

### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente.

### **Conclusión 6**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, debido a que no informó con veracidad la temporalidad en la que realizó las operaciones contables.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto infractor, consistió en que omitió reportar con veracidad la temporalidad en la que realizó operaciones contables, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión al Informe de Campaña presentado por el sujeto obligado correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente.
- Que existe culpa en el obrar.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 M.N.).

- Que hay singularidad en la conducta cometida.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>17</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En ese sentido, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al 10% (diez por ciento) sobre el monto involucrado **\$4,000.00 (cuatro**

---

<sup>17</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

**mil pesos 00/100 M.N.), cantidad que asciende a un total de \$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**<sup>[2]</sup>

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Nueva Alianza, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## **24.2. PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el Partido Encuentro Social son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 1.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 2.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 3.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 4.**

---

<sup>[2]</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.

e) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 5.**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 1.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **Candidatos**

### **Agenda de campaña**

#### **Conclusión 1**

*“1. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”*

En consecuencia, al **omitir informar en tiempo y forma los eventos a realizar**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados fueron omisos en presentar respuesta alguna a las observaciones realizadas por la autoridad.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*



De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido informar en tiempo y forma los eventos a realizar, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>18</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es,

---

<sup>18</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que*

*realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, no presentó respuesta alguna que subsanara la irregularidad, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

#### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

##### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, un evento antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización un evento, al haber sido registrados de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>19</sup>

#### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización un evento extemporáneamente a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Descripción de la irregularidad observada
1. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 1 evento de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración. Conclusión 1

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación al artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad

---

<sup>19</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización un evento con anterioridad a la realización de los mismos, pero de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>20</sup>

De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período campaña.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, **de forma oportuna**, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.

---

<sup>20</sup> Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.



Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones.

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide garantizar de forma idónea el manejo de los recursos **de manera oportuna durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta**, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados **en tiempo y forma**, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.

En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.

En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los recursos.

En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada con los ingresos y gastos derivados de sus campañas, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al **SUP-RAP-369/2016**.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 1**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, **un** evento antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.

- Que el sujeto obligado reportó **un** evento con anterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>21</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 10 UMA por cada evento reportado de forma extemporánea a los siete días previos a su realización, es decir **10 (diez)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento

---

<sup>21</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**b)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 2.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **Candidatos**

### **Agenda de campaña**

#### **Conclusión 2**

*"2. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración."*

En consecuencia, al **omitir informar en tiempo y forma los eventos a realizar**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco

días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados fueron omisos en presentar respuesta alguna a las observaciones realizadas por la autoridad.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III **“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”** de presentar ante la autoridad electoral, los informes

correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido informar en tiempo y forma los eventos a realizar, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de



irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>22</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la

---

<sup>22</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la*

*autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen

*acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, no presentó respuesta alguna que subsanara la irregularidad, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, dos eventos con posterioridad a la realización de los mismos, esto es, de forma extemporánea.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización dos eventos, al haber sido celebrados con anterioridad a su registro conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>23</sup>

#### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización dos eventos con posterioridad a su realización, esto es, en forma extemporánea. A continuación se refiere la irregularidad observada:

Descripción de la irregularidad observada
1. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 2 eventos de la agenda de actos públicos, de manera posterior a su celebración. Conclusión 2

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación al artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

---

<sup>23</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización dos eventos con posterioridad a la realización del mismo, esto es, de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>24</sup>

De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período campaña.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, **de forma oportuna**, de la celebración de tales actos públicos y, en

---

<sup>24</sup> Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.

su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.

Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones.

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide garantizar de forma idónea el manejo de los recursos **de manera oportuna durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta**, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados **en tiempo y forma**, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.

En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.

En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los recursos.

En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada con los ingresos y gastos derivados de sus campañas, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.



Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al **SUP-RAP-369/2016**.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago;

así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

## **Conclusión 2**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, **dos** eventos con posterioridad a su realización, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la

autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2018.

- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó **dos** eventos con posterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>25</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 50 UMA por cada evento reportado en la agenda con posterioridad a su realización, es decir **100 (cien) Unidades de Medida y Actualización**, cantidad que asciende a un total de **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00 00/100 M.N.)**.

---

<sup>25</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**c)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, de los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 3.**

Al respecto en la conclusión en comento, de la verificación a los estados de cuenta correspondientes a las cuentas bancarias del partido político, se advirtió el retiro de recursos en efectivo; sin embargo no se advirtió el registro de la salida de los recursos, así como el destino y aplicación de los mismos. En este orden de ideas, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Cabe señalar que se hizo del conocimiento del partido político la conducta infractora en comento, respetándose la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al partido político en cuestión, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes

así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, el instituto político fue omiso en responder en relación con las observaciones analizadas en el presente apartado.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente **SUP-RAP-05/2010**, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por el partido político y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción

que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.<sup>26</sup>

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)<sup>27</sup>**

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el **SUP-RAP-98/2003 y acumulados** estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

Por lo que hace a la conclusión observada en el dictamen consolidado se identificó que la conducta desplegada por el instituto político corresponde a una omisión consistente en la falta de registro y comprobación del retiro de recursos en efectivo de cuentas bancarias aperturadas a nombre del instituto político; por lo que esta autoridad no tiene certeza del destino y aplicación de los mismos. En este orden de ideas, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente se señala la irregularidad cometida por el partido político:

Descripción de la irregularidad observada
<i>3. El sujeto obligado retiró recursos (\$13,291.60) de cuentas bancarias abiertas a su nombre, cuyo destino no se encuentra registrado y comprobado en su contabilidad.</i>

<sup>26</sup> En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

**b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El instituto político cometió una irregularidad al omitir registrar y comprobar el retiro de recursos en efectivo de cuentas bancarias aperturadas a nombre del instituto político.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los Informes de Campaña.

**Lugar:** La irregularidad se cometió en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en el marco de la revisión de los informes de Campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de intención alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial al omitir registrar y comprobar el retiro de recursos en efectivo de cuentas bancarias aperturadas a nombre del instituto político; por lo que esta autoridad no tiene certeza del destino y aplicación de los mismos.

Cabe mencionar que una falta sustancial como la que ahora se presenta trae consigo una vulneración al principio de legalidad pues el partido no se apegó a lo establecido en la ley, toda vez que debió registrar contablemente la operación, presentando al efecto la documentación que comprobara la correcta aplicación y destino de los recursos económicos utilizados.



Por lo que hace al principio de legalidad, dado que la norma constitucional reconoce a los partidos políticos el carácter de entidades de interés público, sus fines y actividades no pueden resultar ajenos o diversos a los específicamente señalados por el legislador. Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al determinar recursos para el desarrollo de actividades en materia electoral, es fomentar la cultura democrática dentro y fuera de los institutos políticos, buscando una mejora en la calidad de vida del Estado Mexicano; consecuentemente los recursos en comento deben aplicarse: i) para el desarrollo de las actividades establecidas y ii) en el ejercicio destinado para su ejecución, esto es, en el ejercicio en que se otorgaron.

En ese sentido, si bien el principio de legalidad puede verse como una garantía de los gobernados, a través de la cual las autoridades deben actuar conforme a las disposiciones consignadas en la ley, lo cierto es que en materia electoral este principio también debe ser observado por los sujetos obligados en atención a su naturaleza jurídica, como entidades de interés público que contribuyen a la integración de la representación, por lo que es menester que ciñan sus actividades conforme a las directrices que señalan los cuerpos normativos.

Estimar lo contrario, sería desconocer el interés público que existe en cuanto a su estrecha regulación, dadas las acciones, las prerrogativas y derechos a los cuales tienen acceso los partidos políticos<sup>28</sup>.

Ahora bien, los sujetos obligados conducen sus actividades de conformidad con lo dispuesto por el sistema normativo electoral, pues el legislador ordinario ha dictado reglas procedimentales y sustanciales, así como controles de validez, legalidad y legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica. En este sentido la regulación de la actuación de tales entes, se traduce en un ánimo del legislativo de ajustar la conducta de los sujetos obligados a las disposiciones que establece la legislación comicial federal.

Así también impide garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos destinados exclusivamente para el desarrollo de sus operaciones ordinarias, consecuentemente se vulneró el **principio de legalidad y certeza en el destino y aplicación de los recursos públicos**. Debido a lo anterior, el instituto político

---

<sup>28</sup> En el artículo "El principio de legalidad en materia electoral", Flavio Galván comenta: "...El de legalidad es un principio rector en el ejercicio de la función estatal, consistente en organizar y realizar las elecciones federales, que compete a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos". Disponible en <http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/635/35.pdf>

vulneró los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad), debido a que vulnera de forma directa y efectiva el adecuado manejo de los recursos y legalidad de la norma.

En este orden de ideas, en la conclusión 3 el partido vulneró lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, que a la letra señalan:

### **Ley General de Partidos Políticos**

**“Artículo 25.**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

*a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios de Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos;*  
*(...)”*

**“Artículo 79.**

*1. Los partidos políticos deberán de presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

*(...)*

*b) Informes de Campaña:*

*(...)*

*I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)”*

Al respecto el artículo 25, numeral 1, inciso a) de la disposición en cita, establece que los partidos políticos tendrán la obligación de sujetar su actuar dentro de los cauces legales, esto es, en estricto cumplimiento a lo determinado en la legislación en la materia, respetando en todo momento el principio de rendición de cuentas que rige en materia de fiscalización electoral.

En este orden de ideas, los recursos financieros con los que disponga el ente político deberán de erogarse para el uso exclusivo de sus actividades ordinarias, o en su caso, para el desarrollo de actividades específicas y para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, gastos que de

conformidad con el artículo 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización *“deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado.”*

Consecuente con lo precedente, los sujetos obligados se encuentran obligados a rendir cuentas de forma anual a través de un informe el cual deberá soportarse con la balanza de comprobación anual correspondiente; así como con la documentación comprobatoria de las operaciones realizadas por los sujetos obligados, considerando los ingresos provenientes de portaciones en efectivo o en especie de personas facultadas para ello en apego a los límites determinados por la autoridad electoral competente para el financiamiento privado y por otra parte, la documentación que acredite el destino y aplicación de los recursos con los que cuenta el partido político.

Bajo esta tesitura, los sujetos obligados tienen la obligación de abrir cuentas bancarias exclusivas para el manejo de cada tipo de recursos que reciban, buscando con ello establecer un adecuado control en la administración de recursos de los entes políticos y de la bancarización de las operaciones, con la finalidad de contar con elementos de certeza que permitan conocer el origen y destino lícito de los recursos.

Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los sujetos obligados el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora es acreditar el origen de los recursos, su adecuado manejo y por otra parte el destino y aplicación de ellos; pues en caso contrario, se debe inhibir las conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con la obligación de registrar y comprobar el origen y destino de los recursos.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia y destino de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De esta manera, el ente político incumplió con su obligación de realzar los registros contables correspondientes y comprobar el destino lícito de los recursos que se manejaron en las cuentas bancarias abiertas a nombre del instituto político obligación que emana de la Ley General de Partidos Políticos y del Reglamento de

Fiscalización, los cuales tutelan el principio de legalidad y de certeza en el destino lícito de los recursos públicos.

En este contexto, el instituto político vulneró lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

En este sentido, la norma transgredida es de gran trascendencia para la tutela de del principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos.

**e) Los intereses o valores jurídicos tutelados que se generaron o pudieron producirse por la comisión de la falta.**

En este aspecto debe tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta.

Al respecto, la falta puede actualizarse como una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Las infracciones de resultado, también conocidas como materiales, son aquellas que con su sola comisión genera la afectación o daño material del bien jurídico tutelado por la norma administrativa, esto es, ocasionan un daño directo y efectivo total o parcial en cualquiera de los intereses jurídicos protegidos por la ley, perfeccionándose con la vulneración o menoscabo del bien jurídico tutelado, por lo que se requiere que uno u otro se produzca para que la acción encuadre en el supuesto normativo para que sea susceptible de sancionarse la conducta.

En lo que atañe a las infracciones de peligro (abstracto y concreto), el efecto de disminuir o destruir en forma tangible o perceptible un bien jurídico no es requisito esencial para su acreditación, es decir, no es necesario que se produzca un daño material sobre el bien protegido, bastará que en la descripción normativa se dé la amenaza de cualquier bien protegido, para que se considere el daño y vulneración al supuesto contenido en la norma.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al expediente **SUP-RAP-188/2008**, señala que en las infracciones de peligro concreto, el tipo requiere la exacta puesta en peligro del bien jurídico, es el resultado típico. Por tanto, requiere la comprobación de la

proximidad del peligro al bien jurídico y de la capacidad lesiva del riesgo. Por esta razón estas infracciones son siempre de resultado.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en peligro el bien protegido para entender consumada la infracción o ilícito descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En estos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar el principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad imputable al partido político, se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, consistente en cumplir con su obligación de registrar y comprobar el destino de los recursos manejados en sus cuentas bancarias.

Así es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en la omisión registrar en su contabilidad y comprobar el destino de los recursos consignados en cuentas bancarias, cuyo objeto infractor concurre directamente en la certeza del destino lícito de los recursos de las erogaciones realizadas y por ende en el principio de legalidad.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una sola irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, trasgrediendo lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, inciso a) y 79, numeral 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización.

Como se expuso, se trata de una falta, la cual, vulnera el bien jurídico tutelado que certeza en el adecuado manejo de los recursos y el principio de legalidad.

En este sentido al actualizarse el supuesto previsto en el artículo 443, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con relación a lo establecido en el artículo 226, numeral 1, inciso k) del Reglamento de Fiscalización.

### **B) INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

#### **1. Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el instituto político se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

Lo anterior es así, en razón de que se trata de una falta de fondo o sustantiva en la que se vulnera directamente el principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos manejados por el partido, toda vez que omitió registrar y comprobar recursos existentes en cuentas bancarias aperturadas a su nombre, considerando que el bien jurídico tutelado por la norma transgredida es de relevancia para el buen funcionamiento de la actividad fiscalizadora y la correcta comprobación del uso de los recursos de los sujetos obligados.

En ese contexto, el instituto político debe ser objeto de una sanción, la cual, tomando en cuenta la calificación de la irregularidad, se considere apropiada para disuadir al actor de conductas similares en el futuro y proteja los valores tutelados por las normas a que se han hecho referencia.

## **2. La entidad de la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta**

El daño constituye un detrimento en el valor de una persona, cosa o valores que va encaminado a establecer cuál fue la trascendencia o importancia causada por la irregularidad que desplegó el partido político y si ocasionó un menoscabo en los valores jurídicamente tutelados.

Debe considerarse que el hecho de que sujeto obligado no cumplió con su obligación de pagar los gastos que realizó durante el ejercicio en revisión, en razón de que exclusivamente en dichos rubros se le otorgó el recurso público para erogarse en la anualidad en análisis, lo que generó certeza a la autoridad que manejo de manera inadecuada los recursos públicos para dichas partidas.

En ese tenor, la falta cometida por el partido es sustantiva y el resultado lesivo es significativo, toda vez omitió registrar y comprobar recursos existentes en cuentas bancarias aperturadas a su nombre, situación que, como ya ha quedado expuesto, vulnera el principio de legalidad y certeza en el destino lícito de los recursos.

## **3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de las irregularidades que nos ocupan, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el partido político no es reincidente respecto de la conducta que aquí se ha analizado.

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Al efecto, la Sala Superior estimó mediante **SUP-RAP-454/2012** que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

## IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que en sus diversas fracciones señala:

- I. Con amonestación pública;*
- II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;*
- III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;*
- IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley;*
- V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en*



*materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.”*

En este contexto, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

### **Conclusión 3**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el partido político, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el partido político conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña.
- El partido político no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$13,291.60 (trece mil doscientos noventa y un pesos 60/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad de conductas cometidas por el partido político.

Esto es, la intervención Estatal debe ser lo suficientemente apta para desalentar al infractor de continuar en su oposición a la ley, ya que, de otra manera, incluso, podría contribuir al fomento de tales conductas ilícitas, y no quedaría satisfecho el propósito disuasivo que está en la naturaleza misma de las sanciones.

Por ello, la consecuencia del ilícito debe tomar en cuenta la necesidad de cumplir con una función equivalente a la restitución o reparación del beneficio obtenido, así como los que derivaron de su comisión, con la finalidad de que no se mantengan como parte del patrimonio del autor del ilícito, para que no se vea beneficiado de alguna forma por su comisión.

Incluso, considerar lo contrario, derivaría en un fraude a la ley, al permitir que una conducta ilícita sirviera como medio para que el que la cometa pueda obtener un beneficio, no obstante que fuera sancionado por la autoridad competente, conforme a las leyes aplicables al caso.

De modo que, concluye la Sala Superior, ciertamente, en principio, es totalmente apegado a Derecho que las sanciones relacionadas con ilícitos derivados de ingresos o actos que finalmente se traduzcan en un beneficio para el infractor, sean sancionadas con un monto económico superior al involucrado.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, resulta que las sanciones contenidas en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracciones I y II del ordenamiento citado no son aptas para satisfacer los propósitos mencionados, en atención a las circunstancias objetivas en las que se cometió la conducta irregular y la forma de intervención del partido político infractor, una amonestación pública, así como una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medida y Actualización) serían poco idóneas para disuadir las conductas infractoras como la que en este caso nos ocupa para generar una conciencia de respeto a la normatividad en beneficio del interés general.

La sanción contemplada en la fracción IV no es aplicable a la materia competencia del presente procedimiento.

Asimismo, la sanción contenida en la fracción V consistente en la cancelación del registro como partido político se estima aplicable cuando la gravedad de la falta cometida sea de tal magnitud que genere un estado de cosas tal que los fines perseguidos por la normatividad en materia de financiamiento no se puedan cumplir sino con la imposición de sanciones enérgicas o con la exclusión definitiva o temporal del ente político sancionado del sistema existente.

En este orden de ideas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el ente político, se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

En este sentido, la sanción que debe imponer esta autoridad debe de ser aquélla que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

Lo anterior, entre otras cosas, porque la doctrina ha sustentado, como regla general, que si la cuantía de la sanción se fija por el legislador con un margen mínimo y uno máximo, para la correcta imposición de la sanción, deben considerarse todas las circunstancias que concurran en la comisión de la infracción, incluidas las agravantes y las atenuantes, las peculiaridades del infractor y los hechos que motivaron la falta, a fin de que la autoridad deje claro cómo influyen para que la graduación se sitúe en un cierto punto, entre el mínimo y el máximo de la sanción, situación que se ha realizado con anterioridad, justificándose así el ejercicio de su arbitrio para fijarlas con base en esos elementos, tal situación es incluso adoptada por el Tribunal Electoral en la Resolución que recayó al recurso de apelación **SUP-RAP-62/2008**.

Así, la graduación de la multa se deriva de que al analizarse los elementos objetivos que rodean la irregularidad analizada se llegó a la conclusión de que la misma es clasificable como grave ordinaria, ello como consecuencia de la trascendencia de las normas violadas así como de los valores y bienes jurídicos vulnerados, por lo que resulta necesario que la imposición de la sanción sea acorde con tal gravedad; de igual forma se valoraron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, la existencia de culpa, el conocimiento de la conducta de omitir registrar y comprobar el destino lícito de los recursos y las normas infringidas el artículo 25, numeral 1, inciso a) y el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 241, numeral 1, inciso i) del Reglamento de Fiscalización, la singularidad y el objeto de la sanción a imponer que en el caso es que se evite o fomente el tipo de conductas ilegales similares cometidas.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al instituto político debe ser mayor al monto involucrado, en razón de la trascendencia de las normas trasgredidas y los elementos establecidos en la individualización de la sanción, lo cual ya ha sido analizado en el apartado correspondiente de esta Resolución, por lo que procede sancionar al partido político, con una sanción económica equivalente al **200%** (doscientos por ciento) sobre el monto involucrado, cantidad que asciende a un total de **\$26,583.20 (veintiséis mil quinientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N.)**

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$26,583.20 (veintiséis mil quinientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N.)**

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**d)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 4.**

A continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **Jornada electoral**

### **Conclusión 4**

*“4. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyos para alimentos por un monto de \$200.00.”*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de apoyos para alimentos**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende

del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados fueron omisos en presentar respuesta alguna a las observaciones realizadas por la autoridad.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “*DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS*” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “*El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.*”

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>30</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

---

<sup>30</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.



Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende

*que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez."*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, no presentó respuesta alguna que subsanara la irregularidad, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 4** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en **omitir reportar gastos realizados** por el concepto de apoyos para alimentos, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El Partido Encuentro Social omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso por concepto de de apoyos para alimentos. De ahí que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad

mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

**Ley General de Partidos Políticos**

*“Artículo 79*

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

*b) Informes de Campaña:*

*I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)”*

## **Reglamento de Fiscalización**

### *“Artículo 127*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”*

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los

intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias



otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

#### **Conclusión 4**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>31</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>31</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150%** (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado **\$200.00 (doscientos pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**e)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00 00/100 M.N.)**.

**5.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **Sistema Integral de Fiscalización**

### **Registro de operaciones fuera de tiempo**

*“5. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 15 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$57,047.50”*

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento del partido a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados fueron omisos en presentar respuesta alguna a las observaciones realizadas por la autoridad.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su partido, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo

modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”*, del Título Octavo *“De la Fiscalización de Partidos Políticos”* de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por

todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>32</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

---

<sup>32</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de realizar los registros contables en tiempo real, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en

los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:



***“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-***

*De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

***Tercera Época:***

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala\_Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, el sujeto obligado no presentó respuesta alguna que subsanara la irregularidad, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,

jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 5** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El Partido Encuentro Social omitió realizar sus registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al Partido Encuentro Social sucedió durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de, Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión 5 el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

**Reglamento de Fiscalización**

***“Artículo 38***

***Registro de las operaciones en tiempo real***

*1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.*

*5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.*

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los registros contables en tiempo real.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 5 es la certeza en el origen y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en una falta **de fondo/faltas** de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a



concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 5**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$57,047.50 (cincuenta y siete mil cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.).

- Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>33</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **5%** (cinco por ciento) sobre el monto involucrado **\$57,047.50 (cincuenta y siete mil cuarenta y siete pesos 50/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$2,852.38 (dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.)**.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

<sup>34</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Encuentro Social, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,852.38 (dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

### **24.3. COALICIÓN “VERACRUZ, EL CAMBIO SIGUE”.**

Previo al análisis de la conclusión sancionatoria descrita en el Dictamen Consolidado correspondiente a la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su demostración y acreditación de la siguiente manera.

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que la irregularidad en que incurrió la Coalición **“Veracruz, el cambio sigue”** es la siguiente:

- a) 1 Falta de carácter formal: **Conclusión 3**
- b) 1 Faltas de carácter sustancial: **Conclusión 1**
- c) 1 Faltas de carácter sustancial: **Conclusión 2**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

**a)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria de carácter formal. **Conclusión 3.**

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada
3	<i>El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta, de las cuentas bancarias que aperturó para el manejo de los recursos del periodo de campaña.</i>	Los artículos 54, numeral 4, 59, numeral 1, 96, numeral 1, 127, 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j) y 277, numeral 1, inciso e), del RF.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comentario

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su coalición, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia de los sujetos obligados, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y

Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que la coalición haya omitido presentar los estados de cuenta, de las cuentas bancarias que aperturó para el manejo de los recursos del periodo de campaña, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; derivado del nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.

- Que, respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>35</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

---

<sup>35</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*



Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, la respuesta del partido político no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, coalición, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

De conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el **considerando 16** de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

#### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

##### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003 y acumulados estableció que la acción en sentido estricto se realiza a través de una actividad positiva que conculca una norma que prohíbe hacer algo. En cambio, en la omisión, el sujeto activo incumple un deber que la ley le impone, o bien no lo cumple en la forma ordenada en la norma aplicable.

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, y en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción.

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)
<i>El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta, de las cuentas bancarias que abrió para el manejo de los recursos del periodo de campaña.</i>	Omisión

##### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron**

El sujeto obligado incurrió en la irregularidad señalada en el cuadro que antecede identificada con el número (1), contraviniendo lo dispuesto en los artículos 54, numeral 4, 59, numeral 1, 96, numeral 1, 127, 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j)

y 277, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización. A continuación, se refieren las irregularidades observadas:

*El sujeto obligado omitió presentar los estados de cuenta, de las cuentas bancarias que abrió para el manejo de los recursos del periodo de campaña.*

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió del estudio a través del procedimiento de revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos correspondientes al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, presentados por el referido sujeto.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del ente político para obtener el resultado de la comisión de las faltas (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado ente para cometer las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario

público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados<sup>36</sup>.

En la conclusión 3, la coalición en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 54, numeral 4, 59, numeral 1, 96, numeral 1, 127, 237, 243, 244, 245, 246, numeral 1, inciso j) y 277, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

### **Reglamento de Fiscalización**

#### **“Artículo 54**

##### **Requisitos para abrir cuentas bancarias**

(...)

4. Conciliar mensualmente los registros contables contra los movimientos registrados en los estados de cuenta bancarios.

(...)

#### **Artículo 59**

##### **Cuentas bancarias para candidatos**

1. Para la administración de los recursos en efectivo que los precandidatos y candidatos reciban o utilicen para su contienda, el partido o coalición deberá abrir una cuenta bancaria para cada uno.

(...)

#### **Artículo 96**

##### **Control de los ingresos**

1. Todos los ingresos de origen público o privado, en efectivo o en especie, recibidos por los sujetos obligados por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán estar sustentados con la documentación original, ser reconocidos y registrados en su contabilidad, conforme lo establecen las Leyes en la materia y el Reglamento.

(...)

---

<sup>36</sup> En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

“En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación.”

### **Artículo 127**

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.
2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.
3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose el registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento.

### **Artículo 237**

#### **Requisitos generales de los informes**

1. Los informes deberán:
  - a) Incluir la totalidad de ingresos y gastos realizados durante el ejercicio objeto del informe.
  - b) Considerar para su elaboración a la totalidad de registros contables incorporados en el Sistema de Contabilidad en Línea.
  - c) Tener soporte documental de la totalidad de operaciones.
  - d) Ser soportados por balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en el Reglamento.
  - e) Presentar la primera versión y última del informe debidamente suscritos por el o los responsables del órgano de finanzas o su equivalente.

### **Artículo 243**

#### **Sujetos Obligados**

1. Se deberá presentar un informe por cada una de las campañas en que el partido, coalición o candidato independiente haya contendido a nivel federal o local, especificando los gastos ejercidos en el ámbito territorial correspondiente; así como el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar la campaña. En consecuencia, de acuerdo con las elecciones federales y locales registradas, deberán presentar:
  - a) Informe por la campaña del candidato a Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
  - b) Informe por cada fórmula de candidatos a Senadores de la República por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.
  - c) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados por el principio de mayoría relativa que hayan registrado ante las autoridades electorales.

- d) Informe por la campaña del candidato a Gobernador o Jefe de Gobierno de la Entidad Federativa de que se trate.*
- e) Informe por cada candidato a ocupar cargo en el ayuntamiento, Jefatura Delegacional, Junta municipal o Presidente de comunidad de que se trate.*
- f) Informe por cada fórmula de candidatos a Diputados al Congreso Local o Asamblea Legislativa, de la Entidad Federativa.*

#### **Artículo 244**

##### **Formatos en el que se reportan**

- 1. Los informes de campaña deberán reportarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea, con base en los formatos "IC" o "IC-COA", según corresponda, incluidos en el Reglamento y deberán incluir la totalidad de los ingresos recibidos y de los gastos efectuados por cada uno de los candidatos, desde que éstos son registrados como tales hasta tres días antes de celebrarse la jornada electoral.*
- 2. Los partidos políticos y coaliciones deberán presentar los informes de campaña conforme a las reglas dispuestas en los artículos 79, numeral 1, inciso b) de la Ley de Partidos.*
- 3. Los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, presentarán los informes de ingresos y gastos por periodos de treinta días contados a partir del inicio la etapa de campaña, dentro de los tres días naturales siguientes a la conclusión de cada periodo.*
- 4. El procedimiento para la revisión de los informes se sujetará a las reglas dispuestas en el artículo 80, numeral 1, inciso d) de la Ley de Partidos y 287 del Reglamento.*
- 5. El responsable de finanzas al que hace referencia el artículo 43, numeral 1, inciso c) de la Ley de Partidos, junto con el candidato, serán responsables del cumplimiento de la presentación de los informes y comprobación de ingresos y gastos reportados, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley de Partidos.*

#### **Artículo 245**

##### **Contenido de los informes**

- 1. En los informes de campaña, los partidos, coaliciones y candidatos independientes, serán incorporados los ingresos que recibieron dentro del periodo que se reporta.*
- 2. Los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección correspondiente y hasta el fin de las campañas electorales, con cortes parciales cada treinta días.*

#### **Artículo 246**

##### **Documentación anexa de informes presentados**

1. Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea:

(...)

j) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas señaladas en el Reglamento, incluidas las establecidas para gastos de campaña, así como las conciliaciones bancarias correspondientes a los meses que hayan durado las campañas electorales.

#### **Artículo 277**

##### **1. Los partidos políticos deberán realizar los siguientes avisos a la Unidad Técnica:**

(...)

e) La apertura de cuentas bancarias o de inversión, de cualquier naturaleza, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54, numeral 2 del Reglamento.

De la valoración en conjunto de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que la coalición, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la fusión de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los entes políticos utilizan como parte de su financiamiento.



En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, las normas señaladas regulan, entre otras, la obligación de los sujetos obligados de realizar bajo un debido control el registro contable de sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulneran directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza

respecto al origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del sujeto obligado.

En consecuencia, el incumplimiento de las disposiciones citadas, únicamente constituyen faltas de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena exhibir toda la documentación soporte de ingresos y egresos del sujeto obligado, de conformidad con los preceptos previamente citados, tales como la realización de operaciones aritméticas incorrectas; informar de manera extemporánea la apertura de cuentas bancarias; presentación de cheques; cifras reportadas en el formato correspondiente que no coinciden contra los saldos reportados en la balanza de comprobación, entre otros.

Esto es, se trata de una conducta, la cual, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los entes políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político, derivadas de la revisión del Informe de los Ingresos y Gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí mismas constituyen una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

En cambio, las infracciones de peligro abstracto son de mera actividad, se consuman con la realización de la conducta supuestamente peligrosa, por lo que no resulta necesario valorar si la conducta asumida puso o no en concreto peligro el bien protegido para entender consumada la infracción, ilícito o antijurídico descritos en la norma administrativa, esto es, el peligro no es un elemento de la hipótesis legal, sino la razón o motivo que llevó al legislador a considerar como ilícita de forma anticipada la conducta.

En éstos últimos, se castiga una acción "típicamente peligrosa" o peligrosa "en abstracto", en su peligrosidad típica, sin exigir, como en el caso del ilícito de peligro concreto, que se haya puesto efectivamente en peligro el bien jurídico protegido.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que las infracciones expuestas en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del ente político infractor, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso la irregularidad se traducen en una conducta infractora imputable al ente político, las cuales pusieron en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas, toda vez que esta autoridad electoral no contó en tiempo con los documentos necesarios para ejercer un debido control y cotejar lo reportado por el ente en relación a los informes de aquellos candidatos que participaron en el proceso electoral para ganar un cargo de elección popular.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta que se traduce en la existencia de una **FALTA FORMAL**, en la que se viola el mismo valor común, toda vez que existe unidad en el propósito de la conducta en el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.

Como se expuso en el inciso d), se trata de una falta, la cual, aun cuando vulnere diversos preceptos normativos, solamente configura un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de forma cometida por el sujeto obligado debe calificarse como **LEVE**.

#### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecue a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las

agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 de la presente resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que los partidos integrantes de la coalición cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción, en virtud que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “**Veracruz, el cambio sigue**”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el **considerando 17**, tal y como se establece en el artículo 340 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.

- Que las falta se calificó como **LEVE**.

- Que, con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el sujeto obligado, conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el sujeto obligado, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del sujeto obligado, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

Ahora bien, resulta relevante advertir que el monto involucrado no es un elemento exclusivo para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino solo uno de los parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Asimismo, se trata de un elemento discrecional sobre el cual la autoridad determinará su importancia y relevancia para la fijación de la sanción, no obstante, tal facultad no será arbitraria pues debe atender a las circunstancias y elementos que convergen en la comisión de las conductas que se estiman infractoras de la normatividad electoral. Al respecto, cabe mencionar el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el SUP-RAP-89/2007, en el cual sostiene que en ciertos casos, queda al arbitrio de la autoridad estimar o no el monto total implicado en las irregularidades cometidas, cuando el mismo sea determinable. Para lo cual debe precisarse con claridad el origen del monto involucrado.

En consecuencia, en las faltas formales no siempre es posible contar con un monto involucrado, toda vez que las características mismas de la infracción, en ocasiones no permiten hacer determinable el grado de afectación que se traduciría en un monto determinado. Ilustra lo anterior, el tipo de infracciones relacionadas con la omisión de presentar documentación soporte, vulneración que hace difícil, o bien, prácticamente imposible realizar una cuantificación al momento de sancionar.

Establecido lo anterior, es válido concluir que tratándose de faltas formales, la determinación de la proporcionalidad e idoneidad de la sanción no puede estar sujeta exclusivamente al monto involucrado en las irregularidades, ni debe ser éste el único elemento primordial, pues, para tal efecto la autoridad debe apreciar el conjunto de las circunstancias (objetivas y subjetivas) que permitan establecer bajo criterios objetivos y razonables una sanción que resulte proporcional; por tanto se toma en cuenta no sólo el monto involucrado, sino diversas circunstancias como la comisión intencional o culposa de la falta; la trascendencia de las normas transgredidas; la reincidencia, la pluralidad, entre otros elementos que en conjunto permiten a la autoridad arribar a la sanción que en su opinión logre inhibir la conducta infractora.

De este modo, dichas irregularidades traen como resultado el incumplimiento de la obligación de tener un adecuado control en la rendición de cuentas en los recursos con que cuentan los sujetos obligados conforme a lo señalado en la normativa electoral.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se ha analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>37</sup>:

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>37</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer a la Coalición “**Veracruz, el cambio sigue**”, es la prevista en la fracción II, inciso a) del artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **10 (diez)** Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

En consecuencia, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **70.50% (setenta punto cincuenta por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **7 (siete)** Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que **asciende a la cantidad de \$568.23 (quinientos sesenta y ocho pesos 23/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **29.50% (veintinueve punto cincuenta por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una multa equivalente a **3 (tres)** Unidades de Medida y Actualización vigente para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$237.77 (doscientos treinta y siete 77/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 1.**

A continuación, se presenta, la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.



## **Conclusión 1**

*“1. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyo para alimentos en efectivo y pago para representantes de casilla por un monto de \$3,500.00.”*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de pago para representantes de casilla**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comentario

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de la coalición, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes a que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la

finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>38</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer

---

<sup>38</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy*

*Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria:  
Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 1** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión del sujeto obligado consistente en **omitir reportar gastos realizados** por el concepto de pago para representantes de casilla, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** La Coalición “Veracruz, el cambio sigue” omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso por concepto de pago para representantes de casilla. De ahí



que el partido contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

### **Ley General de Partidos Políticos**

#### *“Artículo 79*

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

#### *b) Informes de Campaña:*

*1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)”*

### **Reglamento de Fiscalización**

#### *“Artículo 127*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”*

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los

ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Veracruz, el cambio sigue”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 17, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación, se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 1**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.

Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

- Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que, el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que, el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>39</sup>

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado **\$3,500.00 (tres mil quinientos pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **70.50% (setenta punto cincuenta por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción

---

<sup>39</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,701.25 (tres mil setecientos un pesos 25/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **29.50% (veintinueve punto cincuenta por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,548.75 (mil quinientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**c)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 2**.

Visto lo anterior, a continuación, se presenta por ejes temáticos la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

## **Sistema Integral de Fiscalización**

### **Registro de operaciones fuera de tiempo**

#### **Conclusión 2**

*2. El sujeto obligado registró 11 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$15,600.00.*

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización por un importe de \$15,600.00



De la falta descrita en el presente apartado se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada

/Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su coalición, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”*, del Título Octavo *“De la Fiscalización de Partidos Políticos”* de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>40</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

---

<sup>40</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de realizar los registros contables en tiempo real, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para

acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

***“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-***

*De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

***Tercera Época:***

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala\_Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas pues no se advierten conductas tendentes a

deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en la conclusión **2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** La Coalición “Veracruz el cambio sigue” omitió realizar sus registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida a la Coalición “Veracruz el cambio sigue” sucedió durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la **conclusión 2** el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

**Reglamento de Fiscalización**

***“Artículo 38***

***Registro de las operaciones en tiempo real***

*1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y*

*hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.*

*5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.*

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los registros contables en tiempo real.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 2, es la certeza en el origen y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en una falta **de fondo/faltas** de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión

de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Veracruz el cambio sigue”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 17, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

## **Conclusión 2**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$15,600.00 (quince mil seiscientos pesos 00/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>41</sup>

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual lo correspondiente al **70.50%** (setenta punto cincuenta por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$549.90 (quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido de la Revolución Democrática** en lo individual lo correspondiente al **29.50% (veintinueve punto cincuenta por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es

---

<sup>41</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$230.10 (doscientos treinta pesos 10/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

#### **24.4. COALICIÓN “POR UN VERACRUZ MEJOR”**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió la Coalición “Por un Veracruz Mejor” son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 1.**
- b) 3 Faltas de carácter sustancial: **Conclusiones 2, 3 y 4.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 5.**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

**a)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 1.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.



## Candidatos

## Agenda de campaña

### Conclusión 1

*“El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.”*

En consecuencia, al **omitir informar en tiempo y forma los eventos a realizar**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de la coalición, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que, no obstante que el sujeto obligado haya omitido informar en tiempo y forma los eventos a realizar, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad*

*deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los

partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.

- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad la irregularidad identificada en la conclusión, se identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, cuatro eventos antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos, al haber sido registrados de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>43</sup>

### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos en el Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos extemporáneamente a los

---

<sup>43</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.



siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad.

A continuación se refiere la irregularidad observada:

Descripción de la irregularidad observada.
1. El sujeto obligado informó de manera extemporánea 4 eventos de la agenda de actos públicos, de manera previa a su celebración.

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna (“Descripción de las Irregularidades observadas”), se expone el modo de llevar a cabo la violación al artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización cuatro eventos con anterioridad a la realización de los mismos, pero de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>44</sup>

De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período campaña.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, **de forma oportuna**, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.

Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones.

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos del sujeto obligado, impide garantizar de forma idónea el manejo de los recursos **de manera oportuna durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su**

---

<sup>44</sup> Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento.

**fiscalización absoluta**, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados **en tiempo y forma**, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.

En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.

En esa vertiente, no se pueden catalogar a las conductas desplegadas como meras faltas de índole formal, porque con ellas se impide que la fiscalización se realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los recursos.

En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada con los ingresos y gastos derivados de sus campañas, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades llevadas a cabo por los actores políticos respecto de todos los actos que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al **SUP-RAP-369/2016**.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición por un Veracruz Mejor, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 18 tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a

los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 1**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- a) Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- b) Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, cuatro eventos antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- c) Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- d) Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de campaña correspondiente al proceso electoral local extraordinario 2018.
- e) Que el sujeto obligado no es reincidente.
- f) Que el sujeto obligado reportó cuatro eventos con anterioridad a su fecha de realización.
- g) Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>45</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale a 10 UMA por cada evento reportado de forma extemporánea a los siete días previos a su realización, es decir **40 (cuarenta)** Unidades de Medida y Actualización, cantidad que asciende a un total de **\$3,224.00 (tres mil doscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.).**

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al 88% (ochenta y ocho por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,837.12 (dos mil ochocientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.).**

---

<sup>45</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al 12% (doce por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$386.88 (trescientos ochenta y seis pesos 88/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, infractoras de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones 2, 3 y 4.**

A continuación, se presentan, las conclusiones finales sancionatorias determinadas por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Procedimientos de Fiscalización

Monitoreo de espectaculares y propaganda en vía pública

## **Conclusión 2**

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 5 bardas por un importe de \$4,061.20.”*

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de bardas, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Procedimientos de Fiscalización



## **Monitoreo en internet**

### **Conclusión 3**

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 1 producción y edición de video, por un monto de \$1,624.00.”*

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de producción y edición de video, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

## **Jornada Electoral**

### **Conclusión 4**

*“El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyos para alimentos y pago para representantes de casilla por un monto de \$5,540.00.”*

En consecuencia, al omitir reportar gastos realizados por concepto de apoyos para alimentos y pago de representantes de casilla, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior, los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, y que en su contenido manifestaron presentar la documentación correspondiente para subsanar la

observación en el Sistema Integral de Fiscalización, del análisis respectivo se advirtió que los sujetos obligados enunciaron de forma genérica documentación, la cual no se encuentra referenciada con el número de póliza y la documentación soporte respectiva, o en su caso, no se advirtió el registro correspondiente en el Sistema Integral de Fiscalización.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de la coalición, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS” de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de

ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es,

existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, *mutatis mutandi*, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si

la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Adicionalmente, por lo que hace al gasto por el servicio de los ciudadanos que fungieron como representantes de casilla, cabe señalar que es una erogación que se debió registrar en el Sistema Integral de Fiscalización conforme a lo previsto en la normatividad. Así, por regla, los formatos que los partidos políticos aportan físicamente, son aquellos que de manera unilateral amparan si la representación de los ciudadanos en las casillas se hizo de manera onerosa o gratuita.

Ahora bien, esta autoridad en uso de sus facultades de comprobación, llevó a cabo diversas encuestas, con la finalidad de establecer si la mayoría de los ciudadanos involucrados ejercieron la función de representante general o de casilla de manera gratuita, libre y desinteresada, o bien, si hubo implícito un gasto

que debió ser reportado por el sujeto obligado y éstos no fueron reportados en su contabilidad.

Así, las encuestas se enfocaron a obtener información para verificar si el sujeto obligado se estaba conduciendo con veracidad y corroborar si los datos consignados en el informe respectivo eran consistentes con las manifestaciones verbales de las personas entrevistadas. Para ello, la autoridad abarcó un amplio porcentaje de las casillas instaladas en los 3 municipios con elección extraordinaria, a saber:

<b>Id</b>	<b>Municipio</b>	<b>Total de Casillas</b>	<b>Porcentaje de Casillas Verificadas</b>
1	Emiliano Zapata	83	87%
2	Camarón de Tejada	9	100%
3	Sayula de Alemán	39	58%

El resultado de las actuaciones arrojó que 3 ciudadanos manifestaron que sí recibieron una retribución por el servicio que estaban prestando y 1 ciudadano manifestó que recibió apoyo para alimentos en efectivo, lo que genera a esta autoridad convicción que se está en presencia de un gasto no reportado por el sujeto obligado, con independencia que en los formatos presentados por el partido político se asentara que fueron a título gratuito, pues se desprende de la investigación realizada por la autoridad fiscalizadora, que existió una contraposición con el reporte generado por el sujeto obligado.

Ahora bien, atendiendo las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, las encuestas realizadas *in situ* por esta autoridad administrativa electoral aportaron que el sujeto obligado efectuó una erogación por concepto de pago a funcionarios de casilla en la Jornada Electoral, sin que tal situación hubiese sido reportada en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo siguiente:

a. Si bien existe una presunción de validez de la información que es presentada por los sujetos obligados, esto no es obstáculo para que la autoridad electoral realice sus propias indagatorias y, en uso de las facultades que el orden jurídico le confiera expresamente, realizara la validación del dicho de los partidos políticos con los representantes de casilla.



b. El acto de autoridad brinda mayor eficacia probatoria a las documentales recabadas por esta autoridad electoral fiscalizadora, pues las encuestas mencionadas fueron levantadas por un funcionario público autorizado, capacitado y facultado para efectuarlas *in situ*, por lo que no resulta cuestionable la certeza y convicción que se les otorga a las mismas.

c. Considerar lo contrario y otorgarle mayor eficacia probatoria a los formatos que presentó primigeniamente el partido, desnaturaliza las facultades de comprobación que tiene esta autoridad para contrastar lo reportado por los sujetos obligados con otras fuentes de información, verbigracia son las acciones que se toman para confrontar los datos con las autoridades hacendaria, bancaria y fiscal: o bien, con los proveedores de bienes y servicios.

Por lo tanto, se reitera que el testimonio obtenido directamente, *in situ* en cada una de las casillas y de manera espontánea con cada uno de los ciudadanos, resulta una prueba idónea para acreditar si lo reportado por el partido político corresponde o no a la realidad. Cuestión que, en el caso concreto, permite concluir que el partido político fue omiso en el reporte del gasto.

Derivado de lo anterior, se concluye que ambos documentos (el formato presentado por el partido político y la encuesta levantada por la autoridad electoral) provienen de la misma fuente y tienen un valor probatorio similar; sin embargo, la encuesta tiene un mayor grado de idoneidad para generar convicción en la autoridad, ya que resulta un medio de prueba con una eficacia probatoria mayor, toda vez que es verbal, espontánea, sin coacción, inmediata y oportuna, debido a que se presentó el mismo día de la Jornada Electoral y por funcionarios autorizados y capacitados para ello.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Sirve como criterio orientador la Jurisprudencia 28/2010 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro: "DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA."

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado las diversas conductas que violentan los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, y atentan contra los mismos bienes jurídicos tutelados; por cuestión de método, para facilitar el análisis y sanción de las mismas, en obvio de repeticiones se procede a hacer un análisis conjunto de las conductas infractoras, para posteriormente proceder a la individualización de la sanción que en cada caso corresponda, atento a las particularidades que en cada conclusión sancionatoria se presenten.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (inciso B).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con las irregularidades identificadas en las conclusiones 2, 3 y 4 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, las faltas corresponden a una omisión del sujeto obligado consistente en omitir reportar gastos realizados por el concepto de bardas, producción y edición de video y apoyos para alimentos y pago de representantes de casilla, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

Modo: La Coalición por un Veracruz mejor omitió reportar en el Informe de campaña el egreso relativo a:

Descripción de las Irregularidades observadas

*2.- El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 5 bardas por un importe de \$4,061.20*

*3.- El sujeto obligado omitió reportar gastos por concepto de 1 producción y edición de video, por un monto de \$1,624.00.*

*4.- El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de apoyos para alimentos y pago para representantes de casilla por un monto de \$5,540.00.*

Como se describe en el cuadro que antecede, en la columna ("Descripción de las Irregularidades observadas"), se expone el modo de llevar a cabo la violación a los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado, surgieron de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lugar: Las irregularidades se actualizaron en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de las irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Previo al análisis de la norma transgredida es relevante señalar que los monitoreos de medios constituyen un mecanismo previsto en los reglamentos aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que le permiten a la autoridad fiscalizadora verificar la veracidad de la información proporcionada por los partidos políticos y coaliciones en sus informes; ya que se trata de un conjunto de actividades diseñadas para medir, analizar y procesar en forma continua, la información emitida por medios de comunicación electrónicos, impresos o alternos, respecto de un tema, lugar y tiempo determinados, con el registro y representación objetiva de los promocionales, anuncios, programas, entre otros, objeto del monitoreo; según señala la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-43/2006.

De igual manera, el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral en el SUP-RAP-86/2007 ha definido al monitoreo en materia de fiscalización como “como una herramienta idónea para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y fiscalización de las actividades de los partidos políticos, encomendadas a las autoridades electorales, ya que a través de éstos se tiende a garantizar la equidad en la difusión de los actos proselitistas de los partidos políticos; medir los gastos de inversión en medios de comunicación de dichas entidades de interés público y apoyar la fiscalización de los institutos políticos para prevenir que se rebasen los topes de campaña, entre otros aspectos”.

Bajo esta línea, surgió el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos como un instrumento de medición que permite a la autoridad fiscalizadora electoral recabar información y documentación soporte sobre inserciones en prensa y anuncios espectaculares colocados en la vía pública con la finalidad de cotejarlo con lo reportado por los sujetos obligados en sus Informes de Campaña, con el fin de verificar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar la realización de monitoreos en diarios, revistas y otros medios impresos, así como colocación de espectaculares y propaganda en la vía pública, se encuentra regulada en los artículos 318, 319 y 320 del Reglamento de Fiscalización.

Como puede apreciarse, el Sistema Integral de Monitoreo de Espectaculares y Medios Impresos contribuye a la construcción de condiciones de credibilidad y confianza, al incorporar medidas novedosas para fiscalizar eficientemente el manejo administrativo y financiero de las campañas políticas; ya que permite a la Unidad Técnica de Fiscalización cruzar la información a través de la detección de anuncios espectaculares colocados en la vía pública y de la búsqueda de información en medios impresos de circulación nacional y local, respecto de toda aquella publicidad y propaganda para cotejarlos con lo reportado por los partidos y coaliciones bajo este rubro; por lo que se configura como un mecanismo que permite cumplir cabalmente con el procedimiento de auditoría y verificar la aplicación de recursos para detectar oportunamente una posible omisión de gastos.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel. Por tanto, en casos como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar los resultados en medios electrónicos para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Es preciso mencionar que la ratio essendis de este criterio se encuentra recogido en la Jurisprudencia 24/2010, aprobada por la Sala Superior en la sesión pública celebrada el cuatro de agosto de dos mil diez; misma que señala que:

“...los testigos de grabación, producidos por el Instituto Federal Electoral, constituyen pruebas técnicas que por regla tienen valor probatorio pleno, porque son obtenidos por el propio Instituto, al realizar el monitoreo, para verificar el cumplimiento de las pautas de transmisión de promocionales en radio y televisión.”

Por lo anterior, se colige que los resultados del monitoreo que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados del monitoreo.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En ese sentido, la Sala Superior ha sostenido que en el campo de la fiscalización de los recursos de los sujetos obligados, los bienes jurídicos que se tutelan no sólo son la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad en las contiendas, sino que también tiene como objetivo garantizar el cumplimiento cabal de normas relacionadas con límites de aportaciones, fuentes de financiamiento prohibidas, rebase de topes de gastos de campaña, etcétera. Por ello, la verificación de la norma adquiere fundamental importancia, ya que incide directamente en las condiciones de la competencia electoral.

Con base en lo anterior, la Sala Superior señaló que es importante que el Reglamento de Fiscalización incorpore la figura de valuación de las operaciones que tiene como finalidad garantizar el cumplimiento del principio de equidad, al determinar el valor de los gastos no reportados, subvaluados y sobrevaluados.

Ahora bien el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización establece que cuando de la revisión de las operaciones, informes y estados financieros, monitoreo de gasto, así como de la aplicación de cualquier otro procedimiento, la autoridad responsable de la fiscalización establece gastos no reportados por los sujetos obligados, la determinación del valor de los gastos se sujetará a lo siguiente:

- Se deberá identificar el tipo de bien o servicio recibido y sus condiciones de uso y beneficio.
- Las condiciones de uso se medirán en relación con la disposición geográfica y el tiempo. El beneficio será considerado conforme a los periodos del ejercicio ordinario y de los procesos electorales.
- Se deberá reunir, analizar y evaluar la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado. La información se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate.
- Se deberá identificar los atributos de los bienes o servicios sujetos de valuación y sus componentes deberán ser comparables.
- Para su determinación, el procedimiento a utilizar será el de valor razonable.

Ahora bien en una primera fase se prevé el mecanismo de determinación de valuación de bienes y servicios mediante el procedimiento de “valor razonable”, el cual se define a partir de la identificación del tipo de bien o servicio recibido, las condiciones de uso y beneficio, los atributos comparativos, la disposición geográfica y temporal, así como de un análisis y evaluación de la información relevante relacionada con el tipo de bien o servicio a ser valuado, la cual se podrá obtener de cámaras o asociaciones del ramo de que se trate. En un segundo momento, se prevé que a partir de la obtención del “valor razonable” de los bienes y servicios, esta autoridad debe elaborar una “matriz de precios” con información homogénea y comparable.

Finalmente, cuando se encuentren gastos no reportados por los sujetos obligados, valorará aquellos bienes y servicios no reportados con base en el “valor más alto” previsto en la “matriz de precios” previamente elaborada.

Así, “el valor más alto”, a partir de una interpretación sistemática y funcional de lo previsto en los párrafos 1, 2 y 3, del artículo 27, del Reglamento de Fiscalización, se debe entender como el “valor razonable”, el cual es resultado de un procedimiento basado en parámetros objetivos, como son las condiciones de uso y beneficio de un bien o servicio, disposición geográfica, tiempo, entre otros, que se aplica cuando los sujetos obligados incumplen con su obligación de presentar la información y documentos comprobatorios de las operaciones realizadas con sus recursos, porque tal situación se traduce en una evasión al régimen de fiscalización.

En ese tenor, se considera que de optar por el “valor más bajo” o el “valor o costo promedio” de los precios contenidos en la matriz, para efectos de determinar el valor de un bien o servicio no reportado por el sujeto, con esto no se lograría un efecto disuasivo, porque esa cuantificación podría ser menor al beneficio realmente obtenido por el infractor con el ocultamiento de la información y documentación comprobatoria.

En las conclusiones en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

#### Ley General de Partidos Políticos

##### “Artículo 79

1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:

##### b) Informes de Campaña:

I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente; (...)

#### Reglamento de Fiscalización

##### “Artículo 127

1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.



2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de las hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por las conductas señaladas es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en faltas de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o

de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### Calificación de la falta

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

#### **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el considerando 16 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el

sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de diversas infracciones en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición por un Veracruz mejor, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 18, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

## **Conclusión 2**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$4,061.20 (Cuatro mil sesenta y un pesos 20/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado **\$4,061.20 (Cuatro mil sesenta y un pesos 20/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$6,091.80 (Seis mil noventa y un pesos 80/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al **88% (ochenta y ocho)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto

Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,360.78 (cinco mil trescientos sesenta pesos 78/100 M.N.)**.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al **12% (doce por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$731.02 (setecientos treinta y un pesos 02/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

### **Conclusión 3**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,624.00 (Mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado **\$1,624.00 (mil seiscientos veinticuatro pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$2,436.00 (dos mil cuatrocientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al **88% (ochenta y ocho)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)**

de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,143.68 (dos mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.)**.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al **12% (doce por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$292.32 (doscientos noventa y dos pesos 32/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

#### **Conclusión 4**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- Que por lo que hace a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.



- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$5,540.00 (Cinco mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado **\$5,540.00 (cinco mil quinientos cuarenta pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$8,310.00 (ocho mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al **88% (ochenta y ocho por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,312.80 (siete mil trescientos doce pesos 80/100 M.N.)**.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al **12% (doce por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$997.20 (novecientos noventa y siete pesos 20/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**c)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 5.**

Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

Sistema Integral De Fiscalización

Registro de operaciones fuera de tiempo

## Conclusión 5

*“El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 2 operaciones en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, por un importe de \$7,000.00”*

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización por un importe de \$7,000.00

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su coalición, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a “las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III “DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”, del Título Octavo “De la Fiscalización de Partidos Políticos” de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que “el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior”.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar registros contables en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la

finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de realizar los registros contables en tiempo real, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su

obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.

Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.

Al respecto, *mutatis mutandi*, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito

administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala\_Pérez.



De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.

- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (inciso A) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (inciso B).

#### **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

##### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en las conclusión 5 del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

##### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

Modo: La Coalición “Por un Veracruz Mejor” omitió realizar sus registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

Tiempo: La irregularidad atribuida a la Coalición “Por un Veracruz Mejor” sucedieron durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Lugar: La irregularidad se actualizó en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión 5 el sujeto obligado en comento, vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

## Reglamento de Fiscalización

### “Artículo 38

#### Registro de las operaciones en tiempo real

1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.

5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los registros contables en tiempo real.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus

atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión 5, es la certeza en el origen y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en una falta de fondo, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta cometida.

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Por un Veracruz Mejor, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 18, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 5**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.



- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)**.
- Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **5% (cinco por ciento)** sobre el monto involucrado **\$7,000.00 (siete mil pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$350.00 (trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido Revolucionario Institucional en lo individual lo correspondiente al **88% (ochenta y ocho por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$308.00 (trescientos ocho pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo, al Partido Verde Ecologista de México en lo individual lo correspondiente al **12% (doce por ciento)** del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$42.00 (cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

#### **24.5. LA COALICIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA”.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió la Coalición “Juntos Haremos Historia” son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 1.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 2.**

A continuación, se desarrollan los apartados en comento:

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 1.**

A continuación, se presenta la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

#### **Jornada Electoral.**

##### **Conclusión 1**

*“C1. El sujeto obligado omitió reportar gastos realizados por concepto de pago por ser representante de casilla por un monto de \$1,400.00.”*

En consecuencia, al **omitir reportar gastos realizados por concepto de pago por ser representante de casilla por un monto de \$1,400.00**, el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se

advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de la coalición, mediante requerimiento al instituto político correspondiente, con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito y así, salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de las sanciones correspondientes, determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en las consecuencias de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”* de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“El candidato es responsables solidarios del cumplimiento de los informes que se refiere en el inciso anterior.”*

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido registrar gastos, no es justificación para no tomar en cuenta el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en la normativa electoral.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y egresos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.
- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello; consecuentemente, los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, en relación con los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los precandidatos, candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de

ingresos y egresos ante el partido y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>46</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de informes, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de presentar los informes de campaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cada uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por éstos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente está obligado.

---

<sup>46</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se*

*demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

**“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata



*al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

### **Tercera Época:**

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala Pérez.”*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al ente infractor de su responsabilidad ante las conductas observadas, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de las conductas de las cuales es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, se procede en la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión).
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

### A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

#### a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 1** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local

Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde por el concepto de pago por ser representante de casilla por un monto de \$1,400.00, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**b) Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** La Coalición “Juntos Haremos Historia”, omitió reportar en el Informe de Campaña el egreso por concepto de pago por ser representante de casilla por un monto de \$1,400.00. De ahí que la coalición contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al sujeto obligado, surgió de la revisión del Informe de Campaña de los ingresos y egresos correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en los municipios de Emiliano Zapata, Sayula de Alemán y Camarón de Tejeda, en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

**d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Previo a la trascendencia de la norma transgredida, es relevante señalar que las visitas de verificación constituyen un mecanismo previsto en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en el Reglamento de

Fiscalización, que le permite a la autoridad fiscalizadora verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normatividad vigente respecto a la veracidad de lo reportado en los Informes de los Ingresos y Gastos que realicen las coaliciones en el periodo de campaña; pues se trata de una herramienta diseñada para contrastar y corroborar la información recabada por el personal designado por la Unidad Técnica de Fiscalización, para la realización de las verificaciones, con lo reportado por los institutos políticos.

De igual manera, las visitas de verificación son una actividad eficaz de la autoridad fiscalizadora para auxiliar y coadyuvar en las funciones de control y vigilancia respecto de los informes de Campaña que presenten los institutos políticos, a efecto de cotejar que todos los gastos realizados hayan sido debidamente registrados en su contabilidad y reportados en los Informes correspondientes, garantizando así la certeza y transparencia en el origen de los recursos.

Es importante mencionar que la facultad de la autoridad fiscalizadora para ordenar las visitas de verificación así como modalidades y metodología, se encuentran reguladas del artículo 297 al 303 del Reglamento de Fiscalización.

Como se advierte, las visitas de verificación permiten a la Unidad Técnica de Fiscalización tener mayor certeza respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en materia de financiamiento y gasto. Dicha facultad admite allegarse de información que pueda ser cotejada con la reportada por los sujetos obligados, contando así con un parámetro que pueda ser contrastado y genere una verificación integral y eficaz.

En este tenor, vale la pena señalar que de conformidad con el SUP-RAP-24/2010, el elemento que determina de manera fundamental el valor probatorio pleno de un documento público es el hecho de que sea emitido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones y no su consignación en un papel.

Por tanto, en el caso como el que ahora se presenta, resulta válido que la autoridad electoral haga constar en actas de verificación los resultados de las visitas para considerarlos como pruebas con valor probatorio pleno, pues igualmente se tratará de actos realizados por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, por lo que entenderlo de distinta manera se traduciría en una actividad inocua perdiendo la razón de ser de dichos instrumentos.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión de Fiscalización CF/016/2016, por el que se emiten, entre otros, los lineamientos para realizar las visitas de verificación, durante las precampañas y campañas del proceso electoral 2016-2017, en el artículo 8, fracción IV, inciso a), mismo que para mayor referencia se transcribe a continuación:

*“a) La visita de verificación podrá ampliarse a otro domicilio en el que se conozca que se realizan actividades relacionadas con el sujeto verificado o donde exista material de propaganda electoral alusiva a la obtención del apoyo ciudadano o precampaña, así como con el candidato y candidatos independientes, siempre que durante el desarrollo de la visita de verificación se desprendan elementos objetivos, veraces y fidedignos, que hagan presumible la existencia de documentación o propaganda electoral en un domicilio diverso al señalado en la orden primigenia.”*

Por lo anterior, se colige que los resultados de las visitas de verificación que dieron origen a la presente falta, deben de ser evaluados como elementos con pleno valor probatorio, que dotan de certeza a esta autoridad sobre la existencia de lo detectado, pues se trata de un documento emitido por una autoridad pública en ejercicio de sus funciones. Para robustecer lo anterior, es preciso decir que no obra en la revisión de los informes de campaña prueba alguna en contrario que sirva para desvirtuar los resultados de las actas de verificación.

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión en comento, el sujeto obligado vulneró lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, incisos b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

### **Ley General de Partidos Políticos**

#### *“Artículo 79*

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

#### *b) Informes de Campaña:*

*1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada uno de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)”*

### **Reglamento de Fiscalización**

#### *“Artículo 127*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.”*

De los artículos señalados se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo cual implica, que existan instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas respecto de los

ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, a la autoridad, coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

Así, es deber de los partidos políticos informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Así las cosas, ha quedado acreditado que el sujeto infractor se ubica dentro de la hipótesis normativa prevista en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, siendo estas normas de gran trascendencia para la tutela de los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación de las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la

que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por las normas infringidas por la conducta señalada es garantizar certeza y transparencia en la rendición de cuentas con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, es posible concluir que la irregularidad acreditada se traduce en **una falta de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

#### **f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

#### **g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

#### **Calificación de la falta**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.



## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del ente político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 16** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia”, se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 19, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

### **Conclusión 1**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- a) Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió reportar la totalidad de los egresos realizados durante el periodo que se fiscaliza.
- b) Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en no reportar los gastos realizados durante la campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.
- c) Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- d) Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- e) Que el sujeto obligado no es reincidente.
- f) Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.).
- g) Que se trató de una irregularidad; es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>47</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Dicho lo anterior, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica equivalente al **150%** (ciento cincuenta por ciento) sobre el monto involucrado **\$1,400.00 (mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$2,100.00 (dos mil cien pesos 00/100 M.N.)**.

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **MORENA** en lo individual lo correspondiente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,806.00 (mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por

---

<sup>47</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$147.00 (ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

También, al Partido **Encuentro Social** en lo individual lo correspondiente al 150% (ciento cincuenta por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$147.00 (ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 2**.

Visto lo anterior, a continuación se presenta por ejes temáticos la conclusión final sancionatoria determinada por la autoridad en el Dictamen Consolidado.

### **Sistema Integral de Fiscalización.**

#### **Registro de operaciones fuera de tiempo.**

#### **Conclusión 2**

*“C2. El sujeto obligado omitió realizar el registro contable de 1 operación en tiempo real, excediendo los tres días posteriores en que se realizó la operación, dentro del periodo normal, por un importe de \$155,681.74.”*

En consecuencia, al omitir realizar registros contables en tiempo real, el sujeto obligado incumplió lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento

de Fiscalización por un importe de \$155,681.74 (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 74/100 M.N.)

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del partido político, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, toda vez que al advertirse la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del dictamen consolidado que forma parte de la motivación de la presente resolución y que se detalla en la observación de mérito, se hizo del conocimiento de la coalición a través del oficio de errores y omisiones técnicas, mediante el oficio referido en el análisis de la conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado en cuestión, para que en un plazo de cinco días, a partir del momento de la notificación, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes; así como, la documentación que subsanara la irregularidad detectada.

Consecuente con lo anterior los sujetos obligados no obstante que presentaron un escrito de respuesta al oficio de errores y omisiones, de su contenido no se advirtió presentara documentación o evidencia relativa a las observaciones en comento.

En este contexto, el proceder de la autoridad fiscalizadora fue en el sentido de entablar comunicación con los candidatos por conducto de su coalición, mediante requerimiento al instituto político con la finalidad de hacer del conocimiento de sus candidatos las irregularidades de mérito, con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia y que los candidatos contaran con la oportunidad de preparar una adecuada defensa previo al dictado de la resolución, respetando con ello las formalidades que rigen al debido proceso.

Visto lo anterior, es importante previo a la individualización de las sanciones correspondientes determinar la **responsabilidad de los sujetos obligados** en la consecución de las conductas materia de análisis.

En este orden de ideas, de conformidad con las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y gastos de los partidos políticos y los candidatos, el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo

modelo de fiscalización integral -registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.

Así, respecto del régimen financiero de los partidos políticos la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que éstos se sujetarán a *“las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma.”*

Visto lo anterior, los partidos políticos tienen la obligación de conformidad con el capítulo III *“DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS”*, del Título Octavo *“De la Fiscalización de Partidos Políticos”* de la Ley General de Partidos Políticos, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a su operación Ordinaria -Trimestrales, Anual-, de Precampaña y de Campaña.

Ahora bien, por lo que hace a los candidatos, el artículo 79, numeral 1, inciso b), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, especifica que *“el candidato es responsable solidario del cumplimiento de los informes de gastos que se refieren en el inciso anterior”*.

De lo anterior se desprende que no obstante que el sujeto obligado haya omitido realizar un registro contable en tiempo real, no es justificación para no valorar el grado de responsabilidad del candidato en la obligación de dar cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

En este tenor, no sólo los partidos políticos son sujetos obligados en materia de fiscalización; ahora, con el nuevo modelo de fiscalización también lo es el candidato de manera solidaria, por lo que es dable desprender lo siguiente:

- Que los partidos políticos son directamente responsables, en materia de fiscalización, respecto de sus ingresos y gastos, sin importar si el origen es público o privado.
- Que respecto a las campañas, se advierte una obligación específica de los partidos políticos para que sean ellos quienes lleven un control de la totalidad de los ingresos recibidos, así como de los gastos efectuados por todos y

cada uno de los candidatos que hayan postulado, resulten o no ganadores en la contienda.

- Que los candidatos son sujetos de derechos y de obligaciones en el desarrollo de sus actividades de campaña; en este sentido el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de rendición de cuentas es extensiva a quien las ejecuta y obtiene un beneficio de ello, consecuentemente los candidatos son responsables solidarios respecto de la conducta materia de análisis.

En el sistema electoral se puede observar que a los candidatos, partidos o coaliciones, con relación a los informes de ingresos y gastos que deben presentar al Instituto Nacional Electoral, se imponen obligaciones específicas tendientes a conseguir ese objetivo, las cuales generan una responsabilidad solidaria, entre los candidatos, partidos o coaliciones, pero en modo alguno condiciona la determinación de responsabilidades por la comisión de irregularidades, ya que ello dependerá del incumplimiento de las obligaciones que a cada uno tocan (es decir, el candidato está obligado a presentar el informe de ingresos y gastos ante el partido o coalición y éste a su vez ante la autoridad electoral) según sea el caso de que se trate.

Consecuentemente, el régimen de responsabilidad solidaria que se establece en nuestro sistema electoral entre partidos políticos o coaliciones y los candidatos, obliga a esta autoridad, frente a cada irregularidad encontrada en los dictámenes consolidados de la revisión de los informes de campaña, ante las responsabilidades compartidas entre partido o coalición y candidato, a determinar al sujeto responsable, ya sea al partido político, coalición y/o candidato, con la finalidad de calificar las faltas cometidas, en su caso, por cada uno y, en consecuencia, a individualizar las sanciones que a cada uno le correspondan.<sup>48</sup>

En ese contexto, atendiendo al régimen de responsabilidad solidaria que en materia de presentación de informes de campaña, la Constitución, las leyes generales y el Reglamento de Fiscalización, impuso a los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a continuación se determinará la existencia o no de responsabilidad por parte de los sujetos obligados.

---

<sup>48</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-171/2015.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, numeral 1, inciso s) y 79, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos, la obligación original para rendir los informes señalados recae principalmente en los partidos políticos, siendo los candidatos obligados solidarios.

En ese sentido, el incumplimiento de lo anterior, en términos del artículo 443, numeral 1, incisos l) y m) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye una infracción que tendrá como consecuencia la imposición de sanciones a los partidos políticos.

En este tenor, la obligación original de realizar los registros contables en tiempo real, está a cargo de los partidos políticos, cualquier causa excluyente de responsabilidad deberá ser aducida por estos y deberá estar justificada y en condiciones en las que se acredite plenamente la imposibilidad de presentar la documentación requerida por la autoridad, o en su caso, a lo que legal y reglamentariamente ésta obligado.

Cabe destacar que el artículo 223 del Reglamento de Fiscalización, numeral 7, inciso c), establece que los partidos políticos serán los responsables de la información reportada mediante el Sistema de Contabilidad en Línea; esto es, existe la obligación originaria de responsabilidad de la documentación que se incorpore al referido sistema.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de gastos de campaña y de incorporar la documentación en el Sistema de Contabilidad en Línea, es original y en un primer plano para el instituto político, como sujeto principal de la obligación y de manera solidaria en los candidatos.

En este orden de ideas, los institutos políticos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador. Es así que de actualizarse dicho supuesto se aplicaría la responsabilidad solidaria para el candidato.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los partidos y para efectos de hacer extensiva la responsabilidad solidaria a los candidatos, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en



los informes de campaña respectivos, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los institutos políticos presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para acreditar que requirió a los candidatos y que les haya dado vista de la presunta infracción.

Sirve de criterio orientador el emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al emitir la sentencia en el recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado al determinar lo siguiente:

*“Aunado a ello, conforme con los precedentes invocados, los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña.*

*Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los precandidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

*Al respecto, mutatis mutandi, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo.”*

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo del partido político, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde que realice un partido político debe cumplir con determinados requisitos, para lo cual resulta pertinente citar la Jurisprudencia 17/2010, misma que se transcribe a continuación:

***“RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE.-***

*De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 38, párrafo 1, inciso a); 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 342, párrafo 1, inciso a); 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de actos de terceros que se estimen infractores de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan las condiciones siguientes: a) Eficacia: cuando su implementación produzca el cese de la conducta infractora o genere la posibilidad cierta de que la autoridad competente conozca el hecho para investigar y resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada; b) Idoneidad: que resulte adecuada y apropiada para ese fin; c) Juridicidad: en tanto se realicen acciones permitidas en la ley y que las autoridades electorales puedan actuar en el ámbito de su competencia; d) Oportunidad: si la actuación es inmediata al desarrollo de los hechos que se consideren ilícitos, y e) Razonabilidad: si la acción implementada es la que de manera ordinaria se podría exigir a los partidos políticos.*

***Tercera Época:***

*Recurso de apelación. SUP-RAP-018/2003. Partido Revolucionario Institucional. 13 de mayo de 2003. Mayoría de 4 votos. Engrose: Leonel Castillo González y Mauro Miguel Reyes Zapata. Los Magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y Eloy Fuentes Cerda, no se pronunciaron sobre el tema de la tesis. Secretaria: Beatriz Claudia Zavala\_Pérez.*

De lo anterior se concluye, concatenado con lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el Recurso de Apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de conductas que se estimen infractoras de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, las respuestas del sujeto obligado no fueron idóneas para atender las observaciones realizadas, pues no se advierten conductas tendentes a deslindarse de las irregularidades observadas, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir al sujeto obligado de su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditó ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas,

jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente señalado este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito al sujeto obligado, pues no presentó acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual es originalmente responsable.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de las sanciones correspondientes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que violenta el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presentan.

En consecuencia, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 16 de la presente resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento, los elementos para calificar las faltas (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En relación con la irregularidad identificada en la **conclusión 2** del Dictamen Consolidado, se identificó que el sujeto obligado omitió reportar sus egresos realizados durante la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión consistente en incumplir con su obligación de realizar sus registros de operaciones en tiempo real, durante la campaña del Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, incumpliendo con lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** La Coalición “Juntos Haremos Historia” omitió realizar sus registros contables en tiempo real, contraviniendo lo establecido en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida a la Coalición “Juntos Haremos Historia” sucedió durante de la revisión del Informe de Ingresos y Egresos de campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**Lugar:** La irregularidad se en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado para obtener el

resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de violación alguna del citado ente político, para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a las normas transgredidas es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta sustancial por omitir reportar los gastos aludidos, se vulnera sustancialmente la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

Así las cosas, una falta sustancial que trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el origen de los recursos, por consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado de mérito violó los valores sustanciales, ya señalados, y afectó a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

En la conclusión 2 el sujeto obligado en comentario, vulneró lo dispuesto en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señala:

#### **Reglamento de Fiscalización**

##### **“Artículo 38**

##### ***Registro de las operaciones en tiempo real***

*1. Los sujetos obligados deberán realizar sus registros contables en tiempo real, entendiéndose por tiempo real, el registro contable de las operaciones de ingresos y egresos desde el momento en que ocurren y hasta tres días posteriores a su realización, según lo establecido en el artículo 17 del presente Reglamento.*

*5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.*

El artículo 38, numeral 1 refiere la obligación de los partidos políticos de hacer los registros contables en tiempo real.

Dicha obligación es acorde al nuevo modelo de fiscalización en virtud del cual el ejercicio de las facultades de vigilancia del origen y destino de los recursos se lleva a cabo en un marco temporal que, si bien no es simultáneo al manejo de los recursos, sí es casi inmediato. En consecuencia, al omitir hacer el registro en tiempo real, es decir, hasta tres días posteriores a su realización, el sujeto obligado retrasa el cumplimiento de la verificación que compete a la autoridad fiscalizadora electoral.

La finalidad de esta norma es que la autoridad fiscalizadora cuente con toda la documentación comprobatoria necesaria relativa a los recursos utilizados por los sujetos obligados de manera prácticamente simultánea a su ejercicio, ya sea como ingreso o como egreso, a fin de verificar que los sujetos obligados cumplan en forma certera y transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, el artículo citado tiene como propósito fijar las reglas de temporalidad de los registros a través de las cuales se aseguren los principios de transparencia y la rendición de cuentas de manera oportuna, por ello establece la obligación de registrar contablemente en tiempo real y sustentar en documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los sujetos obligados y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas ilícitas o que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

De acuerdo a lo hasta ahora dicho, al omitir realizar los registros en tiempo real, el sujeto obligado provoca que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un ente político no registre a tiempo los movimientos de los recursos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Esto es, sólo mediante el conocimiento en tiempo de los movimientos de recursos realizados por los entes políticos, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hubiera recibido el sujeto obligado, para así determinar la posible comisión de infracciones a las normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente y oportunamente las sanciones que correspondan.

Coherentemente, el numeral 5 del artículo 38 del Reglamento de Fiscalización establece que el registro de operaciones realizado de manera posterior a los tres días contados a aquel en el momento en que ocurrieron se considerarán como una falta sustantiva, pues al omitir realizar el registro de operaciones en tiempo real, el ente político obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstaculizar la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización en línea.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos al realizar los registros contables, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, violando lo establecido en la normatividad electoral. Esto es, si los registros se realizan fuera de tiempo, la fiscalización es incompleta, de acuerdo a los nuevos parámetros y paradigmas del sistema previsto en la legislación.

Así las cosas, ha quedado acreditado que al realizar registros contables en forma extemporánea, es decir, al omitir realizar los registros contables en tiempo real, el sujeto obligado vulnera la hipótesis normativa prevista en el artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la norma infringida por la conducta señalada en la conclusión **2**, es la certeza en el origen y destino de los recursos mediante la verificación oportuna, a través del registro en tiempo real realizado por el sujeto obligado en el manejo de sus recursos.

En razón de lo anterior, es posible concluir que la irregularidad imputable al sujeto obligado se traduce en una infracción de resultado que ocasiona un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral.

En ese sentido, es posible concluir que las irregularidades acreditadas se traducen en una falta **de fondo**, de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los sujetos obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter SUSTANTIVO o



de FONDO, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta cometida.**

Este Consejo General estima que la falta de fondo cometida por el sujeto obligado se califica como **GRAVE ORDINARIA**.

**B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Así, con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, debe valorarse la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados

para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el Considerando 16 de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Es el caso, que para fijar la sanción en virtud que estamos en presencia de una infracción en el que se impondrán la sanción a diversos partidos que integran la Coalición “Juntos Haremos Historia” se tendrá en cuenta el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con el Considerando 19, tal y como se establece en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de la falta analizada.

## **Conclusión 2**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA** en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió realizar los registros contables de sus operaciones en tiempo real, relativas a la campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018 en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora durante el plazo de revisión del Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Extraordinario 2018.
- El sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a \$155,681.74 (ciento cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 74/100 M.N.).
- Que se trató de una irregularidad, es decir, se actualizó una singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>49</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>49</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Por lo argumentos vertidos con anterioridad, este Consejo General considera que la sanción a imponerse al sujeto obligado en atención a los elementos considerados previamente, debe corresponder a una sanción económica equivalente al **5%** (cinco por ciento) sobre el monto involucrado **\$155,681.74 (ciento cincuenta cinco mil seiscientos ochenta y un pesos 74/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de **\$7,784.09 (siete mil setecientos ochenta y cuatro pesos 09/100 M.N.)**.<sup>50</sup>

Así las cosas, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al Partido **MORENA** en lo individual lo correspondiente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$6,694.31 (seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido del Trabajo** en lo individual lo correspondiente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$544.89 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)**.

Asimismo, al **Partido Encuentro Social** en lo individual lo correspondiente al 5% (cinco por ciento) del monto total de la sanción, por lo que la sanción que se impone a dicho instituto político es una reducción del **50%** (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$544.89 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

---

<sup>50</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente al porcentaje indicado y el monto señalado como final puede presentar una variación derivado de la conversión a días de salario mínimo.

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos en el Considerando 24.1 de la presente Resolución, se imponen al **Partido Nueva Alianza**, las sanciones siguientes:

- a) **2** faltas de carácter formal: Conclusiones **1 y 7**.

### **Conclusiones 1 y 7**

Con una multa equivalente a **20 (veinte)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, misma que asciende a la cantidad de **\$1,612.00 (mil seiscientos doce pesos 00/100 M.N.)**.

- b) **3** faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones **2, 3, y 4**.

### **Conclusiones 2, 3 y 4**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,720.70 (cinco mil setecientos veinte pesos 70/100 M.N.)**.

- c) **1** falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **5**.

### **Conclusión 5**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$393.60 (trescientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.)**.

- d) **1** falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión **6**.

### **Conclusión 6**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$400.00 (cuatrocientos pesos 00/100 M.N.)**.

**SEGUNDO.** Por las razones y fundamentos en el Considerando 24.2 de la presente Resolución, se imponen al **Partido Encuentro Social**, las sanciones siguientes:

- a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.

### **Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$806.00 (ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

- b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.

### **Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$8,060.00 (ocho mil sesenta pesos 00/100 M.N.)**.

- c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.

### **Conclusión 3**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$26,583.20 (veintiséis mil quinientos ochenta y tres pesos 20/100 M.N.)**.

- d) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 4.

#### **Conclusión 4**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.)**.

- e) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5.

#### **Conclusión 5**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,852.38 (dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.)**.

**TERCERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.3 de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición Total “Veracruz, el Cambio Sigue” integrada por el Partido Acción Nacional y Partido de la Revolución Democrática**, las sanciones siguientes:

- a) 1 falta de carácter formal: Conclusión 3.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Acción Nacional:**

#### **Conclusión 3**

Una multa consistente en **7 (siete)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$568.23 (quinientos sesenta y ocho pesos 23/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido de la Revolución Democrática:**

#### **Conclusión 3**

Una multa consistente en **3 (tres)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciocho, cuyo monto equivale a **\$237.77 (doscientos treinta y siete pesos 77/100 M.N.)**.

**b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1.**

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Acción Nacional:**

**Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$3,701.25 (tres mil setecientos un pesos 25/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido de la Revolución Democrática:**

**Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,548.75 (mil quinientos cuarenta y ocho pesos 75/100 M.N.)**.

**c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.**

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Acción Nacional:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$549.90 (quinientos cuarenta y nueve pesos 90/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido de la Revolución Democrática:**



### **Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$230.10 (doscientos treinta pesos 10/100 M.N.)**.

**CUARTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.4 de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición Total “Por un Veracruz Mejor” integrada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México**, las sanciones siguientes:

a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:**

### **Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,837.12 (dos mil ochocientos treinta y siete pesos 12/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:**

### **Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$386.88 (trescientos ochenta y seis pesos 88/100 M.N.)**.

b) 3 faltas de carácter sustancial o de fondo: Conclusiones 2, 3 y 4.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$5,360.78 (cinco mil trescientos sesenta pesos 78/100 M.N.)**.

**Conclusión 3**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$2,143.68 (dos mil ciento cuarenta y tres pesos 68/100 M.N.)**.

**Conclusión 4**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$7,312.80 (siete mil trescientos doce pesos 80/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$731.02 (setecientos treinta y un pesos 02/100 M.N.)**.

**Conclusión 3**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el

sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$292.32 (doscientos noventa y dos pesos 32/100 M.N.)**.

#### **Conclusión 4**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$997.20 (novecientos noventa y siete pesos 20/100 M.N.)**.

c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 5

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Revolucionario Institucional:**

#### **Conclusión 5**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$308.00 (trescientos ocho pesos 00/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Verde Ecologista de México:**

#### **Conclusión 5**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$42.00 (cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)**.

**QUINTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 24.5 de la presente Resolución, se imponen a la **Coalición Flexible “Juntos Haremos Historia” integrada por el Partido MORENA, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social**, las sanciones siguientes:

a) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 1

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido MORENA:**

**Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,806.00 (mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo:**

**Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$147.00 (ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social:**

**Conclusión 1**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$147.00 (ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.)**.

**b) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2**

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido MORENA:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$6,694.31 (seis mil seiscientos noventa y cuatro pesos 31/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido del Trabajo:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$544.89 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)**.

**Por lo que toca a la sanción imputable al Partido Encuentro Social:**

**Conclusión 2**

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$544.89 (quinientos cuarenta y cuatro pesos 89/100 M.N.)**.

**SEXTO.** Se ordena a los sujetos obligados reintegrar los importes de los remanentes no ejercidos del financiamiento público otorgado para gastos de campaña en el Proceso Electoral Local Extraordinario 2018, en los términos establecidos en el Acuerdo **INE/CG61/2017**.

**SÉPTIMO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique la presente resolución y el Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos a los Partidos Políticos Nacionales con acreditación y a los partidos políticos con registro local en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

**OCTAVO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento al Tribunal Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la Sala Regional correspondiente y a la Sala Superior, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente resolución y del Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**NOVENO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, notifique la presente resolución y el Dictamen Consolidado respectivo con sus Anexos al Instituto Electoral del estado de Veracruz y dicho

organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

**DÉCIMO.** Hágase del conocimiento del Organismo Público Local del estado de Veracruz, a efecto que proceda al cobro de las sanciones impuestas a los partidos políticos en el ámbito local, en términos del artículo 458, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las cuales se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme cada una de ellas, de conformidad con lo establecido en el **Considerando Décimo sexto** de la presente resolución.

**DÉCIMO PRIMERO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de las sanciones impuestas en la presente resolución, en términos de lo dispuesto en el artículo transitorio PRIMERO del Acuerdo **INE/CG61/2017**.

**DÉCIMO SEGUNDO.** En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las sanciones determinadas con base en la capacidad económica federal se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que cada una de las sanciones impuestas en la presente resolución hayan quedado firmes; los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas de esta resolución, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables.

**DÉCIMO TERCERO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**DÉCIMO CUARTO.** Publíquese una síntesis de la presente resolución en el Diario Oficial de la Federación, dentro de los quince días siguientes a aquél en que esta haya quedado firme.

**VOTO PARTICULAR QUE PRESENTA LA CONSEJERA ELECTORAL ADRIANA M. FAVELA HERRERA, RESPECTO DEL PROYECTO DE DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018.**

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, numeral 6, del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, formulo el presente voto particular respecto del punto **6.1 del orden del día** denominado: **“DICTAMEN CONSOLIDADO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS DE CAMPAÑA AL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL EN LOS MUNICIPIOS DE CAMARÓN DE TEJEDA, EMILIANO ZAPATA Y SAYULA DE ALEMÁN, EN EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EXTRAORDINARIO 2018.”** *(en adelante Dictamen Consolidado y Resolución)* aprobados por votación mayoritaria en la sesión ordinaria del Consejo General celebrada el día 25 de abril de 2018.

Como lo sostuve en la discusión de este asunto, mi disenso para no acompañar los argumentos y las sanciones que se impusieron a la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue” integrada por el PAN-PRD y a la Coalición “Por un Veracruz Mejor” conformada PRI-PVEM *(en lo sucesivo las Coaliciones)*, estriba en que desde mi



perspectiva, el análisis efectuado por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) no fue exhaustivo ni apegado a derecho, respecto de los supuestos gastos no reportados por dichas Coaliciones por el pago de servicios a los representantes generales y de casilla que se desempeñaron el día de la jornada electoral.

La mayoría de los Consejeros Electorales consideraron que si bien las Coaliciones registraron los formatos “**CRCG**” (comprobante de representante general o de casilla) en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) y se adjuntó la documentación comprobatoria, **aun así se observaron discrepancias**, ya que mientras los formatos señalaban que los servicios de los representantes fueron prestados de manera “**gratuita**”, tras realizar la verificación “*in situ*” y practicar diversas entrevistas, **aparentemente** los mismos representantes manifestaron en los cuestionarios elaborados por la UTF que **sí habían recibido un pago y por tal razón, se aprobó sancionar a ambas Coaliciones.**

Antes de exponer los argumentos en los que se sustenta mi desacuerdo, considero necesario detallar –a manera de antecedentes- algunos aspectos relevantes del Dictamen Consolidado y la Resolución que nos ocupa:

**1) Las Coaliciones, antes de la notificación del oficio de errores y omisiones,** registraron en el SIF los formatos **CRCG**, señalando en ellos que los servicios que prestarían sus representantes serían de forma gratuita, desinteresada y voluntaria.

**2) El día 18 de marzo de 2018** (fecha en la cual se realizaron los comicios extraordinarios) la UTF aplicó diversas entrevistas a los ciudadanos que fungieron como representantes generales y de casilla de las Coaliciones, y obtuvo información mediante el llenado de cuestionarios para conocer si habían recibido o no, un pago



por alimentos, por transportación o por servicios prestados el día de la jornada electoral.

**3) En el oficio de errores y omisiones,** la UTF informó a las Coaliciones los resultados de tales entrevistas y proporcionó un anexo detallando los nombres de las personas entrevistadas, el tipo de gastos que no fueron reportados y los montos que se obtuvieron a partir de las encuestas realizadas el día de la jornada electoral extraordinaria.

En el mismo oficio de errores y omisiones, la UTF le solicitó a la Coaliciones que aportaran “... *los comprobantes que ampararan los gastos efectuados el día de la jornada electoral y que no fueron reportados en el informe de campaña con todos los requisitos establecidos en la normativa*”, con el objeto de solventar las Conclusiones que fueron observadas; no obstante, la instancia fiscalizadora fue omisa en proporcionar el análisis sobre las discrepancias que detectó entre las información que contenían los formatos **CRCG** y los cuestionarios respecto del pago de sus representantes.

**4) Al responder el oficio de errores y omisiones,** las Coaliciones mencionaron que los comprobantes **CRCG** ya estaban “cargados” en el SIF y aportaron para tal efecto, los datos de identificación de la póliza y el identificador de la contabilidad en donde se registraron los formatos. Cabe aclarar que las Coaliciones dieron respuesta expresa a lo que fue les fue notificado, esto es, señalaron que la documentación comprobatoria ya estaba alojada en el SIF, **pero en modo alguno se les solicitó aclarar las discrepancias detectadas.**

5) En el Dictamen Consolidado, se concluye que ambas Coaliciones deben ser sancionadas **porque omitieron reportar el pago de los representantes generales y de casillas**, ya que si bien en los formatos **CRCG** que registraron en el SIF se señaló que la participación de los representantes fue **gratuita, voluntaria y desinteresada**; las encuestas firmadas por estos mismos representantes demostraron, en algunos casos, **que sí se les había pagado**.

6) La mayoría de los Consejeros Electorales, **aprobó el proyecto de resolución y sancionó a ambas Coaliciones** tras considerar que eran responsables por la conducta de omitir el reporte de los pagos que realizaron a sus representantes generales y de casilla. Los montos de las sanciones impuestas son los siguientes:

COALICIÓN	CONCLUSIÓN	MONTO INVOLUCRADO POR EL SUPUESTO GASTO NO REPORTADO POR EL PAGO DE REPRESENTANTES	SANCIÓN (150% DEL MONTO INVOLUCRADO)
"Veracruz el Cambio Sigue" (PAN – PRD)	1	\$2,500.00	\$3,750.00
"Por un Veracruz Mejor" (PRI – PVEM)	4	\$5,540.00	\$8,310.00

Desde mi punto de vista, toda determinación que asuma el Consejo General debe estar apoyada en los principios de certeza y legalidad, situación que en el presente caso no se cumple, pues no se valoraron todas las circunstancias que se suscitaron en torno a estas Conclusiones.

En mi opinión, no bastaba que la UTF argumentara en el Dictamen Consolidado que no debía: *"otorgarle mayor peso (sic) probatorio a los formatos que presentó primigeniamente el partido (sic), [ya que] desnaturaliza las facultades de comprobación que tiene esta autoridad para contrastar lo reportado por los sujetos obligados con otras fuentes de información, verbigracia son las acciones que se*

*toman para confrontar los datos con las autoridades hacendaria, bancaria y fiscal: o bien, con los proveedores de bienes y servicios.*

Así, la instancia fiscalizadora sostiene que: *“el testimonio obtenido directamente in situ en cada una de las casilla y de manera espontánea con cada uno de los ciudadanos, resulta una prueba idónea para acreditar si lo reportado por el partido político corresponde o no a la realidad. Cuestión que, en el caso concreto, permite concluir que el partido político fue omiso en el reporte del gasto.”*

[énfasis añadido]

Estimo que estas afirmaciones no puede ser la base sobre la cual se determinen las Conclusiones que se le reprochan a las Coaliciones, porque del análisis que realicé tanto a los formatos **CRCG** que se registraron en el SIF, como a los cuestionarios que elaboró la UTF advierto varias deficiencias que expondré a continuación:

Uno de los formatos que aparecen en el SIF está a nombre del ciudadano **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** quien actuó como representante de casilla por el PRD [integrante de la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue” (PAN-PRD) que contendió en la elección extraordinaria del municipio de Emiliano Zapata]. La imagen es la siguiente:

114. FORMATO "CRGC" COMPROBANTE DE REPRESENTACION GENERAL O DE CASILLA



FOLIO:  
LUGAR: Emiliano Zapata  
FECHA: 14/Mar/2018

EL PARTIDO POLITICO, COALICIÓN, \_\_\_\_\_

CANDIDATO INDEPENDIENTE Y MAS

SUJETOS OBLIGADOS:

Delgadillo Rodrigue Manuel Jared  
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE(S)

CON DOMICILIO EN: \_\_\_\_\_

EN SU CARÁCTER DE (7)

MILITANTE ☐  
SIMPATIZANTE ☐

NÚMERO DE MILITANTE \_\_\_\_\_  
CLAVE DE ELECTOR DLRDMN9703066141

DESEMPEÑE EL CARGO DE REPRESENTANTE

GENERAL ☐ DE CASILLA ☒

EL DIA DE LA JORNADA ELECTORAL DE MANERA

GRATUITA ☒ ONEROSA ☐

POR TAL MOTIVO EL MILITANTE O SIMPATIZANTE MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

QUE: Desempeñé el cargo de representante de casilla, el día de la jornada electoral de manera gratuita.

RAZON POR LA CUAL FIRMA DE CONFORMIDAD.

FIRMA DEL MILITANTE O SIMPATIZANTE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE  
RESPONSABLE DE FINANZAS

El formato está fechado el 14 de marzo de 2018 y el PRD señala expresamente que el ciudadano Manuel Jared Delgadillo Rodríguez desempeñó el cargo de representante de manera gratuita.

Scanned by CamScanner



De la lectura a dicho cuestionario, se puede observar que si bien el ciudadano señaló que **sí recibió un pago por ser representante de casilla** (anota la cantidad

de \$1,000.00 pesos) hace la precisión que hasta el momento de la entrevista **“no se a (sic) recibido el pago”** que supuestamente se le otorgaría.

De la comparación que realicé a ambos documentos, destaco algunos aspectos:

**A) Me llama la atención que el cuestionario no está firmado por la auditora María de Lourdes Mora García, funcionaria de la UTF que realizó la entrevista.**

Esta omisión es relevante, porque me parece que la firma autógrafa era un requisito indispensable para avalar que los datos anotados por **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** fueron requisitados en presencia de la citada servidora pública.

Es de explorado derecho que la firma es un requisito formal e indispensable que permite advertir la voluntad de quien rubrica un documento, además de identificar a la persona que realiza cualquier acto jurídico en donde exista una consecuencia de derecho.

De ahí que es razonable la exigencia de la firma autógrafa en los documentos en donde un servidor público -en este caso una auditora de la UTF- ejecute una diligencia de verificación como la que realizó al entrevistar al ciudadano **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez**.

Ello es así, porque desde mi punto de vista, la firma autógrafa -como exigencia formal- permitiría acreditar que la auditora exteriorizó su voluntad, certificó la diligencia y estuvo presente en el momento que se requisitaron los datos que anotó **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** en el cuestionario; no obstante, al no contener su rúbrica esta omisión podría traducirse en una inexistencia del acto jurídico.

De ahí mi diferencia, en la interpretación que realizó la mayoría de los Consejeros Electorales, debido a que considero que era necesaria la firma tanto de la auditora como del resto de los auditores de la UTF que realizaron las entrevistas a los representantes en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán en el estado de Veracruz.

**B)** En el cuestionario **no se señala de qué manera la auditora María de Lourdes Mora García corroboró los datos del ciudadano Manuel Jared Delgadillo Rodríguez**; es decir, no advierto con qué documento se identificó dicho ciudadano ni tampoco se adjuntó al cuestionario algún documento que permitiera comprobar sus datos en el momento de la entrevista.

Sin embargo, además del recibo **CRCG** del representante **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** que fue “cargado” en el SIF, también se aportó una copia de la credencial para votar con fotografía del citado ciudadano para comprobar su identidad.

Por consiguiente, sostengo que era necesario que la **auditora María de Lourdes Mora García** solicitara al ciudadano **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** una identificación en el momento que realizó la entrevista, con el objeto de acreditar que efectivamente entendía la diligencia con dicho ciudadano y que los datos quedaran asentados en el cuestionario.

Lo anterior era de vital importancia, porque el propio cuestionario contiene tres campos que debían requisitarse:

1. Nombre completo.
2. Dirección.
3. Clave de elector.

Por tanto, la forma idónea para corroborar la personalidad del ciudadano **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez** y que los datos de identificación coincidieran en ambos documentos -formato **CRCG** y cuestionario- era precisamente contrastando la información que se obtuvo en la diligencia y con ello tener la certeza que se trataba del mismo representante.

Este aspecto tampoco fue valorado por la mayoría de los Consejeros Electorales que aprobaron el Dictamen Consolidado y la resolución.

Adicionalmente, el cuestionario no refleja **la hora en la cual se realizó la entrevista**, lo cual es de la mayor importancia porque, desde mi punto de vista, si como se afirma en el Dictamen Consolidado el cuestionario fue el elemento convictivo para imputar el gasto no reportado, lo lógico es que la auditora María de Lourdes Mora García hubiera precisado las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se ejecutó la entrevista para garantizar la autenticidad y la temporalidad de este procedimiento de auditoría.

Situación que no ocurrió, **ni tampoco se levantó una acta circunstanciada** que reseñara las actuaciones que desarrolló la citada auditora en la entrevista, de tal suerte que estos elementos, en mi concepto, le restan eficacia probatoria a los datos que se inscribieron en el cuestionario.



C) Tras leer con detenimiento el cuestionario, me percaté que contiene dos preguntas para “verificar” si el representante recibió o no, un pago por sus servicios el día de la jornada electoral. La primera interrogante es: “¿*recibe pago por ser representante?*”, en el supuesto que se haya contestado de manera afirmativa, el siguiente cuestionamiento es el siguiente: “¿***Cuántos pagos recibirá?***”.

La redacción de esta última pregunta es incierta, porque si bien podría interpretarse que el representante recibió un solo pago, también es cierto que cabría la posibilidad de presumir que recibió otros pagos, toda vez que dicho cuestionamiento se conjuga en tiempo futuro, sin que la instancia fiscalizadora tenga los elementos para corroborar si realmente le fueron entregados al entrevistado otras cantidades por sus servicios.

5. Dentro del cuestionario que contestó **Manuel Jared Delgadillo Rodríguez**, **existe un dato que, desde cualquier arista**, contradice lo que se afirma en el Dictamen Consolidado cuando se asevera que la Coalición “Veracruz el Cambio Sigue” no reportó los gastos de dicho representante en su informe de campaña.

Ello es así, porque a pesar de que el representante informó en el cuestionario que había recibido un pago en efectivo por la cantidad de **\$1,000.00 pesos**, lo cierto es que en la propia encuesta, hace una precisión en el sentido que: “***no se a (sic) recibido el pago***”, situación que tanto la UTF como la mayoría de los Consejeros Electorales que aprobaron el Dictamen Consolidado y la resolución pasaron por alto, debido a que no se verificó si en otro momento el ciudadano Manuel Jared Delgadillo Rodríguez recibió la cantidad que anotó en el cuestionario, ya que era la única forma para acreditar que efectivamente se había dejado de reportar este gasto en su informe de campaña.

Todas estas inconsistencias me llevan a la convicción que era necesario analizar de forma minuciosa cada uno de los cuestionarios y notificarles a las Coaliciones **las discrepancias halladas entre la información de los formatos CRCG que estaban registrados en el SIF y la respuesta de cada entrevistado en los cuestionarios, para que así, las Coaliciones estuvieran en posibilidad de alegar lo que a su derecho conviniera y no sólo requerirles: “los comprobantes que ampararan los gastos efectuados el día de la jornada electoral y que no fueron reportados en el informe de campaña con todos los requisitos establecidos en la normativa”.**

Incluso, tengo la impresión que la Unidad Técnica de Fiscalización modificó en este caso, el procedimiento de auditoría para detectar los hallazgos que se desprenden durante el proceso de fiscalización; por ejemplo, en otros monitoreos a los espectaculares, a las páginas de internet y a las visitas de verificación, **se concilia la información reportada por los partidos o coaliciones en el SIF y se contrasta con lo que revelan estos monitoreos**, con la finalidad de que los sujetos obligados conozcan las diferencias y así puedan ejercer una efectiva garantía de audiencia.

Empero, como ya lo detallé, esto no sucedió en el presente asunto, porque en el Dictamen Consolidado se les imputa un gasto no reportado a las Coaliciones, **tomando en cuenta únicamente lo que mencionaron los entrevistados en los cuestionarios**, sin considerar algunos elementos que no demostraban plenamente si los representantes habían recibido un pago por sus servicios.

Ahora bien, durante la discusión de este asunto en la sesión del 25 de abril de 2018, algunos de los Consejeros Electorales en sus respectivas intervenciones realizaron diversas afirmaciones para sostener el sentido de su voto y aprobar las sanciones que se le impusieron a las citadas Coaliciones.

Por la trascendencia del criterio que fue aprobado por la mayoría de los Consejeros Electorales, en donde me parece, que no se tenía la certeza para imputar un gasto no reportado a las citadas Coaliciones, me permito hacer algunas precisiones en los siguientes apartados:

#### **I. LAS ENTREVISTAS COMO MEDIO DE CONVICCIÓN PARA ACREDITAR LA OMISIÓN DE REPORTAR EL GASTO DE LOS REPRESENTANTES GENERALES Y DE CASILLA, YA SE HABÍAN UTILIZADO EN OTROS EJERCICIOS DE FISCALIZACIÓN**

Ciertamente en otros ejercicios de fiscalización, las entrevistas practicadas “in situ” a los representantes generales y de casilla, sirvieron de **evidencia suficiente para tener por acreditado que los representantes recibieron un pago por la prestación de sus servicios el día de la jornada electoral.**

Incluso, así lo confirmó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificado en el recurso de apelación **SUP-RAP-135/2016.**

No obstante, esa ejecutoria se resolvió en el marco de la revisión a los informes de los gastos de campaña de la elección extraordinaria al cargo de Gobernador en el estado de Colima en el año 2016, y en aquel caso, se demostró que la aplicación de la encuesta era razón suficiente para tener certeza sobre el pago que sí había realizado el PRI a sus representantes el día de la jornada electoral.

El contexto del presente asunto es distinto, porque el Consejo General del Instituto Nacional Electoral tras aprobar el Reglamento de Fiscalización dispuso en el artículo 216 bis, párrafo 4 que el registro de los gastos realizados el día de la Jornada Electoral, así como el envío de la documentación soporte **se debería realizar en el momento de registrar a los representantes respectivos mediante el Comprobante de Representación General o de Casilla (CRGC).**



Así, la finalidad de este formato “CRGC” tuvo por objeto proporcionar a la instancia fiscalizadora los elementos para documentar si la aportación fue voluntaria, gratuita y desinteresada o, en su caso, si los representantes de generales y de casilla recibieron remuneración económica.

Por tanto, los partidos políticos y Coaliciones que participaron en las elecciones extraordinarias al cargo de Presidente Municipal en los municipios de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, **tenían la obligación de proporcionar los formatos “CRGC” y registrarlos en el SIF para cumplir con la normativa electoral.**

Como lo manifesté anteriormente, la UTF -como parte de sus procedimientos de auditoría- tiene la obligación de verificar el gasto que realizan los partidos políticos el día de la jornada electoral, por concepto de pago a representantes generales y de casilla, comida, transporte o cualquier otro gasto vinculado a las actividades desarrolladas ese día, los cuales se consideran como gasto de campaña y se contabilizan para los topes respectivos.

Luego entonces, en el caso que nos ocupa estamos frente a un supuesto que no puede compararse con otros ejercicios de fiscalización porque no existen las mismas condiciones fácticas y legales. Me explico.

- Durante los procesos electorales de 2015-2016, los partidos políticos y coaliciones **NO tenían** la obligación de presentar el formato “CRGC”, y por ello, la entrevista servía como el medio de convicción para acreditar el pago o no, de los representantes generales y de casilla.

- Durante los procesos electorales 2016-2017, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral instauró 4 procedimientos oficiosos para conocer si los partidos políticos comprobaron el pago de sus representantes generales y de casilla en los estados de Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, con la salvedad que en ninguna entidad, la UTF practicó entrevistas a los ciudadanos que fungieron con ese carácter y **se le otorgó plena validez a los datos contenidos en los formatos “CRCG”**.
- Durante estas elecciones extraordinarias de Camarón de Tejeda, Emiliano Zapata y Sayula de Alemán, en el Estado de Veracruz, los sujetos obligados (partidos políticos y Coaliciones) **tenían la obligación para registrar en el SIF los formatos “CRCG”, y además la UTF verificó “in situ” y practicó diversas entrevistas a los ciudadanos que actuaron como representantes el día de la jornada electoral.**

Es por esta razón, que desde mi óptica, no existe punto de comparación respecto de este asunto con los anteriores ejercicios de fiscalización, porque las condiciones son distintas, **ya que en este caso existían 2 documentos que debían contrastarse para corroborar la veracidad de los datos asentados en ellos.**

Y es precisamente esta circunstancia la que me llevó a apartarme del sentido aprobado por la mayoría de los Consejeros Electorales, ya que si existía contradicción entre los datos de los formatos “CRCG” registrados en el SIF y los cuestionarios de las entrevistas que levantó la UTF, era **imprescindible hacer una ponderación integral y no sólo darle “mayor valor probatorio” a las encuestas como lo expliqué en párrafos precedentes.**

## II. IRRELEVANCIA EN EL MONTO DE LAS SANCIONES

Otro de los argumentos que se manifestaron en la discusión del Consejo General, fue la supuesta *“irrelevancia en el monto de las sanciones”*, que se impusieron a las Coaliciones y que por esta razón, era intrascendente la discusión que se generó en este asunto.

Mi posición al respecto, es que el monto involucrado en la imposición de de las sanciones no debe ser una justificación para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral exima de responsabilidad a los sujetos obligados cuando existan elementos que acrediten su responsabilidad.

Particularmente, si bien es cierto en el caso que nos ocupa las sanciones que aprobó la mayoría de los Consejeros Electorales suman un importe de **\$12,060.00 pesos**, mi diferencia radica en el criterio que se aprobó y en la falta de exhaustividad para valorar correctamente todos los elementos contenidos tanto en los formatos CRCG como en las entrevistas aplicadas por los auditores de la UTF.


Tal y como lo señalé en la sesión del 25 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral está compelido a ejercer sus facultades de vigilancia respecto del origen y destino de los recursos que emplean los partidos políticos, sin importar los montos que arrojen las sanciones a las que se hacen acreedores los sujetos obligados por la transgresión de la normatividad en materia de fiscalización.

Sin embargo, insisto que en este asunto, no debió estar a discusión el monto de la sanción, sino que no se valoraron de manera integral todas las circunstancias y las discrepancias en los datos contenidos en los formatos CRCG y las entrevistas que se realizaron a los representantes.

En síntesis, considero que la mayoría de los Consejeros Electorales aprobó un criterio subjetivo y dogmático, sin realizar un análisis individualizado y pormenorizado de cada uno de los casos como lo he expuesto a lo largo del presente voto particular.

De ahí mi disenso para no acompañar la decisión de la mayoría de los integrantes de este Consejo General por lo que emito mi **VOTO PARTICULAR** de conformidad con lo establecido en el artículo 26, numeral 6 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, adjuntándose el mismo como parte integrante de la resolución aprobada el 25 de abril de 2018.

**Ciudad de México, 27 de abril de 2018**



**Dra. Adriana M. Favela Herrera**  
**Consejera Electoral**

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Hay una moción de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, entiendo para anunciar un voto particular. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Exactamente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más para recordar que establecimos el compromiso para que la Comisión de Fiscalización revise los formatos y los criterios a los que se va a sujetar la actuación de los verificadores, y eso genere la certeza que han pedido aquí los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Así es, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Una vez que hayan causado Estado las Resoluciones que hemos aprobado, dentro de los 15 días siguientes le pido que publique una síntesis de las mismas en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

Respecto de las mismas, le pido que informe el contenido de lo aprobado a la Sala Superior y a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los Tribunales Electorales Locales correspondientes para los efectos conducentes. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_



El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto de diversos procedimientos de queja y administrativos sancionadores en materia de fiscalización instaurados en contra de Partidos Políticos Nacionales, mismo que se compone de 4 apartados.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Consejeros, están a su consideración estos apartados.\_\_\_\_\_

Consulto en primera instancia si alguien desea reservar para su discusión en lo particular, alguno de ellos o si desea que se considere una ronda de discusión en lo general.\_\_\_\_\_

De no ocurrir ninguno de los 2 casos, Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde de los 4 apartados.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Resolución de Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificados en el orden del día como los apartados que van del 7.1 al 7.4.\_\_\_\_\_

Quienes estén por la afirmativa sírvanse levantar la mano, por favor.\_\_\_\_\_

Aprobados por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**(Texto de las Resoluciones aprobadas INE/CG404/2018, INE/CG405/2018, INE/CG406/2018 e INE/CG407/2018) Ptos. 7.1 al 7.4**\_\_\_\_\_

INE/CG404/2018

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO COMO INE/P-COF-UTF/22/2014**

Ciudad de México, 25 de abril de dos mil dieciocho.

**VISTO** para resolver el expediente número **INE/P-COF-UTF/22/2014**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

**ANTECEDENTES**

Previo al desarrollo de los antecedentes que integran el procedimiento en que se actúa, es importante aclarar que por cuestión de método y derivado de la multiplicidad de diligencias realizadas por la autoridad a diversas personas físicas, morales y autoridades, a partir del Antecedente **IX** se describen temáticamente las diligencias realizadas durante la sustanciación del procedimiento de mérito.

**I. Resolución que ordena el inicio del procedimiento oficioso.** En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de octubre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG217/2014**, respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece, mediante la cual, entre otras cuestiones, se ordenó el inicio de un procedimiento oficioso en contra del Partido de la Revolución Democrática, ello en atención al Punto Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO**, Considerando **10.3**, inciso **k**), conclusión **70**, el cual se transcribe a continuación en la parte que interesa: (Fojas 1-29 del expediente).

**“DÉCIMO PRIMERO.** Se ordena a la Unidad de Fiscalización que, en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los Considerandos respectivos.

**10.3 PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.**

(...)

a) 73 faltas de carácter formal: conclusiones: (...), 70, (...)

(...)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias, mismas que tienen relación con el apartado de ingresos y egresos, las cuales se presentarán por ejes temáticos para mayor referencia.

(...)

**Pasivos Generados por concepto de gastos de Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres**

**Conclusión 70**

'70. El Partido no realizó el pago de conceptos vinculados a Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el ejercicio correspondiente, por un importe de \$3,424,565.12.'

(...)

**II. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN**

(...)

<b>Descripción de la irregularidad observada (1)</b>	<b>Acción u omisión (2)</b>
(...)	
70. El Partido no realizó el pago de conceptos vinculados a Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el ejercicio correspondiente, por un importe de \$3,424,565.12	Omisión
(...)	

(...)

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

*En consecuencia, se concluye que la sanción que se debe imponer al Partido de la Revolución Democrática es la prevista en dicha fracción II, inciso a) del artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa que asciende a **7078 días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal en el dos mil catorce, equivalente a \$458,371.28 (cuatrocientos cincuenta y ocho mil trescientos setenta y un pesos 28/100 M.N.).***

(...)

**k) Procedimientos oficiosos: Conclusiones (...)** 70, (...)

(...)

**Conclusión 70**

*De la verificación a la balanza de comprobación acumulada al 31 de diciembre de 2013, de la contabilidad de Liderazgo Político de las Mujeres, se observó que la cuenta “Proveedores” muestra saldos finales por un importe total de \$5,635,030.39; sin embargo, estos debieron ser liquidados, toda vez que el recurso se encuentra etiquetado para gastos en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Los casos en comento se detallan a continuación:*

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 2013	CARGOS	ABONOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2-10-101-0001-0101	ALTAS Y BAJAS SERVICIOS EDITORIALES SC DE RL	0.00	\$115,560.36	\$171,525.72	\$55,965.36
2-10-101-0001-0368	ACTIVACION COORD Y ORGANI DE EVENTOS S D RL DE CV	0.00	1,102,934.12	1,810,926.68	707,992.56
2-10-101-0001-0617	AACAFIQ AC	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0001-0629	ACEVEDO GARCIA ANDREA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0003-0399	CARRION GUERRA ALICIA	0.00	119,465.73	154,513.97	35,048.24
2-10-101-0003-0529	CAPITAL NETWORKS SA DE CV	0.00	0.00	99,340.00	99,340.00
2-10-101-0003-0616	CONDE RODRIGUEZ SARA NORMA	0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00
2-10-101-0003-0770	CAPAC Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SC	0.00	5,800.00	11,600.00	5,800.00
2-10-101-0003-0773	CENTRO ALT COM GRO MA LUISA HERRASTI LA CHINA AC	0.00	119,000.00	157,000.00	38,000.00
2-10-101-0003-0871	CANETE SANCHEZ CLAUDIA JAQUELINE	0.00	0.00	489,984.00	489,984.00
2-10-101-0003-0872	COMERCIALIZADORA EFISA SA DE CV	0.00	0.00	235,000.64	235,000.64
2-10-101-0003-0885	CASTELLANOS JURADO ALINE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0003-0886	CASTORENA SAENZ NITHIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0004-0228	DELFIN AVENDANO LUZ DEL CARMEN	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2-10-101-0005-0065	ESCOBAR HERNANDEZ DAVID	0.00	30,000.00	45,000.00	15,000.00
2-10-101-0005-0135	EXPORT GROUP GESCOPY SA DE CV	0.00	17,400.00	588,786.07	571,386.07
2-10-101-0005-0242	ENSASTIGA SANTIAGO MARIO	0.00	11,000.00	21,000.00	10,000.00
2-10-101-0005-0249	ENSO GO SA DE CV	0.00	12,233.00	64,341.19	52,108.19
2-10-101-0007-0194	GOMEZ FLORES LAURA	0.00	41,000.00	77,000.00	36,000.00
2-10-101-0007-0356	GUTIERREZ ANDRADE ROBERTO	0.00	42,781.96	71,199.64	28,417.68
2-10-101-0007-0558	GARCIA RIVERA ROBERTO	0.00	8,000.00	10,000.00	2,000.00
2-10-101-0007-0698	GRUPO REGNUS SA DE CV	0.00	270,057.50	519,451.00	249,393.50
2-10-101-0007-0721	GIL ROSALES LUCIA	0.00	58,751.12	198,751.12	140,000.00
2-10-101-0007-0722	GODINEZ HERNANDEZ ARTURO JOB	0.00	5,000.00	21,900.00	16,900.00
2-10-101-0007-0805	GENERANDO EQUIDAD Y LIBERTAD EN COLECTIVO AC	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00

**CONSEJO GENERAL  
INE/P-COF-UTF/22/2014**

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL ENERO 2013	CARGOS	ABONOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
2-10-101-0007-0887	GUERRA OCHOA MARIA TERESA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0007-0916	GARCIA RUIZ CECILIA	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0008-0151	HUERTA LOPEZ ALICIA	0.00	62,000.00	121,000.00	59,000.00
2-10-101-0009-0074	INTERTICKET SA DE CV	0.00	0.00	189,916.23	189,916.23
2-10-101-0012-0033	LAZOS GARZA FLAVIO	0.00	5,000.00	15,000.00	10,000.00
2-10-101-0012-0108	LUPCA SA DE CV	0.00	159,544.51	309,808.91	150,264.40
2-10-101-0012-0269	LILITH CONSULTORAS SC	0.00	5,800.00	11,600.00	5,800.00
2-10-101-0012-0286	LAGARDE Y DE LOS RIOS MARIA MARCELA	0.00	30,000.00	150,000.00	120,000.00
2-10-101-0013-0101	MENDOZA HERNANDEZ ENRIQUE	0.00	0.00	230,484.46	230,484.46
2-10-101-0013-0117	MEZA PEÑA MIRIAM ANGELICA	0.00	134,500.00	169,500.00	35,000.00
2-10-101-0013-0170	MORALES VARGAS EDUVIGES ROSALIO	0.00	45,000.00	51,000.00	6,000.00
2-10-101-0013-0327	MANCILLA GARCIA ANGELICA HAYDEE	0.00	76,560.00	185,832.00	109,272.00
2-10-101-0013-0340	MARTINEZ BADAJOS OSCAR	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
2-10-101-0013-0399	MENA HERNANDEZ LETICIA MARIANA	0.00	0.00	1,995.20	1,995.20
2-10-101-0013-0567	MANCILLA GARCIA RODRIGO	0.00	4,900.00	14,900.00	10,000.00
2-10-101-0013-0568	MANCILLA REYES ALFONSO	0.00	10,000.00	30,000.00	20,000.00
2-10-101-0014-0078	NOLASCO CERVANTES SILVIA	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00
2-10-101-0016-0185	ORTUNO HERNANDEZ FELIPE	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0016-0292	ORTIZ OLVERA JUAN MARCOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00
2-10-101-0017-0113	PRENSA LATINA AGENCIA INF LAT	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00
2-10-101-0017-0449	PUNTO GENERO AC	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2-10-101-0019-0243	RED DIGITAL PUBLICITARIA SA DE CV	0.00	354,159.45	354,159.48	0.03
2-10-101-0019-0393	RODRIGUEZ GARCIA DUNIA AMIRA ERENDIRA	0.00	20,000.00	90,000.00	70,000.00
2-10-101-0020-0535	SANCHEZ LAGUNA ALEJANDRO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2-10-101-0020-0536	SANTOS CALLEJA JOSEFINA ALEJANDRA	0.00	16,500.00	35,700.01	19,200.01
2-10-101-0020-0990	SOSA ZARAGOZA JOSE DANIEL	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2-10-101-0021-0096	TURISMO DEMA SA DE CV	0.00	1,838,932.64	3,319,082.46	1,480,149.82
2-10-101-0023-0032	VAZQUEZ GARCIA DULCE JOSEFINA	0.00	18,000.00	36,000.00	18,000.00
2-10-101-0023-0094	VALDES JUAREZ HUGO	0.00	0.00	2,012.00	2,012.00
2-10-101-0023-0129	VARELA ZUNIGA MARIA DEL ROSARIO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2-10-101-0027-0055	ZAZUETA ZAZUETA JORGE ARMANDO	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL</b>					<b>\$5,635,030.39</b>

*Al respecto, fue preciso señalar que de acuerdo con la normatividad, el financiamiento otorgado para el rubro de “capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres” debió ser destinado exclusivamente en el ejercicio en el que fue otorgado.*

*En consecuencia, solicitó lo siguiente:*

- *Indicar el motivo por el cual existen saldos pendientes de pago en su contabilidad, toda vez que al partido se le otorga financiamiento exclusivo para la realización de estos gastos.*
- *En su caso, las pólizas con su documentación soporte consistente en copia de cheques y/o transferencias bancarias con los que se les hubiese pagado y liquidado las deudas correspondientes a los proveedores y prestadores de servicios detallados en el cuadro que antecede durante el ejercicio 2014, así como los comprobantes que dieron origen al pasivo.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

*Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 55, numeral 3, 149, numeral 1, 153 y 297 del Reglamento de Fiscalización.*

*La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/826/14 del 01 de julio de 2014, recibido por el partido el mismo día.*

*Al respecto, mediante escrito SAFyPI/253/14 del 15 de julio de 2014, recibido por ésta Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:*

*‘Se adjuntan como Anexo 7 ‘Pasivos’ Carpeta 1 y 2, la relación en el que se demuestra el pago de cada saldo pendiente que nos observa la autoridad.’*

*Del análisis a lo manifestado, así como de la verificación a la documentación presentada por el partido se determinó lo siguiente:*

*El partido presentó un documento denominado ‘Respuesta al Anexo 12 del oficio INE/UTF/DA/826/14’, en el cual se observó que reporta saldos en la cuenta de ‘Pasivos’, que fueron generados por gastos en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres y, que no se pagaron en el ejercicio 2013.*

*Del análisis a la relación en cuestión, se identificó que adicionalmente a las pólizas observadas por esta autoridad, los pasivos para el ejercicio 2013 incrementaron por un monto de \$307,650.64, de conformidad con lo señalado en la columna “B” del cuadro siguiente, derivado sobre todo de la liquidación de pasivos correspondientes al ejercicio 2012; teniendo así, un saldo total a comprobar en las subcuentas de pasivos al 31 de diciembre de 2013 de \$5,841,681.03, de conformidad con lo señalado en la columna “C” del cuadro siguiente.*

*En este sentido, fue importante precisar que para el caso específico de los gastos por Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, la realización (pago) de los gastos debió efectuarse en el mismo ejercicio, por lo que los institutos políticos debieron erogar en el ejercicio sujeto a revisión los porcentajes mínimos establecidos en el código electoral, así como los señalados en el Acuerdo CG17/2013 del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2013.*

*En razón de lo anterior, al no realizar el pago de los gastos en comento durante el ejercicio sujeto de revisión, que hasta la fecha en que se emitió el oficio INE/UTF/DA/1591/14 suman un importe de \$5, 841,681.03, implica que no sean considerados para la determinación de los montos mínimos que el partido debió ejercer para Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres durante 2013. Dicho monto pudo modificarse derivado de la revisión simultánea que la Unidad realizó en éste y otros rubros de la contabilidad del partido.*

*De la verificación a las pólizas con su documentación soporte presentadas por el partido consistente en facturas y copias de transferencias electrónicas a favor de los proveedores y prestadores de servicios realizadas en el ejercicio 2014, se determinó que, se realizaron pagos por un importe total de \$2,027,694.07, de conformidad con lo señalado en la columna “D” del cuadro siguiente; sin embargo, dichos gastos al 31 de diciembre de 2013 se encuentran provisionados, reconociendo la obligación de pago a terceros, esto implica que se utilice el financiamiento otorgado en ejercicios posteriores para gastos que no correspondían al mismo; razón por la cual la observación se consideró no atendida.*

*Por lo que correspondió a los saldos señalados en la columna “E” del cuadro siguiente por un importe total de \$932,200.34, no fueron proporcionadas las pólizas con sus respectivas copias de cheques o transferencias electrónicas a favor de los proveedores por un importe total de \$932,200.34; razón por la cual, la observación quedó no atendida respecto de este punto.*

*De la verificación a las pólizas con su documentación soporte presentadas por el partido consistente en facturas y copias de transferencias electrónicas realizadas en el ejercicio 2013 y 2014 entre cuentas bancarias del partido por un importe total de \$1,114,267.56; sin embargo, no fueron localizadas las copias de los cheques o de las transferencias electrónicas a favor de los proveedores de conformidad con lo señalado en la columna “F” del cuadro siguiente; razón por la cual, la observación quedó no atendida respecto de este punto.*

*Ahora bien, resulta importante señalar que el partido proporcionó pólizas con su documentación soporte consistente en facturas y copias de transferencias electrónicas a favor de diversos proveedores realizadas durante el ejercicio 2013; sin embargo, no fueron localizados los registros contables en las cuentas y subcuentas que el partido utiliza para registrar cada uno de los pagos realizados a los mismos por un importe total de \$1,767,519.06, de conformidad con lo señalado en la columna “G” del cuadro siguiente.*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NUMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGUN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITO SAFYPI/253/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORÍA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR F	PAGO SEGÚN PARTIDO NO CONTABILIZADO E LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO G
A	B	C = A + B	D	E	F	G	
2-10-101-0001-0101 ALTAS Y BAJAS SERVICIOS EDITORIALES SC DE RL	\$55,965.36	\$28,250.64	\$84,216.00	64,922.88	\$0.00	\$0.00	19,293.12
2-10-101-0001-0368 ACTIVACION COORD Y ORGANI DE EVENTOS S D RL DE CV	707,992.56	0.00	707,992.56	0.00	0.00	707,992.56	0.00
2-10-101-0001-0617 AACAFIQ AC	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0001-0629 ACEVEDO GARCIA ANDREA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0399 CARRION GUERRA ALICIA	35,048.24	0.00	35,048.24	0.00	0.00	0.00	35,048.24
2-10-101-0003-0529 CAPITAL NETWORKS SA DE CV	99,340.00	0.00	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0616 CONDE RODRIGUEZ SARA NORMA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0770 CAPAC Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SC	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0773 CENTRO ALT COM GRO MA LUISA HERRASTI LA CHINA AC	38,000.00	70,000.00	108,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2-10-101-0003-0871 CAÑETE SANCHEZ CLAUDIA JAQUELINE	489,984.00	0.00	489,984.00	0.00	489,984.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0872 COMERCIALIZADOR A EFISA SA DE CV	235,000.64	0.00	235,000.64	235,000.64	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0885 CASTELLANOS JURADO ALINE	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0886 CASTORENA SAENZ NITHIA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0004-0228 DELFIN AVENDAÑO LUZ DEL CARMEN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0154 ESCOBAR DEL RAZO GABRIELA	-1,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0065 ESCOBAR HERNANDEZ DAVID	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2-10-101-0005-0135 EXPORT GROUP GESCOPY SA DE CV	571,386.07	17,400.00	588,786.07	372,405.36	213,381.34	0.00	2,999.37
2-10-101-0005-0242 ENSASTIGA SANTIAGO MARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0249 ENSO GO SA DE CV	52,108.19	0.00	52,108.19	0.00	0.00	0.00	52,108.19
2-10-101-0006-0069 FUNDACION HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C.	-100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0194 GOMEZ FLORES LAURA	36,000.00	12,000.00	48,000.00	45,000.00	0.00	0.00	3,000.00
2-10-101-0007-0356 GUTIERREZ ANDRADE ROBERTO	28,417.68	0.00	28,417.68	3,417.36	0.00	0.00	25,000.32



**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NUMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGUN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITO SAFYPI/253/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORÍA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR F	PAGO SEGUN PARTIDO NO CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO G
	A	B	C = A + B	D	E		
2-10-101-0007-0558 GARCIA RIVERA ROBERTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-10-101-0007-0698 GRUPO REGNUS SA DE CV	249,393.50	0.00	249,393.50	0.00	0.00	0.00	249,393.50
2-10-101-0007-0721 GIL ROSALES LUCIA	140,000.00	0.00	140,000.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2-10-101-0007-0722 GODINEZ HERNANDEZ ARTURO JOB	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2-10-101-0007-0805 GENERANDO EQUIDAD Y LIBERTAD EN COLECTIVO AC	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0887 GUERRA OCHOA MARIA TERESA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0916 GARCIA RUIZ CECILIA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0008-0151 HUERTA LOPEZ ALICIA	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0009-0074 INTERTICKET SA DE CV	189,916.23	0.00	189,916.23	189,916.23	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0012-0033 LAZOS GARZA FLAVIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-10-101-0012-0108 LUPCA SA DE CV	150,264.40	0.00	150,264.40	150,264.40	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0012-0269 LILITH CONSULTORAS SC	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
2-10-101-0012-0286 LAGARDE Y DE LOS RIOS MARIA MARCELA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2-10-101-0013-0101 MENDOZA HERNANDEZ ENRIQUE	230,484.46	0.00	230,484.46	0.00	0.00	0.00	230,484.46
2-10-101-0013-0117 MEZA PEÑA MIRIAM ANGELICA	35,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2-10-101-0013-0170 MORALES VARGAS EDUVIGES ROSALIO	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2-10-101-0013-0327 MANCILLA GARCIA ANGELICA HAYDEE	109,272.00	0.00	109,272.00	69,832.00	0.00	0.00	39,440.00
2-10-101-0013-0340 MARTINEZ BADAJOS OSCAR	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0399 MENA HERNANDEZ LETICIA MARIANA	1,995.20	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0567 MANCILLA GARCIA RODRIGO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0568 MANCILLA REYES ALFONSO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0014-0078 NOLASCO CERVANTES SILVIA	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0016-0185 ORTUÑO HERNANDEZ FELIPE	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0016-0292 ORTIZ OLVERA JUAN MARCOS	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NÚMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGÚN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITO SAFyPI/253/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORÍA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR	PAGO SEGÚN PARTIDO NO CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO
A	B	C = A + B	D	E	F	G	
2-10-101-0017-0113 PRENSA LATINA AGENCIA INF LAT	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0017-0449 PUNTO GENERO AC	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0019-0243 RED DIGITAL PUBLICITARIA SA DE CV	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2-10-101-0019-0393 RODRIGUEZ GARCIA DUNIA AMIRA ERENDIRA	70,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2-10-101-0020-0535 SANCHEZ LAGUNA ALEJANDRO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0020-0536 SANTOS CALLEJA JOSEFINA ALEJANDRA	19,200.01	0.00	19,200.01	15,000.00	0.00	0.00	4,200.01
2-10-101-0020-0990 SOSA ZARAGOZA JOSE DANIEL	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0021-0096 TURISMO DEMA SA DE CV	1,480,149.82	0.00	1,480,149.82	0.00	215,223.00	406,275.00	858,651.82
2-10-101-0023-0032 VAZQUEZ GARCIA DULCE JOSEFINA	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0023-0094 VALDES JUAREZ HUGO	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
2-10-101-0023-0129 VARELA ZUÑIGA MARIA DEL ROSARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0027-0055 ZAZUETA ZAZUETA JORGE ARMANDO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$5,534,030.39	\$307,650.64	\$5,841,681.03	\$2,027,694.07	\$932,200.34	\$1,114,267.56	\$1,767,519.06

*El detalle de los pasivos generados por concepto de gastos en “Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 2013” correspondiente al cuadro que antecede, se analizó en el Anexo 14 del oficio INE/UTF/DA/1591/14.*

*En consecuencia, se le solicitó al partido nuevamente lo siguiente:*

- *Indicar el motivo por el cual existían saldos pendientes de pago por \$5, 841,681.03 de conformidad con lo señalado en la columna “C” denominada “Total de pasivos a pagar al 31/DIC/2013 según auditoría” del cuadro que antecede, toda vez que al partido se le otorgó financiamiento exclusivo para la realización de estos gastos en el ejercicio sujeto de revisión.*
- *Por lo que correspondió a los saldos de los proveedores y prestadores de servicios señalados en la columna “E” denominada “Pasivos sin la*

*comprobación del pago en el 2013 o 2014” por un importe de \$932,200.34 del cuadro que antecede, las pólizas con su documentación soporte consistente en copia de cheques y/o transferencias interbancarias a nombre de los mismos durante el ejercicio 2013 o 2014, así como, las pólizas y comprobantes que dieron origen al pasivo.*

- *Por lo que correspondió a los saldos de los proveedores y prestadores de servicios señalados en la columna “F” denominada “Pagos a los proveedores sin la copia del cheque y/o transferencia interbancaria a su favor” por un importe de \$1,114,267.56 del cuadro que antecede, las pólizas con su documentación soporte consistente en copia de cheques y/o transferencias interbancarias a nombre de dichos proveedores durante el ejercicio 2013 o 2014, así como, las pólizas y comprobantes que dieron origen al pasivo.*
- *En su caso, las pólizas, auxiliares contables y balanzas de comprobación correspondientes, en las cuales se identificaran los registros contables de los pagos y liquidaciones realizadas a los proveedores y prestadores de servicios señalados en la columna “G” denominada “Pagos según partido no contabilizado en la cuenta del proveedor analizado” por un importe de \$1,767,519.06 del cuadro que antecede.*
- *En su caso, las pólizas con su documentación soporte consistente en copia de cheques y/o transferencias bancarias con los que se les hubiese pagado y liquidado las deudas correspondientes a los proveedores y prestadores de servicios detallados en el cuadro que antecede durante el ejercicio 2014, así como los comprobantes que dieron origen al pasivo.*
- *Las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

*Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, numeral 1, inciso o) , 78, numeral 1, incisos a), fracción V, y c), fracción I del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el 25 numeral 1 inciso h), 273 numeral 1 incisos a) y b), 55, numeral 3 y 297 del Reglamento de Fiscalización.*

*La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio INE/UTF/DA/1591/14 del 20 de agosto de 2014, recibido por el partido el mismo día.*

*Al respecto, mediante escrito SAFyPI/326/14 del 27 de agosto de 2014, recibido por la Unidad de Fiscalización el mismo día, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:*

*“En relación a lo solicitado se envían cuatro Carpetas denominadas ANEXO 14 PASIVOS LPM, en las cuales se integran proveedor por proveedor, tal y como se muestra en la tabla que antecede.”*

*Del análisis a lo manifestado, así como de la verificación a la documentación presentada, se determinó lo siguiente:*

*Derivado de una serie de modificaciones, ajustes, reclasificaciones y registro de provisiones de gastos que el partido no había contabilizado ni proporcionado de un inicio para su análisis y revisión correspondiente, se determinó que los importes pendientes de comprobar o pagar a diversos proveedores y prestadores de servicios se incrementaron en un monto de \$668,432.71 adicional a los \$307,650.64 que se incrementaron en la contestación al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA/826/14, teniendo así un incremento total de \$976,083.35 al monto inicialmente observado, tal como se señala en la columna “B” del cuadro siguiente; teniendo así, un monto total a comprobar o pagar de \$6,510,113.74 registrados contablemente en diversas subcuentas de pasivos al 31 de diciembre de 2013, de conformidad con lo señalado en la columna “C” del cuadro siguiente.*

*En este sentido, es importante precisar que para el caso específico de los gastos en Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, la realización (pago) de los gastos debió efectuarse en el mismo ejercicio, por lo que los institutos políticos deben erogar en el ejercicio sujeto a revisión los porcentajes mínimos establecidos en el código electoral, así como los señalados en el Acuerdo CG17/2013 del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2013.*

*En razón de lo anterior, el recurso otorgado en 2013 al Partido de la Revolución Democrática para el desarrollo de sus actividades de capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, debió ser ejercido en el mismo ejercicio, no solo presupuestado o registrado contablemente.*

*Cabe señalar que las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres realizadas por el partido, fueron reportadas en su Programa Anual de Trabajo 2013, asignando presupuesto a cada una de ellas, lo que denota que el partido tenía contempladas las erogaciones etiquetadas para la realización de sus actividades.*

*Es así que el recurso asignado para el desarrollo de las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres de cada instituto político, debe ser clasificado como patrimonio restringido temporalmente, puesto que el destino está etiquetado precisamente para la realización de las actividades en comento, durante el ejercicio en el cual se asigna.*

*De la verificación a las pólizas con su documentación soporte presentadas por el partido consistente en facturas y copias de transferencias electrónicas a favor de los proveedores y prestadores de servicios realizadas en el ejercicio 2014, se determinó que, se realizaron pagos por un importe total de \$2,659,078.07, de conformidad con lo señalado en la columna “D” del cuadro siguiente; sin embargo, dichos gastos al 31 de diciembre de 2013 se encuentran provisionados, reconociendo la obligación de pago a terceros, esto implicó que se utilizara el financiamiento otorgado en ejercicios posteriores para gastos que no correspondieron al mismo; por tal razón, la observación se consideró no atendida.*

*Por lo que corresponde a los saldos señalados en la columna “E” del cuadro siguiente por un importe total de \$765,487.05, no fueron proporcionadas las pólizas con sus respectivas copias de cheques o transferencias electrónicas a favor de los proveedores y prestadores de servicios; razón por la cual, la observación quedó no atendida respecto de este punto.*

*Por lo que correspondió a los saldos señalados en la columna “F” del cuadro anterior por un importe total de \$1,114,267.56, fueron proporcionadas las pólizas con sus respectivas copias de cheques o transferencias electrónicas a favor de los proveedores y prestadores de servicios; razón por la cual, la observación quedó atendida respecto de este punto.*

*Ahora bien, resulta importante señalar que el partido proporcionó pólizas con su documentación soporte consistente en facturas y copias de transferencias electrónicas a favor de diversos proveedores realizadas durante el ejercicio 2013; sin embargo, no fueron localizados los registros contables en las cuentas y subcuentas que el partido utiliza para registrar cada uno de los pagos realizados a los mismos por un importe total de \$3,085,548.62, de conformidad con lo señalado en la columna “G” del cuadro siguiente.*

*En razón de lo anterior, el importe de los gastos provisionados y registrados en capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio 2013, así como en varias subcuentas de proveedores y prestadores de servicios que no fueron pagados o comprobados en el mismo ejercicio, ascienden a \$3, 424,565.12 según columnas “D” y “E”, tal como se detalla a continuación:*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NÚMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGÚN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITOS SAFyPI/253/14 Y SAFyPI/326/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORIA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR	PAGO SEGÚN PARTIDO NO CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO
A	B	C = A + B	D	E	F	G	
2-10-101-0001-0101 ALTAS Y BAJAS SERVICIOS EDITORIALES SC DE RL	\$55,965.36	\$28,250.64	84,216.00	64,922.88	\$0.00	\$0.00	19,293.12
2-10-101-0001-0368 ACTIVACION COORD Y ORGANI DE EVENTOS S D RL DE CV	707,992.56	469,692.12	1,177,684.68	0.00	469,692.12	0.00	707,992.56
2-10-101-0001-0617 AACAFIQ AC	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0001-0629 ACEVEDO GARCIA ANDREA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0399 CARRION GUERRA ALICIA	35,048.24	0.00	35,048.24	0.00	0.00	0.00	35,048.24
2-10-101-0003-0529 CAPITAL NETWORKS SA DE CV	99,340.00	0.00	99,340.00	99,340.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0616 CONDE RODRIGUEZ SARA NORMA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0770 CAPAC Y CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL SC	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0773 CENTRO ALT COM GRO MA LUISA HERRASTI LA CHINA AC	38,000.00	70,000.00	108,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2-10-101-0003-0871 CANETE SANCHEZ CLAUDIA JAQUELINE	489,984.00	0.00	489,984.00	489,984.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0872 COMERCIALIZADOR A EFISA SA DE CV	235,000.64	0.00	235,000.64	235,000.64	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0885 CASTELLANOS JURADO ALINE	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0003-0886 CASTORENA SAENZ NITHIA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0004-0228 DELFIN AVENDAÑO LUZ DEL CARMEN	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0154 ESCOBAR DEL RAZO GABRIELA	-1,000.00	6,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0065 ESCOBAR HERNANDEZ DAVID	15,000.00	5,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2-10-101-0005-0135 EXPORT GROUP GESCOPY SA DE CV	571,386.07	17,400.00	588,786.07	508,005.36	77,781.34	0.00	2,999.37
2-10-101-0005-0242 ENSASTIGA SANTIAGO MARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0005-0249 ENSO GO SA DE CV	52,108.19	153,245.59	205,353.78	0.00	153,245.59	0.00	52,108.19
2-10-101-0006-0069 FUNDACION HEBERTO CASTILLO MARTINEZ A.C.	-100,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0191 GOMEZ AVILA MARYCRUZ	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00
2-10-101-0007-0194 GOMEZ FLORES LAURA	36,000.00	12,000.00	48,000.00	45,000.00	0.00	0.00	3,000.00

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NÚMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGÚN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITOS SAFyPI/253/14 Y SAFyPI/326/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORIA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR	PAGO SEGÚN PARTIDO NO CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO
	A	B	C = A + B	D	E	F	G
2-10-101-0007-0356 GUTIERREZ ANDRADE ROBERTO	28,417.68	0.00	28,417.68	3,417.36	0.00	0.00	25,000.32
2-10-101-0007-0558 GARCIA RIVERA ROBERTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
2-10-101-0007-0698 GRUPO REGNUS SA DE CV	249,393.50	0.00	249,393.50	0.00	0.00	0.00	249,393.50
2-10-101-0007-0721 GIL ROSALES LUCIA	140,000.00	0.00	140,000.00	90,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2-10-101-0007-0722 GODINEZ HERNANDEZ ARTURO JOB	16,900.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00
2-10-101-0007-0805 GENERANDO EQUIDAD Y LIBERTAD EN COLECTIVO AC	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0887 GUERRA OCHOA MARIA TERESA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0007-0916 GARCIA RUIZ CECILIA	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0008-0151 HUERTA LOPEZ ALICIA	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0009-0074 INTERTICKET SA DE CV	189,916.23	0.00	189,916.23	189,916.23	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0010-0040 JUAREZ BAHENA LOT DANIEL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2-10-101-0012-0033 LAZOS GARZA FLAVIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
2-10-101-0012-0108 LUPCA SA DE CV	150,264.40	0.00	150,264.40	150,264.40	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0012-0269 LILITH CONSULTORAS SC	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
2-10-101-0012-0286 LAGARDE Y DE LOS RIOS MARIA MARCELA	120,000.00	0.00	120,000.00	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2-10-101-0013-0101 MENDOZA HERNANDEZ ENRIQUE	230,484.46	0.00	230,484.46	0.00	0.00	0.00	230,484.46
2-10-101-0013-0117 MEZA PEÑA MIRIAM ANGELICA	35,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00
2-10-101-0013-0170 MORALES VARGAS EDUVIGES ROSALIO	6,000.00	19,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
2-10-101-0013-0327 MANCILLA GARCIA ANGELICA HAYDEE	109,272.00	0.00	109,272.00	69,832.00	0.00	0.00	39,440.00
2-10-101-0013-0340 MARTINEZ BADAJOS OSCAR	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0399 MENA HERNANDEZ LETICIA MARIANA	1,995.20	0.00	1,995.20	1,995.20	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0567 MANCILLA GARCIA RODRIGO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0013-0568 MANCILLA REYES ALFONSO	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

NÚMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGÚN PARTIDO	SALDO AL 31/DIC/2013 OFICIO INE/UTF/DA/826/14	MODIFICACIÓN DE PASIVOS ESCRITOS SAFyPI/253/14 Y SAFyPI/326/14	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORIA	PASIVOS SOPORTADOS CON LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2014	PASIVOS SIN LA COMPROBACIÓN DEL PAGO EN EL 2013 O 2014	PAGOS A LOS PROVEEDORES SIN LA COPIA DEL CHEQUE O TRANSFERENCIA INTERBANCARIA A SU FAVOR	PAGO SEGÚN PARTIDO NO CONTABILIZADO EN LA CUENTA DEL PROVEEDOR ANALIZADO
A	B	C = A + B	D	E	F	G	
2-10-101-0014-0078 NOLASCO CERVANTES SILVIA	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0016-0185 ORTUÑO HERNANDEZ FELIPE	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0016-0292 ORTIZ OLVERA JUAN MARCOS	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0017-0113 PRENSA LATINA AGENCIA INF LAT	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0017-0449 PUNTO GENERO AC	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0019-0243 RED DIGITAL PUBLICITARIA SA DE CV	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03
2-10-101-0019-0393 RODRIGUEZ GARCIA DUNIA AMIRA ERENDIRA	70,000.00	0.00	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2-10-101-0020-0415 SOLIDARIDAD Y AYUDA SOCIAL AC	0.00	56,956.00	56,956.00	0.00	56,956.00	0.00	0.00
2-10-101-0020-0535 SANCHEZ LAGUNA ALEJANDRO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0020-0536 SANTOS CALLEJA JOSEFINA ALEJANDRA	19,200.01	0.00	19,200.01	15,000.00	0.00	0.00	4,200.01
2-10-101-0020-0990 SOSA ZARAGOZA JOSE DANIEL	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0021-0096 TURISMO DEMA SA DE CV	1,480,149.82	-34,461.00	1,445,688.82	0.00	0.00	0.00	1,445,688.82
2-10-101-0023-0032 VAZQUEZ GARCIA DULCE JOSEFINA	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0023-0094 VALDES JUAREZ HUGO	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	2,012.00	0.00	0.00
2-10-101-0023-0129 VARELA ZUNIGA MARIA DEL ROSARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2-10-101-0027-0055 ZAZUETA ZAZUETA JORGE ARMANDO	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$5,534,030.39	\$976,083.35	\$6,510,113.74	\$2,659,078.07	\$765,487.05	\$0.00	\$3,085,548.62

*El detalle de los pasivos generados por concepto de gastos en “Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 2013” correspondiente al cuadro que antecede, se encuentra analizado en el Anexo 19 del presente Dictamen.*

*Por lo anterior, se determinó que los pagos identificados en la columna “D” del cuadro que antecede por un importe de \$2,659,078.07; serán objeto de verificación durante el procedimiento de revisión del Informe Anual 2014 del Partido de la Revolución Democrática, a fin de constatar lo establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento de Fiscalización.*



*Aunado a lo anterior y como se puede observar en la columna "G" del cuadro que antecede por un importe de \$3,085,548.62, el partido realizó la provisión de los gastos en cuentas y subcuentas de pasivos en la contabilidad de "Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres 2013"; sin embargo, por lo que respecta a los pagos y comprobaciones de los mismos, el partido omitió realizar los registros contables en dichas cuentas; por tal razón, se le recomienda que en lo subsecuente, la cuenta y subcuenta en donde sean registradas las provisiones del gasto sean las mismas que se utilicen para registrar sus pagos o comprobaciones.*

(...)

*En consecuencia, al no realizar el partido político el pago o comprobación de los gastos por conceptos vinculados a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres realizadas y reportadas en el ejercicio 2013 por un importe total de \$3,424,565.12 según columnas "D" y "E" en el mismo ejercicio 2013, incumplió con lo dispuesto en el artículo 284, numeral 1, inciso a), fracción V del Reglamento de Fiscalización.*

*Ahora bien, con fundamento en el artículo 196 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se propone el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de "Pasivos Generados en 2013", correspondientes a Gastos por Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres reportadas en 2013, y en su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo que el partido debió ejercer para las actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres durante el presente ejercicio sujeto de revisión."*

**II. Acuerdo de Inicio del procedimiento oficioso.** El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno, asignarle el número de expediente **INE/P-COF-UTF/22/2014**, notificar al Secretario del Consejo de su inicio; así como publicar el acuerdo y su respectiva cédula de conocimiento en los estrados de este Instituto (Fojas 32 y 33 del expediente).

**III. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento oficioso.**

a) El dieciocho de noviembre de dos mil catorce, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto Nacional Electoral durante setenta

y dos horas el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento (Foja 34 del expediente).

- b) El veintiuno de noviembre de dos mil catorce, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto Nacional Electoral los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento; por lo que, mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que fueron publicados oportunamente (Foja 35 del expediente).

**IV. Aviso de inicio del procedimiento oficioso al Secretario del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral.** El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/2868/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito (Foja 36 del expediente).

**V. Notificación de inicio del procedimiento oficioso al Partido de la Revolución Democrática.** El diecinueve de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/2879/2014, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto, el inicio del procedimiento oficioso de mérito (Foja 37 del expediente).

**VI. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización.**

- a) El veinte de noviembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/261/2014, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros del Instituto remitiera la documentación relacionada con la conclusión 70 del Dictamen Consolidado, obtenida en el marco de la revisión de los informes de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece (Foja 38 del expediente).
- b) El cinco de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DRN/284/2014, se exhortó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros para que remitiera la documentación antes descrita (Foja 39 del expediente).

- c) El ocho de diciembre de dos mil catorce, mediante oficio INE/UTF/DA/190/14, la Dirección de Auditoría dio contestación al requerimiento, informando el estatus de los pasivos objeto del procedimiento y remitiendo copia de las pólizas contables, transferencias bancarias, facturas y recibos que obraban en sus archivos (fojas 40 - 619 del expediente).

**VII. Solicitud de información y documentación al Partido de la Revolución Democrática.**

- a) El siete de enero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/0045/2015, se solicitó al Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto informara de manera pormenorizada los pagos que se realizaron durante el año dos mil catorce de los pasivos generados en el ejercicio dos mil trece correspondientes a la cuenta de Liderazgo Político de la Mujer y remitiera la documentación comprobatoria respectiva (fojas 620-621 del expediente).
- b) El quince de enero de dos mil quince, mediante escrito PGA-033/2015 el Partido de la Revolución Democrática dio contestación al requerimiento de la autoridad (fojas 622 a 634 del expediente) y remitió el escrito SF/033/2015 firmado por la Secretaria de Finanzas de dicho instituto político, en el cuál manifestó lo siguiente:

*“... se adjunta al presente cinco fojas las cuales contienen la siguiente información:*

- 1. Proveedor al que se realizó el pago;*
- 2. Servicio prestado al Partido por el rubro del Liderazgo Político de la Mujer;*
- 3. Número de Factura o Recibo de Honorarios al que corresponde el pago;*
- 4. Fecha de la factura o Recibo de Honorarios al que corresponde el pago;*
- 5. Cantidad que corresponde al comprobante fiscal y al pago;*
- 6. Estatus del comprobante fiscal (Pagado o No Pagado);*

*7. Número de transferencia Interbancaria con que se elaboró el pago; y*

*8. Fecha de la Transferencia Interbancaria.*

*Es preciso señalar que todos los pasivos generados en 2013, fueron liquidados hasta el mes de julio del 2014.*

*Se adjunta listado en Excel y escaneo de las transferencias bancarias...”*

**VIII. Ampliación de plazo para resolver.** El trece de febrero de dos mil quince, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas, la línea de investigación y las diligencias que debían realizarse para sustanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Encargado del Despacho de la Dirección General de la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se amplió el plazo de sesenta días naturales para presentar a este Consejo General el Proyecto de Resolución correspondiente; por lo que en esta misma fecha mediante oficios INE/UTF/DRN/1952/2015 e INE/UTF/DRN/1954/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización comunicó al Secretario del Consejo General del Instituto y al Presidente de la Comisión de Fiscalización respectivamente, el acuerdo referido (fojas 635 - 639 del expediente)

### **Diligencias realizadas a Proveedores**

#### **IX. Requerimiento de información y documentación a Activación Coordinación y organización de Eventos de S. de R.L. de C.V.**

- a) El trece de febrero de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/1729/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal llevara a cabo las diligencias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/1730/2015 en el cual se requería a la persona moral Activación Coordinación y organización de Eventos de S. de R.L. de C.V. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 640-641 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/JLE-DF/02209/2015, recibido el veinticinco de marzo del dos mil quince, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal remitió el acta circunstanciada levantada, toda vez que no fue localizada la persona moral en cita en el domicilio, por lo cual no fue posible realizar la diligencia de notificación (fojas 644-654 del expediente).

- c) El tres de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLE-CM/02523/2016 se le solicitó al apoderado o representante legal de la persona moral Activación Coordinación y organización de Eventos de S. de R.L. de C.V. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 1134 - 1152 del expediente).
- d) Con escrito sin número del diez de mayo de dos mil dieciséis el C. Rodrigo Javier Gaspar Sepúlveda en su carácter de apoderado legal de la persona moral en cita, dio respuesta al requerimiento de ésta autoridad, confirmando las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática, específicamente por lo que se refiere a la factura folio R86, así como la recepción del pago respectivo durante el ejercicio dos mil catorce (fojas 1024 – 1114 del expediente).

**X. Requerimiento de información y documentación a Export Group Gescopys S.A. de C.V.**

- a) El veinte de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/5028/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo De La Junta Local Ejecutiva Del Distrito Federal del Instituto Nacional Electoral para que llevara a cabo las diligencias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/5029/2015 en el cual se requería a la persona moral Activación Coordinación y organización de Eventos de S. de R.L. de C.V. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 640-641 del expediente).
- b) El veintiséis de marzo de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/5029/2015 se le solicitó al apoderado o representante legal de la persona moral denominada Export Group Gescopys S.A. de C.V, a efecto de que informara de manera pormenorizada el total de operaciones llevadas a cabo con el Partido de la Revolución Democrática y remitiera la documentación que acreditara la forma, fecha y monto de los pagos recibidos, así como la muestra o fotografía del servicio prestado (fojas 1134 - 1152 del expediente).
- c) Mediante oficio INE/JLE-DF/02422/2015, recibido el treinta de marzo del dos mil quince, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal remitió el acta circunstanciada levantada, toda vez que no fue localizada la persona moral en cita en el domicilio, por lo cual no fue posible realizar la diligencia de notificación (fojas 644-654 del expediente).

- d) El siete de abril de dos mil quince, mediante escrito sin número, el C. Christian Roberto Guillen Martínez en representación de la persona moral en cita, proporcionó una relación pormenorizada de las operaciones realizadas durante el ejercicio dos mil trece con el partido antes mencionado, así como copia de las facturas y de los estados de cuenta bancarios en los cuales se hace constar la fecha, forma y monto de los pagos respectivos (fojas 668-753 del expediente).

**XI. Requerimiento de información y documentación a ENSO GO S.A. de C.V.**

- a) El veintidós de abril de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/8086/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal llevara a cabo las diligencias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/8087/2015 en el cual se requería a la persona moral ENSO GO S.A. de C.V. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 754-755 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/JLE-DF/03171/2015, recibido el veintisiete de abril del dos mil quince, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal remitió el acta circunstanciada levantada, toda vez que no fue localizada la persona moral en cita en el domicilio, por lo cual no fue posible realizar la diligencia de notificación (fojas 756-773 del expediente).
- c) El dos de mayo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/JLE-CM/02522/2016 se le solicitó al apoderado o representante legal de la persona moral ENSO GO S.A. de C.V. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 1116-1133 del expediente).
- d) Mediante escrito sin número del nueve de mayo de dos mil dieciséis, la C. Sofía Gómez Manzarraga, en su carácter de Directora de la persona moral en cita, dio respuesta al requerimiento mencionado, confirmado las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, omitió remitir la información relativa a la forma de pago y la fecha en que fue realizado, así como del monto del mismo (fojas 883 – 1023 del expediente).

- e) El veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/JLE-CM/04062/2017 se le solicitó al apoderado o representante legal de la persona moral ENSO GO S.A. de C.V. que proporcionara información relacionada con la forma y fecha de pago de las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 1142-1148 del expediente).
- f) Mediante escrito sin número del treinta de junio del dos mil diecisiete, la C. Sofía Gómez Manzarraga, en su carácter de Directora de la persona moral en cita, dio respuesta al requerimiento mencionado; sin embargo, omitió remitir la información relativa a la forma de pago y la fecha en que fue realizado, así como del monto del mismo (fojas 1163 – 1180 del expediente).

## **XII. Requerimiento de información y documentación a Lilith Consultoras S.C.**

- a) El tres de junio de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/14308/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo De La Junta Local Ejecutiva Del Estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral para que llevara a cabo las diligencias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/14307/2015 de fecha tres de junio de dos mil quince, en el cual se requería al apoderado o representante legal de la persona moral denominada Lilith Consultoras, S.C. que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 640-641 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/JDE-01-TAM/0976/15, recibido el treinta de junio del dos mil quince, el Vocal Ejecutivo De La Junta Local Ejecutiva Del Estado de Tamaulipas del Instituto Nacional Electoral, remitió el acta circunstanciada levantada, toda vez que no fue localizada la persona moral en cita en el domicilio, por lo cual no fue posible realizar la diligencia de notificación (fojas 644-654 del expediente).
- c) En respuesta al oficio INE/UTF/DRN/14307/2015, con fecha treinta de junio de dos mil quince, mediante escrito sin número, la C.P. Ana Lidia Treviño Ley en su carácter de Representante Legal de la persona moral en cita, informó de forma pormenorizada de las operaciones realizadas durante el ejercicio dos mil trece con el partido antes mencionado e indicó que a la fecha de respuesta no había recibido el pago por los servicios prestados, remitido mediante el Vocal Ejecutivo De La Junta Ejecutiva Del Estado de Tamaulipas Del Instituto

Nacional Electoral con número de oficio INE/UTF/DRN/14308/2015 de fecha tres de junio del dos mil quince. (foja 772 del expediente).

- d) El veinte de junio de dos mil diecisiete mediante oficio INE/JDE-01-TAM/840/17 se solicitó nuevamente al representante o apoderado legal de la persona moral en cita que informara si a la fecha de la notificación el Partido de la Revolución Democrática había realizado el pago por los servicios prestados. (Fojas 1181 – 1190 del expediente).

**XIII. Requerimiento de información y documentación a Solidaridad y Apoyo Social, A.C.**

- a) Mediante los oficios INE/UTF/DRN/18625/2015, INE/UTF/DRN/218884/2015 e INE/UTF/DRN/0170/2016 esta autoridad requirió al apoderado o representante legal de la persona moral Solidaridad y Apoyo Social, A.C. para que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 776 a 787, 791a 802 y 848 a 861 respectivamente, del expediente).
- b) Mediante los oficios INE/JLE-DF/05243/2015 e INE/JLE-DF/06725/2015 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal remitió las razones de fijación y retiro del oficio en estrados, toda vez que no fue localizado el representante o apoderado legal en el domicilio y se atendieron las diligencias de notificación con un tercero (fojas 776 y 791 del expediente).
- c) Mediante oficio INE/JLE-CM/04371/2017 el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México remitió las razones de fijación y retiro del oficio INE/JLE-CM/04064/2017 en estrados, toda vez que no fue localizado el representante o apoderado legal en el domicilio y se atendieron las diligencias de notificación con un tercero (fojas 1149 y 1161 del expediente).

**XIV. Requerimiento de información y documentación a la C. Lucía Gil Rosales.**

- a) El treinta de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/23187/2015 la Unidad Técnica de Fiscalización requirió a la C. Lucía Gil Rosales, a efecto de que informara de manera pormenorizada el total de operaciones llevadas a cabo con el Partido de la Revolución Democrática y remitiera la documentación que acreditara la forma, fecha y monto de los



pagos recibidos, así como la muestra o fotografía del servicio prestado (fojas 806 - 812 del expediente).

- b) El nueve de noviembre de dos mil quince, mediante escrito sin número, el C. Lucio Gil Esquivel en representación de la persona física en cita, informó de forma pormenorizada las operaciones realizadas durante el ejercicio dos mil trece con el partido antes mencionado y presentó copia de las facturas y de los estados de cuenta bancarios en los cuales se hace constar la fecha, forma y monto de los pagos que recibió en dicho ejercicio. La notificación fue realizada mediante el Vocal Ejecutivo De La Junta Local Ejecutiva Del Estado De México Del Instituto Nacional Electoral con número de oficio INE-JLE-MEX/VE/1671/2015 con fecha de cinco de noviembre del año dos mil quince. (fojas 814 – 828 del expediente).
- c) El dieciséis de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE-23JDE-MEX/VS/450/17, se realizó una nueva solicitud de información a efecto de confirmar si la prestadora de servicios había recibido el pago durante el ejercicio dos mil catorce o en su defecto, continuaba pendiente de pago por parte del partido incoado. (Fojas 1192 – 1197 del expediente)
- d) El veinte de junio de dos mil diecisiete, el C. Lucio Gil Esquivel, en representación de la prestadora de servicios en cita, confirmó que el Partido de la Revolución Democrática efectuó el pago del servicio el siete de febrero de dos mil catorce. (Fojas 1198 – 1200 del expediente).

**XV. Requerimiento de información y documentación a la C. Claudia Jacqueline Cañete Sánchez.**

- a) El cuatro de diciembre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/24946/2015 se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal llevara a cabo las diligencias de notificación del oficio INE/UTF/DRN/24947/2015 en el cual se requería a la C. Claudia Jacqueline Cañete Sánchez que proporcionara información relacionada con las operaciones realizadas con el Partido de la Revolución Democrática durante el ejercicio dos mil trece (fojas 829-830 del expediente).
- b) Mediante oficio INE/JLE-DF/08240/2015, recibido el siete de enero de dos mil dieciséis, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del entonces Distrito Federal remitió el acta circunstanciada y las razones de fijación y retiro del

oficio en estrados, toda vez que no fue localizada la persona física en cita en el domicilio. (Fojas 831-847 del expediente).

**XVI. Requerimiento de información y documentación al C. Hugo Valdés Juárez.**

- a) Mediante oficio número INE/JLE-CM/01697/2018 de fecha veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la diligencia de notificación al C. Hugo Valdés Juárez, dicha notificación se realizó de manera personal al proveedor, solicitándole la documentación requerida. (Fojas

**Diligencias realizadas a Autoridades**

**XVII. Requerimientos de información al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.**

- a) El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/2788/2016, esta autoridad solicitó al Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los datos de ubicación o domicilio fiscal de las personas morales Enso Go S.A. de C.V., Solidaridad y Apoyo Social A.C. y Activación Coordinación y Organización de Eventos S. de R.L. de C.V (fojas 862-863 del expediente).
- b) Mediante oficio No. 103-05-2016-0145 recibido el veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, el Servicio de Administración Tributaria proporcionó la información solicitada (fojas 864-873 del expediente).
- c) El catorce de febrero de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/1423/2017, se solicitó al Servicio de Administración Tributaria que proporcionara el domicilio registrado en sus bases de datos de la C. Claudia Jacqueline Cañete Sánchez, en virtud de que no fue localizada en las diligencias de notificación (foja 1158 del expediente).
- d) Consecuentemente, con escrito número 103-05-2017-0162 recibido el veinte de febrero de dos mil diecisiete, el Servicio de Administración Tributaria proporcionó la información solicitada. (fojas 1159-1163 del expediente).

**XVIII. Requerimientos de información a la Secretaría de Movilidad en el Distrito Federal.**

- a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/6374/2016, esta autoridad solicitó a la Secretaría de Movilidad en el Distrito Federal los datos de ubicación o domicilio de la C. Claudia Jacqueline Cañete Sánchez toda vez que dicha persona no fue localizada en la diligencia de notificación (fojas 874-875 del expediente).
- b) Mediante oficio SIR-02104-2016 recibido el cuatro de abril de dos mil dieciséis, la secretaría mencionada informó que no localizó dato alguno en su base de datos respecto a la persona referida (foja 876 del expediente).

**XIX. Solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.**

- a) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/6421/2017 se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara copia certificada de las transferencias realizadas por el Partido de la Revolución Democrática a la persona moral Solidaridad y Apoyo Social, A.C.

Adicionalmente, se solicitó copia certificada de los estados de cuenta bancarios por el periodo de enero a diciembre del ejercicio dos mil catorce de la cuenta utilizada por el Partido de la Revolución Democrática para el control de los recursos correspondientes a la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, a efecto de confirmar la información remitida por dicho instituto respecto al pago de los pasivos objeto del presente procedimiento (fojas 1168-1172 del expediente).

- b) Mediante oficio número 214-4/6727145/2017 la citada comisión remitió la respuesta brindada por la institución BBVA Bancomer S.A. respecto de la solicitud realizada, en la cual remitió los estados de cuenta bancarios y copia de los cheques requeridos.

Aunado a lo anterior, la comisión referida solicitó información adicional respecto a las transferencias electrónicas investigadas para estar en condiciones de remitir la documentación solicitada por esta autoridad. (Fojas 1187 a 1127 del expediente).

- c) El veinticuatro de julio de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/11792/2017 la Unidad Técnica de Fiscalización proporcionó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información requerida respecto a las transferencias objeto de investigación.

Adicionalmente, solicitó a la citada comisión copia certificada de las transferencias realizadas por el Partido de la Revolución Democrática a los proveedores Enso Go S.A. de C.V.; Activación, Coordinación y Organización de Eventos S.A. de C.V. y Export Group Gescopys S.A. de C.V., mismas que fueron reportadas como pago de los pasivos objeto de investigación en el presente procedimiento. (Fojas 1201 a 1205 del expediente).

- d) Mediante oficio 214-4/6727908/2017 recibido el quince de agosto de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la respuesta presentada por la institución BBVA Bancomer, S.A. en la cual proporciona copia certificada de las transferencias antes mencionadas, así como la información relativa a los Titulares de las cuentas de destino que corresponden a las personas morales Activación, Coordinación y Organización de Eventos S.A. de C.V. y Export Group Gescopys S.A. de C.V.

Respecto a las personas morales Enso Go S.A. de C.V. y Solidaridad y Apoyo Social, A.C. la institución bancaria BBVA Bancomer, S.A. proveyó los números de cuenta de destino y el nombre de las instituciones financieras correspondientes. (Fojas 1206 a 1225 del expediente).

- e) Mediante oficio 214-4/6728381/2017 recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la respuesta presentada por la institución SCOTIABANK INVERLAT, S.A. en la cual proporciona copia certificada de las transferencias antes mencionadas, así como la información relativa a los Titulares de las cuentas de destino que corresponden a la persona morales Enso Go S.A. de C.V.
- f) Mediante oficio 214-4/6728403/2017 recibido el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió la respuesta presentada por la institución BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. en la cual proporciona copia certificada de las transferencias, así como la información relativa a los Titulares de las cuentas de destino que corresponden a la persona morales Solidaridad y Apoyo Social A.C.

**Solicitudes de información a otras áreas del Instituto Nacional Electoral**

**XX. Solicitud de información y documentación a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.**

- a) El ocho de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/0150/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de los Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización información y documentación respecto a las operaciones que a continuación se detallan:

ID	PROVEEDOR	REFERENCIA CONTABLE	MONTO
29	Lilith Consultoras, S.C.	PI-34011/12-13	5,800.00
48	Valdés Juárez Hugo	PI-34007/02-13	2,012.00

Al respecto, se le solicitó que informara si los pagos de las operaciones antes referidas habían sido reportados en los Informes Anuales de Ingresos y Egresos correspondientes a los ejercicios 2014 o 2015, o si en su defecto, habían sido sancionados como saldos de cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no pagados.

Así mismo, se le solicitó que proporcionara la documentación soporte de la operación realizada con el proveedor Hugo Valdés Juárez, en virtud de que no fue remitida por dicha Dirección en la diligencia referida en el antecedente **VI** de la presente Resolución (fojas 1164 – 1165 del expediente).

Así mismo, con fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho se le solicito a la Dirección de lo Contencioso De La Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral con número de oficio INE/UTF/051/2018, requiriendo la dirección del C. Hugo Valdés Juárez.

Con fecha de veintitrés de enero del año dos mil dieciocho, el director de lo Contencioso De La Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral dio contestación al requerimiento solicitado, con número de oficio INE/DJ/DSL/SSL/1573/2017 en el cual responde que localizaron más de un registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral, proporcionando consulta de datos generales, así como un catálogo de claves de Entidades Federativas y Municipios, por el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

Por consiguiente, el diecinueve de febrero del dos mil dieciocho la Unidad Técnica de Fiscalización acordó solicitar al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México del Instituto Nacional Electoral y/o al Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital a efecto de requerir al C. Hugo Valdés Juárez para que informe de manera pormenorizada el total de operaciones llevadas a cabo con el Partido de la Revolución Democrática durante el año dos mil trece.

- b) El siete de abril de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DRN/194/2017, se solicitó a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros de la Unidad Técnica de Fiscalización que informara si habían sido reportados en los Informes Anuales de Ingresos y Egresos correspondientes a los ejercicios 2014 o 2015 los pagos de las operaciones que se detallan a continuación:

NÚMERO DE CUENTA / CONCEPTO SEGÚN PARTIDO	TOTAL DE PASIVOS A PAGAR AL 31/DIC/2013 SEGÚN AUDITORÍA
<b>2-10-101-0001-0368</b> ACTIVACION COORD Y ORGANI DE EVENTOS S D RL DE CV	469,692.12
<b>2-10-101-0005-0135</b> EXPORT GROUP GESCOPY SA DE CV	588,786.07
<b>2-10-101-0005-0249</b> ENSO GO SA DE CV	205,353.78
<b>2-10-101-0020-0415</b> SOLIDARIDAD Y AYUDA SOCIAL AC	56,956.00

Así mismo se le solicitó que informara si habían sido sancionados como saldos de cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año no pagados (fojas 1166 – 1167 del expediente).

- c) El veinticinco de mayo de dos mil diecisiete mediante oficio INE/UTF/DA/0858/2017 la Dirección de Auditoría informó las cifras reportadas por el Partido de la Revolución Democrática en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio dos mil catorce, específicamente de las cuentas detalladas en el cuadro que antecede y remitió copia de los auxiliares contables respectivos.

Aunado a lo anterior, la citada dirección informó que por lo que se refiere al saldo del proveedor “Solidaridad y Ayuda Social, A.C.” por \$56,956.00, fue objeto de sanción por tener una antigüedad mayor a un año y encontrarse pendiente de pago (fojas 1173 a 1186 del expediente).

**XXI. Solicitud de información al Director de lo Contencioso De La Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.**

- a) El veintidós de enero de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización mediante oficio INE/UTF/DRN/051/2018 solicitó información al Director de lo Contencioso De La Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral, para que informara el domicilio registrado en el Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores del C. Hugo Valdés Juárez.

**XXII. Razones y Constancias relativas a consultas realizadas en diversos sitios de Internet.**

- a) El dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar la autenticidad del CFDI expedido por la persona moral ENSO GO S.A. de C.V. (fojas 1153-1155 del expediente).
- b) El once de enero de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización hizo constar que se realizó una consulta en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria accesible vía Internet con el propósito de verificar y validar la autenticidad del CFDI expedido por la persona moral Activación, Coordinación y Organización de Eventos S. de R.L. de C.V. (fojas 1156-1157 del expediente).

**XXIII. Emplazamiento.**

- a) El doce de marzo de dos mil dieciocho se procedió emplazar al Partido de la Revolución Democrática con número de oficio INE/UTF/DRN/22579/2018, toda vez que el sentido de este procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización se declara infundado.
- b) Con fecha veintiuno de marzo de dos mil dieciocho el Partido de la Revolución Democrática dio contestación al emplazamiento realizado por esta autoridad, pasando del término establecido por la ley.
- c) Con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho el Partido de la Revolución Democrática presentó un alcance a la contestación del emplazamiento.

**XXIV. Cierre de Instrucción.** El trece de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento oficioso de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

**XXV. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior en la décimo primera sesión extraordinaria celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de mérito, por unanimidad, de los Consejeros Electorales, integrantes de dicha Comisión: las Consejeras Electorales Doctora Adriana M. Favela Herrera y la Licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez, el Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente de dicha Comisión el Doctor Ciro Murayama Rendón, lo anterior en cumplimiento con lo establecido en el artículo 199, numeral 1, incisos a), d) y g) de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales

Toda vez que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del presente procedimiento oficioso en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k), o); 428, numeral 1, inciso g); así como tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como, 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración de este Consejo General.



En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j) y k) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

**2. Normatividad aplicable.** Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce, en el Diario oficial de la Federación, de los Decretos por lo que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016<sup>[1]</sup> e INE/CG319/2016<sup>[2]</sup>, respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

Al respecto, el artículo TERCERO transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece de manera expresa que:

*“Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio. Lo anterior, sin perjuicio de que se apliquen en lo conducente los plazos previstos en los artículos transitorios del presente Decreto.”*

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron las operaciones que dieron origen al procedimiento oficioso, esto es al ejercicio 2013, por lo que deberá aplicarse lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce, así como al Acuerdo CG201/2011, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de julio de dos mil once, mediante el cual se expidió el Reglamento de Fiscalización y se abrogaron diversos Reglamentos.

---

<sup>[1]</sup> Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/2016.

<sup>[2]</sup> Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLVI/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**” y el principio *tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: “**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL**”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo INE/CG264/2014 y los diversos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 e INE/CG614/2017, que le modifican.

**3. Estudio de fondo.** Que una vez fijada la competencia, al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver, de conformidad con lo establecido en el Punto Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO**, en relación al Considerando **10.3**, inciso **k**) conclusión **70**, de la Resolución **INE/CG217/2014**; así como del análisis de los documentos y actuaciones que integran el expediente de mérito, se desprende que el fondo del presente asunto se constriñe en determinar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2013”, correspondientes a Gastos por Actividades de Capacitación, Promoción y el Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres reportados en 2013, y en su caso verificar si se debe considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo que el partido debió ejercer para las Actividades de Liderazgo de las Mujeres durante el mismo ejercicio.

En este sentido, deberá determinarse si el sujeto obligado incumplió con lo dispuesto en el artículo 78, numeral 1 inciso a), fracción V, en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismos que para mayor referencia se precisan a continuación:

## Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

### **“Artículo 78**

*1. Los partidos políticos tendrán derecho al financiamiento público de sus actividades, independientemente de las demás prerrogativas otorgadas en este Código, conforme a las disposiciones siguientes:*

*a) Para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes:  
(...)*

*V. Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente, el dos por ciento del financiamiento público ordinario.*

*(...)”*

### **“Artículo 83**

*1. Los partidos políticos deberán presentar ante la Unidad los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:*

*(...)*

*b) Informes anuales:  
(...)*

*II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe;*

*(...)”*

En los artículos previamente citados, esta autoridad se da a la tarea de tutelar la obligación que tienen los Partidos Políticos de destinar anualmente determinados porcentajes del financiamiento público ordinario que se les otorga para la realización de actividades para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres.

Así bien, se establece la obligación que tienen los Partidos Políticos de informar el total de sus ingresos y gastos en el ejercicio que hayan realizado o efectuado los mismos.

En este orden de ideas, es que se establece la obligación de los institutos políticos a presentar de manera clara y veraz la documentación que acredite que los gastos fueron destinados para las actividades etiquetadas y que corresponden al ejercicio objeto de estudio, lo cual permite que exista un control de los egresos realizados por el ente político destinados a cubrir los porcentajes que marca la legislación.

Es oportuno indicar, que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos el rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera tal que tenga por objeto acreditar lo reportado y sobre todo, que dichas operaciones se paguen en la anualidad en que se realicen al ser un gasto exclusivamente destinado por anualidad; y en caso contrario, se debe inhibir las conductas contrarias a lo legalmente establecido al no cumplir con los porcentajes de los gastos etiquetados.

En ese entendido, de acuerdo a lo señalado en las bases del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de transparentar la procedencia de los recursos con que cuentan los partidos políticos y con ello, establecer una forma de control de dichos recursos, para evitar que se den conductas infractoras que provoquen actos que vayan en contra de lo señalado por la norma, lo cual vulneraría el Estado de Derecho.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de fondo, es importante señalar los hechos que dieron origen al procedimiento oficioso que por esta vía se resuelve.

### **Origen del procedimiento**

Como se desprende de la Resolución INE/CG217/2014, considerando **10.3**, inciso **k**), conclusión **70**, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en sesión extraordinaria de veintidós de octubre de dos mil catorce, respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos del Partido de la Revolución Democrática correspondientes al ejercicio dos mil trece, la autoridad electoral advirtió que el instituto político no realizó el pago de conceptos vinculados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres en el ejercicio correspondiente, por un monto de **\$3,424,565.12** (tres millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos sesenta y cinco pesos 12/100 M.N.).

En este orden de ideas, conviene señalar que la autoridad electoral observó que el partido registró gastos vinculados con el presupuesto etiquetado para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que no fueron pagados en el ejercicio dos mil trece, por un importe de **\$5,635,030.39**, situación que se hizo del conocimiento del sujeto obligado a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera.

Al respecto, el partido dio contestación al requerimiento realizado por la autoridad electoral y presentó un documento denominado “Respuesta al Anexo 12 del oficio INE/UTF/DA/826/14”, mismo que fue valorado por la autoridad y como resultado del análisis realizado se advirtió que el partido modificó las cifras reportadas inicialmente, incrementando los pasivos reportados para quedar en un monto de \$5,841,681.03.

Adicionalmente, el partido presentó copia de transferencias electrónicas de pagos efectuados durante el ejercicio 2014 por \$2,659,078.07, correspondientes a los pasivos reportados al cierre del ejercicio del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; sin embargo, la observación no se consideró subsanada, toda vez que el partido debió finiquitar las operaciones en el ejercicio en el cuál se encontraba obligado a destinar los recursos, esto es, en el 2013.

Del mismo modo informó que había realizado pagos por un monto de \$765,487.05 de los cuales no presentó la documentación soporte, razón por la cual no hubo certeza respecto a si efectivamente fueron liquidados y en su caso, de la fecha en que ocurrió tal situación.

Ahora bien, en respuesta al oficio de errores y omisiones emitido en segunda vuelta, el partido político modificó nuevamente sus registros contables, incrementado el saldo pendiente de pago a la cantidad de \$6,510,113.74 y presentó copia de las transferencias electrónicas y de los cheques que ampararon pagos por un monto de **\$3,085,548.62** que habían sido registrados erróneamente y que no obstante, disminuían el monto de los pasivos reportados al cierre del ejercicio que fueron objeto de observación dando así, el monto total de gastos registrados en el rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres que no fueron pagados en la anualidad correspondiente, el cual finalmente la cantidad de **\$3,424,565.12** y se integra como se detalla a continuación:

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN
1	Altas y Bajas, Servicios Editoriales S.C. de R.L. de C.V.	PD-34017/07-13	291	2,756.16
		PD-34018/07-13	292	2,756.16
		PD-34027/10-13	307 A	2,756.16
		PD-34028/10-13	308 A	2,756.16
		PD-34030/10-13	310 A	2,756.16
		PD-34031/10-13	314 A	2,756.16
		PD-34032/10-13	315 A	2,756.16
		PD-34033/10-13	316 A	1,837.44
		PD-34034/10-13	317 A	2,756.16
		PD-34035/10-13	318 A	1,837.44
		PD-34036/10-13	319 A	1,837.44
		PD-34038/10-13	320 A	1,837.44
		PD-34039/10-13	321 A	1,837.44
		PD-34040/10-13	324 A	1,837.44
		PD-34021/12-13	330 A	1,837.44
		PD-34022/12-13	331 A	2,756.16
		PD-34023/12-13	332 A	1,837.44
		PD-34024/12-13	333 A	1,837.44
		PD-34025/12-13	334 A	2,756.16
		PD-34026/12-13	335 A	1,837.44
		PD-34027/12-13	336 A	1,837.44
		PD-34028/12-13	337 A	1,837.44
		PD-34029/12-13	339 A	12,096.48
		PD-34030/12-13	340 A	1,837.44
		PD-34031/12-13	341 A	1,378.08
2	Activación Coordinación y Organización de Eventos S. de R. L. de C.V.	PD-34858/12-13	R 86	469,692.12
3	AACAFIQ A.C.	PD-34042/12-13	0021A	5,000.00
4	Acevedo García Andrea	PD-34046/12-13	A008	6,083.92
5	Capital Networks S.A. de C.V.	PD-34015/11-13	609	99,340.00
6	Conde Rodríguez Sara Norma	PD-34029/04-13	201	6,083.92
		PD-34030/04-13	203	6,083.92
		PD-34030/04-13	204	6,083.92
		PD-34031/04-13	205	6,083.92
		PD-34032/04-13	206	6,083.92
7	Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Integral S.C.	PI-34010/12-13	507	5,800.00
8	Centro de Alternativas Comunitarias y Género María Luisa Herrasti La China A.C.	PD-34002/12-13	517	27,000.00
		PD-34006/12-13	516	27,000.00
9	Cañete Sánchez Claudia Jaqueline	PD-34017/12-13	AFAD105	489,984.00
10	Comercializadora EFISA S.A. de C.V.	PD-34051/10-13	19	78,000.00
		PD-34021/11-13	15	78,000.00
		PD-34012/12-13	31	79,000.64
11	Castellanos Jurado Aline	PD-34036/11-13	152	6,084.00
12	Castorena Saenz Nithia	PD-34037/11-13	45	6,083.92
13	Delfin Avendaño Luz del Carmen	PD-34041/12-13	1	3,650.35
14	Escobar del Razo Gabriela	PD-34019/12-13	121	6,083.92

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN
15	Escobar Hernández David	PD-34012/11-13	23	6,083.92
16	Export Group Gescopys S.A. de C.V.	PD-34042/04-13	6870	9,860.00
		PD-34043/04-13	6890	11,020.00
		PD-34019/05-13	6971	73,933.76
		PD-34013/06-13	7025	67,679.04
		PD-34032/07-13	7095	87,192.56
		PD-34027/08-13	7120	42,800.00
		PD-34028/08-13	7162	37,120.00
		PD-34033/09-13	7192	42,800.00
		PD-34034/09-13	7237	77,781.34
		PD-34054/10-13	7292	50,000.00
		PD-34039/11-13	7372	42,800.00
		PD-34049/12-13	7430	42,800.00
17	Ensastiga Santiago Mario	PD-34011/12-13	017 A	12,167.83
18	Enso Go S.A. de C.V.	PD-34859/12-13	344	144,995.59
		PD-34859/12-13	345	8,250.00
19	Fundación Heberto Castillo Martínez A.C.	PD-34015/10-13	1820	50,000.00
20	Gómez Flores Laura	PD-34049/10-13	301	18,251.75
		PD-34011/11-13	304	18,251.75
		PD-34043/12-13	306	18,251.75
21	Gutiérrez Andrade Roberto	PD-34038/11-13	1201	3,417.36
22	Gil Rosales Lucía	PD-34019/08-13	1395	90,000.00
23	Generando Equidad y Libertad en Colectivo A.C.	PD-34023/08-13	136	5,000.00
24	Guerra Ochoa María Teresa	PD-34022/11-13	4	6,083.92
25	García Ruiz Cecilia	PD-34045/12-13	2	6,083.92
26	Huerta López Alicia	PD-34014/07-13	166	9,450.00
		PD-34002/10-13	251	12,761.85
		PD-34020/10-13	254	18,251.75
		PD-34005/10-13	252	12,761.85
		PD-34041/10-13	255	18,251.75
27	Interticket S.A. de C.V.	PD-34020/07-13	B300	189,916.23
28	Lupca S.A. de C.V.	PD-34027/11-13	A2005	39,227.44
		PD-34029/11-13	A2007	37,093.38
		PD-34031/11-13	A2014	37,725.02
		PD-34033/11-13	A2017	36,218.56
29	Lilith Consultoras S.C.	PI-34011/12-13	17	5,800.00
30	Lagarde y de los Ríos María Marcela	PD-34022/10-13	LA-054	36,503.49
		PD-34024/10-13	LA-058	36,503.49
		PD-34025/10-13	LA-059	36,503.49
31	Meza Peña Miriam Angélica	PD-34004/10-13	54	12,167.83
32	Mancilla García Angélica Haydee	PD-34007/10-13	A-0011	19,720.00
		PD-34009/10-13	A-0012	4,872.00
		PD-34018/10-13	A-0013	5,800.00
		PD-34003/12-13	A 0014	19,720.00
		PD-34005/12-13	A 0015	19,720.00
33	Martínez Badajoz Oscar	PD-34031/03-13	1	3,650.35
		PD-34031/03-13	2	3,650.35
34	Mena Hernández Leticia Mariana	PD-34025/11-13	6	1,995.20
35	Mancilla García Rodrigo	PD-34024/11-13	A 01	6,083.92
		PD-34015/12-13	A 03	6,083.92
36	Mancilla Reyes Alfonso	PD-34016/11-13	101	6,083.82
		PD-34018/11-13	103	6,083.82
		PD-34019/11-13	104	6,083.82
		PD-34009/12-13	105	6,083.82

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN
37	Nolasco Cervantes Silvia	PD-34035/04-13	106	6,083.82
		PD-34036/04-13	107	6,083.82
		PD-34037/04-13	108	6,083.82
		PD-34038/04-13	109	6,083.82
		PD-34039/04-13	110	6,083.82
		PD-34040/04-13	113	6,083.82
		PD-34041/04-13	114	6,083.82
38	Ortuño Hernández Felipe	PD-34035/03-13	512	6,083.82
39	Ortiz Olvera Juan Marcos	PD-34047/10-13	320	36,503.50
		PD-34014/11-13	322	36,503.50
		PD-34044/12-13	323	36,503.50
40	Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana	PD-34031/09-13	6606	40,600.00
41	Punto Genero A.C.	PD-34047/12-13	R003	5,000.00
		PD-34048/12-13	R004	5,000.00
42	Rodríguez García Dunia Amira Erendira	PD-34008/11-13	120	30,419.58
		PD-34034/12-13	121	30,419.58
43	Solidaridad y Ayuda Social A.C.	PD-34860/12-13	2	6,844.00
		PD-34861/12-13	3	14,964.00
		PD-34862/12-13	4	12,064.00
		PD-34863/12-13	5	23,084.00
44	Sánchez Laguna Alejandro	PD-34010/02-13	203	6,083.92
45	Santos Calleja Josefina Alejandra	PD-34036/12-13	28	15,000.00
46	Sosa Zaragoza José Daniel	PD-34038/12-13	R001	40,000.00
47	Vázquez García Dulce Josefina	PD-34034/11-13	74	21,902.10
48	Valdés Juárez Hugo	PI-34007/02-13		2,012.00
49	Varela Zúñiga María del Rosario	PD-34017/03-13	63	12,167.84
50	Zazueta Zazueta Jorge Armando	PD-34014/06-13	131	6,083.92
	TOTAL			\$3,424,565.12

Visto lo anterior, el Consejo General consideró que lo conducente era ordenar el inicio de un procedimiento oficioso con la finalidad de determinar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2013”, correspondientes a gastos de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres reportados en 2013, y en su caso, considerar dicho importe para la determinación del monto mínimo que el partido debió ejercer por dicho concepto durante el citado ejercicio.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se analizan y valoran cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.



Derivado de la multiplicidad de diligencias realizadas por esta autoridad electoral y de los elementos probatorios obtenidos, se considera para fines metodológicos dividir en apartados el análisis del estudio de fondo.

La división por apartados responde a cuestiones circunstanciales que, con objeto de sistematizar la presente Resolución llevaron a esta autoridad electoral a analizar por separado cada uno de los supuestos que se actualizaron durante el desarrollo de la investigación y que ameritan un pronunciamiento individualizado.

El orden de los apartados será el siguiente:

- **Apartado A. Recursos etiquetados pagados en el año inmediato posterior a aquel en el que se prestó el servicio.**
- **Apartado B. Recursos etiquetados pagados en el año inmediato posterior a aquél en que fueron prestados los servicios, que fueron sancionados por tener una antigüedad mayor a un año en el ejercicio 2014.**
- **Apartado C. Recursos etiquetados no pagados que fueron sancionados por tener una antigüedad mayor a un año en el ejercicio 2014.**
- **Apartado D. Recursos etiquetados que si fueron pagados en el año en el que tuvo lugar la prestación del servicio.**

Cabe mencionar que los casos en estudio implican para la autoridad electoral acreditar el monto y cumplimiento de los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2013”, correspondientes al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

De acreditarse lo anterior en el análisis respectivo se procederá a determinar si dicho importe se considerará para la determinación del monto mínimo que el partido debió ejercer por dicho concepto durante el citado ejercicio.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

Por lo que, hechas las valoraciones respectivas se verificará de ser aplicable, si el partido cumplió con la obligación de liquidar los pagos realizados por concepto de “Pasivos generados en 2013” correspondientes al rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres con la finalidad de determinar lo que en derecho corresponda.

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

**Apartado A. Recursos etiquetados pagados en el año inmediato posterior a aquel en el que se prestó el servicio.**

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral se dirigió la línea de investigación en primer lugar a la Dirección de Auditoría con el objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación durante la revisión de los informes en comento.

Al respecto, la citada dirección remitió una relación de los pasivos objeto del procedimiento que por esta vía se resuelve, en la cual indicó el estatus de cada operación y proporcionó copia de los comprobantes fiscales que ampararon los gastos, así como de los cheques y transferencias electrónicas presentados por el Partido de la Revolución Democrática en respuesta a los oficios de errores y omisiones emitidos durante la revisión al Informe Anual del ejercicio dos mil trece.

Ahora bien, por lo que se refiere a las operaciones analizadas en el presente apartado, respecto de la documentación remitida por la Dirección de Auditoría, se determinó lo siguiente:

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
1	Altas y Bajas, Servicios Editoriales S.C. de R.L. de C.V.	PD-34017/07-13	291	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34018/07-13	292	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34027/10-13	307 A	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34028/10-13	308 A	2,756.16	07-02-14	2,756.16	(1)
		PD-34030/10-13	310 A	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34031/10-13	314 A	2,756.16	07-02-14	2,756.16	(1)
		PD-34032/10-13	315 A	2,756.16	07-02-14	2,756.16	(1)
		PD-34033/10-13	316 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34034/10-13	317 A	2,756.16	07-02-14	2,756.16	(1)
		PD-34035/10-13	318 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34036/10-13	319 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34038/10-13	320 A	1,837.44	11-02-14	1,837.44	(1)
		PD-34039/10-13	321 A	1,837.44	06-03-14	1,837.44	(1)
		PD-34040/10-13	324 A	1,837.44	11-02-14	1,837.44	(1)
		PD-34021/12-13	330 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34022/12-13	331 A	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34023/12-13	332 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34024/12-13	333 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
		PD-34025/12-13	334 A	2,756.16	30-01-14	2,756.16	(1)
		PD-34026/12-13	335 A	1,837.44	07-02-14	1,837.44	(1)
		PD-34027/12-13	336 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34028/12-13	337 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34029/12-13	339 A	12,096.48	11-02-14	12,096.48	(1)
		PD-34030/12-13	340 A	1,837.44	30-01-14	1,837.44	(1)
		PD-34031/12-13	341 A	1,378.08	30-01-14	1,378.08	(1)
2	Activación Coordinación y Organización de Eventos S. de R. L. de C.V.	PD-34858/12-13	R 86	469,692.12	21-03-14	469,692.12	(2)
3	AACAFIQ A.C.	PD-34042/12-13	0021A	5,000.00	30-01-14	5,000.00	(1)
4	Acevedo García Andrea	PD-34046/12-13	A008	6,083.92	06-03-14	5,000.00	(1)
5	Capital Networks S.A. de C.V.	PD-34015/11-13	609	99,340.00	07-02-14	99,340.00	(1)
6	Conde Rodríguez Sara Norma	PD-34029/04-13	201	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34030/04-13	203	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34030/04-13	204	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34031/04-13	205	6,083.92	07-02-14	5,000.00	(1)
		PD-34032/04-13	206	6,083.92	07-02-14	5,000.00	(1)
7	Capacitación y Consultoría para el Desarrollo Integral S.C.	PI-34010/12-13	507	5,800.00	18-02-14	5,800.00	(1)
8	Centro de Alternativas Comunitarias y Género María Luisa Herrasti La China A.C.	PD-34002/12-13	517	27,000.00	07-02-14	27,000.00	(1)
		PD-34006/12-13	516	27,000.00	31-01-14	27,000.00	(1)
9	Cañete Sánchez Claudia Jaqueline	PD-34017/12-13	AFAD105	489,984.00	TB 07-02-14 TB 06-03-14 TB 03-04-14 TB 09-05-14 TB 10-06-14 TB 17-07-14	489,984.00	(1)
10	Comercializadora EFISA S.A. de C.V.	PD-34051/10-13	19	78,000.00	07-02-14	78,000.00	(1)
		PD-34021/11-13	15	78,000.00	31-01-14	78,000.00	(1)
		PD-34012/12-13	31	79,000.64	03-04-14	79,000.64	(1)
11	Castellanos Jurado Aline	PD-34036/11-13	152	6,084.00	31-01-14	5,000.00	(1)
12	Castorena Saenz Nithia	PD-34037/11-13	45	6,083.92	07-02-14	5,000.00	(1)
13	Delfín Avendaño Luz del Carmen	PD-34041/12-13	1	3,650.35	30-01-14	3,000.00	(1)
14	Escobar del Razo Gabriela	PD-34019/12-13	121	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
15	Escobar Hernández David	PD-34012/11-13	23	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
16	Export Group Gescopys S.A. de C.V.	PD-34042/04-13	6870	9,860.00	06-03-14	9,860.00	(1)
		PD-34043/04-13	6890	11,020.00	09-05-14	11,020.00	(1)
		PD-34019/05-13	6971	73,933.76	09-05-14	73,933.76	(1)
		PD-34013/06-13	7025	67,679.04	06-03-14	67,679.04	(1)
		PD-34032/07-13	7095	87,192.56	03-04-14	87,192.56	(1)
		PD-34027/08-13	7120	42,800.00	17-07-14	42,800.00	(1)
		PD-34028/08-13	7162	37,120.00	09-05-14	37,120.00	(1)
		PD-34033/09-13	7192	42,800.00	09-05-14	42,800.00	(1)
		PD-34034/09-13	7237	77,781.34	05-06-14	77,781.34	(2)
		PD-34054/10-13	7292	50,000.00	17-07-14	50,000.00	(1)
		PD-34039/11-13	7372	42,800.00	06-03-14	42,800.00	(1)
		PD-34049/12-13	7430	42,800.00	17-07-14	42,800.00	(1)
17	Ensastiga Santiago Mario	PD-34011/12-13	017 A	12,167.83	31-01-14	10,000.00	(1)
18	Enso Go S.A. de C.V.	PD-34859/12-13	344	144,995.59	06-02-14	144,995.59	(2)
		PD-34859/12-13	345	8,250.00	06-02-14	8,250.00	(2)
19	Fundación Heberto Castillo Martínez A.C.	PD-34015/10-13	1820	50,000.00	06-02-14	50,000.00	(1)
20	Gómez Flores Laura	PD-34049/10-13	301	18,251.75	03-04-14	15,000.00	(1)
		PD-34011/11-13	304	18,251.75	31-01-14	15,000.00	(1)

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
		PD-34043/12-13	306	18,251.75	31-01-14	15,000.00	(1)
21	Gutiérrez Andrade Roberto	PD-34038/11-13	1201	3,417.36	06-03-14	3,417.36	(1)
22	Gil Rosales Lucía	PD-34019/08-13	1395	90,000.00	07-02-14	90,000.00	(1)
23	Generando Equidad y Libertad en Colectivo A.C.	PD-34023/08-13	136	5,000.00	31-01-14	5,000.00	(1)
24	Guerra Ochoa María Teresa	PD-34022/11-13	4	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
25	García Ruiz Cecilia	PD-34045/12-13	2	6,083.92	06-03-14	5,000.00	(1)
26	Huerta López Alicia	PD-34014/07-13	166	9,450.00	30-01-14	9,000.00	(1)
		PD-34002/10-13	251	12,761.85	06-03-14	10,000.00	(1)
		PD-34020/10-13	254	18,251.75	31-01-14	15,000.00	(1)
		PD-34005/10-13	252	12,761.85	07-02-14	10,000.00	(1)
		PD-34041/10-13	255	18,251.75	11-02-14	15,000.00	(1)
27	Interticket S.A. de C.V.	PD-34020/07-13	B300	189,916.23	11-04-14	189,916.23	(1)
28	Lupca S.A. de C.V.	PD-34027/11-13	A2005	39,227.44	06-03-14	39,227.44	(1)
		PD-34029/11-13	A2007	37,093.38	06-03-14	37,093.38	(1)
		PD-34031/11-13	A2014	37,725.02	03-04-14	37,725.02	(1)
		PD-34033/11-13	A2017	36,218.56	09-05-14	36,218.56	(1)
30	Lagarde y de los Ríos María Marcela	PD-34022/10-13	LA-054	36,503.49	31-01-14	30,000.00	(1)
		PD-34024/10-13	LA-058	36,503.49	07-02-14	30,000.00	(1)
		PD-34025/10-13	LA-059	36,503.49	06-03-14	30,000.00	(1)
31	Meza Peña Miriam Angélica	PD-34004/10-13	54	12,167.83	31-01-14	10,000.00	(1)
32	Mancilla García Angélica Haydee	PD-34007/10-13	A-0011	19,720.00	31-01-14	19,720.00	(1)
		PD-34009/10-13	A-0012	4,872.00	07-02-14	4,872.00	(1)
		PD-34018/10-13	A-0013	5,800.00	30-01-14	5,800.00	(1)
		PD-34003/12-13	A 0014	19,720.00	06-03-14	19,720.00	(1)
		PD-34005/12-13	A 0015	19,720.00	03-04-14	19,720.00	(1)
33	Martínez Badajos Oscar	PD-34031/03-13	1	3,650.35	ch 20	3,000.00	(1)
		PD-34031/03-13	2	3,650.35	ch 21	3,000.00	(1)
34	Mena Hernández Leticia Mariana	PD-34025/11-13	6	1,995.20	12-02-14	1,995.20	(1)
35	Mancilla García Rodrigo	PD-34024/11-13	A 01	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34015/12-13	A 03	6,083.92	31-01-14	5,000.00	(1)
36	Mancilla Reyes Alfonso	PD-34016/11-13	101	6,083.82	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34018/11-13	103	6,083.82	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34019/11-13	104	6,083.82	06-03-14	5,000.00	(1)
		PD-34009/12-13	105	6,083.82	07-02-14	5,000.00	(1)
37	Nolasco Cervantes Silvia	PD-34035/04-13	106	6,083.82	08-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34036/04-13	107	6,083.82	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34037/04-13	108	6,083.82	31-01-14	5,000.00	(1)
		PD-34038/04-13	109	6,083.82	07-02-14	5,000.00	(1)
		PD-34039/04-13	110	6,083.82	07-02-14	5,000.00	(1)
		PD-34040/04-13	113	6,083.82	06-03-14	5,000.00	(1)
		PD-34041/04-13	114	6,083.82	06-03-14	5,000.00	(1)
38	Ortuño Hernández Felipe	PD-34035/03-13	512	6,083.82	06-03-14	5,000.00	(1)
39	Ortiz Olvera Juan Marcos	PD-34047/10-13	320	36,503.50	07-02-14	30,000.00	(1)
		PD-34014/11-13	322	36,503.50	06-03-14	30,000.00	(1)
		PD-34044/12-13	323	36,503.50	06-03-14	30,000.00	(1)
40	Prensa Latina Agencia Informativa Latinoamericana	PD-34031/09-13	6606	40,600.00	30-01-14	40,600.00	(1)
41	Punto Genaro A.C.	PD-34047/12-13	R003	5,000.00	06-03-14	5,000.00	(1)
		PD-34048/12-13	R004	5,000.00	03-04-14	5,000.00	(1)
42	Rodríguez García Dunia Amira Erendira	PD-34008/11-13	120	30,419.58	31-01-14	25,000.00	(1)
		PD-34034/12-13	121	30,419.58	07-02-14	25,000.00	(1)
44	Sánchez Laguna Alejandro	PD-34010/02-13	203	6,083.92	30-01-14	5,000.00	(1)

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
45	Santos Calleja Josefina Alejandra	PD-34036/12-13	28	15,000.00	07-02-14	15,000.00	(1)
46	Sosa Zaragoza José Daniel	PD-34038/12-13	R001	40,000.00	31-01-14	40,000.00	(1)
47	Vázquez García Dulce Josefina	PD-34034/11-13	74	21,902.10	07-02-14	18,000.00	(1)
49	Varela Zúñiga María del Rosario	PD-34017/03-13	63	12,167.84	31-01-14	10,000.00	(1)
50	Zazueta Zazueta Jorge Armando	PD-34014/06-13	131	6,083.92	06-03-14	5,000.00	(1)
<b>TOTAL</b>				<b>\$3,474,594.99</b>		<b>\$3,359,797.12</b>	

Por lo que se refiere a las operaciones identificadas con (1) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, de la verificación a las copias de los cheques y transferencias electrónicas proporcionados por la Dirección de Auditoría se constató que el partido liquidó los pasivos registrados al cierre del ejercicio dos mil trece, durante el año dos mil catorce.

Por lo que se refiere a los casos identificados con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede, la Dirección de Auditoría indicó que habían sido pagados en el ejercicio 2014 y proporcionó los auxiliares contables en los cuales se advierte el registro contable del pago realizado; sin embargo, no obraba en sus archivos la documentación soporte de los movimientos contables referidos, en virtud de que a la fecha de solicitud aún no había iniciado la revisión al Informe Anual del citado año.

En consecuencia, esta autoridad procedió a solicitar al Partido de la Revolución Democrática que proporcionara la documentación soporte de los pagos registrados durante el ejercicio 2014 de los pasivos objeto del procedimiento que por esta vía se resuelve, principalmente para conocer el estatus de aquellos identificados con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede.

Al respecto, el instituto político en mención remitió un CD que contiene escaneados en formato PDF los comprobantes de pago de las operaciones mencionadas en el párrafo que antecede.

Aunado a lo anterior, en ejercicio de sus facultades de fiscalización esta autoridad procedió a confirmar la información proporcionada por el partido político con los proveedores y prestadores de servicios, obteniendo como resultado lo siguiente:

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
----	--	------------------------	---------	-----------------------------	------------------	-------------------	------------

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO	REFERENCIA
2	Activación Coordinación y Organización de Eventos S. de R. L. de C.V.	PD-34858/12-13	R 86	469,692.12	21-03-14	469,692.12	(1)
16	Export Group Gescopys S.A. de C.V.	PD-34034/09-13	7237	77,781.34	05-06-14	77,781.34	(1)
18	Enso Go S.A. de C.V.	PD-34859/12-13	344	144,995.59	06-02-14	144,995.59	(2)
		PD-34859/12-13	345	8,250.00	06-02-14	8,250.00	

En este orden de ideas, los proveedores y prestadores de servicios identificados con (1) en el cuadro que antecede, confirmaron las operaciones reportadas por el Partido de la Revolución Democrática, así como la información relativa a la forma y fecha en que fueron liquidados los pasivos, con lo cual se constató que el instituto político mencionado realizó el pago en el año siguiente al que fueron ejercidos.

Así mismo, la persona moral identificada con (2) en la columna “Referencia” del cuadro que antecede confirmó las operaciones reportadas por el partido en sus términos; sin embargo, no aclaró la fecha y forma en que fueron pagadas las facturas emitidas como consecuencia de la prestación del servicio, no obstante los diversos requerimientos de información realizados por esta autoridad, mismos que corren agregados al expediente de mérito y que se describen en el antecedente **XI** de la presente Resolución.

En este tenor, esta autoridad solicitó nuevamente a la Dirección de Auditoría que informara el estatus de los pasivos de mérito durante el ejercicio dos mil catorce y al cierre del mismo, una vez concluida la revisión realizada por dicha autoridad al Informe Anual de ingresos y egresos, presentado por el Partido de la Revolución Democrática correspondiente al año mencionado.

Consecuentemente, la Dirección de Auditoría informó que los pasivos referidos en el cuadro que antecede habían sido pagados durante el ejercicio dos mil catorce y remitió copia de los auxiliares contables en los cuales se identificaron los pagos referidos; sin embargo, no remitió los comprobantes bancarios de las transferencias correspondientes.

Por lo anterior, esta autoridad solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores copia certificada de las transferencias electrónicas realizadas por el Partido de la Revolución Democrática para el pago de los pasivos se detallan en el

cuadro que antecede, así como la información relativa a los nombres de los titulares de las cuentas de origen y destino a efecto de constatar la correcta aplicación de los recursos.

Al respecto, la citada comisión remitió la respuesta emitida por las instituciones bancarias BBVA Bancomer, S.A., Banorte, S.A. y Scotiabank Inverlat S.A., misma que contiene copia certificada de las transferencias en comento y la información relativa a las cuentas de destino, mismas que corresponden a los proveedores y prestadores de servicios detallados en el cuadro que antecede.

En razón de lo anterior, una vez concatenados los elementos probatorios obtenidos como resultado de las diligencias realizadas, es posible confirmar que los pasivos detallados en el cuadro que antecede fueron liquidados en el año dos mil catorce.

De este modo, se constató que el partido incoado liquidó los pasivos objeto de análisis en el presente apartado, hasta el ejercicio dos mil catorce y no en aquél en que fueron prestados los servicios, es decir dos mil trece.

En este sentido, es importante precisar que para el caso específico de los gastos de Capacitación, Promoción y Liderazgo Político de las Mujeres, el pago de las facturas y recibos debió efectuarse en el mismo ejercicio en que fueron prestados los servicios, toda vez que el partido se encontraba obligado a destinar el porcentaje mínimo establecido en la normatividad, el cual fue especificado en el Acuerdo CG17/2013 del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral por el que se determinaron las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer para el año 2013.

Sin embargo, en la Resolución identificada como **INE/CG217/2014**, respecto de las irregularidades determinadas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece, en atención al Punto Resolutivo **DÉCIMO PRIMERO**, Considerando **10.3**, inciso **a)**, conclusión **70**, el no haber liquidado las cuentas por pagar con los proveedores correspondientes, mismos que fueron mencionados con anterioridad, se sancionó como una falta formal; por lo que el presente procedimiento oficioso fue mandado únicamente para analizar si los pagos fueron hechos en la siguiente anualidad por el Partido de la Revolución Democrática y verificar si los mismos estaban relacionados con las

Actividades de Capacitación, Promoción y Desarrollo el Liderazgo Político de las Mujeres.

En este orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática realizó el pago de gastos etiquetados durante el ejercicio dos mil trece por un monto que, por lo que se refiere a las facturas analizadas en el presente apartado, asciende a **\$3,359,797.12 (tres millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 12/100).**

Es importante mencionar que lo anterior no implica que los gastos no sean considerados para la determinación de los montos mínimos que el partido debió ejercer para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer durante el dos mil trece, toda vez que existe certeza respecto a que los eventos de capacitación y las investigaciones amparados por las facturas analizadas se llevaron a cabo, así como de que el recurso se destinó para el rubro mencionado, pese a que no se realizó el pago en el año en el cual fueron prestados los servicios.

Consecuentemente, no obstante que el pago de los servicios vinculados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer en el ejercicio dos mil trece fueron liquidados en el año siguiente al que fueron realizados, se tiene constancia del pago de los mismos de acuerdo a la información remitida por las autoridades, como fue señalado anteriormente, ya que de la consulta realizada al Dictamen Consolidado de la revisión a los Informes Anuales de ingresos y gastos del ejercicio dos mil trece, se advierte que los pagos de las facturas objeto del presente apartado fueron materia del mismo.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que durante el ejercicio dos mil trece las personas físicas y morales que son objeto de análisis en el presente apartado, prestaron servicios al Partido de la Revolución Democrática y emitieron las facturas reportadas por el ente político.
- Que existe certeza del destino y aplicación de los recursos involucrados, así como de la vinculación de las erogaciones con los objetivos del presupuesto etiquetado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.



- Que derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoría, esta autoridad tiene certeza sobre la liquidación de las facturas de mérito.
- Que las operaciones que fueron objeto de observación y sanción por constituir pasivos con antigüedad mayor a un año, fueron sancionadas en el marco de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio dos mil catorce, debido a que el partido político no presentó la documentación idónea para desvirtuar la conducta observada por la autoridad electoral.

De la concatenación de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de la liquidación de las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, materia del presente procedimiento oficioso, así como de que los mismos se trataron de gastos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer; por lo que derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoría anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo establecido en el artículo **78, numeral 1 inciso a), fracción V, en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales**; por lo que se declara **infundado** el presente apartado por un monto de **\$3,359,797.12** (tres millones trescientos cincuenta y nueve mil setecientos noventa y siete pesos 12/100).

**Apartado B. Recursos etiquetados pagados en el año inmediato posterior a aquél en que fueron prestados los servicios, que fueron sancionados por tener una antigüedad mayor a un año en el ejercicio 2014.**

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral se dirigió la línea de investigación en primer lugar a la Dirección de Auditoría con el objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación durante la revisión de los informes en comento.

Ahora bien, por lo que se refiere a las operaciones analizadas en el presente apartado, la Dirección de Auditoría proporcionó copia de los comprobantes fiscales que dieron origen a la observación y copia del auxiliar contable relativo al Segundo Informe Trimestral del ejercicio dos mil catorce, en el cuál se advierte el registro de tres pagos; sin embargo, no remitió copia de los comprobantes de transferencia electrónica en virtud de que sus facultades de revisión respecto al Informe Anual de dicho año aún no iniciaban.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/P-COF-UTF/22/2014**

En razón de lo anterior, se dirigió la línea de investigación al Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que proporcionara la documentación comprobatoria de los pagos que hubiere realizado respecto a las operaciones antes descritas.

En consecuencia, el partido incoado en respuesta a la solicitud realizada por esta autoridad fiscalizadora, presentó un CD que contiene la digitalización de los comprobantes de transferencia electrónica de las operaciones objeto del presente apartado.

Del análisis a la información remitida por el Partido de la Revolución Democrática respecto de aquella que si contenía copia de la transferencia bancaria, en la cual se comprueba que los pagos de las facturas fueron realizados durante el ejercicio dos mil catorce, por el proveedor Solidaridad y Ayuda Social A.C.

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE PAGO	MONTO DEL PAGO
43	Solidaridad y Ayuda Social A.C.	PD-34860/12-13	2	6,844.00	31-01-14	6,844.00
		PD-34861/12-13	3	14,964.00	06-03-14	14,964.00
		PD-34862/12-13	4	12,064.00	03-04-14	35,148.00
		PD-34863/12-13	5	23,084.00		
TOTAL				\$56,956.00		\$56,956.00

Por consiguiente la autoridad procedió a requerir al proveedor Solidaridad y Ayuda Social A.C. a efecto de que presentara la documentación que acreditara sus servicios prestados al partido político.

Al no poderse localizar la persona moral antes mencionada, se procedió a agotar el principio de exhaustividad que rige en la materia, por lo que la línea de investigación se rigió a la Secretaría de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público solicitándole localizar a la persona moral Solidaridad y Ayuda Social A.C., misma dependencia que emitió el domicilio fiscal el cual coincide con el que obra en el expediente.

Sin embargo no fue posible localizar a la persona moral, por lo cual la autoridad requirió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de que proporcionara la documentación necesaria para confirmar el destino de los recursos involucrados en las transferencias electrónicas proporcionadas por el Partido de la Revolución Democrática, a lo que dicha autoridad dio contestación remitiendo la respuesta emitida por las instituciones bancarias BBVA Bancomer, S.A. y Scotiabank Inverlat S.A. misma que contiene copia certificada de las

transferencias en comento y la información relativa a las cuentas de destino, las cuales corresponden al proveedor detallado en el cuadro que antecede.

Por lo anterior, la autoridad tiene certeza que los pasivos que fueron detallados en el cuadro que antecede fueron pagados en el año posterior a aquel en el que fueron ejercidos.

Por lo que esta autoridad realizó un segundo requerimiento a la Dirección de Auditoría a efecto de que informara si los pagos de las facturas objeto del procedimiento habían sido reportados en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio dos mil catorce o en su caso, si habían sido sancionados por haber sido pagados un año posterior a aquel en que fueron destinado los recursos.

En respuesta al requerimiento, la Dirección de Auditoría informó que las facturas contenidas en el cuadro multicitado fueron observadas y sancionadas en el marco de la Revisión de Informes Anuales del ejercicio fiscal dos mil catorce, específicamente en la conclusión **52** del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente al año dos mil catorce.

La sanción antes referida fue impuesta mediante la Resolución INE/CG1019/2015 respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil catorce, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil quince.

La Resolución antes mencionada fue confirmada en la parte que interesa, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-17/2016, al no haber sido materia de controversia.

En razón de lo anterior, el proveedor Solidaridad y Ayuda Social A.C. presentó copia de la transferencias bancarias en la cual se comprueban pagos de facturas que fueron realizados durante el ejercicio dos mil catorce, la cantidad de dichos pagos es equivalente a \$56,956.00.

Es importante mencionar que lo anterior no implica que los gastos no sean considerados para la determinación de los montos mínimos que el partido debió ejercer para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer durante el dos mil trece, toda vez que existe certeza respecto a que los eventos de capacitación y las investigaciones amparados por las facturas analizadas se llevaron a cabo, así como de que el recurso se destinó para el rubro mencionado, pese a que no se realizó el pago en el año en el cual fueron prestados los servicios.

Consecuentemente, no obstante que el pago de los servicios vinculados a la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer en el ejercicio dos mil trece fueron liquidados en el año siguiente al que fueron realizados, se tiene constancia del pago de los mismos de acuerdo a la información remitida por las autoridades, como fue señalado anteriormente, ya que de la consulta realizada al Dictamen Consolidado de la revisión a los Informes Anuales de ingresos y gastos del ejercicio dos mil trece, se advierte que los pagos de las facturas objeto del presente apartado fueron materia del mismo.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del procedimiento de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que durante el ejercicio dos mil trece las personas físicas y morales que son objeto de análisis en el presente apartado, prestaron servicios al Partido de la Revolución Democrática y emitieron las facturas reportadas por el ente político.
- Que existe certeza del destino y aplicación de los recursos involucrados, así como de la vinculación de las erogaciones con los objetivos del presupuesto etiquetado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.
- Que derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoría, esta autoridad tiene certeza sobre la liquidación de las facturas de mérito.
- Que las operaciones que fueron objeto de observación y sanción por constituir pasivos con antigüedad mayor a un año, fueron sancionadas en el marco de la revisión a los Informes Anuales del ejercicio dos mil catorce, debido a que el

partido político no presentó la documentación idónea para desvirtuar la conducta observada por la autoridad electoral.

De la concatenación de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de la liquidación de las cuentas por pagar con antigüedad mayor a un año, materia del presente procedimiento oficioso, así como de que los mismos se trataron de gastos para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer; por lo que derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoría anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo establecido en el artículo **78, numeral 1 inciso a), fracción V, en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales**; por lo que se declara **infundado** el presente apartado por un monto de **\$56,956.00** (cincuenta y seis mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100).

**Apartado C. Recursos etiquetados pendientes de pago que fueron sancionados en el ejercicio 2014 por tener una antigüedad mayor a un año.**

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral se dirigió la línea de investigación en primer lugar a la Dirección de Auditoría con el objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación durante la revisión de los informes en comento, respecto de la operación que a continuación se detalla:

ID	PROVEEDOR / PRESTADOR DE SERVICIOS	REFERENCIA CONTABLE	FACTURA	MONTO DE LA OPERACIÓN
29	Lilith Consultoras S.C.	PI-34011/12-13	17	\$5,800.00

Ahora bien, por lo que se refiere a la operación analizada en el presente apartado, la Dirección de Auditoría remitió copia del comprobante fiscal y una relación en la cual indicó que en los registros contables correspondientes al Segundo Informe Trimestral del ejercicio dos mil catorce, la factura se encontraba pendiente de pago.

En razón de lo anterior, se dirigió la línea de investigación al Partido de la Revolución Democrática, a efecto de que proporcionara la documentación

comprobatoria de los pagos que hubiere realizado respecto a la operación mencionada.

Al respecto, el partido incoado dio respuesta al requerimiento realizado por ésta autoridad; sin embargo, no presentó documentación o aclaración alguna respecto a la operación celebrada con el proveedor Lilith Consultoras, S.C.; por tal razón, a efecto de contar con mayores elementos de convicción, se procedió a confirmar con el proveedor el estado que guardaba el pasivo en cuestión, específicamente por lo que se refiere a la fecha y forma de pago.

En respuesta al requerimiento realizado, la C. Ana Lidia Treviño Ley en su carácter de Representante Legal de la persona moral en cita, confirmó haber prestado los servicios al Partido de la Revolución Democrática e informó que a la fecha de su respuesta, esto es al treinta de junio de dos mil quince, **no había recibido el pago** correspondiente.

Visto lo anterior, se tiene que el Partido de la Revolución Democrática recibió un servicio en el ejercicio dos mil trece, consistente en la impartición de cursos y talleres por parte de la persona moral Lilith Consultoras S.C.; sin embargo, no efectuó el pago respectivo.

Es así que, por lo que se refiere a los hechos investigados en el procedimiento que por esta vía se resuelve se tiene por acreditada la actividad realizada por el partido político al haber sido confirmada la prestación del servicio por parte del proveedor, así como su vinculación con el Programa Anual de Trabajo del rubro de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres; sin embargo, al no haber sido pagados por el sujeto incoado, se actualiza una vulneración a los principios de legalidad y certeza que deben regir el actuar de los actores políticos.

Lo anterior, debido a que al no haber contraprestación o pago el servicio prestado por el proveedor adquiere en la especie, la calidad de aportación misma que contraviene sustancialmente la normatividad vulnerando la legalidad como principio rector de la actividad electoral. Esto es así toda vez que el partido político en cuestión, al no encuadrar sus actividades dentro de los confines establecidos por la normatividad comicial, y dejar de observar el contenido predeterminado por el código electoral, se beneficia indebidamente.

Lo anterior se confirma toda vez que, el partido reporta un pasivo con antigüedad mayor a un año y no se advierte la existencia de alguna excepción legal ni el pago realizado en ejercicios posteriores. En ese orden de ideas se desprende que el instituto político en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de Fiscalización, mismo que se transcribe a continuación:

*"Artículo 56.*

*1. Si al término de un ejercicio existen pasivos que no se encuentren debidamente soportados como lo señala el artículo 55 del Reglamento con una antigüedad mayor a un año, serán considerados como ingresos no reportados, salvo que el partido informe oportunamente de la existencia de alguna excepción legal. "*

La descrita situación tiene como finalidad evitar la simulación, pues al arrastrar adeudos ejercicio tras ejercicio podría presumirse que al partido le han sido condonados los mismos y que, en su caso, deben reportarse como ingresos, en la inteligencia de que los servicios ya le han sido prestados los bienes ya han entrado al patrimonio del partido.

En todo caso, el partido tendría el derecho de acreditar las excepciones legales que correspondieran y que justificaran la permanencia de dichos saldos en los informes de ingresos y gastos de varios ejercicios.

Esto es, la disposición en comento tiene por finalidad garantizar la liquidación de esas cuentas por pagar y comprobar su origen, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia de alguna excepción legal, y así evitar que indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en mera simulación o, inclusive, en un fraude a la ley.

Por lo antes expuesto, se actualiza una falta de fondo y se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, lo anterior es así toda vez que existe un sistema normativo electoral, en el cual se establecen reglas procedimentales y

sustanciales, así como controles de validez, legalidad y legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica.

Asimismo, los pasivos no saldados o la inexistencia de excepciones legales que justifiquen la falta de pago de los mismos, se traducen en un beneficio indebido, en razón de que se trata de la prestación de servicios y/o bienes que ingresaron al patrimonio del partido político y que no fueron pagados, situación que se convierte en una aportación en especie y por tanto, en un ingreso no reportado, y una vulneración al principio de legalidad.

Al respecto, es importante mencionar que se realizó un segundo requerimiento de información a la Dirección de Auditoría a efecto de que informara si el Partido de la Revolución Democrática habían reportado el pago de la factura expedida por el proveedor Lilith Consultoras S.C. en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014 o en su defecto si había sido sancionado el saldo de la cuenta por pagar por su antigüedad.

La Dirección de Auditoría en respuesta al requerimiento realizado informó que la factura objeto del presente apartado había sido observada y sancionada en el marco de la revisión al Informe Anual del ejercicio dos mil catorce, específicamente en la Conclusión 52 del Dictamen Consolidado de la Revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondiente a dicho año.

La sanción antes referida fue impuesta mediante la Resolución **INE/CG1019/2015** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil catorce, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil quince.

La Resolución antes mencionada fue confirmada en la parte que interesa, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación SUP-RAP-17/2016, al no haber sido materia de controversia.



Por consiguiente, el Partido de la Revolución Democrática contó con los elementos suficientes que determinan la responsabilidad relativa a las actividades del rubro etiquetado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, sin embargo dicho monto fue anteriormente fiscalizado por la autoridad, en el ejercicio fiscal 2014, por lo tanto lo procedente es declarar **infundado** por lo que concierne al monto de **\$5,800.00** (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) correspondiente a este apartado al ya existir un pronunciamiento por el mismo.

**Apartado D. Recursos etiquetados que fueron pagados en el año en el que tuvo lugar la prestación del servicio.**

Con base en las facultades de vigilancia y fiscalización de esta autoridad electoral se dirigió la línea de investigación en un primer momento a la Dirección de Auditoría con el objeto de obtener la documentación e información que soportó la observación durante la revisión de los informes en comento, respecto de las operaciones objeto del procedimiento.

Al respecto, la citada dirección dio respuesta al requerimiento realizado; sin embargo por lo que se refiere a la operación analizada en el presente apartado no remitió la información y documentación solicitada. A continuación se detalla el saldo objeto de estudio:

No	PROVEEDOR	REFERENCIA CONTABLE	SALDO
48	Valdés Juárez Hugo	PI-34007/02-13	\$2,012.00

Posteriormente, en respuesta al segundo requerimiento realizado a la Dirección de Auditoría, la citada instancia informó que el saldo referido en el cuadro que antecede había sido pagado en el ejercicio dos mil trece.

Aunado a lo anterior, de la consulta realizada a las cifras reportadas en el Dictamen Consolidado de la Revisión al Informe Anual presentado por el Partido de la Revolución Democrática correspondiente al ejercicio dos mil trece, específicamente en el **Anexo 19** esta autoridad constató dicha información.

Es así que el Partido de la Revolución Democrática realizó el pago de gastos etiquetados durante el ejercicio dos mil trece por un monto que, por lo que se refiere a la factura analizada en el presente apartado, asciende a **\$2,012.00** (dos mil doce pesos 00/100).

Es importante mencionar que una vez analizado por esta autoridad la factura objeto de estudio del presente apartado, constató que el gasto debe de ser considerado para la determinación de los montos mínimos que el partido debió ejercer para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de la mujer durante el dos mil trece, toda vez que existe certeza respecto a que el gasto amparado por la factura analizada se llevó a cabo, así como de que el recurso se destinó para el rubro mencionado, pese a que se realizó el pago en el año en el cual fueron prestados los servicios.

Visto lo anterior, de la valoración en conjunto de las pruebas obtenidas durante la sustanciación del apartado de mérito y de las manifestaciones realizadas por los entes involucrados, se tiene lo siguiente:

- Que durante el ejercicio dos mil trece la persona física detallada en el cuadro del presente apartado prestó servicios al Partido de la Revolución Democrática y emitió la factura reportada por el ente político en el marco de la revisión a los Informes Anuales de dicho año.
- Que el Partido de la Revolución Democrática registró la factura ante mencionada y efectuó los pagos respectivos en el ejercicio en el cuál fue prestado el servicio.
- Que existe certeza del destino y aplicación de los recursos involucrados, así como de la vinculación de las erogaciones con los objetivos del presupuesto etiquetado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres.

Bajo esta tesitura, de los elementos de prueba objeto de análisis en el apartado de mérito, esta autoridad electoral cuenta con elementos de convicción que le permiten tener certeza de que el Partido de la Revolución Democrática realizó el pago respecto a la realización de actividades del rubro etiquetado para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el ejercicio en el cuál fueron prestados los servicios; por lo que derivado de la información remitida por la Dirección de Auditoria anteriormente descrita y analizada, el sujeto incoado no vulneró lo establecido en el artículo **78, numeral 1 inciso a), fracción V, en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales**; por lo que se declara **infundado** el presente apartado por un monto de **\$2,012.00** (dos mil doce pesos 00/100 M.N).

### **Conclusión**

Visto el análisis del apartado **A**, esta autoridad concluye que el Partido de la Revolución Democrática realizó los pagos correspondientes a los pasivos registrados en el ejercicio dos mil trece por concepto de actividades específicas de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, en el ejercicio inmediato posterior a aquél en el cual fueron prestados los servicios y los mismos se encuentran vinculados a la promoción, capacitación y liderazgo político de las mujeres en el ejercicio dos mil trece.

En este sentido, en el apartado **B** se desprende que aún y cuando los recursos observados fueron pagados en el ejercicio inmediato interior, los mismos cumplieron la antigüedad mayor a un año cuando se llevó a cabo la revisión de los Informes Anuales de 2014, y así pues, existió una sanción por parte de esta autoridad al no haber realizado el pago de los pasivos generados por concepto de actividades específicas de Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres en el dos mil trece por un monto de \$5,800.00 dentro del plazo establecido dentro de la Resolución **INE/CG1019/2015** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil catorce, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil quince.

En este tenor de ideas, en el apartado **C** esta autoridad arribó a la conclusión de que aunque el pago de Lilith Consultoras S.C. por un monto de **\$5,800.00** (cinco mil ochocientos pesos 00/100 M.N.) no fue realizado, el mismo ya fue sancionado en el Informe Anual de Ingresos y Egresos correspondiente al ejercicio 2014 dentro de la Resolución **INE/CG1019/2015** respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de ingresos y egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil catorce, aprobada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el dieciséis de diciembre de dos mil quince.

Por último en el apartado **D** se concluye que el Partido de la Revolución Democrática realizó el pago de gastos etiquetados durante el ejercicio dos mil trece por un monto que asciende a **\$2,012.00**, siendo éste en la misma anualidad en que fueron prestados los servicios y los mismos se encuentran vinculados a la promoción, capacitación y liderazgo político de las mujeres en el ejercicio dos mil trece.

Por lo cual no existe una vulneración a lo dispuesto en el artículo 78, numeral 1 inciso a), fracción V, en relación con el 83, numeral 1, inciso b), fracción II del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente al veintitrés de mayo de dos mil catorce; por lo cual se procede a declarar **infundado** el procedimiento sancionador en que se actúa por un monto total de **\$3,424,565.12**, monto que resultó de la investigación y análisis realizado a las constancias y documentación soporte remitida por la Dirección de Auditoría.

Aunado a ello, cabe señalar que la autoridad se pronunció dentro del Dictamen Consolidado identificado como **INE/CG216/2014**, respecto de las irregularidades determinadas de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Egresos de los Partidos Políticos Nacionales correspondientes al ejercicio dos mil trece respecto del cumplimiento del 2% que le correspondía destinar para la Capacitación, Promoción y Desarrollo Del Liderazgo Político de las Mujeres al Partido de la Revolución Democrática determinado en el Acuerdo CG17/2013, como a continuación se señala:

“

FINANCIAMIENTO PÚBLICO RECIBIDO PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS (A)	2 % QUE LE CORRESPONDÍA DESTINAR PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES ACUERDO CG431/2011 (B)=(A*2%)	IMPORTE QUE EL PARTIDO REPORTÓ COMO GASTOS PARA LA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES. (C)
\$634,867,508.95	\$12,697,350.18	\$13,869,034.51

(...)

*De la revisión efectuada se determinó que los gastos se encuentran registrados contablemente en la cuenta "Liderazgo Político de las Mujeres" y que la documentación soporte consistente en: Programa Anual de Trabajo (PAT 2013), facturas, contratos de prestación de servicios, transferencias bancarias, muestras de los cursos, eventos, investigaciones y tareas editoriales proporcionados por el partido, cumple con lo dispuesto en la normatividad aplicable..."*

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## RESUELVE

**PRIMERO.** Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido de la Revolución Democrática de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 3** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**TERCERO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG405/2018

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-585/2015 RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y SU OTRORA CANDIDATA A JEFA DELEGACIONAL EN MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), LA C. BERTHA XÓCHITL GÁLVEZ RUÍZ, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF

Ciudad de México, 25 de abril de dos mil dieciocho.

**VISTO**, para resolver, el expediente número **INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**.

### Glosario

<b>JLE-DF</b>	Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal.
<b>Comisión de Fiscalización Consejo General Constitución</b>	Comisión de Fiscalización del Consejo General del INE. Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
<b>Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz</b>	La C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, entonces candidata al cargo de Jefa Delegacional por la Miguel Hidalgo, Distrito Federal, postulada por el Partido Acción Nacional en el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.
<b>Dirección de Auditoría INE</b>	Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros. Instituto Nacional Electoral.

<b>Ley de Instituciones</b>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
<b>Ley de Partidos</b>	Ley General de Partidos Políticos.
<b>PAN</b>	Partido Acción Nacional con acreditación en el Instituto Electoral del Distrito Federal.
<b>DF</b>	Distrito Federal actualmente Ciudad de México.
<b>Proceso electoral</b>	Proceso electoral local ordinario 2014-2015, relativo a las Jefaturas Delegacionales en el Distrito Federal ahora Ciudad de México.
<b>Reglamento de Procedimientos</b>	Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.
<b>SIF</b>	Sistema Integral de Fiscalización.
<b>Unidad Técnica</b>	Unidad Técnica de Fiscalización.
<b>Sala Superior</b>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

## **ANTECEDENTES.**

I. En sesión extraordinaria celebrada el doce de agosto de dos mil quince, éste órgano administrativo electoral aprobó la Resolución **INE/CG762/2015**, en cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SUP-RAP-277/2015, respecto de las quejas relacionadas con un supuesto rebase de tope de gastos de campañas electorales de la elección local. (Fojas 107-118 del expediente)

II. **Recursos de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada en el antecedente anterior, el veinte de agosto de dos mil quince, el C. Jorge Luis Zarate Alarcón interpuso recurso de apelación; mediante Acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil quince, el Magistrado Presidente de la Sala Superior acordó integrar el expediente **SUP-RAP-585/2015** y turnarlo a la ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa.

III. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior, resolvió el asunto referido, en sesión pública celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil quince, determinando lo que a continuación se transcribe:

“(…)

### III. RESOLUTIVOS

**ÚNICO.** Se **revoca** la resolución impugnada para los efectos precisados en la presente ejecutoria.

(...)"

IV. En la referida sentencia en el Considerando Cuarto, del estudio de fondo, así como a los efectos de la sentencia recaída al expediente citado, respectivamente la Sala Superior, determinó lo que a continuación se transcribe:

**"CUARTO. Estudio de fondo**

(...)

Ahora bien atendiendo a la normatividad anterior y del análisis del escrito de queja y del escrito de contestación a la prevención formulada por el denunciante, se aprecia que contrario a lo que se precisó en la resolución que se impugna, **en algunos de los casos** que se enunciaron en el escrito de queja, en el rubro **A) GASTOS DE PROPAGANDA sub-rubro A.1 Eventos políticos, reuniones y mítines**, se satisfizo lo dispuesto en el precepto invocado, toda vez que se realiza la descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se precisaron algunos de los eventos políticos de los que se pretende el desarrollo de una investigación para demostrar que la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, otrora candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, posiblemente infringió rebase de tope de gastos de campaña, además de haberse aportado copias de algunas fotografías que hacen las veces de elementos de prueba que deben analizarse con el carácter de indiciario por ser con las que cuenta el quejoso a efecto de soportar sus aseveraciones.

(...)

Como se puede apreciar en el cuadro que antecede, **en algunos de los casos** que se enunciaron en el escrito de queja, como **GASTOS DE PROPAGANDA**, con los que se pretende demostrar las posibles irregularidades en los gastos de campaña de la entonces candidata a Jefa Delegación (sic) en Miguel Hidalgo, sí se indicaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar que la responsable solicitó se le precisaran para realizar la investigación respectiva, a través del Acuerdo dictado con fecha diecisiete de julio del año en curso, sin embargo dejó de observar de forma particularizada los argumentos del denunciante vertidos en su escrito de queja.



*En razón de lo anterior la autoridad responsable debió realizar un estudio exhaustivo de los hechos que se expusieron en el escrito de queja, pues si bien es cierto en algunos otros supuestos señalados en la misma, se evidencia en forma notoria la obscuridad e imprecisión con la que se expusieron las posibles irregularidades denunciadas, y con ello la imposibilidad de realizar un estudio pormenorizado, por la falta de elementos para ordenar el desahogo de las diligencias necesarias como parte de una investigación administrativa, para contar con el universo de circunstancias y emitir de esa forma una resolución fundada y motivada en relación a las irregularidades y anomalías denunciadas como parte del rebase de gastos de tope de campaña erogados por la entonces candidata a Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, por el Partido de Acción Nacional Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz; otros supuestos como los ya se listaron, existen elementos suficientes para realizar el estudio del fondo de la queja*

*En razón de lo anterior la autoridad responsable debió realizar un estudio exhaustivo de los hechos que se expusieron en el escrito de queja, pues si bien es cierto en algunos otros supuestos señalados en la misma, se evidencia en forma notoria la obscuridad e imprecisión con la que se expusieron las posibles irregularidades denunciadas, y con ello la imposibilidad de realizar un estudio pormenorizado, por la falta de elementos para ordenar el desahogo de las diligencias con el universo de constancias y emitir de forma una resolución fundada y motivada en relación a las irregularidades y anomalías denunciadas como parte del rebase de tope de gastos de campaña erogados por la entonces candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, por el Partido de Acción Nacional Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz; en otros supuestos como los que ya se listaron, existen elementos suficientes para realizar el estudio del fondo de la queja planteada.*

(...)

#### **I. Efectos de la resolución**

*En virtud de lo expuesto esta Sala Superior considera que los agravios hechos valer por Jorge Luis Zarate Alarcón, que han sido expuestos previamente son fundados y suficientes para revocar la Resolución impugnada INE/CG762/2015 emitida el doce de agosto del dos mil quince por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización seguido en contra del Partido Acción Nacional y Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, otrora candidata a*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

*Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF.*

*En consecuencia el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe avocarse a realizar el estudio particularizado de los hechos que el recurrente denuncia como infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, relativos al rebase de topes de campaña en que incurrió la entonces candidata del Partido Acción Nacional a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.*

Lo anterior, respecto a lo que fue materia de impugnación, para efectos de que la autoridad responsable se enfoque en realizar el estudio particularizado de los hechos, y una vez agotada la misma, resolver el procedimiento administrativo electoral de mérito.

**V.** Por lo expuesto, en tanto la ejecutoria de la Sala revocó la resolución INE/CG762/2015 en la parte indicada y para los efectos descritos, con fundamento en los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, 191, numeral 1, incisos d) y g) y 199, numeral 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicte la Sala Superior, son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

**VI.** Así, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, se realizaron las diligencias que a continuación se describen.

**VII. Acuerdo de inicio de procedimiento de queja.** Mediante acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil quince, con la finalidad de dar cabal cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior, la Unidad Técnica acordó la admisión del escrito de queja e integrar el expediente respectivo, asignarle el número INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF registrarlo en el libro de gobierno y notificar de ello al Secretario del Consejo General de este Instituto. (Foja 146 del expediente).

**VIII. Publicación en estrados del acuerdo de inicio.**

a) El dieciséis de octubre de dos mil quince, la Unidad Técnica fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de inicio del presente procedimiento y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 148 del expediente).

b) El diecinueve de octubre de dos mil quince la Unidad Técnica retiró de estrados el citado acuerdo de inicio, la cédula de conocimiento; y mediante razones de fijación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 149 del expediente).

**IX. Notificación al Secretario del Consejo General de este Instituto.** El dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22881/2015, esta Unidad Técnica notificó al Secretario del Consejo General el inicio del procedimiento referido con anterioridad. (Foja 150 del expediente).

**X. Notificación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización.** El dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22880/2015, la Unidad Técnica notificó al Consejero Electoral Ciro Murayama Rendón, Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de queja. (Foja 151 del expediente).

**XI. Notificación de inicio al Partido Acción Nacional.** El dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22883/2015, la Unidad Técnica notificó al Representante propietario del PAN ante el Consejo General del Distrito Federal, el inicio del procedimiento de queja. (Foja 155 del expediente).

**XII. Notificación del inicio del procedimiento de queja a Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.** El dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22882/2015, la Unidad Técnica notificó a la entonces candidata el inicio de procedimiento de queja. (Fojas 152 del expediente).

**XIII. Solicitud de información al PAN.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/21936/2015, la Unidad Técnica solicitó al PAN, comunicara a esta autoridad si algunos eventos se llevaron a cabo, en caso de ser afirmativo indicará en cuál de los informes el partido reportó los eventos, o si bien constituyen una aportación en especie. Así como remitiera la documentación soporte al respecto. (Fojas 168-170 del expediente).

b) En respuesta al requerimiento antes citado se informó que, respecto de seis eventos, estos se encuentran reportados en el SIF y los restantes no se realizó ninguna erogación. (Fojas 179-181 del expediente).

c) El treinta de octubre del dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/23487/2015, se solicitó al PAN, comunicara a esta autoridad, en

cuál de los informes había reportado el gasto respecto a diversa propaganda electoral denunciada. (Fojas 823-826 del expediente).

d) El nueve de noviembre de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento del oficio INE/UTF/DRN/23487/2015, en el cual refiere que diversa propaganda electoral erogada durante la campaña electoral, se encuentra debidamente reportada, así como remite la documentación soporte que acredita su dicho. (Fojas 827-850 del expediente).

e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/2792/2016, la Unidad Técnica solicitó al Representante Propietario del PAN, comunicara a esta autoridad información del reporte de diversa propaganda utilitaria y la instalación de espectaculares denunciados. (Fojas 859-860 del expediente).

f) En respuesta al requerimiento anterior, informó que diversos conceptos de propaganda denunciados se encuentran reportados ante la Unidad Técnica. (Fojas 864 -944 del expediente).

g) Mediante oficio INE/UTF/DRN/19485/2016, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al PAN, comunicara a esta autoridad el motivo por el cual los eventos de campaña de la entonces candidata la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, se encuentran amparados con las facturas con números de comprobantes 169 y 170, emitidas por Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V., a favor de Lucía Juárez Mejía y Edmundo José María Cruz Coteró. (Fojas 1020 -1021 del expediente).

h) En respuesta al requerimiento realizado, el PAN informó que, respecto de seis eventos, los mismos fueron reportados ante la Unidad Técnica y los restantes no se realizó erogación alguna. (Fojas 1022 -1041 del expediente).

#### **XIV. Solicitud de información a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/21937/2015, la Unidad Técnica solicitó a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, indicara si los eventos denunciados fueron llevados a cabo, y en su caso indicara en cuál de los informes se habían reportado, así como remitiera la documentación soporte al respecto. (Fojas 182-184 del expediente).

b) En respuesta a lo anterior, manifestó que los eventos denunciados se realizaron y se encuentran debidamente reportados ante la Unidad Técnica, y remitió documentación soporte. (Fojas 199 -214 del expediente).

c) Cabe precisar que mediante escrito de fecha dos de octubre de dos mil quince, la C. Lucia Mejía Juárez, dio respuesta al oficio INE/UTF/DRN/21937/2015, manifestado que diversos eventos se encuentran debidamente reportados en el SIF. (Fojas 185 -198 del expediente).

d) El treinta de octubre del dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/23486/2015, se solicitó a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, indicara en cuál de los informes había reportado gastos por concepto de propaganda electoral denunciada, así como remitiera la documentación soporte. (Fojas 293-294 del expediente).

e) El seis de noviembre del dos mil quince, se recibió respuesta al requerimiento, en el cual refiere que diversa propaganda electoral utilizada durante la campaña, fue reportada ante la Unidad Técnica. (Fojas 295-822 del expediente).

f) Mediante los oficios INE/UTF/DRN/2791/2016 e INE/UTF/DRN/19486/2016, la Unidad Técnica, solicitó a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, indicara el motivo por el cual los eventos de campaña se encuentran amparados con las facturas 169 y 170; así como se solicitó indicara si dentro del informe de campaña, se encontraba el reporte de propaganda utilitaria consistente en pulseras, gorras y chalecos. (Fojas 945-950 del expediente).

g) De los requerimientos anteriores, no se ha recibido respuesta alguna.

**XV. Solicitud de información al Representante Legal del Grupo Restaurante Acquarellos, S.A. de C.V., y/o Restaurante “La Enotk”.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/22414/2015, se solicitó al Representante Legal antes mencionado, comunicara a esta autoridad si el veintiocho de mayo de dos mil quince, en las instalaciones del restaurante “LA ENOTK”, fue realizado un desayuno, supuestamente con fines proselitistas a favor de la campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; que en caso afirmativo indicara el contrato de prestación de servicios realizado, informara los gastos generados, o si bien estos constituyen una aportación en especie. (Fojas 217 -218 del expediente).

b) El veintiséis de octubre de dos mil quince se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento señalado en el inciso anterior, en el cual refiere que no se realizó proselitismo o acto de campaña. (Fojas 234 -277 del expediente).

**XVI. Solicitud de información al Representante Legal del Restaurante “La Cazita” S.A. de C.V.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/22416/2015, se solicitó al Representante Legal antes mencionado, comunicara a esta autoridad si el cinco de mayo de dos mil quince, fue realizado un evento de campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, consistente en un conversatorio “twitter&chelas”; que en caso de ser afirmativo indicara el contrato de prestación de servicios celebrado, que informara los gastos generados o si bien constituyen una aportación en especie. (Fojas 227 -228 del expediente).

b) El veintidós de octubre de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento de mérito, en el cual refiere que no se realizó un evento o acto de campaña a favor de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. (Fojas 231-232 del expediente).

**XVII. Solicitud de información al C. Ricardo Anaya Cortés, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional.**

a) El doce de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22562/2015, se solicitó al presidente del Comité Ejecutivo antes mencionado, comunicara a esta autoridad si los eventos se llevaron a cabo, en caso de ser afirmativo indicara a qué candidatos beneficiaron y en cuál de los informes se reportaron los gastos inherentes a los mismos. (Fojas 278 -286 del expediente).

b) El veintiséis de octubre de dos mil quince, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento realizado mediante oficio INE/UTF/DRN/22562/2015. (Fojas 287-288 del expediente).

**XVIII. Razones y Constancias.**

- El treinta de octubre de dos mil quince, se integró al expediente de mérito, la verificación de los siguientes links de espacios de internet que fueron proporcionados por el quejoso:

<http://xochitlgalvez.blogspot.mx/>  
<http://www.xochitlgalvez.mx/>

- El treinta de octubre de dos mil quince se procedió a realizar la verificación al SIF, donde se advirtió el reporte, dentro del rubro “Gastos de Campaña”, de lo siguiente:
  - ✓ Espectaculares.
  - ✓ Pulseras.
- El dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, se procedió a realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del SAT accesible vía internet con el propósito de verificar y validar los folios de comprobantes fiscales digitales identificados como las facturas números 169 y 170, emitidos por Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V.

#### **XIX. Ampliación del término para resolver.**

a) El doce de enero de dos mil dieciséis, dada la naturaleza de las pruebas ofrecidas y de la investigación que debía realizarse para substanciar adecuadamente el procedimiento que por esta vía se resuelve, el Director de la Unidad Técnica emitió acuerdo por el que se amplió el plazo de noventa días naturales para presentar a este Consejo General el Proyecto de Resolución respectivo. (Foja 853 del expediente).

b) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0454/2016, la Unidad Técnica hizo del conocimiento del Secretario Ejecutivo el acuerdo antes mencionado. (Foja 854 del expediente).

c) El doce de enero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/0455/2016, la Unidad Técnica hizo del conocimiento al Presidente de la Comisión de Fiscalización el acuerdo antes señalado. (Foja 855 del expediente).

#### **XX. Solicitud de información al Representante Legal de la empresa Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/3495/2016, se solicitó al Representante Legal antes mencionado, si el Partido y candidata denunciados solicitaron servicios de organización y logística de eventos durante la campaña correspondiente. (Fojas 952-953 del expediente).

b) Del requerimiento anterior, no se ha recibido respuesta alguna.

c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/11804/2016, se solicitó nuevamente al Representante Legal antes citado, indicara si prestó servicios de organización y logística en los eventos de campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. (Fojas 963-964 del expediente).

d) El veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento del inciso anterior, en el cual refiere que efectivamente se solicitó el servicio de organización y logística para los eventos de campaña a favor de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz. (Fojas 969-987 del expediente).

e) Mediante oficio INE/UTF/DRN/19487/2016, se solicitó al Representante Legal antes citado, aclarara el motivo por el cual la factura número 169 que emitió a favor del C. Edmundo José María Cruz Coteró se encuentra cancelada en el Sistema Integral de Comprobantes Fiscales del Servicio de Administración Tributaria con fecha treinta de junio de dos mil quince, e informara si la factura número 169 fue sustituida por alguna otra factura. (Fojas 1001-1002 del expediente).

f) El dos de septiembre de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento, en el cual refiere que la factura fue cancelada en virtud de que fue generada por error y fue sustituida por la factura 170. (Fojas 1009-1019 del expediente).

#### **XXI. Solicitud de información al C. Edmundo José Cruz Coteró.**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/19488/2016, se solicitó informara si aportó a la campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, los servicios de organización y logística de eventos, que ampara la factura número 169 emitida a su favor, e indicara la relación que tiene con el PAN, así como las aclaraciones que a su derecho convinieran. (Fojas 991 -996 del expediente).

b) El treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento, el cual refiere que realizó una aportación a la campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; asimismo manifestó que es afiliado del PAN. (Fojas 997 -1000 del expediente).



c) Mediante oficio INE/UTF/DRN/22767/2016, se solicitó informara el motivo por el cual se encuentra cancelada la factura 169, emitida a su nombre, e indicara si la misma fue sustituida. (Fojas 1042 -1047 del expediente).

d) El once de noviembre de dos mil dieciséis, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento realizado, en la cual refirió que no recuerda el motivo por el cual se canceló la factura 169. (Fojas 1048 -1050 del expediente).

#### **XXII. Solicitud de información a la C. Lucia Juárez Mejía**

a) Mediante oficio INE/UTF/DRN/099/2017, se solicitó informara el motivo por el cual se encuentra cancelada la factura 170, emitida a su nombre, e indicara si la misma fue sustituida. (Fojas 1051 -1056 del expediente).

b) El veinte de enero de dos mil diecisiete, se recibió en oficialía de partes de la Unidad Técnica, respuesta al requerimiento, en la cual refirió que los servicios de organización y logística, fue una donación a los candidatos del PAN y que la misma fue cancelada por convenir a sus intereses, que la misma fue sustituida por una nota de remisión. (Fojas 1057 -1059 del expediente).

#### **XXIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría.**

a) Mediante los oficios INE/UTF/DRN/177/2017, INE/UTF/DRN/223/2017 e INE/UTF/DRN/597/2017, se solicitó informara los eventos que ampara la factura 170 e indicara si la misma fue sustituida, así como los candidatos beneficiados de la misma. (Fojas 1060 -1063 del expediente).

b) De los requerimientos anteriores, a la fecha de presentación de la presente Resolución, no se ha recibido respuesta alguna.

#### **XXIV. Solicitud de Diligencia a JLE-DF.**

a) El dieciséis de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22884/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, realizara diligencia a efecto de notificar al PAN, el inicio del procedimiento de queja. (Fojas 153-164 del expediente).

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

b) El veintiocho de septiembre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/21928/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, notificara al PAN una solicitud de información. (Fojas 166-178 del expediente).

c) El doce de octubre de dos mil quince, mediante oficio INE/UTF/DRN/22417/2015, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, notificara a los representantes legales de los restaurantes denominados “LA ENOTK” y “LA CAZITA”, sendas solicitudes de información. (Fojas 215-230 del expediente).

d) El diez de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/2793/2016, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, notificara al PAN una solicitud de información. (Fojas 856-863 del expediente).

e) El veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, mediante oficio INE/UTF/DRN/3496/2016, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, notificara al Representante Legal de Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V., una solicitud de información. (Fojas 951-962 del expediente).

f) El veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, mediante Acuerdo se solicitó al Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, realizara diligencia con la finalidad de llevar a cabo un cuestionario relacionado con los hechos que se denuncian (en específico, casa de campaña).

g) El dos de marzo de dos mil dieciocho, mediante acta circunstanciada, el Vocal Ejecutivo de la JLE-DF, dio cumplimiento al Acuerdo antes mencionado, respecto al cuestionario relacionado con los hechos denunciados.

**XXV. Cierre de Instrucción.** El trece de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

**XXVI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en su Décima Primera Sesión Extraordinaria de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, por votación unánime de las y los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Benito Nacif Hernández, Licenciada Pamela San

Martín Ríos y Valles, y del Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización, Doctor Ciro Murayama Rendón.

### **C O N S I D E R A N D O**

1. Que con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios en materia de origen, manejo y destino de los recursos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las Resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-585/2015**.

3. Que el veintitrés de septiembre de dos mil quince, la Sala Superior resolvió revocar la Resolución **INE/CG762/2015**, dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para los efectos precisados en esa ejecutoria, a los que se da cumplimiento mediante la presente Resolución.

4. Que el Considerando CUARTO **numeral I** de la sentencia de mérito, relativo a los efectos de la sentencia recaída al expediente citado, la Sala Superior determinó lo siguiente:

“(…)

**CUARTO.- Efectos de la sentencia.**

(…)

**I. Efectos de la resolución**

*En virtud de lo expuesto esta Sala Superior considera que los agravios hechos valer por Jorge Luis Zarate Alarcón, que han sido expuestos previamente son fundados y suficientes para revocar la Resolución*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

*impugnada INE/CG762/2015 emitida el doce de agosto del dos mil quince por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, respecto del procedimiento de queja en materia de fiscalización seguido en contra del Partido de Acción Nacional y Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, otrora candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, dentro del expediente INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF.*

*En consecuencia el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debe avocarse a realizar el estudio particularizado de los hechos que el recurrente denuncia como infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen y aplicación de los recursos, relativos al rebase de topes de campaña en que incurrió la entonces candidata del Partido de Acción Nacional a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, Distrito Federal, Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz.*

*La autoridad responsable deberá resolver la queja en materia de fiscalización seguida en contra del Partido de Acción Nacional y Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz, a la brevedad posible.*

*(...)"*

Tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Superior, se emite la presente Resolución de acatamiento al **SUP-RAP-585/2015**.

**5.** Que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ordenar el estudio de los hechos denunciados por el recurrente relativos al presunto rebase del tope de gastos de campaña en que incurrió la entonces candidata a Jefa Delegacional por el Partido Acción Nacional, la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, y resolver la queja respectiva, este Consejo General emite la resolución dentro del procedimiento de queja identificado con la clave **INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF** en los términos que a continuación se presentan.

**6. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.** Previo al análisis de fondo y por tratarse de una cuestión de orden público toda vez que el artículo 30 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, es necesario proceder a su estudio para determinar la actualización de alguna de ellas.

En ese sentido, el doce de agosto del dos mil quince, en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la Resolución **INE/CG697/2015** mediante la cual se resolvió el procedimiento de queja en

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

materia de fiscalización identificado con la clave **INE/Q-COF-UTF/262/2015/DF y su Acumulado**, instaurado en contra del PAN y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, con motivo del gasto en diversa propaganda electoral que benefició a la campaña de la otrora candidata durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

En la resolución citada se abordaron diversos conceptos de gasto que, a juicio del quejoso, no fueron reportados ante la autoridad fiscalizadora, entre los que se encuentran: propaganda en revista “Pódium Electoral”, evento del 31 de mayo denominado “Frozen, princesas y villanos, una aventura musical congelada”, casa de campaña, producción de spots de radio y televisión, medallones, calcomanías, trípticos, sombrillas, tortilleros, camisas, playeras, mandiles, bolsas, lonas, pendones y bardas.

Así, en su momento, la autoridad electoral determinó declarar infundado el procedimiento de marras a partir de la verificación del reporte de diversos gastos así como la falta de elementos que permitieran generar indicios sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar, de forma que la autoridad pudiera desplegar sus facultades de investigación.<sup>1</sup> En este sentido, la autoridad determinó la existencia del reporte debido respecto de los siguientes conceptos de gasto:

Propaganda Denunciada INE/CG697/2015	No. Factura o Póliza
PLAYERAS	Factura con Folio Fiscal: 544F17de-59cC-483f-ac61-94cc3445b49d
TRÍPTICOS	Factura con Folio Fiscal: 1C9866FC-B349-46C487D63CD2EA69A29B
BOLSAS, PARAGUAS,MANDILES, TORTILLEROS,BOLSAS AZUL	Factura con Folio Fiscal: 71F8BA3E-B9A5-479D-9E30- 5B8AB42CF771C9866FC-B349- 46C487D68CD2769A292
CAMISAS	Factura con Folio Fiscal: A9625804-4DAF-48C5-B19D-07732ª874838
VOLANTE	Factura: FC204278
MEDALLONES	Factura con Folio Fiscal: 05C2D4B4-B901-4641-BB7E-889E7E286C9F

<sup>1</sup> Solamente fueron dos conceptos de gasto los cuales no fue posible generar la línea de investigación al no haberse aportado los elementos mínimos de prueba que permitieran la identificación de tales gastos: Casa de campaña, y producción de spots de radio y televisión.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

<b>Propaganda Denunciada INE/CG697/2015</b>	<b>No. Factura o Póliza</b>
CALCOMANIAS	Factura: AFAD5
REVISTA "PÓDIUM ELECTORAL"	Póliza: 1 Factura con Folio Fiscal: 202051
SPOTS	Póliza: 6
EVENTO "Frozen, princesas y villanos, una aventura musical congelada"	Póliza: 46 Factura con Folio Fiscal: 1792
300 LONAS	Factura con Folio Fiscal: CF112BE0-B48B-4A9F-B07A.FAD9600D452D
100 BARDAS	Factura con Folio Fiscal: F4B9BFE4-5EE6-40E9-B54C-805C8F3F8A59
1 CASA DE CAMPAÑA UBICADA EN GOLFO DE ADÉN N° 20, COLONIA TACUBA, MH.	Póliza: 45

Ahora bien, no pasa desapercibido para esta autoridad electoral el hecho de que en la queja que dio origen al procedimiento identificado con la clave **INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF** que por esta vía se resuelve, se denuncian hechos que son coincidentes respecto de los que fueron materia de la resolución **INE/CG697/2015** al resolverse el procedimiento **INE/Q-COF-UTF/262/2015/DF y su acumulado.**<sup>2</sup> En este orden de ideas, con el objeto de tener mayor claridad, a continuación se muestran los conceptos de gasto ahora denunciados y su coincidencia con aquellos denunciados en el procedimiento **INE/Q-COF-UTF/262/2015/DF y su acumulado**:

<b>PROPAGANDA DENUNCIADA POR EL QUEJOSO.</b>	<b>PROPAGANDA DENUNCIADA MEDIANTE EL INE/CG697/2015</b>
Eventos Políticos, reuniones y mítines.	1 Evento masivo. "Frozen, princesas y villanos-una aventura congelada".
Espectaculares	-----
Lonas y Bardas	Lonas, pendones y bardas
Botarga	-----

<sup>2</sup> Del escrito de queja y las pruebas técnicas que aporta el quejoso se advierte la coincidencia de gastos denunciados con base en las características de los mismos.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

<b>PROPAGANDA DENUNCIADA POR EL QUEJOSO.</b>	<b>PROPAGANDA DENUNCIADA MEDIANTE EL INE/CG697/2015</b>
<b>Publicidad impresa</b> consistente en: Calcomanía, trípticos y micro perforados.	<b>Publicidad impresa</b> consistente en: medallón para automóvil, calcomanía, trípticos y micro perforados
<b>Propaganda utilitaria</b> consistente en: bolsa, <u>chaleco</u> , <u>gorras</u> , mandiles, sombrillas, camisas, playeras, <u>pulseras</u> y tortilleros	<b>Propaganda utilitaria</b> consistente en: bolsas, mandiles, sombrillas, camisas, playeras, y tortilleros
Casas de campaña  - Golfo Adén N° 20, Col. Tacuba  - <u>Calle Felipe Carrillo Puerto N° 559, Miguel Hidalgo.</u>	Casas de campaña  - Golfo de Adén N° 20, Colonia Tacuba, Delegación Miguel Hidalgo  - Denominada Subcomité "Tlaxpana"
<b>Gastos operativos de campaña</b> consistentes: personal de logística, empleados, transporte, gasolina, secretarios, chofer viáticos y alimentos.	-----
<b>Publicidad en redes sociales:</b> Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus, Instagram y Flickr	-----
<b>Propaganda en Internet</b>	-----
Revista Pódium Electoral	Revista Pódium Electoral
Producción de mensajes en radio y televisión ( <b>Spots</b> )	Producción de mensajes en radio y televisión ( <b>Spots</b> )
Videos producidos en internet	-----

Como se puede observar, algunos de los conceptos ya fueron materia de análisis en el diverso procedimiento **INE/Q-COF-UTF/262/2015/DF y su acumulado**, en tanto que en otros no ha existido pronunciamiento por parte de esta autoridad electoral, los cuales son: **Eventos políticos (exceptuando evento “Frozen princesas y villanos-una aventura congelada”)**, reuniones, mítines, espectaculares, botarga, chaleco, gorras, pulseras, casa de campaña (Calle Felipe Carrillo Puerto), gastos operativos (personal de logística, empleados, transporte, gasolina, secretarios, chofer viáticos y alimentos), publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Instagram y Flickr), propaganda de internet y producción de videos de internet.

Por tal motivo, toda vez que la Resolución **INE/CG697/2015** se encuentra firme por no haber sido recurrida en los términos legalmente establecidos, y a fin de guardar congruencia con las determinaciones que apruebe la autoridad electoral, la presente determinación solo analizará aquellos conceptos denunciados que no han sido materia de estudio, mismos que fueron referidos en el párrafo inmediato anterior.

Por lo anterior, con fundamento en el artículo 30, numeral 1, fracción V del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, el procedimiento de queja resulta **improcedente respecto de los conceptos de gasto analizados mediante la Resolución INE/CG697/2015**, toda vez que los hechos imputados a los sujetos incoados **ya han sido materia de otro procedimiento en materia de fiscalización y dicha resolución aprobada por este Consejo General ha causado estado.**

**7. Estudio de Fondo.** Que una vez analizadas las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo materia del presente asunto.

Al tomar en cuenta lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como el análisis de los documentos y las actuaciones que integran el expediente de mérito, el **fondo** del presente asunto se constriñe en determinar si el Partido Acción Nacional omitió reportar diversos gastos de campaña consistentes en: **Eventos políticos (exceptuando evento “Frozen princesas y villanos-una aventura congelada”), reuniones, mítines, espectaculares, botarga, chaleco, gorras, pulseras, casa de campaña (Calle Felipe Carrillo Puerto), gastos operativos (personal de logística, empleados, transporte, gasolina, secretarios, chofer viáticos y alimentos), publicidad en redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Instagram y Flickr), propaganda de internet y producción de videos de internet;** lo anterior, en beneficio de dicho instituto político y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, otrora candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, D.F., en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014 – 2015.

Bajo la premisa expuesta, en caso de determinarse la existencia de egreso no reportado alguno, deberá sumarse el costo relativo a los montos finales de egresos de la campaña desarrollada, verificando que los mismos se hayan ceñido a los topes aprobados para tales efectos.



Lo anterior, en atención a lo dispuesto por los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

### **Ley General de Partidos Políticos**

#### **Artículo 79.**

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

*(...)*

#### **b) Informe de Campaña:**

*I. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

*(...)*

### **Reglamento de Fiscalización**

#### **Artículo 127.**

#### **Documentación de los egresos**

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*(...)”*

Los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización, imponen a los partidos políticos la obligación de reportar dentro de sus diversos informes el origen y monto de la totalidad de sus ingresos y egresos, acompañando en todo momento la documentación soporte correspondiente, como puede ser la presentación de facturas, estados de cuenta, conciliaciones bancarias, pólizas contables que permitan acreditar de manera fehaciente el origen y destino de los recursos. Todo ello a efecto de que la autoridad electoral cuente con medios de convicción

suficientes que le permitan tener certeza sobre el manejo de los recursos de los entes políticos, que deberá realizarse dentro del margen de las reglas para el debido control de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento.

En este sentido, las disposiciones en comento implican los siguientes supuestos de regulación: 1) la obligación de los partidos políticos de registrar contablemente sus egresos; 2) la obligación de soportar todos los egresos con documentación original a nombre del partido político, con documentación que expida la persona a quien se efectuó el pago; y 3) la obligación a cargo de los partidos de entregar la documentación antes mencionada, la cual deberá contar con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables.

Es así que las hipótesis normativas electorales que se analizan, protegen los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, de su empleo y de su aplicación.

En esta tesitura, el cumplimiento de tales obligaciones permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos realizan en una temporalidad determinada. En otras palabras y en congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, la presentación por parte de los partidos políticos de la documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones es lo que permite comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos en materia de origen y destino de los recursos que establece la normativa electoral, ergo, el cumplimiento de dicha obligación, además de garantizar un régimen de transparencia y rendición de cuentas, con lo cual se establece un control en la naturaleza de sus gastos.

El bien jurídico tutelado por tal disposición es la equidad en la contienda, en tanto se busca inhibir la realización de gastos superiores a los expresamente permitidos por el máximo órgano de dirección en materia electoral, que favorecerían injustamente a algún candidato frente a sus contendientes. Consecuentemente, al catalogar el rebase o exceso de los topes de gastos de campaña como una infracción a la normatividad electoral, el legislador federal estableció un medio para asegurar que todos los candidatos que participen en los comicios puedan posicionarse ante el electorado en las mismas circunstancias, es decir, en condiciones de equidad en la elección.

Sentado lo anterior, es importante señalar las causas que originaron el presente procedimiento sancionador en que se actúa.

Es el caso, que el C. Jorge Luis Zarate Alarcón denunció la omisión de reportar diversos gastos de campaña en beneficio del PAN y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, otrora candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo, D.F., en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015.

El quejoso se duele, que desde el día en que dio inicio las campañas electorales, la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, realizó un conjunto de actividades que generaron erogaciones para la obtención del voto, por lo cual en su concepto ha excedido el tope de gastos de campaña establecido para el cargo en el que contendió, misma que consiste en lo siguiente:

#### **A) Gastos de propaganda**

##### A.1 Eventos políticos, reuniones y mítines

El quejoso describe 25 eventos<sup>3</sup>, que se detallan a continuación:

1. Inauguración de la campaña electoral 21 de abril.
2. Desayuno con vecinos el 1° de mayo.
3. Conversatorio Twitter & Chelas el 5 de mayo.
4. Galería la casita de parque Lincoln el 13 de mayo.
5. Presentación plan Tacuba el 13 de mayo.
6. Comida Sierra Tarahumara el 16 de mayo.
7. Evento en Loma Hermosa el 16 de mayo.
8. Comida con profesores el 17 de mayo.
9. Evento en la colonia Cuauhtémoc Pensil el 17 de mayo.
10. Desayuno con comerciantes el 18 de mayo.
11. Presentación propuesta Tacubaya el 20 de mayo.
12. Recorrido Vecinal en Tacuba el 21 de mayo.
13. Unidad Hermanos Aquiles Serdán el 23 de mayo.
14. Museo Soumaya el 23 de mayo.
15. Alameda de Tacubaya el 23 de mayo.

---

<sup>3</sup> Es importante precisar que en la sentencia identificada con la clave **SUP-RAP-585/2015**, el órgano judicial hizo referencia a los eventos señalados como “Show de princesas y villanos”, los cuales se incluyen en aquellos conceptos de gasto que no forman parte del presente estudio de fondo de acuerdo a lo razonado en el Considerando anterior, sin embargo se mencionan aquí a fin de no excluirlos de la lista hecha por la Sala Superior.

16. Caravana por la Miguel Hidalgo el 24 de mayo.
17. Reunión vecinal en Sierra Paracaima el 27 de mayo.
18. Reunión Horizonte el 27 de mayo.
19. Evento adultos mayores el 28 de mayo.
20. Desayuno restaurante “La Enotk” el 28 de mayo.
21. Plazuela de San Joaquín el 29 de mayo.
22. Reuniones vecinales en Polanco 30 de mayo.
23. Frozen en Laguna de Tamiahuac el 31 de mayo.
24. Frozen en la Colonia Daniel Garza el 31 de mayo.
- Evento de show de princesas y villanos en la colonia Daniel Garza Miguel Hidalgo.
25. Evento de Cierre de Campaña.

#### A.2. Espectaculares en la vía pública

En la queja se denuncia diversa propaganda colocada en la demarcación en Miguel Hidalgo, desde el inicio hasta el final de la campaña, en específico refiere la exhibición de tres espectaculares en donde presuntamente se promueve la imagen de la entonces candidata.

#### A.3 Impresos

En el escrito se afirma que se verificó la difusión y colocación de distintos impresos que formaron parte de la campaña de la candidata denunciada y que consistieron en calcomanías, microperforados y trípticos o “flyers”.

#### A.4 Utilitarios Textiles

Se refiere también que destacó por el volumen y la magnitud el uso de textiles de la entonces candidata para ser repartidos entre la población de la demarcación delegacional, los cuales consistieron en: bolsas, chalecos, gorras, mandiles, paraguas, camisas, playeras, pulseras y tortilleros.

### **B) Gastos operativos de campaña**

#### B.1 Casas de campaña

El quejoso refiere la ocupación, por más de dos meses, de casas de campaña ubicadas en Golfo de Adén N° 20, Colonia Tacuba y en Calle Felipe Carrillo Puerto N° 559, ambos en la Delegación Miguel Hidalgo del entonces Distrito Federal.

## **B.2 Gastos operativos.**

En el escrito de queja se señala que, derivado de la realización de eventos, presuntamente fueron erogados recursos bajo los rubros de: personal de logística, transporte, gasolina, personal para repartir propaganda, empleados, choferes, secretarias, personal de limpieza, viáticos y alimentos.

## **C) Gastos de propaganda en diarios, revistas y otros.**

### **C.1 Gastos en propaganda en publicidad de redes sociales**

El quejoso argumenta que se realizó gasto en publicidad en redes sociales e internet durante la campaña electoral de la otrora candidata a Jefa Delegacional, en sitios tales como Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Instagram y Flickr.

### **C.2 Gastos de propaganda en internet**

En el escrito de queja se aduce la erogación por concepto de espacios en internet, las cuales refiere son:

- <http://xochitlgalvez.blogspot.mx/>
- <http://www.xochitlgalvez.mx/>

## **D) Gastos de producción de los mensajes para radio y televisión.**

### **D.1 Radio y Televisión**

Según el quejoso, durante el transcurso de la campaña denunciada, fueron detectados un número importante de promocionales en radio y televisión con excelentes producciones y calidad de materiales, los cuales fueron empelados como estrategia de campaña.

### **D.2 Videos producidos en internet**

El quejosos refiere que se realizó un gasto por diversos videos que fueron producidos por profesionales e integrados a sus portales de internet. Para acreditar su dicho exhibió como medios probatorios, las pruebas técnicas consistentes en un medio magnético (CD) que contiene fotografías de los videos denunciados.

Ahora bien, ante la obscuridad del escrito de queja en relación a la cantidad de gastos denunciados, de análisis al medio magnético (CD), se obtuvo lo que se enlista a continuación:

- 27 fotografías de videos, con fechas de producción los días 25 y 28 de abril; 13, 15, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 30 de mayo; 1, 2 y 3 de junio del dos mil quince.
- 41 fotografías de eventos.
- 3 fotografías de espectaculares
- 1 fotografía de una botarga
- 2 fotografías de calcomanías
- 1 fotografía de un micro perforado
- 4 fotografías de trípticos
- 2 fotografías de bolsas
- 1 fotografía de un chaleco
- 1 fotografía de gorras
- 1 fotografía de mandiles
- 1 fotografía de paraguas
- 2 fotografías de playeras
- 1 fotografía de camisa
- 1 fotografía de pulseras
- 1 fotografía de tortillero
- 2 fotografías de una revista

Las pruebas que se acompañaron a la queja para efectos de acreditar la existencia de diversos gastos de propaganda electoral durante la campaña, consisten en pruebas técnicas de la especie de fotografías; además, dentro del escrito de queja se observan 65 fotografías de eventos, de propaganda utilitaria, entre otros; todas ellas generan indicios de la existencia de la propaganda denunciada por el quejoso.

Es importante destacar que dichas fotografías tienen el carácter de pruebas técnicas, las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por sí solas, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF)

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecto, pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de interés. Por tal razón, su sola presentación no permite dar fe de que los hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio se encuentra subsumido a la vinculación de la totalidad de las pruebas que se considere y del análisis de los hechos que se pretende acreditar a través de las mismas.

En ese sentido, al resolver el **SUP-RAP-585/2015**, la Sala Superior determinó que, si bien es cierto en algunos supuestos señalados en el escrito de queja “*Se evidencia en forma notoria la obscuridad e imprecisión con la que se expusieron las posibles irregularidades denunciadas, y con ello la imposibilidad de realizar un estudio pormenorizado, por la falta de elementos para obtener el desahogo de las diligencias necesarias como parte de una investigación administrativa*”, también es cierto que, apuntó la Sala Superior, en algunos casos enunciados en el escrito de queja, en particular en el rubro **A) GASTOS DE PROPAGANDA sub-rubro A.1 Eventos políticos, reuniones y mítines**, se cumplió con la descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las que se precisaron algunos eventos políticos, motivo por el cual se ordenó realizar el estudio particularizado de los hechos que se denuncian como infracciones a la normatividad electoral.

En este orden de ideas, respecto del rubro de eventos políticos, reuniones y mítines, la Sala Superior procedió a enlistar detalladamente los supuestos en los cuales la autoridad administrativa debía desplegar la facultad investigadora y por ende ordenar el desahogo de diligencias, a fin de que procediera conforme a derecho:

RELACIONADA EN EL ESCRITO DE QUEJA COMO	CIRCUNSTANCIA A DE TIEMPO	CIRCUNSTANCIA DE MODO	CIRCUNSTANCIA, LUGAR Y PRUEBAS APORTADAS
A.1.3.	5-MAYO.2015 21:30 PM	CONVERSATORIO TWITTER&CHELASEL	RESTAURANTE LA CAZITA FERROCARRIL DE CUERNAVACA 415 LOMAS DE CHAPULTEPEC DOS FOTOGRAFÍAS
A.1.4.	13-may-15	EVENTO PROSELITISTA	GALERIA LA CASITA PARQUE LINCOLN COLONIA POLANCO UNA FOTOGRAFÍA

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

RELACIONADA EN EL ESCRITO DE QUEJA COMO	CIRCUNSTANCIA A DE TIEMPO	CIRCUNSTANCIA DE MODO	CIRCUNSTANCIA, LUGAR Y PRUEBAS APORTADAS
A.1.14.	23-may-15	EVENTO PROSELITISTA	MUSEO MIGUEL DE CERVANTES 303 COLONIA CINCO FOTOGRAFÍAS SOUMAYA SAAVEDRA GRANADA
A.1.16	24-may-15	CARAVANA POR LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	CALZADA México TRES FOTOGRAFÍAS TACUBA
A.1.18	27-MAYO-2015 7:00 PM	EVENTO PROSELITISTA	HORIZONTE AVENIDA MOLLIER 451, COLONIA POLANCO UNA FOTOGRAFÍA
A1.21.	29-may-15	EVENTO PROSELITISTA	PLAZA SAN MIGUEL UNA FOTOGRAFÍA JOAQUIN HIDALGO
A.1.20.	28-may-15	DESAYUNO	RESTAURANTE LA AVENIDA PRESIDENTE NUMERO 298 POLANCO ENOTK MASARYK
A.1.23	31/05/2015 16:00	SHOW DE PRINCESAS Y VILLANOS ACTO DE CAMPAÑA	RESTAURANTE LA EXPLANADA CALLE LAGUNA DE TAMIAHUAC ENTRE LAGO XOCHIMILCO Y SALECIANO COLONIA ANAHUAC CUATRO FOTOGRAFÍAS ENOTK
A.1.24.	31-may-15	SHOW DE PRINCESAS Y VILLANOS ACTO DE CAMPAÑA	EXPLANADA COLONIA DANIEL DOS FOTOGRAFÍAS GARZA

De tal suerte, del universo de gastos denunciados por el quejoso y en atención a lo razonado en el considerando anterior, se especifican aquellos que serán materia de estudio y análisis de la autoridad electoral en la presente determinación, como se detalla enseguida:

- 9 Eventos.
- 3 espectaculares.
- Propaganda utilitaria (Botarga, chaleco, gorras y pulseras).
- Casa de campaña.
- Gastos operativos de campaña (personal de logística, empleados, transporte, gasolina, secretarios, chofer, viáticos y alimentos).
- Redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube; Google Plus, Instagram y Flickr).



- 2 páginas de internet.
- 27 videos producidos en internet.

De tal suerte, con vistas a garantizar el principio de exhaustividad y allegarse de elementos que acreditaran la veracidad de los hechos, la autoridad fiscalizadora procedió a realizar diligencias consistentes en diversas solicitudes de información. Asimismo, la línea de investigación se orientó a la consulta del SIF, a fin de conocer si los gastos denunciados fueron reportados en el marco de la presentación del informe de campaña correspondiente.

Con motivo de las diligencias indagatorias, se solicitó al PAN como a la otrora candidata denunciada, información y documentación comprobatoria relativa a los gastos de campaña antes señalados, a efecto de que informara si fueron debidamente reportados.

En ese sentido, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior, esta autoridad fiscalizadora deberá determinar si de la investigación realizada con base en los elementos probatorios exhibidos por el quejoso, así como de los elementos que fueron resultado de la investigación por parte de esta autoridad electoral, se acreditan los hechos denunciados en su escrito de queja.

En esta tesitura, es necesario establecer el orden metodológico de la sustanciación a partir del cual será posible determinar si el partido incoado cumplió o no con lo previsto en la normatividad electoral respecto del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados para promover la campaña electoral de la otrora candidata denunciada. Para tal efecto, se propone la división del presente estudio de fondo en los siguientes cuatro apartados conforme a lo siguiente:

- A. Eventos políticos, reuniones y mítines**
- B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.**
- C. Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos probatorios idóneos.**
- D. Análisis del presunto rebase de tope de gastos de campaña.**

Así, a fin de llevar a cabo un análisis sistemático y exhaustivo que permita exponer de forma ordenada los elementos analizados por este Consejo General de acuerdo a lo ordenado por la Sala Superior, se procede al desarrollo metodológico arriba descrito.

### **A. Eventos políticos, reuniones y mítines**

Del caudal probatorio que tuvo a la vista esta autoridad, y a con el objeto de una adecuada valoración del mismo, se debe realizar una consideración de los hechos denunciados a la luz de las pruebas que, de manera adminiculada, acreditan o desvirtúan las conductas involucradas.

Cabe recordar que la Sala Superior determinó que **en algunos de los casos**, en específico de aquellos conceptos de gasto bajo el rubro de **“Eventos políticos, reuniones y mítines”**, los hechos denunciados cumplían con la descripción clara de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que permitieran el despliegue de una línea de investigación a cargo de esta autoridad. Al respecto, el órgano judicial enlistó de forma detallada los eventos que cumplían con los elementos mínimos resultando un total de nueve eventos denunciados por el quejoso.

Respecto de estos nueve eventos, se tiene que el quejoso aportó diversas pruebas consistentes en fotografías, tal y como se detalla a continuación:

N°	N° EN LA QUEJA	FECHA LUGAR	HECHOS DENUNCIADO POR EL QUEJOSO	PRUEBAS APORTADAS
1	A.1.3.	5-mayo-2015  CONVERSATORIO TWITTER&CHELASEL	Invitación abierta para que la acompañaran a un “Conversatorio” donde se sirvieron alimentos y bebidas, por lo menos cerveza. La cita fue en un restaurante de nombre “La Cazita” en la calle ferrocarril de Cuernavaca #45, en las Lomas de Chapultepec de esta ciudad.	2 Fotografías: 1. Es la invitación al conversatorio, anuncia el tema, el lugar, fecha y hora del mismo 2. Se aprecia a la entonces candidata en un lugar con aproximadamente cincuenta persona, en el escritorio tienen cubiertos.
2	A.1.4.	13-de-mayo-2015  GALERIA LA CASITA PARQUE LINCOLN	Evento proselitista en un lugar conocido como “Galería la Casita”, el cual se encuentra ubicado en el Parque Lincoln en la Colonia Polanco.	1 Fotografía: 1. Un salón donde se observan aproximadamente veinte personas y la otrora candidata hablando por micrófono.
3	A.1.14.	23-mayo-2015  MUSEO SOUMAYA	Según la página de Facebook de la entonces candidata se llevó a cabo un evento en las inmediaciones del Museo Soumaya que se encuentra en la calle de Miguel de Cervantes Saavedra 303, Colonia Granada en Ciudad de México, D.F.	2 Fotografías: 1. Aproximadamente veinte personas entre ellas, la otrora candidata, los señores Gustavo Madero Muñoz, Santiago Creel y Obdulio Ávila; se observan banderas con el logo del PAN y cinco pendones donde aparece la otrora candidata denunciada. 2. Aproximadamente diez personas entre ellas la otrora candidata, se observan diversas playeras, pendones, gorras y banderas.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

N°	N° EN LA QUEJA	FECHA LUGAR	HECHOS DENUNCIADO POR EL QUEJOSO	PRUEBAS APORTADAS
4	A.1.16	24-may-15 CARAVANA POR LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO	Se llevó a cabo una caravana con automóviles y motos a favor de los candidatos de Acción Nacional en la calzada México Tacuba, la cual partió según invitación que se produce en el estacionamiento de la Comercial Mexicana de dicha avenida.	3 Fotografías: 1. Invitación a apoyar a los candidatos del PAN en la caravana por Miguel Hidalgo, señalan lugar, fecha y hora. 2. Aproximadamente veinte personas entre ellas la otrora candidata denunciada montando una motocicleta, una lona, banderas y camisas del PAN. 3. Aproximadamente cuarenta personas entre ellas la otrora candidata, misma que utiliza un micrófono, nueve banderas y cinco playeras.
5	A.1.18	27-MAYO-2015 REUNIÓN HORIZONTE	Según la propia página de Facebook de la entonces candidata, se llevó a cabo una reunión con la entonces candidata a Delegada por Miguel Hidalgo en Avenida Molier 451 en Polanco, el cual se presume es un recinto cerrado que lleva por nombre "Horizonte"	1 Fotografía: 1. Se advierte invitación a la presentación de las propuestas de la entonces candidata por el PAN para la delegación Miguel Hidalgo, se encuentra la dirección, la fecha, hora, y tres links de páginas recomendadas previas a la reunión.
6	A.1.21.	29-may-15 PLAZA SAN JOAQUIN	Se llevó a cabo un evento con los vecinos de la Plaza de San Joaquín en la Delegación Miguel Hidalgo. A dicho evento concurrió un nutrido contingente de gente (por lo menos 300), quienes fueron albergados, de acuerdo con la fotografía que se acompaña en una carpa, con sillas, audio, propaganda diversa, inflables, entre ellos.	1 Fotografía: 1. Aproximadamente cincuenta personas, se advierten dos lonas y una bolsa.
7	A.1.20.	28-may-15 DESAYUNO RESTAURANTE LA ENOTK	Se llevó a cabo un desayuno en un exclusivo restaurante de la Zona de Polanco, de nombre "LA ENOTK" el cual se encuentra ubicado en Avenida Presidente Masaryk 298, Ciudad de México, D.F.	1 Fotografía: 1. Aproximadamente diez mujeres en un restaurante entre ellas la otrora candidata denunciada, saludando a una asistente, se advierte alimentos.
8	A.1.23	31-05-2015 16:00 FROZEN EN LAGUNA DE TAMIAHUAC	Se llevó a cabo un show de princesas y villanos como parte de un acto de campaña de la entonces candidata Xóchitl Gálvez. El evento tuvo lugar en la Colonia Anáhuac en una explanada en la calle Laguna de Tamiahuac.	4 Fotografías: 1. Se advierte la invitación al evento llamado "Frozen Princesas y Villanos" la imagen de la entonces candidata denunciada, el lugar, la fecha y el día del evento. 2. Se advierte una carpa con aproximadamente veinte personas, un templete donde se encuentra la candidata y el elenco del evento, micrófono, dos pendones, personal del staff. 3. Se advierte una carpa, un pendón, un templete donde se observa la otrora candidata denunciada y personas del elenco. 4. Aproximadamente cincuenta personas sentadas, una carpa, un templete, sonido y personal del staff.
9	A.1.24.	31-may-15 FROZEN EN LA COLONIA DANIEL GARZA	Se llevó a cabo el mismo evento descrito en el numeral anterior, pero esta vez se celebró en la Colonia Daniel Garza dentro de la Delegación Miguel Hidalgo.	2 Fotografías: 1. Aproximadamente cien personas, una carpa, un templete, sonido y la otrora candidata en el templete con un micrófono. 2. Se advierte una carpa, sonido y nueve personas del elenco y la candidata denunciada en un templete.

De los elementos probatorios consistentes en fotografías, así como de la precisión de las fechas en que presuntamente se llevaron a cabo los eventos así como las direcciones, se puede colegir que se advierten indicios de la existencia de diversos eventos, que a decir del quejoso, no fueron reportados en el informe de campaña correspondiente. Por tal motivo, esta autoridad fiscalizadora analizó la información que obra en el expediente de mérito y se determinó lo que a continuación se precisa:

➤ **Eventos reportados**

En ese sentido, la autoridad fiscalizadora solicitó información al PAN y a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, respecto de la existencia y reporte de los nueve eventos; de la respuesta de los sujetos incoados, se obtuvo que los eventos referenciados con los números 2, 3, 5, 6, 8 y 9 del cuadro anterior<sup>5</sup>, se llevaron a cabo en las fechas y los lugares mencionados, acreditando su reporte con la **póliza 46**, cuyo registro en el SIF fue con fecha veintiuno de junio de dos mil quince, amparada con la factura 170, que emitió Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V., a favor de Lucía Juárez Mejía.

De lo anterior, los sujetos incoados, para acreditar sus manifestaciones presentaron la documentación siguiente:

- Copia simple de factura expedida por Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V. con número 170 a favor de Lucía Juárez Mejía.
- Copia simple de inscripción en el R.F.C.
- Copia simple de credencial para votar a nombre de Lucía Juárez Mejía.
- Contrato de donación celebrado por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y C. Lucía Juárez Mejía, por concepto de servicios de organización y logística de eventos.
- Recibo de aportación de militante a la campaña.
- Copia simple de póliza número 46, con fecha de registro 21 junio de dos mil quince y periodo 2.
- Acuse de fecha veintinueve de julio de dos mil quince.

---

<sup>5</sup> Eventos identificados como: A.1.4 Galería la casita de parque Lincoln el 13 de mayo; A.1.14 Museo Soumaya el 23 de mayo; A.1.18 Reunión Horizonte el 27 de mayo; A.1.21 Plazuela de San Joaquín el 29 de mayo; A.1.23 Frozen en Laguna de Tamiahuac el 31 de mayo; y A.1.24 Frozen en la Colonia Daniel Garza el 31 de mayo.

Las documentales privadas que antes se enuncian, serán analizadas y valoradas, en términos de los artículos 15, párrafo 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, mismas que tienen valor probatorio indiciario respecto de lo que en ellas se refiere, al ser documentales proporcionadas por las partes que no se encuentran amparadas por la validación de un fedatario público ni han sido expedidas por servidores públicos en ejercicio de sus facultades, por lo que su valor probatorio dependerá de todos aquellos elementos que puedan fortalecerlas o que, de manera vinculada, puedan acreditar un hecho puesto que a estas, por sí solas, no se les puede conceder valor probatorio pleno.

En ese tenor, el reporte de los eventos con la póliza 46 corresponde a una aportación en especie de una militante del PAN, por lo que se consideró oportuno indagar los servicios respectivos con el proveedor y con la aportante.

En ese sentido, se solicitó a la empresa Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V., indicara si había prestado los servicios de organización y logística de los eventos realizados durante la campaña de C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, así como expusiera lo que a su derecho conviniera, ofreciera y exhibiera las pruebas que respaldaran sus afirmaciones.

Como resultado de la diligencia antes mencionada, la empresa contestó que prestó los servicios de organización y logística para la campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, los cuales consistieron en la instalación de carpas, sillas plegables y algunos servicios de box lunch; los servicios contratados comprendieron del 20 de abril de 2015 al 03 de junio de 2015, y que fueron contratados por el C. Edmundo José María Cruz Coteró, amparado con la factura 169.

A partir del análisis realizado a la respuesta de Grupo Comercial DIXA, S.A. de C.V., se detectó una inconsistencia con lo reportado por los sujetos obligados, toda vez que los eventos con números 2, 3, 5, 6, 8 y 9<sup>6</sup>, que se encuentran reportados mediante la póliza 46, presuntamente los amparan dos facturas: la número 169, a nombre Edmundo José María Cruz Coteró y la número 170, a nombre de Lucía Juárez Mejía; esto es, los eventos se amparan con dos facturas distintas, a favor de personas diferentes, cuya similitud es la descripción del servicio prestado por el proveedor.

---

<sup>6</sup> Enlistados por la Sala Superior en el cuadro que antecede.

Al respecto, Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V., manifestó que la factura 169, fue cancelada, en virtud de que se generó por error, motivo por el cual fue cancelada en la misma fecha de su generación. Agregó, además, que la operación quedó amparada con la factura 170 a nombre de Lucia Juárez Mejía, persona que pagó el servicio. Cabe mencionar que el representante legal de la empresa también refirió que, a solicitud expresa de la C. Lucia Juárez Mejía, el treinta de junio de dos mil quince, la factura 170 fue cancelada y sustituida por una nota de remisión que adjunta a su escrito, la cual quedó registrada contablemente en la empresa que representa.

Por su parte, el PAN refirió que la factura que ampara los eventos, corresponde al folio 170, expedida por Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V., a favor de la C. Lucia Juárez Mejía; en cuanto a la factura con folio 169, menciona que su partido no tenía conocimiento de la expedición de la misma, y que revisando las facturas, éstas coinciden en descripción en el servicio otorgado, lo que hace presumir un error no imputable a su representado.

Adicionalmente el Partido indica que desconoce la razón de la cancelación de la factura 170, motivo por el cual no notificó a la autoridad lo correspondiente, ello lo robustece el hecho de que la cancelación se realizó el treinta de junio de dos mil quince, y la factura fue reportada durante los quince días que estuvo vigente, es decir, se registró en el SIF el veintiuno de junio de dos mil quince, cuando la factura se encontraba vigente.

En ese orden de ideas, la aportante Lucia Juárez Mejía, manifestó que los servicios de organización y logística de eventos, efectivamente fueron solicitados por ella con la empresa Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V., y que posteriormente realizó una donación a diversos candidatos a cargos de representación popular del PAN; asimismo refiere que fue su petición al proveedor solicitar cancelar dicha factura, por así convenir a sus intereses y que a su vez fue entregada una nota de remisión.

Dicho lo anterior, de la vinculación a las probanzas aportadas y lo manifestado por las partes en el procedimiento de mérito, esta autoridad concluye que en relación a los eventos números 2, 3, 5, 6, 8 y 9, lo siguiente:

- ✓ Se encuentran debidamente reportados en el SIF, mediante póliza 46, en virtud de que se realizó una aportación en especie de una militante, la cual esta soportada con la documentación comprobatoria correspondiente.

- ✓ Que si bien es cierto que la factura 170 a favor de Lucia Juárez Mejía, se encuentra cancelada con fecha treinta de junio de dos mil quince, la misma fue registrada en el SIF el veintiuno de junio de dos mil quince, cuando se encontraba vigente, aunado a que el partido desconoce la razón de la cancelación, por lo que no informa dicha cancelación a la autoridad fiscalizadora.
- ✓ Grupo Comercial Dixa, S.A. de C.V. y la C. Lucia Juárez Mejía, reconocen la contratación y el pago del servicio de organización y logística de eventos para la campaña electoral de la candidata denunciada.
- ✓ Que el proveedor y la aportante, puntualizaron los servicio contratados, los cuales coinciden con los denunciados, ya que fueron prestado los días 5, 13, 23, 27, 29, y 31 de mayo de dos mil quince<sup>7</sup>.

➤ **Evento “Conversatorio Twitter & Chelas” de 5 de mayo.**

De las diligencias realizadas a los sujetos obligados, refieren que el evento denominado “Conversatorio Twitter&Chelas”, fue un evento de campaña que se realizó vía internet aprovechando las redes sociales y que dicho evento no generó ningún costo.

De la respuesta obtenida de los sujetos obligados, así como de la fotografía aportada como elemento probatorio, no se desprendía efectivamente la supuesta celebración del evento, debido a que se advertía una invitación para que el día 5 de mayo de dos mil quince, estuvieran en un “Conversatorio Twitter&chelas” en el Restaurante La Cazita, por lo que se formuló una de solicitud información al representante legal del restaurante mencionado.

En ese orden de ideas, el representante legal del Restaurante la Cazita, S.A. de C.V., informó que en ese establecimiento no se realizó acto o evento alguno de campaña a favor de la otrora candidata denunciada, aclarando que se ha presentado en diversas ocasiones la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz con diferentes acompañantes, en calidad de comensal habitual, liquidando su consumo como cualquier cliente.

---

<sup>7</sup> A.1.4 Galería la casita de parque Lincoln el 13 de mayo; A.1.14 Museo Soumaya el 23 de mayo; A.1.18 Reunión Horizonte el 27 de mayo; A.1.21 Plazuela de San Joaquín el 29 de mayo; A.1.23 Frozen en Laguna de Tamiahua el 31 de mayo; y A.1.24 Frozen en la Colonia Daniel Garza el 31 de mayo.

Derivado de lo anterior, de lo observado en las probanzas, esto es, de las pruebas técnicas consistentes en fotografías, una de las cuales se trata de una captura de pantalla de un diseño de imagen relativo a la invitación al conversatorio, se advierte un lugar cerrado, con aproximadamente cincuenta personas, en donde se observa tres mesas y algunos platos sobre ellas, sin que se observe propaganda alusiva a la campaña denunciada e incluso una total identificación de la candidata denunciada.

Cabe reiterar que dichas fotografías tienen el carácter de pruebas técnicas, las cuales solo generan indicios de la existencia de lo que se advierte en ellas y son insuficientes, por sí solas, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014<sup>8</sup>.

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecto, pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de interés. Por tal razón, su sola presentación no permite dar fe de que los hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere.

Respecto al evento “Conversatorio Twitter&Chelas”, tomando en consideración la invitación al conversatorio, sumado lo argumentado por los sujetos incoados y el representante legal del Restaurante “La Cazita”, se concluye:

- ✓ Que el evento fue convocado vía internet aprovechando las redes sociales.
- ✓ Que no generó costo alguno.
- ✓ Que de las fotografías, donde se advierten personas en un lugar cerrado, al ser pruebas técnicas son susceptibles de ser manipuladas, por lo que su valor probatorio se ve subsumido a administrar con otros elementos de prueba.

---

<sup>8</sup> PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF)



- ✓ Que de las probanzas únicamente se advierte una cantidad imprecisa de personas reunidas, en donde no se observa propaganda electoral alusiva a la candidata denunciada o que dichas fotografías correspondan al evento denunciado.

➤ **Evento “Caravana por la Miguel Hidalgo” de 24 de mayo.**

Respecto del evento denominado “Caravana por la Delegación Miguel Hidalgo”, los sujetos obligados refieren que fue celebrado por el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en coordinación con el Comité Directivo Regional y el Comité Directivo Delegacional; motivo por el cual se afirma que no se realizó ninguna erogación, ya que los asistentes eran simpatizantes del Partido.

A fin de agotar el principio de exhaustividad, se solicitó información al Comité Estatal Nacional del PAN para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera.

En ese tenor, de la repuesta obtenida por el CEN del PAN, afirma que la “Caravana por la Delegación Miguel Hidalgo”, se organizó a nivel nacional y que se realizó con la finalidad de beneficiar a todos los candidatos del PAN, confirmando que el evento de mérito no generó gasto alguno ya que los asistentes eran simpatizantes del partido político y/o amigos de los candidatos, no solamente de la Delegación Miguel Hidalgo, sino de todo el Distrito Federal.

En relación al evento denominado “Caravana por la Delegación Miguel Hidalgo”, consiste en un recorrido por las diversas calles de la Delegación Miguel Hidalgo, en favor de diversos candidatos, se desprende que de las diligencias lo siguiente:

- ✓ Que el mismo no generó gasto alguno.
- ✓ Que el evento consistió en una caravana, es decir un recorrido en las calles de la Delegación Miguel Hidalgo en la que asistieron simpatizantes de dicho instituto político.
- ✓ Que el evento benefició a diversos candidatos del PAN.
- ✓ Que se tiene la certeza que dicho evento se celebró con apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, en coordinación con el Comité Directivo Regional y el Comité Directivo Delegacional.

➤ **Evento “Desayuno restaurante “La Enotk” de 28 de mayo.**

En relación al evento denominado “el Desayuno Restaurante la Enotk”, los sujetos incoados informan que no se trató de un evento de campaña, que si bien es cierto el veintiocho de mayo de dos mil quince la candidata denunciada desayunó en el restaurante “La Enotk”, el mismo se trató de un desayuno de carácter personal y que no se realizó acto de campaña alguno.

Ahora bien, del elemento probatorio ofrecido, esto es, una sola fotografía (misma que fue advertida por la Sala Superior), se destaca a la entonces candidata en un primer plano donde se observa, además, que se trata de un lugar cerrado, representando la acción de saludo a otra persona del sexo femenino, probanza que adquiere el carácter de prueba técnica, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente el hecho que contiene, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014<sup>9</sup>.

A fin de que esta autoridad electoral se allegara de mayores elementos, se requirió al representante legal del restaurante “La Enotk”; en respuesta, el representante legal manifestó que no hubo actos proselitistas o de campaña, ni propaganda política a favor de algún partido político o candidato. Refirió que el único evento de ese día fue un desayuno solicitado y organizado por vecinas de la Colonia Polanco, y que los gastos derivados del mismo fueron cubiertos por cada comensal, sin referir que la entonces candidata hubiese asistido u organizado dicho evento por parte del PAN o de la candidata misma.

En este sentido, en relación al evento denominado “desayuno restaurante La Enotk”, con base en la prueba técnica presentada y aunado a lo argumentado por los sujetos incoados, así como lo indicado por el representante legal del Restaurante “La Enotk”, se determina:

- ✓ Que no existe certeza de la verificación del evento, debido a que en la única fotografía no se aprecian mayores elementos que pudiesen identificar elementos de propaganda así como el propio lugar denunciado.

---

<sup>9</sup> PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF)

- ✓ Que no se logró acreditar que la presencia de la candidata denunciada hubiese sido con fines proselitistas o para beneficiar su campaña.

Por ello, no es posible atribuir al sujeto la comisión de la infracción pues no es posible acreditar plenamente la participación en la misma, siendo así se debe concluir que se carece de elementos que permitan establecer la participación del sujeto denunciado en la infracción, o que la misma haya realizado actos proselitistas en beneficio de su campaña, pues los elementos aportados no resultan idóneos ni interrelacionados para poder considerar alguna violación a la normativa electoral.

Ahora bien, por lo que hace a este apartado, el partido denunciado no vulneró normatividad alguna; toda vez, que el gasto respectivo a los nueve eventos denunciados, seis de ellos se encuentran reportados por el partido referido, dos no generaron gasto alguno y uno no se llevó a cabo con fines proselitistas o de campaña.

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que esta autoridad no cuenta con elementos que generen certeza respecto de que el PAN y su otrora candidata a Jefa Delegacional en la Miguel Hidalgo, D.F., la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización, de la Ley General, razón por lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, respecto de los eventos denunciados materia del apartado en que se actúa.

#### **B. Conceptos de gastos registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.**

Del análisis realizado a los medios de prueba presentados por el quejoso, concatenado con lo argumentado por los sujetos obligados, se observó que algunos de los conceptos de gastos denunciados se encontraron debidamente registrados en el Sistema Integral de Fiscalización por lo que se refiere a la contabilidad de la otrora candidata a Jefa Delegacional por la Miguel Hidalgo, D.F., C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz.

En este sentido, se requirió al PAN y a la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, información respecto de la utilización de una botarga, el arrendamiento de la supuesta casa de campaña ubicada en Calle Felipe Carrillo Puerto Número 559,

Delegación Miguel Hidalgo, la publicidad en redes sociales, los espacios en internet, la producción de videos y la erogación de gastos operativos.

El nueve de noviembre de dos mil quince, se recibió respuesta del PAN, manifestando que la propaganda se encuentra reportada en los informes correspondientes, acompañando como medio probatorio, pólizas contables, facturas, fotografías de prueba y contratos correspondientes.

Asimismo, de la respuesta que se obtuvo de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz, se advierte que se realizó en los mismos términos que el PAN, adjuntando para sustentar sus manifestaciones, pólizas contables, facturas, fotografías de prueba y contratos correspondientes.

Además de lo anterior, también fue solicitado al PAN y a la C. Bertha Xóchitl Gálvez, información relativa a la utilización de propaganda utilitaria consistente en pulseras, gorras, chalecos, así como de tres espectaculares; teniendo respuesta únicamente del PAN, indicando que la propaganda utilitaria se encuentra debidamente reportada en el SIF.

Dichas probanzas que presentan los sujetos obligados, adquieren el carácter de documental privada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Al respecto, de las documentales privadas consistentes en pólizas, facturas y contratos que los sujetos incoados alegan haber reportado a través del SIF, la autoridad fiscalizadora mediante razón y constancia verificó el reporte de las mismas, encontrando el reporte por concepto de gastos de propaganda.

En este contexto, a partir de los indicios con los que cuenta esta autoridad, considerando los hechos que precisa el quejoso en escrito de denuncia, tomando en cuenta lo ordenado por el órgano jurisdiccional, en relación con la información y documentación remitida por los sujetos obligados así como aquella que consta en el Sistema Integral de Fiscalización, de forma adminiculada, se advirtió lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

Conceptos denunciados por el Quejoso	Cantidad denunciada por el Quejoso	Reportado en el SIF	Documento probatorio
Espectaculares	3	Si	1.- Póliza 7 y 36 2. Facturas con folio fiscal 6C0B56E5-CBB7-48FA-9B6E-2ª9A053E85E4 y A5E39C79-C03E-4379-BACA-08ª8A42126DB
Botarga	1	Si	1.- En el contrato 04/05/2015 Se donó la cabeza de una botarga para la campaña de la C. Xóchitl Gálvez Ruiz, por un costo de \$1,000.00 (Mil pesos 00/100 MN). 2.- Se exhibe la factura con folio fiscal C1D77FB-6503-4D4E-92C6-B80EFAF46AED 3.- Fotografía de la botarga. 4.- Fotografía de la credencial para votar de la donante. 5.- Póliza 41
Pulseras.	2	Si	1. Pólizas 13, 23 y 24 2. Factura con número fiscal CE3D5121-A01C-4AB3-B74B-D3BF201500CB 3. Contrato de compraventa por 1500 pulseras bordadas a tres tintas para la campaña de Xóchitl Gálvez
Gorras	2	Si	1.- Póliza 5 del periodo 1 2. Factura con número fiscal 9f4f940b-f91f-486e-b490-4ª3d0356ca97a 3. Contrato de compraventa por la compra de gorras tipo cazador de gabardina, bordada de frente y costado unitalla.
Publicidad en Redes Sociales (Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Instagram, Flickr)	--	Si	1.- Póliza número 20 con fecha de registro 05/06/2015. 2.- Factura número 098. 3.- Póliza número 10 con fecha de registro 01/06/2015. 4.-Se realizó transferencia bancaria con fecha 29 de Mayo de 2015 5.- Solicitud de cheque por la cantidad de \$13,920.00 6.- Se exhibe factura con folio fiscal 7EA38BE3-5DDD-4C16-B138-32D7B7C7CCF2 7.- Acuse de Registro Nacional de Proveedores. 8.- Constancia Fiscal 9.- Copia del testimonio de la escritura de la sociedad "JUCA ADVERTISING" S.R.L DE C.V., número 175,367 10.- Contrato de compraventa de fecha 23 de abril de 2015 11.- Fotografías de las páginas de Facebook y Twitter

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

Conceptos denunciados por el Quejoso	Cantidad denunciada por el Quejoso	Reportado en el SIF	Documento probatorio
Propaganda en internet	1	Si	1.- Póliza número 9 con fecha de registro 01/06/2015. 2.-Se realizó transferencia bancaria con fecha 29 de Mayo de 2015 3.- Solicitud de cheque por la cantidad de \$4,640.00 4.- Se exhibe factura con folio fiscal 513B12E1-91964D2D-ADA6-16ED8D8A21 5.- Acuse de Registro Nacional de Proveedores. 6.- Constancia Fiscal 7.- Copia del testimonio de la escritura de la sociedad "JUCA ADVERTISING" S.R.L DE C.V., número 175,367 8.- Contrato de compraventa de fecha 23 de abril de 2015 9.- Fotografías del blog.
Videos producidos en internet <sup>10</sup>	27	Si	1.- Póliza número 6 con fecha de registro 01/06/2015. 2.-Se realizó transferencia bancaria con fecha 29 de Mayo de 2015 3.- Se exhibe factura con folio fiscal AFAD10, por un costo \$23,200.00 4.- Contrato de compraventa de fecha 23 de abril de 2015

Como se desprende del cuadro que antecede, se observa que los conceptos denunciados, están reportados en tiempo y forma por el Partido Acción Nacional y la entonces candidata a Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz; en este contexto, en cumplimiento al principio de exhaustividad se tiene certeza que los sujetos incoados cumplieron con sus obligaciones en materia de fiscalización, en consecuencia por lo que hace a los gastos analizados en este apartado se consideran **infundados**.

**C. Conceptos cuya existencia no se tuvo por acreditada al carecer de elementos probatorios idóneos.**

Ahora bien, dentro de los conceptos señalados por el quejoso, se observó que en algunos supuestos no presentó la documentación idónea y en otros fue omiso en aportar elementos probatorios que acreditaran la existencia del gasto. En otros términos, de las características que derivan de la prueba técnica (una fotografía) así como de la falta de elementos que vincularan dichos conceptos a la

<sup>10</sup> En el escrito de queja se ofrecen "videos", sin embargo no presentó video con producción o en medio digital, únicamente se limitó a presentar fotografías de los videos, impidiendo observar la producción y el mensaje de los mismos.

candidatura denunciada, esta autoridad electoral no tuvo certeza de su existencia, verificación o vinculación con la campaña presuntamente beneficiada. A continuación se presentan los casos en comento:

- Propaganda utilitaria. (un chaleco)
- Casa de Campaña ubicada en Calle Felipe Carrillo Puerto Número 559, en Miguel Hidalgo
- Gastos operativos de campaña (personal de logística, transporte, gasolina, personal, empleados, choferes, secretarias, viáticos y alimentos)

Ahora bien, del análisis realizado a la prueba aportada, es importante precisar que por lo que hace al concepto de “casa de campaña” y “gastos operativos” el quejoso no aportó elementos de prueba a esta autoridad, y respecto del chaleco únicamente aportó una fotografía.

Es importante destacar que dicha fotografía tienen el carácter de prueba técnica, la cual solo genera indicio de la existencia de lo que se advierte en ella y es insuficiente, por sí sola, para acreditar fehacientemente los hechos que contienen, lo anterior de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de número 4/2014<sup>11</sup>.

Ello es así, en razón de que la naturaleza de las pruebas técnicas es imperfecto, pues puede sufrir alteraciones a modo para aparentar hechos que no sucedieron en beneficio de quienes las ofrecen, por lo que la única forma de que hagan prueba plena de lo que en ellas se refiere es la vinculación con otros elementos que una vez que hayan sido analizados por la autoridad, puedan acreditar los hechos de interés. Por tal razón, su sola presentación no permite dar fe de que los hechos contenidos en ella ocurrieron en la realidad y entonces su alcance probatorio estará subsumido a lo que en la vinculación de la totalidad de las pruebas se considere.

Adicionalmente, el partido incoado manifiesta que en relación a los chalecos, la fotografía no permite identificar que corresponden a la campaña denunciada, por lo que hace a la casa de campaña ubicada en la calle Felipe Carrillo Puerto no. 559, desconoce que haya existido la misma, en cuanto a los gastos operativos

---

<sup>11</sup> PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. (TEPJF)

realizados por los eventos de campaña, no se describe las circunstancias en las cuales los mismos se erogaron.

En efecto, del análisis a la fotografía del chaleco no es posible advertir ni características ni contexto que puedan vincularse con la candidatura denunciada, al observarse una imagen borrosa, que no permite tener la certeza que dicha prenda fue utilizada con fines proselitistas.

Por lo que se refiere a la casa de campaña en el domicilio denunciado, la candidata denunciada desconoce el inmueble de la calle Felipe Carrillo Puerto no. 559, que supuestamente fue utilizado como casa de campaña, argumentando que el quejoso solo hace alusión al gasto sin presentar elemento probatorio mínimo que haga presumir la utilización de dicho inmueble.

Ciertamente, es notoria la imprecisión de la narración del agravio del quejoso, toda vez que se limita a manifestar que *“fue un hecho público y notorio que la candidata del PAN ocupó por más de dos meses como casa de campaña dos inmuebles ubicados, el primero Golfo de Adén no. 20, colonia Tacuba, y el segundo en la calle Felipe Carrillo Puerto no. 559, ambos en Miguel Hidalgo”*.<sup>12</sup> Al respecto, se hace notar que el quejoso no adjuntó medio probatorio alguno que acreditase su dicho, sino únicamente se limitó a anunciar de forma generalizada que “fue un hecho público y notorio” el gasto de campaña erogado en casas de campaña sin proporcionar mayores indicios que permitieran a la autoridad fiscalizadora desplegar sus facultades de investigación.

En ese orden de ideas, a fin de esclarecer los hechos denunciados, la autoridad fiscalizadora solicitó a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, se constituyera en el domicilio ubicado Felipe Carrillo Puerto número 559, Tacuba, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, para llevar a cabo un cuestionario relacionado con los hechos que se denuncian, es decir que una vez que se encontrara en el lugar le formulará a las personas que viven ahí o en su defecto a los vecinos, los siguientes cuestionamientos: **1.** Señale si durante los meses de abril, mayo y junio de año dos mil quince, se utilizó y/o arrendó el inmueble con fines políticos. **2.** En caso afirmativo, refiera si se benefició a algún partido político o candidato al cargo de Jefe Delegacional en la Miguel Hidalgo en el marco del Proceso Electoral 2014-2015 en la ahora Ciudad de México. **3.** Señale si tiene conocimiento de la identidad de las personas

---

<sup>12</sup> Cabe señalar que, una de las casas de campaña denunciadas fue reportada y motivo de pronunciamiento de acuerdo a lo razonado en el considerando 6.



que realizaron el préstamo y/o arrendamiento del inmueble durante el periodo referido. 4. Mencione las personas que acudían al inmueble, la temporalidad y el fin de presentarse. 5. En su caso, indique si personal de la campaña de la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruíz entonces candidata a Jefe Delegacional en Miguel Hidalgo, acudió o visitó dicho inmueble. 6. De igual forma le solicito que añada las aclaraciones que estime pertinentes y que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento.

De lo anterior, al constituirse el servidor público de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México en el lugar antes referido, se advierte que la persona que acudió a su llamado manifestó ser habitante del lugar desde *hace muchos años*, acreditando su residencia con la credencia para votar, misma que es coincidente con el domicilio materia de la pretensión de la diligencia desarrollada. Al proceder a realizar el cuestionario en cita, se limitó a contestar lo siguiente: 1. ***“No y no me estén molestando”***. 2. ***“Negativo”***. 3. ***“No tengo idea”***. 4. ***“Todo el que entra a mi casa es familiar o cercano a la familia, no dejamos entrar a cualquiera”***. 5. ***“Aquí vinieron a tocar la puerta todos los partidos y se les recibió la información, incluso pegaron una calcomanía que tuve que quitar para evitar entrar en conflictos con los vecinos”***. 6. ***“No tengo nada más que agregar”***.

En suma, se carece de los elementos probatorios necesarios que presuman el gasto por concepto de casa de campaña, en razón de que el domicilio ubicado Felipe Carrillo Puerto número 559, Tacuba, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, es un domicilio particular y privado, arrojado por el cuestionario realizado a la persona que presuntamente habita dicho lugar desde hace tiempo, lo que lleva a concluir que dicho inmueble no fue utilizado como casa de campaña, ni generó beneficio alguno en favor de la campaña de la candidata denunciada.

Por otro lado, respecto de los gastos por concepto de personal, empleados, choferes, secretarias, viáticos y alimentos, el quejoso refiere que a raíz de la celebración de los eventos, afirma textualmente *“lo que supone por lo menos gastos en los siguientes rubros”* (personal de logística, transporte, gasolina, personal, empleados, choferes, secretarias, personal de limpieza, viáticos y alimentos), es decir argumenta su agravio en una **suposición**, vaga e imprecisa y no presenta documentación probatoria idónea o mínima que genere indicios de dichos gastos.

En consecuencia, no se desprende la existencia de mayores elementos tendientes a demostrar que se gastaron por concepto de chaleco, casa de campaña y por gastos operativos, esto es, no existe un elemento probatorio alguno que confirme la existencia de los gastos y, en consecuencia, su debido reporte.

En congruencia con lo anterior, entre los requisitos mínimos que deben contener las quejas o denuncias, es que se hagan saber a la autoridad electoral, hechos que puedan constituir infracciones a la ley, porque sólo así el inculpado puede contar con la totalidad de los elementos que le permitan defenderse adecuadamente de las imputaciones hechas en su contra.

Es aplicable, en lo conducente, el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2011 sustentada por esta Sala Superior, cuyo rubro es *“PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA”*.

Acorde con el criterio anterior, existe una tendencia general reconocida en un Estado constitucional democrático de Derecho de proscribir las pesquisas generales.

Es decir, todo acto de autoridad debe estar apoyado en una causa legal, que justifique la molestia que se pueda causar en los bienes jurídicos de las personas, lo cual parte de la premisa fundamental de que el poder estatal debe respetar los derechos humanos de las personas; en ese sentido, no puede estimarse que los actos de afectación que se funden en hechos narrados en forma general tengan ese carácter, porque tal situación dificulta considerablemente la defensa del particular a quien se atribuyen, lo que le impediría o, cuando menos, le dificultaría controvertir la versión y las circunstancias descritas en la denuncia.

Esto es, la función punitiva del órgano electoral, aun con las amplias facultades para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos, tal actividad debe tener un respaldo serio y fundamentado, es decir, contar con elementos objetivos y ciertos sobre la posibilidad de que determinada persona haya cometido una conducta infractora.

En el procedimiento administrativo sancionador se recoge ese principio, porque permite que su inicio tenga lugar, de oficio, cuando la propia autoridad tenga conocimiento de los hechos, o a petición de parte, a través de una denuncia con un sustento mínimo, por lo que se exige que los hechos narrados constituyan infracciones, sean verosímiles y se aporte un principio de prueba.

En ese sentido, los hechos denunciados no se encuentran soportados por elementos probatorios que permitan generar certeza en esta autoridad electoral del gasto por el chaleco, la contratación de casa de campaña y operativos que hayan beneficiado a la campaña de la otrora candidata denunciada, ni elementos cuantitativos en las dimensiones que lo refiere el quejoso en su escrito primigenio.

Como se observa, el quejoso solo se limita a señalar de forma genérica que fue un hecho notorio el domicilio de la casa de campaña, sin aportar los elementos probatorios que acrediten su agravio.

En cuanto a los gastos operativos, el quejoso presume una erogación, al puntualizar que el celebrar eventos de campaña conlleva una contratación de empleados, choferes, secretarias, viáticos, alimentos y transporte, sin embargo no se advierten indicios de la supuesta existencia ni elementos que permitan tener certeza de que se hayan realizado o contratado, por lo que sus afirmaciones, en su caso, debieron de perfeccionarse con elementos adicionales para acreditar su pretensión.

Así, se debe guardar consistencia con los criterios<sup>13</sup> de **prohibición de excesos, idoneidad, necesidad e intervención mínima y proporcionalidad**, en virtud de que la denuncia presentada debe ser acompañada por pruebas aptas que generen si quiera indicios respecto de lo que se denuncia, procurando tomar las determinaciones que en el menor grado afecten los derechos de las personas vinculadas con los hechos denunciados.

Debe señalarse que si bien no pasa desapercibido que, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 15, párrafo 3, del Reglamento de Procedimientos, esta autoridad cuenta con la facultad de allegarse de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar y sustanciar los expedientes, lo cierto es que se

---

<sup>13</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-011-2002.

trata de una atribución de carácter discrecional, toda vez que la carga de la prueba le corresponde al denunciante.

Por ello, no es posible atribuir a los sujetos la comisión de la infracción pues no es posible acreditarse plenamente la participación en la misma, siendo así se debe concluir que se carecen de elementos que permitan establecer la participación de los sujetos denunciados en la infracción, pues los elementos aportados no resultan idóneos ni interrelacionados para poder considerar alguna violación a la normativa electoral.

En el mismo tenor, debe operar como criterio auxiliar de interpretación del principio jurídico *in dubio pro reo*<sup>14</sup>, manifestación del principio de presunción de inocencia, y que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado.

Por último, al no acreditarse fehacientemente el dicho del quejoso, ya que como quedó demostrado no aportan elementos de prueba que, vinculados con lo que expresan, no generaron en la autoridad electoral la certeza de ser verídicos los hechos de que se duele, por lo que al carecer de medios de prueba idóneos que nos lleve a atribuirle al denunciado los hechos que el quejoso pretende imputarle, resultan infundados.

Como se desprende del análisis realizado, por lo que se refiere a los conceptos de gastos denunciados, al no tenerse acreditada la existencia o verificación de los mismos, esta autoridad determina declarar **infundado** el procedimiento de mérito en el presente apartado.

#### **D. Análisis del presunto rebase de topes de gastos de campaña.**

En el escrito de queja se solicita un análisis del rebase de topes de gastos de campaña, en virtud de que durante la campaña, a juicio del quejoso, fueron excedidos los gastos, mismos que deberán sumarse al tope respectivo.

---

<sup>14</sup> **PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. PRINCIPIO VIGENTE EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL.**- Tesis relevantes identificadas con las claves LIX/2001 y XVII/2005, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/390/2015/DF**

De los elementos que obran integrados en el expediente de mérito, se concluye que no se actualiza el presunto rebase de topes de gastos de campaña, en razón de lo siguiente:

Si bien es cierto que fueron corroborados algunos los gastos denunciados en el presente procedimiento, también lo es el hecho de que, como se analizó en el considerando anterior, apartado B, los mismos fueron reportados y, consecuentemente, computados al total de gastos realizados por el PAN y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz en el informe de campaña respectivo, quien reportó un gasto total de \$515,178.83 (Quinientos quince mil ciento setenta y ocho pesos 83/100 M.N.), información que se advierte dentro del **ANEXO del Dictamen Consolidado del PAN**, respecto de las irregularidades encontradas de la Revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos al cargo de Jefes de Delegacionales, correspondientes al Proceso Electoral Ordinario 2014-2015 en el Distrito Federal, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el día doce de agosto de dos mil quince.

En este tenor, de conformidad con el Acuerdo ACU/05/15 aprobado en sesión ordinaria del nueve de enero de dos mil quince por el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, se estableció como tope de gastos de campaña para el Proceso Electoral Local Ordinario 2014-2015 para la Delegación Miguel Hidalgo, Distrito Federal, la cantidad de \$1, 413,518.89 (un millón cuatrocientos trece mil quinientos dieciocho pesos 89/100 M.N.).

Sin embargo dicho tope no fue excedido, tal y como se puede ilustrar en la siguiente tabla:

CANDIDATO CARGO Y DELEGACIÓN	TOTAL DE GASTOS EFECTUADOS	TOPE DE GASTOS DE CAMPAÑA (ACU/05/15)	REMANENTE
BERTHA XOCHITL GÁLVEZ RUÍZ JEFA DELEGACIONAL POR LA MIGUEL HIDALGO, D.F.	\$515,178.83	\$1,413,518.89	\$898,340.06

En esta tesitura de lo expuesto a lo largo de la presente Resolución esta autoridad determina que toda vez que los gastos fueron reportados en el informe respectivo, éstos se computaron y por tanto se determinó que las erogaciones realizadas se apegaron a los límites de los topes de campaña.

En consecuencia no se actualiza el rebase de topes de campaña alegado por el denunciante, por consecuencia el Partido Acción Nacional y su entonces candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo no vulneraron los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos y 127 del Reglamento de Fiscalización; así como 243, numeral 1 y 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Acción Nacional y la C. Bertha Xóchitl Gálvez Ruiz entonces candidata a Jefa Delegacional en Miguel Hidalgo Distrito Federal de conformidad con lo expuesto en el **Considerando 7**, de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-585/2015**.

**TERCERO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CUARTO.-** Notifíquese a los interesados.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG406/2018**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y SU ENTONCES PRECANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE YUCATÁN, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Ciudad de México, 25 de abril de dos mil dieciocho.

**VISTO** para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**.

### **ANTECEDENTES**

**I. Escrito de queja.** El dos de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización, el oficio INE-UT/2071/2018, mediante el cual la Unidad Técnica de lo Contencioso remitió el diverso INE/JLE/EF-YC/0061/18, signado por el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva en el estado de Yucatán, en el cual se adjunta el escrito de queja presentado por el C. Conrado Sánchez Barragán, en su carácter de Representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del Partido Revolucionario Institucional y de su precandidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos, consistentes en lonas de estructura fija metálica, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros “sugerencias” y “buzón” con logotipo del partido, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), volante, publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas “Boom” y “Esencia”, así como

batucada, bici taxis, autobuses, escenario monumental y escenario profesional, show cómico “doña clodo”, “taco de ojo” y “Dzereco” y “nohoch”, pantallas led, globos, gorras, servicio de meseros, mantelería, desechable, renta de salones para eventos, espectaculares, toldos y lonas exteriores; todo lo anterior en beneficio de la precampaña del precandidato denunciado. (Fojas de la 3 a la 84 del expediente)

**II. Hechos denunciados y elementos probatorios.** De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito de queja.

“(…)

#### **HECHOS**

*1.-Que en fecha 23 de diciembre de 2017, el C. Mauricio Sahuí Rivero se registró como precandidato al Gobierno del Estado de Yucatán por el Partido Revolucionario Institucional (En adelante PRI) a fin de contender en el Proceso Electoral Local 2017-2018, acto que tuvo verificativa en la llamada “Casa del Pueblo” de Mérida, ubicada en él lo que constituye un hecho del dominio público toda vez que diversos medios de comunicación dieron cuenta de tal suceso.*

*En dicho evento se aprecia la utilización de diversos artículos promocionales:*

*Lonas en estructura fijada con la leyenda “Gobernador de Yucatán 2018-2024” en fondo color rojo con los logotipos del Partido Revolucionario Institucional.*

**(imagen)**

*Aplaudidores de plástico en colores rojo, verde y blanco, con las siglas PRI*

**(imagen)**

*Banderas fondo blanco con el logotipo del PRI*

**(imagen)**

*2.-Posteriormente el día 26 de enero de 2018, el referido precandidato realizó actividades de proselitismo en la ciudad de Mérida, hecho que constituye un acto del dominio público pues de lo cual dieron cuenta diversos medios de comunicación como el que a continuación se cita:*

**(imagen)**

*Fuente:* <http://radiomayab.com/2018/01/26/los-dialogos-con-sahui-se-extendieron-a-mas-colonias-meridanas/>



**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*En dicho evento de precampaña se apreció la utilización de artículos promocionales equipo, infraestructura y pago de servicios en los siguientes rubros:*

**(imagen)**

*Imagen 1.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o “back”, equipo de iluminación profesional, templete y sillas.*

**(imagen)**

*Imagen 2.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o “back”, equipo de iluminación profesional, templete y sillas.*

**(imagen)**

*Imagen 3.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o “back”, equipo de iluminación profesional, templete, sillas, camisetas rojas con alusiones al nombre de Mauricio Sahuí y una caja rotulada que dice “sugerencias” y la imagen de precampaña del precandidato.*

**(imagen)**

*Imagen 4.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o “back”, equipo de iluminación profesional, templete, sillas camisetas rojas con alusiones al nombre de Mauricio Sahuí.*

*En el evento de mérito se pudo apreciar, tal cual se prueba con las imágenes aquí insertas la utilización de los siguientes elementos que implicaron una erogación en cuanto gasto de precampaña:*

- Lona tipo “back” con la leyenda “Dialogando con Mauricio Sahuí” montada en estructura metálica;
- Templete de madera y metal con tapete rojo;
- Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;
- Sillas metálicas y de plástico;
- Reflectores

**(imagen)**

*Imagen 5.- Se observa “volante”, en papel couché fondo blanco, tipografías en colores negros, rojo y verde, entregado a la totalidad de asistentes al acto proselitista realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, que dice:*

*“Dialogando con Mauricio Sahuí, precandidato a Gobernador. Te invito a que me acompañes a un diálogo cercano contigo y tus vecinos donde platicaremos de lo verdaderamente importante y lo que hace falta en Mérida. Ahí podré escuchar tus comentarios y conocer tus propuestas para que mantengamos el estado de bienestar que estamos construyendo. Mauricio Sahuí. Precandidato a*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Gobernador del PRI. Hora 18:00 hrs., Fecha: Jueves 25 de enero de 2018; Lugar: Calle 20 Diag. 17 y Calle 35 Polígono 108, Parque de usos Múltiples."

3. Es un hecho del conocimiento público dada la difusión de los medios de comunicación en el Estado, que el día 30 de enero de 2018, el aquí denunciado realizó actos de proselitismo de precampaña en las colonias de Chuburná (evento realizado en la calle 104 por 59, dentro de la cancha de usos múltiples) y Bojórquez de la ciudad de Mérida, Yucatán, mismos en los que se apreció la utilización de artículos promocionales, equipo, infraestructura y pago de servicios en los siguientes rubros:

**(imagen)**

Imagen 1.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 30 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o "back", equipo de iluminación profesional, templete, camisetas rojas con el nombre de "Mauricio Sahuí" y sillas.

**(imagen)**

Imagen 2.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 30 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o "back", equipo de iluminación profesional, templete, camisetas rojas con el nombre "Mauricio Sahuí", sillas y una caja con la leyenda "buzón"

**(imagen)**

Imagen 3.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 30 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o "back", equipo de iluminación profesional, templete, camisetas rojas con el nombre "Mauricio Sahuí", sillas.

**(imagen)**

Imagen 4.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 30 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o "back", equipo de iluminación profesional, templete, camisetas rojas con el nombre "Mauricio Sahuí", sillas.

4. Que desde fecha 31 de diciembre de 2017, el C. Mauricio Sahuí Rivero emitió propaganda pagada (pauta) dentro de la red social denominada "Instagram" en la región de Yucatán, hecho que se prueba con la siguiente captura de pantalla:

**(imagen)**

De la imagen descrita se advierte que se trata de publicidad contratada con el fin de posicionar el nombre, imagen y aspiración del C. Mauricio Sahuí Rivero mediante mensajes enviados de manera automática en la red social denominada "Instagram" en los que se aprecia bajo la leyenda y logotipo de "Instagram" las palabras: "mauriciosahuí" que corresponde a la cuenta de usuario, debajo la leyenda "publicidad" que indica que se trata de un mensaje pautado y pagado a fin de que pueda ser difundido de manera generalizada, se sigue una imagen que predominantemente muestra el rostro del C. Mauricio Sahuí Rivero, en compañía de algunas personas, encabezada por la leyenda "Iremos en busca de inversiones" "Mauricio Sahuí" en la esquina inferior derecha, y en la parte inferior "A

*todo el país y a todo el mundo, para que más cosas se hagan con la calidad de la mano de obra yucateca.*

**(imagen)**

*Como pie de publicación se lee el mensaje escrito por el propio precandidato.*

*"mauriciosahui Mi sueño es que tengamos automóviles, aviones, refrigeradores y barcos fabricados con la marca Yucatán. Esos son los empleos que queremos para nuestra gente, así activaremos la economía y generaremos más".*

*5. Siguiendo con sus actividades de precampaña, el día 31 de enero, el C. Mauricio Sahuí Rivero realizó un evento proselitista en el local denominado 'Jhony' (ubicado en calle 19 número 93, por 18 y 20 centro, Acancéh, Yucatán), del municipio de Acancéh, Yucatán, en el que entre otros gastos se aprecia que se hizo servir de los siguientes:*

**(imagen)**

*Imágenes 1 y 2, se aprecian personas con bolsas que contienen emparedados o tortas que posteriormente fueron entregados a los asistentes.*

**(imagen)**

*Se advierte que el local utilizado para la reunión fue un salón de eventos y reuniones con giro comercial denominado "Jhoni".*

*Se aprecia que en el evento descrito anteriormente se utilizaron entre otros, una lona promocional fijada en estructura metálica, playeras con el nombre del precandidato y sillas.*

*Del evento en comento también se desprende la contratación de una banda musical.*

*6. Posteriormente la tarde del día 1° de febrero de 2018, el C. Mauricio Sahuí Rivero sostuvo una reunión de precampaña electoral en el parque ubicado en la calle 139 x 138, conocido como "parque de los muertos". Encuentro en el que se apreció la utilización de los siguientes elementos que implicaron la erogación de recursos a favor de su precampaña*

**(imágenes)**

*Imágenes 1 a 5.- Se aprecia aspecto general del mitin realizado el día 1 de febrero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, donde, en lo que interesa, se ve una lona promocional de fondo o "back", equipo de iluminación profesional, templete, camisetas rojas con el nombre "Mauricio Sahuí", sillas.*

*7. En fecha 2 de febrero, el C. Mauricio Sahuí Rivero realizó un evento proselitista de precampaña ante la ciudadanía en general en el municipio de Tekax, en el local de fiestas y reuniones denominado "Ricardo Palmerín" ubicado en la calle 50 s/n, del municipio de Tekax, en el que se pudo apreciar el uso de los siguientes elementos que se consideran gastos de precampaña:*

**(imágenes)**

*Renta de salón;*

*Lona tipo "back" con la leyenda "Dialogando con Mauricio Sahuí" montada en estructura metálica.*

*Templete de madera y metal con tapete rojo;*

*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora; "*

*Sillas metálicas y de plástico;*

*Reflectores*  
*Banda musical*  
*Bici taxis*

8. Posteriormente en fecha 3 de febrero de 2018, el C. Mauricio Sahuí Rivero encabezó un mitin en las instalaciones de la feria 'Xmatkuil' del municipio de Mérida, Yucatán en el que se advirtieron en cuanto a gastos de precampaña los siguientes:

**(imagen)**

*Renta de espacio para eventos multitudinarios;*  
*Lona tipo "back" con la leyenda "La fuerza del PRI está en su gente" montada en estructura metálica,*  
*Escenario profesional con estructuras e iluminación profesional;*  
*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*  
*Pantallas;*  
*Sillas metálicas y de plástico;*  
*Reflectores e iluminación profesional;*  
*Banda musical;*  
*Autobuses para apoyo de transportación;*  
*Escenario monumental con lona promocional;*  
*Aplaudidores;*  
*Playeras rojas con el logotipo de la campaña del C. Mauricio Sahuí;*  
*Camisas bordadas con el logotipo del PRI y el apellido "Sahuí";*  
*Banda musical;*

9. En fecha 5 de febrero, el C. Mauricio Sahuí Rivero realizó un evento proselitista de precampaña ante la ciudadanía en general en el municipio de Mérida, en el parque conocido como "Miraflores" de la colonia del mismo nombre, en el que se pudo apreciar el uso de los siguientes elementos que se consideran gastos de precampaña:

**(imagen)**

*Lona tipo "back" con la leyenda "Dialogando con Mauricio Sahuí" montada en estructura metálica,*  
*Templete de madera y metal con tapete rojo;*  
*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*  
*Sillas metálicas y de plástico;*  
*Reflectores;*  
*Banda musical*

10. Igualmente el día 5 de febrero de 2018 en diverso horario, el aquí denunciado sostuvo un mitin proselitista en el parque público ubicado en la intersección de las calles 18 x 17 y 19 de la Ciudad de Mérida, en la Colonia Amalia Solórzano, en el que igual se aprecian los siguientes gastos de precampaña:

**(imagen)**

*Lona tipo "back" con la leyenda "Dialogando con Mauricio Sahuí" montada en estructura metálica;*  
*Templete de madera y metal con tapete rojo;*  
*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*  
*Sillas metálicas y de plástico;*  
*Reflectores;*  
*Banda musical*

11. El día 7 de febrero de 2018, dentro de los actos de precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero se tuvo una reunión pública en la plaza principal del municipio de Motul, Yucatán, en el que se pudieron apreciar los siguientes elementos que implican gasto de campaña:

**(imagen)**

*Lona tipo "back" con la leyenda "Dialogando con Mauricio Sahuí" montada en estructura metálica;  
Playeras rojas con la imagen de campaña del denunciado,  
Templete de madera y metal con tapete rojo;  
Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;  
Sillas metálicas y de plástico;  
Reflectores  
Show cómico a cargo de los comediantes conocidos como "Doña Clodo", "Taco de ojo",  
Banda musical "El Boom"  
Autobuses para transportación de asistentes.*

*De dicho acto proselitista dieron constancia diversos medios de comunicación, tal y como se muestra a continuación.*

**(imagen)**

*Fuente: <http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/>*

**(imagen)**

*Posteriormente, taco de Ojo, quien destaca en el medio artístico regional como un comediante con chistes picantes y burlas a los mismos asistentes a sus espectáculos, subió al escenario para vacilar con hombres, mujeres y hasta niños de quienes dijo inclusive, entienden mejor sus chistes que algunos adultos.*

**(imágenes)**

*Al término del evento, al nombre de todos los militantes priistas de la zona, Mauricio Sahuí Rivero recibió un pastel y le cantaron Las Mañanitas, ya que este día 08, celebra un año más de vida.*

**(imagen)**

**(imagen)**

*Fuente: <https://masnoticiasureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>*

**(imagen)**

*Fuente: <http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>*

*12. Posteriormente dicho precandidato en fecha 8 de febrero de 2018, sostuvo una reunión pública abierta en el municipio de Progreso, en el conocido "Parque de La Paz" ubicado entre las calles 21 x 66 y 68 de esa población. En dicha actividad proselitista se detectaron gastos de precampaña relativos a:*

**(imagen)**

*Lona tipo "back" con la leyenda "Dialogando con Mauricio Sahuí" montada en estructura metálica;  
Playeras rojas con la imagen de campaña del denunciado;  
Templete de madera y metal;*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*  
*Sillas metálicas y de plástico*  
*Reflectores;*  
*Show cómico a cargo de los comediantes conocidos como “Dzereco”, “Nohoch”;*  
*Autobuses para transportación de asistentes*  
*Alimentos*  
*Globos*  
*Banderas*  
*Gorras con el nombre “Sahuí”*  
*Playeras rojas y blancas con el nombre del aspirante*

*De dicho acto proselitista dieron constancia diversos medios de comunicación, tal y como se muestra a continuación:*

*Fuente: <http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/>*

*14.- El día 9 de febrero de 2018, el C. Mauricio Sahuí Rivero realizó un mitin y cena como parte de sus actividades de precampaña en el municipio de Ticul, Yucatán, dentro del local del Centro Social Maya ubicada entre las calles 24 x 17 y 15 de dicha población. En dicha reunión se apreciaron erogaciones de precampaña en los siguientes rubros:*

**(imagen)**

*Lona tipo “back” con la leyenda “Dialogando con Mauricio Sahuí” montada en estructura metálica;*  
*Playeras rojas con la imagen de campaña del denunciado;*  
*Templete de madera y metal;*  
*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*  
*Sillas metálicas y de plástico;*  
*Reflectores*  
*Show cómico a cargo del comediante conocido como “Taco de ojo”,*  
*Grupo musical “Esencia”*  
*Batucada o banda de tambores*  
*Autobuses para transportación de asistentes*  
*Alimentos y bebidas*  
*Globos*  
*Banderas*  
*Gorras con el nombre de “Sahuí”*  
*Renta de salón*  
*Servicio de Meseros*  
*Mantelería*  
*Desechables*  
*De dicho acto proselitista dieron constancia de diversos medios de comunicación, tal y como se muestra a continuación.*

**(imagen)**

*Fuente: <http://www.defrentenoticias.com/realizan-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/>*

*15. Posteriormente el día 11 de febrero de 2018, el C. Mauricio Sahuí Rivero realizó actividades de precampaña que implicaron gastos de precampaña en el recinto conocido como Polifórum Zamná ubicado en la calle 14 número 313, de la Colonia Morelos Oriente de esta Ciudad de Mérida, Yucatán. Actividad de la que se desprenden los siguientes objetos de gasto de precampaña:*

*(imagen)*

*Lona espectacular tipo “back” con la leyenda “Por un Yucatán que siga con rumbo” y logotipos del PRI montada en estructura metálica;*

*Lonas espectaculares fijadas en la estructura del inmueble con los mensajes “Yucatán 2018”, “PRI” y el logotipo del referido Partido;*

*Playeras roas con la imagen de campaña del denunciado*

*Playeras tipo “polo” con el hashtag#fuerzasahui*

*Playeras tipo “polo” negras con la leyenda “Sahuí ‘18”*

*Templete de madera y metal*

*Equipo de sonido con bocinas, micrófono y mezcladora;*

*Pantallas LED;*

*Sillas metálicas y de plástico;*

*Reflectores*

*Autobuses para transportación de asistentes*

*Globos*

*Toldos y lonas de exterior*

*Banderas*

*Gorras con el nombre de “Sahuí”*

*Renta de salón*

*La realización de dicho acto es del conocimiento público dada su amplia difusión en medios de comunicación en el Estado de Yucatán.*

*(...)”*

**Elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:**

- **Prueba Técnica.** Consistente en 123 fotografías, de las cuales 101 de ellas se relacionan con los supuestos eventos denunciados; 6 fotografías hacen referencias a notas periodísticas en las cuales se observa que se da un seguimiento a la precampaña denunciada, esto en ejercicio de la libertad de expresión, asimismo se aprecian 3 fotografías en las cuales denuncia supuesta propaganda en redes sociales, 1 fotografía en la cual se observa una imagen que a dicho del quejosos corresponde a un volante, 11 fotografías en las que se observan autobuses y combis los cuales se encuentran estacionados sin que del análisis a las fotografías 1 fotografía en donde se aprecian bicitaxis; así, con dichas fotografías el quejoso pretende probar los supuestos eventos, así como el gasto realizado con motivo de los mismos.
- **Documental Pública.** Consistente en la certificación que a petición del quejoso realizo esta autoridad electoral nacional de las siguientes ligas de internet:

1. <http://radiomayab.com/208/01/26/los-diialogos-con-sahui-se-extendieron-a-mas-colonias-meridianas/>
  2. <http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/>
  3. <http://masnoticiasureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>
  4. <http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>
  5. <http://wwwdefrentenoticias.com/masivo/-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/>
  6. <http://wwwdefrentenoticias.com/realizan-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/>
- **Instrumental de actuaciones.** Consistente en todos y cada uno de los elementos que obren en la presente Resolución.

**III. Acuerdo de admisión e inicio del procedimiento de queja.** El seis de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitida la queja mencionada y acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**, registrarlo en el libro de gobierno, admitir a trámite y sustanciación el escrito de mérito, así como notificar el inicio del procedimiento al Secretario del Consejo General del Instituto, al partido político y a su precandidato denunciados remitiéndole las constancias que integran el expediente y publicar el acuerdo de referencia en los estrados del Instituto Nacional Electoral. (Fojas de la 85 a la 87 del expediente)

**IV. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.**

**a)** El seis de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados de este Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Foja 88 del expediente)

**b)** El nueve de marzo de dos mil dieciocho, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión, la cédula de conocimiento y mediante razones de publicación y retiro, se hizo constar que dicho acuerdo y cédula fueron publicados oportunamente. (Foja 89 del expediente)

**V. Notificación de inicio del escrito de queja al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.** El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22353/2018, la



Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, la admisión del procedimiento de que se trata. (Foja 90 del expediente)

**VI. Notificación de inicio del escrito de queja al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22355/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado con el número de expediente INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC. (Foja 91 del expediente)

**VII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y emplazamiento al Representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.**

a) El seis de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22356/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó el inicio del procedimiento de mérito y emplazo al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, corriéndole traslado con la totalidad de elementos de prueba que integran el escrito de queja. (Fojas 101 a la 108 del expediente)

b) Mediante escrito de fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:

***“Consideraciones de derecho***

***Primero. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización resulta improcedente en razón de que las pruebas en que descansa carecen de elementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar, lo que las torna imprecisas, frívolas e insuficientes para acreditar por sí solas los hechos que se pretenden.***

**1. Prueba técnica**

*El Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano aporta en el apartado de pruebas, la prueba técnica siguiente:*

**“TÉCNICA.** - Consistente en placas fotográficas cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar se describen a detalle en los hechos de la presente denuncia, mismas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hecho y de derecho aquí desarrollados.”

En este sentido, las placas fotográficas ofrecidas como pruebas técnicas y la reproducción de sus contenidos a lo largo del escrito de queja o denuncia deben ser desechadas o, en su caso, desatendidas atento a las siguientes consideraciones:

El reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización dispone, en sus artículos 14, 15, 17 y 21.

En este sentido, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 15, 17 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 14, párrafo sexto, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, se desprende que tratándose de pruebas técnicas **corresponde a quien las aporta señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba**, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar, con la finalidad de fijar el valor de convicción que corresponda.

De esta forma, la descripción de las pruebas técnicas, especialmente en el caso de aquellas que reproducen imágenes, como sucede con las fotografías, debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, lo que evidentemente no sucede en el caso que nos ocupa. Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 36/2014.

En concreto, los elementos probatorios aportados por el actor no pasan de ser un leve indicio ya que no permiten establecer de manera clara y contundente las **circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados**, lo que cobra relevancia si sopesamos que este tipo de pruebas, por su propia naturaleza, son de fácil alteración, manipulación o creación, pues no dejan de pertenecer al género de pruebas documentales. Atento a lo anterior, las fotografías pueden corresponder a momentos o circunstancias diversas de las que se pretenden probar o, en su defecto, ser utilizadas indebidamente para engrosar el espectro fiscalizable sin que exista certeza respecto de su origen como, a manera de ejemplo, acontece en la presente queja con las fotografías aisladas que se aportan de diversos vehículos de transporte público que pueden corresponder a momentos y circunstancias diversas a las que se denuncian.

Esta consideración es acorde a la esencia que informa la jurisprudencia 4/2014.

Así, las pruebas técnicas aportadas corresponden a fotografías que el actor se limita a incorporar al escrito de queja o denuncia sin que lleve a cabo un ejercicio lógico-jurídico en el que relacione el supuesto marco jurídico vulnerado o los supuestos gastos no reportados, por cada una de las fotografías aportadas, con base en la descripción de las circunstancias individualizadas de tiempo, modo y lugar. Por el contrario, el denunciante expone hechos claramente contradictorios que pretende sustentar con fotografías, como se aprecia en forma ilustrativa, entre otros contenidos y apartados, en la página 8 del escrito de queja o denuncia que a continuación se representa:

**(imagen)**

“Imagen 5. - Se observa “volante” en el papel couché fondo blanco, tipografía en colores negro, rojo y verde, entregado a la totalidad de asistentes al acto proselitista realizado el día **27 de enero de 2018**

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*en la ciudad de Mérida, Yucatán, como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, que dice:*

*“Dialogando con Mauricio Sahuí, precandidato a Gobernador. Te invito a que me acompañes a un dialogo cercano contigo y tus vecinos donde platicaremos de lo verdaderamente importante y lo que hace falta en Mérida. Ahí podré escuchar tus comentarios y conocer tus propuestas para que mantengamos el estado de bienestar que estamos construyendo. Mauricio Sahuí. Precandidato a Gobernador del PRI. Hora: 18:00 hrs; Fecha: **jueves 25 de enero 2018**; lugar: calle 20 Diag. 17 y calle 35 Polígono 108, Parque de usos Múltiples”.*

*En efecto, los actos o hechos denunciados a partir de las fotografías que dan origen al procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización carecen de una identificación precisa de las circunstancias individualizadas de tiempo, modo y lugar, sin que existan otros medios objetivos que permitan corroborar el contexto en que supuestamente acontecieron los hechos a fiscalizar por lo que al carecer de certeza esencialmente en relación con el elemento temporal se solicita a esa autoridad administrativa desestimar todo el valor probatorio que pretenda atribuirse a las pruebas técnicas.*

*Por último, resulta evidente que las pruebas aportadas de ninguna manera corroboran plenamente lo dicho por el promovente, por lo que la queja o denuncia intentada únicamente encuentra sustento en las aseveraciones del actor, que agrupa una serie de datos inexactos a los cuales no puede ni siquiera otorgárseles el carácter de simples indicios. Por tanto, al no existir elementos a partir de los cuales se pruebe el nexo causal que los vincule con los supuestos gastos no reportados debe estimarse inconducente el acervo probatorio y, en consecuencia, desecharse por ser notoriamente improcedente la queja o denuncia intentada.*

## **2.- Documental pública**

*El Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano aporta en el apartado de pruebas la prueba pública siguiente:*

**“DOCUMENTAL PÚBLICA.** - Consistente en la certificación que esa autoridad electoral nacional realice respecto del contenido de las siguientes fuentes informativas aportadas en este acto en vía de prueba y que guardan relación con los hechos conforme a lo señalado:

<http://radiomayab.com/2018/01/26/los-dialogos-con-sahui-se-extendieron-a-mas-colonias-meridianas/>  
<http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/>  
<http://masnoticiassureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>  
<http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>  
<http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/>  
[http://www.defrentenoticias.com/realiza-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/”](http://www.defrentenoticias.com/realiza-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/)

*Al respecto, el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano ofrece como prueba la certificación de las seis fuentes de información arriba citadas, las cuales, por su propia naturaleza, constituyen únicamente pruebas técnicas.*

*En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, en relación con este tipo de pruebas, especialmente aquellas que contienen notas periodísticas, es que la percepción de un acontecimiento extraído a partir del análisis de estas, que por regla general suponen indicios, por sí solos no constituyen un elemento suficiente para sancionar a un individuo cuando no existe otro elemento objetivo de prueba que permita justificar su culpabilidad.*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*En este caso, la certificación elaborada por el personal del Instituto Nacional Electoral corre la suerte de la prueba de origen resultando aplicable al caso la “teoría del fruto del árbol envenenado” es decir, el ejercicio de oficialía electoral sobre estas pruebas no solventa las carencias, limitantes y hechos falibles a los que pueden estar expuestos los medios electrónicos, ni mucho menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que carecen pues de lo contrario el órgano electoral estaría subsanando, en mi perjuicio, las deficiencias existentes en las pruebas y la falta de diligencia del actor al invocar los hechos que pretende acreditar a partir de estas.*

*De esta manera, las pruebas técnicas, como las que ofrece el partido denunciante en el apartado correspondiente de su escrito de queja o denuncia, requieren obligatoriamente ser adminiculadas y analizadas en conjunto con otro tipo de probanzas para que adquieran una fuerza probatoria plena, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el cual sin insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, incluso cuando sobre estas se verifique un ejercicio de oficialía electoral.*

*En este aspecto, resulta aplicable, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.*

*De esta forma, si bien es cierto que el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano ofrece como documental pública el acta circunstanciada de los seis enlaces de internet que cita en el apartado de pruebas de su escrito de queja o denuncia, no debe pasar desapercibido que la sola certificación de dichas pruebas técnicas realizadas por el Instituto Nacional Electoral, a fin de constatar su existencia y contenido, en nada modifica el carácter que estas tienen de indicios y de su notoria necesidad de ser valoradas en conjunto con diversos medios objetivos de convicción para adquirir el carácter de pruebas plenas, pues la simple transmutación de la prueba técnica en prueba documental no implica, por sí mismo, que los actos o hechos visibles de la prueba técnica y descritos en la documental hayan tenido verificativo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que en esta se presenta, hecho que resulta distinto cuando el personal dotado de fe pública acude, presencialmente, al lugar de los hechos y a través de los sentidos puede dar cuenta de lo que, en realidad, acontece.*

*En otras palabras, la sola actividad de certificación de las fuentes de información con que el partido denunciante pretende comprobar la existencia de supuestos gastos no reportados, no modifica la naturaleza de las pruebas, en tanto que, atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son archivos o documentos electrónicos que fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver, por ejemplo, una imagen que o corresponde a la realidad de los hechos, sino a una que se pretende aparentar, pues es un hecho notorio que actualmente existen un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar o de la alteración de estas. Lo anterior, aunado al hecho que la certificación, en todo caso, se limita a dar fe de que dichas páginas electrónicas existen y que dentro de ellas a su vez existe determinando contenido, sin que ello verse de alguna forma sobre la veracidad o autenticidad de la información asentada en dichos sitios web.*

*De ahí que, resulta inconcuso que la documental pública en cuestión resulta insuficiente, en sí misma, para tener por justificada fehacientemente la supuesta violación al principio de imparcialidad a que se refirió el partido político denunciante en su escrito de queja o denuncia, máxime que de la misma no puede darse por sentada la veracidad de la información contenida en las seis fuentes de información que ofreció el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano como pruebas técnicas, sino que únicamente puede darse por cierto, en todo caso, el hecho de que estas existen y de que en ellas obra cierto contenido.*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

**Segundo. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización resulta inatendible en razón de que todas las erogaciones realizadas durante la etapa de precampaña fueron debidamente registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.**

No le asiste la razón al quejoso o denunciante en virtud de que mi representada no ha incurrido en infracciones a la normativa electoral en materia de origen, monto, destino o aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. En este sentido, como esa autoridad podrá constatar, todos los gastos erogados durante la precampaña han sido reportados, en tiempo y forma, a través del Sistema Integral de Fiscalización.

En este sentido, para facilitar las tareas de fiscalización de los supuestos gastos no reportados es necesario determinar, en principio con base en el Reporte del catálogo auxiliar de agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, si los eventos denunciados se realizaron o si aquellos reportados en su oportunidad a la autoridad fiscalizadora se cancelaron y, por tanto, no tuvieron verificativo. Para pronta referencia, se presenta la siguiente tabla:

Numero de identificador	Evento denunciado por Movimiento Ciudadano		Estatus	Factura	Póliza
	Lugar	Fecha			
00066	Temozón	27 de enero de 2018	Cancelado	N.D. 2465	N.D. 8
00072	Calle 109 por 59 de la colonia Bojórquez (Dentro de la cancha de usos múltiples)	30 de enero de 2018	Realizado	L17 e I14 B30 y B31 B30 y B31 I17 e I14 A18895 A18895	63 62 62 63 75 75
00075	Local denominado "Jhony" ubicado en la calle 19 número 93 por 18 y 20 centro, Acanceh, Yucatán	31 de enero de 2018	Realizado	2465 A18895 B35	8 75 76
00076	Ubicado en la calle 139 por 138, conocido como Parque de los muertos	1 de febrero de 2018	Realizado	2465 I26 I26 A18895 I26 B37	8 77 77 75 77 76
00080	Local de fiestas "Ricardo Palmerín" ubicado en la calle 50 sin número del municipio de Tekax	2 de febrero de 2018	Realizado	2465 I23 I23 B39 I23	8 77 77 76 77
00088	Instalaciones de la feria de "Xmatkuil" del municipio de Mérida	3 de febrero de 2018	Realizado	11261 11261 I21 I21 8914 6014 B33 I21 B33	67 67 77 77 103 73 62 77 62

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Numero de identificador	Evento denunciado por Movimiento Ciudadano		Estatus	Factura	Póliza
	Lugar	Fecha			
				AA3	71
				18915	78
				B33	62
				11261	67
				18915	78
				18915	78
				18915	78
00081	Parque conocido como Miraflores, de la colonia del mismo nombre	5 de febrero	Realizado	2465	8
				B64	116
				B64	116
				I35	95
				I35	95
00087	Calle 18 por 17 y 19 de la ciudad de Mérida, en la Colonia Amalia Solórzano	5 de febrero	Realizado	2465	8
				B65	116
				B65	116
				I36	95
				I36	95
0092	Plaza principal del municipio de Motul, Yucatán	7 de febrero	Realizado	B55	N.D.
				I32	N.D.
00086	Parque de la Paz ubicado entre las calles 21 por 66 y 68 del municipio de Progreso	8 de febrero de 2018	Realizado	2465	8
				A18895	75
				B57	94
				I34	95
				B57	94
				I34	95
				I34	95
				A18895	75
00094	Municipio de Ticul, dentro del local del Centro Social Maya, ubicado entre las calles 24 por 17 y 15 de dicha población	9 de febrero de 2018	Realizado	2465	8
				A18895	75
				B67	99
				I38	100
				B67	99
				I38	100
				I38	100
				I38	100
				B67	66

**Partido Revolucionario Institucional**

Evento denunciado		Estatus	Factura	Póliza
Lugar	Fecha			
Casa del pueblo de Mérida	23 de diciembre de 2017	Realizado	A1786	109
Polifórum Zamná, ubicado en la calle 14 número 313 de la colonia Morelos Oriente, de esta ciudad de Mérida	11 de febrero de 2018	Realizado	Gasto ordinario	Gasto ordinario

**Redes Sociales**

Evento denunciado		Estatus	Factura	Póliza
Lugar	Fecha			
Instagram	31 de diciembre de 2017	Realizado	64	104
Facebook	9 de febrero de 2018	Realizado	64	104

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*Como se desprende de la tabla, de los **trece eventos** denunciados por Movimiento Ciudadano **once eventos** se muestran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. En este sentido, si bien la actora señala en su escrito de denuncia la verificación de un evento el 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, lo cierto es que el evento programado para esa fecha se llevaría a cabo en el municipio de Temozón, Yucatán, sin embargo, como se comprueba con el **Reporte del catálogo auxiliar de agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización**, este se canceló (identificador 00066).*

*Por otra parte, en lo relativo a los eventos desarrollados el 23 de diciembre de 2017 en la Casa del Pueblo y el 11 de febrero de 2018 en el Polifórum Zamná se informa que los gastos erogados fueron cubiertos con el gasto ordinario del Partido Revolucionario Institucional.*

*En ese sentido, resulta evidente que la queja o denuncia interpuesta por el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano resulta totalmente infundada y ajena a la verdad, pues como se ha dejado claro, todos los gastos erogados fueron debidamente informados a la autoridad competente, dentro de los plazos y a través de los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto.*

*Aunado a la anterior, no debe soslayarse la facultad a cargo de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de ordenar vistas de verificación con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anuales de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos. En concreto, la propia autoridad llevó a cabo sendas visitas de verificación en dos de los eventos denunciados: el registrado con el identificador 00072, llevado a cabo en la colonia Bojórquez; y el registrado con el identificador 00088, celebrado en el recinto de la feria Xmatkuil.*

*Al respecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 299, establece en relación con los requisitos y alcances de las visitas de verificación.*

*En este sentido, resulta evidente lo infundado de la queja o denuncia, especialmente por lo que respecta a los eventos denunciados en donde la autoridad administrativa llevó a cabo visitas de verificación. Lo anterior se afirma en razón de que el acta generada con motivo de la verificación dio cuenta de los elementos a fiscalizar, la cual, a diferencia de las pruebas ofrecidas por el hoy denunciante, sí constituyen prueba plena del estricto cumplimiento de los Lineamientos de fiscalización que nos ocupan.*

*Por ende, es evidente que no le asiste la razón al actor, cuando señala que mi representado realizó diversas erogaciones que no fueron informadas a la autoridad en materia de fiscalización. En virtud de que en el marco de la visita de verificación es la propia autoridad la que determina los gastos y las erogaciones efectivamente realizados, por lo que elimina cualquier posibilidad de apreciaciones subjetivas sobre los supuestos gastos no reportados.*

*A mayor abundamiento, de otorgarse valor probatorio a los datos aportados por el denunciante a través de pruebas técnicas equivaldría a hacer nugatorias las actuaciones y los mecanismos que la ley establece para determinar los gastos, tales como los son las visitas de verificación. Ello, evidentemente sería carente de sentido jurídico, pues se otorgaría en perjuicio de los entes fiscalizados mayor alcance y valor probatorio a una mera apreciación particular, que al procedimiento seguido conforme a lo dispuesto por el numeral 299 del Reglamento de Fiscalización, que dispone que el contenido del acta hará prueba plena respecto de los hechos ahí contenidos.*

*En línea con lo anterior, aun suponiendo sin conceder que lo aducido por el denunciante pudiese constituir un indicio, este queda completamente destruido cuando es confrontado con el contenido*

*del acta de la visita de verificación, del cual se desprende plenamente lo que en realidad se erogó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas.*

*Consecuentemente, en estricta legalidad, debe otorgarse mayor valor probatorio y ser considerado como irrefutable el contenido del acta de verificación y no así las tendenciosas e imparciales manifestaciones señaladas por el hoy denunciante, ya que sostener lo contrario implicaría alejarse del contenido del derecho positivo, lo que trastocaría los principios de certeza y legalidad que deben prevalecer en todo Proceso Electoral.*

### **P R U E B A S**

**1.- Documental privada,** consistente en la copia certificada del Dictamen recaído a la solicitud de registro al proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la gubernatura, conforme al procedimiento de convención de delegados y delegadas, con ocasión del procedimiento electoral local 2017-2018, de fecha 23 de diciembre de 2017, que obra en autos del expediente UT/SCG/PE/MC/CG/7/PEF/64/2018. Con la presente prueba se acredita la personalidad del C. Mauricio Sahuí Rivero, como precandidato a la gubernatura del estado de Yucatán por parte del Partido Revolucionario Institucional. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de este documento.

**2.- Documental pública,** consistente en el testimonio de escritura pública número seiscientos sesenta y cuatro de fecha 14 de octubre de 2017, pasado ante la fe de Licenciado en Derecho Juan Pablo Monforte Méndez, titular de la Notaría Pública número Ochenta y ocho, con residencia en Motul, Yucatán, que contiene el poder general para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas, que otorga el C. Mauricio Sahuí Rivero, a favor de los C.C. Arturo de Jesús Sandoval Torres, Víctor Manuel Martín Rascón y Héctor Herrera Góngora, la cual exhibo en copia certificada y copia simple, para que previo cotejo y certificación la primera me sea devuelta y la segunda obre en autos.

*De igual forma, solicito se sirva acordar devolverme dicha escritura pública una vez que se me tenga por acreditada mi personalidad.*

**3.- Instrumental de actuaciones,** consistente en todos y cada uno de los elementos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma beneficie a los intereses de mi representado, la cual relaciono con todos y cada uno de los hechos de este documento.

**4.- Presuncional,** en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado, la cual relaciono con todos y cada uno de los hechos en este documento.”

## **VIII. Notificación de inicio de procedimiento, requerimiento de información y emplazamiento al C. Mauricio Sahuí Rivero, precandidato a Gobernador en el estado de Yucatán, postulado por el Partido Revolucionario Institucional.**

a) El seis de marzo de dos mil dieciocho, el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización mediante Acuerdo solicito el auxilio del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva Yucatán, a efecto de que llevara a cabo la diligencia de notificación del inicio y el requerimiento de información del procedimiento citado al rubro, al entonces precandidato a Gobernador en el estado de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, postulado por el Partido Revolucionario Institucional. (Fojas de la 137 a la 139 del expediente)



b) Mediante escrito de fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho, el Apoderado Legal del C. Mauricio Sahuí Rivero, dio respuesta al emplazamiento que en términos del artículo 42, numeral 1, fracción II, inciso e) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en la parte conducente señala:(Fojas de la 166 a la 196 del expediente)

***“Consideraciones de derecho***

***Primero. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización resulta improcedente en razón de que las pruebas en que descansa carecen de elementos circunstanciales de tiempo, modo y lugar, lo que las torna imprecisas, frívolas e insuficientes para acreditar por sí solas los hechos que se pretenden.***

**2. Prueba técnica**

*El Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano aporta en el apartado de pruebas, la prueba técnica siguiente:*

***“TÉCNICA. - Consistente en placas fotográficas cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar se describen a detalle en los hechos de la presente denuncia, mismas que se relacionan con todos y cada uno de los puntos de hecho y de derecho aquí desarrollados.”***

*En este sentido, las placas fotográficas ofrecidas como pruebas técnicas y la reproducción de sus contenidos a lo largo del escrito de queja o denuncia deben ser desechadas o, en su caso, desatendidas atento a las siguientes consideraciones:*

*El reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización dispone, en sus artículos 14, 15, 17 y 21.*

*En este sentido, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 14, 15, 17 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en relación con el artículo 14, párrafo sexto, de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en Materia Electoral, se desprende que tratándose de pruebas técnicas **corresponde a quien las aporta señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba**, esto es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción de la prueba técnica, a fin de que la autoridad esté en condiciones de vincular la citada prueba con los hechos por acreditar, con la finalidad de fijar el valor de convicción que corresponda.*

*De esta forma, la descripción de las pruebas técnicas, especialmente en el caso de aquellas que reproducen imágenes, como sucede con las fotografías, debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar, lo que evidentemente no sucede en el caso que nos ocupa. Dicho criterio ha sido sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 36/2014.*

*En concreto, los elementos probatorios aportados por el actor no pasan de ser un leve indicio ya que no permiten establecer de manera clara y contundente las **circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados**, lo que cobra relevancia si sopesamos que este tipo de pruebas, por su propia naturaleza, son de fácil alteración, manipulación o creación, pues no dejan de*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*pertenecer al género de pruebas documentales. Atento a lo anterior, las fotografías pueden corresponder a momentos o circunstancias diversas de las que se pretenden probar o, en su defecto, ser utilizadas indebidamente para engrosar el espectro fiscalizable sin que exista certeza respecto de su origen como, a manera de ejemplo, acontece en la presente queja con las fotografías aisladas que se aportan de diversos vehículos de transporte público que pueden corresponder a momentos y circunstancias diversas a las que se denuncian.*

*Esta consideración es acorde a la esencia que informa la jurisprudencia 4/2014.*

*Así, las pruebas técnicas aportadas corresponden a fotografías que el actor se limita a incorporar al escrito de queja o denuncia sin que lleve a cabo un ejercicio lógico-jurídico en el que relacione el supuesto marco jurídico vulnerado o los supuestos gastos no reportados, por cada una de las fotografías aportadas, con base en la descripción de las circunstancias individualizadas de tiempo, modo y lugar. Por el contrario, el denunciante expone hechos claramente contradictorios que pretende sustentar con fotografías, como se aprecia en forma ilustrativa, entre otros contenidos y apartados, en la página 8 del escrito de queja o denuncia que a continuación se representa:*

**(imagen)**

*“Imagen 5. - Se observa “volante” en el papel couché fondo blanco, tipografía en colores negro, rojo y verde, entregado a la totalidad de asistentes al acto proselitista realizado el día **27 de enero de 2018** en la ciudad de Mérida, Yucatán, como parte de la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero como precandidato del PRI, que dice:”*

*“Dialogando con Mauricio Sahuí, precandidato a Gobernador. Te invito a que me acompañes a un dialogo cercano contigo y tus vecinos donde platicaremos de lo verdaderamente importante y lo que hace falta en Mérida. Ahí podré escuchar tus comentarios y conocer tus propuestas para que mantengamos el estado de bienestar que estamos construyendo. Mauricio Sahuí. Precandidato a Gobernador del PRI. Hora: 18:00 hrs; Fecha: **jueves 25 de enero 2018**; lugar: calle 20 Diag. 17 y calle 35 Polígono 108, Parque de usos Múltiples”.*

*En efecto, los actos o hechos denunciados a partir de las fotografías que dan origen al procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización carecen de una identificación precisa de las circunstancias individualizadas de tiempo, modo y lugar, sin que existan otros medios objetivos que permitan corroborar el contexto en que supuestamente acontecieron los hechos a fiscalizar por lo que al carecer de certeza esencialmente en relación con el elemento temporal se solicita a esa autoridad administrativa desestimar todo el valor probatorio que pretenda atribuirse a las pruebas técnicas.*

*Por último, resulta evidente que las pruebas aportadas de ninguna manera corroboran plenamente lo dicho por el promovente, por lo que la queja o denuncia intentada únicamente encuentra sustento en las aseveraciones del actor, que agrupa una serie de datos inexactos a los cuales no puede ni siquiera otorgárseles el carácter de simples indicios. Por tanto, al no existir elementos a partir de los cuales se pruebe el nexo causal que los vincule con los supuestos gastos no reportados debe estimarse inconducente el acervo probatorio y, en consecuencia, desecharse por ser notoriamente improcedente la queja o denuncia intentada.*

## **2.- Documental pública**

*El Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano aporta en el apartado de pruebas la prueba pública siguiente:*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

**“DOCUMENTAL PÚBLICA.** - Consistente en la certificación que esa autoridad electoral nacional realice respecto del contenido de las siguientes fuentes informativas aportadas en este acto en vía de prueba y que guardan relación con los hechos conforme a lo señalado:

<http://radiomayab.com/2018/01/26/los-dialogos-con-sahui-se-extendieron-a-mas-colonias-meridianas/>  
<http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/>  
<http://masnoticiassureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>  
<http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>  
<http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/>  
[http://www.defrentenoticias.com/realiza-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/”](http://www.defrentenoticias.com/realiza-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/)

Al respecto, el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano ofrece como prueba la certificación de las seis fuentes de información arriba citadas, las cuales, por su propia naturaleza, constituyen únicamente pruebas técnicas.

En este sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, en relación con este tipo de pruebas, especialmente aquellas que contienen notas periodísticas, es que la percepción de un acontecimiento extraído a partir del análisis de estas, que por regla general suponen indicios, por sí solos no constituyen un elemento suficiente para sancionar a un individuo cuando no existe otro elemento objetivo de prueba que permita justificar su culpabilidad.

En este caso, la certificación elaborada por el personal del Instituto Nacional Electoral corre la suerte de la prueba de origen resultando aplicable al caso la “teoría del fruto del árbol envenenado” es decir, el ejercicio de oficialía electoral sobre estas pruebas no solventa las carencias, limitantes y hechos falibles a los que pueden estar expuestos los medios electrónicos, ni mucho menos las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las que carecen pues de lo contrario el órgano electoral estaría subsanando, en mi perjuicio, las deficiencias existentes en las pruebas y la falta de diligencia del actor al invocar los hechos que pretende acreditar a partir de estas.

De esta manera, las pruebas técnicas, como las que ofrece el partido denunciante en el apartado correspondiente de su escrito de queja o denuncia, requieren obligatoriamente ser adminiculadas y analizadas en conjunto con otro tipo de probanzas para que adquieran una fuerza probatoria plena, ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, motivo por el cual sin insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen, incluso cuando sobre estas se verifique un ejercicio de oficialía electoral.

En este aspecto, resulta aplicable, la jurisprudencia 4/2014 emitida por la Sala Superior de la Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De esta forma, si bien es cierto que el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano ofrece como documental pública el acta circunstanciada de los seis enlaces de internet que cita en el apartado de pruebas de su escrito de queja o denuncia, no debe pasar desapercibido que la sola certificación de dichas pruebas técnicas realizadas por el Instituto Nacional Electoral, a fin de constatar su existencia y contenido, en nada modifica el carácter que estas tienen de indicios y de su notoria necesidad de ser valoradas en conjunto con diversos medios objetivos de convicción para adquirir el carácter de pruebas plenas, pues la simple transmutación de la prueba técnica en prueba documental no implica, por sí mismo, que los actos o hechos visibles de la prueba técnica y descritos en la documental hayan tenido verificativo en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que en esta se presenta, hecho que resulta distinto cuando el personal dotado de fe pública acude,

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*presencialmente, al lugar de los hechos y a través de los sentidos puede dar cuenta de lo que, en realidad, acontece.*

*En otras palabras, la sola actividad de certificación de las fuentes de información con que el partido denunciante pretende comprobar la existencia de supuestos gastos no reportados, no modifica la naturaleza de las pruebas, en tanto que, atendiendo a los avances tecnológicos y de la ciencia, son archivos o documentos electrónicos que fácilmente pueden ser elaborados o confeccionados haciendo ver, por ejemplo, una imagen que o corresponde a la realidad de los hechos, sino a una que se pretende aparentar, pues es un hecho notorio que actualmente existen un sinnúmero de aparatos, instrumentos y recursos tecnológicos y científicos para la obtención de imágenes de acuerdo al deseo, gusto o necesidad de quien las realiza, ya sea mediante la edición total o parcial de las representaciones que se quieran captar o de la alteración de estas. Lo anterior, aunado al hecho que la certificación, en todo caso, se limita a dar fe de que dichas páginas electrónicas existen y que dentro de ellas a su vez existe determinando contenido, sin que ello verse de alguna forma sobre la veracidad o autenticidad de la información asentada en dichos sitios web.*

*De ahí que, resulta inconcuso que la documental pública en cuestión resulta insuficiente, en sí misma, para tener por justificada fehacientemente la supuesta violación al principio de imparcialidad a que se refirió el partido político denunciante en su escrito de queja o denuncia, máxime que de la misma no puede darse por sentada la veracidad de la información contenida en las seis fuentes de información que ofreció el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano como pruebas técnicas, sino que únicamente puede darse por cierto, en todo caso, el hecho de que estas existen y de que en ellas obra cierto contenido.*

**Segundo. La queja o denuncia del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización resulta inatendible en razón de que todas las erogaciones realizadas durante la etapa de precampaña fueron debidamente registradas e informadas y, en su caso, determinadas por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.**

*No le asiste la razón al quejoso o denunciante en virtud de que mi representada no ha incurrido en infracciones a la normativa electoral en materia de origen, monto, destino o aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos. En este sentido, como esa autoridad podrá constatar, todos los gastos erogados durante la precampaña han sido reportados, en tiempo y forma, a través del Sistema Integral de Fiscalización.*

*En este sentido, para facilitar las tareas de fiscalización de los supuestos gastos no reportados es necesario determinar, en principio con base en el Reporte del catálogo auxiliar de agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, si los eventos denunciados se realizaron o si aquellos reportados en su oportunidad a la autoridad fiscalizadora se cancelaron y, por tanto, no tuvieron verificativo. Para pronta referencia, se presenta la siguiente tabla:*

Numero de identificador	Evento denunciado por Movimiento Ciudadano		Estatus	Factura	Póliza
	Lugar	Fecha			
00066	Temozón	27 de enero de 2018	Cancelado	N.D.	N.D.
00072	Calle 109 por 59 de la colonia Bojórquez (Dentro de la cancha de usos múltiples)	30 de enero de 2018	Realizado	2465	8
				L17 e I14	63
				B30 y B31	62
				B30 y B31	62
				I17 e I14	63
				A18895	75
	Local denominado "Jhony" ubicado en			A18895	75
				2465	8

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Numero de identificador	Evento denunciado por Movimiento Ciudadano		Estatus	Factura	Póliza
	Lugar	Fecha			
00075	la calle 19 número 93 por 18 y 20 centro, Acanceh, Yucatán	31 de enero de 2018	Realizado	A18895	75
				B35	76
00076	Ubicado en la calle 139 por 138, conocido como Parque de los muertos	1 de febrero de 2018	Realizado	2465	8
				I26	77
				I26	77
				A18895	75
				I26	77
				B37	76
00080	Local de fiestas "Ricardo Palmerin" ubicado en la calle 50 sin número del municipio de Tekax	2 de febrero de 2018	Realizado	2465	8
				I23	77
				I23	77
				B39	76
				I23	77
00088	Instalaciones de la feria de "Xmatkui" del municipio de Mérida	3 de febrero de 2018	Realizado	11261	67
				11261	67
				I21	77
				I21	77
				8914	103
				6014	73
				B33	62
				I21	77
				B33	62
				AA3	71
				18915	78
				B33	62
				11261	67
				18915	78
				18915	78
				18915	78
00081	Parque conocido como Miraflores, de la colonia del mismo nombre	5 de febrero	Realizado	2465	8
				B64	116
				B64	116
				I35	95
				I35	95
00087	Calle 18 por 17 y 19 de la ciudad de Mérida, en la Colonia Amalia Solórzano	5 de febrero	Realizado	2465	8
				B65	116
				B65	116
				I36	95
				I36	95
0092	Plaza principal del municipio de Motul, Yucatán	7 de febrero	Realizado	B55	N.D.
				I32	N.D.
00086	Parque de la Paz ubicado entre las calles 21 por 66 y 68 del municipio de Progreso	8 de febrero de 2018	Realizado	2465	8
				A18895	75
				B57	94
				I34	95
				B57	94
				I34	95
				I34	95
				A18895	75
				2465	8
				A18895	75

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Numero de identificador	Evento denunciado por Movimiento Ciudadano		Estatus	Factura	Póliza
	Lugar	Fecha			
00094	Municipio de Ticul, dentro del local del Centro Social Maya, ubicado entre las calles 24 por 17 y 15 de dicha población	9 de febrero de 2018	Realizado	B67	99
				I38	100
				B67	99
				I38	100
				I38	100
				I38	100
				B67	66

**Partido Revolucionario Institucional**

Evento denunciado		Estatus	Factura	Póliza
Lugar	Fecha			
Casa del pueblo de Mérida	23 de diciembre de 2017	Realizado	A1786	109
Polifórum Zamná, ubicado en la calle 14 número 313 de la colonia Morelos Oriente, de esta ciudad de Mérida	11 de febrero de 2018	Realizado	Gasto ordinario	Gasto ordinario

**Redes Sociales**

Evento denunciado		Estatus	Factura	Póliza
Lugar	Fecha			
Instagram	31 de diciembre de 2017	Realizado	64	104
Facebook	9 de febrero de 2018	Realizado	64	104

Como se desprende de la tabla, de los **trece eventos** denunciados por Movimiento Ciudadano **once eventos** se muestran registrados en el Sistema Integral de Fiscalización. En este sentido, si bien la actora señala en su escrito de denuncia la verificación de un evento el 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, lo cierto es que el evento programado para esa fecha se llevaría a cabo en el municipio de Temozón, Yucatán, sin embargo, como se comprueba con el **Reporte del catálogo auxiliar de agenda de eventos del Sistema Integral de Fiscalización**, este se canceló (identificador 00066).

Por otra parte, en lo relativo a los eventos desarrollados el 23 de diciembre de 2017 en la Casa del Pueblo y el 11 de febrero de 2018 en el Polifórum Zamná se informa que los gastos erogados fueron cubiertos con el gasto ordinario del Partido Revolucionario Institucional.

En ese sentido, resulta evidente que la queja o denuncia interpuesta por el Partido Político Nacional Movimiento Ciudadano resulta totalmente infundada y ajena a la verdad, pues como se ha dejado claro, todos los gastos erogados fueron debidamente informados a la autoridad competente, dentro de los plazos y a través de los mecanismos establecidos por el Instituto Nacional Electoral para tal efecto.

Aunado a la anterior, no debe soslayarse la facultad a cargo de la Comisión de Fiscalización del Consejo General de ordenar vistas de verificación con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones y la veracidad de los informes anuales de precampaña y campaña presentados por los partidos políticos, aspirantes y candidatos. En concreto, la propia autoridad llevó a cabo sendas visitas de verificación en dos de los eventos denunciados: el registrado con el identificador 00072,

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

*llevado a cabo en la colonia Bojórquez; y el registrado con el identificador 00088, celebrado en el recinto de la feria Xmatkuil.*

*Al respecto, el Reglamento de Fiscalización en su artículo 299, establece en relación con los requisitos y alcances de las visitas de verificación.*

*En este sentido, resulta evidente lo infundado de la queja o denuncia, especialmente por lo que respecta a los eventos denunciados en donde la autoridad administrativa llevó a cabo visitas de verificación. Lo anterior se afirma en razón de que el acta generada con motivo de la verificación dio cuenta de los elementos a fiscalizar, la cual, a diferencia de las pruebas ofrecidas por el hoy denunciante, sí constituyen prueba plena del estricto cumplimiento de los Lineamientos de fiscalización que nos ocupan.*

*Por ende, es evidente que no le asiste la razón al actor, cuando señala que mi representado realizó diversas erogaciones que no fueron informadas a la autoridad en materia de fiscalización. En virtud de que en el marco de la visita de verificación es la propia autoridad la que determina los gastos y las erogaciones efectivamente realizados, por lo que elimina cualquier posibilidad de apreciaciones subjetivas sobre los supuestos gastos no reportados.*

*A mayor abundamiento, de otorgarse valor probatorio a los datos aportados por el denunciante a través de pruebas técnicas equivaldría a hacer nugatorias las actuaciones y los mecanismos que la ley establece para determinar los gastos, tales como los son las visitas de verificación. Ello, evidentemente sería carente de sentido jurídico, pues se otorgaría en perjuicio de los entes fiscalizados mayor alcance y valor probatorio a una mera apreciación particular, que al procedimiento seguido conforme a lo dispuesto por el numeral 299 del Reglamento de Fiscalización, que dispone que el contenido del acta hará prueba plena respecto de los hechos ahí contenidos.*

*En línea con lo anterior, aun suponiendo sin conceder que lo aducido por el denunciante pudiese constituir un indicio, este queda completamente destruido cuando es confrontado con el contenido del acta de la visita de verificación, del cual se desprende plenamente lo que en realidad se erogó en las circunstancias de tiempo, modo y lugar narradas.*

*Consecuentemente, en estricta legalidad, debe otorgarse mayor valor probatorio y ser considerado como irrefutable el contenido del acta de verificación y no así las tendenciosas e imparciales manifestaciones señaladas por el hoy denunciante, ya que sostener lo contrario implicaría alejarse del contenido del derecho positivo, lo que trastocaría los principios de certeza y legalidad que deben prevalecer en todo Proceso Electoral.*

## **P R U E B A S**

**1.- Documental privada,** consistente en la copia certificada del Dictamen recaído a la solicitud de registro al proceso interno de selección y postulación de la candidatura a la gubernatura, conforme al procedimiento de convención de delegados y delegadas, con ocasión del procedimiento electoral local 2017-2018, de fecha 23 de diciembre de 2017, que obra en autos del expediente UT/SCG/PE/MC/CG/7/PEF/64/2018. Con la presente prueba se acredita la personalidad del C. Mauricio Sahuí Rivero, como precandidato a la gubernatura del estado de Yucatán por parte del Partido Revolucionario Institucional. Esta prueba la relaciono con todos y cada uno de los hechos de este documento.

**2.- Documental pública,** consistente en el testimonio de escritura pública número seiscientos sesenta y cuatro de fecha 14 de octubre de 2017, pasado ante la fe de Licenciado en Derecho Juan Pablo Monforte Méndez, titular de la Notaría Pública número Ochenta y ocho, con residencia en Motul, Yucatán, que contiene el poder general para asuntos judiciales, pleitos y cobranzas, que otorga el C. Mauricio Sahuí Rivero, a favor de los C.C. Arturo de Jesús Sandoval Torres, Víctor

*Manuel Martín Rascón y Héctor Herrera Góngora, la cual exhibo en copia certificada y copia simple, para que previo cotejo y certificación la primera me sea devuelta y la segunda obre en autos.*

*De igual forma, solicito se sirva acordar devolverme dicha escritura pública una vez que se me tenga por acreditada mi personalidad.*

**3.- Instrumental de actuaciones**, consistente en todos y cada uno de los elementos que obren en el expediente en el que se actúa y que de alguna forma beneficie a los intereses de mi representado, la cual relaciono con todos y cada uno de los hechos de este documento.

**4.- Presuncional**, en su doble aspecto, legal y humano, en todo lo que beneficie a los intereses de mi representado, la cual relaciono con todos y cada uno de los hechos en este documento.”

## **IX. Razones y Constancias.**

**a)** El seis de marzo de dos mil dieciocho el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia a efecto de verificar la existencia y contenido de 6 páginas de internet señaladas en el escrito de queja del C. Conrado Sánchez Barragán, en su carácter de representante del Partido Movimiento Ciudadano, el cual dio origen al presente procedimiento. (Fojas de la 92 a la 99 del expediente)

**b)** El nueve de marzo de dos mil dieciocho el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización levantó razón y constancia respecto al cotejo en el Sistema Integral de Fiscalización, de las pólizas registradas por el C. Mauricio Sahuí Rivero, a efecto de conocer el contenido de las mismas y verificar si los gastos reportados coinciden con los gastos denunciados en la queja de mérito. (Foja de la 100 del expediente)

## **X. Solicitud de información a la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral.**

**a)** El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/22358/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización le solicitó la certificación de cada una de las páginas de internet señaladas en el cuerpo de la queja materia del presente procedimiento, las cuales se enlistan a continuación:

- <http://radiomayab.com/2018/01/26/los-diialogos-con-sahui-se-extendieron-a-mas-colonias-meridanas/>
- <http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/>
- <https://masnoticiasureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>
- <http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/>



- <http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/>
- <http://www.defrentenoticias.com/realizan-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/>

**b)** Mediante oficio numero INE/DS/904/2018 de fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, la Dirección del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, dio respuesta al requerimiento de información respecto a la certificación de cada una de las páginas de internet descritas en el inciso que antecede. (Fojas de la 203 a la 235 del expediente)

**XI. Acuerdo de alegatos.** El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización estimó procedente abrir la etapa de alegatos correspondiente, por lo cual se ordenó notificar al quejoso y a los sujetos incoados, para que en un plazo de setenta y dos horas manifestaran por escrito los alegatos que consideraran convenientes. (Foja 233 del expediente).

**XII. Notificación de alegatos al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.**

a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/23865/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 240 del expediente).

b) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el Lic. Alejandro Muñoz García, en su carácter de representante suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio contestación a lo solicitado. (Fojas de la 241 a la 255 del expediente).

**XIII. Notificación de alegatos al C. Mauricio Sahuí Rivero en su carácter otrora precandidato a Gobernador del estado de Yucatán, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.**

a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/JL/EF-YC/0113/18, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó al C. Mauricio Sahuí Rivero manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Fojas de la 260 a la 262 del expediente).

b) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número el apoderado legal del C. Mauricio Sahuí Rivero, dio contestación a lo solicitado. (Fojas de la 265 a la 276 del expediente).

**XIV. Notificación de alegatos al Representante del Partido de Movimiento Ciudadano, ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.**

a) El veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, mediante el oficio INE/UTF/DRN/23862/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó Representante del Partido de Movimiento Ciudadano manifestara por escrito los alegatos que considerara convenientes, en virtud del acuerdo emitido por esta autoridad que declaró abierta la etapa de alegatos en el procedimiento al rubro indicado. (Foja 256 del expediente).

b) El treinta y uno de marzo de dos mil dieciocho, mediante escrito sin número, el citado ciudadano dio contestación a lo solicitado, ratificando en todas sus partes su denuncia interpuesta en contra del C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora precandidato a Gobernador del estado de Yucatán postulado por el Partido Revolucionario Institucional. (Fojas de la 258 a la 259 del expediente).

**XV. Cierre de Instrucción.** El trece de abril de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización emitió el Acuerdo por el que se declaró cerrada la instrucción correspondiente a la substanciación del procedimiento de mérito. (Foja 277 del expediente).

**XVI. Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Décima Primera sesión extraordinaria de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, con la siguiente votación: Unánime de los Consejeros Electorales integrantes de la Comisión de Fiscalización, las Consejeras Doctora Adriana M. Favela Herrera, Licenciada Pamela San Martín Ríos, y Valles, los Consejeros

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Electorales Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctor Benito Nacif Hernández y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

**C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Con base en lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 5, numeral 2, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y, en su momento, someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y k), y 191, numeral 1, incisos d) y g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesiones extraordinaria y ordinaria celebradas el ocho de septiembre, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete y cinco de enero de dos mil dieciocho mediante Acuerdos

INE/CG409/2017<sup>1</sup>; INE/CG614/2017<sup>2</sup> e INE/CG04/2018 respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la normatividad sustantiva tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento administrativo sancionador, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG04/2018.

**2. Estudio de fondo.** Que al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento por resolver y habiendo analizado todos los documentos y actuaciones que integran el expediente que se resuelve, se desprende que el **fondo** del presente asunto consiste en determinar si el Partido Revolucionario Institucional, y su otrora precandidato al cargo de Gobernador en el estado de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, omitieron reportar gastos consistentes en propaganda utilizada en trece eventos, la realización de los mismos, así como propaganda en Facebook e Instagram, conductas que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de financiamiento de los partidos políticos<sup>3</sup>, durante la etapa de precampaña en el Marco del Proceso Electoral Local 2017-2018 en el estado de Yucatán.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25, numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso a) y 243 numeral 1 en relación con el 445 numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que a la letra disponen lo siguiente:

---

<sup>1</sup> Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización, aprobado mediante ACUERDO INE/CG263/2014, modificado a través de los acuerdos INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016 e INE/CG68/2017

<sup>2</sup> Acuerdo por el que se modifica el reglamento de procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, aprobado el diecinueve de noviembre de dos mil catorce en sesión extraordinaria del consejo general del instituto nacional electoral mediante el Acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez con los Acuerdos INE/CG1048/2015 e INE/CG319/2016.

<sup>3</sup> Consistentes en lonas de estructura fija metálica, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros "sugerencias" y "buzón" con logotipo del partido, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), volante, publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas "Boom" y "Esencia", así como batucada, bici taxis, autobuses, escenario monumental y escenario profesional, show cómico "doña clodo", "taco de ojo" y "Dzereco" y "nohoch", pantallas led, globos, gorras, servicio de meseros, mantelería, desechable, renta de salones para eventos, espectaculares, toldos y lonas exteriores.

***“Ley General de Partidos Políticos”***

(...)

**Artículo 25**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

*a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.*

(...)

**Artículo 79.**

*1. Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*

*a) Informes de precampaña:*

*1. Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de los precandidatos a candidatos a cargos de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña, especificando el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados;*

(...)”

***“Reglamento de Fiscalización”***

(...)

**Artículo 127.**

*Documentación de los egresos*

*1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

*2. Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad. 3. El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento. (...)*

***“Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”***

(...)

**Artículo 243.**

*1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General: (...)”*

De las premisas normativas citadas se desprende que los partidos políticos tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma. Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los partidos políticos de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

En cuanto al artículo 25, numeral 1, incisos a), de la Ley General de Partidos Políticos se señala que los partidos políticos tienen la obligación de utilizar sus prerrogativas y aplicar el financiamiento que reciban por cualquier modalidad (público y privado) exclusivamente para los fines por los que fueron entregados, es decir, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, para sufragar gastos de campaña, así como para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyan a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hagan posible su acceso al ejercicio del poder público del Estado, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Asimismo, los Partidos Políticos tienen la obligación de reportar ante la Unidad Técnica de Fiscalización, la totalidad de sus operaciones en su informe de precampaña para cada uno de sus entonces precandidatos a cargo de elección popular, registrados para cada tipo de precampaña de que se trate, en el caso que nos ocupa, la obligación de haber reportado las erogaciones que se le denuncian a través del escrito de queja respectivos.

En relación a lo anterior, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que tal instituto político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un

Estado democrático. En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los partidos políticos de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un partido político en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.

Por último, los artículos citados tienen la necesidad de vigilar y tutelar los principios rectores de la fiscalización, tales como son la equidad, transparencia e imparcialidad, pues los institutos políticos deben buscar cumplir con las reglas que la contienda electoral conlleva, esto con la finalidad que esta se desarrolle en un marco de legalidad, pues, su vulneración implicaría una transgresión directa a la norma electoral.

En virtud de lo expuesto previamente, y toda vez que el escrito de queja reúne todos y cada uno de los requisitos previstos en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y una vez realizado el análisis del mismo, el seis de marzo de la presente anualidad se acordó admitir el escrito de queja de referencia.

En ese sentido, en el presente caso nos ocuparemos de determinar si los conceptos de gasto fueron en efecto realizados, constando la existencia de los mismos, por lo que una vez realizada la premisa en cita, se verificará si los mismos fueron parte integrante del informe de ingresos y egresos de la candidatura denunciada, a fin de determinar el reporte<sup>4</sup> de las erogaciones conducentes.

Lo anterior con la finalidad de verificar si el denunciante contravino lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos y el 127 del Reglamento de Fiscalización.

De la premisa normativa se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de reportar con veracidad y registrar contablemente sus egresos, debiendo soportar con documentación original este tipo de operaciones, es decir,

---

<sup>4</sup> Así, bajo el supuesto de omisión de reporte, aquellas erogaciones efectuadas que hayan representado un beneficio a la precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora precandidato a Gobernador de Yucatán, postulado por el Partido Revolucionario Institucional, serán sumadas a su informe relativo, y la autoridad fiscalizadora determinará en su caso, si ellos constituye en su caso siendo rebase al tope de gastos de precampaña autorizados para el Proceso Electoral Local 2017-2018, en el estado de Yucatán.

que la documentación comprobatoria de un gasto se expida a nombre del partido político por la persona a quien se efectuó el pago y prestó dichos servicios, especificando todos los gastos efectuados por el partido político y el entonces precandidato.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban y realicen. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante el órgano de fiscalización sus ingresos y egresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político al recibir recursos los aplica exclusivamente para sus propios fines constitucional y legalmente permitidos.

Ahora bien, previo a entrar al estudio de **fondo** del procedimiento identificado como **INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**, es importante señalar los motivos que dieron origen al inicio del procedimiento de queja que por esta vía se resuelve.

Mediante escrito de queja presentado por el representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, en contra del C. Mauricio Sahuí Rivero, otrora precandidato a Gobernador del Estado de Yucatán postulado por el Partido Revolucionario Institucional; el quejoso denunció la omisión de informar supuestos gastos y actos de precampaña en los que se emplean recursos económicos que pudieron conllevar una erogación por conceptos de lonas de estructura fija metálica, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros “sugerencias” y “buzón” con logotipo del Partido Revolucionario Institucional, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), volante, publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas “Boom” y “Esencia”, así como batucada, bici taxis, autobuses, escenario, show cómico “doña clodo”, “taco de ojo” y “Dzereco” y “nohoch”, pantallas led, globos, gorras, servicio de meseros, mantelería, desechable, renta de salones para eventos, espectaculares, toldos y lonas exteriores, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Yucatán, en beneficio del denunciado.



En este sentido y derivado de la naturaleza de las erogaciones denunciadas, tenemos que para efectos metodológicos resulta conveniente dividir el estudio de fondo en los apartados siguientes:

En este orden de ideas, en atención a los hechos denunciados, esta autoridad electoral analizará los conceptos denunciados a efecto de realizar un pronunciamiento individualizado. En este contexto, el estudio de fondo se realizará de la manera siguiente:

**A. Omisión de reportar gastos de precampaña.**

**B. Seguimiento.**

Se procede a exponer cada uno de los apartados señalados:

- **Apartado A. Omisión de reportar gastos de precampaña.**

En este apartado se estudiarán los conceptos de gasto denunciados por el quejoso en su escrito inicial, en el cual para sostener sus afirmaciones aporta 123 fotografías, de las cuales 101 de ellas se relacionan con los supuestos eventos denunciados; 6 fotografías de las que se desprenden notas periodísticas en las cuales se observa que se da un seguimiento a la precampaña denunciada, esto en ejercicio de la libertad de expresión, asimismo, se aprecian 3 fotografías mediante las cuales ilustra la supuesta propaganda en redes sociales, 1 fotografía en la cual se observa una imagen que a dicho del quejosos corresponde a un volante, 11 fotografías en las que se observan autobuses y combis los cuales se encuentran estacionados sin que del análisis a las fotografías 1 fotografía en donde se aprecian bicitaxis; así, con dichas fotografías el quejoso pretende probar los supuestos eventos, así como el gasto realizado con motivo de los mismos.

Es menester señalar que, respecto a las fotografías, éstas constituyen pruebas técnicas de conformidad con lo establecido por el artículo 17, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que para perfeccionarse deben de administrarse con otros elementos de prueba que en su conjunto permitan acreditar los hechos materia de denuncia, en este contexto su valor es indiciario.

Sirve para sustentar lo anterior la Jurisprudencia de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación al emitir la jurisprudencia 4/2014<sup>5</sup> determinó que: *“las pruebas técnicas son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; toda vez que dada su naturaleza, tienen un carácter imperfecto debido a la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que las mismas resultan insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que pudieran contener, de ahí que resulte necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan corroborar o perfeccionar la veracidad y existencia de los hechos que se pretenden acreditar con éstas”*.

De este modo, esta autoridad electoral con base en las facultades de vigilancia y fiscalización y toda vez que se denunciaron gastos que debieron ser reportados por el sujeto denunciado en su informe respectivo, procedió a notificar el inicio del procedimiento de mérito y a emplazar al C. Mauricio Sahuí Rivero mediante oficio INE/JLE/EF-YC/0080/2018 asimismo procedió a requerir información mediante oficio INE/UTF/DRN/22356/2018, de fecha seis de marzo de dos mil dieciocho, al Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, quien mediante escrito sin número de fecha doce de marzo de la presente anualidad desahogó el requerimiento de información respectivo señalando el denunciado que: en relación a los eventos denunciados, éstos fueron registrados en el módulo de “Agenda de Eventos”, a través del Sistema Integral de Fiscalización, asimismo señaló que los gastos erogados con motivo de dichos eventos fueron reportados a través del referido sistema (SIF), así como las pólizas y los números de factura que amparan los gastos denunciados; haciendo la aclaración que respecto de los eventos celebrados, en fecha 23 de diciembre del 2017 y 11 de febrero del 2018, los gastos con motivo de los mismos fueron cubiertos con recursos provenientes del **gasto ordinario** del Partido Revolucionario Institucional<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> **PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.**- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar.

<sup>6</sup> Respecto a estos gastos se dará seguimiento en el marco de la revisión del informe anual de ingreso y gasto correspondiente al ejercicio 2018.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

Cabe señalar que en fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho el otrora precandidato denunciado dio respuesta al requerimiento de información mediante escrito sin numeren el cual vierte las mismas consideraciones que se señalan en el oficio signado por el Representante del instituto político denunciado.

Ahora bien, continuando con la línea de investigación a efecto de corroborar el registro de los gastos presuntamente erogados consistentes en **lonas de estructura fija metálica, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros “sugerencias” y “buzón” con logotipo del partido, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), volante, publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas “Boom” y “Esencia”, así como batucada, bici taxis, autobuses, escenario monumental y escenario profesional, show cómico “doña clodo”, “taco de ojo” y “Dzereco” y “nohoch”, pantallas led, globos, gorras, servicio de meseros, mantelería, desechable, renta de salones para eventos, espectaculares, toldos y lonas exteriores**, se procedió a efectuar una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), con la finalidad de detectar el registro de los conceptos especificados anteriormente, para lo cual la autoridad electoral en fecha nueve de marzo de dos mil dieciocho levantó razón y constancia de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) respecto de los gastos denunciados, objeto de la queja.


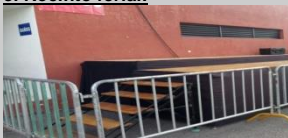
A continuación, se detallan los resultados obtenidos:

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
1	“Casa del Pueblo”	23-dic-17	-4 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona estructura fija. II. Aplaudidores de plástico. III. Banderas.	<b><u>Póliza número 78. Reg. Prov. Factura 18915.</u></b> -Factura 18915. Conceptos: Aplaudidores. Playeras Polos de algodón. Camisas de algodón Sahuí. Banderitas. Camisas de algodón de apoyo municipios.	-Póliza número 109 Reg. Prov. Varias Facturas Víctor Manuel Ojeda Castro, así como la Factura A 1786.  Es importante resaltar que en su escrito de respuesta el PRI señala que los gastos erogados con motivo del mismo fueron cubiertos con gasto ordinario.	N/A.
2	Mérida, Yucatán	27-ene-18	-4 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional de	<b><u>Póliza número 75. Reg. Prov. Factura 18895 sport Depot.</u></b> -Factura 18895. Conceptos: Playera roja de 100% algodón.		EVENTO REPORTADO. (Dicho evento fue cancelado)


**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
			fondo o "back". II. Equipo de iluminación profesional. III. Templete de madera y metal. IV. Sillas metálicas y de plástico. V. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). VI. Playeras con el nombre del precandidato. VII. Caja rotulada que dice "sugerencias". VIII. Volante.	Buzón de cartón con impreso "Buzón del precandidato Mauricio Sahui Rivero, precandidato a Gobernador".		
3	Mérida, Yucatán	30-ene-18	-4 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Equipo de iluminación profesional. III. Templete de madera y metal. IV. Sillas. V. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). VI. Playeras con el nombre del precandidato. VII. Caja rotulada que dice "buzón".	<b>Póliza número 8. Reg.Prov. Factura 2465 Mariana Buenfil Valero.</b> -Factura 2465. Conceptos. Lona biodegradable 4x3	-Pólizas números 8, 62, 63 y 75, así como las facturas L17 e I14, B30, B31, I17 e I14 y por último la factura número 18895.	EVENTO REPORTADO.
4	Local "Jhony"	31-ene-18	-1 captura de pantalla respecto a la propaganda dentro de red social denominada Instagram, en la cual se busca posicionar el nombre, imagen y aspiración del C. Mauricio Sahui Rivero. 4 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Alimentos (emparedados o tortas). II. Lona promocional en estructura metálica. III. Playeras con el nombre del precandidato. IV. Sillas. V. Contratación de una banda musical.	<b>Póliza número 93. Reg. Fac B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51. Víctor Manuel Ojeda Alimentos.</b> -Facturas B-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Conceptos: Servicios de suministro de alimentos que incluyen: Refrescos. Aguas. Tarima pequeña. Equipo de sonido. Audio e iluminación. Video. Animación.	-Pólizas números 8, 75 y 76, así como las facturas 2465, A 18895 y B35.	EVENTO REPORTADO.
5	Parque de los muertos	01-feb-18	-5 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Equipo de iluminación profesional. III. Templete. IV. Camisetas rojas. V. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). VI. Sillas		-Pólizas 8, 77, 75, 77 y 76, así como las facturas 2465, I26, A18895 Y B37	EVENTO REPORTADO.
6	Local de fiestas y reuniones "Ricardo Palmerín"	02-feb-18	-6 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Renta de salón. II. Lona promocional en estructura metálica. III. Templete de madera y metal. IV. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). V. Sillas metálicas y de plástico. VI. Reflectores. VII. Banda musical. VIII. Bici taxis	<b>Póliza número 79. Reg. Cancelación de factura I-25 Jorge Alfredo Medina Peraza.</b> -Factura I-25. Conceptos. Servicios de instalación de equipos de sonido especializado que incluye: Equipo de sonido. Iluminación. Video. Planta de Luz	-Pólizas 8, 76 y 77, así como las facturas 2465, I23, B39.	EVENTO REPORTADO.
7	Feria "Xmatkuil" del municipio de	03-feb-18	-12 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales	<b>Póliza número 63. Reg. Prov. Facturas I4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 y 17 Jorge Alfredo</b>	-Pólizas 62, 67, 71, 73, 77, 78, 103, así como las facturas 11261, I21, 8914,	EVENTO REPORTADO.



**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
	Mérida, Yucatán		como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Escenario profesional con estructuras e iluminación profesional. III. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora) IV. Pantallas. V. Sillas metálicas y de plástico. VI. Reflectores e iluminación profesional. VII. Banda musical. VIII. Autobuses, IX. Escenario monumental con lona promocional. X. Aplaudidores. XI. Playeras con nombre del precandidato. XII. Camisas bordadas con el logotipo del PRI y el Apellido Sahui. XIII. Banda musical	<p><u><b>Medina Peraza.</b></u> -Facturas I-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 17. Conceptos: Servicios de instalación de equipos de sonido especializado que incluye: Equipo de sonido. Audio e iluminación. Video Planta de Luz. Bocinas. Micrófonos. Consola de Audio. Lámparas de Led Cámara Digital.</p> <p><u><b>Póliza número 103. Reg. Fact. 8914 Sillas Alquiladora Camino.</b></u></p>  <p><u><b>Póliza número 74. Renta del centro de espectáculos para evento "Encuentro de priistas por Yucatán".</b></u> -Factura 3485. Conceptos: Renta del Centro de Espectáculos el día 3 de febrero de 2018 para el evento "Encuentro de Priistas por Yucatán"</p> <p><u><b>Póliza número 137. Reg. Cancelación de factura 1447 por factura 1454 de José Ernesto Álvarez. Arrendamiento eventual de inmuebles.</b></u> -Factura 1454 Servicios de Banquetes y catering (sillas metálicas)</p> <p><u><b>Póliza número 67. Renta de tarimas, escenario, escaleras vayas, etc. para evento priistas por Yucatán del 3 febrero en la plaza montejo en el Recinto ferial.</b></u></p>  <p>-Factura 11261. Renta de: (Incluye montaje y desmontaje). Tarimas. Escenario. Escaleras. Vayas. Impresión de lonas</p>	6014, B33, AA3 y 18915.	

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
				<p><b><u>Póliza número 71. Renta de 19 camiones para evento "Encuentro de priistas de Yucatán" en plaza montejo en el recinto ferial de Xmatkuil.</u></b></p> 		
8	Parque Miraflores	05-feb-18	-4 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Templete de madera y metal. III. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). IV. Sillas metálicas y de plástico. V. Reflectores. VI. Banda musical.	<p><b><u>Póliza número 96. Reg. Fact B64 y B65 renta de sillas Víctor Manuel Ojeda.</u></b></p> <p>-Facturas 64 y 65. Conceptos: Sillas para visitantes Incluye: Tarima pequeña. Inmobiliario de mesas. Sillas, baños portátiles, y flete.</p>	-Pólizas 8, 95, 116, así como las facturas 2465, B64 e I35.	EVENTO REPORTADO.
9	Parque público de la Ciudad de Mérida, en la colonia Amalia Solórzano	05-feb-18	-1 fotografía en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Templete de madera y metal. III. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). IV. Sillas metálicas y de plástico. V. Reflectores. VI. Banda musical		-Pólizas 8, 95, 116, así como las facturas 2465, B65 e I36	EVENTO REPORTADO.
10	Plaza principal del Municipio de Motul, Yucatán,	07-feb-18	<p>-13 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Playeras rojas con la imagen del precandidato. III. Templete de madera y metal. IV. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). V. Sillas metálicas y de plástico. VI. Reflectores. VII. Show cómico a cargo de los comediantes "Doña Clodo" y "Taco de ojo". VIII. Banda musical "El Boom". IX. Autobuses</p> <p>-3 notas electrónicas que constan en las páginas siguientes:</p> <p><a href="http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/">http://www.defrentenoticias.com/fiesta-popular-motul-visita-mauricio-sahui/</a></p> <p><a href="http://masnoticiasureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-">http://masnoticiasureste.com/2018/02/08/fiesta-popular-en-</a></p>	<p><b><u>Póliza número 77. Reg. Prov. Factura 1-22-23-24-25-26-27-28 de Jorge Alfredo Medina Peraza.</u></b></p> <p>-Factura I-22, 23, 24, 26, 27. Conceptos: Servicio de instalación de equipo de sonido especializado, que incluye: Equipo de sonido. Audio e iluminación. Video, el cual incluye: (Planta de Luz. Bocinas. Micrófono. Consola de Audio. Lámparas de Led Cámara Digital.</p> <p>-Factura I-28 Servicio de instalación de equipo de sonido especializado, que incluye: Equipo de sonido. Audio e iluminación. Video, el cual incluye: Planta de Luz.</p> <p><b><u>Póliza número 72. Renta de 3000 sillas metálicas.</u></b></p> <p>-Facturas 6011, 73. Renta de</p>	-Facturas B55 e I32.	EVENTO REPORTADO.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
			<a href="http://motul-por-visita-de-mauricio-sahui/">motul-por-visita-de-mauricio-sahui/</a> <a href="http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/">http://reporteempresarial.com/fiesta-popular-en-motul-por-visita-de-mauricio-sahui/</a>	<p>Mobiliario (incluye montaje y desmontaje). Carpas 6x6. Sillas metálicas. Mesas triples con mantel. Hidratación. Hielera m. Factura 73.</p> <p>Renta de Mobiliario (incluye montaje y desmontaje)</p> <p>Carpas 6x6</p> <p>Sillas metálicas</p> <p>Mesas Triples con mantel</p> <p>Hidratación</p> <p>Hielera</p>  <p><b><u>Póliza número 95. Reg. Fact 129,130,131,132,133,134,135,136, equipo de sonido Jorge Alfredo Medina Perza.</u></b></p> 		
11	Parque de la Paz	08-feb-18	<p>-20 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Playeras rojas con la imagen del denunciado. III. Templete de madera y metal. IV. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). V. Sillas metálicas y de plástico. VI. Reflectores. VII. Show cómico a cargo de los comediantes conocidos como "Dzereco" y "Nohoch". VIII. Autobuses. IX. Alimentos. X. Globos. XI. Banderas. XII. Gorras con el nombre "Sahui". XIII. Playeras con el nombre del precandidato.</p> <p>-1 nota electrónica que consta en la página siguiente</p>	<p><b><u>Póliza número 93</u></b></p> <p><b><u>Reg. Fac B43, B44, B45, B46, B47, B48, B49, B50, B51.</u></b></p> <p><b><u>Victor Manuel Ojeda.</u></b></p> <p><b><u>Alimentos.</u></b></p> <p>-Facturas B-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51. Conceptos.</p> <p>Servicios de suministro de alimentos que incluye: I. Refrescos. II. Aguas. III. Tarima pequeña. IV. Equipo de sonido. V. Audio e iluminación. VI. Video Animación.</p>	<p>-Pólizas 8,75, 94 y 95, así como las facturas 2465, A18895, B57 e 134.</p>	EVENTO REPORTADO.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/35/2018/YUC**

No.	Evento Denunciado	Fecha	Pruebas aportadas por el denunciante	Documentación localizada en el SIF	Elementos aportados por el Partido Revolucionario Institucional	Agenda Eventos
			<a href="http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/">http://www.defrentenoticias.com/masivo-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-progreso/</a>			
12	Municipio de Ticul, Yucatán, dentro del local Centro Social Maya	09-feb-18	<p>-23 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Playeras rojas con la imagen del denunciado. III. Templete de madera y metal. IV. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). V. Sillas metálicas y de plástico. VI. Reflectores. VII. Show cómico a cargo del comediante conocido como "Taco de ojo". VIII. Grupo musical "Esencia". IX. Batucada o banda de tambores. X. Autobuses. XI. Alimentos. XII. Bebidas. XIII. Globos. XIV. Banderas. XV. Gorras con el nombre "Sahui". XVI. Renta de salón. XVII. Servicio de meseros. XVIII. Mantelería. XIX. Desechables.</p> <p>-1 publicidad de dentro de red social denominada Facebook, la cual presenta mensajes alusivos a la persona del C. Mauricio Sahui.</p> <p>-1 nota electrónica que consta en la página siguiente:</p> <p><a href="http://www.defrentenoticias.com/realizan-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/">http://www.defrentenoticias.com/realizan-festejo-cumpleanos-mauricio-sahui-ticul/</a></p>	<p><b><u>Póliza número 100. Reg Fcat i37 y i38 equipo de sonido Jorge Alfredo Medina Peraza.</u></b></p> <p>-Facturas I-37 y 38. Conceptos. Servicios de instalación de equipos de sonido especializado que incluye: Equipo de sonido. Audio e iluminación. Video. Planta de Luz. Bocinas. Micrófonos. Consola de Audio. Lámparas de Led. Cámara Digital. Animación musical</p> <p><b><u>Póliza 104.</u></b></p> <p>-Factura 64. Servicios de campañas publicitarias Producción de Spots de Radio, televisión, jingle, paquete de gestión y/o desarrollo de videos web simples, digital en FB y Cuota de la empresa por manejo de pauta (5%)</p>	-Pólizas 8, 64, 66, 75, 99 y 100, así como las facturas 2465, A18895, B67 e I38	EVENTO REPORTADO.
13	Recinto conocido como Polifórum Zamna	11-feb-18	<p>10 fotografías en donde se pueden apreciar la utilización de diversos artículos tales como: I. Lona promocional en estructura metálica. II. Lonas espectaculares. III. Playeras con la imagen del denunciado. IV. Playeras tipo polo con el hashtag #fuerzasahui. V. Playeras tipo polo con la leyenda "Sahui18". VI. Templete de madera y metal. VII. Equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora). VIII. Pantallas LED. IX. Sillas metálicas y de plástico. X. Reflectores. XI. Autobuses para transportación de asistentes. XII. Globos. XIII. Toldos y lonas de exterior. XIV. Banderas. XV. Gorras con el nombre "Sahui". XVI. Renta de salón.</p>	En relación a los gastos con motivo de la realización del evento, el PRI señaló en su oficio de respuesta que los mismos se realizaron con recurso del gasto ordinario y que estos serían reportados en el informe anual correspondiente; sin embargo de la revisión realizada al SIF se localizaron pólizas que amparan el reporte de gasto en el informe de precampaña por concepto de playeras con la imagen del denunciado, playeras tipo polo con el hashtag #fuerzasahui, playeras tipo polo con la leyenda "Sahui18" y por la gorras con el nombre "Sahu".	-El Partido Revolucionario Institucional, así como el C. Mauricio Sahui Rivero reportan dicho evento como un gasto ordinario.	N/A



Es importante mencionar que respecto al evento de fecha 27 de enero de 2018, el mismo, fue cancelado con el identificador (00066); como consta en el Reporte del Catálogo Auxiliar de Agenda de Eventos del SIF, sin embargo, de la revisión que se realizó en el referido Sistema, esta autoridad detectó que los gastos con motivo de dicho evento fueron reportados por el sujeto obligado en el informe de precampaña correspondiente.

En relación a la propaganda denunciada en redes sociales derivado de la revisión realizada por esta autoridad fiscalizadora en ejercicio de sus facultades al Sistema Integral de fiscalización se localizó la Póliza 104, en la cual se reportó propaganda en redes sociales.

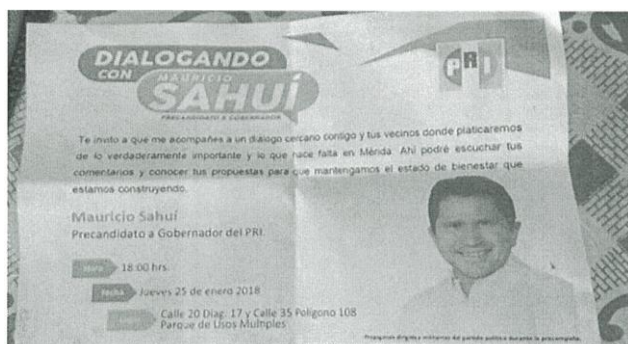
Ahora bien, es importante señalar que las fotografías y la documentación proporcionada tanto por el quejoso como por el Partido Revolucionario Institucional y por su entonces precandidato, el C. Mauricio Sahuí Rivero, constituyen documentales privadas y pruebas técnicas en términos de los artículos 16, numeral 2 y 17 numeral 1, del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización, que en concordancia con el artículo 21, numeral 3, del citado reglamento, al ser adminiculadas entre sí y con las razones y constancias levantadas por el Director de la Unidad de Fiscalización respecto de la información arrojada por el Sistema Integral de Fiscalización; hacen prueba plena, por lo que los gastos denunciados por concepto de lonas, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros “sugerencias” y “buzón” con logotipo del partido, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas “Boom” y “Esencia”, así como batucada, autobuses, escenario monumental y escenario profesional, show cómico “doña clodo”, “taco de ojo” y “Dzereco” y “nohoch”, meseros, mantelería, desechable y renta de salones para eventos, así como propaganda en redes sociales fueron reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización, por lo tanto no se desprende omisión alguna por parte del denunciado.

Por cuanto hace al supuesto gasto realizado por concepto de un volante, bicitaxis y autobuses, esta autoridad no cuenta con mayores elementos de prueba que vinculen el contenido de las mismas con un presunto beneficio a favor del entonces precandidato o en su caso partido político denunciado; del mismo modo del análisis integral realizado al expediente en estudio no desprendieron elementos que permitieran a esta autoridad determinar la existencia de conductas

que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; por lo que, del escrito de queja no se advierten mayores elementos de prueba que concatenados entre sí generaran convicción a esta autoridad en cuanto a los hechos que pudieran desprenderse de estas.

Para mayor referencia se adjuntas las pruebas técnicas aportadas por el quejoso respecto a los conceptos de gasto previstos en el párrafo anterior.

### **Volante**



La prueba presentada por el quejoso respecto del "volante", en papel couché fondo blanco, tipografías en colores negro, rojo y verde, entregado a la totalidad de asistentes al acto proselitista realizado el día 27 de enero de 2018 en la ciudad de Mérida, Yucatán, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituye una prueba técnica, la cual solo puede alcanzar valor probatorio pleno como resultado de su adminiculación con otros elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio, para generar convicción sobre la veracidad de lo afirmado, por lo que su alcance probatorio se determinará en el estudio de fondo de la controversia planteada.

La autoridad instructora procedió a realizar el análisis minucioso de la prueba presentada por el quejoso, advirtiéndole que si bien la imagen inserta en el escrito de queja presume ser un "volante" el cual contiene propaganda en beneficio del incoado, la misma no precisa las circunstancias individualizadas de tiempo, modo y lugar, sin que existan otros medios objetivos que permitan corroborar el contexto en el que supuestamente acontecieron los hechos denunciados, por lo que al carecer de certeza en relación con el elemento temporal esta autoridad electoral desestima el valor probatorio que pretende atribuirse a la prueba técnica.

Bicitaxis y autobuses.



En virtud de lo anterior, del simple contenido de las pruebas técnicas, no se advierten elementos que actualicen conductas que vulneren disposiciones en materia de fiscalización; aunado a ello, es oportuno señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha señalado que las fotografías (imágenes) como medio de prueba son susceptibles de ser manipuladas, por lo que resulta un medio probatorio limitado.

En primer término, esta autoridad no es omisa en señalar que las pruebas con las que sustenta su escrito de queja el hoy quejoso consisten en pruebas técnicas, lo anterior resulta fundamental para determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso para acreditar y probar la pretensión formulada. En efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “**PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN**”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al establecer que “... *la prueba técnica identifica a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.*”

En este sentido, en razón de su naturaleza, por sí mismas las pruebas técnicas no acreditan los hechos o circunstancias que reproduce la misma.

A mayor abundamiento, las imágenes referidas no arrojan indicio alguno que permita considerar una línea de investigación para determinar si existió un beneficio a la precampaña de la C. Mauricio Sahuí Rivero, postulado por el Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del estado de Yucatán por los conceptos denunciados en el escrito de queja.

Por las razones expuestas en párrafos anteriores y en virtud del cuadro inserto a la presente Resolución, al haberse observado que los conceptos de gastos consistentes en: **lonas, aplaudidores de plástico, banderas con el logotipo del PRI, equipo de iluminación profesional (reflectores), templete de madera y metal, sillas metálicas y de plástico, playeras rojas y camisetas bordadas tipo polo, cajas rotuladas con letreros “sugerencias” y “buzón” con logotipo del partido, equipo de sonido (bocinas, micrófono y mezcladora), publicidad pagada en redes sociales, alimentos y bebidas, contratación de bandas musicales denominadas “Boom” y “Esencia”, así como batucada, autobuses, escenario monumental y escenario profesional, show cómico “doña clodo”, “taco de ojo” y “Dzereco” y “nohoch”, meseros, mantelería, desechable y renta de salones para eventos**, materia de denuncia de la queja respectiva, fueron registrados y reportados a través del Sistema Integral de Fiscalización (SIF), tal como lo establece la normativa aplicable, por lo que ésta autoridad determina que, a pesar de la imperfección de las pruebas técnicas ofrecidas por el denunciante, y de acuerdo al principio de exhaustividad, esta autoridad fiscalizadora se allegó de mayores elementos que generaron la convicción de la existencia de dichas operaciones así como el registro de éstas en el referido sistema.

Visto lo anterior, esta autoridad cuenta con elementos de certeza suficientes para acreditar que el sujeto denunciado reportó ante la autoridad electoral, en el marco de la revisión de los informes de precampaña correspondiente, los gastos denunciados.

En razón de los argumentos expuestos, este Consejo General determina que no existen elementos que lleven a concluir que el entonces precandidato al cargo de Gobernador del estado de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero y el Partido

Revolucionario Institucional, hayan transgredido lo preceptuado en los artículos 25, numeral 1, incisos a), 79, numeral 1, inciso a), fracción I, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 127 del Reglamento de Fiscalización; 443, numeral 1, inciso a) y 243 numeral 1 en relación con el 445 numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, motivo por el cual esta autoridad considera debe declararse **infundado** el presente procedimiento administrativo de queja.

- **Apartado B. Seguimiento.**

Como consta en autos, a través de los oficios número INE/UTF/DRN/22356/2018 e INE/JLE/EF-YC/0080/18, se emplazó al Partido Revolucionario Institucional y a su otrora precandidato, el C Mauricio Sahuí Rivero, respectivamente, para que en un plazo improrrogable de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se recibieran dichos oficios, contestaran por escrito lo que consideraron pertinente, exponiendo lo que a su derecho convenga, así como para que ofrecieran y exhibieran las pruebas que respaldaran sus afirmaciones, presentarán alegatos y en su caso la documentación pertinente.

Derivado de lo anterior, a través de sus respectivas contestaciones a los emplazamientos señalados en el párrafo que antecede, tanto el Partido Revolucionario Institucional como su otrora precandidato, el C. Mauricio Sahuí Rivero señalaron lo siguiente:

*“Por otra parte, en lo relativo a los eventos desarrollados el 23 de diciembre de 2017 en la Casa del Pueblo y el 11 de febrero de 2018 en el Polifórum Zamná se informa que los gastos erogados fueron cubiertos con **el gasto ordinario** del Partido Revolucionario Institucional.”*

En ese sentido, del análisis a lo señalado por los denunciados, así como a las evidencias de las que se allegó esta autoridad electoral, se determinó que los gastos con motivo de dos eventos, siendo el primero de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete y el segundo del once de febrero de dos mil dieciocho, estos fueron cubiertos con el gasto ordinario del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Yucatán, derivado de lo anterior, los mismos no fueron reportados en el informe de precampaña del C. Mauricio Sahuí Rivero.

Lo expuesto derivado de que los conceptos denunciados tales como banderas, aplaudidores y lonas con las siglas PRI, en colores verde, blanco y rojo, templete, equipo de sonido, pantallas Led; sillas metálicas y de plástico, reflectores, globos, toldos y lonas de exterior, se trata de propaganda institucional<sup>7</sup>, la cual no aporta un beneficio específico y directo a la precampaña del incoado, es decir, que la propaganda utilitaria denunciada no contiene una mención específica de la precampaña supuestamente beneficiada, no hace referencia a una temporalidad, no contiene la mención expresa del nombre del precandidato y tampoco hace un llamado expreso al voto.

Por lo anterior se obtiene que, al tratarse de propaganda genérica, el gasto por concepto de la misma debe ser reportada en el informe anual correspondiente, ya que, del análisis de las pruebas técnicas contenidas en el expediente, no es posible identificar un supuesto beneficio al otrora precandidato Mauricio Sahuí Rivero.

Luego entonces, lo procedente es dar seguimiento a efecto que la Unidad Técnica Fiscalización en el marco de la revisión del informe anual 2017 y en su caso 2018 del Partido Revolucionario Institucional, realice la revisión a los gastos señalados con anterioridad.

**3.** Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

---

<sup>7</sup> Acuerdo por el que se determinan las Reglas para la Contabilidad, Rendición de Cuentas y Fiscalización, así como los gastos que se consideran como de Precampaña para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 8 de diciembre de 2017, mediante el acuerdo INE/CG597/2017.

## RESUELVE

**PRIMERO.** Se declara **infundado** el procedimiento administrativo sancionador electoral en materia de fiscalización instaurado en contra del **Partido Revolucionario Institucional** y su otrora precandidato al Gobernador del estado de Yucatán, el C. Mauricio Sahuí Rivero, en los términos de lo expuesto en el **Apartado A, Considerando 2**, de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización dar seguimiento de los gastos ordinarios detectados respecto a dos eventos, siendo el primero de fecha veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete y el once de febrero de dos mil dieciocho respectivamente, en los términos de lo expuesto en el **Apartado B, Considerando 2**, de la presente Resolución.

**TERCERO.** Se instruye a la Dirección Jurídica para que haga del conocimiento a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético.

**CUARTO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que por su conducto, se remita la presente Resolución a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Local Electoral en el estado de Yucatán y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos obligados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

**QUINTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SEXTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

INE/CG407/2018

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

Ciudad de México, 25 de abril de dos mil dieciocho.

**VISTO** para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**.

**ANTECEDENTES**

**I. Escrito de queja presentado por el C. Fernando Enrique Mayans Canabal.** El cinco de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización recibió un escrito de queja signado por el C. Fernando Enrique Mayans Canabal, en el que "(SIC) ...**presenta denuncia** por irregularidades en materia de origen, destino y fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos y Precandidatos, que se han consumado en mi perjuicio, aprovechando mi intención de contender como **PRECANDIDATO DE GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO, consumadas** por el **Partido de la Revolución Democrática (PRD)** toda vez que **A PESAR DE HABER RENUNCIADO FORMALMENTE AL REGISTRO DE PRECANDIDATO**, por así convenir a mis intereses, **desde el día 28 de diciembre de 2017**, como consta del escrito correspondiente que se agrega como prueba, **TAL PARTIDO POLÍTICO HA EJERCIDO LA FINANCIACIÓN PÚBLICA OTORGADA A MI OTRORA PRECANDIDATURA...**"(SIC). (Fojas 01 a 117 del Expediente).

**II. Hechos denunciados y elementos probatorios.** De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se enlistan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso, los cuales se señalan a continuación:



“(…)

**HECHOS:**

1.- Con fecha 17 de diciembre de 2017 me inscribí como Precandidato del PRD a Gobernador del Estado de Tabasco para el periodo 2018-2024. Sin embargo, por cuestiones de carácter personal y por así convenir a mis intereses, decidí retirarme de dicho proceso, por lo que el día 28 de diciembre de 2017, presenté por escrito ante la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, mi desistimiento al registro de precandidato a Gobernador del Estado, como lo acredito con la constancia correspondiente que se ofrece como prueba y que se describe en el capítulo correspondiente.

2. No obstante mi renuncia expresa para no participar como precandidato del PRD en el proceso de elección de Gobernador del Estado de Tabasco, fui informado por algunos conocidos que no se había dado trámite a mi solicitud de renuncia y seguía apareciendo en los registros oficiales del PRD como precandidato, por la cual el 10 de enero de 2018 por escrito reitere mi solicitud a la Comisión Electoral de PRD y su Delegación en el Estado de Tabasco, mi voluntad de no ser considerado precandidato, insistiendo en que este hecho se aclarara, porque había ya presentado mi renuncia a dicha solicitud de registro, solicitando igualmente la devolución de la documentación que había entregado al efecto.

3- A pesar de lo anterior, me enteré que la Comisión Electoral del PRD en el Estado de Tabasco, el 05 de enero de 2018, emitió el Acuerdo ACUCECEN/75-1/DIC/2017, en el que se hace referencia a las solicitudes de registro de precandidatos al cargo de Gobernador del Estado, sin constar mi renuncia por escrito a dicho proceso, por lo que solicité a la Comisión, en fecha 6 de febrero del año en curso, me expidiera copia certificada de dicho Acuerdo, lo que no ha sucedido hasta la fecha.

4.- Recientemente me entere, que el PRD en el Estado de Tabasco, no solo no le ha dado trámite a mi renuncia y desistimiento a la precandidatura de Gobernador de Tabasco, sino que además, en la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del INE, han registrado movimientos de financiamiento público que me atribuyen en calidad de precandidato, a pesar de que nunca recibí del PRD ninguna información ni clave para acceder al portal correspondiente del Sistema Integral de Fiscalización (SIF) ni personalmente, ni a través de ninguna persona autorizada ha hecho movimiento alguno, insisto, por no tener claves de acceso al mencionado SIF 5.- Debo destacar que mediante un correo electrónico perteneciente al INE, bajo el sitio snr@ine.mx, el 12 de enero de 2018, se envió una comunicación a la cuenta

**CONSEJO GENERAL  
INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

de FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL, la CANCELACION DEL REGISTRO DE PRECANDIDATO A GOBERNADOR ESTATAL EN EL SNR, apareciendo el siguiente texto:

**“Estimado (a) FERNANDO ENRIQUE MAYANS CANABAL.  
Se le notifica que se ha realizado la Cancelación de la candidatura a GOBERNADOR ESTATAL de TABASCO como PROPIETARIO presentada para el Proceso Electoral LOCAL ORDINARIO 01-JUL-2018 TAB.**

**Fecha 12 de enero de 2018 Hora 16:03 DE LA CANCELACION.**

**Reciba un cordial saludo.”**

Se agrega como prueba la impresión directa que se obtuvo de tal comunicación

6.- No obstante la constancia oficial del INE arriba mencionada de que quedó CANCELADO MI REGISTRO COMO PRECANDIDATO A GOBERNADOR DEL ESTADO DE TABASCO, en la página de internet del INE continuo apareciendo registrado como precandidato a dicho cargo, además de que se siguen registrando en la página de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, operaciones económicas a mi nombre y con cargo al fondo oficial supuestamente destinado a los gastos relativos a mi precandidatura, que es jurídica y fácticamente inexistente, agregando como pruebas algunas de las constancias que indebidamente se han hecho de supuestos movimientos económicos realizados en el sistema SIF.

7.- Otro hecho grave que hago notar a esa autoridad electoral es que, también recientemente tuve conocimiento de que con fecha 14 de febrero del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática, envió o presentó ante el INE, sin tener conocimiento y sin mi autorización, un informe de precampaña reportado en cero, el cual se anexa copia, de lo que se desprende que indebidamente y en forma dolosa que el PRD ha venido utilizando indebidamente las claves que proporciona el INE, para el manejo de los recursos oficiales que se asignan a los precandidatos en la etapa de precampaña, claves que, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que nunca recibí material alguno para la presentación de un informe de precampaña, ni mucho menos para hacer movimientos en esa condición, ya que **renuncie expresamente desde el 28 de diciembre pasado a la calidad de precandidato del PRD para la gobernatura de Tabasco en el Proceso Electoral 2017-2018.**

8.- El día 15 de febrero de 2018 a las 17:17 horas se recibió un Correo electrónico de sif.utf@ine.mx dirigido a

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

*FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de cédula de \$316.958.40. Aclaro que esta no ha sido la única comunicación que he recibido de esta naturaleza, describiendo a continuación algunas más.*

*9.- Igualmente, el día 16 de febrero de 2018 a las 8:40 horas se recibió otro correo electrónico de [sif.utf@ine.mx](mailto:sif.utf@ine.mx) dirigido a FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de cédula de \$290,000.00 y el día 16 de febrero de 2018 a las 9:46 horas se recibió un correo electrónico de [sif.utf@ine.mx](mailto:sif.utf@ine.mx) dirigido a FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de célula de \$290,000.00.*

*10.-En condiciones similares el 16 de febrero de 2018 a las 12:50 horas se recibió un correo electrónico de [sif.utf@ine.mx](mailto:sif.utf@ine.mx) dirigido a FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez habilite su temporalidad, con un monto total de célula de que se \$316,958.40.*

*11.- El 17 de febrero de 2018 a las 3:16 horas se recibió un correo electrónico [sif.utf@ine.mx](mailto:sif.utf@ine.mx) dirigido FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de célula de \$29,000.00.*

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

12.- El 17 de febrero de 2018 a las 3:54 horas se recibió un correo electrónico *sif.utf@ine.mx* dirigido *FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM* en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad, con un monto total de célula de \$29,000.00.

13.- El mismo día 17 de febrero de 2018 a las 11:57 horas se recibió un correo electrónico de *sif.utf@ine.mx* dirigido a *FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM* en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de célula de \$316,958.40.

14.- El día 17 de febrero de 2018 a las 13:56 horas se recibió un correo electrónico de *sif.utf@ine.mx* dirigido a *FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM* en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, ha realizado la cancelación de un prorrateo, mismo que no había sido registrado en su contabilidad, con un monto total de célula de \$29,000.00.

15.- El día 17 de febrero de 2018 a las 19:02 horas se recibió un Correo electrónico de *sif.utf@ine.mx* dirigido a *FERNANDOMAYANSCANABAL2018@GMAIL.COM* en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional de OFICINAS CENTRALES, le ha efectuado el prorrateo de un gasto, mismo que deberá registrar en sus operaciones contables una vez que se habilite su temporalidad; con un monto total de célula de \$47,200.40.

16.- Frente a esta situación irregular y al verificar que, no obstante haber renunciado a ella, seguía apareciendo en los registros oficiales como precandidato del PRD a Gobernador de Tabasco, con fecha 25 de febrero de 2018, presenté ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco un escrito haciéndoles saber estas circunstancias y que había renunciado oficialmente a dicha precandidatura del PRD desde el 28 de diciembre de 2017, por lo que mediante **oficio número S.E./1903/2018 de fecha 26 de febrero de 2018**, se procedió, por parte de ese Instituto, a dar de

*baja mi registro como Precandidato de los libros de registro y de las listas de precandidatos.*

*17.- En estas circunstancias, las irregularidades señaladas respecto al registro de mi precandidatura en el SIF, es responsabilidad exclusiva del Partido de la Revolución Democrática, así como la indebida disposición de los recursos públicos de financiamiento público de la precandidatura, en virtud de haber omitido informar oportunamente sobre mi renuncia y desistimiento a dicha precandidatura desde el 28 de diciembre de 2017, y de no haber dejado sin efectos la misma, tal y como se los solicité, así como de las operaciones que han venido haciendo de manera simulada ante la unidad de Fiscalización del INE sobre los hechos y operaciones comentadas y que se acreditan con los documentos respectivos que se agregan como pruebas al presente escrito, reservándome mi derecho para denunciar estos hechos dolosos ante las autoridades competentes.*

*18.- Todo lo anterior es constitutivo de infracciones previstas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Fiscalización del origen y Destino de los Recursos de los Partidos Políticos, debiendo iniciar el procedimiento sancionador ordinario, para efecto de investigar y en su caso sancionar, a quienes resulten responsables de la indebida disposición de los recursos del financiamiento público.*

Los elementos aportados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados son los siguientes:

1.- **La Documental Privada**, consistente en escrito presentado ante la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática en Tabasco, donde el quejoso solicita desistirse de su registro como precandidato a Gobernador del Estado de Tabasco.

2.- **La Documental Privada**, consistente en escrito en el que el quejoso solicita a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo del PRD, Delegación en el Estado de Tabasco, no ser considerado precandidato, así como la devolución de la documentación entregada.

3.- **La Documental Privada**, consistente en escrito en el que el quejoso reitera la solicitud a la Comisión Electoral del Comité Ejecutivo del PRD, Delegación en el Estado de Tabasco, para no ser considerado precandidato a Gobernador de Tabasco.

4. **La Documental Privada**, consistente en escrito en el que el quejoso solicita a la Comisión Electoral del PRD en Tabasco, copia del Acuerdo ACUCECEN/75-1/DIC/2017.

5.- **La Documental Privada**, consistente en impresión en donde se señala que ha sido aprobado el registro del quejoso como precandidato a GOBERNADOR DE TABASCO, por el Partido de la Revolución Democrática.

6.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de la cuenta de fernandomayanscanabal2018@gmail.com, en donde se informa a Fernando Enrique Mayans Canabal, la cancelación del registro como precandidato a gobernador de Tabasco en el Sistema Nacional de Registro.

7.- **La Documental Privada**, consistente en escrito en el que se solicita a la Comisión Electoral del PRD en Tabasco, copia del Acuerdo ACUCECEN/75-1/DIC/2017.

8.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido a la cuenta del quejoso, en el cual se le informó que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional le ha efectuado el prorrateo de un gasto.

9. **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido a la cuenta del quejoso, en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, le efectuó el prorrateo de un gasto.

10.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, en el cual se le informo al quejoso que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, le efectuó el prorrateo de un gasto.

11.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, en el cual se le informo al quejoso que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña

ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional le efectuó el prorrateo de un gasto.

12.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido al quejoso en el cual se le informa que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, le efectuó el prorrateo de un gasto.

13.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido al quejoso, en el cual se le informó que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional le efectuó el prorrateo de un gasto.

14.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, en el cual se le informó al quejoso que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, le efectuó el prorrateo de un vez gasto.

15.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido al quejoso en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional realizó la cancelación de un prorrateo.

16.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido al quejoso en el cual se le informo que la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional, efectuó el prorrateo de un gasto.

17.- **La Documental Privada**, consistente en impresión de pantalla, dirigido a la cuenta del quejoso en el que se le que "la cuenta concentradora del PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRTATICA de la Precampaña ordinaria del Comité Ejecutivo Nacional efectuó el prorrateo de un gasto.

18.- **La Documental Privada**, consistente en escrito presentado ante el Instituto Electoral y de Participación ciudadana de Tabasco, en el cual renuncia al registro como precandidato a Gobernador del estado de Tabasco.

19.- **La Documental privada** consistente en oficio número S.E./1903/2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, mediante el cual informa que procedió a dar de baja de los libros de registro y de las listas de precandidatos al cargo de Gobernador del Estado de Tabasco.

### **III. Acuerdo de recepción y prevención al quejoso.**

- a) El nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja referido en el antecedente I, de la presente Resolución. En esa misma fecha se acordó integrar el expediente respectivo, se le asignara el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**, se registrara en el libro de gobierno, y se notificara su recepción al Secretario del Consejo General. (Foja 141 del expediente)
- b) Por otra parte, se ordenó prevenir al quejoso C. Fernando Enrique Mayans Canabal, a efecto de que en un plazo de tres días hábiles, contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación respectiva, manifieste a esta autoridad, las razones por las cuales estima que los hechos denunciados, pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados de los gastos realizados por el Partido de la Revolución Democrática en la etapa de precampaña al cargo de Gobernador del estado de Tabasco, dentro del Proceso Electoral Local en esa entidad federativa, lo anterior, de conformidad con el artículo 196, numeral 1; 199, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 33, numeral 1, en relación con el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

**IV. Notificación de recepción al Secretario del Consejo General.** El doce de marzo de dos mil dieciocho, mediante oficio **INE/UTF/DRN/22513/2018**, la Unidad



Técnica de Fiscalización notificó al Secretario del Consejo General la recepción del escrito de queja en cita. (Foja 164 del Expediente)

**V. Escrito presentado por el quejoso.** El nueve de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso presentó en la Unidad Técnica de Fiscalización escrito para “ampliar” la denuncia referida en el antecedente I. (Foja 118 a 140 del Expediente)

**VI. Notificación de la prevención al quejoso.**

- a) En cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 numeral 1, inciso a) del Reglamento de Procedimientos en materia de Fiscalización y de conformidad con el Acuerdo de nueve de marzo de dos mil dieciocho, la Unidad Técnica de Fiscalización realizó las diligencias de notificación correspondientes al **C. Fernando Enrique Mayans Canabal**, a efecto de notificar el oficio **INE/UTF/DRN/22499/2018**, mediante el cual se previene al quejoso.
- b) En atención a lo anterior, en fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho, compareció ante las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, el **C. Antonio Olvera Durán**, persona autorizada por el quejoso para recibir todo tipo de documentos y notificaciones en su escrito inicial de queja, quien se identificó con credencial para votar con fotografía número 2819065763287, expedida por el Instituto Nacional Electoral, por lo anterior, se procedió a la **notificación por comparecencia** del oficio **INE/UTF/DRN/22499/2018**, consistente en prevención al quejoso, para que en un plazo de tres días hábiles manifieste a esta autoridad, las razones por las cuales estima que los hechos denunciados, pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados de los gastos realizados por el Partido de la Revolución Democrática en la etapa de precampaña al cargo de Gobernador del estado de Tabasco, dentro del Proceso Electoral Local en esa entidad federativa.

**VII. Respuesta del C. Fernando Enrique Mayans Canabal.** El doce de marzo de dos mil dieciocho, en el término establecido para desahogar la prevención de mérito, el C. Fernando Enrique Mayans Canabal, presentó escrito sin número, señalando lo siguiente:

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

*“Que por medio del presente escrito, vengo a desahogar la prevención realizada en (SIC) resolución de fecha nueve de marzo del dos mil dieciocho...*

*(...)*

*“Como se mencionó en el escrito inicial, el pasado 17 de diciembre de 2017, el suscrito se inscribió como Precandidato al Gobierno de Tabasco para el periodo 2018-2024, sin embargo el pasado 28 de diciembre del mismo año, por así convenir a mis interés, acudí ante el Partido de la Revolución Democrática haciendo del conocimiento de ese órgano político mi decisión de renunciar o desistir a dicha precandidatura, así como a ese partido político. No obstante ello, fui informado que ese Instituto Político no había dado trámite a mi solicitud de renuncia y seguía apareciendo en los registros oficiales con el carácter de precandidato, causándome hasta este momento daños a mis derechos político electorales, por lo que por escrito de 10 de enero de 2018, reitere mi solicitud a la Comisión Electoral del PRD y su delegación en el estado de Tabasco, de no ser considerado como precandidato, solicitándole adicionalmente que ese hecho se aclarara, porque como se ha venido mencionando, desde el 28 de diciembre de 2017 había presentado mi renuncia a dicha solicitud de registro.*

*Así las cosas, con independencia de la afectación de mis derechos político electorales que me están causando al aparecer aun como precandidato al gobierno del estado de Tabasco, tengo conocimiento de que alguna persona, sin mi consentimiento y a pesar de que renuncie expresamente a la precandidatura mencionada, dispuso de los recursos que se me habían asignado como precandidato, AFECTANDO TANTO MI PERSONA Y DERECHOS POLITICO ELECTORALES, al haber usado mi nombre para disponer de dicho recurso público que ya no me asistía, pues como se ha mencionado renuncie y/o desistí expresamente a dicha precandidatura, también afecta mi persona porque al estar dado de alta aún como precandidato, me imposibilita para el ejercicio de otros derechos político electorales.*

*En el caso concreto, resulta procedente la presente denuncia e intervención de este Órgano Fiscalizador, ya que las conductas denunciadas sin lugar a dudas causan AGRAVIO Y PERJUICIO AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ASIGNADO POR LA ENTIDAD ELECTORAL, pues de conformidad con el artículo 1º, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, este ente "conocerá de todas las quejas, denuncias o procedimiento oficiosos que versen sobre el origen, monto, aplicación y destino de los recursos derivados del financiamiento de los sujetos obligados".*

*En efecto, es del interés y perjuicio del Instituto Nacional Electoral el presente asunto, porque no obstante mi renuncia expresa a la precandidatura y al Partido de la Revolución Democrática desde el 28 de diciembre de 2017, tengo conocimiento de que en la Unidad Técnica de Fiscalización Electoral del INE, se han registrado movimientos de financiamiento público, que se me atribuyen en mi calidad de precandidato a pesar de que como ya se dijo en el escrito inicial, NUNCA RECIBI NINGUNA INFORMACIÓN NI CLAVE PARA ACCEDER AL PORT CORRESPONDIENTE DEL SISTEMA INTEGRAL DE FISCALIZACIÓN para poder disponer de dichos recursos públicos, situación que se corrobora con las pruebas que obran en los autos del expediente en que se actúa De conformidad con el artículo 2° apartado XVII, del citado Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, cualquier persona física o moral tiene la facultad de hacer del conocimiento Instituto o de los Organismos Públicos Locales hechos presuntamente violatorios de la normatividad electoral federal, luego entonces, resulta procedente darle trámite a la presente denuncia en virtud de que el suscrito lugar a dudas tiene una legitimación e interés en que este órgano fiscalizador realice las investigaciones para fincar las responsabilidades correspondientes por el uso indebido incorrecta aplicación o desvió de recursos del fondo oficial supuestamente destinado a mi precandidatura e es jurídica y fácticamente inexistente, y al estarse denunciando expresamente En estas condiciones cuestiones relacionadas con la APLICACIÓN Y DESTINO de los recursos financiamiento que el Instituto asignó a mi público relativos precandidatura (inexistente por renuncia expresa), es indiscutible la intervención de este órgano fiscalizador, puesto que el Partido de la Revolución Democrática utilizando SIN MI AUTORIZACIÓN las claves y contraseñas para disponer del dinero asignado a mi precandidatura, dispuso sin mi consentimiento de dichos recursos, lo que sin duda representa una violación a las leyes electorales federales y hasta posibles conductas delictivas en perjuicio del financiamiento público.  
(...)*

**VIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado en la Décima Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales presentes integrantes de la Comisión de Fiscalización; la Consejera Electoral Licenciada Pamela Alejandra San Martín Ríos y Valles, la Consejera Electoral Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, el Consejero Electoral Doctor Benito Nacif Hernández, el Consejero Electoral Maestro Marco Antonio Baños Martínez y el Consejero Presidente Doctor Ciro Murayama Rendón.

Una vez sentado lo anterior, se procede a determinar lo conducente.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

**2. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.** Que por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas, pues de ser así deberá decretarse el desechamiento del procedimiento que nos ocupa, al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Cuando se analice una denuncia por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa el escrito respectivo, así como el material probatorio que se aporte para acreditar en un primer momento los elementos de procedencia de la queja, a efecto de proveer conforme a derecho sobre su admisión o desechamiento y, en este último caso, justificar que se está ante un supuesto evidente que autorice rechazar la queja o denuncia.

De la lectura preliminar al escrito de queja que nos ocupa, la instancia fiscalizadora advirtió que no se cumplía con los requisitos previstos en el artículo 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por tanto, dictó acuerdo en el que otorgó a la quejosa un plazo de tres días para que subsanara las omisiones presentadas en su escrito de queja, previniéndole que de no hacerlo así, se desearía el mismo en términos del artículo 31, numeral 1, fracción II, en relación con los artículos 33 del Reglamento aludido, dichos preceptos establecen lo siguiente:

**“Artículo 30.**

*1. El procedimiento será improcedente cuando:*

*I. Los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.*

**“Artículo 31.**

*1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en los casos siguientes:*

*(...)*

*II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.”*

**“Artículo 33.**

*1. En caso que el escrito de queja no cumpla con los requisitos previstos en las fracciones III, IV y V del numeral 1 del artículo 29; o en la fracción I del artículo 30; ambos del Reglamento, la Unidad Técnica emitirá un acuerdo en el que otorgue al quejoso un plazo de tres días hábiles improrrogables*

*contados a partir del momento en que se realizó la notificación, a fin de subsanar las omisiones, previniéndole que de no hacerlo, se desechará el escrito de queja.*

*2. Lo señalado en el párrafo que antecede resulta aplicable para el caso de que, aun habiendo contestado la prevención, y derivado del análisis que de ella haga la autoridad, ésta resulte insuficiente, no aporte elementos novedosos o verse sobre cuestiones distintas al requerimiento formulado.*

*(...)”*

De los preceptos transcritos se desprende lo siguiente:

- i)** Que la autoridad electoral debe prevenir al quejoso en aquellos casos en los que en la narración de hechos se desprenda que aunque pudieran resultar ciertos, de la narración en comento no se desprenden elementos por los que los mismos pudieran constituir un ilícito sancionable a través de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, ni se aporten las pruebas que soporten las aseveraciones en relación con los hechos denunciados concediéndole un plazo perentorio para que subsane dichos requisitos esenciales; y
- ii)** Que en caso de que no se subsanen las omisiones hechas valer por la autoridad electoral, la misma se encuentra facultada para desechar el escrito de queja respectivo.

Lo anterior es así, ya que la falta de elementos que permitan determinar que los hechos denunciados, pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino derivados del financiamiento del partido denunciado y la omisión de aportar elementos de prueba, aun con carácter indiciario, con los que cuente el quejoso y soporte su aseveración, se traduce en un obstáculo para que la autoridad pudiese trazar una línea de investigación, de tal manera que le posibilite realizar diligencias que le permitan acreditar o desmentir los hechos denunciados, pues la falta de elementos probatorios o indiciarios impiden que los hechos sean verosímiles.

En otras palabras, sólo si del escrito de queja se desprenden hechos o elementos suficientes aún con carácter de indicio que presupongan la veracidad de la realización de actos ilícitos presentes sancionables por la legislación aplicable, los cuales tuvieron verificativo en un contexto que pudiese incidir en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, la autoridad se encuentra

constreñida a ejercer sus facultades indagatorias a efecto de constatar que se está ante hechos que pudiesen constituir alguna infracción en materia de origen, destino y aplicación de los recursos de los partidos.

En atención a lo anterior, es procedente analizar si esta autoridad electoral debe desechar la queja identificada con el número de expediente **INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización vigente, que a la letra establece:

**“Desechamiento**

**Artículo 31**

*1. La Unidad Técnica elaborará y someterá a la aprobación de la Comisión el Proyecto de Resolución que determine el desechamiento correspondiente, en los casos siguientes:*

*(...)*

*II. Se actualice alguna causal de improcedencia contenida en el numeral 1, fracciones I y III del artículo 30 del Reglamento, sin que se desahogue la prevención, cuando proceda, en el plazo establecido.*

*(...)”*

En la especie, mediante oficio **INE/UTF/DRN/22499/2018/TAB**, se previno al quejoso para que manifestara a esta autoridad, las razones por las cuales estima que los hechos denunciados pudieran constituir alguna infracción en materia de origen, monto, aplicación y destino de los recursos, lo anterior de conformidad con el Acuerdo de prevención de nueve de marzo de dos mil dieciocho, toda vez que de los hechos narrados en su escrito de queja fue omiso en precisar las conductas infractoras en materia de fiscalización que según su dicho se actualizaron, situación vinculada a la omisión de aportar elementos de prueba que permitan acreditar sus aseveraciones, pues de dicha narración de los hechos no se advierte que los mismos por sí solos constituyan irregularidades en materia de origen y destino de los recursos de los partidos políticos.

Es preciso señalar que, a dicho del quejoso, las supuestas irregularidades de las que se duele son las siguientes:

“

(...)

*Como se mencionó en el escrito inicial, el pasado 17 de diciembre de 2017, el suscrito se inscribió como Precandidato al Gobierno de Tabasco para el periodo 2018-2024, sin embargo, el pasado 28 de diciembre del mismo año, por así convenir a mis interés, acudí ante el Partido de la Revolución Democrática haciendo del conocimiento de ese órgano político mi decisión de renunciar o desistir a dicha precandidatura, así como a ese partido político. **No obstante ello, fui informado que ese Instituto Político no había dado tramite a mi solicitud de renuncia y seguía apareciendo en los registros oficiales con el carácter de precandidato, causándome hasta este momento daños a mis derechos político electorales**, por lo que por escrito de 10 de enero de 2018, reitere mi solicitud a la Comisión Electoral del PRD y su delegación en el estado de Tabasco, de no ser considerado como precandidato solicitándole adicionalmente que ese hecho se aclarara, porque como se ha venido mencionando, desde el 28 de diciembre de 2017 había presentado mi renuncia a dicha solicitud de registro.*

*Así las cosas, con independencia de la afectación de mis derechos político electorales que me están causando al aparecer aun como precandidato al gobierno del estado de Tabasco, **tengo conocimiento de que alguna persona, sin mi consentimiento y a pesar de que renuncie expresamente precandidatura mencionada, dispuso de los recursos públicos que se me habían asignado como precandidato, AFECTANDO TANTO MI PERSONA Y DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES***, al haber usado mi nombre para disponer de dicho recurso público que ya no me asistía, pues como se ha mencionado renuncie y/o desistí expresamente a dicha precandidatura, también afecta mi persona porque al estar dado de alta aún como precandidato, me imposibilita para el ejercicio de otros derechos político electorales.

(...)”

[Énfasis añadido]

Al respecto, es importante considerar que los partidos políticos y precandidatos son responsables solidarios para efectos de irregularidades derivadas de violaciones a la normativa electoral en materia de fiscalización, es el caso que el partido político en la queja que nos ocupa, en el supuesto de que hubiera realizado registros contables (verbigracia prorratio), se encontraba dentro del límite de sus facultades y obligaciones, hecho que por sí solo no representa violación alguna a la normativa electoral en materia de fiscalización, por el contrario, se encuentra cumpliendo con la obligación de informar y registrar en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos por concepto de precampaña.



Lo anterior se robustece con el documento que el quejoso anexa a su escrito de queja, consistente en una impresión en donde se señala que ha sido aprobado el registro del quejoso como precandidato a GOBERNADOR DE TABASCO, por el Partido de la Revolución Democrática. En virtud de lo anterior, el partido político denunciado, en su carácter de obligado original para rendir los informes de ingresos y gastos que se deben presentar en el periodo de precampaña, y en cumplimiento a sus obligaciones en materia de fiscalización, se encontraba en posibilidad de realizar los movimientos contables que considerara procedentes, a efecto de que se revisaran en los multicitados informes de ingresos y gastos de precampaña.

De lo anterior, es dable sostener que para la admisión de quejas sobre el origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos la normatividad establece una serie de requisitos como lo son: i) que los hechos afirmados en la denuncia configuren, en abstracto ilícitos sancionables a través de este procedimiento; ii) que el escrito contenga las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hagan verosímil la versión de los hechos, esto es, que se proporcionen los elementos indispensables para establecer la posibilidad de que los hechos denunciados hayan ocurrido, tomando en consideración el modo ordinario en que suele dotarse de factibilidad a los hechos y cosas en el medio sociocultural, espacial y temporal que corresponda a los escenarios en que se ubique la narración, y iii) que se aporten elementos de prueba suficientes para extraer indicios sobre la credibilidad de los hechos materia de la queja; ello en virtud de garantizar la gravedad y seriedad de los motivos de la queja, como elemento necesario para justificar que la autoridad haga uso de su facultad de comprobación y realice las primeras investigaciones, y derivado de ello la posible afectación a terceros, al proceder a recabar los elementos necesarios para la satisfacción de su cometido.

Ahora bien, no obstante que el quejoso presentó un escrito dentro del plazo establecido para el desahogo de la prevención, así como un escrito de “ampliación” de denuncia, de su contenido no se advierte que desahogue el requerimiento de la autoridad, pues de su análisis no se desprende que los hechos denunciados configuren algún ilícito sancionable a través de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización; por lo que, lo procedente es desechar la queja de mérito, lo anterior de conformidad con los artículos 31, numeral 1, fracción II, en relación al 30, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/38/2018/TAB**

Al respecto, resulta aplicable lo establecido en la fracción I del numeral 1 del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, en virtud del cual una queja es improcedente cuando los hechos narrados en la denuncia resulten notoriamente inverosímiles, o aun siendo ciertos, no configuren en abstracto algún ilícito sancionable a través de este procedimiento.

En consecuencia, este Consejo General concluye que atendiendo a las razones y consideraciones de derecho antes vertidas, en la queja que originó el expediente en que se actúa, debe ser **desechada**.

**En atención a las consideraciones vertidas y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y aa) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

**R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se **desecha** la queja presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática, en términos del **Considerando 2** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Notifíquese personalmente al quejoso la Resolución de mérito.

**TERCERO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CUARTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Le pido que informe el contenido de las Resoluciones aprobadas identificadas con los números de apartado 7.2 y 7.3 a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, para los efectos conducentes.\_\_\_\_\_

Del mismo modo, continúe con el siguiente asunto del orden del día.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el seguimiento al procedimiento de acreditación de las y los Observadores Electorales, que participarán en el Proceso Electoral 2017-2018.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

De manera muy breve, solo para referir que este Informe ha sido conocido en la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral, y si bien este reporte nos refleja todavía un nivel de acreditación bajo de Observadores Electorales, tenemos 2 mil 546 a nivel nacional, hasta la fecha de corte de este Informe, pero traemos alrededor de otras 4 mil solicitudes en trámite, se están impartiendo los cursos de capacitación por parte de las áreas del Instituto y se está trabajando también en coordinación con los órganos electorales de los estados para lograr una mayor participación.\_\_\_\_\_

También quisiera mencionar que el Instituto Nacional Electoral, a través de diversos mecanismos ha logrado realizar alrededor de 15 mil acciones de promoción de la participación de los Observadores Electorales y redoblabamos esfuerzos en la parte final, dado que el plazo para solicitar la acreditación como Observador Electoral vence

el día 31 de mayo, y sería deseable contar con la participación de los ciudadanos en esta modalidad.\_\_\_\_\_

Es todo, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.\_\_\_\_\_

Creo que, es un momento y una ocasión oportuna para subrayar el punto final de su intervención, es decir, estamos en plazo, estamos en tiempo, existen las condiciones para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho a participar en ese Proceso Electoral como observadores, razón por la cual creo que es pertinente aprovechar este punto de su intervención, para desde aquí hacer un llamado a esta modalidad de participación ciudadana y de fortalecimiento del propio Proceso Electoral.\_\_\_\_\_

Estamos en un número de solicitudes recibidas que estamos a poco de alcanzar las cifras de solicitudes recibidas en 2012, en el Proceso Electoral de 2011-2012 y ojalá que podamos contar, insisto, con una cobertura superior ya que esto no solamente implica, repito, una, ejemplo, un punto adicional de la participación ciudadana a través de la modalidad de la observación, sino un mecanismo de garantía ya no de los partidos políticos, para eso están los representantes como los que nos ocuparon en el punto anterior, sino de la propia sociedad dado que como ustedes saben las reglas de la observación es entre otras la imparcialidad en su función desempeñando tal rol durante los Procesos Electorales.\_\_\_\_\_

Ahí están las cifras, ahí está el corte de cómo vamos y ahí está también sobre la mesa la invitación, ojalá y esta sea no sólo la Elección más grande, no solamente la Elección más fiscalizada, sino también la Elección más libre y eso implica también la más observada de las que hemos tenido.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza.\_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Creo que, esto es un punto de suma relevancia, es un elemento trascendente el contar con observadores como parte de estos eslabones que usted ha referido, que

se han referido al seno de este Consejo General, estos eslabones que nos van dando seguridad a todos, autoridad, contendientes y ciudadanía de que el proceso va conforme a lo establecido en las reglas, que los procedimientos se desarrollan, que las etapas van paulatinamente aconteciendo. \_\_\_\_\_

Me gustaría comentar algunas cifras haciendo eco de lo que referían en la presentación del punto en cuanto al número total de registros, de las personas que fueron capacitadas derivado de estos registros y de quienes finalmente fueron aprobados. Creo que, la variación de estas cifras nos debe de llevar a una conclusión, me atrevo a decir que válida y lo pongo en perspectiva, el interés ciudadano de participar en estos ejercicios de observación puede tener algunas fluctuaciones y me atrevo a especular, tal vez porque los procedimientos se han mejorado en forma sustancial, hay que reconocerlo y para bien que esta participación ha ido ajustándose porque los propios procedimientos y el propio reconocimiento del actuar de la autoridad va inmerso en ello. \_\_\_\_\_

Este interés ciudadano que ya se puede seguir el día de la Jornada Electoral conforme al Programa de Resultados Electorales Preliminares se puede conocer no sólo una estimación, sino el Acta misma de todas las Mesas Directivas de Casillas del país se ha ido consolidando un Sistema Electoral, en nuestro país, como lo he dicho en varias ocasiones, como no hay otro en el mundo, no podemos tener la misma perspectiva del observador; en sus inicios al observador que quiere ser partícipe en este nuevo Sistema Electoral Mexicano, cada vez más detallado, cada vez más pulcro, con procedimientos más observados con procedimientos que nos denotan una realidad diversa a la de años atrás. \_\_\_\_\_

Nosotros entendemos estas cifras en este contexto y consideramos que es bueno, no lo vemos en otro sentido, creo que es un buen documento, un buen Informe el que se nos presenta, y da cuenta también de aspectos muy concretos, va desglosado en cuanto a género, va desglosado en cuanto a ubicación geográfica, va desglosado en cuanto a edad y a mecanismos y espacios de difusión, respecto de las actividades, todo abona, este punto, junto con el punto quinto, que se trató previamente en el desarrollo de la sesión, en relación con los visitantes extranjeros, es parte de esta

cadena de custodia, de estos elementos que nos generan certidumbre a todos sobre la correcta realización de las distintas etapas de este Proceso Electoral.\_\_\_\_\_

Entonces, recibimos con agrado el Informe que está sobre la mesa, y consideramos que a la par, ya para concluir, finalmente este tipo de Informe, Consejero Presidente, señoras y señores Consejeros Electorales, dan muestra también de la transparencia con la que actúa este Consejo General, esta institución en la organización de las elecciones más complejas del país.\_\_\_\_\_

Sería cuanto, muchas gracias.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Buenas tardes, señoras y señores Consejeros y representantes.\_\_\_\_\_

En los artículos 217, numeral 1, inciso c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 187, numeral 2, del Reglamento de Elecciones, se establece que las solicitudes de registro para participar como Observadores u Observadoras Electorales podrán presentarse en forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan, y que el plazo para presentarla sería a partir del inicio del Proceso Electoral y hasta el 31 de mayo del presente año.\_\_\_\_\_

¿Qué nos arroja este Informe? Nos dicen que han recibido 6 mil 275 solicitudes, de las cuales 4 mil 914, o sea el 78 por ciento, fueron ingresadas por el Instituto Nacional Electoral y las restantes 1 mil 361, representa el 22 por ciento, captadas a través de los Organismos Públicos Locales.\_\_\_\_\_

El estado con mayor número de solicitudes para participar como Observadores es el Estado de México con 1 mil 761, que representa un 28 por ciento, y el que tiene el menor número de solicitudes presentadas es Nayarit, con tan solo 5 solicitudes.\_\_\_\_\_

Un dato relevante, es que, del total de solicitudes ingresadas, casi el 56 por ciento corresponde a mujeres y el 44 por ciento restante a hombres, mientras que el estado

de Zacatecas, tiene una participación de casi el 79 por ciento de hombres, el de Aguascalientes presenta una participación del 65 por ciento de mujeres como Observadoras Electorales. \_\_\_\_\_

Por último, este Informe nos indica que el rango de edad con mayor participación está entre los 21 y 25 años con casi un 20 por ciento. El de más baja participación es el rango de 61 a 65 con poco menos del 4 por ciento. \_\_\_\_\_

De la misma manera, este Informe da cuenta del total de solicitudes recibidas. \_\_\_\_\_

El 63 por ciento ya recibió una capacitación o por el Instituto Nacional Electoral o por un Organismo Público Local. \_\_\_\_\_

Pero, en este punto quisiera hacer una observación y ver la conveniencia de incluir en posteriores informes en una sola tabla y comparar las solicitudes presentadas, posteriormente las solicitudes aprobadas y luego las personas de esas aprobaciones que ya recibieron capacitación. \_\_\_\_\_

Esta situación nos daría una mayor dimensión del grado de participación y capacitación de la ciudadanía como Observadores Electorales de manera más integral. \_\_\_\_\_

Solo para finalizar y de manera muy puntual lo que considero que es un error, pero igual lo pregunto, si en el cuadro 5, Proceso Electoral 2017-2018, distribución de número de solicitudes recibidas y aprobadas por organización y por Entidad Federativa, dice: “En el apartado del estado de Nuevo León ubicado en la página 20 del Informe, se tiene la Organización Alianza Cívica de Nuevo León, A. C.”, pero de igual manera aparece en el estado de Oaxaca. \_\_\_\_\_

La pregunta es a la Comisión si esto es un error o efectivamente existen 2 asociaciones civiles con ese mismo nombre, una el en estado de Oaxaca y otra en el estado de Nuevo León. \_\_\_\_\_

Sería todo. Por su atención, gracias. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Solo una cuestión que ya un cuanto tanto señalé en la Comisión correspondiente y que ahora se lo formularía a usted de hecho, Consejero Presidente, para que Comunicación Social pudiera destacar el hecho, el dato que prácticamente el 50 por ciento de las solicitudes han provenido de jóvenes, o sea, menores de 30 años. \_\_\_\_\_  
Creo que, ahí hay una narrativa que hay que decir, plasmar en el Proceso Electoral. Los jóvenes sí están participando. De hecho, hoy por hoy serían 50.1 por ciento de jóvenes y se ha mantenido prácticamente en ese porcentaje, 49 por muy bajo, de jóvenes que han solicitado ser Observadores Electorales. \_\_\_\_\_

Creo que, es una buena noticia para el país y habría que comunicarla. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_

Permítanme un comentario antes de cerrar el punto. \_\_\_\_\_

Se trata de la misma organización en 2 estados distintos. \_\_\_\_\_

Gracias por permitirme esta aclaración. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones y tomando cuenta para futuros informes la sugerencia del Maestro Pedro Vázquez y del planteamiento que hacía el Consejero Electoral José Roberto Ruiz para hacer un énfasis en términos de comunicación y que en efecto hasta los 30 años de edad, estamos hablando del mayor número de observadores acreditados, damos por recibido el Informe. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, continúe con el siguiente punto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_



Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños para presentar el Proyecto de Acuerdo. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

La Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio de participación nacional impulsado por el Instituto Nacional Electoral con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura política democrática mediante la apertura de espacios para que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y propuestas respecto de temas que tienen que ver con sus espacios de convivencia y las condiciones para el ejercicio de derechos, con el fin de que sean escuchadas y atendidas por la sociedad, por el gobierno y por sus instituciones. \_\_\_\_\_

El Instituto Nacional Electoral ha organizado 7 ejercicios nacionales de participación infantil y juvenil que fueron convocados en el marco de cada Proceso Electoral Federal. \_\_\_\_\_

Dada la importancia de la participación de niñas, niños y adolescentes, el Instituto Nacional Electoral ha encaminado esfuerzos para mantener la experiencia de participación infantil y juvenil, ha decidido dotar a la Consulta de su propio espacio, de su propio tiempo para que tanto sus órganos centrales como los desconcentrados enfoquen sus recursos y los materiales necesarios para la realización de las Consultas, proponiendo para ello que en esta ocasión se lleve a cabo durante el mes de noviembre en el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño. \_\_\_\_\_

La Consulta es congruente con la línea de acción 2 de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA), denominada “difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los derechos humanos”, misma que se encuentra dentro del eje de verdad y con la línea de acción 6, promoción de la Cultura Cívica en los entornos escolares, del eje de diálogo, cuyo objetivo se centra en promover la Cultura Cívica y las prácticas democráticas en instituciones educativas del país, así como con la comunidad y su entorno inmediato. \_\_\_\_\_

De acuerdo con datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), derivado de la Encuesta Intercensal del año 2015, la República Mexicana tiene una población total cercana a los 20 millones de habitantes, de los cuales 51.4 por ciento son mujeres y 48.6 por ciento son hombres. De la misma encuesta se obtiene que el total de la población infantil y juvenil es de 43 y medio millones de niñas, niños y adolescentes, cuyas edades oscilan entre los cero y los 19 años, representando el 36.41 por ciento del total de la población. \_\_\_\_\_

Estos ejercicios de participación infantil y juvenil se han consolidado como una experiencia única a nivel nacional e internacional y han contribuido al reconocimiento y ejercicio del derecho a la participación a través de la expresión que niñas, niños y adolescentes comparten respecto de los diferentes asuntos que han sido tema de cada ejercicio realizado. \_\_\_\_\_

Para el diseño de los ejercicios nacionales, impulsados como iniciativa del Instituto Nacional Electoral desde 1997, se ha contado con el acompañamiento y con la asesoría de otras instituciones especializadas y de organizaciones de la Sociedad Civil, para dar continuidad a esta experiencia con la finalidad de contribuir a que el ejercicio se enmarque dentro del objetivo de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes en concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y de promover la participación cívica que contribuya al fortalecimiento de una cultura política democrática. \_\_\_\_\_

Se propone ahora la creación de este mismo Comité de acompañamiento que asesore al Instituto Nacional Electoral en el diseño, organización y desarrollo de la Consulta a partir del conocimiento especializado y la experiencia en materia de participación infantil y juvenil. \_\_\_\_\_

Para estos efectos estamos proponiendo a Mónica González Contró, quien es Doctora en derechos fundamentales por la Universidad Autónoma de Madrid, es Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México, es Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), miembro de la Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal, Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos

Humanos del Distrito Federal, y Consejera Honoraria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.\_\_\_\_\_

Sus líneas de investigación han sido: derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos y derecho a la no discriminación, justicia para adolescentes, entre otras.\_\_\_\_\_

También estamos proponiendo a Margarita Griesbach, Maestra en Investigación Educativa por la Universidad Iberoamericana, es Coordinadora y Directora General de Educación con los Niños Callejeros (EDNICA), institución de asistencia privada que defiende y promueve los derechos humanos de niñas, niños y jóvenes en situación de calle. \_\_\_\_\_

Es fundadora y Directora Asociada de Invención Social, y es fundadora y Directora General de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.\_\_\_\_\_

Ha realizado diversas consultorías para organismos nacionales e internacionales y es autora de diversos libros sobre la infancia, en Austin Texas trabajó en un refugio para mujeres maltratadas y para un grupo de apoyo para padres que han abusado de sus hijos física, emocional y sexualmente.\_\_\_\_\_

También estamos proponiendo a Nashieli Ramírez Hernández, quien se ha desempeñado como Coordinadora General de Ririki Intervención Social, actualmente es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, es fundadora e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, así como con la Mesa Social Contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México y el Colectivo contra la Trata, es integrante del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de Niños y Adolescentes, forma parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Protección Integral.\_\_\_\_\_

Es invitada permanente en el Comité Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, y Representante Social de la CITI del Distrito Federal.\_\_\_\_\_

Como podemos ver, se trata de una propuesta con gente con una reconocida trayectoria en estos temas.\_\_\_\_\_

Este Comité tendría como funciones auxiliar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la elaboración del Plan Operativo de la Consulta, asesorar a la propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la definición de la temática, elaborar la propuesta de preguntas, formatos y demás pormenores sobre la implementación de la Consulta, y también contribuir con la identificación, el intercambio y el análisis de información, diagnósticos, resultados, lecciones y aprendizajes de ejercicios de participación similares realizados tanto en contextos nacionales como internacionales para fortalecer la experiencia de participación en la Consulta.\_\_\_\_\_

También participaría con la propia Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en los procesos de diseño de los contenidos en la socialización, la difusión y la atención de los resultados de la propia Consulta.\_\_\_\_\_

El método de trabajo también establece que algunos de los miembros del Comité de Seguimiento de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) podría participar en las deliberaciones de este otro Comité, reconociendo que en el contexto social, la igualdad de género es una perspectiva transversal que debe considerarse para aportar al reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos de las personas, el ejercicio de participación nacional que se convoca en 2018, también buscaría recuperar información relacionada con la percepción de niñas, niños y adolescentes sobre aspectos relacionados con igualdad de género, al final del día, el resultado de este ejercicio podría servir como insumo para detonar acciones afirmativas impulsadas por la Sociedad Civil y las instituciones que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro país.\_\_\_\_\_

Quedan pendientes algunas actividades que ordena el propio Acuerdo, como sería la Integración, discusión y aprobación del Plan Operativo, que está previsto para estos meses de abril y mayo; el diseño de la validación de las boletas entre julio y agosto próximo de este mismo año; la difusión de la Consulta para agosto y hasta noviembre

próximo; la realización de la Consulta de noviembre; la captura, sistematización y análisis de resultados de la primera fase en los niveles de participación que estaría entre noviembre y diciembre próximos; el análisis de los resultados entre enero y marzo de 2019, y la divulgación de los resultados finales a partir de abril del próximo año.\_\_\_\_\_

Esta es la propuesta concreta, Consejero Presidente, y sólo pediría que se tome en cuenta una errata que circulé al Proyecto en el Considerando 22.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.\_\_\_\_\_

Permítanme intervenir, aunque sea brevemente sobre este punto. Siempre he sido un defensor de la idea de que si bien la democracia implica como protagonistas, en primer instancia, las y los ciudadanos y esto está determinado entre otras condiciones aceptadas general y universalmente por la mayoría de edad, la mayoría de edad de la democracia no puede construirse y la ciudadanía no puede construirse a partir de la obtención de la mayoría de edad; las raíces más profundas de la construcción democrática están justamente en el acondicionamiento y preparación, hay que decirlo, asunción de parte de las niñas, niños, adolescentes de la práctica y del aprecio de los valores y principios que rigen la democracia. La participación ciudadana no se construye, a partir de los 18 años, sino que tiene que construirse desde los muy distintos ámbitos de interacción social desde mucho antes.\_\_\_\_\_

La Consulta Infantil y Juvenil ha sido una de las apuestas institucionales, por cierto, más longevas y más apreciables del esfuerzo que por construir ciudadanía, por robustecer la democracia a lo largo de 20 años ha venido realizando el Instituto Federal Electoral en una tradición que venturosamente hereda el propio Instituto Nacional Electoral.\_\_\_\_\_

Siempre he sido un defensor, y así lo planteamos en 2015, de que la participación de las niñas y los niños en la vida democrática, la introducción de éstos en la vida democrática es pertinente hacerla no solamente desde una lógica pedagógica y

desde una lógica de, digamos, socialización y costumbre respecto de la convivencia, tolerancia, en fin, de la práctica de los valores y de los principios democráticos en cuanto tal, sino también a través de la que, como llamaba Alexis de Tocqueville, es la escuela primera de democracia, la mejor escuela de democracia, decía el autor de La democracia en América, es la participación misma en los procesos de toma de decisiones democrática.

---

Por eso siempre he sostenido la necesidad y la pertinencia desde 2012 cuando me incorporé como Consejero Electoral al Instituto Federal Electoral hubo una discusión a propósito de la fecha en la que debía realizarse la Consulta Infantil y Juvenil y siempre he planteado la pertinencia de que la misma ocurra simultáneamente a los Procesos Electorales. Es decir, en un escenario ideal del que estoy convencido de nueva cuenta en términos de su pertinencia, lo ideal sería que el mismo día en el que las y los ciudadanos ejercemos nuestro derecho al voto ocurra también la participación de los chicos, en esta sinergia de que los padres llevamos a nuestros hijos a participar en la Consulta y ellos nos lleven de la mano a votar.

---

Bajo la misma premisa de que la democracia se vive y se aprende en ese contexto, sin embargo, celebro, primero, por supuesto, que este Instituto haya reivindicado en esta ocasión una tradición que es indispensable, y cuyos resultados deberían, no solamente difundirse más, sino estudiarse más, como ocurrió con la Consulta Infantil y Juvenil del año 2015; celebro que en este año estemos presentándonos, agradezco a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral que preside el Consejero Electoral Marco Antonio Baños la presentación de esta propuesta, enésima propuesta de realizar la Consulta.

---

En segundo lugar, creo que, frente al desafío histórico, en términos organizativos y técnicos que representa la Elección más grande de la historia, es pertinente, en esta ocasión, ojalá la normalización de la, y la asimilación de la propia Reforma del año 2014, en el futuro nos permita volver a empalmar los 2 procesos, me parece que en esta ocasión, a pesar de lo que he dicho aquí, a pesar de lo que he sostenido en otras

ocasiones en esta misma mesa, es pertinente que se realice en un momento diferenciado.

---

El desafío técnico, organizativo, pero sobre todo, la enorme carga política que significa la Elección más grande de nuestra historia y el que estén en disputa un número de cargos electivos nunca antes visto, requiere que el personal del Instituto Nacional Electoral, esté plena y absolutamente dedicado a cumplir, como ha venido ocurriendo, como está ocurriendo hasta ahora, a cumplir al 100 por ciento con su responsabilidad constitucional que es la de proveer la organización de las elecciones, de modo tal que los mismos ciudadanos se apropien de las elecciones y las lleven a cabo.

---

Creo que, es pertinente y además es particularmente simbólico, como el propio Proyecto de Acuerdo lo plantea, el que en esta ocasión la Consulta aproveche la celebración del Día Internacional de la Infancia en noviembre para, como un marco en el cual esta Consulta que tendrá muchos elementos de novedad, como el Proyecto de Acuerdo lo está planteando. En primera instancia, que no será un evento de un solo día, sino un evento, digamos, que involucrará a lo largo de un periodo de tiempo, la posibilidad de que los niños participen en distintos espacios digamos, en este mecanismo de participación no ciudadana, sino protociudadana diría.

---

Celebro que en la propia organización de la Consulta, se esté planteando la integración de un Comité Técnico, con las personalidades que ya ha descrito el Consejero Electoral Marco Antonio Baños: la Doctora Mónica González Contró, la Maestra Margarita Griesbach y la Doctora Nashieli Ramírez, que son, como se ha planteado, no solamente conocedoras, digamos, defensoras desde sus ámbitos de actuación de los derechos fundamentales, sino además especialistas de los derechos de la infancia.

---

Celebro la integración de este Comité y sobre todo porque va a enriquecer, digámoslo así, desde una perspectiva externa lo que ha sido una larga trayectoria de experiencia en esta materia, en alguna ocasión, platicando con alguna de estas especialistas, recibía la crítica de que la Consulta no debería ser Consulta, sino avanzar hacia algún

tipo de mecanismo, digamos, ponderado de toma de decisiones, es decir, creo que estamos ante una ventana de oportunidad para aprovechar, un bagaje institucional de una larga data, por un lado. Pero, por otro lado, también de plantearnos una dimensión a futuro de mejora de los mismos mecanismos. \_\_\_\_\_

Celebro, por estas razones la presentación del Proyecto de Acuerdo. Por supuesto lo acompaño. No quiero dejar de señalar que la participación del Comité de Seguimiento de la propia Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) es de una enorme pertinencia, porque estamos, por cierto, en la Primera Consulta Infantil y Juvenil que se va a circunscribir dentro del marco de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA). \_\_\_\_\_

Felicidades en última instancia a los integrantes de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y, por supuesto, a los Consejeros de la Comisión que nos traen ese Proyecto y en particular, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo. \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:**  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Realmente expresar mi total acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se presenta y solamente un comentario y es con el único ánimo de dar certeza a este importante instrumento democrático dirigido a los niños, a las niñas y jóvenes mexicanos. \_\_\_\_\_

En el Punto de Acuerdo Segundo se establece que la Consulta se llevará a cabo en el mes de noviembre de 2018, totalmente de acuerdo. \_\_\_\_\_

Más adelante en el Punto de Acuerdo Décimo Primero, se calendariza a los meses de noviembre y diciembre para captura, sistematización y análisis de resultados. \_\_\_\_\_

En este sentido, la propuesta que se hace es que la realización de la Consulta sea el segundo domingo del mes de noviembre de 2018, el día 11 concretamente. \_\_\_\_\_

¿Por qué? Porque lo anterior le permitirá a este Instituto concentrar, programar, calendarizar actividades específicas y todo aquello que conlleve la realización de este



evento, que se deja en lo general al mes de noviembre y la propuesta es que sea el día 11 que es el segundo domingo del mes. Es una propuesta que ojalá pudieran considerar. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, **Ciro Murayama.** \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

La Consulta Infantil y Juvenil tiene el propósito de promover que niños y adolescentes ejerzan su derecho a participar y expresar su opinión sobre asuntos y problemas que les afectan, así como propiciar que sus puntos de vista y propuestas puedan ser conocidos y tomados en cuenta. \_\_\_\_\_

Creo que, la Consulta Infantil y Juvenil representa una de las contribuciones más significativas de la autoridad electoral al conocimiento de la profunda realidad nacional. \_\_\_\_\_

Pongo como ejemplo el ejercicio del año 2015 que pese a su relevancia, me parece ha pasado de noche en el Debate público y de manera respetuosa diría: También ha permanecido lejos de las definiciones programáticas de los actores políticos e incluso de las tareas de las instituciones del Estado que tienen la responsabilidad de garantizar los Derechos de Niños y Jóvenes. \_\_\_\_\_

La Consulta Infantil y Juvenil 2015 versó sobre las percepciones, sobre la confianza en la seguridad y la justicia. \_\_\_\_\_

Publicamos este volumen, el Instituto Nacional Electoral, quisiera señalar que los resultados indican lo siguiente: \_\_\_\_\_

A los 3 grupos de edad se les preguntó si se sienten seguros en su casa, en la escuela y en la calle, además a los adolescentes se les preguntó su percepción de seguridad en el trabajo; como es natural la casa es el lugar donde más seguros se encuentran los niños y jóvenes, sobresale la percepción de inseguridad en la escuela,

que se duplica para el grupo de 14 a 17 años respecto a los niños de 6 a 9 años, y supera la cuarta parte de las opiniones en el grupo de adolescentes. \_\_\_\_\_

Peor todavía es el sentimiento de inseguridad en los niños y jóvenes en la calle, 3 de cada 4 niños de 6 a 9 años se sienten inseguros en la calle, 6 de cada 10 de los que tienen entre 10 y 13 años, y menos de una tercera parte de los adolescentes se sienten seguros en las calles. \_\_\_\_\_

No se trata solo de la extendida percepción de los adultos de que comparativamente la infancia ya no es lo que vivimos que nos permitía jugar en las calles, ese espacio primordial de socialización, sino la constatación de que los espacios públicos cada vez lo son menos en la sociedad mexicana. Estos datos reflejan que en nuestro país se vive una infancia de puertas adentro con temor a salir a donde están los otros. \_\_\_\_\_

Habrà que poner atención sobre las implicaciones que para la convivencia y la coexistencia social tendrá el crecimiento de generaciones para las que la calle se volvió un espacio ajeno y, peor aún, peligroso. \_\_\_\_\_

Desde muy temprano la violencia está presente en la vida de los mexicanos, y eso no se explica solo por la expansión de la espiral disruptiva de la delincuencia organizada en los últimos años; basta decir que el 12 por ciento de los niños de 6 a 9 años dice que “en mi familia me golpean”, mientras que el 35.6 por ciento de los niños de 10 a 13 años dice haber sido testigo de actos de violencia contra otra niña o niño, entre los adolescentes de 14 a 17 años, una quinta parte declara sufrir o haber sufrido violencia y 17 por ciento haber participado en actos violentos. \_\_\_\_\_

Del 19.5 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años que dice sufrir o haber sufrido violencia, 44 por ciento señala que ha sido violencia física, 67 por ciento violencia verbal, 33 por ciento psicológica y 11.6 por ciento violencia sexual. \_\_\_\_\_

El que 2 adolescentes de cada 100 manifiesten haber sido víctimas de violencia sexual es un dato sobre el que no puede pasarse página desde el Estado y la sociedad. \_\_\_\_\_

Otros datos en particular, inquietantes, son que 17 por ciento de los niños entre 10 y 13 años afirme que “en mi escuela o por donde vivo ofrecen drogas a niños y

jóvenes”. Que 4 por ciento de los jóvenes de 14 a 17 años señale que me obligan a formar parte de un grupo de delincuentes. \_\_\_\_\_

La desconfianza es uno de los símbolos distintivos de la sociedad mexicana, una sociedad desconfiada produce niños y jóvenes recelosos de los demás, si bien entre los niños de 6 a 9 años la confianza es mayor, 98 por ciento confía en su familia, 83 por ciento en sus amigos y 94 por ciento en los maestros, 84 por ciento en el Ejército y 81 por ciento en la Policía; comienza a descender de 10 a 13 años, 97 por ciento confía en su familia, 76 por ciento en sus amigos, 84 por ciento en sus maestros, puesto que el 19.4 por ciento no confía en las autoridades de la escuela, 26 por ciento tampoco en el Ejército, 28.5 no confía en la Policía, 49 por ciento desconfía de sus vecinos y 56 por ciento del Gobierno. \_\_\_\_\_

Entre los adolescentes la confianza se mantiene alta en la familia, 96 por ciento, es mayoritaria hacia las amistades, 70 por ciento, pero se vuelve negativa hacia los maestros, solo confía en ellos el 45 por ciento, médicos 33 por ciento, el Ejército 25 por ciento, los vecinos 23 por ciento, la Policía 22 por ciento, y baja en extremo hacia los Gobernantes 5 por ciento y los partidos políticos 5.2 por ciento de los adolescentes confían en los partidos políticos, el resto no. \_\_\_\_\_

En lo que hace a la cultura de la legalidad 76 por ciento de los niños de 6 a 9 años dijeron que se comprometían a cumplir las reglas, sin embargo solo el 32 por ciento de los niños de entre 10 y 13 años se comprometieron a respetar la Ley, y ese compromiso lo asumió solo el 54 por ciento de los jóvenes entre 14 y 17 años. \_\_\_\_\_

En opinión de los niños de 10 a 13 años, lo que ayudaría para que haya justicia y paz en México es que no haya corrupción 59 por ciento, seguido de que los Gobernantes cumplen lo que prometen 47 por ciento, para los jóvenes de 14 a 17 años lo que ayudaría a que las personas jóvenes participemos más en la construcción de un México de justicia y paz es que podamos expresar nuestras ideas con libertad, que haya más seguridad y que el Gobierno nos tome en cuenta en acciones para mejorar el país. \_\_\_\_\_

Quizás sea en la exigencia de expresar ideas en libertad y de ser tomados en cuenta por parte de los jóvenes donde puede encontrarse un dato alentador de las opiniones que recoge la última Encuesta Infantil y Juvenil del Instituto Nacional Electoral.\_\_\_\_\_

Los niños y jóvenes que participaron en la Consulta son hijos del siglo XXI: los mayores nacieron hacia 1998 cuando el pluralismo se había instalado en el Congreso y todos iniciaron la escuela y aprendieron a leer después de la primera alternancia en la Presidencia, son también los primeros hijos del México Democrático, pero son una generación que vive un presente amenazador y un futuro sombrío en el mejor de los casos, darle seguimiento a la situación de los niños y jóvenes debe ser un compromiso expreso del Estado Mexicano y por supuesto, lo será de esta autoridad.\_\_\_\_

Enhorabuena por confirmar este compromiso con los niños y jóvenes de México.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Candidato Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Licenciado Javier Náñez Pro:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Primero que nada una felicitación al Maestro Marco Antonio Baños y al resto de la Comisión por esta Consulta que se hizo.\_\_\_\_\_

De manera complementaria, quisiera arrojar algunas reflexiones a la mesa, porque el Instituto Nacional Electoral como órgano de fomento a la participación política, creo que es relevante que escuchen ciertas cosas que tengo que decir en este tema, y que quisiera hacerlas como la persona más joven de esta mesa.\_\_\_\_\_

Considero que existen muchas dificultades para los jóvenes en que participen en la política en cargos relevantes, la mayor parte de ellas vienen desde la propia Ley, desde la propia Constitución Política, que lástima que ya no nos acompañen aquí los representantes del Poder Legislativo que son Diputados y que pueden hacer algo al

respecto sobre este tema, pero de igual forma, si pudiera sensibilizar a este Consejo General y al Instituto Nacional Electoral para que tomen en cuenta estas dificultades que tiene la juventud, sería sumamente positivo. \_\_\_\_\_

¿Por qué pedir un requisito de edad para poder participar en cargos públicos?, ¿Por qué pedir tener 25 años para ser Senadores de la República?, ¿Por qué pedir tener 30 años para formar parte como Consejero Electoral de este propio Consejo General del Instituto Nacional Electoral?, es de garantía que una persona mayor a cierta edad vaya a ser un buen papel en su función pública o es garantía de que una persona menor a cierta edad vaya a ser un mal papel en cierta cuestión de la función pública. \_ No lo creo así, creo que en la gran mayor parte de los políticos que hablan de sus discursos a favor de la juventud y de la participación y no estoy hablando del Consejo General porque ustedes no ponen las reglas de edad, las ponen nuestros poderes legislativos correspondientes, hablan solamente de “dientes para afuera” porque se la pasan diciendo que la juventud es importante y que es fresca y que es bienvenida pero realmente cuando se habla de que requisitos de Ley para formar parte y participar en una elección o tener un cargo público de importancia, una procuraduría, ¿Por qué un procurador debe tener 35 años?, ¿Qué justifica?, ¿Por qué 35 y no 30?, ¿Por qué 35 y no 25?, o sea eso no da una garantía de que la persona vaya a ser honesta, no da una garantía de que la persona vaya a ser un buen trabajo el hecho de cuántos años de edad tenga. \_\_\_\_\_

Entonces, sí quiero dejar y aprovechar este recinto y este foro del Instituto, que recalco, es el órgano, uno de los órganos principales que debe de promover la participación política no solamente en los adultos, sino también de los jóvenes que de por sí tenemos que enfrentar una discriminación constante en la participación política y en el ejercicio de la función pública como para además que existan este tipo de requisitos que si bien, igual y no pudieran ser eliminados definitivamente pudieran ser disminuidos y en este sentido quisiera invitar a este Instituto para que tomen en consideración este contexto y este sentir que de viva voz se los puedo platicar y que es una excepción, porque si se fijan cómo está conformado aquí el Consejo General,

realmente, solamente somos 2 personas menores de 30 años que somos la Licenciada Fernanda Caso y yo y que nos vamos a ir en 4 meses cuando se acabe esto y se va a volver a quedar aquí el Consejo General con pura gente mayor de 30 años y considero que los jóvenes tenemos mucho que aportar, tenemos mucho que decir y sí quisiera también hacer el llamado a los partidos políticos y a los dirigentes de los partidos para que le den oportunidad de participar a los jóvenes porque realmente formamos y representamos gran parte de la población como para no tener esta representación.\_\_\_\_\_

De igual forma, que en términos de paridad lo formen las mujeres, creo que de manera análoga los jóvenes también son un grupo muy sub representado en los organismos de toma de decisión en el poder público y espero que tomen en consideración estas reflexiones.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Sólo para comentar la propuesta del señor representante del Partido del Trabajo, que como se puede apreciar, efectivamente no viene fijada una fecha específica para la celebración de la Consulta Infantil y Juvenil pero obedece a que será en el programa operativo en donde tengamos claro y lo haremos en una sola Jornada o serán varios días en los cuales se realice este ejercicio y lo podremos deliberar ampliamente en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, pero agradezco mucho la observación que nos ha presentado el representante del Partido del Trabajo, y por supuesto todas las reflexiones, los comentarios que formulen los integrantes del Consejo General y los miembros de la Comisión serán atendidas de la mejor manera posible, solo me restaría felicitar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, su titular el Maestro Roberto Heycher, que han trabajado

intensamente bajo la coordinación del Secretario Ejecutivo, para poder tener en tiempo todas las actividades del proceso, pero adicionalmente ya las actividades subsecuentes al propio Proceso Electoral, así que, enhorabuena y estoy seguro que llevaremos esta consulta a un buen término. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más muy rápido, obviamente estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que nos están sometiendo a consideración, y qué bueno que se va a hacer en un mes en especial, en una semana en especial y de manera concreta esta Consulta Juvenil e Infantil, pero coincido también con lo que dijo el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, debemos de lograr que, con base en los resultados obtenidos en las distintas consultas infantiles y juveniles se formulen políticas públicas que vayan mejorando las condiciones de vida de las niñas, de los niños y de los jóvenes de nuestro país. \_\_\_\_\_

Creo que, es una cuestión que tenemos ahí pendiente y también, creo que estos resultados que se obtienen de las consultas infantiles y juveniles, son una llamada de atención para todos nosotros, como sociedad, como padres de familia, como funcionarios públicos, porque los niños nos están hablando y nos están diciendo, también ya como lo refirió el Consejero Electoral Ciro Murayama que hay problemas que se deben de atender, y también me llama mucho la atención cómo los niños empiezan en una situación de confianza con sus familias, con su profesores, pero van creciendo, y entonces esa confianza se va diluyendo, precisamente por las experiencias negativas que van teniendo estos niños a edad muy temprana, y eso hace que tengamos, precisamente, unos conflictos muy grandes, creo que, si estos ejercicios se van a seguir haciendo, deberíamos también de insistir con las distintas instituciones del Estado Mexicano, de verdad que se hagan estas política públicas,

porque, qué bueno que los consultamos, que bueno que se les da un espacio de expresión a las niñas, a los niños y a los jóvenes, pero si no hacemos nada al respecto, realmente no estamos cerrando el círculo y concretando ese trabajo tan importante, me queda claro que hay que reconstruir el tejido social, y creo que el Instituto Nacional Electoral está comprometido con esa tarea. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

De forma breve, solo para hacer un reconocimiento al colegiado porque sí fue posible destinar otra fecha, creo yo, más propicia para la realización de esta Consulta Infantil y Juvenil, que va a ser en noviembre próximo y no durante la Jornada Electoral, o peor aún, no sé si peor aún pero dentro del Proceso Electoral el 30 de abril, con motivo del día del niño, creo que no tendríamos que adelantar conclusiones sobre las ventajas o desventajas de una fecha distinta de la Jornada Electoral, más bien estar muy atentos para que se analice una vez que se concluya esta Consulta en noviembre próximo que nos representó hacerla en una fecha totalmente distinta al Proceso. \_\_\_\_\_

Porque sí creo que ahí hay un tema muy importante cuando acudía a los Estados, sí era un tema de preocupación de la estructura tener que hacer junto con el Proceso una Consulta. \_\_\_\_\_

Creo en suma que es de agradecer y felicitar que no sea coincidente con el Proceso Electoral esta Consulta y necesitaremos ver cuáles van a ser sus ventajas o sus desventajas en una fecha distinta. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_



Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante de Nueva Alianza. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:**  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Este tipo de Acuerdos dotan de contenido. Dotan de contenido a las disposiciones constitucionales como es la prevista en el artículo 3 que establece que la democracia no solo es una estructura jurídica ni un régimen político, sino que debe de ser concebida justamente como un sistema de vida. \_\_\_\_\_

El hecho de propiciar la participación de los sectores, me atrevo a decir, más desfavorecidos de nuestra sociedad, los más vulnerables como son los niños en su momento y lo estamos viendo, los jóvenes, conlleva un elemento muy importante. \_\_\_\_

No hay nada más democrático, considero, en la acepción más amplia de la palabra que el escuchar, es reflejo de tolerancia, es reflejo de interés, es reflejo de modificar algo. \_\_\_\_\_

En este caso, el escuchar a un amplio sector de la sociedad como son los niños y los jóvenes no solo nos arrojará, estoy cierto, resultados positivos en una medida de evaluación que nos permita hacer un balance de ese sector social, sino que nos permite construir, no quería estar buscando, construir la capa, el tejido social que en pocos años van a estar haciéndose cargo de nuestro país. \_\_\_\_\_

El ejercicio como tal es un ejercicio que a consideración de Nueva Alianza, en nuestro entendido, debiera ser frecuente, entiendo lo hacemos con periodicidad, cada 3 años, por qué no escucharlos como un ejercicio de escucha una vez al año, fomentar, propiciar esta participación de quienes llegado el momento y por disposición legal, constitucional tendrán el carácter de ciudadanos. \_\_\_\_\_

Pero, la ciudadanía, como ya lo refería usted hace un momento, no se adquiere por Decreto Constitucional, sino que es un proceso de formación. El problema lo enfrentamos cuando se llega a los 18 años y no hay esa formación previa. \_\_\_\_\_

Educar en democracia, enseñarles a los niños los valores propios de una sociedad democrática, impulsar la participación de los jóvenes para que mediante mecanismos democráticos puedan transformar la sociedad en la que viven. \_\_\_\_\_

Nueva Alianza recibe con agrado este ejercicio, reconoce el esfuerzo realizado por todo el personal de esta institución que se involucra en un Modelo como éste, que es el de escuchar a los jóvenes, coincido, hay que darle seguimiento, es una cuestión que no se puede dejar nada más como algo anecdótico y decir: Palomita, misión cumplida. Seguimiento a los compromisos, escuchar a los niños, escuchar a los jóvenes para transformar en beneficio de todos nosotros a la sociedad en la que vivimos. \_\_\_\_\_

Sería cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra, la Licenciada Fernanda Caso Prado, representante de la Candidata Independiente Margarita Ester Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. representante de la Candidata Independiente al cargo de Presidente de la República Mexicana la C. Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, Licenciada Fernanda Caso Prado:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Entiendo que por cuestiones logísticas fue difícil empatar la Consulta Infantil y Juvenil con el día de la Elección. \_\_\_\_\_

Sin embargo, quisiera hacer hincapié en la relevancia que tiene, que se hagan ambas Consultas el mismo día, la Elección y la Consulta el mismo día, creo que la Consulta Infantil y Juvenil no tiene únicamente como propósito, si bien es muy importante conocer las preocupaciones y las prioridades de los niños y jóvenes, sino también inculcar el valor de la participación electoral desde una edad temprana. Uno de los primeros recuerdos que tengo de participación electoral es justamente acompañar a mi papá a votar el día de Elección con el pretexto de que iba a votar ese día en la Consulta Infantil y Juvenil, recuerdo que tristemente mi papá votaba por el Partido

Revolucionario Institucional, y en rebeldía votaba por el valor de la honestidad, desde entonces ya recuerdo ese ejercicio. \_\_\_\_\_

Creo que, son esos momentos en la vida de los niños que van marcando las convicciones, que van haciendo que desde la infancia, desde la juventud se empiecen a cuestionar los principios, se empiecen a cuestionar sus afinidades o convicciones personales y políticas. \_\_\_\_\_

Llamar a esta autoridad a hacer un esfuerzo para que en los próximos ejercicios se puedan empatar ambos procesos, insistiendo en que tiene una relevancia más allá de únicamente los resultados que arroja este sondeo, y creo que tienen relevancia, pero lo principal me parece que es el ejercicio paralelo. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señora representante. \_\_\_\_\_

Permítanme intervenir justamente como reacción, es que coincido con el punto, pero hoy tenemos una misión como institución fundamental, que es que esta Elección, la más compleja en muchos sentidos, que va a requerir la confluencia y la atención total de nuestros funcionarios salga bien, y va bien. \_\_\_\_\_

Hice esa referencia en mi intervención y en su momento, desde 2012 he planteado el punto, estamos ante una ventana de oportunidad, déjenme plantearlo así, sin renunciar a la realización de la Consulta hoy que tenemos un espacio para justamente desplegar a una organización ejemplar, incluso, incorporar las novedades que ya el Consejero Electoral Marco Antonio Baños describía la misma, sentar las bases, ojalá para que en el futuro justamente, la simbiosis de esos 2, la participación en el sentido más amplio, la ciudadana formalmente hablando y la de quienes serán ciudadanos puedan eventualmente confluir. \_\_\_\_\_

Pero, creo que es importante, coincidiendo con usted, insisto, al menos en lo personal, creo que es importante que en estos momentos, sobre todo porque estamos hablando de la Primera Elección, no solo la más grande de la historia, sino la Primera Elección Presidencial, que renovará también al Senado, además, por supuesto,

Diputados y todos los cargos que están en disputa de la Reforma del año 2014, constatemos, ese es un compromiso histórico de esta autoridad, para eso nació el Instituto Nacional Electoral, comprobamos la viabilidad de la misma Reforma, y entreguemos buenas cuentas para que las y los ciudadanos ejerzan su voto en libertad, y eso significa que tengan todas las condiciones y que nada falle desde el punto de vista operativo, nada falle desde el punto de vista técnico, como está ocurriendo, con lo cual eventualmente sentaremos las bases para que en el futuro, su planteamiento que hago mío, pueda efectivamente concretarse.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Solo para felicitarlos, especialmente al Presidente de la Comisión, al colegiado, al Instituto en general, éste es sin duda, uno de los ejercicios más bonitos que lleva el Instituto Nacional Electoral, me arrobo de la opinión que pudieran tener mis hijos, y probablemente de la de ustedes, que este es un ejercicio que genera empatía, felicidad, el deseo de acompañar y de participar.\_\_\_\_\_

Probablemente, también pedirles que con el paso del tiempo reconsideren llevar este ejercicio al día de la Elección.\_\_\_\_\_

A la representante, su padre es un hombre sabio.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

De manera muy breve Consejero Presidente, igualmente resaltar la importancia de este tema, reconocer al Consejero Electoral Marco Antonio Baños y a la Comisión, que ha estado atrás de este Proyecto de Acuerdo.\_\_\_\_\_

También lamento que no se pueda hacer en esta ocasión la Consulta en la misma fecha el día de la Elección, la verdad es que creo que en el año 2015 fue un ejercicio, muy importante, muy valioso, y como se decía, es muy importante ver cómo iban justamente los niños acompañando a su padres el día de la votación, estoy convencido de que en esta ocasión, desgraciadamente no se puede por la cantidad de elecciones concurrentes, pero sí habría que regresar en algún momento a buscar que coincida el día de la Elección con estas Consultas. \_\_\_\_\_

Me tocó participar en la Consulta del año 2015, estos resultados que decía el Consejero Electoral Ciro Murayama, los tenemos ya publicados, hay dibujos muy interesantes que hicieron los niños, también, además de las respuestas que nos dieron en la Consulta, que vale mucho la pena estarlos viendo. \_\_\_\_\_

Creo que como se decía por parte del Consejero Electoral Ciro Murayama, también que tiene que ser un compromiso de Estado, pero creo que estamos a tiempo, aquí hay resultados concretos de esta Consulta Infantil del año 2015, y este compromiso, desde luego tiene que ser del Instituto Nacional Electoral, pero también, y esto porque así lo vivimos al dar a conocer estos resultados, es del Sistema Educativo Nacional, tiene que ser un compromiso de los medios de comunicación. \_\_\_\_\_

También esta situación de que a partir de los 13 años se va perdiendo la confianza en las instituciones, en partidos políticos, en el Gobierno, en la Policía, etcétera, es una responsabilidad que debemos de cuidar, no podemos permitir que esto sea así nada más, creo que por eso es el compromiso de que hay que evaluar qué está pasando en el Sistema Educativo, qué está pasando en los medios de comunicación, qué ven los niños en las redes sociales, etcétera, porque creo que sí es algo preocupante y no nada más dejar pasar como algo normal que los niños después de los 13, 14 años vayan perdiendo la confianza en las instituciones, en el gobierno y en la democracia en general. \_\_\_\_\_

Creo que, justamente por eso es el Instituto Nacional Electoral quien tiene esta responsabilidad también, pero no es exclusiva nada más del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

Aprovechando que hay campañas políticas, que hay compromisos y que hay propuestas creo que sería muy interesante ver cuáles fueron los resultados de la Consulta Infantil del año 2015 y que puedan darse a conocer actualmente a los candidatos que se encuentran en campaña. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Me parece que sin duda, como se ha señalado, el ejercicio de la Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio indispensable que se celebre en los distintos años del Proceso Electoral, precisamente porque es un espacio en el que se permite a las niñas y a los niños ejercer un derecho fundamental que es el de opinar. El de opinar sobre las propias cuestiones que les afectan en sus derechos, en su vida, en su cotidianidad y no solamente tomar decisiones a partir de lo que se percibe o se pretende percibir, respecto de las necesidades de las y los niños, sino tomarles en consideración y que ellos formen parte de los diagnósticos que impactan en las políticas públicas a favor de la infancia y la adolescencia. \_\_\_\_\_

En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo con el hecho de que se programe la Consulta Infantil y Juvenil para este año electoral. Porque se ha celebrado desde hace ya bastante años, cada 3 años, desde hace 7, este es el séptimo ejercicio para celebrar la Consulta Infantil y Juvenil. \_\_\_\_\_

Lo que nos permite incluso son mediciones de cómo va modificándose a lo largo del tiempo la percepción de las niñas y de los niños. \_\_\_\_\_

Sin embargo, creo que también esta reflexión que se está teniendo hoy, se tiene en cada Proceso Electoral respecto de cuál es la mejor fecha para llevar a cabo este ejercicio. \_\_\_\_\_

Si la mejor fecha es el día de la Jornada Electoral en la que los ánimos y los esfuerzos están abocados al ejercicio del propio Proceso Electoral, es decir, al ejercicio de la votación para determinar quién nos debe de gobernar y quién nos debe representar, ya sea en una Elección intermedia o una Elección Presidencial o si esto se debe llevar en una fecha distinta. \_\_\_\_\_

Esta es la primera ocasión que se lleva a cabo después de la Jornada Electoral. \_\_\_\_\_  
Generalmente cuando se había llevado a cabo que no se realizara en una fecha coincidente con la Jornada Electoral era previo, propiamente el Día del Niño en el que se celebraba esta Consulta. \_\_\_\_\_

En el 2015, me pronuncié a favor de que se hiciera fuera de la Jornada Electoral. Me parece que tiene que haber un momento, un espacio para la infancia, para las niñas, los niños y los adolescentes para que podamos destinar toda la atención institucional a garantizar el ejercicio de este derecho, a generar las mejores condiciones para el ejercicio de este derecho. \_\_\_\_\_

Creo que este Proceso Electoral, sin duda, presenta particularidades especiales que cambian el esquema, incluso la reflexión en torno a procesos previos. \_\_\_\_\_

Pero, creo que sí vale la pena en ejercicios futuros volver a sentarnos a hacer un análisis respecto de qué es lo que queremos centrar el día que hacemos una Consulta Infantil. ¿A quién queremos poner en el centro de la discusión el día o los días que hacemos una Consulta Infantil o Juvenil? Me parece que la respuesta es a las niñas, a los niños y a los adolescentes, no es un espacio en el que solo sirva que acompañen a sus padres, a su madre, a sus familiares, a ejercer otro derecho que, no está peleado. El hecho de que no se celebre una Consulta Infantil y Juvenil el día de la Jornada Electoral, no significa que no se lleve a las niñas y a los niños, adolescentes, acompañando a los padres a votar o a los familiares a votar en este ejercicio. \_\_\_\_\_

Pero, sí creo que es una buena decisión establecerlo ahora en una fecha en la que lo que podamos es ponerles a ellos en el centro y en nuestra mirada principal. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, el Consejero Electoral José Roberto Ruiz, desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Por supuesto.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Sobre este tema de la fecha de la realización de la Consulta, coincide usted que se necesita analizar con datos muy objetivos los pros y los contras, porque en principio eso de que los niños acompañen a los papás el día de la Elección habría que confirmarlo con cuántos centros de la Consulta coinciden con los lugares donde instalamos las casillas.\_\_\_\_\_

Si fuera incluso esa la vía de hacer coincidir esos puntos de Consulta y de votación, algo que nos ha enseñado las elecciones concurrentes es que los espacios ya están cada vez más difíciles para instalar las casillas de las elecciones, ¿No cree que esos 2 datos son muy relevantes para el momento en que se vaya a analizar la conveniencia de la fecha?\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Coincido en que existe una disparidad entre el argumento de que se acompañe a los padres a ejercer el voto y las ubicaciones de los centros donde se lleva a cabo la propia Consulta Infantil, pero además también, creo que hay un dato central en la forma en la que usted los fraseó: que los niños acompañen a los padres. Lo que



significa colocar en el centro a los niños es que no sean un acompañante, sino que sean el sujeto del derecho, el sujeto de la obligación y quien, más bien a quien en su caso acompañarían, no a la inversa. Precisamente por esta diferencia conceptual es que creo que hay elementos a considerar, por lo que no creo que es una discusión que solo se puede centrar en el gusto de si es un ejercicio cívico bonito el que acompañen a sus padres y, porque tampoco es excluyente a que se lleve a cabo la Consulta ese día.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. ¿Me acepta usted una pregunta?\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Por supuesto.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

No cree que sería conveniente discutir el tema logístico de en qué casillas, quiénes, funcionarios y demás en el momento en que estemos justamente planteándonos la convergencia, de la que por cierto, no creo que sea, luego lo discutimos, lo he discutido 3 veces en esta mesa del Consejo General, una vez la perdí en 2012, otra vez la gané en 2015, ¿No cree que sería pertinente que lo planteemos en el momento en el que estemos frente a la disyuntiva de que se realice la Consulta el mismo día? Sobre todo, porque el Proyecto de Acuerdo, si no leí mal, o sea lo que hoy estamos discutiendo es que se va a hacer en el mes de noviembre, y la Elección hasta donde recuerdo es el 1 de julio.\_\_\_\_\_

Gracias, por su respuesta.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Debo señalar que me da gusto que como Presidente del Consejo General sí tenga usted claro la fecha tanto de la Jornada Electoral, como del Proyecto de Acuerdo que se está sometiendo a nuestra consideración. \_\_\_\_\_

Pero, precisamente ha habido toda una reflexión acerca de los pros y los contras de que la Consulta Infantil se celebre el día de la Jornada Electoral. \_\_\_\_\_

Creo que, esta reflexión no tiene que llevarse a cabo en una fecha específica, es una reflexión que vale la pena que esté en el espacio público, que esté en la discusión pública para que, por una ocasión, no obviemos que el centro de la discusión en, tratándose de la Consulta Infantil y Juvenil, no somos los adultos, son los niños, las niñas y los adolescentes. \_\_\_\_\_

Por ende, creo que es una discusión que se debe de dar a más largo plazo. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, por su respuesta. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, le voy a pedir al Secretario del Consejo, que tome la votación correspondiente. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Con gusto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueba la realización de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, tomando en consideración en esta votación la fe de erratas circulada previamente. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG408/2018) Pto. 9** \_\_\_\_\_

**INE/CG408/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018**

**G L O S A R I O**

**Consulta:** Consulta Infantil y Juvenil 2018.

**CDN:** Convención sobre los Derechos del Niño.

**CPEUM:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**DECEyEC:** Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

**ENCCÍVICA:** Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023.

**INE:** Instituto Nacional Electoral.

**LGDNNA:** Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

**LGIPE:** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**OPL:** Organismo Público Local.

**A N T E C E D E N T E S**

**1.-** En 1990 México ratificó la CDN, que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989.

2.- El 4 de diciembre de 2014, se publicó el decreto por el que se expide la LGDNNA.

3.- El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM, en materia política-electoral una de las cuales refiere la creación del INE.

4.- El 23 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la LGIPE, misma que abrogó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5.- Entre 1997 y 2015 el INE ha organizado siete ejercicios nacionales de participación infantil y juvenil que fueron convocados en el marco de cada Proceso Electoral Federal. Dichos ejercicios tuvieron como finalidad la de abrir espacios para la libre expresión de las opiniones de niñas, niños y adolescentes respecto de diversas temáticas relacionadas con su vida cotidiana y con el ejercicio de los derechos que se les confieren; se buscó también impulsar el reconocimiento de estos grupos de la población como sujetos de derechos, así como contribuir a la difusión de los derechos fundamentales de la niñez.

6.- Por Acuerdo INE/CG732/2016 del 14 de octubre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la ENCCÍVICA.

7.- Por Acuerdo INE/CG846/2016 del 14 de diciembre de 2016, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la integración de un Comité Técnico de Seguimiento para el Acompañamiento en el Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017- 2023.

## **CONSIDERANDOS**

1.- Que el artículo 1° de la CPEUM señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte.

**2.-** Que el artículo 41, segundo párrafo, Base V, Apartado “A” de la CPEUM; y los artículos 29, 30, párrafo 2; y 31, párrafo 1, de la LGIPE, disponen que el INE es un organismo público autónomo, autoridad en la materia electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán principios rectores; siendo el Instituto una autoridad en la materia electoral, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

**3.-** Que el artículo 4 de la CDN señala que los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención.

**4.-** Que el artículo 12 de la CDN y en su artículo 12, numeral 1, señala que “Los Estados Partes garantizarán a la niñez que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan, teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de la edad y madurez de la niña o el niño.

**5.-** Que de conformidad con los artículos 2, fracciones I, II y III, 13, 64, 71, 72 y 74 de LGDNNA, las autoridades federales, estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar, disponer e implementar los mecanismos que favorezcan el derecho de expresión y participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes.

**6.-** Que el artículo 30, párrafo 1, inciso a) de la LGIPE, establece que entre los fines del INE se encuentran el contribuir al desarrollo de la vida democrática y coadyuvar a la difusión de la educación cívica.

**7.-** Que el artículo 34, de la LGIPE señala que el Consejo General; la Presidencia del Consejo General; la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva son los órganos centrales del INE.

**8.-** Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 35, de la LGIPE, el Consejo General, en su calidad de órgano superior de dirección del INE, es el responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en

materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

**9.-** Que en términos de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo 10 de la LGIPE, el Consejo General, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá crear comités técnicos especiales para actividades o programas específicos, en que requiera del auxilio o asesoría técnico-científica de especialistas en las materias en que así lo estime conveniente.

**10.-** Que tal y como lo establece el artículo 44, párrafo 1, inciso b) y j) de la LGIPE, son atribuciones del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto y conocer, por conducto de su Presidente, del Secretario Ejecutivo o de sus Comisiones, las actividades de los mismos; solicitar los informes específicos que estime necesarios; y dictar los acuerdos para hacer efectivas las atribuciones que le señala el propio ordenamiento.

**11.-** Que conforme a lo dispuesto por el artículo 48, párrafo 1, inciso f) y o) de la LGIPE, es atribución de la Junta General Ejecutiva, entre otras, supervisar el cumplimiento de los programas de capacitación electoral y educación cívica del Instituto, así como las demás que le encomienda la propia Ley, el Consejo General y su Presidente.

**12.-** Que de acuerdo con el artículo 58, párrafo 1, incisos a), b) y c) de la LGIPE, son atribuciones de la DECEyEC: elaborar, proponer y coordinar los programas de educación cívica que desarrollen las Juntas Locales y Distritales ejecutivas; promover la suscripción de convenios en materia de educación cívica con los OPL sugiriendo la articulación de políticas nacionales orientadas a la promoción de la cultura político-democrática y la construcción de ciudadanía, además de vigilar el cumplimiento de los programas y políticas referidos en los incisos a) y b).

**13.-** Que el artículo 61 de la LGIPE, párrafo 1, inciso a), señala que en cada una de las Entidades Federativas, el INE contará con una delegación integrada por: la junta local ejecutiva y Juntas Distritales Ejecutivas, las cuales se consideran como los órganos desconcentrados del INE.

**14.-** Que en su artículo 63, párrafo 1, inciso b), la LGIPE señala como atribuciones de las juntas locales ejecutivas supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas y las acciones de sus vocalías y de los órganos distritales, tales como los programas de capacitación electoral y educación cívica. La misma Ley establece en su artículo 64, párrafo 1, inciso h), que cada vocalía ejecutiva local tiene entre otras atribuciones las que corresponden a coordinar los trabajos de las vocalías que integran la junta y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia, así como la de ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica.

**15.-** Que en el artículo 74, párrafo 1, inciso g); de la LGIPE, se señala como una de las atribuciones de las vocalías ejecutivas de las juntas distritales, en sus respectivos ámbitos de competencia, la de ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica.

**16.-** Que conforme lo dispuesto en el artículo 104, párrafo 1, incisos d), de la LGIPE, los OPL tienen entre sus funciones la de desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica en la entidad que corresponda.

**17.-** Que, dada la importancia a nivel nacional de los ejercicios de participación de niñas, niños y adolescentes, el INE ha encaminado esfuerzos para mantener la experiencia de participación infantil y ha decidido dotar a la consulta de su propio espacio y tiempo para que tanto sus órganos centrales como los órganos desconcentrados enfoquen sus recursos humanos y materiales a la realización de la Consulta, proponiendo su realización durante Noviembre de 2018 para posicionarla en el marco de la conmemoración del aniversario de la Declaración de los derechos del niño.

Conviene señalar que en algún momento se estimó que el ejercicio de participación podría llevarse a cabo en abril del presente año, de lo cual inicialmente así se pensó reportar en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018 (PyCIPEF). No obstante, posteriormente se consideró que, a efecto de estar en mejores condiciones técnicas y operativas para su realización, dadas las altas cargas de trabajo que durante Proceso Electoral tiene la estructura desconcentrada del INE, era más conveniente llevarlo a cabo en noviembre próximo. La DECEyEC, con la asesoría del Comité Técnico de Acompañamiento que con base en este Acuerdo se integrará, definirá e informará

oportunamente sobre la modalidad y periodo exacto para el desarrollo de la consulta a llevarse a cabo en noviembre del presente año.

**18.-** Que la ENCCÍVICA se presenta como una política pública, impulsada por el INE, que busca la apropiación del espacio público, partiendo de diez componentes entre los que destacan: Estado de derecho y derechos humanos, perspectiva de género, igualdad y no discriminación, y espacios del Estado para el fomento de la cultura cívica, cuyo análisis permite entender la importancia de la promoción de los derechos humanos y de la perspectiva de género en el fortalecimiento de la cultura cívica y la apropiación del espacio público.

**19.-** Que la Consulta es congruente con la Línea de Acción 2, “Difusión, promoción, conocimiento y ejercicio responsable de los Derechos Humanos” del eje de Verdad y con la Línea de Acción 6. “Promoción de la cultura cívica en los entornos escolares” del eje de Diálogo de la ENCCÍVICA, cuyo objetivo se centra en promover la cultura cívica y las prácticas democráticas en instituciones educativas del país, así como con la comunidad y entorno inmediato.

**20.-** Que en sesión del 30 de junio de 2017, la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica aprobó el Programa Anual 2018 de Actividades de Implementación y Evaluación de la citada Estrategia, en el que se estableció como Línea de Trabajo, la denominada “*III.3. Más alianzas para el reforzamiento de la cultura cívica en la niñez y la juventud*”, que tiene previsto la continuación de los trabajos que culminen con el ejercicio de la Consulta.

**21.-** Que la Consulta Infantil y Juvenil es un ejercicio de participación nacional impulsado por el INE con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de una cultura política democrática mediante la apertura de espacios para que niñas, niños y adolescentes expresen sus opiniones y propuestas respecto de temas que tienen que ver con sus espacios de convivencia y las condiciones para el ejercicio de derechos, con el fin de que sean escuchadas y atendidas por la sociedad, el gobierno y sus instituciones.

**22.-** Que de acuerdo con datos publicados por el INEGI derivado de la encuesta intercensal de 2015, la República Mexicana tiene una población total de 119,938,473 habitantes (51.4% son mujeres y 48.6% son hombres). De la misma encuesta se obtiene que el total de la población infantil y juvenil es de 43,523,857



niñas, niños y adolescentes entre los 0 y 19 años, representando el 36.41% de la población, los cuales pueden ser fragmentados de la siguiente forma:

Edad	Población total	Hombre	Mujer
00-04 años	10,526,139	5,340,695	5,185,444
05-09 años	10,997,189	5,581,874	5,415,315
10-14 años	11,228,232	5,676,831	5,551,401
15-19 años	10,772,297	5,411,572	5,360,725
<b>Total</b>	<b>43,523,857</b>	<b>22,010,972</b>	<b>21,512,885</b>
<b>%</b>	<b>100%</b>	<b>50.57%</b>	<b>49.43%</b>

Lo que motiva al Instituto Nacional Electoral a generar programas y propiciar experiencias como la Consulta Infantil y Juvenil, con el fin de aportar a la formación ciudadana de quienes votarán en procesos electorales venideros y contribuir al desarrollo de la cultura cívica democrática.

**23.-** Con el paso del tiempo estos ejercicios de participación infantil y juvenil se han consolidado como una experiencia única a nivel nacional e internacional que, en el contexto de la Convención y la LGDNNA, ha contribuido al reconocimiento y ejercicio del derecho a la participación a través de la expresión que niñas, niños y adolescentes comparten respecto de los diferentes asuntos que han sido tema de cada ejercicio infantil juvenil realizado.

**24.-** Los ejercicios de participación infantil y juvenil han buscado que las instituciones públicas y los organismos de la sociedad civil contribuyan a generar condiciones para que se escuchen y tomen en cuenta las opiniones y propuestas expresadas por la población objetivo.

**25.-** Que para el diseño de los ejercicios nacionales impulsados como iniciativa del INE desde 1997 (antes IFE), se ha contado con el acompañamiento y asesoría de otras instituciones, especialistas y/u organizaciones de la sociedad civil, y para dar continuidad a esta experiencia, con la finalidad de contribuir a que el ejercicio se

enmarque dentro del objetivo de proteger el interés superior de las niñas, niños y adolescentes –en concordancia con la LGDNNA–, y de promover la participación cívica que contribuye al fortalecimiento de una cultura política democrática; resulta pertinente proponer la creación de un Comité Técnico de Acompañamiento que asesore al INE en el diseño, la organización y el desarrollo de la Consulta, a partir del conocimiento especializado y la experiencia en materia de participación infantil y juvenil.

**26.-** Que reconociendo que en el contexto social, la igualdad de género es una perspectiva transversal que debe considerarse para aportar al reconocimiento, ejercicio y defensa de los derechos humanos de las personas, el ejercicio de participación nacional que se convoque en 2018, también se buscaría recuperar información relacionada con la percepción de niñas, niños y adolescentes sobre aspectos relacionados con igualdad de género; al final del día, el resultado de este ejercicio podría servir como insumo para detonar acciones afirmativas impulsadas por la sociedad civil y las instituciones que contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género en nuestro país.

**27.-** Que, por otra parte, para el desarrollo del ejercicio de participación de niñas, niños y adolescentes, el Instituto Nacional Electoral cuenta con recursos etiquetados en el Anexo 13, denominado: “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, lo que reafirma la conveniencia de buscar dotarle de la perspectiva de género en su diseño.

**28.-** Que para efectos de contar con acompañamiento técnico para la definición y diseño de contenidos, así como para el análisis de la expresión que niñas, niños y adolescentes expresen en la Consulta se conformará un Comité Técnico de Acompañamiento integrado por especialistas académicos/as de reconocido prestigio, con solvencia moral y experiencia en temas y enfoques relacionados con participación infantil y juvenil, derechos de la niñez, igualdad de género y políticas públicas para las infancias y las adolescencias.

**29.-** Que para integrar el Comité Técnico de Acompañamiento en el Desarrollo de la Consulta infantil y Juvenil 2018 se ubicaron y analizaron los perfiles de candidatos/as especialistas para integrarse a sus trabajos, considerándose las

siguientes personalidades, cuyas fichas curriculares pueden consultarse en el **Anexo 1 de este Acuerdo**:

- Mónica González Contró
- Margarita Griesbach Guizar
- Nashieli Ramírez Hernández

**30.-** Que es necesario la generación de alianzas estratégicas con instituciones públicas, de carácter nacional o internacional y/u organizaciones de la sociedad civil para robustecer las acciones de organización, desarrollo, generación y difusión de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

**31.-** Que el INE instruirá a las Juntas Locales y Distritales ejecutivas para que, atendiendo al compromiso de promover la educación cívica y aportar al desarrollo de la cultura cívica, destinen sus esfuerzos a las acciones pertinentes para favorecer la participación infantil y adolescente, y colaborar prioritariamente en el desarrollo de la Consulta.

**32.-** Que el INE convocará a los OPL a sumarse en las labores de difusión de la convocatoria, desarrollo de la Consulta, socialización y difusión de los resultados de la Consulta, para lo cual podrán realizar aportaciones de recursos materiales, humanos o financieros, que su disponibilidad les permita, para potenciar el alcance y cobertura de participación en sus respectivas entidades.

En virtud de lo señalado y con fundamento en lo previsto en los artículos 35 párrafos I, II y III y 41 Base V, Apartados A y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6; 7 párrafos 1 y 2; 30, 32 párrafo 1, inciso a), fracción V, y párrafo 2, inciso i); 35, 42 párrafo 10; 44 párrafo 1, a); 58 párrafo 1, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) y j); 61 párrafo 1; 62 párrafo 1; 63 párrafo 1, incisos a) y b); 64 párrafo 1, inciso h); 72 párrafo 1, 73 párrafo 1, inciso a); 74 párrafo 1, inciso g); 82 párrafo 3 y 104 párrafo 1, incisos a), d), e), f) y m); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General determina el siguiente:

## **ACUERDO**

**PRIMERO.-** Se aprueba que el INE lleve a cabo las actividades de diseño, organización, desarrollo y difusión de los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

**SEGUNDO.-** La Consulta se llevará a cabo durante el mes de noviembre de 2018 en los términos que se establecen en el presente Acuerdo.

**TERCERO.-** El INE, a través de la DECEyEC, se encargará de coordinar el diseño, la organización y desarrollo, y socialización de resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2018.

El Instituto Nacional Electoral, como instancia de dirección, podrá invitar a instituciones públicas y organismos nacionales e internacionales interesados y con experiencia en el desarrollo de este tipo de ejercicios, a efecto de que contribuyan al desarrollo de la Consulta. En los trabajos de desarrollo, difusión y socialización de resultados, también se podrá invitar a organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las agendas de género y de los derechos humanos.

**CUARTO.-** Se instruye a la DECEyEC para que formule un Plan Operativo de la Consulta, el cual deberá comprender, de manera general: un marco normativo, objetivo, población objetivo, modalidad, metas, fases de implementación y un cronograma de actividades y áreas de participación de otras instituciones, organismos y especialistas. Dicho plan deberá presentarse al Consejo General del INE para su aprobación a más tardar en el mes de mayo de 2018.

**QUINTO.-** Se aprueba la creación de un Comité Técnico de Acompañamiento para fungir como órgano asesor de la DECEyEC para el diseño, la organización y desarrollo de la Consulta.

**SEXTO.-** Se designa a las siguientes especialistas como integrantes del Comité Técnico de Acompañamiento:

- a) Dra. Mónica González Contró;
- b) Mtra. Margarita Griesbach Guizar;
- c) Dra. Nashieli Ramírez Hernández

**SÉPTIMO.-** El Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta tendrá las siguientes funciones:

- a) Auxiliar a la DECEyEC en la elaboración del Plan Operativo de la Consulta.
- b) Asesorar a la DECEyEC en la definición de la temática, elaborar la propuesta de preguntas, formatos y demás pormenores sobre la implementación de la Consulta. Para efectos de contribuir en el diseño técnico de la boleta y realizar pruebas piloto, mediante las cuales se pueda validar el contenido o propuesta de preguntas de la Consulta, así como para participar en tareas del procesamiento de resultados del ejercicio, la DECEyEC podrá contratar o convenir algún servicio adicional.
- c) Contribuir con la identificación, el intercambio y el análisis de información, diagnósticos, resultados, lecciones y aprendizajes de ejercicios de participación similares, realizados tanto en contextos nacionales como internacionales, para fortalecer la experiencia de participación en la Consulta.
- d) Participar con la DECEyEC en los procesos de diseño de contenidos, socialización, difusión y atención de los resultados de la Consulta.

**OCTAVO.-** El período de actividades del Comité Técnico de Acompañamiento iniciará con la aprobación del presente Acuerdo y hasta que concluya la actividad con la presentación de resultados a nivel nacional.

Las personas especialistas que sean parte del Comité podrán recibir una gratificación por su participación en los trabajos del Comité, por el periodo que abarca desde el momento de la aprobación del presente Acuerdo hasta diciembre de 2018, con base en la disponibilidad presupuestal del Instituto Nacional Electoral.

**NOVENO.-** La DECEyEC en su carácter de instancia coordinadora, deberá convocar a las integrantes del Comité Técnico de Acompañamiento para celebrar una sesión de instalación, en la que además se someterá a la consideración un programa básico de trabajo.

La DECEyEC también podrá invitar a participar en las sesiones y deliberaciones del Comité Técnico de Acompañamiento al que se refiere el punto Quinto del presente Acuerdo, a alguno de los especialistas que integran el actual Comité Técnico de Seguimiento para el Acompañamiento en el Diseño e Implementación del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia Nacional de Cultura

Cívica 2017-2023 (ENCCÍVICA), que por acuerdo de Consejo General INE/CG846/2016 fue creado el 14 de diciembre de 2016.

**DÉCIMO.-** La perspectiva de género y la promoción del respeto de los derechos humanos, como componentes de la ENCCÍVICA, serán criterios transversales y orientadores en la toma de decisiones para el diseño e implementación del ejercicio de Consulta Infantil y Juvenil 2018.

**DÉCIMO PRIMERO.-** La organización y desarrollo de la Consulta deberá guiarse, en forma orientativa, conforme el siguiente calendario:

Actividad	Periodo
Integración, discusión y aprobación del Plan Operativo	Abril-mayo de 2018
Diseño y validación de boletas	Junio-agosto de 2018
Difusión de la Consulta	Agosto-noviembre de 2018
Realización de la Consulta Infantil y Juvenil	Noviembre de 2018
Captura, sistematización y análisis de resultados (Primera fase: Niveles de participación)	Noviembre a diciembre de 2018
Análisis de resultados de la Consulta (Segunda fase: Opinión).	Enero-marzo de 2019
Divulgación de resultados finales e impulso de una agenda pública en la materia	Abril a diciembre de 2019

**DÉCIMO SEGUNDO.-** Se faculta a la DECEyEC para que entre en contacto con instituciones públicas, de carácter nacional o internacional, y/u organizaciones de la sociedad civil para generar alianzas estratégicas para potenciar las acciones de organización y desarrollo de la Consulta.

**DÉCIMO TERCERO.-** Para la organización y desarrollo de la Consulta, la DECEyEC se apoyará en, función de la tarea de que se trate, en áreas de la estructura central y las juntas ejecutivas locales y distritales ejecutivas.

**DÉCIMO CUARTO.-** Los OPL serán convocados para participar en la implementación de la Consulta, especialmente en tareas de difusión de la convocatoria, desarrollo de la Consulta, socialización y difusión de los resultados. También podrán aportar recursos materiales, humanos o financieros, atendiendo a su disponibilidad presupuestal. Para tales propósitos, la DECEyEC, con el apoyo

de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, coordinará la labor de acompañamiento y apoyo que pueda construirse desde esas instituciones electorales en las entidades federativas en la difusión e implementación del ejercicio infantil.

**DÉCIMO QUINTO.-** En relación con la modalidad y alcance de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, el Instituto Nacional Electoral buscará que el ejercicio se lleve a cabo en espacios públicos abiertos, pero también –y en función del apoyo que pueda lograrse desde las instituciones formales de educación–, en entornos escolares. La definición final del alcance de la Consulta dependerá de la disponibilidad presupuestal con que cuente el Instituto Nacional Electoral y de los apoyos que brinden las instituciones a invitadas a participar en la organización y desarrollo de la Consulta.

**DÉCIMO SEXTO.-** El INE podrá decidir, en función de la presencia de factores que limiten o pongan en riesgo la seguridad de niñas, niños y adolescentes o la correcta realización del ejercicio de participación infantil y juvenil, en qué lugares o entornos del territorio nacional no es posible llevar a cabo la Consulta, valorando si se posterga o se cancela en definitiva su realización en esos lugares.

**DÉCIMO SÉPTIMO.-** La DECEyEC deberá presentar a la Comisión de Capacitación y Organización Electoral o la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica –según corresponda– el informe final sobre la organización y el desarrollo de la Consulta Infantil y Juvenil 2018, mismo que deberá presentarse ante Consejo General del INE.

**DÉCIMO OCTAVO.-** Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales a efecto de que comunique el presente Acuerdo a los integrantes de los Órganos Superiores de Dirección de los Organismos Públicos Locales.

**DÉCIMO NOVENO.-** Se instruye al Secretario Ejecutivo, para que a través de la DECEyEC dé a conocer el contenido del presente Acuerdo a los integrantes de las Juntas Locales y Distritales del INE, para su aplicación en el ámbito de su competencia.

**VIGÉSIMO.-** El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente de su aprobación.

## **Anexo 1**

**PROYECTO DE ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO  
NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE LA  
CONSULTA INFANTIL Y JUVENIL 2018.**



Mónica González Contró	
Perfil	Experiencia y líneas de investigación
Licenciada en Derecho, Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)	Abogada General de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Máster en Necesidades y Derechos de la Infancia y de la Adolescencia, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)	Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 2. Profesora de Teoría del Derecho y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM y Coordinadora Académica del Diplomado sobre el Derecho a la no Discriminación.
Doctorado en Derechos Fundamentales, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)	Miembro de la delegación mexicana en el Seminario en Latinoamérica de Teoría Constitucional y Política (SELA), organizado por Universidad de Yale anualmente.
Diploma de Estudios Avanzados en el área de Filosofía del Derecho, Universidad Autónoma de Madrid (UAM)	Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Miembro de Junta de Gobierno del Consejo para Prevenir la Discriminación del Distrito Federal, Consejera Honoraria de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y Consejera Honoraria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.  Sus líneas de investigación son: • Derechos de niñas, niños y adolescentes • Derechos humanos • Derecho a la no discriminación, justicia para adolescentes

#### Publicaciones

- *Percepciones sobre la confianza, la seguridad y la justicia en la Consulta infantil y juvenil 2015.* (Coord.), Instituto Nacional Electoral, Ciudad de México, (2017).
- *Derechos de las niñas y niños.* Colección "Nuestros derechos", IIJ, UNAM, Ciudad de México, (2013).
- *Derechos humanos de los niños: una propuesta de fundamentación,* IIJ-UNAM, Ciudad de México, (2008).
- *Propuesta teórico-metodológica para la armonización legislativa desde el enfoque de derechos de niñas, niños y adolescentes,* coautoría con Mauricio Padrón, et.al. IIJ-UNAM, SNDIF, Ciudad de México, (2012).
- *Los derechos de niños, niñas y adolescentes en México a 20 años de la Convención sobre los Derechos del Niño,* Editorial Porrúa, IIJ-UNAM, Save the Children, Ciudad de México, (2011).

## Margarita Griesbach Guizar

Perfil	Experiencia y líneas de investigación
Licenciada en Pedagogía, The University of Texas, Austin	Coordinadora de Residencia en The Oaks Treatment Center, Hospital psiquiátrico infantil.
Maestría en Investigación Educativa, Universidad Iberoamericana (UIA)	<p>Coordinadora y directora general del Ednica (Educación con el Niño Callejero), Institución de Asistencia Privada que defiende y promueve los derechos humanos de niños, niñas y jóvenes en situación de calle.</p> <p>Fundadora y Directora Asociada de Invención Social S.A. de C.V.</p> <p>Fundadora y Directora General de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia.</p> <p>Ha realizado diversas consultorías para organismos nacionales e internacionales y es autora de diversos libros sobre la infancia.</p> <p>En Austin, Texas Trabajó en un Refugio para Mujeres Maltratadas, y para un Grupo de Apoyo para Padres que han Abusado de sus Hijos Física, Emocional o Sexualmente.</p>

## Publicaciones

- *La infancia y la justicia en México, T.I. El niño Víctima y testigo del delito dentro del sistema penal acusatorio en México.* Coautoría con Martínez del Campo Elisa Franco, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, (2011).
- *La infancia y la justicia en México, T II. Elementos para garantizar el efecto útil del interés superior del niño víctima.* Coautoría con Ricardo Ortega. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, (2013).
- *Presos invisibles. Hijos e hijas de mujeres en reclusión.* En coautoría con Analía Castañer y Luis Alberto Muñoz. Instituto Nacional de Ciencias Penales, Ciudad de México, (2015).
- *Utilización de hijos e hijas en el conflicto parental y la violación de derechos del supuesto síndrome de alienación parental.* En coautoría con Analía Castañer y Luis Alberto Muñoz. Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, (2014).

Nashieli Ramírez Hernández	
Perfil	Experiencia
Estudios de Licenciatura en Medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM.	Se ha desempeñado como Coordinadora General de Reriki Intervención Social, actualmente es Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es fundadora e integrante de la Alianza por los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México, así como en la Mesa Social contra la Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes en México y el Colectivo contra la Trata. Es integrante del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, REDLAMYC.
Especialidad en ejercicio de la Docencia, UNAM.	
Diplomados en Planeación, por la Facultad de Economía de la UNAM	Ha participado en el Observatorio de Derechos Humanos y Políticas Públicas de Incide Social; en el Consejo consultivo CIMAC Noticias y como Consejera Presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Es representante de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Asamblea Ciudadana del Consejo para prevenir la Discriminación en el Distrito Federal.
Diplomados en Gobierno Local, Seguridad y Justicia, por Escuela de Estudios de Policía de Colombia.	Forma parte del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México (SIPINNA). Es Invitada Permanente en el Comité Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México y Representante Social en la CITI del Distrito Federal.
Diplomado en <i>Laws, policies and reoporing tolos: supporting the fight against child labour, por el International Training Center</i> en Turín, Italia.	También ha fungido como integrante del Consejo Social Consultivo del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y como Consejera de radio Ciudadana del IMER. Ha participado en más de sesenta investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales y de derechos humanos.
Publicaciones	

Destacan la integración de los Informes Alternativos de México ante la Convención de los Derechos del Niño y su correspondiente presentación y consulta ante el Comité de los Derechos del Niños de la ONU.

- *Las Políticas de Atención a la Primera Infancia en la Ciudad de México* (2016); *Detrás de la puerta... que estoy educando. Estudio de violencia hacia niñas, niños y adolescentes en México* (2013)
- *Primera Infancia, agenda pendiente en derechos* (Santillana 2009).

Coautora entre otros de:

- *Los rostros del Trabajo Infantil en México* (mesa Social 2015).
- *El interés Superior del Niño* (Comisión de Derechos de la Niñez. LXII Legislatura 2015).
- *El Trabajo Infantil y el Derecho a la Educación* (2014. Editorial Aries); *Horas Infaustas: La Tragedia del New's Divine* (2009).
- La serie *La Infancia Cuenta en México* del 2005 al 2009 (REDIM).
- *La infancia cuenta en el Distrito Federal* (REDIM/CDHDF 2003).
- *Infancia Mexicana compromisos por cumplir* (REDIM 2002).

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Informes que presenta la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en materia de Participación Ciudadana y Cultura Cívica, mismo que se compone de 2 apartados. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes, están a su consideración los Informes. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Hago una intervención para ambos puntos, para señalar que efectivamente la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, previa presentación ante la Comisión socializa estos 2 Informes que son relevantes. Por un lado, el relativo a las acciones que se están implementando en el país para contribuir a la promoción del voto y el impulso de la participación ciudadana en los Procesos Electorales que se están llevando a cabo. \_\_\_\_\_

Por otro, el Primer Informe Trimestral sobre los avances en el desarrollo y puesta en marcha del Programa Anual 2018 de Actividades de Implementación y Evaluación de la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica. En ellos se subrayan los esfuerzos que nuestra estructura desconcentrada, en colaboración con los órganos electorales de los estados, están llevando a cabo para contribuir en lógica de pedagogía pública a la divulgación y explicación de información que oriente a la ciudadana de manera particular a las y los jóvenes entre los 18 y los 34 años, en el ejercicio responsable e informado de sus derechos político-electorales, pero también en cuanto al rol de las autoridades electorales y de los propios actores políticos para lograr que el Proceso Electoral transcurra apegado a los principios legales y éticos para la integridad y confianza en torno a las elecciones. \_\_\_\_\_

De esta manera, gracias a los Convenios y planes de trabajo que conjuntamente se integraron por las Juntas Ejecutivas Locales y los Órganos Públicos Locales Electorales, con el acompañamiento y asesoría de la propia Dirección Ejecutiva, desde el inicio de las campañas electorales hace 25 días, ustedes han tenido ya conocimiento, entre otras actividades, de los conversatorios o mesas de diálogo con jóvenes, actividades y pláticas en universidades y divulgación de materiales a través de diversos aliados y organizaciones de la Sociedad Civil. \_\_\_\_\_

Todas esas actividades territoriales, junto con el uso y mayor aprovechamiento que se ofrezca a las diversas plataformas digitales que el Instituto Nacional Electoral viene impulsando, como el “voto informado”, “las y los candidatos, conócelos” u “observatorio 2.0”, buscan contribuir a que efectivamente la ciudadanía cuente con más información y esté en mejores condiciones de ejercer su voto el próximo 1 de julio. \_\_\_\_\_

Aprovecho la ocasión para hacer una invitación a los partidos políticos para que conozcan y se involucren en este propósito, próximamente, por ejemplo, junto con el Consejero Presidente, habremos de presentar la plataforma digital “Voto Informado” que la Universidad Nacional Autónoma de México ha diseñado y que ha comenzado a alimentar con información sobre las propuestas de política pública, la trayectoria de las candidatas y los candidatos, así como los compromisos para atender problemas y necesidades de la Sociedad Civil. \_\_\_\_\_

El Informe relativo a las actividades de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, por su parte, es el segundo que se presenta, subraya aquellas acciones que en términos de lo programado para 2018 la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica ha coordinado en el primer trimestre de este año. \_\_\_\_\_

De lo ahí contenido quiero subrayar la realización de la Primera Reunión del Mecanismo de Seguimiento y Gobernanza planteado como un espacio de diálogo entre los actores clave de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, que son los Órganos Públicos Locales Electorales, los partidos políticos y el propio Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

Con el fin de alinear y detonar acciones para impulsar proyectos con base en las 8 líneas de acción de la Estrategia y sus 3 ejes estratégicos, que son: verdad, diálogo y exigencia.\_\_\_\_\_

Esta Reunión contó con la presencia de los Consejeros Presidentes de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales, los Vocales Ejecutivos de las Juntas Locales, representantes de los 6 partidos políticos nacionales, y autoridades del Instituto Nacional Electoral en el ámbito central. Ese espacio de seguimiento y gobernanza será de vital importancia para la ejecución y revisión de resultados de la propia Estrategia de Cultura Cívica y de ahí mi mensaje de agradecimiento a los partidos, a los Órganos Públicos Locales Electorales, a nuestras Juntas Ejecutivas Locales y Distritales, y en general, a los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral que en el ámbito central y desconcentrado están comprometidos con el objetivo mayor de esta Estrategia, que consiste en contribuir a que la ciudadanía mediante más verdad, más diálogo y más exigencia, se reapropie de lo público y encuentre elementos para involucrarse en la vida pública y en los procesos de vigilancia y exigencia de mejores resultados de las instituciones públicas.\_\_\_\_\_

La Estrategia Nacional de Cultura Cívica, quiero enfatizarlo, ha buscado dotar al actual Proceso Electoral de generación de más información y más espacios para dialogar, conversar, de modo que se pueda contribuir a la configuración de contextos de exigencia para las instituciones, para los partidos políticos y para la propia ciudadanía respecto de sus roles y deberes para el fortalecimiento de la Cultura Democrática, y de ello, ambos Informes que en forma conjunta he presentado, dan cuenta de lo que se viene realizando por parte de la institución a través de las áreas ejecutivas de la propia institución.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Muchas gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Solo para señalar que hay un tema relevante en el segundo de los informes, el trimestral que tiene que ver con el avance del Sistema de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, y es un avance que se ha visto un poco frustrado porque tecnológicamente no está operando del todo. \_\_\_\_\_

Lo que quisiera, proponer, es que consciente de que la Unidad Técnica de Servicios de Informática tiene mucha carga de trabajo por el Proceso Electoral, se pueda vaciar la información en el Excel, que entiendo, ya el área lo tiene planeado o concebido, a la brevedad posible para que ya cuando funcione el Sistema, todo el acopio de información que se haga en el Excel, después obre en el Sistema que se creó expreso en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica para el seguimiento y evaluación de los resultados de esta Estrategia, son las circunstancias las que nos ponen en esta situación de no contar con el Sistema, pero sí es muy importante, oportuno, que como lo hemos hecho en otros casos, esté por lo menos provisionalmente en Excel, ya vaciando todo lo que se está haciendo en la materia, para que después simplemente se vierta en el Sistema. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias, Consejero Electoral José Roberto Ruiz Saldaña. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Beatriz Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Quisiera tomar como base estos informes que se nos presentan para resaltar la importancia de la comunicación en los procesos democráticos que tenemos en esta sociedad, me parece que el diálogo constante con los jóvenes, quienes, a pesar de que está registrada una participación menor a la hora del ejercicio del voto, lo cierto es que están muy atentos a lo que sucede en la cosa pública, y eso es un espacio y una oportunidad que tenemos como autoridad para poder fortalecer el proceso de

comunicación, de información que tenemos nosotros la responsabilidad de hacerlo, primero el conocimiento de nuestros derechos nos permite el ejercicio de los derechos o al menos, la exigencia para lograr el ejercicio de los derechos, es una base fundamental.\_\_\_\_\_

Quisiera, y en esta medida que estamos trabajando desde la Estrategia Nacional de Cultura Cívica y a través también de otras acciones que tenemos para el impulso de la participación ciudadana y el fortalecimiento de la Cultura Cívica, hacer una propuesta que en algún momento había comentado con el Consejero Presidente, y es que, precisamente en este Proceso Electoral, donde existen personas jóvenes que potencialmente pueden votar, sea reconocida su participación al momento de que ejercen el voto, ya sea un diploma, alguna constancia que se dé de parte de esta autoridad, para que en conjunto con esta actividad de la selfie que se tiene prevista, en un momento anterior, también pueda ser presentada y complementada al momento de que ellos con su dedo, con su dedo marcado del ejercicio del voto, puedan hacer también del conocimiento si decidieron o no, porque eso es parte del trabajo que se está haciendo, emitir su voto, creo que son oportunidades esenciales las que tenemos ahora con esa comunicación de las y los jóvenes, que creo que también tendría que verse la posibilidad de visualizar la participación, la decisión de aquellas mujeres y hombres jóvenes, al momento del ejercicio de su voto.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala.\_\_\_\_\_

Permítanme hacer uso de la palabra, lo he hablado con el Presidente de la Comisión, el Consejero Electoral Marco Antonio Baños, para plantear que es pertinente que la propia Comisión sea el espacio para que las sugerencias que hacía el Consejero José Roberto Ruíz Saldaña se procese. No sé si sea una base de Excel, en fin, la mejor solución, pero creo que es la propia Comisión y con el acompañamiento del Comité de Seguimiento y Evaluación se decida cómo se va atendiendo la preocupación legítima y válida que se ha puesto sobre la mesa.\_\_\_\_\_



Si no hay más intervenciones, damos por recibido los Informes que nos ocupan y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Sexto Informe del seguimiento al Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, correspondiente al periodo del 22/03/18 al 20/04/18. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Estos son informes que de manera periódica estamos presentando a la consideración de la Comisión de Capacitación y de Organización Electoral y lo mismo del Consejo General. Es el Sexto Informe que da cuenta de cómo vamos avanzando con un calendario que originalmente se estructuró con 707 actividades. \_\_\_\_\_

Quiero decir que ha sido un esfuerzo de sistematización por parte de la Unidad Técnica de Planeación a cuya titular le quiero agradecer la puntualidad con que apoya a la Comisión en este seguimiento, pero me parece que nos refleja con claridad que el Proceso Electoral avanza de manera correcta, que el Proceso Electoral avanza de manera puntual conforme a las actividades que se programaron para este propósito. \_

En este periodo estaban programadas 237 actividades de las más de 700 que están programadas en la totalidad del Proceso Electoral. \_\_\_\_\_

De éstas hemos agotado conforme a los términos 229 y otras están en proceso de ser concluidas. \_\_\_\_\_

Creo que, no hay alguna actividad que por el momento pudiera generar algún foco rojo para la organización del Proceso Electoral, y creo que es de reconocerse el esfuerzo que las áreas ejecutivas y técnicas de la institución están realizando, cosa que agradezco particularmente a todos los titulares de las áreas técnicas que nos reportan a través de este instrumento e insisto, reconocer particularmente a la titular

de la Unidad Técnica de Planeación y a su equipo de trabajo la puntualidad con que están presentando estos informes a la consideración de la Comisión de Capacitación, pero también a la consideración de este Órgano Superior de Dirección. \_\_\_\_\_

Es todo, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Marco Antonio Baños. \_\_\_\_\_

Al no haber más intervenciones, damos por recibido este Sexto Informe. \_\_\_\_\_

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se ordena a la Junta General Ejecutiva elaborar e implementar un marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que, en su caso, deriven del mismo. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Colegas, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes, en Procesos Electorales pasados hemos enfrentado diversas circunstancias de casos fortuitos y de fuerza mayor que han puesto en riesgo el desarrollo de alguna actividad del Proceso Electoral. \_\_\_\_\_

Estas situaciones han obedecido a una variedad de razones, desde las alertas por condiciones climatológicas adversas hasta movimientos y conflictos sociales que han llevado a esta institución a modificar el curso de las actividades planeadas para llevar a buen puerto el Proceso Electoral. \_\_\_\_\_

Hasta la fecha lo hemos logrado con éxito, sin embargo, la experiencia adquirida, la ubicación geográfica de nuestro país, así como su pluralidad social y política nos han demostrado que en la organización y control del Proceso Electoral Federal, existen algunos eventos que no pueden ser previstos; por ello, nos hemos dado a la tarea de explorar e identificar las mejores prácticas que nos ayuden a detectar eventos potenciales que puedan obstaculizar o impedir el desarrollo de los objetivos institucionales para posteriormente evaluarlos, jerarquizarlos, controlarlos y darles seguimiento.\_\_\_\_\_

En primer lugar, será necesario analizar y revisar las particularidades de las actividades a desarrollar en cada entidad, en las Direcciones Ejecutivas o en las Unidades Técnicas del Instituto, lo que nos permitirá identificar posibles problemáticas o riesgos, pronosticar su ocurrencia y medir la magnitud de sus efectos.\_\_\_\_\_

Este análisis de las actividades sustantivas y cuya vulneración podría tener alguna afectación al Proceso Electoral, servirá de base para establecer mecanismos de prevención, como contención y, de esta manera, garantizar la continuidad de operaciones del Instituto.\_\_\_\_\_

Es así que el Proyecto de Acuerdo que se trae a su consideración ordena la realización de un marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo.\_\_\_\_\_

El objetivo del marco de actuación es tener un proceso sistemático que nos permita identificar riesgos y, con ello, prevenir y planear cómo podemos mitigarlos o eliminarlos; además, otorgará una ruta de actuación que permita responder en forma inmediata ante eventos no previstos que podrían suceder durante el Proceso Electoral, con el fin de reencauzar las actividades a su desarrollo normal.\_\_\_\_\_

La determinación que, en su caso, apruebe este Consejo General, mediante el presente Proyecto de Acuerdo, ofrece una visión clara y precisa de lo que se espera realice la Junta General Ejecutiva, define el objetivo, alcance, fines y consideraciones para el marco de actuación que deberá elaborar la estructura operativa del Instituto.\_\_\_\_

Este es un Proyecto de Acuerdo, creo que abona a la certeza del Proceso Electoral en curso, en la búsqueda por garantizar que la realización de las actividades sustantivas de esta institución se cumplan cabalmente, tal y como está ordenado en las diferentes posiciones normativas que nos rigen y en los Acuerdos de este órgano colegiado.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Maestro Pedro Vázquez, representante del Partido del Trabajo.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenas tardes una vez más.\_\_\_\_\_

Estoy totalmente a favor del Proyecto de Acuerdo que se presenta, solamente quiero hacer una propuesta de adición al segundo párrafo del punto de Acuerdo Primero, y es en el sentido de que se informe a los integrantes de este Consejo General el marco de actuación que se ha aprobado por la Junta General Ejecutiva.\_\_\_\_\_

La propuesta es en estos términos, el segundo párrafo diría: "...el marco de actuación aprobado por la Junta General Ejecutiva deberá informarse a los integrantes de este Consejo General de manera inmediata..." \_\_\_\_\_

Aquí está la propuesta de adición.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Maestro Pedro Vázquez, ¿Me permite una pregunta? \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:** Sí. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Creo que, para atender su petición, con la que no tengo ninguna objeción bastaría que se pudiera hacer, que se ha hecho del conocimiento para que no se presente de manera oficial o formal, ¿O quiere que sea presentado formalmente aquí? \_\_\_\_\_

**El C. representante del Partido del Trabajo, Maestro Pedro Vázquez González:**

Con que se notifique inmediatamente a los integrantes del Consejo General, representantes y partidos políticos. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Desde luego, comparto el Proyecto de Acuerdo y comparto que se faculte a la Junta General Ejecutiva para elaborar un marco de actuación. \_\_\_\_\_

Únicamente tengo 2 observaciones tendientes a fortalecer la motivación del Proyecto, pero que no modifican en nada la sustancia del mismo. \_\_\_\_\_

Primero, no advierto una identidad entre la finalidad de la elaboración del marco y el objetivo que se presenta, se menciona el objetivo, que es en realidad hacer un protocolo de actuación, señalar paso por paso cómo tienen que actuar las áreas del Instituto, incluso, se dice de manera literal que es el procedimiento que les permite responder en forma inmediata a la materialización de riesgos. \_\_\_\_\_

Sin embargo, en la finalidad no solamente se habla de responder, sino identificar, analizar y controlar los riesgos que afecten el Proceso Electoral Federal. \_\_\_\_\_

Entonces, nada más pediría que se homologue esa parte para que también en el objetivo se hable de identificar, analizar y controlar. \_\_\_\_\_

Ahora, se refiere también que la Junta General Ejecutiva puede utilizar facultades extraordinarias para cubrir los requerimientos normativos, eso se puede interpretar como que no se tiene que apegar al principio de legalidad, esto se menciona en la página 7. \_\_\_\_\_

Sin embargo, en las finalidades, en la página 6, en lugar de eso se dice: “darle un cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos”. Creo que, hay que homologar la redacción, me parece mucho más afortunado mencionar nada más que van a tener la facultad de darle un cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos. \_\_\_\_\_

Con esas observaciones estaría, desde luego, de acuerdo, y también con lo que ha sugerido el representante del Partido del Trabajo. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, con las propuestas de modificación que han sugerido el representante del Partido del Trabajo y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, le pido que someta a votación el Proyecto de Acuerdo. \_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 12, tomando en consideración en esta votación la propuesta de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, a fin de fortalecer el Proyecto en los términos que ella lo ha presentado, así como la propuesta del representante del Partido del Trabajo para que se notifique a este Consejo General. \_\_\_\_\_

Los que estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo, si son tan amables. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG409/2018) Pto. 12** \_\_\_\_\_

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE ORDENA A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA ELABORAR E IMPLEMENTAR UN MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA CONTINUIDAD DE OPERACIONES DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2018, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS EXTRAORDINARIOS QUE, EN SU CASO, DERIVEN DEL MISMO

GLOSARIO

Consejo General	Consejo General del Instituto Nacional Electoral
Constitución	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Instituto	Instituto Nacional Electoral
LGIPE	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Marco de Actuación	El Marco de actuación para la continuidad de operaciones del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo que deberá elaborar e implementar la Junta General Ejecutiva en términos de lo previsto en el presente Acuerdo
Proceso Electoral Federal	Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo

## **ANTECEDENTES**

- I. El 1 de enero de 2014, entró en vigor el Acuerdo CG209/2013 del Consejo General por el que se expide el Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios.
- II. El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución, en materia político-electoral.
- III. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expide la LGIPE.
- IV. El 18 de diciembre de 2014, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG348/2014 que los Consejos Locales y distritales, del Instituto, por causa de fuerza mayor o caso fortuito, autorizaran la celebración de sus sesiones en sedes alternas, así como que el personal de las Juntas Locales y Distritales respectivas, desarrollaran sus funciones en las sedes que se determinara.
- V. El 3 de febrero de 2015, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG55/2015 las medidas y acciones extraordinarias en materia de integración de mesas directivas de casilla y capacitación electoral, en aquellos Distritos del estado de Guerrero cuyas circunstancias de casos fortuitos y de fuerza mayor no permitieran las condiciones o impidieran la implementación de la estrategia de capacitación y asistencia electoral 2014-2015.
- VI. El 3 de junio de 2015, el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG341/2015 las medidas y acciones extraordinarias para la continuación del Proceso Electoral, en aquellos Distritos cuyas circunstancias de caso fortuito y de fuerza mayor no permitieran las condiciones o impidieran la implementación ordinaria de sus actividades.



- VII.** El 15 de diciembre de 2016 entró en vigor el Acuerdo INE/CG844/2016 del Consejo General por el que se expide el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
- VIII.** El 21 de diciembre de 2016 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG870/2016 el Plan Estratégico del Instituto Nacional Electoral 2016-2026.
- IX.** El 5 de septiembre de 2017 el Consejo General aprobó mediante Acuerdo INE/CG390/2017 el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal 2017-2018.

## **CONSIDERACIONES**

### **I. Competencia**

El Consejo General es competente para ordenar a la Junta General Ejecutiva elaborar e implementar el Marco de Actuación , de conformidad con lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo y apartado B de la Constitución; 29, 30, párrafo 2, 31, párrafo 1, 32, párrafo 1, 34, párrafo 1, 35, 36, párrafo 1 y 44, párrafo 1, incisos b), gg) y jj), 47, 48 párrafo 1, incisos b) y o) de la LGIPE y el 1 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios.

Lo anterior, dado que la materia que involucra el presente asunto se encuentra relacionada con la facultad que tiene el Consejo General para dictar los acuerdos necesarios para ejercer las facultades previstas en el apartado B de la Base V del artículo 41 de la Constitución.

## **II. Marco normativo**

De conformidad con el artículo 41, párrafo segundo, de la Constitución, la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero de la Constitución, establece que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y de los Organismos Públicos Locales.

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, párrafo primero y apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución; 29 y 31, párrafo 1, de la LGIPE, establecen que la autoridad en materia electoral es el Instituto como un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las y los ciudadanos, en los términos que ordene la Ley; además de contar con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio directo de sus facultades y atribuciones; independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Los artículos 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, párrafo primero y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b) de la Constitución y 30, párrafo 2, de la LGIPE, establecen que todas las actividades del Instituto deben regirse por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

El artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numerales 1, 4 y 5, de la Constitución, así como el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracciones I, IV y V, de la LGIPE, disponen que, para los Procesos Electorales Federales y locales, el Instituto tendrá las atribuciones relativas a: la capacitación electoral; la ubicación de las casillas y la designación de los funcionarios de sus mesas directivas; las reglas, Lineamientos, criterios y formatos en materia de resultados preliminares; encuestas o sondeos de opinión; observación electoral; conteos rápidos; impresión de documentos y producción de materiales electorales.

El artículo segundo transitorio, fracción II, inciso a), del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia político-electoral, establece que la celebración de elecciones federales y locales será el primer domingo de junio del año que corresponda, a partir del 2015, salvo aquellas que se verifiquen en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio.

El artículo 33, párrafo 1, de la LGIPE establece que el Instituto tiene su domicilio en ahora Ciudad de México y ejerce sus funciones en todo el territorio nacional a través de 32 delegaciones, una en cada entidad federativa y 300 subdelegaciones, una en cada Distrito Electoral uninominal.

El artículo 35 de la LGIPE, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

El artículo 44, párrafo 1, incisos b), gg) y jj) de la LGIPE, establecen que es atribución del Consejo General vigilar la oportuna integración y adecuado funcionamiento de los órganos del Instituto; vigilar que las actividades de los Partidos Políticos Nacionales se desarrollen con apego a la LGIPE y la Ley General de Partidos Políticos y, que cumplan con las obligaciones a que están sujetos; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones; aprobar y expedir los Reglamentos, Lineamientos y Acuerdos para ejercer las facultades previstas en el Apartado B, de la Base V del artículo 41 de la Constitución y dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas dichas atribuciones.

Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación ha establecido el criterio contenido en la jurisprudencia 16/2010, de rubro FACULTADES EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. SU EJERCICIO DEBE SER CONGRUENTE CON SUS FINES<sup>1</sup>, en el sentido de que el Consejo General, como órgano máximo de

---

<sup>1</sup> Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, páginas 349 y 350.

dirección y encargado de la función electoral de organizar las elecciones, cuenta con una serie de atribuciones expresas que le permiten asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones y, de manera general, velar por que todos los actos en materia electoral se sujeten a los principios, valores y bienes protegidos constitucionalmente y por ende, a fin de que el ejercicio de las citadas atribuciones explícitas sea eficaz y funcional, dicho órgano puede ejercer ciertas facultades implícitas que resulten necesarias para hacer efectivas aquellas, siempre que estén encaminadas a cumplir los fines constitucionales y legales para los cuales fue creado el Instituto.

Asimismo, el referido órgano jurisdiccional ha sostenido el criterio contenido en la tesis CXX/2001 de rubro LEYES. CONTIENEN HIPÓTESIS COMUNES, NO EXTRAORDINARIAS<sup>2</sup>, conforme con el cual se establece que “cuando se presenten circunstancias anormales, explícitamente no previstas en la normatividad rectora de una especie de actos, la autoridad competente para aplicar el derecho debe buscar una solución con base en el conjunto de principios generales rectores en el campo jurídico de que se trate, aplicados de tal modo, que armonicen para dar satisfacción a los fines y valores tutelados en esa materia.”

El artículo 48, párrafo 1, incisos b) y o), de la LGIPE señala que la Junta General Ejecutiva tiene como atribuciones fijar los procedimientos administrativos, conforme a las Políticas y Programas Generales del Instituto, además de las que le encomiende el Consejo General.

Además, el artículo 40, párrafo 1, incisos b) y c), del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral determina que la Junta General Ejecutiva tiene como atribución coordinar y supervisar la ejecución de las Políticas y Programas Generales del Instituto y dictar los acuerdos y Lineamientos necesarios para la adecuada ejecución de los acuerdos y resoluciones del Consejo General;

---

<sup>2</sup> Consultable en la Compilación 1997-2013. Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 2, Tomo I, páginas 1345 y 1346.

Por otra parte, el artículo 1 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios prevé entre los supuestos legales en los que se desactiva la aplicación de Reglamento referido a las contrataciones que se realicen por acuerdo emitido en cumplimiento de la LGIPE cuando no sea posible observar las bases y procedimientos establecidos en dicha norma.

Asimismo, el artículo 61 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a propuesta de la Junta General Ejecutiva dispone que en casos excepcionales, el Instituto podrá autorizar la adjudicación directa de trabajos sin que éstos se encuentren incluidos en el Programa Anual de Obras Públicas, cuando existan circunstancias de urgencia o eventualidad que ocurran en cada caso; o bien, cuando derivado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, sea necesaria su ejecución por requerimientos específicos de operación y funcionamiento del Instituto.

Es por lo anterior que resulta necesario, que el Marco de Actuación considere lo relativo a requerimientos de recursos financieros, humanos, materiales y servicios, obras públicas, aquellos que son administrados por la Unidad Técnica de Servicios de Informática, o cualquier otro que sea definido para atender un riesgo.

### **III. Motivos que sustentan la determinación**

De los elementos normativos anteriores se desprende el deber y la atribución de este Instituto de adoptar las medidas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de organizar las elecciones, armonizando el cumplimiento de la ley, con la garantía de otros derechos cuando éstos entran en conflicto, a partir de las condiciones y circunstancias específicas y excepcionales que se presentan.

La ubicación geográfica de nuestro país, así como su pluralidad social, lo hacen susceptible ante los eventos de casos fortuitos o de fuerza mayor, que pueden poner en riesgo la celebración de los comicios en los términos y conforme a las fechas aprobadas por el Consejo General, lo que hace necesaria la elaboración e implementación del Marco de Actuación orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Además, en la organización y control de los procesos y procedimientos involucrados en el Proceso Electoral Federal existen eventos que no pueden ser

previstos, siendo incierta su ocurrencia y cuya magnitud puede ser variable, por lo que su efecto puede ser adverso a lo planeado.

Por lo anterior, se hace necesario que el Consejo General instruya a la Junta General Ejecutiva la elaboración e implementación del Marco de Actuación, con el fin de facilitar a los órganos centrales del Instituto y órganos desconcentrados y, en su consecuencia a todo su personal, un proceso sistemático de continuidad de operaciones que permite identificar, analizar, responder y controlar los riesgos que afecten el Proceso Electoral Federal, utilizando los recursos, actividades, procedimientos e información desarrollados para prevenir, evitar o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo a fin de darle un cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, técnicos, de recursos materiales y servicios, de arrendamiento de inmuebles, obras públicas, recursos humanos y financieros, que respondan de manera flexible y oportuna, a esas situaciones extraordinarias.

Ahora bien, para el cumplimiento de lo mandatado en el párrafo que antecede, es necesario que este Consejo General determine el objetivo, alcance, fines y consideraciones, para que la Junta General Ejecutiva cuente con el marco general a través de las cuales debe desarrollar el contenido de dicho marco, así como las directrices para implementar el proceso a seguir. En ese tenor, se hace notar lo siguiente:

El objetivo del Marco de Actuación es permitir, identificar, analizar, responder y controlar los riesgos para brindar a los titulares de Oficinas Centrales y de Juntas Locales y Distritales, y en su caso, a todo su personal, un procedimiento o protocolo que les permita responder en forma inmediata ante la materialización de riesgos, con el fin de reencauzar el desarrollo normal del Proceso Electoral Federal.

El alcance del Marco de Actuación consiste en el conjunto de recursos, actividades, procedimientos e información desarrollado para prevenir, evitar o mitigar la posibilidad de ocurrencia de un riesgo o amenaza al Proceso Electoral Federal. En caso de que un riesgo se materialice, proveerá al personal del Instituto de manera oportuna de estrategias o protocolos –jurídicos, técnicos, humanos, financieros— que le permitan tomar decisiones excepcionales para continuar con sus responsabilidades y apoyar el retorno a la normalidad en el menor tiempo posible. Por ello, sus protocolos servirán para atender las contingencias del

Proceso Electoral Federal de manera expedita, debiendo documentarse para efectos de transparencia y rendición de cuentas.

El Marco de Actuación solamente resulta aplicable a aquellas actividades vinculadas directamente con el Proceso Electoral Federal. Bajo ninguna circunstancia se incorporarán actividades ajenas a dicho proceso. Cualquier necesidad ajena al mismo, deberá sujetarse estrictamente a lo establecido en la normatividad del Instituto.

De manera enunciativa, más no limitativa, los fines del Marco de Actuación entre otros deberán asegurar la integridad del personal del Instituto y de los participantes en el Proceso Electoral Federal; supervisar el cumplimiento de los procesos críticos de la Jornada Electoral; estabilizar, continuar, reanudar y recuperar los procesos críticos y sus dependencias tecnológicas y de otros recursos; mitigar, responder y gestionar los posibles impactos; darle un cauce institucional adecuado a los requerimientos normativos, así como de recursos financieros, humanos, materiales y servicios, arrendamiento de inmuebles y obras públicas; así como documentar de manera ágil y expedita los requerimientos especiales que soporten adecuadamente la toma de decisiones excepcionales.

El tipo de recursos que pueden ser necesarios en la instrumentación del Marco de Actuación, son para la protección del personal del Instituto y de las y los ciudadanos; protección de información y datos; disposición de edificios e instalaciones asociadas; hardware y software; transportes; recursos financieros, y materiales diversos.

Los elementos antes descritos, tienen como propósito que el Marco de Actuación se ciña únicamente a las distintas etapas que conforman los principales procesos involucrados en el Proceso Electoral Federal, por ello, los mismos deben coincidir con los previstos en el Plan y Calendario Integral del Proceso Electoral Federal, excluyendo los procesos concluidos a la fecha de la aprobación del presente Acuerdo.

Por lo anterior, resulta necesario que la Junta General Ejecutiva, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, se encuentre en aptitud de aprobar el Marco de Actuación a fin de continuar con la logística propia del desarrollo del Proceso Electoral Federal, para estar en condiciones de brindar alertas de riesgo a las áreas involucradas a fin de prevenirlos o, bien que cuenten con los medios para implementar mecanismos de respuesta.

#### **IV. Determinación**

Se instruye a la Junta General Ejecutiva elaborar e implementar un Marco de Actuación, que permita la continuidad y seguridad del Proceso Electoral Federal de conformidad con el objetivo, alcance, fines y consideraciones señalados en el presente Acuerdo.

En razón de los antecedentes y consideraciones expresados el Consejo General emite el siguiente:

### **A C U E R D O**

**PRIMERO.** Se ordena a la Junta General Ejecutiva elaborar e implementar a la brevedad un Marco de Actuación que permita la continuidad y seguridad del Proceso Electoral Federal 2018, así como para los procesos extraordinarios que deriven del mismo de conformidad con el objetivo, alcance, fines y consideraciones señalados en el presente Acuerdo.

La Junta General Ejecutiva deberá aprobar el Marco de Actuación a más tardar en la segunda semana del mes de mayo 2018, debiéndolo informar a los integrantes del Consejo General.

**SEGUNDO.** De las acciones realizadas con motivo de la aplicación del Marco de Actuación se presentará al Consejo General un informe en las sesiones ordinarias que se realicen, además se deberá de presentar un informe final a más tardar 30 días después de concluido el Proceso Electoral Federal.

**TERCERO.** El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por este Consejo General, con independencia de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Electoral y en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.

**CUARTO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las gestiones necesarias a efecto de difundir el presente Acuerdo a través de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Electoral y en la página de internet del Instituto Nacional Electoral.



**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Sírvase a proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Segundo Informe que presenta el Secretario Ejecutivo al Consejo General del Instituto Nacional Electoral con el propósito de difundir, en atención al principio de definitividad que rige los Procesos Electorales, la realización y conclusión de las etapas, actos y actividades trascendentes de los Órganos Electorales del Instituto. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Le ruego que haga uso de la palabra para presentar el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

En cumplimiento al artículo 431 del Reglamento de Elecciones, cuyo propósito es atender al principio de definitividad que los Procesos Electorales y, por lo tanto, difundir la realización y conclusión de los actos y actividades trascendentes de este órgano electoral, esta Secretaría Ejecutiva pone a su consideración el Segundo Informe de definitividad en torno al Proceso Electoral 2017-2018, con corte al 28 de marzo pasado. \_\_\_\_\_

Como es de su conocimiento, todo Proceso Electoral Ordinario comprende 4 grandes etapas: \_\_\_\_\_

Primero, de preparación de la Elección; segundo, de la Jornada Electoral; tercero, de resultados y declaración de validez de las elecciones; y finalmente el cuarto, Dictamen y declaración de validez de la Elección y de Presidente electo.\_\_\_\_\_

Dado que en el Proceso Electoral Federal 2017-2018 será el más grande de la historia al acompañarse de 30 Procesos Locales con Jornada Electoral Concurrente con la Federal, en estos Informes se reportarán aquellas actividades que realice el Instituto Nacional Electoral, incluyendo aquellas cuya implementación involucre a los Organismos Públicos Locales Electorales, principalmente durante la primera etapa de los Procesos Electorales.\_\_\_\_\_

Por ello, en el primer apartado, de manera muy breve se da cuenta de la designación del Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas, así como de un Consejero Electoral en el Organismo Público Local Electoral de Veracruz, con lo que se cubrieron las vacantes en dichos cargos. Así, los 30 Organismos Públicos Locales Electorales con elecciones en este año están debidamente integrados.\_\_\_\_\_

En el segundo apartado, se informa sobre las acciones y decisiones correspondientes a la etapa de preparación de la Elección, como lo son la asignación de tiempos en radio y televisión para los Procesos Electorales Federales y Locales, los Dictámenes respecto de los apoyos recabados por aspirantes a candidaturas independientes, los avances en las tareas de Capacitación y Organización Electoral incluyendo las relacionadas con el desarrollo e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares, así como los mecanismos para la realización del Conteo Rápido.\_\_\_\_\_

En este documento, también se da cuenta de los Informes presentados a este órgano colegiado en materia de encuestas electorales sobre el monitoreo de noticieros que realiza la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y respecto de los avances del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.\_\_\_\_\_

Por supuesto, se reportan las determinaciones tomadas en materia de fiscalización.\_\_\_\_

El tercero y último apartado, se dedica a reportar las acciones y determinaciones asociadas a las elecciones extraordinarias, así se da cuenta de la conclusión del Proceso Electoral Local Extraordinario en el Municipio de San Blas Nayarit, y sobre la realización de 3 elecciones municipales extraordinarias en el estado de Veracruz que se desarrollaron de manera exitosa.\_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes, nuestro diseño electoral considera que las elecciones se constituyen en un proceso, que comprende distintos eslabones que se consolidan mediante la toma de múltiples decisiones y acciones sujetas a distintos mecanismos de deliberación y que son conocidas y aceptadas, o en su caso, impugnadas por los actores de la contienda.\_\_\_\_\_

Es así que el Proceso Electoral se edifica paso a paso con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, cuya participación en cada momento y decisión fortalece al proceso en su conjunto.\_\_\_\_\_

En un Proceso Electoral tan complejo como el que enfrentamos, no solo por el desafío institucional que implica la organización de 3 elecciones federales concurrentes con elecciones en 30 entidades, sino por las complicadas condiciones políticas y sociales que atraviesa nuestro país, es indispensable respetar, procurar y proteger el principio de definitividad que dota de certeza a nuestro Proceso Electoral.\_\_\_\_\_

Esta certeza tan necesaria absolutamente irremplazable para la vida electoral mexicana y que nos ha permitido transitar hacia la alternancia pacíficamente a sustituir a los poderes de manera legal e irrefutable, esa certeza que dota de definitividad los actos y decisiones de la autoridad electoral, es lo que busca documentar el Informe que está a su consideración.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que mucho agradezco, y le pido al Secretario del Consejo, continúe con el siguiente asunto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina la asignación de tiempo en Radio y Televisión a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018; en el estado de Nuevo León. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo, señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo con el Proyecto de Acuerdo que se está poniendo a nuestra consideración, en el sentido de que se aprueba la asignación de tiempo para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, durante los periodos de Campaña, reflexión y Jornada Electoral para este Proceso Electoral 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal. \_\_\_\_\_

Solamente tengo una propuesta de forma, en las páginas 3 y 4, estamos haciendo una referencia a la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, el Comité de Selección para la Designación del Fiscal, la Publicación de una Ley Orgánica, la Convocatoria para la Designación del Fiscal y luego la revisión de perfiles de los aspirantes al cargo de Fiscal y la Designación del

Fiscal; entonces, creo que toda esa información no es útil para lo que nosotros vamos a resolver en el sentido de, si vamos a otorgar o no los tiempos que nos solicita la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, entonces pediría que se quitara, porque advierto algunas imprecisiones y, en vez de hacer las correcciones creo que sale mucho más económico quitar todas estas referencias.\_\_\_\_  
Entonces pediría que se quitara el antecedente 10, 11, 12, 13, 14 y 15; y ya nos iríamos directamente a la solicitud de asignación de tiempo, obviamente cambiándole el número romano que le correspondería ya a ese párrafo\_\_\_\_  
Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Claro.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Muchas gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, solo una precisión, estoy de acuerdo con lo que usted plantea, pero ¿No cree que valdría la pena señalar solo la fecha de creación de la Fiscalía? ¿Por qué creo que es relevante? Por el momento en el que estamos resolviendo asignar tiempos, y tiene que ver con la fecha de creación, por eso no se había hecho antes, aunque coincido con usted, todos los demás antecedentes me parece que no guardan demasiada relación, ¿Usted estaría de acuerdo con eso?\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Sí Consejera Electoral, con la fecha de la creación de la Fiscalía, y por eso es que la solicitud llega hasta estos momentos, el 17 de abril de 2018 y no con antelación, sí claro que sí. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Al no haber más intervenciones, con la precisión que se ha planteado Secretario del Consejo, le pido que se someta a votación el Proyecto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se prueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 14, tomando en consideración en esta votación la propuesta de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, a fin de eliminar los Antecedentes del 10 al 15, con la observación indicada por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_  
Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG410/2018) Pto. 14** \_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN A LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, DURANTE LAS ETAPAS DE CAMPAÑA, PERIODO DE REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2017-2018, COINCIDENTE CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018; EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN**

### **ANTECEDENTES**

- I. Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales.** En sesión extraordinaria celebrada el trece de diciembre de dos mil diez, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se da respuesta a la solicitud formulada por los Consejeros presidentes de los Organismos Electorales de las entidades federativas del país en relación con la asignación de tiempos en radio y televisión”*, identificado con la clave CG430/2010.
- II. Criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales 2011-2012.** En sesión ordinaria celebrada el veinticinco de enero de dos mil doce, el Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se emiten los criterios para la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y federales durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y las elecciones locales cuya jornada comicial será coincidente con la federal, aplicables durante el periodo que abarcan la intercampaña, Campaña, Reflexión y Jornada Comicial federales”*, identificado como CG19/2012.

- III. Acuerdo de criterios de asignación 2014-2015.** En sesión extraordinaria celebrada el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las diversas autoridades electorales locales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2014-2015; así como en los Procesos Electorales Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con el Proceso Electoral Federal”*, identificado como INE/CG158/2014.
- IV. Acuerdo de asignación de tiempos para la FEPADE y el TEPJF.** En sesión extraordinaria celebrada el diez de diciembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se determina la asignación de tiempos en radio y televisión a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante los periodos de precampaña, intercampaña, campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2014-2015, mediante la aplicación de criterios específicos de distribución”*, identificado como INE/CG300/2014.
- V. Inicio del Proceso Electoral Federal 2017-2018.** Mediante sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, dio inicio formalmente el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
- VI. Aprobación del inicio y conclusión de la precampaña federal.** En sesión extraordinaria, celebrada el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se establece el periodo de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas”* identificado con la clave INE/CG427/2017, en cuyo Punto de Acuerdo SÉPTIMO, establece que: *“Las precampañas electorales darán inicio el día 14 de diciembre de 2017 y concluirán a más tardar el día 11 de febrero de 2018.”*



- VII. Aprobación de pautas de autoridades electorales durante la etapa de precampañas en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.** El dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en sesión extraordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se emitió el *“Acuerdo [...] por el que se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras autoridades electorales, en el periodo de precampaña del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales Locales con Jornada Comicial coincidente con la federal en 2018”*, identificado como INE/JGE177/2017.
- VIII. Acuerdo de criterios de asignación 2017-2018.** En sesión extraordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se aprueban los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y federales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como en los Procesos Electorales Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal”*, identificado como INE/CG458/2017.
- IX. Aprobación de pautas de autoridades electorales del Proceso Electoral Federal 2017-2018 y locales coincidentes.** El once de diciembre dos mil diecisiete, en sesión ordinaria de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, se aprobó el *“Acuerdo [...] por el que se aprueban los modelos de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes del Instituto Nacional Electoral, así como de otras autoridades electorales, en los periodos de intercampaña, campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como de los Procesos Electorales Locales con jornada comicial coincidente con la federal”*, identificado como INE/JGE231/2017.
- X. Creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León.** El catorce de abril de dos mil diecisiete, se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el Decreto 243, por el que se reformaron y adicionaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en concreto, a través del diverso 87, se instituyó una configuración tripartita del Ministerio Público, debido a que se estableció que será

desempeñado por una Fiscalía General de Justicia del Estado que contará con dos Fiscalías Especializadas, una en Combate a la Corrupción y otra en Delitos Electorales.

- XI. Solicitud de asignación de tiempo.** El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la Junta Local Ejecutiva en el estado de Nuevo León, remitió el oficio identificado como INE/VS/JLE/NL/892/2018, en donde adjuntó el escrito signado por el Mtro. Gilberto Pablo de Hoyos Koloffon, Fiscal Especializado en Delitos Electorales, mediante el cual solicita la asignación de los tiempos en radio y televisión a que tiene derecho la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León.

## **C O N S I D E R A N D O S**

### **Competencia en materia de administración de los tiempos de radio y televisión**

1. El Instituto Nacional Electoral es la autoridad única para la administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y a los de otras autoridades electorales y al ejercicio del derecho de los partidos políticos, siendo independiente en sus decisiones y funcionamiento, de conformidad con los artículos 41, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 30, numeral 1, inciso h) y 160, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

### **Competencia específica del Consejo General del Instituto Nacional Electoral**

2. Los artículos 162 de la Ley General en la materia y 4, numeral 2 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral disponen que el Instituto ejercerá sus facultades en materia de radio y televisión a través del Consejo General, de la Junta General Ejecutiva, de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, del Comité de Radio y Televisión, de la Comisión de Quejas y Denuncias, y de los Vocales Ejecutivos y juntas ejecutivas en los órganos desconcentrados, locales y distritales, que tendrán funciones auxiliares.

3. Es competencia del Consejo General aprobar la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales, federales o locales, fuera y dentro de los procesos electorales, en términos de lo dispuesto en los artículos 44, numeral 1, incisos n) y jj); 161, numeral 1; 162, numeral 1, inciso a); y 164, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4, numeral 2, inciso a); 6, numeral 1, inciso e); y 18, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral.
4. De conformidad con los artículos 51, 56 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el primer domingo de junio de dos mil dieciocho se celebrarán los comicios correspondientes a la elección de Diputados, Senadores y Presidente, salvo aquellas que tengan verificativo en 2018, las cuales se llevarán a cabo el primer domingo de julio, tal como lo señala el artículo Décimo Primero transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Segundo Transitorio, fracción II, inciso a) del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce.
5. En las siguientes entidades se desarrollan Procesos Electorales Locales cuya jornada comicial es coincidente con la federal: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

***Tiempos correspondientes a las autoridades electorales de conformidad con la normativa aplicable***

6. De conformidad con los artículos 41, Base III, Apartados A, inciso a) y B, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 165 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 12, numeral 1 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral en los procesos electorales de carácter federal y local, a partir del inicio de las precampañas hasta el día de la Jornada Electoral, el Instituto tendrá a su disposición cuarenta y ocho minutos diarios en cada estación de radio y

canal de televisión de la entidad de que se trate y por regla general se distribuye el tiempo de la siguiente manera:

- **Campaña:** De acuerdo con los artículos 169, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 22, numeral 2 del Reglamento de la materia, durante las campañas federales, las autoridades electorales dispondrán en conjunto de siete minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión.
  - **Periodo de Reflexión y Jornada Electoral:** De conformidad con el artículo 41, Base III, apartados A, inciso a) y B, inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 20 del Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, durante el periodo comprendido a partir del día siguiente a la fecha que concluyan las campañas federales y locales y hasta el término de la Jornada Electoral, el Instituto dispondrá de 48 minutos diarios en cada estación de radio y canal de televisión que cubran la elección de que se trate.
7. En virtud de lo descrito en el antecedente XI del presente instrumento, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado Nuevo León, solicitó que se le otorgara tiempo en radio y televisión; y en función que dicha solicitud fue presentada una vez iniciada la etapa de intercampaña federal y local, se considera necesario asignar tiempo en radio y televisión durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018, en el estado de Nuevo León.
8. De conformidad con el artículo 182, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales el Instituto, y por su conducto los Organismos Públicos Locales y las demás autoridades electorales, harán uso del tiempo en radio y televisión que les corresponde, de acuerdo a las reglas que apruebe el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo cual, este Consejo General debe considerar que la reciente creación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León contribuye directamente en la persecución de los delitos electorales que se puedan cometer durante la celebración del Proceso Electoral de dicha entidad que tiene coincidencia con el Proceso Electoral Federal, por lo que se considera fundamental que cuente con tiempo en radio y televisión para que difunda sus funciones, tomando en consideración a las autoridades electorales de

dicha entidad, como lo es la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

9. Con base en el Acuerdo INE/CG458/2017, por el que se aprobaron los criterios relativos a la asignación de tiempos en radio y televisión a las autoridades electorales locales y federales para las etapas de precampaña, intercampaña, campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral en el Proceso Electoral Federal 2017-2018; así como en los Procesos Electorales Locales ordinarios con jornada comicial coincidente con la federal, se considera indispensable proporcionar a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León, espacios en radio y televisión para el cumplimiento de sus fines; razón por la cual este Consejo General, asignará el tiempo en dichos medios de conformidad con los criterios siguientes:

- a) Entidades en las que se celebre un Proceso Electoral Local con jornada comicial coincidente con la Federal:

- Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral de un Proceso Electoral Local que no concurren con alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el cincuenta por ciento **(50%)** del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines, cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral y el diez por ciento **(10%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre el resto de las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.
- Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral de un Proceso Electoral Local que concurren con alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el setenta por ciento **(70%)** del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines y el de otras autoridades electorales y el treinta por ciento **(30%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.

[...]

10. En virtud de que el tiempo total correspondiente a las autoridades electorales y al Instituto Nacional Electoral debe ser utilizado mediante la transmisión de mensajes con duración definida, la adecuación no puede ser exacta por lo que una vez que se haya determinado el total de spots correspondientes, en caso de que existan fracciones restantes y éstas puedan ser optimizadas, serán asignadas al Instituto Nacional Electoral.
11. El tiempo no utilizado por las autoridades electorales locales o los partidos políticos quedará a disposición del Instituto Nacional Electoral de conformidad con el artículo 168, numeral 5 de la Ley General comicial.

#### **Fundamentos para la emisión del Acuerdo**

<i>Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos</i>
41, Base III Apartados A, incisos a) y B, incisos a) y b); 51; 56 y 83.
<i>Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales</i>
22, numeral 1; 30, numeral 1, inciso h); 44, numeral 1, incisos n) y jj); 160, numeral 1; 161, numeral 1; 162; 164, numerales 1 y 2; 165, numeral 1; 168, numeral 5; y 169, numeral 2, 182, numeral 1.
<i>Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral</i>
4 numeral 2; 6, numeral 1, inciso e); 12, numeral 1; 18, numeral 1; 20; 22, numeral 2.

### **ACUERDO**

**PRIMERO.** Se aprueba la asignación de tiempo para la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, durante los periodos de campaña, reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018 coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

**SEGUNDO.** Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral del Proceso Electoral Local 2017-2018, coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Nuevo León, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo INE/CG458/2017, le será asignado a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Nuevo León, el siguiente porcentaje de tiempo en radio y televisión:

**a)** Entidades en las que se celebre un Proceso Electoral Local con jornada comicial coincidente con la Federal:

- Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral de un Proceso Electoral Local que no concurren con alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará cincuenta por ciento **(50%)** del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines, cuarenta por ciento **(40%)** al Organismo Público Local Electoral y el diez por ciento **(10%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre el resto de las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.
- Durante las etapas de campaña, periodo de reflexión y Jornada Electoral de un Proceso Electoral Local que concurren con alguna etapa del Proceso Electoral Federal, se asignará el setenta por ciento **(70%)** del tiempo disponible en radio y televisión al Instituto Nacional Electoral para sus fines y el de otras autoridades electorales y el treinta por ciento **(30%)** restante se dividirá, en partes iguales, entre las autoridades electorales locales que envíen oportunamente su solicitud de tiempos.

**TERCERO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo a que, por conducto de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, notifique el presente Acuerdo a la Comisión Estatal Electoral, el Tribunal Electoral del estado y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Nuevo León.

**CUARTO.** El presente Acuerdo entrará en vigor una vez a partir de su aprobación por este Consejo General, no obstante, será la Junta General Ejecutiva de este Instituto quien apruebe la modificación de la pauta correspondiente de conformidad con el calendario previsto de entrega de materiales y órdenes de transmisión del Proceso Electoral Local 2017-2018 coincidente con el Proceso Electoral Federal 2017-2018 en el estado de Nuevo León.

**QUINTO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las acciones necesarias para la publicación del presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, le pido que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

Asimismo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Octavo Informe mensual, en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones, en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Colegas, está a su consideración el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Por disposición reglamentaria mes con mes en cada sesión ordinaria de este Consejo General, esta Secretaría presenta el Informe en cumplimiento al artículo 144 del Reglamento de Elecciones. \_\_\_\_\_

Como lo hemos dicho en anteriores ocasiones, el propósito central de la regulación en materia de encuestas electorales, es que la sociedad cuente con los elementos informativos que le permitan distinguir entre una encuesta científica, metodológicamente rigurosa de la que no lo es. \_\_\_\_\_

De esta manera, la regulación busca contribuir a la construcción de una opinión pública mejor informada y, en última instancia, un voto con mayores elementos de decisión. \_\_\_\_\_

El Informe que está a su consideración da cuenta a este Consejo General y a la sociedad en general de las encuestas que fueron publicadas y los estudios que



respaldan sus resultados, recibidos en la Secretaría Ejecutiva durante el periodo comprendido del 15 de marzo al 11 de abril del presente. \_\_\_\_\_

Para ello, la Coordinación Nacional de Comunicación Social realiza un monitoreo de 524 medios de comunicación impresos (periódicos y revistas), de los cuales 93 son nacionales y 431 de alcance Local, con el fin de detectar las encuestas de preferencia electoral que son publicadas. \_\_\_\_\_

Por su parte, esta Secretaría Ejecutiva recibe los estudios con el respaldo metodológico, verifica el cumplimiento de los criterios científicos, requiere a los sujetos obligados que no cumplen con ellos, Sistematiza los datos e informa a este Consejo General y publica toda la información al respecto en la página de Internet del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

En este Octavo Informe, damos cuenta de la detección en medios impresos de 50 publicaciones originales que dieron a conocer estudios de opinión sobre preferencias electorales de elecciones federales. \_\_\_\_\_

Asimismo, se reporta la recepción de 26 estudios metodológicos de los cuales 15 corresponden a 25 publicaciones detectadas por el monitoreo que realiza la Coordinación Nacional de Comunicación Social, 5 estudios corresponden a la entrega extemporánea de publicaciones reportadas en el Sexto y Séptimo Informes, los cuales fueron entregados como resultado de los procedimientos de requerimiento realizados por esta autoridad. 6 estudios se refieren a publicaciones que fueron dados a conocer en medios distintos a los monitoreados por la Coordinación Nacional de Comunicación Social. \_\_\_\_\_

Todos los estudios recibidos contienen la totalidad de la información respecto de los criterios de carácter científico aprobados por este Consejo General. \_\_\_\_\_

No obstante, de la compulsas y verificación que realiza la Secretaría Ejecutiva, se identificaron 25 publicaciones cuyo estudio científico no fue entregado al Instituto Nacional Electoral o fue entregado de manera incompleta, por lo cual se realizarán los requerimientos conducentes. \_\_\_\_\_

Por otro lado, dentro del periodo que se reporta en el presente Informe, la Secretaría Ejecutiva no recibió aviso alguno por parte de personas físicas o morales para realizar encuestas de salida y/o conteos rápidos el próximo 1 de julio. \_\_\_\_\_

No obstante, en anteriores Informes se ha reportado la recepción de avisos de interesados en realizar este tipo de ejercicio, por lo que a la fecha la Secretaría Ejecutiva ha emitido 2 acreditaciones. \_\_\_\_\_

Finalmente, el presente Informe da cuenta, a su vez, de los Informes sobre la regulación de las encuestas que se presentaron en las sesiones ordinarias de los Consejos Generales de 25 Organismos Públicos Locales Electorales. \_\_\_\_\_

Por último, solo reiterar que toda la información que resulta del trabajo que realiza esta institución para regular las encuestas electorales encuentra su disposición de manera permanente a través de la página de Internet del Instituto Nacional Electoral, donde podrán consulta un rico acervo documental sobre encuestas publicadas, los estudios que respaldan sus resultados, la verificación del cumplimiento de los criterios científicos, entre otra información relevante. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes, éste es, como ya decía, el Octavo Informe sobre la Regulación en Materia de Encuestas Electorales, que presenta esta Secretaría para el Proceso Electoral Federal en curso, con el invaluable apoyo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social y la Unidad Técnica lo Contencioso Electoral. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Colegas está a su consideración el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias, representante suplente de Nueva Alianza. \_\_\_\_\_

**El C. representante de Nueva Alianza, Ciudadano Marco Alberto Macías Iglesias:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenas tardes. \_\_\_\_\_

En forma breve. En el Informe se da cuenta de que hay 25 requerimientos a encuestadoras que no acompañaron la metodología, únicamente para saber cuál es el tratamiento procesal que se les da, dado que es un incumplimiento manifiesto a una obligación de Ley. \_\_\_\_\_

Entonces, en un contexto en el que las encuestas pueden, no digo que así sea, pueden ser utilizadas como elementos de propaganda electoral, creo que es pertinente el solicitarle a esta autoridad que no sea permisiva, en el mejor de los sentidos, en cuanto a no exigir el cumplimiento de esta obligación. \_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenas tardes. \_\_\_\_\_

Este punto es importante, Secretario, integrantes del Consejo General, porque efectivamente, un poco en el sentido que refiere nuestro compañero, es que en el Sexto y en el Séptimo Informe pasados, que usted rindió, se hizo mención que se habían realizado requerimientos a diversas encuestadoras, se referían con fecha u los medios donde se había publicado, sin embargo, en este Octavo Informe seguimos sin saber, sin conocer qué pasó con esos requerimientos en términos del artículo 136. En particular, nos preocupa o nos ocupa a nosotros el tema de la encuestadora Massive Caller, porque vemos que reiteradamente en el Sexto Informe, Séptimo y ahora en este también, vienen reportadas omisiones por parte de Massive Caller es importante que de entrada, a menos que usted ahora y le pediría si nos puede comentar algo, Secretario Ejecutivo, de si desahogaron esos requerimientos y si lo hicieron en tiempo dentro de los 5 días que marca el artículo 136. \_\_\_\_\_

Nos preocupa porque, desde luego, Massive Caller ha sido una encuestadora que ha generado distintas reacciones, hoy mismo, precisamente publica Sala de Prensa (SDP) una nota donde refiere que acusan a Massive Caller de simular encuestas para favorecer a Ricardo Anaya. No lo decimos nosotros, lo dice Sala de Prensa (SDP), que hay un video que está circulando en redes sociales de unos supuestos hackers que inspeccionaron el sitio web y que determinan que es una fachada, que se dejó de recibir información en ese portal, al parecer lo que se observa es que es una manipulación de datos, para decirlo muy claramente. \_\_\_\_\_

Entonces me parece que esta información, que huele mal, que parte de lo que se cuestionaba de este ejercicio de esta encuestadora es que no se acompañaba la información que soportaba la encuesta, y está impunemente circulando en medios, y todo mundo además toma en cuenta a Massive Caller y le da una importancia, inclusive, en el portal de Leo Zuckermann en “Oraculus”, ahí también la toman como válida. \_\_\_\_\_

Me parece que sí es muy importante saber qué tipo de ejercicio es, si está reuniendo y cumpliendo con la normatividad electoral. \_\_\_\_\_

Me gustaría conocer su respuesta para entonces hacer otro tipo de pronunciamiento. \_  
Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputada Mariana Benítez. \_\_\_\_\_

Dado que estamos ante un Informe, permítanme responder, porque hay una sola ronda, el Secretario Ejecutivo no puede responder las preguntas que se han formulado en las distintas intervenciones. \_\_\_\_\_

Creo que, es importante tomar en cuenta lo siguiente, nosotros no validamos la información de las encuestas, creo que es importante ponerlo sobre la mesa, nuestra responsabilidad es, como lo hicimos en su momento, luego de una interlocución con el gremio de encuestadores publicar los criterios metodológicos a los que tienen que ajustarse todas las encuestas que se realicen y se publiquen, nosotros no auditamos

nada y no hay una obligación de presentar, de registrar la encuesta y documentar los distintos requisitos que nuestros Lineamientos establecen en términos de la metodología, quién paga, etcétera, si no se publica. \_\_\_\_\_

Dicho eso, el procedimiento cuando nosotros identificamos una encuesta publicada que no fue en su momento registrada o cuya documentación soporte no cumple con los Lineamientos, es que el Instituto lo que hace son requerimientos antes de iniciar un Procedimiento Ordinario Sancionador en los términos de la legislación que trae aparejada las sanciones que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece. \_\_\_\_\_

Al día de hoy, digamos, en el acumulado desde el arranque del Proceso Electoral se han iniciado solamente 2 Procedimientos Ordinarios Sancionadores por la negativa de un tercer requerimiento, primero, segundo y tercer requerimiento a entregar información. \_\_\_\_\_

En el caso específico del que menciona la Diputada Mariana Benítez, tenemos registrado a lo largo de los Informes desde el arranque del Proceso Electoral y hasta este Octavo Informe, la publicación de 10 encuestas distintas, que han sido objeto de distintos requerimientos de información, es decir, es importante señalar que los requerimientos antes de iniciar un post son 3 respecto de la misma encuesta, no respecto de la casa encuestadora. \_\_\_\_\_

En el caso de Massive Caller, lo que hemos tenido es en distintos momentos a partir de las 10 secuencias que tenemos registrada, el requerimiento de entrega de información. Hoy mismo estamos en la atención de uno de estos requerimientos, insisto, que se formulan en 3 ocasiones antes de detonar los Procedimientos Sancionadores. \_\_\_\_\_

En el caso específico de esta casa encuestadora y de las distintas encuestas que se han registrado, en ningún caso se ha omitido la entrega de información luego de los requerimientos realizados, razón por la cual hoy no hay un Procedimiento Ordinario Sancionador iniciado en su contra en curso. Pero, estamos en estos momentos en la

espera de la entrega de la información de alguno de los requerimientos que hemos venido realizando.\_\_\_\_\_

Entonces, el procedimiento es ése. \_\_\_\_\_

No hay preguntas en éste, dado que es un Informe, pero por supuesto, lo que quiero proponerles, aprovechando todavía que tengo unos minutos de mi intervención que no pretendo agotar los minutos, la intervención sí, es, esto es una información, que como ustedes saben, se está, no solamente presentando al Consejo General sino que se está registrando en tiempo real en el portal del propio Instituto en donde cualquier persona, por supuesto, los miembros del Consejo General, pueden consultar lo que mensualmente se reporta ante este órgano.\_\_\_\_\_

Con independencia de eso, si alguno de los miembros del Consejo General quiere alguna información específica respecto de los procedimientos que están en curso, por un lado con la secrecía del caso, hablo de los 2 Procedimientos Ordinarios Sancionadores, pero detalles respecto de los mismos o bien, del estado de los requerimientos, es decir, información respecto de las encuestas que han sido publicadas, cuántos requerimientos se han hecho, si están en curso, etcétera, etcétera, los remitiría, si no tienen inconveniente, con la propia Secretaría Ejecutiva y le pido al Secretario del Consejo, que, como ha venido ocurriendo, se nutra de la información necesaria a los miembros del propio Consejo General.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina, representante suplente del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Para apoyar la petición de la Diputada Mariana Benítez, es la emoción, para secundar la petición que hace la Diputada, ha sido notorio cómo Massive Caller ha generado percepciones erróneas ¿En qué podemos nosotros asegurar esto? Ellos han generado supuestamente un tracking a través de un robot, de un robot telefónico, presentan información supuestamente diaria y semanal, pero no solamente eso,

tienen una app de pago que puede uno bajar en Android o en Iphone, saltándose muchos de los requerimientos que hacen, los mismos periódicos, televisoras etcétera, le dicen al ciudadano que diario le van a dar un resultado específico, pero no conocemos hoy por hoy absolutamente nada de su funcionamiento.\_\_\_\_\_

Para nosotros ha sido ciertamente sorpresivo conocer que, a través de una App diariamente se hacen encuestas a 12 mil personas, o sea, eso es prácticamente imposible, ahora, hasta hoy que, a través de esta noticia de los hackers hemos visto el supuesto funcionamiento de esta encuestadora, técnicamente vimos que es un cuartito con 3 computadoras y 2 teléfonos, lo cual nos hace pensar la falta de seriedad de esta empresa, por lo tanto, amablemente le solicito nos pueda compartir, a través del Secretario Ejecutivo, la información que para nosotros es útil, esta encuestadora tal parece que está ayudando específicamente a algunos candidatos a generar la percepción de triunfo cuando no es así.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Al no haber más intervenciones, damos por recibido el Informe, me permito recordar simple y sencillamente que estos informes tienen que ver con encuestas publicadas, uno y dos, que se han recibido también por la vía, no solo de los procedimientos que se han iniciado, sino también hay quejas que están en curso y que en su momento serán resueltas por las instancias correspondientes.\_\_\_\_\_

Damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, para la ampliación del periodo de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de un aspirante a

candidato independiente al cargo de Diputado Local MR de la Ciudad de México y tres aspirantes a candidatos independientes a diversos cargos en el Estado de México, en cumplimiento de las sentencias TECDMX-JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 y ST-JDC-0129-2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto de Acuerdo, solamente tengo unas erratas de una adenda que, precisamente ahora se les está circulando, y son cuestiones nada más de precisión. \_\_\_\_\_

En la página 10 nada más estoy proponiendo que además de los informes de ingresos y gastos, también las respuestas a los oficios de errores y omisiones sean presentados ante las Juntas Locales Ejecutivas de la Ciudad de México y del Estado de México y/o en las Oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización, para que sepan con mucha seguridad donde tienen que presentar esos documentos. \_\_\_\_\_

En el anexo 1, ahí también hay una imprecisión. Dice “ingreso” y debería decir “gasto”. También una adenda por sugerencia del Consejero Electoral Ciro Murayama en ese mismo cuadro que es la plantilla de Registro de Operaciones de Gastos, también agregar una columna que diga “referencia de ingresos” para vincular todo el egreso con el ingreso correspondiente y así cruzar la información. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_



**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Solo me parece que valdría la pena notificar no solo a los Organismos Públicos Locales Electorales, también a nuestras Juntas Locales Ejecutivas porque son quienes van a recibirlos, solo en el Resolutivo correspondiente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** De acuerdo, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente con las propuestas planteadas. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 16, tomando en consideración la fe de erratas y la adenda propuesta por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, así como también la adenda propuesta por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG411/2018) Pto. 16** \_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS REGLAS PARA LA CONTABILIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y FISCALIZACIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE APOYO CIUDADANO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, DE UN ASPIRANTE A CANDIDATO INDEPENDIENTE AL CARGO DE DIPUTADO LOCAL MR DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y TRES ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A DIVERSOS CARGOS EN EL ESTADO DE MÉXICO, EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS TECDMX-JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 Y ST-JDC-0129-2018.**

### **ANTECEDENTES**

- I. El 8 de septiembre de 2017, el Consejo General del INE aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/CG409/2017 por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización.
- II. En sesión extraordinaria del 16 de febrero de 2017, la Comisión de Fiscalización aprobó el Acuerdo CF/004/2017 por el que se modifica el Manual General de Contabilidad que incluye la Guía Contabilizadora y el Catálogo de Cuentas, los Formatos expedidos mediante Acuerdo CF/075/2015, el cual servirá de apoyo para el cumplimiento del Reglamento de Fiscalización.
- III. El 28 de agosto de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG387/2017, mediante el cual se emiten los Lineamientos para la verificación del porcentaje de apoyo ciudadano que se requiere para el registro de candidaturas independientes a cargos federales de elección popular para el Proceso Electoral Federal 2017-2018. En el referido Acuerdo, el Consejo General aprobó el uso de una aplicación para su uso en dispositivos móviles, que sirve para que los y las aspirantes a candidatos independientes recaben sus firmas de apoyo ciudadano.

- IV. El 8 de septiembre en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG427/2017 por el que se establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas.
- V. El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria del Consejo General, se aprobó el Acuerdo INE/CG408/2017 por el que se designan al consejero Dr. Ciro Murayama Rendón Presidente de la Comisión de Fiscalización, y a los consejeros Mtro. Marco Antonio Baños Martínez, Dra. Adriana Margarita Favela Herrera, Dr. Benito Nacif Hernández, Lic. Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles integrantes de la misma
- VI. El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG430/2017, mediante el cual se ratificó el plan integral y calendarios de coordinación de los Procesos Electorales Locales concurrentes con el federal 2017-2018.
- VII. El 20 de octubre de 2017 en sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/CG476/2018, por el que el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, así como los gastos que se consideran de apoyo ciudadano para el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
- VIII. El 8 de diciembre de 2017 en sesión extraordinaria el Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG596/2017 por el que se modifican los diversos INE/CG387/2017, INE/CG455/2017 e INE/CG475/2017 en su Anexo 1 en el apartado de cargos federales, relacionados con la obtención del porcentaje de apoyo ciudadano, así como los plazos para las precampañas y obtención de apoyo ciudadano en las entidades federativas que tienen Proceso Electoral concurrente con el Proceso Electoral Federal Ordinario 2017-2018 en cumplimiento a lo dispuesto en los acuerdos INE/CG514/2017 e INE/CG478/2017.
- IX. El 23 de marzo el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG199/2018 Dictamen de la revisión de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos de la

Ciudad de México, en el que se incluyó a la **C. Elizabeth Díaz Chávez**, aspirante a candidata independiente al Congreso Local de la Ciudad de México, por el Distrito Electoral Local 12, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.

- X. En esa misma fecha el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG209/2018 Dictamen de la revisión de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos del Estado de México en el que se incluyó a la **C. María de Jesús Picazo Álvarez**, para la obtención de apoyo ciudadano como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Nicolás Romero; así como a los C.C. **Daniel Hernández Hernández**, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local MR por el Distrito 02 Toluca y **Reyna Candelaria Salas Bolaños**, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local MR por el Distrito 36 San Miguel Zinacantepec, en el Estado de México.
- XI. El 21 de marzo de 2018 el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante la sentencia ST-JDC-98/2018 ordenó la reposición del plazo de 36 horas a la **C. María de Jesús Picazo Álvarez**, para la obtención de apoyo ciudadano como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Nicolás Romero, Estado de México.
- XII. El 30 de marzo de 2018, el Instituto Electoral del Estado de México emitió el Acuerdo Número 7, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ST-JDC-98/2018.
- XIII. El 12 de abril de 2018 mediante sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ST-JDC-122/2018 y ST-JDC-129/2018, se ordenó la reposición de 6 días en el plazo para la obtención de apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes siguientes:

Nombre	Cargo
Daniel Hernández Hernández	Diputado Local Distrito 02 Toluca
Reyna Candelaria Salas Bolaños	Diputada Local Distrito 36 San Miguel Zinacantepec

Como efectos de la sentencia se ordenó al Instituto Electoral del Estado de México reponer el plazo de 6 días para recabar el apoyo ciudadano y al Instituto Nacional Electoral, que ejecute todos los actos necesarios para habilitar la aplicación informática para la captación de los apoyos ciudadanos.

- XIV.** El 13 de abril de 2018, el Instituto Electoral del Estado de México, por medio del Consejo Distrital No. 02 con sede en Toluca de Lerdo emitió el Acuerdo Sin Número, y el Consejo Distrital No. 36 con sede en San Miguel Zinacantepec, aprobó el Acuerdo número 07 mediante los cuales, acordó reponer el plazo de seis días para recabar el apoyo ciudadano a los Ciudadanos Daniel Hernández Hernández, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 02 Toluca y Reyna Candelaria Salas Bolaños, aspirante a candidata independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 36 San Miguel Zinacantepec, Estado de México, respectivamente..
- XV.** El 6 de abril de 2018, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México resolvió el juicio ciudadano identificado con la clave TECDMX-JLDC-059/2018, en cuya parte que interesa, resolvió:

“(…)

1. *Se ordena al Consejo General ya la DERFE que, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la notificación de este fallo, implementen lo necesario para otorgar a la demandante un periodo adicional de seis días para la obtención de las firmas de apoyo ciudadano, el cual comprenderá del ocho al trece de abril del año en curso.*

(…)

2. *El Consejo General deberá solicitar al Consejo General y a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE lo pertinente para que, en cumplimiento a la presente ejecutoria y en el ámbito de su competencia, ajusten los plazos para la fiscalización del periodo de obtención del apoyo ciudadano, en lo que atañe al caso de la actora, a fin de que sea considerado el informe complementario de ingresos y gastos que habrá de presentar.*

(…).”

**XVI.** El 7 de abril de 2018, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó el Acuerdo IECM/ACU-CG-118/2018, por el que se da cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictada el 6 de abril de 2018, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con la clave TECDMX-JLDC-059/2018, se determina procedente ajustar los plazos para la obtención de apoyo ciudadano y los relacionados con las etapas del proceso de registro de la ciudadana Elizabeth Díaz Chávez como aspirante a candidata sin partido a Diputada Local MR por el Distrito 12 de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018.

### **CONSIDERANDO**

1. Que en el artículo 6, numeral 2 de la LGIPE, se establece que el INE dispondrá lo necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes generales.
2. Que el artículo 42, numerales 2 y 6 de la LGIPE, prevé la creación de la Comisión de Fiscalización, la cual funcionará permanentemente y se integrará exclusivamente por Consejeros Electorales designados por el Consejo General, y contará con un Secretario Técnico que será el Titular de la Unidad Técnica de Fiscalización.
3. Que el inciso jj) del artículo 44 del mismo ordenamiento jurídico, establece que el Consejo General del INE dictará los Acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las demás señaladas en la Ley.
4. Que el numeral 2 del artículo 192 de la LGIPE, establece que, para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión de Fiscalización contará con la Unidad Técnica de Fiscalización.
5. Que el numeral 1, del artículo 196, de la LGIPE dispone que, la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto es el órgano que tiene a su cargo la recepción y revisión integral de los informes

que presenten los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento, así como investigar lo relacionado con las quejas y procedimientos oficiosos en materia de rendición de cuentas de los partidos políticos.

6. Que el artículo 199, numeral 1, inciso a) de la LGIPE, es atribución de la Unidad Técnica de Fiscalización auditar con plena independencia técnica los ingresos, gastos, documentación soporte y la contabilidad de los partidos políticos, así como los informes que están obligados a presentar.
7. Que el artículo 199, numeral 1, inciso b) de la LGIPE, señala que la Unidad Técnica de Fiscalización tendrá la facultad de elaborar y someter a consideración de la Comisión de Fiscalización, los proyectos de Reglamento en materia de fiscalización y contabilidad, y los acuerdos que se requieran para el cumplimiento de sus funciones.
8. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 378 de la LGIPE, los aspirantes a candidatos independientes deberán presentar un informe de ingresos y egresos, dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano. No obstante, cabe mencionar que, en sesión del 20 de octubre de 2017, la Consejo General aprobó el Acuerdo INE/CG476/2018 por el que se ajustan los plazos para la fiscalización de precampaña y obtención de apoyo ciudadano, correspondiente a los procesos electorales y federales 2017-2018.
9. Que el artículo 425 de la LGIPE, señala que la revisión de los informes que, los aspirantes a una candidatura independiente, presenten sobre el origen y destino de sus recursos y de actos para el apoyo ciudadano, según corresponda, así como la práctica de auditorías sobre el manejo de sus recursos y su situación contable y financiera, estará a cargo de la Unidad Técnica de Fiscalización de la Comisión de Fiscalización del Instituto.
10. Que el artículo 427 de la LGIPE, establece las facultades de la Comisión de Fiscalización, entre las que se encuentran: i) Revisar y someter a la aprobación del Consejo General los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y verificaciones practicadas a los aspirantes a una candidatura independiente, en los que especificarán las irregularidades

en que hubiesen incurrido en el manejo de sus recursos; el incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que procedan conforme a la normatividad aplicable; ii) Ordenar la práctica de auditorías, directamente o a través de terceros, a las finanzas de los aspirantes a una candidatura independiente; iii) Ordenar visitas de verificación a los aspirantes a una candidatura independiente con el fin de corroborar el cumplimiento de sus obligaciones y la veracidad de sus informes.

11. Que de conformidad con el artículo 428, numeral 1, incisos a) y b) del mismo ordenamiento, la Unidad Técnica de Fiscalización cuenta con la facultad de regular el registro contable de los ingresos y egresos de los aspirantes a una candidatura independiente, determinar las características de la documentación comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y establecer los requisitos que deberán satisfacer los informes de ingresos y egresos que le presenten, de conformidad a lo establecido en dicha Ley, así como proponer a la Comisión de Fiscalización la emisión de las normas generales de contabilidad y registro de operaciones aplicables a los aspirantes a una candidatura independiente.
12. Que el artículo 428, numeral 1, incisos c) y d) de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene entre sus facultades la de vigilar que los recursos de los aspirantes a una candidatura independiente y candidatos independientes tengan origen lícito y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en la Ley, así como recibir y revisar los informes de ingresos y gastos de los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano de los aspirantes a una candidatura independiente.
13. Que el artículo 429 de la LGIPE, establece que la Unidad Técnica de Fiscalización deberá garantizar el derecho de audiencia de los aspirantes a una candidatura independiente con motivo de los procesos de fiscalización y que estos tendrán derecho a la confronta de los documentos comprobatorios de sus ingresos y egresos, o de sus estados contables, contra los obtenidos o elaborados por la citada Unidad Técnica de Fiscalización sobre las mismas operaciones, a fin de aclarar las discrepancias entre unos y otros.



14. Que el artículo 430 de la LGIPE, señala que los aspirantes a una candidatura independiente deberán presentar los informes del origen y monto de los ingresos y egresos de los gastos de los actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano del financiamiento privado, así como su empleo y aplicación, ante la Unidad Técnica de Fiscalización, atendiendo a las siguientes reglas :i) Origen y monto de los ingresos, así como los egresos realizados de la cuenta bancaria abierta; ii) Acompañar los estados de cuenta bancarios; y iii) Entregarlos junto con la solicitud de registro correspondiente.
15. Que el artículo 2, numeral 2 del Reglamento de Comisiones del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, establece que las Comisiones ejercerán las facultades que les confiera la Ley, el Reglamento Interior, el propio Reglamento de Comisiones, los Acuerdos de integración de las mismas, los Reglamentos y Lineamientos específicos de su materia, así como los Acuerdos y Resoluciones del propio Consejo.
16. Que corresponde al INE ejercer la facultad de fiscalización sobre las operaciones de ingreso y gasto, relacionadas con la obtención del apoyo ciudadano de los procesos electorales federal y locales 2017-2018.
17. Que en términos de artículo décimo quinto transitorio del decreto por el que se expide la LGIPE, el Consejo General podría ajustar los plazos establecidos en la ley a fin de garantizar la debida ejecución de las actividades y procedimientos electorales contenidos la misma.
18. Que el 23 de marzo el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG199/2018 Dictamen de la revisión de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos de la Ciudad de México, en el que se incluyó a la C. Elizabeth Díaz Chávez, aspirante a candidata independiente al Congreso Local de la Ciudad de México, por el Distrito Electoral Local 12, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
19. Que en esa misma fecha el Consejo General del INE aprobó el Acuerdo INE/CG209/2018 Dictamen de la revisión de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos del Estado de México en el que se incluyó a la Ciudadana María de Jesús

Picazo Álvarez, para la obtención de apoyo ciudadano como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Nicolás Romero; así como a los Ciudadanos **Daniel Hernández Hernández**, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 02 Toluca y **Reyna Candelaria Salas Bolaños**, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 36 San Miguel Zinacantepec, en el Estado de México.

20. Que el 30 de marzo de 2018, el Instituto Electoral del Estado de México emitió el Acuerdo Número 7, en cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante el cual se ordenó la reposición del plazo de 36 horas a la **C. María de Jesús Picazo Álvarez**, para la obtención de apoyo ciudadano como aspirante a la candidatura independiente a la presidencia municipal de Nicolás Romero.
21. Que el 7 de abril de 2018, mediante Acuerdo IECM/ACU-CG-118/2018 el Instituto Electoral de la ciudad de México, en cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México determinó procedente ajustar los plazos para la obtención de apoyo ciudadano y los relacionados con la etapa del proceso de registro de la ciudadana Elizabeth Díaz Chávez como aspirante a candidata independiente al Congreso Local de la Ciudad de México, por el Distrito Electoral Local 12, en el Proceso Electoral Ordinario 2017-2018.
22. Que en el Acuerdo IECM/ACU-CG-118/201, se instruye al Secretario Ejecutivo para que solicite al Consejo General y a la Unidad Técnica de Fiscalización, para que se ajusten los plazos para la fiscalización y la emisión del Dictamen de no rebase de gastos correspondientes al periodo ampliado de obtención de apoyo ciudadano de la **C. Elizabeth Díaz Chávez, del 8 al 13 de abril de 2018**.
23. Mediante sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ST-JDC-122/2018 y ST-JDC-129/2018 del 12 de abril de 2018, se ordenó la reposición de 6 días en el plazo para la obtención de apoyo ciudadano a los aspirantes a candidatos independientes siguientes:

Nombre	Cargo
Daniel Hernández Hernández	Diputado Local Distrito 02 Toluca
Reyna Candelaria Salas Bolaños	Diputada Local Distrito 36 San Miguel Zinacantepec

Como efectos de la sentencia se ordena al Instituto Electoral del Estado de México se reponga el plazo de 6 días para recabar el apoyo ciudadano y al Instituto Nacional Electoral, que ejecute todos los actos necesarios para habilitar la aplicación informática para la captación de los apoyos ciudadanos.

24. Que en ese sentido el 13 de abril de 2018, el Instituto Electoral del Estado de México, por medio del Consejo Distrital No. 02 con sede en Toluca de Lerdo emitió el Acuerdo Sin Número, y el Consejo Distrital No. 36 con sede en San Miguel Zinacantepec, aprobó el Acuerdo número 07. mediante los cuales, acordó reponer el plazo de seis días para recabar el apoyo ciudadano a los Ciudadanos Daniel Hernández Hernández, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local por el Distrito 02 Toluca y Reyna Candelaria Salas Bolaños, aspirante a candidato independiente al cargo de Diputada Local por el Distrito 36 San Miguel Zinacantepec.
25. Que mediante oficios IEEM/DPP/1175/2018 e IEEM/DPP/1176/2018, se remite al Vocal Ejecutivo de la JLE del INE en el estado de México, los acuerdos emitidos por el IEMM, en acatamiento a las sentencias del Tribunal sobre la reposición del plazo de 6 días para la obtención del apoyo ciudadano a los CC. Daniel Hernández Hernández y Reyna Candelaria Salas Bolaños, señalando lo siguiente:

*“...las autoridades se vinculan para el efecto de que se otorgue el plazo complete para recabar el apoyo ciudadano, conforme a lo siguiente:*

*1 ...*

*2. Se ordena al INE, por conducto del área competente que, a partir de la notificación de la determinación del Instituto Electoral del Estado de México y hasta que se cumplan 48 horas de su notificación, ejecute todos los actos*

*necesarios para habilitar la aplicación informática Sistema de Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano, únicamente para. Daniel Hernández Hernández y Reyna Candelaria Salas Bolaños,*

*...*

- 26.** Que en virtud de lo anterior y como se refiere en los considerandos anteriores el 23 de marzo el Consejo General del INE aprobó los Acuerdos INE/CG199/2018 e INE/CG2019/2018 relativos a los dictámenes de la revisión de ingresos y gastos del periodo de obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos de la Ciudad de México y del Estado de México en los que se incluyó las Ciudadana Elizabeth Díaz Chávez de la Ciudad de México, a las Ciudadanas María de Jesús Picazo Álvarez y Reyna Candelaria Salas Bolaños, así como al Ciudadano Daniel Hernández Hernández, resulta necesario precisar la normatividad aplicable a los plazos que se amplían a los aspirantes a candidatos independientes mencionados en relación con los Procesos Electorales Locales 2017-2018 de la Ciudad de México y del Estado de México, y determinar las reglas básicas para la rendición de cuentas de los ingresos y egresos, así como el medio que se utilizará para presentar la rendición de cuentas, de conformidad con el artículo 377 de la LGIPE.
- 27.** Que, de conformidad con lo señalado en el artículo 42 del RF, el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) deberá hacer cortes convencionales a fin de cumplir con la formalidad de la entrega de información conforme a los plazos establecidos por el mismo Reglamento y la LGIPE. Por tal motivo, únicamente admite la presentación de un informe de ingresos y gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano, los cuales ya fueron presentados por los aspirantes sujetos al presente Acuerdo. Asimismo, los dictámenes y resoluciones de los mismos, fueron aprobados por el Consejo General de este Instituto el 23 de marzo de 2018. En consecuencia, para los periodos adicionales mandados por los tribunales electorales locales, el SIF no prevé una temporalidad extraordinaria para la presentación de informes adicionales y/o complementarios, sin afectar los informes ya presentados.

- 28.** Así, en concordancia con lo señalado en el considerando anterior, y derivado de la obligación que tiene esta autoridad para auditar los informes respecto a los nuevos periodos de apoyo ciudadano que fueron otorgados a los aspirantes mencionados, se considera que la vía para cumplir la obligación, tanto de presentación de informes, como revisión de los mismos, es permitiendo que los aspirantes rindan cuentas de sus ingresos y gastos a través de una plantilla en Excel y un informe en Word que señale la autoridad. Las plantillas deberán incluir el detalle de cada uno de sus ingresos y gastos y serán presentados junto con la documentación soporte que ampare cada operación.
- 29.** Que dentro de estas reglas básicas para la rendición de cuentas, se deberá considerar la inaplicabilidad del registro de las operaciones en tiempo real que se establece en el artículo 38 del Reglamento de Fiscalización, numerales 1 al 4, ya que ni el registro de las operaciones, ni la rendición de cuentas se realizará a través del Sistema Integral de Fiscalización, por lo que tampoco se deberá aplicar la sanción que se dispone en el numeral 5 de dicho artículo, que a la letra dice:

*Artículo 38.*

*“(…)*

*5. El registro de operaciones fuera del plazo establecido en el numeral 1 del presente artículo, será considerado como una falta sustantiva y sancionada de conformidad con los criterios establecidos por el Consejo General del Instituto.”*

- 30.** Que derivado de la situación excepcional que se deriva de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales de la Ciudad de México y del Estado de México para ampliar los plazos del periodo obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a diversos cargos que se reseñan en el considerando 26, y a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de fiscalización de los ingresos y egresos, ya que las consecuencias de las resoluciones emitidas por este Consejo General pueden afectar los derechos de participación ciudadana de los aspirantes en campaña.

Como una situación excepcional, resulta necesario modificar la determinación de los plazos para la presentación del Informe correspondiente, mediante una reducción del plazo de 30 días que establece la legislación, a 3 y 6 días según el calendario que se establece en el presente Acuerdo.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo previsto en los artículos 41, Bases II, penúltimo párrafo; y V, Apartados A, párrafos primero y segundo y B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35; 44, numeral 1, inciso jj); 190, numeral 2; 192, numeral 1, incisos a) y d); 195, 196, numeral 1, 199 y DÉCIMO QUINTO TRANSITORIO de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ha determinado emitir el siguiente:

## **A C U E R D O**

**PRIMERO.** Se aprueba el “Acuerdo por el que se determinan las reglas para la contabilidad, rendición de cuentas y fiscalización, para la ampliación del periodo de apoyo ciudadano del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de un aspirante a candidato independiente al cargo de Diputado Local MR de la Ciudad de México y tres aspirantes a candidatos independientes a diversos cargos en el Estado de México, en cumplimiento de las sentencias TECDMX-JLDC-059/2018; ST-JDC-0098-2018; ST-JDC-0122-2018 y ST-JDC-0129-2018.”, con las reglas siguientes:

### **REGLAS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS**

1. Los sujetos obligados deberán rendir cuentas de sus ingresos y gastos a través de las plantillas en Excel que se adjuntan al presente Acuerdo como **Anexo 1**, estas plantillas deberán incluir el detalle de cada uno de sus ingresos y gastos y serán presentados junto con la documentación soporte que ampare cada operación. Asimismo, de la información asentada en las plantillas mencionadas deberá presentar el Informe de Apoyo Ciudadano en

el formato del **Anexo 2**, el cual deberá llevar la firma autógrafa del aspirante y de su representante de finanzas como responsable de la información, y anexar credencial para votar de ambos sujetos.

El cumplimiento de la obligación de presentación de informe de ingresos y gastos señalado en el artículo 430 de la LGIPE se tendrá por acreditado con la presentación del archivo de Excel y el Informe de Apoyo Ciudadano firmado, así como la documentación complementaria, señalada en el presente párrafo. Los informes señalados en el párrafo anterior no serán reportados en el Sistema de Integral de Fiscalización.

2. Los informes de ingresos y gastos, así como las respuestas a los oficios de errores y omisiones, deberán ser presentados en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, en la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización.
3. Para la rendición de cuentas de apoyo ciudadano, los sujetos obligados se sujetarán a los plazos y fechas siguientes:

### **Obtención del Apoyo Ciudadano**

Entidad	Cargo	Detalle	Inicio	Final	Duración	Fecha límite de entrega de informes	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Presentación Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación por Consejo General
							<b>6 días</b>	<b>7 días</b>	<b>7 días</b>	<b>4 días</b>	<b>2 días</b>	<b>4 días</b>
Ciudad de México	Diputado Local MR	Distrito 12	8 de abril de 2018	13 de abril de 2018	6	28 de abril de 2018	Viernes 4 de mayo de 2018	Viernes 11 de mayo de 2018	Viernes 18 de mayo de 2018	Martes 22 de mayo de 2018	Jueves 24 de mayo de 2018	Lunes 28 de mayo de 2018
Estado de México	Presidente Municipal	Nicolás Romero	30 de marzo de 2018	1 de abril de 2018	36 horas	28 de abril de 2018	Viernes 4 de mayo de 2018	Viernes 11 de mayo de 2018	Viernes 18 de mayo de 2018	Martes 22 de mayo de 2018	Jueves 24 de mayo de 2018	Lunes 28 de mayo de 2018
	Diputado Local MR	Distrito 02 Toluca	15 de abril de 2018	21 de abril de 2018	6	28 de abril de 2018	Viernes 4 de mayo de 2018	Viernes 11 de mayo de 2018	Viernes 18 de mayo de 2018	Martes 22 de mayo de 2018	Jueves 24 de mayo de 2018	Lunes 28 de mayo de 2018

Entidad	Cargo	Detalle	Inicio	Final	Duración	Fecha límite de entrega de informes	Notificación de Oficios de Errores y Omisiones	Respuesta a Oficios de Errores y Omisiones	Presentación Dictamen y Resolución a la Comisión de Fiscalización	Aprobación de la Comisión de Fiscalización	Presentación al Consejo General	Aprobación por Consejo General
							6 días	7 días	7 días	4 días	2 días	4 días
	Diputado Local MR	Distrito 36 San Miguel Zinacantepec	15 de abril de 2018	21 de abril de 2018	6	28 de abril de 2018	Viernes 4 de mayo de 2018	Viernes 11 de mayo de 2018	Viernes 18 de mayo de 2018	Martes 22 de mayo de 2018	Jueves 24 de mayo de 2018	Lunes 28 de mayo de 2018

## INGRESOS Y GASTOS DE OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO.

4. Los ingresos y gastos para la obtención de apoyo ciudadano serán los indicados en los Acuerdos CF/013/2017 e INE/CG476/2017.
5. Las notificaciones a los aspirantes a candidatos independientes sujetos al presente Acuerdo de los oficios de errores y omisiones, así como de cualquier asunto relacionado con la fiscalización de los ingresos y egresos, se realizarán mediante el módulo de notificaciones electrónicas del Sistema Integral de Fiscalización.

Las respuestas de los aspirantes a los oficios de errores y omisiones que les notifique la Unidad Técnica de Fiscalización, deberán ser presentados en la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México y en la Junta Local Ejecutiva del Estado de México y/o en las oficinas de la Unidad Técnica de Fiscalización.

6. Derivado de la revisión de ingresos y gastos relativos a la obtención del apoyo ciudadano, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitirá los dictámenes y resoluciones, respecto de la ampliación del periodo de obtención de apoyo ciudadano de las aspirantes Elizabeth Díaz Chávez, María de Jesús Picazo Álvarez y Reyna Candelaria Salas Bolaños y el aspirante Daniel Hernández Hernández en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en la Ciudad de México y en el Estado de México.



7. Una vez que sean aprobados los dictámenes y resoluciones relativos a la fiscalización de los informes de la obtención del apoyo ciudadano, y se hayan determinado sanciones económicas, por parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se informará a los Organismos Públicos Locales Electorales, para que, en el ámbito de sus atribuciones realicen el cobro de las sanciones impuestas.
8. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente Acuerdo se sancionará de acuerdo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Reglamento de Fiscalización y el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, así como las reglas locales vigentes a la fecha de aprobación del presente Acuerdo que no se opongan a las Leyes Generales ni al Reglamento de Fiscalización, en cuyo caso prevalecerán las Leyes Generales y el Reglamento de Fiscalización.

**SEGUNDO.** El contenido del presente Acuerdo será vigente para los periodos de obtención del apoyo ciudadano que desarrollen sus actividades en los Procesos Electorales Locales 2017-2018 en la Ciudad de México y en el Estado de México, en acatamiento a las sentencias ST-JDC-0098-2018, ST-JDC-0122-2018 y ST-JDC-0129-2018, y TECDMX-JLDC-059/2018.

**TERCERO.** Se instruye a la Unidad Técnica de Fiscalización a notificar de forma electrónica a través del Sistema Integral de Fiscalización el presente Acuerdo a las y los aspirantes involucrados.

**CUARTO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo a que notifique a los Organismos Públicos Locales de la Ciudad de México y Estado de México, a través de la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales.

**QUINTO.** Se instruye al Secretario Ejecutivo para que notifique el contenido del presente Acuerdo a la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México y a la Junta Local Ejecutiva del Estado de México.

**SEXTO.** Lo no previsto en este acuerdo será definido por la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

**SÉPTIMO.** El presente Acuerdo entrará en vigor una vez que sea aprobado el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

## Anexo 1

**Nombre del Aspirante:** \_\_\_\_\_

Asociación Civil \_\_\_\_\_

[illegible]

Entidad \_\_\_\_\_  
Registro de Operaciones de Gastos

---

[illegible]

## Anexo 2

Logotipo de  
la Asociación  
Civil

### FORMATO "IPR" - INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCIÓN

ASOCIACIÓN CIVIL \_\_\_\_\_

#### I. IDENTIFICACIÓN DEL APOYO CIUDADANO

**Apoyo Ciudadano:**

1. **Local** ☐ **Especificar** \_\_\_\_\_  
**Aspirante** ☐ \_\_\_\_\_ (1)
2. **Distrito Electoral: Numero:** ☐ **Cabecera:** \_\_\_\_\_ (2)
3. **Entidad federativa:** \_\_\_\_\_ (3)
4. **Inicio del apoyo ciudadano:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (4) **Término del apoyo ciudadano:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (4)
5. **Lema publicitario del apoyo ciudadano:** \_\_\_\_\_ (5)
6. **Nombre o número de Fórmula (en su caso):** \_\_\_\_\_ (6)

#### II. IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE \*\*

☐ **Hombre** ☐ **Mujer** \_\_\_\_\_ (A)

1. **Nombre del Aspirante:** \_\_\_\_\_ (7)  
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre)(s)
2. **Clave de Elector:** \_\_\_\_\_ (8)  
**RFC:** \_\_\_\_\_
3. **Domicilio particular:** \_\_\_\_\_ (9)  
(Calle) (Número) (Colonia)  
\_\_\_\_\_  
(Delegación o Municipio) (Entidad Federativa) (C.P.)
4. **Teléfono particular:** \_\_\_\_\_ **Teléfono oficina:** \_\_\_\_\_ (10)

\*\* Anexar copia fotostática de la credencial para votar vigente.

## Anexo 2

### III. IDENTIFICACIÓN DEL ASPIRANTE SUPLENTE\*\*

☐ Hombre ☐ Mujer \_\_\_\_\_ (A)

1. Nombre del Suplente: \_\_\_\_\_ (11)  
(Apellido Paterno) (Apellido Materno) (Nombre)(s)

2. Clave de elector: \_\_\_\_\_ (12)

RFC: \_\_\_\_\_

3. Domicilio particular: \_\_\_\_\_ (13)  
(Calle) (Número) (Colonia)

\_\_\_\_\_  
(Delegación o Municipio) (Entidad Federativa) (C.P.)

4. Teléfono particular: \_\_\_\_\_ Teléfono oficina: \_\_\_\_\_ (14)

\*\* Anexar copia fotostática de la credencial para votar vigente.

### IV. ORIGEN Y MONTO DE RECURSOS PARA EL APOYO CIUDADANO (INGRESOS)

	IMPORTE	MONTO (\$)	
1. Aportaciones del aspirante:			
En efectivo	_____		
En especie	_____		
Subtotal		_____	(15)
2. Aportaciones de Simpatizantes:			
En efectivo	_____		
En especie	_____		
Subtotal		_____	(16)
3. Autofinanciamiento*		_____	(16bis)
4. Rendimientos financieros		_____	(17)
5. Otros Ingresos*		_____	(18)
	TOTAL	_____	(19)

\*Anexar el detalle por este concepto

### V. DESTINO DE LOS RECURSOS DEL APOYO CIUDADANO (GASTOS)

	IMPORTE	MONTO (\$)	
A) Gastos de propaganda: (***)			(20)
B) Gastos operativos: (***)		_____	(21)
C) Gastos en diarios, revistas y medios impresos: (***)		_____	(22)
D) Gastos en Internet: (***)		_____	(23)
E) Otros gastos: (***)		_____	(23bis)
	TOTAL	_____	(24)

(\*\*\*) Anexar y especificar a detalle cada tipo de gasto.

## Anexo 2

**VI. RESUMEN**

INGRESOS	\$ _____	(25)
GASTOS	\$ _____	(26)
SALDO	\$ _____	(27)

**\*\* Anexar el detalle del saldo final (estado de cuenta bancario o movimientos bancarios).**

### VII. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN \*\*

**Nombre:** \_\_\_\_\_ (Apellido Paterno) \_\_\_\_\_ (Apellido materno) (28)

\_\_\_\_\_  
(Nombre (s))

**Cargo o puesto que desempeña:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma Autógrafa (28)

### VIII. NOMBRE Y FIRMA DEL ASPIRANTE\*\*\*

**Nombre:** \_\_\_\_\_ (Apellido Paterno) \_\_\_\_\_ (Apellido materno) (29)

\_\_\_\_\_  
(Nombre (s))

\_\_\_\_\_  
Firma Autógrafa

Fecha de presentación del informe: (30)

**\*\*\* Anexar copia de la credencial para votar.** \_\_\_\_\_

## Anexo 2

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO PARA LA PRESENTACION DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA OBTENCIÓN DEL APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE A CARGOS DE ELECCION LOCAL

#### Apartado I. Identificación de la Precampaña.

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| (1) Apoyo Ciudadano            | Marcar con una equis ("X"), el apoyo ciudadano cuyo informe se va a presentar en el ámbito Local Gobernador, Diputado local y Ayuntamiento. Especificar cargo postulado. . |
| (2) Distrito Electoral         | Número de distrito electoral en el que se realiza el apoyo ciudadano, y nombre de la cabecera distrital correspondiente, en el caso de las campañas para Diputado.         |
| (3) Entidad Federativa         | Nombre de la entidad federativa en la que se realiza el apoyo ciudadano.   |
| (4) Periodo de apoyo ciudadano | Fechas (día, mes y año), de inicio y término del apoyo ciudadano que se reporta.   |
| (5) Lema                       | Lema publicitario con el cual se identifica.   |
| (6) Nombre o número de fórmula | En su caso, nombre o número de fórmula aspirante-suplente.   |

#### Apartado II. Identificación del Aspirante.

(\*\*) Copia de credencial de elector del aspirante

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| A. Sexo                      | Marcar con una equis ("X") Hombre <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> según corresponda                                 |
| (7) Nombre                   | Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del aspirante, sin abreviaturas.   |
| (8) R.F.C y Clave de Elector | Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del aspirante   |
| (9) Domicilio Particular     | Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal), del aspirante. |
| (10) Teléfonos               | Números telefónicos, tanto de su domicilio particular como el de sus oficinas.  |

#### Apartado III. Identificación del aspirante Suplente.

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| A. Sexo                       | Marcar con una equis ("X") Hombre <input type="checkbox"/> Mujer <input type="checkbox"/> según corresponda  |
| (11) Nombre                   | Apellido paterno, apellido materno y nombre(s) del aspirante suplente, sin abreviaturas.   |
| (12) R.F.C y Clave de Elector | Registro Federal de Contribuyentes con homoclave y Clave de Credencial de Elector del aspirante suplente   |
| (13) Domicilio Particular     | Domicilio completo (calle, número exterior e interior, colonia, delegación o municipio, entidad federativa y código postal), del aspirante suplente. |
| (14) Teléfonos                | Números telefónicos, tanto de su domicilio particular como el de sus oficinas.   |

#### Apartado IV. Origen y monto de recursos de apoyo ciudadano (Ingresos)

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| (15) Aportaciones del Aspirante    | Monto total de los recursos aportados por el propio aspirante exclusivamente para la obtención del apoyo ciudadano, desglosando en su caso efectivo y especie.   |
| (16) Aportaciones de Simpatizantes | Monto total de los ingresos obtenidos por concepto de aportaciones en dinero y en especie recibidas por el aspirante, de parte de sus simpatizantes para la obtención del apoyo ciudadano, separando efectivo y especie. |

## Anexo 2

(16bis)	Monto total por autofinanciamiento, conferencias, eventos, rifas, y otros descritos en el artículo 111 del RF, y deberá detallar su origen de conformidad con el artículo 112 del RF
(17) Rendimientos Financieros	Monto total de los intereses generados por las cuentas bancarias en las que se hubieren depositado los recursos destinados a la obtención del apoyo ciudadano.
(18) Otros Ingresos	Monto total de los recursos recibidos por otros conceptos, donde se deberá anexar su detalle.
(19) Total	Monto total de los recursos recibidos
<b>Apartado V. Destino de los recursos del apoyo ciudadano (gastos)</b>	
(20) Gastos de Propaganda	Montos totales de los egresos efectuados por propaganda realizada en bardas, mantas, volantes, pancartas, por la renta de equipo de sonido, por la renta de locales para eventos políticos, propaganda utilitaria, en espectaculares en la vía pública, salas de cine, páginas de internet y otros similares..
(21) Gastos Operativos	Montos totales de los egresos efectuados por concepto de sueldos y salarios, arrendamiento de muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y similares.
(22) Gastos en Diarios, Revistas y Medios Impresos	Monto total de los egresos efectuados por concepto de mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto, realizados en prensa.
(23) Gastos en Internet	Monto total de los egresos efectuados en producción de contenido para publicar en páginas de Internet, publicidad pagada para promocionar propaganda en páginas de Internet, servicios de alojamiento, diseño y similares de páginas de Internet
(23bis) Otros Gastos	Otros gastos
(24) Total	El total de la suma de los egresos efectuados para la obtención de apoyo ciudadano.
<b>Apartado VI. Resumen.</b>	
(25) Ingresos	Suma total de los recursos obtenidos a la obtención de apoyo ciudadano de que se trate.
(26) Egresos	Suma total de los egresos efectuados durante la obtención de apoyo ciudadano.
(27) Saldo	El balance de los rubros anteriores, del cual se deberá presentar la integración del saldo final, integrado por los saldos de las cuentas bancos.
<b>Apartado VII. Responsable de la Información</b>	
(28) Nombre y Firma del responsable financiero	Nombre y firma del responsable financiero
(28) Cargo o puesto que desempeña	Especificar el nombre del puesto y/o cargo que desempeña, anexar copia de identificación vigente.
<b>Apartado VIII. Nombre y firma del Aspirante.</b>	
(29) Nombre y Firma del Aspirante	Nombre y firma del aspirante. Anexando copia de la credencial para votar.
(30) Fecha	Fecha de presentación del informe del aspirante.



**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe que presenta la Comisión de Fiscalización respecto del estado jurídico que guardan los Procedimientos Administrativos Sancionadores en materia de fiscalización que se encuentran en trámite, así como las sanciones impuestas durante 2016, 2017 y 2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Está a su consideración el Informe. \_\_\_\_\_

Al no haber intervenciones, damos por recibido el mismo. \_\_\_\_\_

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo a los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a sentencias dictadas por la Sala Superior y Salas Regionales Guadalajara, Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de Fiscalización, mismo que se compone de 10 apartados. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Señoras y señores Consejeros y representantes, pregunto a ustedes si desean reservar para su discusión alguno de los apartados del presente punto del orden del día, o bien, abrir en su caso una ronda de discusión en lo general. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Deseo reservar el apartado 18.4, por favor. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente a los Proyectos de Acuerdo, identificados con los apartados 18.1 al 18.3 y 18.5 al 18.10. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueban los Proyectos de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificados como los apartados 18.1, 18.2, 18.3 y aquellos que van del 18.5 al 18.10. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo si son tan amables. \_\_\_\_\_

Son aprobados por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto de los Acuerdos aprobados INE/CG412/2018, INE/CG413/2018, INE/CG414/2018, INE/CG415/2018, INE/CG416/2018, INE/CG417/2018, INE/CG418/2018, INE/CG419/2018 e INE/CG420/2018) Ptos. 18.1 al 18.3 y 18.5 al 18.10** \_\_\_\_\_

**INE/CG412/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN TOLUCA, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE ST-RAP-20/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO INE/CG523/2017 Y LA RESOLUCIÓN INE/CG524/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS**

## **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución.** El veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG523/2017** e **INE/CG524/2017** respectivamente, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con las determinaciones referidas en el antecedente anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Representante Propietario del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, presentó recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución **INE/CG523/2017** e **INE/CG524/2017**, respectivamente, el cual fue remitido a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mediante Acuerdo General 1/2017 del ocho de marzo de dos mil diecisiete, la Sala Superior acordó que los medios de impugnación que estuvieran bajo su instrucción y que se hubieren presentado contra los dictámenes y resoluciones decretadas por el Consejo General del Instituto, respecto a la revisión de los

informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales con acreditación estatal y partidos políticos con registro local, debían ser resueltos por la Sala Regional que ejerciera jurisdicción en la circunscripción que correspondiera a la entidad federativa atinente.

Por lo anterior, el cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante Acuerdo que se dictó en el cuaderno de antecedentes No. 0312/2017, la Sala Superior determinó enviar el expediente a la Sala Regional Toluca.

El siete de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Toluca acordó integrar el expediente respectivo y registrarlo en el Libro de Gobierno con la clave ST-RAP-20/2017.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el medio referido en sesión pública celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, determinando en sus Puntos Resolutivos, lo siguiente:

*“**ÚNICO. Se revoca** la resolución impugnada únicamente en lo tocante a la conclusión 11 del acuerdo impugnado y su respectivo Dictamen Consolidado, para los efectos establecidos en el apartado atinente de esta sentencia.  
(...)”*

**IV.** Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso de apelación ST-RAP-20/2017 tuvo por efectos únicamente revocar la Resolución INE/CG524/2017, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de la resolución que se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Xalapa, motivo por el cual se procede a su modificación, en cuanto hace a la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México en el resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, inciso c), así como el considerando 17.2.11, inciso c), conclusión 11, para el efecto de que la autoridad responsable emita una nueva en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión.

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c), d) y g); 199, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral son definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado de la revisión de los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del Partido Verde Ecologista de México, correspondiente al año dos mil dieciséis.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica ST-RAP-20/2017.

3. Que el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar los Acuerdos INE/CG523/2017 e INE/CG524/2017, en cuanto hace a la sanción impuesta al Partido Verde Ecologista de México en el resolutivo DÉCIMO SEGUNDO, inciso c), así como el considerando 17.2.11, inciso c), conclusión 11, con la finalidad de que la autoridad responsable emita una nueva en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión.

4. Que en la sección relativa al estudio de fondo, dentro del Considerando Sexto, el órgano jurisdiccional señaló que:

“(…)

**Sexto. ESTUDIO DE FONDO**

(…)

c) Finalmente, respecto de la sanción impuesta con motivo de la conclusión 11 relacionada con el análisis de saldos de impuestos por pagar, señala que el acto carece de la debida fundamentación y motivación ya que la responsable fue errónea y contradictoria, al no expresar de forma correcta la forma de obtener el monto y al no valorar que el actor efectivamente realizó los pagos correspondientes, por lo que a su decir, dicha sanción debe ser revocada.

(...)

Se estima **fundado** el agravio del Recurrente por las siguientes razones.

(...)

El actor precisa que la responsable actúa de forma incorrecta al calcular el monto de \$103,345.80 al sostener que el partido político reportó saldos en “impuestos por pagar” con antigüedad mayor a un año, que no han sido enterados a las autoridades del ejercicio dos mil quince, y a su decir, el Dictamen no expresa las razones, motivos, elementos y argumentos lógico jurídicos que le llevaron a determinar dicho monto, en suma, el actor aporta copias simples de las pólizas de pago de impuestos del año 2015, reportadas en el Sistema Integral de Fiscalización para robustecer su dicho.

En el caso concreto, es procedente concluir que el acuerdo y el Dictamen que por esta vía se impugna **no se encuentra debidamente fundado y motivado** ya que la responsable **no realizó el estudio, ni detalló los datos que le llevaron a determinar el monto destacado, y se limitó a señalar que de acuerdo al anexo 3 del Dictamen, se obtenía el monto que el partido había omitido realizar correspondiente al pago de impuestos correspondientes al año dos mil quince, pago que debió efectuarse hasta el último día del dos mil dieciséis.**

(...)

Como se ha apuntado, asiste razón al apelante en el sentido de que la responsable en ningún momento señaló de qué forma obtuvo la cantidad que se reclama, cuando su obligación con el objeto de fundar y motivar debidamente su actuar era el expresar las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión, situación que en la especie, como se ha apuntado, no ocurrió.

Efectivamente, de autos no es visible de que forma la responsable realizó la operación mediante la cual determinó el monto de mérito, actuación que de ninguna manera puede tenerse como debidamente fundada y motivada, y por tanto, resulta violatoria del principio de legalidad.

*En suma, a manera de indicio se cuenta con las copias de las pólizas de pago de impuesto del año 2015 incluidas en el sistema integral de fiscalización, aportadas por el actor, las cuales si bien no generan prueba plena de su dicho, en el sentido de que efectivamente pagó e ingresó al SIF en tiempo y forma el monto que se reclama, infieren que probablemente el partido sancionado cumplió con su obligación fiscal y ésta no fue considerada por la responsable al momento de realizar el cálculo respectivo.*

*Así ante la resaltada falta de fundamentación y motivación y al haber resultado fundado el agravio hecho valer en contra de la **conclusión 11** del acuerdo impugnado y el respectivo Dictamen Consolidado, respecto del monto identificado como “impuestos por pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido enterados a las autoridades, del ejercicio 2015 por \$103,345.80”, lo procedente es **REVOCAR** la resolución impugnada **para el único efecto** de que la autoridad responsable emita una nueva en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión.*

**5.** Que en coherencia al análisis desarrollado por el órgano jurisdiccional, antes expuesto, dentro de la sentencia emitida en el expediente ST-RAP-20/2017 en el apartado relativo a los efectos de la sentencia, la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo siguiente:

“(…)

#### **Séptimo. Efectos de la sentencia**

*En tales condiciones y en atención a las consideraciones contenidas en el estudio de fondo, lo procedente es fijar los efectos de esta sentencia, al tenor de lo siguiente:*

*Al haber resultado fundado el agravio hecho valer en contra de la conclusión 11 del acuerdo impugnado y su respectivo Dictamen Consolidado respecto del monto identificado como “Impuestos por Pagar con antigüedad mayor a un año, que no han sido enterados a las autoridades, del ejercicio 2015 por \$103,345.80”, lo procedente es **REVOCAR** la resolución impugnada para el único efecto de que la autoridad responsable emita una nueva en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, en atención a las consideraciones apuntadas, en el considerando anterior.*

“(…)”

6. Que esta autoridad administrativa debe considerar que el partido político sujeto a sanción cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que se le imponga.

En este sentido, el Acuerdo IEEM/CG/29/2018, emitido por el Instituto Electoral del Estado de México, le asignó como financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el ejercicio 2018, el monto siguiente:

Partido político	Financiamiento público para actividades ordinarias permanentes en el año 2017
Partido Verde Ecologista de México	\$34,448,687.65

Es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las leyes electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, los partidos políticos que cuentan con saldos pendientes por pagar, relativos a sanciones impuestas en diversos procedimientos administrativos sancionadores, conforme a lo que a continuación se indica:

ID	Partido Político	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de febrero de 2018	Montos por saldar	Total
1	Partido Verde Ecologista de México	INE/CG445/2017	\$1,968,825.00	\$0.00	\$1,968,825.00	\$1,968,825.00
2	Partido Verde Ecologista de México	SER-PSC-80/2017	\$99,080.56	\$0.00	\$99,080.56	\$99,080.56
					<b>Total</b>	<b>\$2,067,905.56</b>



De lo anterior, se advierte que el Partido Verde Ecologista de México tiene un saldo pendiente de \$2,067,905.56 (dos millones sesenta y siete mil novecientos cinco pesos 56/100 M.N.), por lo que se evidencia que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de sus actividades ordinarias permanentes, aun cuando tenga la obligación de pagar la sanción anteriormente descrita, ello no afectará de manera grave su capacidad económica, por tanto, estará en posibilidad de solventar la sanción pecuniaria que se establece en el presente Acuerdo.

7. Que en tanto la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación materia de acatamiento dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen Consolidado INE/CG523/2017 y la Resolución identificada como INE/CG524/2017, este Consejo General únicamente se aboca al estudio y análisis relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional que impactan al Dictamen y Resolución, que se encuentran en el considerando 17.2.11, inciso c), conclusión 11; así como el resolutive DÉCIMO SEGUNDO, inciso c) de la resolución INE/CG524/2017, relativo al Comité Directivo Estatal Estado de México, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

#### **8. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional por la cual ordenó modificar, en lo que fue materia de impugnación, es decir, el considerando 17.2.11, inciso c), conclusión 11; así como el resolutive DÉCIMO SEGUNDO, inciso c), contenida en la Resolución Impugnada, **para el único efecto de que la autoridad responsable emita una nueva en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión**, esta autoridad valoró y examinó específicamente lo señalado en el expediente identificado como ST-RAP-20/2017.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento
Se revoca la conclusión 11 de la resolución controvertida y su respectivo Dictamen Consolidado, para los efectos establecidos en la ejecutoria de referencia.	La autoridad responsable deberá emitir una nueva resolución en lo que al caso concierne, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, explicando las razones y motivos de como arribó a dicha conclusión	En cumplimiento a lo ordenado por el órgano jurisdiccional, la autoridad responsable revaloró la documentación comprobatoria, por lo que se modificó la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG523/2017 y la Resolución INE/CG524/2017, por lo que hace a la conclusión 11 del considerando 17.2.11.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Toluca, este Consejo General modifica el Acuerdo INE/CG523/2017, relativo al Dictamen Consolidado respecto de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los Partidos Políticos Nacionales y locales con acreditación o registro en las entidades federativas, correspondientes al ejercicio 2016 del Partido Verde Ecologista de México, en los términos siguientes:

**DICTAMEN CONSOLIDADO RESPECTO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y LOCALES CON ACREDITACIÓN O REGISTRO EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2016 DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

**Conclusión 11**

**Impuestos por Pagar**

- ♦ *Se detectaron saldos de impuestos al 31 de diciembre de 2016, que el sujeto obligado no ha enterado a las autoridades correspondientes, como se indica en el cuadro siguiente:*

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 01-01-16	RETENCIONES DEL EJERCICIO 2016	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS O PAGOS EN 2016	TOTAL, DE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-16
		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)
2103010000	ISR retenido por servicios profesionales	\$ 618,698.31	\$391,337.79	\$ 973,336.00	\$ 36,700.10
2103020000	ISR retenido por sueldos y salarios	1,132.32	\$99.24	89.00	1,142.56

NÚMERO DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL 01-01-16	RETENCIONES DEL EJERCICIO 2016	AMORTIZACIÓN DE ADEUDOS O PAGOS EN 2016	TOTAL, DE ADEUDOS PENDIENTES DE PAGO AL 31-12-16
		(A)	(B)	(C)	(D=A+B-C)
2103030000	ISR Retenido por Asimilables a Sueldos	96,346.40	843,907.24	828,862.00	111,391.64
2103040000	ISR retenido por arrendamiento	0.00	37,800.00	34,500.00	3,300.00
2103050000	IVA Retenido por Servicios Profesionales	692,843.11	417,420.47	1,076,639.00	33,624.58
2103070000	IVA Retenido por Arrendamiento	35,999.91	40,320.00	72,800.00	3,519.91
2103080000	IMSS	2,718.24	32,970.87	32,896.51	2,792.60
2103090000	INFONAVIT	1,487.65	8,925.87	8,925.87	1,487.65
2103100000	RCV	1,867.00	11,201.94	11,201.94	1,867.00
2103110000	Impuesto sobre Nómina	14,465.00	0.00	0.00	14,465.00
<b>Total</b>		<b>\$1,465,557.94</b>	<b>\$1,783,983.42</b>	<b>\$3,039,250.32</b>	<b>\$210,291.04</b>

Mediante el Acuerdo INE/CG774/2016 aprobado por el Consejo General en sesión ordinaria celebrada el 16 de noviembre de 2016, se aprobaron los criterios para el tratamiento de saldos pendientes de pago de las contribuciones, entre otras, que las contribuciones generadas en el ejercicio 2015 se debieron pagar al 31 de diciembre de 2016.

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/11398/17 notificado el 04 de julio del presente, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron.

Escrito de respuesta: Núm. PVEM/EDOMEX/001/2017 del 08 de agosto de 2017, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

*“Se registra en el SIF y se anexa la integración de saldos.”*

De la revisión a la documentación presentada por el sujeto obligado mediante el SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto a los casos señalados con (1) en la columna “Referencia” del Anexo 3 del oficio INE/UTF/DA-L/12930/2017, se observan movimientos en las cuentas contables por concepto de retenciones y entero de contribuciones a las autoridades competentes; sin embargo, omitió

*presentar la integración de los saldos que señalen las retenciones pendientes de entero así como la liquidación de las mismas por cada ejercicio; por tal razón, la observación no quedó atendida.*

*Respecto de los casos señalados con (2) en la columna “Referencia” del Anexo 3 del oficio INE/UTF/DA-L/12930/2017, se observan que a pesar de que las cuentas reflejan movimientos durante el ejercicio 2016, siguen existiendo saldos de ejercicios anteriores y que hasta la fecha de elaboración de este instrumento, no han sido enteradas a la autoridad competente y el sujeto obligado no ha presentado excepción legal o justificación alguna de su existencia; por tal razón, la observación no quedó atendida.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, mediante el oficio núm. INE/UTF/DA-L/12930/2017 notificado el 29 de agosto del presente, se hicieron de su conocimiento las omisiones y errores que se determinaron.

Escrito de respuesta: Núm. PVEM/EDOMEX/002/2017 del 05 de septiembre de 2017, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

*“Se anexa papel de trabajo de la integración de dichos impuestos.”*

De la revisión a la documentación presentada por el sujeto obligado mediante el SIF, se determinó lo siguiente:

Respecto de los casos señalados por un importe de \$118,091.94 **(columna G) del Anexo 3** del presente Dictamen, el cual se integra de impuestos generados en 2014 por \$14,746.14 y de 2015 por \$103,345.80, presentan antigüedad mayor a un año; por tal razón, la observación **no quedó atendida** en cuanto a este punto.

Respecto a los impuestos no enterados del ejercicio 2014 y anteriores, la UTF considera que ha lugar a dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados por un monto de \$14,746.14.

En consecuencia, al omitir enterar impuestos generados en 2015 por un monto de \$103,345.80, el sujeto obligado incumplió con el artículo 84, numeral 3 del RF.

Respecto de los casos señalados por un importe de \$274,412.11 **(columna H) del Anexo 3** del presente Dictamen, son operaciones que presentan antigüedad menor a un año; por tal razón, se le dará seguimiento en la revisión del Informe Anual 2017.

En consecuencia, esta Unidad Técnica de Fiscalización dará seguimiento en el marco de la revisión del Informe Anual 2017, con antigüedad menor a un año por un monto de \$274,412.11.

La UTF considera que ha lugar a dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados.

### Saldos Finales en Impuestos por Pagar

Derivado de las aclaraciones y rectificaciones efectuadas, en respuesta a las observaciones de los oficios de errores y omisiones emitidos por la UTF, el sujeto obligado realizó una serie de ajustes y reclasificaciones a los saldos inicialmente reportados, reportando impuestos por pagar al 31 de diciembre de 2016, el monto que se integra de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	SALDO INICIAL 01-01-16 (A)	MOVIMIENTOS 2016:		SALDO FINAL 31-12-15 D=(A+C-B)
			PAGO DE ADEUDOS (CARGOS) (B)	GENERACIÓN DE ADEUDOS (ABONOS) (C)	
2103000000	Impuestos por Pagar Ordinario	\$1,465,557.94	\$3,039,250.32	\$1,966,196.43	\$392,504.05

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	EJERCICIOS ANTERIORES A 2015 CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO			EJERCICIOS 2016 CON ANTIGÜEDAD MENOR A UN AÑO			SALDO AL 31-12-15  Balanza de Comprobación Presentada el 13-10-16 (G)
		SALDO INICIAL (A)	PAGOS REALIZADOS EN 2015 (B)	SALDO AL 31-12-15 (C)	IMPUESTOS GENERADOS (D)	PAGOS REALIZADOS EN 2015 (E)	SALDO AL 31-12-15 (F)	
2103010000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$618,698.31	\$615,990.00	\$2,708.31	\$391,337.79	\$357,346.00	\$33,991.79	\$36,700.10

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	EJERCICIOS ANTERIORES A 2015 CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO			EJERCICIOS 2016 CON ANTIGÜEDAD MENOR A UN AÑO			SALDO AL 31-12-15  Balanza de Comprobación Presentada el 13-10-16  (G)
		SALDO INICIAL  (A)	PAGOS REALIZADOS EN 2015  (B)	SALDO AL 31-12-15  (C)	IMPUESTOS GENERADOS  (D)	PAGOS REALIZADOS EN 2015  (E)	SALDO AL 31- 12-15  (F)	
2103020000	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	1,132.32	0.00	\$1,132.32	99.24	89.00	\$10.24	1,142.56
2103030000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SUELDOS	\$96,346.40	\$0.00	\$96,346.40	\$843,907.24	\$828,862.00	\$15,045.24	111,391.64
2103040000	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	\$0.00	37,800.00	34,500.00	\$3,300.00	3,300.00
2103050000	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	692,843.11	695,476.00	-2,632.89	417,420.47	381,163.00	\$36,257.47	33,624.58
2103060000	IVA RETENIDO POR FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00	0.00
2103070000	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	35,999.91	36,000.00	-0.09	40,320.00	36,800.00	\$3,520.00	3,519.91
2103080000	IMSS	2,718.24	0.00	\$2,718.24	32,970.87	32,896.51	\$74.36	2,792.60
2103090000	INFONAVIT	1,487.65	0.00	\$1,487.65	8,925.87	8,925.87	\$0.00	1,487.65
2103100000	RCV	1,867.00	0.00	\$1,867.00	11,201.94	11,201.94	\$0.00	1,867.00
2103110000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,465.00	0.00	\$14,465.00	182,213.01	0.00	\$182,213.01	196,678.01
<b>TOTAL</b>		<b>\$1,465,557.94</b>	<b>\$1,347,466.00</b>	<b>\$118,091.94</b>	<b>\$1,966,196.43</b>	<b>\$1,691,784.32</b>	<b>\$274,412.11</b>	<b>\$392,504.05</b>

La integración de los saldos reflejados en el cuadro que antecede, se detalla en el **Anexo 3** del presente Dictamen.

### **Acatamiento a Sentencia de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ST-RAP-20/2017.**

Ahora bien, toda vez que en el recurso de apelación ST-RAP-20/2017, se determinó con respecto a la conclusión 11, que se realizara un debido análisis de las cifras determinadas así como una adecuada fundamentación y motivación relacionada con la determinación de impuestos con antigüedad mayor a un año, por lo que se procedió a realizar la valoración respectiva de la documentación anexa al SIF determinándose lo siguiente:

Del análisis a la documentación presentada por el sujeto obligado en el Sistema Integral de Fiscalización, así como a la balanza de comprobación y auxiliares contables al 31 de diciembre de 2016, se observó que en el mes de marzo realizó el registro de pagos de impuestos generados en el 2015 por un monto de \$102,494.71; por lo que, al considerar dicho monto en la totalidad de pagos realizados en el

ejercicio 2016, se modifican las cifras determinadas tal como se detalla a continuación:

NO. DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	EJERCICIOS ANTERIORES A 2015 CON ANTIGÜEDAD MAYOR A UN AÑO			EJERCICIOS 2016 CON ANTIGÜEDAD MENOR A UN AÑO			SALDO AL 31-12-15
		SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN 2015	SALDO AL 31-12-15	IMPUESTOS GENERADOS	PAGOS REALIZADOS EN 2015	SALDO AL 31- 12-15	Balanza de Comprobación Presentada el 13-10-16
		(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
2103010000	ISR RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$618,698.31	\$618,698.31	0.00	\$391,337.79	\$354,637.69	\$36,700.1	\$36,700.10
2103020000	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	1,132.32	0.00	1,132.32	99.24	89.00	10.24	1,142.56
2103030000	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SUELDOS	\$96,346.40	\$96,346.40	0.00	843,907.24	732,515.60	111,391.64	111,391.64
2103040000	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	37,800.00	34,500.00	3,300.00	3,300.00
2103050000	IVA RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	692,843.11	692,843.11	0.00	417,420.47	383,795.89	33,624.58	33,624.58
2103060000	IVA RETENIDO POR FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2103070000	IVA RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	35,999.91	36,000.00	-0.09	40,320.00	36,800.00	3,520.00	3,519.91
2103080000	IMSS	2,718.24	2,718.24	0.00	32,970.87	30,178.27	2,792.60	2,792.60
2103090000	INFONAVIT	1,487.65	1,487.65	0.00	8,925.87	7,438.22	1,487.65	1,487.65
2103100000	RCV	1,867.00	1,867.00	0.00	11,201.94	9,334.94	1,867.00	1,867.00
2103110000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	14,465.00	0.00	14,465.00	182,213.01	0.00	182,213.01	196,678.01
TOTAL		\$1,465,557.94	\$1,449,960.71	\$15,597.32	\$1,966,196.43	\$1,589,289.61	\$376,906.82	\$392,504.05

**Nota.** El desglose de los impuestos se detalla en el Anexo 1 del presente.

Respecto del saldo señalado en la columna “C” del cuadro que antecede, por un importe de \$15,597.32, el cual se integra de impuestos generados en 2014 por \$14,465.00 y de 2015 por \$1,132.32, presentan antigüedad mayor a un año; por tal razón, la observación **no quedó atendida** en cuanto a este punto.

Respecto a los saldos señalados en la columna “C”, por el concepto de impuesto sobre nómina, son impuestos no enterados del ejercicio 2014 y anteriores, por ello la UTF considera que ha lugar a dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados por un monto de \$14,465.00.

Adicionalmente, los saldos por concepto de ISR retenido por sueldos y salarios señalados en la referida columna, el sujeto obligado omitió enterar impuestos generados en 2015 por un monto de \$1,132.32, por lo que incumplió con el artículo 84, numeral 3 del RF.

En otras palabras, en principio se consideró como monto involucrado la cantidad de \$103,345.80; sin embargo, derivado del cumplimiento al presente acatamiento y tras realizar una nueva revisión, esta autoridad detectó que el partido político incoado realizó los pagos correspondientes a los saldos en impuestos por pagar con antigüedad mayor a un año generados en el ejercicio 2015, como se refleja en la columna (B) del cuadro que antecede, con excepción del ISR retenido por sueldos y salarios, por la cantidad de \$1,132.32, materia de la modificación ordenada en la sentencia dictada por el órgano jurisdiccional.

Respecto de los casos señalados por un importe de \$376,906.82, señalados en la columna “F” del cuadro que antecede, corresponde a saldos de impuestos por pagar que presentan antigüedad menor a un año; por tal razón, se le dará seguimiento en la revisión del Informe Anual 2017.

Dicha cantidad derivó del cumplimiento al presente acatamiento, toda vez que esta autoridad detectó que el sujeto obligado realizó los pagos que se reflejan en la columna (E) del cuadro anterior, correspondientes a los saldos en impuestos por pagar generados en el ejercicio 2016, advirtiéndose un aumento en las cantidades originalmente observadas, lo cual resultó al realizar un nuevo análisis de las conclusiones revocadas por el órgano jurisdiccional.

Adicionalmente, se considera que ha lugar a dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que, en ejercicio de sus atribuciones, determine lo conducente en relación con los impuestos no enterados.

### **Modificaciones realizadas en acatamiento al ST-RAP-20/2017**

Una vez analizada la documentación en el Sistema Integral de Fiscalización respecto de los pagos de impuestos del ejercicio 2015, de acuerdo a lo ordenado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realizaron las siguientes modificaciones:



Conclusión	Concepto del Gasto o Ingreso	Importes según:	
		Dictamen INE/CG517/2017	Acatamiento ST-RAP- 20/2017
		(A)	(B)
11	Saldos en impuestos por pagar con antigüedad mayor a un año	\$103,345.80	\$1,132.32
13 y 13A	Saldos en impuestos por pagar con antigüedad menor a un año.	274,412.11	376,906.82

Asimismo, en el apartado de conclusiones finales del Dictamen de mérito se modifica la parte conducente para quedar como sigue:

### **Conclusiones de la revisión de Informe Anual 2016 del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de México.**

Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 443, en relación con el 456, numeral 1, incisos a), de la LGIPE.

(...)

#### **Impuestos por Pagar**

11. PVEM/EM. El sujeto obligado reportó saldos en “Impuestos por Pagar”, con antigüedad mayor a un año, generados en el ejercicio 2015, que no han sido enterados a las autoridades, por \$1,132.32.

Tal situación incumple con el artículo 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del RF.

En este orden de ideas, se ha modificado el Dictamen Consolidado, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la Sala Regional Toluca, dentro del expediente ST-RAP-20/2017.

**9.** Que la Sala Regional Toluca, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída en el expediente ST-RAP-20/2017, las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG524/2017 relativas al Partido Verde Ecologista de México en el Estado de México, este Consejo General únicamente se aboca a la modificación de la parte conducente del Considerando “**17.2.11 Comité Directivo Estatal Estado de México**”, relativo a la conclusión **11**, en los siguientes términos:

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS**

“(…)

**17.2.11 Comité Directivo Estatal Estado de México.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del informe de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el Partido Verde Ecologista de México son las siguientes:

(…)

**c) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 11.**

(…)

**c)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la conclusión sancionatoria infractora de los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 11.**

No.	Conclusión	Monto involucrado
11	<i>"El sujeto obligado reportó saldos en "Impuestos por Pagar", con antigüedad mayor a un año, generados en el ejercicio 2015, que no han sido enterados a las autoridades, por \$1,132.32"</i>	\$1,132.32

De la falta en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia del sujeto obligado, contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso b), fracciones II y III de la Ley General de Partidos Políticos toda vez que al advertir la existencia de errores y omisiones técnicas, tal y como se desprende del cuerpo del Dictamen Consolidado, el cual forma parte de la motivación de la presente Resolución y que se detalla en cada observación, se hicieron del conocimiento del mismo mediante los oficios referidos en el análisis de cada conclusión, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, para que en un plazo de diez y cinco días hábiles, respectivamente, contados a partir del día siguiente de la prevención, presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes así como la documentación que subsanara las irregularidades detectadas; sin embargo, en algunos casos las respuestas no fueron idóneas para subsanar las observaciones realizadas y, en otros, el instituto político fue omiso en dar respuesta a los requerimientos formulados.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a) Tipo de infracción (acción u omisión)
- b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron
- c) Comisión intencional o culposa de la falta.
- d) La trascendencia de las normas transgredidas.
- e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia, lo que ya fue desarrollado en el considerando 6 de la presente Resolución.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizarán en un primer momento los elementos para calificar la falta (**inciso A**) y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción (**inciso B**).

## **A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión)**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado omitió cumplir con su obligación de pago de las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año en el informe anual de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2016 como lo establece la normatividad electoral aplicable.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en no cumplir con su obligación de pago por lo que hace a las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales,

las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año, conforme a lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización.<sup>5</sup>

#### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron**

**Modo:** El sujeto obligado omitió cumplir con su obligación de pago por lo que hace a las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año por un monto de **\$1,132.32 (mil ciento treinta y dos pesos 32/100 M.N.)**, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización.

**Tiempo:** La irregularidad atribuida al instituto político, surgió en el marco de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio 2016.

**Lugar:** La irregularidad se cometió en el Estado de México.

#### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del partido para obtener el resultado de la comisión de la falta (elemento esencial constitutivo del dolo), esto es, con base en el cual pudiese colegirse la existencia de volición alguna del citado partido para cometer la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

#### **d) La trascendencia de la normatividad transgredida.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro. Esto es, al actualizarse una falta

---

<sup>5</sup>Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003

sustancial por omitir pagar las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, con antigüedad mayor a un año, se vulnera sustancialmente la certeza en el adecuado manejo de los recursos.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito trae consigo la no rendición de cuentas, impide garantizar la claridad necesaria en el monto, destino y aplicación de los recursos; en consecuencia, se vulnera la certeza y transparencia como principios rectores de la actividad electoral. Debido a lo anterior, el sujeto obligado violó los valores antes establecidos y afectos a la persona jurídica indeterminada (los individuos pertenecientes a la sociedad).

Ahora bien, del análisis a las balanzas de comprobación y auxiliares contables se acreditó que el partido político omitió cumplir con su obligación de pago, al advertirse contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales con antigüedad mayor a un año al término del ejercicio 2016.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 84, numeral 3 y 87, numeral 4 del Reglamento de Fiscalización<sup>6</sup>.

Las disposiciones en comento establecen que si a la conclusión de la revisión de los informes anuales que realice la Unidad Técnica de Fiscalización, las contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales, se les dará el tratamiento de cuentas por pagar, consecuentemente las contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o mayor a un año, serán consideradas como ingresos y sancionadas como aportaciones no reportadas, lo anterior, en razón que la falta de entero de dichas contribuciones retenidas, constituye una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

---

<sup>6</sup>**“Artículo 84. Del reconocimiento de las cuentas por pagar 3.**Para el caso de contribuciones por pagar cuya antigüedad sea igual o mayor a un año, serán consideradas como ingresos y por lo tanto, sancionadas como aportaciones no reportadas”

**“Artículo 87. Tratamiento de las contribuciones por pagar.4.** Si a la conclusión de la revisión de los informes anuales que realice la Unidad Técnica, las contribuciones no fueran enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales, se les dará tratamiento de cuentas por pagar.”

Esto es, las disposiciones en comento tienen por finalidad garantizar el pago de las contribuciones en términos de la legislación fiscal, salvo que se informe en su oportunidad de la existencia del pago de dichas contribuciones, y así evitar que indefinidamente sean registrados los pasivos en la contabilidad que presente el partido año con año, lo cual podría traducirse, en algunos casos, en una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

Es importante señalar que con la actualización de la falta de fondo se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de partidos políticos, lo anterior es así toda vez que existe un sistema normativo electoral, en el cual se establecen reglas procedimentales y sustanciales, así como controles de validez, legalidad y legitimidad de los actos de los referidos institutos, a fin que las violaciones a la ley, traigan aparejada una sanción o consecuencia jurídica.

Asimismo, los pasivos respecto de los cuales el instituto político ha sido omiso en el cumplimiento de pago dentro de la temporalidad establecida para ello y conforme a las disposiciones fiscales, representan beneficio indebido, pues el partido dejó de erogar recursos para el pago de dichas contribuciones, situación que se convierte en una aportación y por tanto, en un ingreso no reportado, lo que implica una vulneración al principio de certeza en el adecuado manejo de los recursos.

Esto se advierte, si se toma en cuenta que las formas de organización, contabilidad y administración de los sujetos obligados, conducen a la determinación de que la fiscalización de sus operaciones no se puede llevar a cabo de manera veraz, objetiva y con eficacia, sino mediante la documentación de la totalidad de sus recursos financieros, de su origen, manejo, custodia y destino.

De tal modo que, sólo mediante el conocimiento de tales circunstancias, la autoridad fiscalizadora electoral puede estar en condiciones reales de conocer cuál fue el origen, uso, manejo y destino que en el período fiscalizado se dio a los recursos que hayan recibido los sujetos obligados, de determinar la posible comisión de infracciones a las

normas electorales y, en su caso, de imponer adecuadamente las sanciones que correspondan.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido las contribuciones no enteradas en los términos que establecen las disposiciones fiscales, al término del ejercicio dos mil dieciséis, por sí mismas constituyen una falta sustantiva, porque con esas omisiones, en algunos casos, se podrían traducir en una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

Considerarlo de otra forma, generaría una hipótesis de permisión de retener contribuciones, arrastrándolas ejercicio tras ejercicio y de esta forma recibir en algunos casos, una fuente de financiamiento adicional que rompe con el elemento equitativo de la distribución de los recursos públicos y privados de los partidos políticos.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.



En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza en el adecuado manejo de los recursos, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado que es la certeza en el adecuado manejo de los recursos.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

## **B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.<sup>7</sup>

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado al sujeto obligado en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos; elementos tales que han sido expuestos y analizados en el **considerando 6** de la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el partido cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

### **Conclusión 11**

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

---

<sup>7</sup>Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye. Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización, debido a que el sujeto obligado omitió pagar las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en omitir pagar las contribuciones en los términos que establecen las disposiciones fiscales, las cuales cumplieron con la antigüedad mayor a un año, por un monto de **\$1,132.32**, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral; aunado a ello, que la comisión de la falta derivó de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.
- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas en la irregularidad en estudio, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad fiscalizadora en el marco de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el monto involucrado en la conclusión sancionatoria asciende a **\$1,132.32 (mil ciento treinta y dos pesos 32/100 M.N.)**.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del

infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>8</sup>

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave **SUP-RAP-114/2009** la finalidad que debe perseguir una sanción.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción III consistente en una reducción de la ministración mensual del financiamiento público que le corresponde para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el sujeto obligado se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

---

<sup>8</sup>Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así, la sanción a imponerse al sujeto obligado es de índole económica y equivale al **150% (ciento cincuenta por ciento)** sobre el monto involucrado **\$1,132.32 (mil ciento treinta y dos pesos 32/100 M.N.)**, cantidad que asciende a un total de \$1,698.48 (mil seiscientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al Partido Verde Ecologista de México, es la prevista en la fracción III, inciso a), numeral 1 del artículo 456 del Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sosténimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,698.48 (mil seiscientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**10.** Que la sanción originalmente impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en la Resolución **INE/CG524/2017** consistió en:

Sanción en resolución INE/CG524/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-20/2017
<p><b><u>c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.</u></b></p> <p><b><u>Conclusión 11.</u></b></p> <p><b><u>Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido político, por concepto</u></b></p>	<p>En cumplimiento a lo resuelto por la Sala Regional Toluca en el ST-RAP-20/2017, se modifica la conclusión 11.</p>	<p><b><u>c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.</u></b></p> <p><b><u>Conclusión 11.</u></b></p> <p><b><u>Una reducción del 50% (cincuenta por ciento) de la ministración mensual que le corresponda al partido político, por concepto</u></b></p>

Sanción en resolución INE/CG524/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a ST-RAP-20/2017
Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$155,018.70 (ciento cincuenta y cinco mil dieciocho pesos 70/100 M.N.)		Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de \$1,698.48 (mil seiscientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)

11. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo se modifica el **Resolutivo DÉCIMO CUARTO** para quedar en los siguientes términos:

(...)

## RESUELVE

(...)

**DÉCIMO SEGUNDO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 17.2.11 correspondiente al Comité Directivo Estatal **Estado de México** de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:

(...)

**c) 1 falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 11.**

### **Conclusión 11.**

(...)

Una reducción del **50% (cincuenta por ciento)** de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **\$1,698.48 (mil seiscientos noventa y ocho pesos 48/100 M.N.)**.

(...)

**En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo **INE/CG523/2017** y la Resolución **INE/CG524/2017**, aprobados en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos **8, 9, 10 y 11** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que informe a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal Electoral con Sede en Toluca, **dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **ST-RAP-20/2017**, remitiéndole para ello copia certificada de este Acuerdo.

**TERCERO.** Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales notifique al Organismo Público Local Electoral del Estado de México y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar a los sujetos interesados a la brevedad posible; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a 24 horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o Resolución impugnada.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN  
DIRECCIÓN DE AUDITORIA DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, AGROPACIONES POLÍTICAS Y OTROS  
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO  
REVISIÓN DE INFORME ANUAL 2016  
ANÁLISIS DE SALDOS IMPUESTOS POR PAGAR

ENTIDAD FEDERATIVA	CUENTA	NOMBRE	ADEUDOS			PAGOS Y DISMINUCIONES			REFERENCIA	ADEUDOS			PAGOS Y DISMINUCIONES			AJUSTES DERIVADOS DE LA REVISIÓN A LA RESPUESTA DEL OFICIO INE/TFDA-L/7293017 (SEGUNDA VUELTA)			Anexo	
			SALDO INICIAL DE SALDOS GENERADOS EN 2015 Y ANTERIORES	B	C=A+B	TOTAL DE ADEUDOS	SALDOS GENERADOS EN ANTERIORES	D		E	F=D+E	TOTAL DE DISMINUCIONES	SALDOS GENERADOS EN 2016	G=A+D	H=B+E	I=H+I	SALDOS GENERADOS EN ANTERIORES	J		K=J+L
1	2	3																		
Estado de México	210300000	IMPUESTOS POR PAGAR ORDINARIO																		
Estado de México	210300000	ISR RETENIDO POR SERVIDORES PROFESIONALES	618,698.31	391,337.79	1,010,036.10	973,336.00	367,600.00	0.00	36,700.00	(1)	1,010,036.10	973,336.00	0.00	36,700.00	1,132.32	1,010,036.10	973,336.00	0.00	36,700.00	36,700.00
Estado de México	210300000	ISR RETENIDO POR SUELOS Y SALARIOS	890,243.11	547,420.47	1,337,663.58	1,337,663.58	890,243.11	0.00	890,243.11	(2)	1,337,663.58	1,337,663.58	0.00	890,243.11	1,337,663.58	1,337,663.58	890,243.11	0.00	890,243.11	890,243.11
Estado de México	210300000	ISR RETENIDO POR SERVIDORES PROFESIONALES	890,243.11	547,420.47	1,337,663.58	1,337,663.58	890,243.11	0.00	890,243.11	(3)	1,337,663.58	1,337,663.58	0.00	890,243.11	1,337,663.58	1,337,663.58	890,243.11	0.00	890,243.11	890,243.11
Estado de México	210300000	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	(4)	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00
Estado de México	210300000	IVA RETENIDO POR SERVIDORES PROFESIONALES	692,843.11	417,420.47	1,110,263.58	1,076,639.00	33,624.58	0.00	33,624.58	(5)	1,110,263.58	1,076,639.00	0.00	33,624.58	1,110,263.58	1,076,639.00	33,624.58	0.00	33,624.58	33,624.58
Estado de México	210300000	IVA RETENIDO POR FLEETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado de México	210300000	IVA RETENIDO POR FLEETES	35,999.91	40,320.00	76,319.91	76,319.91	35,999.91	0.00	35,999.91	(7)	76,319.91	76,319.91	0.00	35,999.91	76,319.91	76,319.91	35,999.91	0.00	35,999.91	35,999.91
Estado de México	210300000	IVA RETENIDO POR FLEETES	35,999.91	40,320.00	76,319.91	76,319.91	35,999.91	0.00	35,999.91	(8)	76,319.91	76,319.91	0.00	35,999.91	76,319.91	76,319.91	35,999.91	0.00	35,999.91	35,999.91
Estado de México	210300000	MISCELANEO	7,182.24	32,970.87	40,153.11	32,968.51	7,182.24	0.00	7,182.24	(9)	40,153.11	32,968.51	0.00	7,182.24	40,153.11	32,968.51	7,182.24	0.00	7,182.24	7,182.24
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(10)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(11)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(12)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(13)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(14)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(15)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(16)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(17)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(18)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(19)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(20)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(21)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(22)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(23)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(24)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(25)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(26)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(27)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(28)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(29)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(30)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(31)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(32)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(33)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(34)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(35)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(36)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(37)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(38)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(39)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(40)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(41)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(42)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	(43)	10,416.52	10,415.52	0.00	1,487.65	10,416.52	10,415.52	1,487.65	0.00	1,487.65	1,487.65
Estado de México	210300000	IMPUESTO SOBRE RENTAS	1,487.65	8,928.87	10,416.52	10,415.52	1,48													



**INE/CG413/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-165/2017, INTERPUESTO POR EL C. JUAN ANTONIO SALAZAR OVIEDO, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG301/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (CANDIDATOS INDEPENDIENTES)**

## **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución.** El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017** respectivamente, sobre la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el diez de agosto de dos mil diecisiete, el **C. Juan Antonio Salazar Oviedo** interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG301/2017**, así como el Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG299/2017**, mismo que fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara,

Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), con el expediente identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-165/2017**.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, determinando en el Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se revocan parcialmente la resolución y el Dictamen impugnados, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación **SG-RAP-165/2017** tuvo por efecto **revocar parcialmente la resolución INE/CG301/2017**, así como la parte conducente del Dictamen Consolidado, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución, identificados con los número de Acuerdo **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017** respectivamente, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a el candidato independiente **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, por lo que se procede a la modificación de dicho documento, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en las referidas ejecutorias.

**3. Alcances del cumplimiento.** Que por lo anterior y en razón del Considerando TERCERO de la sentencia recaída en el expediente SG-RAP-165/2017, relativo al **estudio de fondo**, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

**TERCERO. Estudio de fondo.**

(…)

**Aviso de apertura de la cuenta bancaria**

(…)

*El recurrente alega que la multa es injusta porque la autoridad responsable aun después de haber analizado sus aclaraciones, consideró que existe un incumplimiento de su parte por omitir presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria en tiempo, cuando a su parecer la observación debería estar cubierta con su aclaración.*

(…)

*En concepto de esta Sala Regional, supliendo el agravio en lo que procede, se estima que el disenso planteado resulta sustancialmente fundado como se explica a continuación.*

*(...)*

*Al respecto, este Tribunal Electoral ha sostenido que dicha restricción tiene como finalidad primordial evitar que una persona determinada sea penada dos veces por la misma conducta, sin que sea necesario la emisión de una sentencia que condene o absuelva, pues dicho precepto constitucional refiere que nadie puede ser “juzgado” dos veces por el mismo delito, lo que necesariamente implica —más que ser “sentenciado”— ser sometido a juicio o procedimiento.*

*(...)*

*En ese sentido, del análisis de las constancias del expediente —en lo que atañe al motivo de inconformidad bajo estudio— se advierte que se configuró la transgresión al principio de non bis in ídem, por parte de la responsable con la emisión de la resolución impugnada.*

*(...)*

*Por su parte, el artículo 286, numeral 1, inciso c), del propio Reglamento prevé que los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar el aviso a la UTF de la apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 del propio Reglamento.*

*De la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados, se desprende que los ciudadanos<sup>14</sup> que pretendan postular su candidatura independiente a un cargo de elección popular tienen la obligación de realizar lo siguiente:*

*(...)*

***e) Dar aviso a la UTF de la apertura de su cuenta bancaria, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo.***

*De lo anterior, es posible concluir que los ciudadanos en su calidad de “aspirantes” y “candidatos independientes”, están obligados a abrir por lo menos una cuenta bancaria a través de la cual deberán rendir cuentas a la UTF respecto a los ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano y de los generados en la etapa de campaña electoral.*

*En el caso concreto, de las constancias del expediente en que se actúa, se advierte que el trece de junio de este año, a través del oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DAL/9771/17 la autoridad fiscalizadora notificó al recurrente la observación que advirtió de la revisión de su informe de campaña, consistente en la omisión de presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria en tiempo, a efecto de que realizara las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

*En su momento, según se advierte del propio Dictamen Consolidado, el recurrente dio contestación al oficio de errores y omisiones respecto a la observación mencionada, en el tenor siguiente:*

*“Cuenta Bancaria*

*Cabe mencionar que solicitamos se nos exima de este rubro ya que tal y como se anexa de manera inmediata el día 03 de junio del presente año, que fue el último día para realizar la carga de las evidencias adjuntas al informe, fueron cargados el contrato de apertura bancario, tarjeta de firmas, estados de cuenta pertenecientes a los meses de marzo, abril, mayo y parcial de junio, así como los reportes de cuentas y conciliaciones bancarias realizadas.*

***Cabe mencionar también que el aviso de apertura se había entregado con anticipación ante la oficialía de partes el día 05 de mayo de 2017 para que tuvieran conocimiento de ello. SE ANEXA OFICIO.”***

***Lo resaltado es propio.***

*Sobre el particular, la UTF consideró que la manifestación del recurrente era insatisfactoria, toda vez que el aviso de apertura de su cuenta bancaria no lo*

*presentó dentro de los cinco días posteriores a la firma de la misma, por lo que la observación no quedó atendida.*

*De la simple lectura al Dictamen Consolidado en el apartado transcrito, resalta que el recurrente informó a la autoridad fiscalizadora que el aviso de apertura lo había entregado el cinco de mayo de este año, para lo cual afirma haber anexado un oficio a efecto de demostrar su dicho.*

*(...)*

*Del contenido del oficio aludido, se desprende que efectivamente en la fecha que señala el recurrente dio aviso a la UTF de que el diez de febrero del año en curso abrió la cuenta bancaria mencionada; sin embargo, la autoridad responsable —sin realizar pronunciamiento alguno sobre dicho oficio— determinó que la observación no había quedado atendida porque el aviso no se presentó dentro de los cinco días posteriores a su firma.*

*Es de señalar que el aviso de apertura de su cuenta bancaria, lo aportó el sujeto obligado en respuesta al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/5333/17,16 por medio del cual se le notificó la omisión de avisar la apertura de dicha cuenta en tiempo, la cual se detectó de la revisión a su informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano.*

*Seguido el procedimiento de fiscalización correspondiente a la etapa de obtención de apoyo ciudadano, la autoridad responsable dictó resolución<sup>17</sup> a través de la cual sancionó al recurrente por la falta aludida; dicha determinación quedó firme con la sentencia del recurso de apelación antes señalado.*

*Como se ve, la autoridad responsable observó la misma irregularidad en cada uno de los informes de Juan Antonio Salazar Oviedo y, en ambos casos, una vez finalizados los procedimientos de fiscalización respectivos determinó sancionarlo por la misma conducta omisiva, lo que va en contra de la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos.*

---

<sup>1</sup> Resolución INE/CG170/2017 de veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

**Cabe señalar que de una revisión al SIF esta Sala Regional constató que el recurrente registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de obtención de apoyo ciudadano y de campaña.<sup>2</sup>**

(...)

*En ese sentido, al estar demostrado que la responsable tenía conocimiento de que el recurrente abrió solo una cuenta bancaria desde el diez de febrero de dos mil diecisiete, para el manejo exclusivo de los gastos relativos a la captación de apoyo ciudadano y de campaña electoral, es evidente que no existía justificación legal ni reglamentaria para sancionarlo nuevamente.*

*De todo lo anterior se advierte que la autoridad responsable sometió al recurrente a dos procedimientos —relacionados con la revisión de su informe de etapa de obtención de apoyo ciudadano y el correlativo al de campaña electoral— y en ambos casos lo sancionó con una multa por incumplir con su obligación de avisar a la UTF la apertura de su cuenta bancaria en tiempo, en franca vulneración al principio constitucional non bis in ídem.*

*Por tanto, en concepto de esta Sala Regional el actuar de la autoridad responsable contraviene lo contemplado por el artículo 23 Constitucional, toda vez que impone más de una sanción por los mismos hechos con base en un mismo precepto y bien jurídico tutelado, es decir, sanciona al recurrente dos veces por los mismos hechos sustentándose en el mismo fundamento jurídico, incumpliendo con la prohibición de que una misma conducta sea castigada doblemente.*

*En tal virtud, lo procedente es **revocar parcialmente** el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada exclusivamente por cuanto hace a las consideraciones y multa impuesta en la **conclusión 5**.*

(...)

---

<sup>2</sup> Tal como se advierte del examen realizado al SIF en el sitio relativo a las precampañas y campañas de los aspirantes y candidatos independientes a regidores en el Estado de Nayarit, existe un panel en cada una de estas etapas que contiene un apartado denominado "Catálogos", en donde a su vez se encuentra un segmento llamado "Cuentas Bancarias", en el cual después de buscar la correspondiente al recurrente se advierte que éste realizó el registro de una sola cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los gastos relativos a la obtención de apoyo ciudadano y de campaña, la que contiene los datos siguientes: a) Número de cuenta: 1802881102; b) Nombre del Titular: "HERMOSA COMPOSTELA AC", y c) Institución Financiera: "BANCO DEL BAJIO, S.A.".

*Por los motivos y fundamento expuestos se **revocan parcialmente** el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada exclusivamente por cuanto hace a las consideraciones y sanción impuesta respecto de la **conclusión 5**.*

(...)”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país<sup>3</sup>, mismo que para el ejercicio 2017 corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece “*A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en*

---

<sup>3</sup> De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “*para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.*”



*las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s).

**5.** Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen **INE/CG299/2017** y la Resolución identificada como **INE/CG301/2017**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.9.4.122, conclusión 5** del Dictamen Consolidado y Considerando **28.4.63, conclusión 5** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

#### **6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 5** del Dictamen Consolidado correspondiente al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente la resolución impugnada, en la <b>conclusión 5</b> que se precisa en la sentencia.	Se revoca parcialmente la resolución impugnada respecto de la <b>conclusión 5</b> .	<b>Conclusión 5:</b> Se deja <b>sin efectos</b> , derivado de los argumentos vertidos por la Sala Regional, al violarse el principio <i>non bis in ídem</i> , y sancionarse dos veces	En el Dictamen y en la Resolución.

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
		la omisión de presetar el aviso de apertura de cuenta bancaria.	

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el **Dictamen Consolidado** número INE/CG299/2017, así como la Resolución identificada con el número INE/CG301/2017, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingreso y Gastos de Campaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, en la parte conducente al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, en los términos siguientes:

#### **A. Modificación al Dictamen Consolidado.**

**“3.9.4.122. Juan Antonio Salazar Oviedo, candidato independiente al cargo de Regidor.**

(...)

##### **a. Cuentas de balance.**

##### **Cuenta Bancaria.**

- ♦ *El sujeto obligado no reportó la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de campaña, así como el aviso de apertura, el contrato, la tarjeta de firmas, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias por el periodo de la campaña.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-L/9771/17, de fecha 13 de junio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

*“Cuenta Bancaria*

*Cabe mencionar que solicitamos se nos exima de este rubro ya que tal y como se anexa de manera inmediata el día 03 de junio del presente año, que fue el último día para realizar la carga de las evidencias adjuntas al informe. Fueron cargados el contrato de apertura bancario, tarjeta de firmas, estados de cuenta pertenecientes a los meses de marzo, abril, mayo y parcial de junio, así como los reportes de cuentas y conciliaciones bancarias realizadas.*

*Cabe mencionar también que el aviso de apertura se había entregado con anticipación ante oficialía de partes el día 05 de mayo de 2017 para que tuvieran conocimiento de ello. SE ANEXA OFICIO.”*

Del análisis a la respuesta presentada por el sujeto obligado, se verifico el registro de la cuenta bancaria en SIF, además se observó que adjuntó el contrato de apertura, la tarjeta de firmas, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias del mes de mayo, cuyos saldos coinciden con el saldo en los registros contables y el estado de cuenta, por tal razón la observación correspondiente **quedó atendida**.

Por lo que corresponde al aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, la manifestación del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, toda vez que el aviso de apertura de la cuenta no fue presentado a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 5 días posteriores a la firma de la misma, por tal razón la observación correspondiente **no quedó atendida**.

Al omitir presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria en tiempo, incumplió con lo establecido en el artículo 286, numeral 1, inciso c), del RF. **(Conclusión 5.CI/NAY)**.

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la

ciudad de Guadalajara, Jalisco en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SG-RAP-165/2017, se determinó lo siguiente:

Por lo que corresponde al aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, el sujeto obligado registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de apoyo ciudadano y de campaña, por tal razón la observación correspondiente **queda sin efectos. (Conclusión 5.CI/NAY).**

(...)

**Conclusiones finales de la revisión al informe de ingresos y gastos de campaña al cargo de Regidor presentado por el candidato independiente el C. Juan Antonio Salazar Oviedo, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.**

(...)

#### **Bancos.**

5. CI/NAY. El sujeto obligado registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de apoyo ciudadano y de campaña y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, la observación queda sin efectos.

(...)”

#### **B. Modificación a la Resolución.**

Previo a la modificación, resulta de vital importancia destacar que el órgano jurisdiccional determinó confirmar una irregularidad más en las que incurrió C. Juan Antonio Salazar Oviedo, por lo que dichos montos quedaron intocados, en tal sentido esta autoridad únicamente elimina la sanción respecto de la **conclusión 5**, en el apartado de imposición de sanción.

Que la Sala Regional , al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente SG-RAP-165/2017 las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG301/2017 relativas al C. Juan Antonio Salazar Oviedo, este

Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **28.4.63**, relativo a la conclusión **5**, en los términos siguientes:

#### **28.4.63. Juan Antonio Salazar Oviedo.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el candidato independiente son las siguientes:

- a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión 2.**
- b) Imposición de la sanción.**

(...)

- a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 2.****

(...)

#### **b) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

#### **Por lo que hace a la conclusión 2<sup>4</sup>.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

---

<sup>4</sup> Se destaca que el órgano jurisdiccional determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por lo que dichos montos quedaron intocados y únicamente se elimina la sanción respecto de la **conclusión 5**.

(...)

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	2	Registro extemporáneo de eventos en la agenda de campaña, antes del evento	7 eventos	5 UMAS POR EVENTO	\$2,642.15
Total					\$2,642.15 <sup>5</sup>

(...)

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **35 (treinta y cinco) Unidades de Medida y Actualización** para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$2,642.15 (dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios

---

<sup>5</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete.

establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

7. Que la sanción originalmente impuesta al candidato independiente **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, en la Resolución **INE/CG301/2017**, consistió en:

Sanciones en Resolución INE/CG301/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-165/2017
<p><b>CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>28.4.63</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Juan Antonio Salazar Oviedo</b>, en su carácter de candidato independiente, las sanciones siguientes:</p> <p>a) 1 Falta de carácter formal: <b>conclusión 5.</b></p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: <b>conclusión 2.</b></p> <p>Una multa equivalente <b>45 (cuarenta y cinco)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de <b>\$3,397.05 (tres mil trescientos noventa y siete pesos 05/100 M.N.).</b></p>	<p>La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta derivada de la <b>conclusión 5</b>, por lo que se estima que la <b>conclusión 5</b> queda revocada lisa y llanamente.</p>	<p><b>CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>28.4.63</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Juan Antonio Salazar Oviedo</b>, en su carácter de candidato independiente, la sanción siguiente:</p> <p>a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: <b>conclusión 2.</b></p> <p>Una multa equivalente <b>35 (treinta y cinco)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de <b>\$2,642.15 (dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.).</b></p>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, la siguiente sanción:

## “R E S U E L V E

(...)

**CENTÉSIMO VIGÉSIMO CUARTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **28.4.63** de la presente Resolución, se

impone al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo, en su carácter de candidato independiente**, las sanciones siguientes:

a) **1** Falta de carácter sustancial o de fondo: **conclusión 2.**

Una **multa** equivalente **35 (treinta y cinco)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$2,642.15 (dos mil seiscientos cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.)**.

(...).”

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG299/2017** y la Resolución **INE/CG301/2017**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, con relación a los Informes de campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, (Candidatos Independientes) en los términos precisados en los considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-165/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de



Nayarit, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **C. Juan Antonio Salazar Oviedo** dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al otrora candidato independiente, **C. Juan Antonio Salazar Oviedo**, en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando ocho del presente Acuerdo, con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.

**QUINTO.** Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

**SÉPTIMO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**OCTAVO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG414/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-193/2017, INTERPUESTO POR EL C. EFRAÍN PÉREZ RAMOS, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG301/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (CANDIDATOS INDEPENDIENTES)**

## **ANTECEDENTES**

**I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución.** El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017** respectivamente, que presento la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el **C. Efraín Pérez Ramos** interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG301/2017**, así como el Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG299/2017**, mismo que fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), con el expediente identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-193/2017**.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, determinando en el Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se **revocan** parcialmente la resolución y el Dictamen impugnados, para los efectos precisados en la presente ejecutoria.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SG-RAP-193/2017 tuvo por efecto **revocar parcialmente la resolución INE/CG301/2017**, así como la parte conducente del Dictamen Consolidado, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Lo anterior, con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores

correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017** respectivamente, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al candidato independiente **C. Efraín Pérez Ramos**, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen y Resolución referidos, observando a cabalidad las bases establecidas en las referidas ejecutorias.

**3. Alcances del cumplimiento.** Que por lo anterior y en razón del Considerando QUINTO de la sentencia recaída en el expediente SG-RAP-193-2017, relativo al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

**QUINTO. Estudio de fondo.**

**OMISIÓN DE PRESENTAR EL AVISO DE APERTURA DE LA CUENTA BANCARIA.**

*En concepto de esta Sala Regional, supliendo el agravio en lo que procede, se considera **fundado** el reproche relacionado a que el ciudadano no presentó el aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña en tiempo, por las siguientes consideraciones.*

*En principio se considera pertinente realizar las siguientes precisiones respecto al marco normativo aplicable y al principio general del Derecho non bis in idem.*

*En el artículo 23 de la Constitución<sup>1</sup> se establece la prohibición de sancionar a la misma persona dos o más veces por el mismo hecho sobre la base del mismo fundamento legal.*

*El principio contenido en el citado precepto constitucional denominado non bis in ídem, aplicable a todo procedimiento sancionador,<sup>2</sup> representa una garantía de seguridad jurídica de los procesados que se ha entendido, por una parte, como la prohibición de instaurar diversos procedimientos respecto de los mismos hechos considerados ilícitos, con base en el mismo tipo o supuesto de infracción administrativa<sup>3</sup> y, por otra, para limitar que se imponga más de una sanción a partir de una doble valoración o reproche sobre un mismo aspecto.<sup>4</sup>*

*Ahora, en cuanto a la interpretación de tal principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha especificado que esa limitante tiene como fin prohibir que a una persona se le sancione una segunda ocasión por el mismo hecho o para proteger el mismo bien jurídico, en el entendido que ello se actualiza cuando existe identidad en el sujeto, hecho y fundamento (inclusive bien jurídico).*

*Al respecto, este Tribunal Electoral ha sostenido que dicha restricción tiene como finalidad primordial evitar que una persona determinada sea penada dos veces por la misma conducta, sin que sea necesario la emisión de una sentencia que condene o absuelva, pues dicho precepto constitucional refiere que nadie puede ser “juzgado” dos veces por el mismo delito, lo que necesariamente implica —más que ser “sentenciado”— ser sometido a juicio o procedimiento.*

---

<sup>1</sup> **Artículo 23.** Ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la práctica de absolver de la instancia.

<sup>2</sup> Sirve como sustento el criterio contenido en la tesis XLV/2002 de rubro: “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL.**”, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 6, año 2003, pp. 121 y 122.

<sup>3</sup> El artículo 8, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también garantiza que el inculpado absuelto por una sentencia firme no puede ser sometido a nuevo juicio, por los mismos hechos, mientras que el artículo 14, numeral 7, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

<sup>4</sup> En relación al tema, la Sala Superior se ha pronunciado sobre la prohibición de doble reproche, entre otros, en los expedientes: SUP-RAP-147/2017, SUP-REP-3/2015, SUP-REP-94/2015, SUP-RAP-300/2015, SUP-RAP-533/2015 y SUP-RAP-236/2016.

*Establecido lo anterior, esta autoridad considera importante destacar que la vulneración al derecho humano sobre la **prohibición de doble juzgamiento** por los mismos hechos o **non bis in idem**, es procedente en cualquier etapa del proceso, lógicamente incluida la fase de recursos ordinarios e incluso, en los medios de impugnación extraordinarios, por tratarse de una violación directa al mencionado artículo 23 Constitucional.*

*En ese sentido, del análisis de las constancias del expediente se advierte que se configuró la transgresión al principio de non bis in ídem, por parte de la responsable con la emisión de la resolución impugnada.*

*(...)*

*En concordancia con lo anterior, el artículo 59, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización refiere que los aspirantes y candidatos independientes, deberán abrir cuando menos una cuenta bancaria a nombre de la Asociación Civil a través de la cual rendirán cuentas.*

*Por su parte, el artículo 286, numeral 1, inciso c), del propio Reglamento **prevé que los aspirantes y candidatos independientes deberán realizar el aviso a la UTF de la apertura de cuentas bancarias, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo**, cumpliendo con lo establecido en el artículo 54 del propio Reglamento.*

*Al respecto, el artículo 54, numeral 8, del referido ordenamiento legal, en lo que al caso interesa, establece que las cuentas bancarias para precampaña y campaña, podrán abrirse a partir del mes inmediato anterior al inicio del Proceso Electoral y se deberán cancelar a más tardar durante el mes posterior a la conclusión del mismo.*

*De la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados, se desprende que los ciudadanos<sup>5</sup> que pretendan postular su candidatura*

---

<sup>5</sup> Es de señalar que adquieren la calidad de “aspirantes” cuando reciben la constancia respectiva, y se consideran “candidatos” cuando obtienen su registro ante la autoridad administrativa electoral competente.

*independiente a un cargo de elección popular tienen la obligación de realizar lo siguiente:*

*a) Hacer del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit su intención de postularse por escrito.*

*b) Presentar su Plataforma Electoral para el registro ante el Instituto local, en los primeros diez días de febrero del año de la elección.*

*c) Constituir una asociación civil para la postulación de su candidatura.*

*d) Acreditar la apertura de al menos una cuenta bancaria en el Estado de Nayarit a nombre de la Asociación Civil, para el manejo exclusivo de los gastos originados por la obtención de apoyo ciudadano y los que se realicen durante su campaña.*

***e) Dar aviso a la UTF de la apertura de su cuenta bancaria, dentro de los cinco días siguientes a la firma del contrato respectivo.***

*De lo anterior, es posible concluir que los ciudadanos en su calidad de “aspirantes” y “candidatos independientes”, están obligados a abrir por lo menos una cuenta bancaria a través de la cual deberán rendir cuentas a la UTF respecto a los ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano y de los generados en la etapa de campaña electoral.*

*Dicha cuenta podrá abrirse a partir del mes inmediato anterior al inicio del Proceso Electoral y, eventualmente, deberá cancelarse a más tardar durante el mes posterior a la conclusión del mismo, de conformidad a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de Fiscalización.*

*En el caso concreto, de las constancias del expediente, se advierte que el treinta de abril de este año, a través del oficio de errores y omisiones número INE/UTF/DA-L/5285/17 la autoridad fiscalizadora notificó al recurrente la observación que advirtió de la revisión de su informe de campaña, consistente en la omisión de presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria en*

*tiempo, a efecto de que realizara las aclaraciones que a su derecho convinieran.*

*En su momento, según se advierte del propio Dictamen Consolidado, el recurrente dio contestación al oficio de errores y omisiones respecto a la observación mencionada, en el tenor siguiente:*

*“Cuentas Bancarias*

*Respecto a que omití presentar el registro de la cuenta bancaria, esta si está registrada en el sistema de fiscalización dentro de catálogos, cuentas bancarias, consulta.*

*En relación al aviso de apertura, se adjunta al informe de corrección.”*

*Sobre el particular, la UTF consideró que la manifestación del recurrente era insatisfactoria, toda vez que el aviso de apertura de su cuenta bancaria no lo presentó, por lo que la observación no quedó atendida, determinando que la observación no había quedado atendida.*

*Es de señalar que el aviso de apertura de su cuenta bancaria, lo aportó el sujeto obligado en respuesta al oficio de errores y omisiones INE/UTF/DA-L/5285/17,<sup>6</sup> por medio del cual se le notificó la omisión de avisar la apertura de dicha cuenta en tiempo, la cual se detectó de la revisión a su informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano.*

*Seguido el procedimiento de fiscalización correspondiente a la etapa de obtención de apoyo ciudadano, la autoridad responsable dictó resolución<sup>9</sup> a través de la cual sancionó al recurrente por la falta aludida (conclusión 3); dicha determinación quedó firme con la sentencia del recurso de apelación antes señalado.*

*Como se ve, la autoridad responsable observó la misma irregularidad en cada uno de los informes de Efraín Pérez Ramos y, en ambos casos, una vez finalizados los procedimientos de fiscalización respectivos determinó*

---

<sup>6</sup> Que obra en fojas 64-69 del expediente del recurso de apelación SG-RAP-121/2017 SG-RAP-165-2017.



sancionarlo por la misma conducta omisiva, lo que va en contra de la prohibición de doble juzgamiento por los mismos hechos.

**Cabe señalar que de una revisión al SIF esta Sala Regional constató que el recurrente registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de obtención de apoyo ciudadano y de campaña.**<sup>7</sup>

Así las cosas, si bien el recurrente no cumplió con su obligación de dar el aviso de su cuenta bancaria en tiempo durante la fiscalización de sus ingresos y gastos en la etapa correspondiente a la obtención de apoyo ciudadano, ello no justifica que en la resolución ahora impugnada la autoridad responsable volviera a sancionarlo por los mismos hechos y fundamento legal.

En ese sentido, al estar demostrado que la responsable tenía conocimiento de que el recurrente abrió solo una cuenta bancaria desde el diez de febrero de dos mil diecisiete, para el manejo exclusivo de los gastos relativos a la captación de apoyo ciudadano y de campaña electoral, es evidente que no existía justificación legal ni reglamentaria para sancionarlo nuevamente.

De todo lo anterior se advierte que la autoridad responsable sometió al recurrente a dos procedimientos –relacionados con la revisión de su informe de etapa de obtención de apoyo ciudadano y el correlativo al de campaña electoral- y en ambos casos lo sancionó con una multa por incumplir con su obligación de avisar a la UTF la apertura de su cuenta bancaria en tiempo, en franca vulneración al principio constitucional non bis in ídem.

Por tanto, en concepto de esta Sala Regional el actuar de la autoridad responsable contraviene lo contemplado por el artículo 23 Constitucional, toda vez que impone más de una sanción por los mismos hechos con base en un mismo precepto y bien jurídico tutelado, es decir, sanciona al recurrente dos veces por los mismos hechos sustentándose en el mismo fundamento jurídico,

---

<sup>7</sup> Tal como se advierte del examen realizado al SIF en el sitio relativo a las precampañas y campañas de los aspirantes y candidatos independientes a regidores en el Estado de Nayarit, existe un panel en cada una de estas etapas que contiene un apartado denominado "Catálogos", en donde a su vez se encuentra un segmento llamado "Cuentas Bancarias", en el cual después de buscar la correspondiente al recurrente se advierte que éste realizó el registró de una sola cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los gastos relativos a la obtención de apoyo ciudadano y de campaña, la que contiene los datos siguientes: a) Número de cuenta: 65506030733; b) Nombre del Titular: "POR UN PORVENIR MEJOR JOMULCO VA INDEPENDIENTE AC", y c) Institución Financiera: "BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.".

*incumpliendo con la prohibición de que una misma conducta sea castigada doblemente.*

*En tal virtud, lo procedente es **revocar parcialmente** el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada exclusivamente por cuanto hace a las consideraciones y multa impuesta en la **conclusión 6**.*

(...)

Así las cosas, por los motivos y fundamentos expuestos se **revocan parcialmente** el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada exclusivamente por cuanto hace a las consideraciones y sanción impuesta respecto de la **conclusión 6**.

(...).”

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país<sup>8</sup>, mismo que para el ejercicio 2017 corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

---

<sup>8</sup> De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, “*para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.*”

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA’s).

**5.** Que en tanto la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen **INE/CG299/2017** y la Resolución identificada como **INE/CG301/2017**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.9.4.103, conclusión 6** del Dictamen Consolidado y Considerando **28.4.24, conclusión 6** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional, materia del presente Acuerdo.

#### **6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 6** del Dictamen Consolidado correspondiente al **C. Efraín Pérez Ramos**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente el Dictamen Consolidado y la resolución impugnada, en la <b>conclusión 6</b> que se precisa en la sentencia.	Se revoca parcialmente la resolución impugnada respecto de la <b>conclusión 6</b> .	<b>Conclusión 6:</b> Se deja <b>sin efectos</b> , derivado de los argumentos vertidos por la Sala Regional, al violarse el principio <i>non bis in ídem</i> , y sancionarse dos veces la omisión de presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria.	En el Dictamen y en la Resolución.

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el Dictamen Consolidado número **INE/CG299/2017**, así como la Resolución identificada con el número **INE/CG301/2017**, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingreso y Gastos de Campaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, en la parte conducente al **C. Efraín Pérez Ramos**, en los términos siguientes:

#### **A. Modificación al Dictamen Consolidado.**

**“3.9.4.103 Efraín Pérez Ramos, candidato independiente al cargo de Regidor.**

(...)

##### **a. Cuentas de balance.**

##### **Bancos.**

- ♦ *Aun cuando el sujeto obligado reportó la cuenta bancaria para el manejo de los recursos de campaña, omitió presentar el aviso de apertura, el contrato, la tarjeta de firmas, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias por el periodo de la campaña.*

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-L/9733/17, de fecha 13 de junio de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

*“REFERENTE A BANCOS SE ADJUNTA LO SIGUIENTE:*

- I. ESTADOS DE CUENTA DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.*
- II. TARJETA DE FIRMAS DE CUENTAS BANCARIAS*
- III. CONTRATO DE CUENTA, CABE MENCIONAR QUE EN RELACION AL CONTRATO SE ACUDIO A LA SUCURSAL Y POR CONTRATO DE CUENTA SE NOS BRINDO SOLO LA HOJA QUE SE ADJUNTA COMO CONTRATO DE CUENTA, ASI MISMO SE NOS INFORMO QUE EL AVISO DE APERTURA Y EL CONTRATO ES LO MISMO*
- IV. CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.*

*PARA QUE QUEDE MAS CLARO DEJO IMAGEN DE LOS PUNTOS I, II, III, IV DE LA RELACION MENCIONADA EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE”.*

Del análisis a las aclaraciones y la documentación presentada por el sujeto obligado, se constató que presentó el contrato de apertura, la tarjeta de firmas, los estados de cuenta y las conciliaciones bancarias; por tal razón, la observación correspondiente **quedó atendida** en cuanto a este punto.

Por lo que corresponde al aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, la respuesta del sujeto obligado se consideró insatisfactoria, al manifestar que el aviso de apertura y el contrato es lo mismo, por lo que al no presentar el aviso a la Unidad Técnica de Fiscalización dentro de los 5 días posteriores a la firma de la misma; por tal razón, la observación correspondiente **no quedó atendida**.

Al omitir presentar el aviso de apertura de la cuenta bancaria en tiempo, incumplió con lo establecido en el artículo 286, numeral 1, inciso c) del RF. **(Conclusión 6.CI/NAY)**

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SG-RAP-193/2017, se determinó lo siguiente:

Por lo que corresponde al aviso de apertura de la cuenta bancaria utilizada para el manejo de los recursos de campaña, el sujeto obligado registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de apoyo ciudadano y de campaña, por tal razón la observación correspondiente **queda sin efectos. (Conclusión 6.CI/NAY)**

(...)

**Conclusiones finales de la revisión al informe de ingresos y gastos de campaña al cargo de Regidor presentado por el candidato independiente el C. Efraín Pérez Ramos, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.**

## **Bancos**

6. CI/NAY. El sujeto obligado registró una sola cuenta bancaria a nombre de la misma asociación civil para las etapas de etapas de apoyo ciudadano y de campaña y en acatamiento a lo ordenado por la Sala Regional Guadalajara, la observación queda sin efectos.

(...)”

## **B. Modificación a la Resolución.**

Previo a la modificación, resulta de vital importancia destacar que el órgano jurisdiccional determinó confirmar dos irregularidades más en las que incurrió el **C. Efraín Pérez Ramos**, por lo que dichos montos quedaron intocados, en tal sentido esta autoridad únicamente elimina la sanción respecto de la **conclusión 6**, en el apartado de imposición de sanción.

Que la Sala Regional, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente **SG-RAP-193/2017** las demás consideraciones que sustentan la Resolución **INE/CG301/2017** relativas al **C. Efraín Pérez Ramos**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **28.4.24**, relativo a la conclusión **6**, en los términos siguientes:

#### **28.4.24. Efraín Pérez Ramos.**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió el candidato independiente son las siguientes:

**a) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 2.**

**b) 1 Falta de carácter sustancial o de fondo: Conclusión 3.**

**c) Imposición de la sanción.**

(...)

**a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 2**

(...)

**b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: Conclusión 3.**

(...)

### **c) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

#### **Por lo que hace a las conclusiones 2 y 3.<sup>9</sup>**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

(...)

#### **Conclusión 2**

(...)

#### **Conclusión 3**

(...)

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

<b>Inciso</b>	<b>Conclusión</b>	<b>Tipo de conducta</b>	<b>Monto involucrado</b>	<b>Porcentaje de sanción</b>	<b>Monto de la sanción</b>
a)	2	Eventos Extemporáneos registrado extemporáneamente a su realización (conclusión 3)	N/A	10 UMA por evento (23 eventos)	\$17,362.70

---

<sup>9</sup> Se destaca que el órgano jurisdiccional determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por lo que dichos montos quedaron intocados y únicamente se elimina la sanción respecto de la **conclusión 6**.



Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
b)	3	Registro de operaciones en tiempo real	\$707.00	3%	Sin efectos
Total					\$17,362.70

(...)

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**<sup>10</sup>, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las conductas aquí analizadas es mayor al saldo referido en el cuadro, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Efraín Pérez Ramos** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **160 (ciento sesenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$12,078.40 (doce mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

<sup>10</sup> Cabe señalar que la capacidad económica del C. Efraín Pérez Ramos, ascendía a \$12,142.89 (doce mil ciento cuarenta y dos pesos 89/100 M.N.), esto derivado al informe de capacidad económica que presentó el entonces Candidato Independiente.

(...)

7. Que la sanción originalmente impuesta al candidato independiente el **C. Efraín Pérez Ramos**, en la Resolución **INE/CG301/2017**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG301/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-193/2017
<b>OCTOGÉSIMO QUINTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando <b>28.4.24</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Efraín Pérez Ramos, en su carácter de candidato independiente</b> las sanciones siguientes:  <b>a) 1 Falta de carácter formal: Conclusión 6.</b> <b>b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 2.</b> <b>c) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 3.</b>  Una multa equivalente a 160 (ciento sesenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de \$12,078.40 (doce mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.).	La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta derivada de la <b>conclusión 6</b> .	<b>OCTOGÉSIMO QUINTO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando <b>28.4.24</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Efraín Pérez Ramos, en su carácter de candidato independiente</b> las sanciones siguientes:  <b>a) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 2.</b> <b>b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 3.</b>  Una multa equivalente a <b>160 (ciento sesenta)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de <b>\$12,078.40 (doce mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)</b> .

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Efraín Pérez Ramos**, la siguiente sanción:

### **“R E S U E L V E**

(...)

**OCTOGÉSIMO QUINTO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 28.4.24 de la presente Resolución, se impone al **C. Efraín Pérez Ramos, en su carácter de candidato independiente**, las sanciones siguientes:

**a) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 2.**

**b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 3.**

Una **multa** equivalente a **160 (ciento sesenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a **\$12,078.40 (doce mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.)**.

(...).”

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG299/2017** y la Resolución **INE/CG301/2017**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, con relación a los Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, (Candidatos Independientes) en los términos precisados en los Considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la ciudad de Guadalajara, Jalisco dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-193/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **C. Efraín**

**Pérez Ramos** dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al otrora candidato independiente, **C. Efraín Pérez Ramos**, en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando ocho del presente Acuerdo, con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.

**QUINTO.** Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

**SÉPTIMO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**OCTAVO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG415/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-453/2017, INTERPUESTO POR EL C. ANTONIO AYÓN BAÑUELOS EN CONTRA DEL DICTAMEN CONSOLIDADO Y DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADOS CON LOS NÚMEROS INE/CG299/2017 E INE/CG301/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (CANDIDATOS INDEPENDIENTES).**

## **ANTECEDENTES**

**I. Aprobación del Dictamen Consolidado y Resolución** El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017**, que presentó la Comisión de Fiscalización del propio Instituto, sobre la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el once de agosto de dos mil diecisiete, el C. Antonio Ayón Bañuelos interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente del Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017**, radicada en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-453/2017**.

**III. Sentencia** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, determinando en el Punto Resolutivo **ÚNICO**, lo que se transcribe a continuación:

*“**ÚNICO.** Se **revoca**, en la parte correspondiente, la Resolución de campaña, para los efectos precisados en esta ejecutoria.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, si bien es cierto el recurso recurso de apelación SUP-RAP-453/2017 tuvo por efecto **revocar parcialmente la resolución INE/CG301/2017**, también lo es que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de la Resolución que se acata e interviene para los efectos ordenas por la Sala Superirom por lo que se procede a la modificación de ambos documentos. Por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c) y d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables, en consecuencia la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el catorce de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior resolvió revocar tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017**, respectivamente dictados por este Consejo General del Instituto

Nacional Electoral, por lo que hace al **C. Antonio Ayón Bañuelos**, por lo que se procede a la modificación de ambos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen Consolidado y la Resolución de mérito, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

**3. Alcances del cumplimiento.** Que por lo anterior y en razón al **estudio de fondo** de la sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-453/2017 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

### **III. ESTUDIO DE FONDO. (...)**

#### **Conclusión 10: Avisos extemporáneos de contratación.**

(…)

#### **Tesis de la decisión.**

*El agravio se considera **parcialmente fundado** por los siguientes motivos.*

*(...) de la transcripción de la temporalidad en la que el otrora candidato independiente presentó los avisos de contratación, se aprecia que le asiste la razón al apelante pues no en todos los casos detallados, la presentación del aviso de contratación excedió el plazo reglamentario de tres días. En específico son:*

*[Tabla]*

*En otras palabras, los avisos de contratación identificados como BAC03068, BAC03069, BAC03070, BAC05390, BC05874, BAC06697, fueron presentados en tiempo.*

*Por ello se concluye que la autoridad electoral motivó equivocadamente la determinación de sancionar por la presentación extemporánea de avisos de contratación, en la conclusión 10 del Dictamen consolidado.*

Consecuencia de lo expuesto, el agravio resulta **parcialmente fundado**.

(...)

#### **IV. EFECTOS DE LA SENTENCIA.**

1. En la conclusión 10, del apartado 3.9.1.1 Antonio Ayón Bañuelos, candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado de Nayarit del Dictamen consolidado; y en la conclusión 10, individualizada en el inciso a), del considerando 28.1.1, Antonio Ayón Bañuelos, **se deja sin efectos** lo relativo a los avisos de contratación siguientes:

<b>Folio</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Fecha presentación</b>	<b>Fecha firma según SIF</b>	<b>Días transcurridos</b>
BAC03068	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	2
BAC03069	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	2
BAC03070	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	2
BAC05390	Adrián Manuel Madrigal Mendoza	12/05/2017	10/05/2017	2
BAC05874	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	19/05/2017	17/05/2017	2
BAC06697	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	31/05/2017	31/05/2017	0

Por tanto se revoca la Resolución de campaña únicamente en este aspecto para el efecto de que la autoridad reindividualice la sanción.

(...)"

4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado como **SUP-RAP-453/2017**.

Al efecto, para la individualización e imposición de las sanciones se observará lo establecido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y reglas locales, prevaleciendo las Leyes Generales.

Es importante señalar que el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la determinación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) respecto del valor inicial diario de la Unidad de



Medida y Actualización, el cual será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país<sup>1</sup>, mismo que para el ejercicio 2017 corresponde a \$75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 M.N.).

Lo anterior de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

Cabe señalar que en el artículo tercero transitorio del decreto referido en el párrafo precedente establece *“A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización.”*

En este contexto, la referencia a “salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”, en las leyes generales y reglamentarias se entenderá como Unidad de Medida y Actualización; por lo que, en el presente Acuerdo, en los supuestos que se actualice la imposición de sanciones económicas en días de salario a los sujetos obligados, se aplicará la Unidad de Medida y Actualización (UMA's).

**5.** Que en tanto la Sala Superior dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen **INE/CG299/2017** y la Resolución identificada como **INE/CG301/2017**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.9.1.1, conclusión 10** del Dictamen Consolidado y Considerando **28.1.1, inciso a), conclusión 10** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior, materia del presente Acuerdo.

---

<sup>1</sup> De conformidad con el Punto Resolutivo PRIMERO de la Resolución del H. Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fijó los salarios mínimos generales y profesionales vigentes a partir del 1º de enero de 2016, publicada el pasado 18 de diciembre de 2015, *“para fines de aplicación de los salarios mínimos en la República Mexicana habrá una sola área geográfica integrada por todos los municipios del país y demarcaciones territoriales (Delegaciones) del Distrito Federal.”*

## 6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 10** del Dictamen Consolidado correspondiente al C. Antonio Ayón Bañuelos, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente la resolución impugnada, en la conclusión 10 que se precisa en la sentencia.	Se revoca parcialmente la resolución impugnada respecto de la conclusión 10.	<b>Conclusión 10:</b> Se considerar que 6 avisos de contratación fueron presentados dentro del plazo establecido por la UTF de modo que únicamente presentó de forma extemporánea 10 avisos de contratación.	En ese sentido, se modificó de 16 avisos de contratación presentados extemporáneamente a 10 avisos de contratación. Modificación que se impacta en el Dictamen y en la Resolución correspondientes

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el **Dictamen Consolidado** número INE/CG299/2017, así como la Resolución identificada con el número INE/CG301/2017, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingreso y Gastos de Campaña a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes), en la parte conducente al C. Antonio Ayón Bañuelos, en los términos siguientes:

### A. Modificación al Dictamen Consolidado

“(…)

#### 3.9.1.1 Antonio Ayón Bañuelos, candidato independiente al cargo de Gobernador

(...)

## Avisos de contratación

### Primer periodo

- ♦ El sujeto obligado omitió registrar en el SIF ingresos por aportaciones de simpatizantes, como se muestra en el cuadro:

<b>Póliza</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Importe</b>	<b>Fecha de presentación</b>	<b>Fecha de firma de contrato</b>
PNEG-P1-1/04-17	Graficas e Impresiones de ALICA SA de CV	\$10,440.00	8/04/2017	2/04/2017
PNEG-P1-2/04-17		39,672.00	8/04/2017	2/04/2017
PNEG-P1-9/04-17		13,456.00	26/04/2017	5/04/2017
PNEG-P1-10/04-17		99,292.52	26/04/2017	5/04/2017
PNEG-P1-11/04-17		4,185.28	26/04/2017	7/04/2017
<b>Total</b>		<b>\$167,045.80</b>		

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada, mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA-L/7507/17 de fecha 14 de mayo de 2017, notificado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 19 de mayo de 2017.

Escrito de respuesta sin número del 19 de mayo de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“3. Referente al apartado de errores y omisiones de AVISO DE CONTRATACIÓN; me permito informar y aclarar lo siguiente:*

*El artículo 18 del reglamento de fiscalización establece el momento contable en el que debe de registrarse las operaciones en su numeral 1 como a continuación se expone:*

*“los registros contables de las operaciones se deben hacer, en el caso de los ingresos, cuando estos se realizan, en el caso de los gastos, cuando estos ocurren.”*

*Es por ello, que los pagos pueden ocurrir en un momento, la facturación en otro tiempo y la elaboración del contrato en otro, de acuerdo a las circunstancias objetivas de la operación; haciendo referencia que de acuerdo a la Máxima del Derecho "NADIE SE ENCUENTRA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE".*

*Por otro lado, se encuentra sin fundamento legal, ya que el artículo 261 .del reglarnen.to de fiscalización del INE menciona la Obligación que tienen*

*los partidos , sin embargo, en este apartado no menciona nada relacionado a Candidatos Independientes, ni establece en sí los tres días que en su oficio hace mención, respecto de la extemporaneidad.”*

Del análisis al escrito, su respuesta se considera insatisfactoria, ya que el argumento acerca de los momentos de contratación, facturación y pagos pueden ser diversos; sin embargo, el aviso de contratación se relaciona con el contrato, no así con la factura ni el pago del bien o servicio, además la normatividad es clara al establecer que los sujetos obligados contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la presentación del aviso de contratación; razón por la cual, la observación **no quedó atendida**.

Al presentar en forma extemporánea un aviso de contratación, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 261 bis, numeral 1 del RF. **(Conclusión final 10).**

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-453/2017, la parte conducente de esta observación no fue revocada o modificada, por lo que esta observación queda intocada.

(...)

## Segundo periodo

- ♦ *El sujeto obligado presentó los avisos de contratación de gastos de forma extemporánea. Los casos se detallan en el cuadro siguiente:*

Folio	Proveedor	Fecha presentación	Fecha firma según SIF	Monto
BAC04647	Antonio Ayon Bañuelos	03/05/2017	02/04/2017	\$46,256.00
BAC03737	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$2,200.00
BAC03737	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$9,400.00
BAC04568	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	02/05/2017	07/04/2017	\$1,990.00
BAC03067	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$9,000.00
BAC03068	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$18,970.00
BAC03069	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$90,540.00
BAC03070	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$27,590.00

Folio	Proveedor	Fecha presentación	Fecha firma según SIF	Monto
BAC04638	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	03/05/2017	02/04/2017	\$9,170.00
BAC04646	Antonio Ayon Bañuelos	03/05/2017	02/04/2017	\$14,000.00
BAC03734	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$44,830.00
BAC03734	Graficas E Impresiones De Alica Sa de C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$40,770.00
BAC03063	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$11,400.00
BAC03063	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$22,800.00
BAC05390	Adrián Manuel Madrigal Mendoza	12/05/2017	10/05/2017	\$6,000.00
BAC03729	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	07/04/2017	\$3,608.00
BAC05874	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	19/05/2017	17/05/2017	\$2,100.00
BAC06697	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	31/05/2017	31/05/2017	\$5,568.90
<b>Total</b>				\$366,192.90

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada fue notificada, mediante el oficio de errores y omisiones núm. INE/UTF/DA-L/10301/17 de fecha 13 de junio de 2017, notificado el mismo día.

Fecha de vencimiento del oficio de errores y omisiones: 18 de junio de 2017.

Escrito de respuesta sin número del 17 de junio de 2017, el sujeto obligado manifestó lo que a la letra se transcribe:

*“12. Referente al aviso de contrataciones:*

- *Se anexan contratos que se encuentran reportados en tiempo y forma.*  
*Aclaración fundamentada: de acuerdo al título I del reglamento de fiscalización del INE, establece en su capítulo 1 en el artículo 17 en su apartado 1 lo siguiente:*  
*"se entiende que los sujetos obligados realizan las operaciones de ingresos cuando estos se reciben en especie. los gastos ocurren cuando se paga, cuando se pactan o cuando se reciben los bienes servicios, sin considerar el orden en el que se realicen, de conformidad con la NIF a2 "postulados Básicos"*  
*Por otro lado, el artículo 18 de la misma norma, menciona el momento contable en el que debe de registrarse las operaciones en su numeral 1 como a continuación se expone:*  
*"los registros contables de las operaciones se deben hacer, en el caso de los ingresos, cuando estos se realizan, en el caso de los gastos, cuando estos ocurren".*

*Es por ello, que los pagos pueden ocurrir en un momento, la facturación en otro tiempo y la elaboración del contrato en otro, de acuerdo a las circunstancias objetivas de la operación; haciendo referencia que de acuerdo a la Máxima del Derecho "NADIE SE ENCUENTRA OBLIGADO A LO IMPOSIBLE".*

*Por otro lado, se encuentra sin fundamento legal, ya que el artículo 261 del reglamento de fiscalización del INE, menciona la obligación que tienen los partidos, sin embargo, en este apartado no menciona nada relacionado a Candidatos Independientes, ni establece en SÍ los tres días que en su oficio hace mención, respecto de la extemporaneidad."*

Del análisis al escrito, su respuesta se considera insatisfactoria, ya que el argumento acerca de los momentos de contratación, facturación y pagos pueden ser diversos; sin embargo, el aviso de contratación se relaciona con el contrato, no así con la factura ni el pago del bien o servicio, además la normatividad es clara al establecer que los sujetos obligados contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la presentación del aviso de contratación; razón por la cual, la observación **no quedó atendida**.

Al presentar en forma extemporánea 15 avisos de contratación por un importe de \$366,192.90, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 261 bis, numeral 1 del RF. **(Conclusión final 10)**.

Ahora bien, tomando en cuenta las consideraciones y razonamientos hechos por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ejecutoria, identificada con el número de expediente SUP-RAP-453/2017, se determinó lo siguiente:

En cuanto al **segundo periodo**, el sujeto obligado presentó los avisos de contratación de los gastos siguientes:

Folio	Proveedor	Fecha presentación	Fecha firma según SIF	Monto	Ref. Acatamiento SUP-RAP-453/2017
BAC04647	Antonio Ayon Bañuelos	03/05/2017	02/04/2017	\$46,256.00	2
BAC03737	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$2,200.00	2
BAC03737	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$9,400.00	2
BAC04568	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	02/05/2017	07/04/2017	\$1,990.00	2
BAC03067	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$9,000.00	2

Folio	Proveedor	Fecha presentación	Fecha firma según SIF	Monto	Ref. Acatamiento SUP-RAP-453/2017
BAC03068	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$18,970.00	1
BAC03069	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$90,540.00	1
BAC03070	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	08/04/2017	06/04/2017	\$27,590.00	1
BAC04638	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	03/05/2017	02/04/2017	\$9,170.00	2
BAC04646	Antonio Ayon Bañuelos	03/05/2017	02/04/2017	\$14,000.00	2
BAC03734	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$44,830.00	2
BAC03734	Graficas E Impresiones De Alica Sa de C.V.	26/04/2017	05/04/2017	\$40,770.00	2
BAC03063	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$11,400.00	2
BAC03063	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	08/04/2017	02/04/2017	\$22,800.00	2
BAC05390	Adrián Manuel Madrigal Mendoza	12/05/2017	10/05/2017	\$6,000.00	1
BAC03729	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	26/04/2017	07/04/2017	\$3,608.00	2
BAC05874	Graficas E Impresiones De Alica Sa De C.V.	19/05/2017	17/05/2017	\$2,100.00	1
BAC06697	Manuel Alberto Rodríguez Moreno	31/05/2017	31/05/2017	\$5,568.90	1
<b>Total</b>				\$366,192.90	

Por lo que hace a los avisos de contratación identificados en la columna “**Ref. Acatamiento SUP-RAP-453/2017**” con el número **1** fueron presentados en tiempo, por lo que la observación **quedó atendida**. Respecto a los avisos de contratación identificados con el número **2** fueron presentados en un plazo posterior a los tres días en que se suscriban los contratos que marca la normatividad, para presentar el avisó de contratación, razón por la cual, la observación **quedó no atendida**.

Al presentar en forma extemporánea 9 avisos de contratación el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 261 bis, numeral 1 del RF. **(Conclusión final 10).**

(...)

**Conclusiones de la revisión a los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Gobernador, presentados por el sujeto obligado, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.**

(...)

### **Avisos de contratación**

10. El sujeto obligado presento en forma extemporánea 10 avisos de contratación.

Periodo	Avisos
1	1
2	9
Total	10

Tal situación incumple lo dispuesto en el artículo 261 bis, numeral 1 del RF.

(...)

### **B. Modificación a la Resolución.**

Previo a la modificación, resulta de vital importancia destacar que el órgano jurisdiccional determinó confirmar ocho irregularidades más en las que incurrió el **C. Antonio Ayón Bañuelos**, por lo que dichos montos quedaron intocados.

Adicionalmente, por lo que hace a la **conclusión 10**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, únicamente ordenó no considerar 6 avisos de contratación como extemporáneos, sin embargo la observación y sanción persisten.

Por lo anterior, la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente SUP-RAP-453/2017 las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG301/2017 relativas al **C. Antonio Ayón Bañuelos**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte conducente del Considerando **28.1.1**, inciso **a)** relativo a la conclusión **10**, en los términos siguientes:

#### **28.1.1 C. ANTONIO AYÓN BAÑUELOS.**

(...)

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión



del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017 en el estado de Nayarit, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el candidato independiente son las siguientes:

- a) 4 Faltas de carácter formal: **Conclusiones (...) 10 y (...).**
- b) (...)
- c) (...)
- d) (...)
- e) Imposición de la sanción.

(...)

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

- a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. **Conclusiones (...), 10 y (...).**

No.	Conclusión	Normatividad vulnerada								
(...)	(...)	(...)								
(...)	(...)	(...)								
10	10. El sujeto obligado presento en forma extemporánea 10 avisos de contratación. <table><tr><td>Periodo</td><td>Avisos</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>2</td><td>9</td></tr><tr><td>Total</td><td>10</td></tr></table>	Periodo	Avisos	1	1	2	9	Total	10	Artículo 261 bis, numeral 1 del RF.
Periodo	Avisos									
1	1									
2	9									
Total	10									
(...)	(...)	(...)								

De las faltas descritas en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso d), fracción III de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos

Electoral y 291, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del candidato independiente, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de cinco días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

Es importante señalar que la actualización de las faltas formales no acreditan una afectación a valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización, si no únicamente representan infracciones en la rendición de cuentas, en este sentido, la falta de entrega de documentación requerida y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de los sujetos obligados no representan un indebido manejo de recursos.<sup>2</sup>

## **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida por un sujeto obligado, y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.

---

<sup>2</sup> Criterio orientador dictado en la sentencia de 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado en el expediente SUP-RAP-62/2005, por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado, de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

En razón de lo anterior, en este apartado se analizará en un primer momento, los elementos para calificar la falta y, posteriormente, los elementos para individualizar la sanción.

## **CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

En este orden de ideas, en el cuadro siguiente en la columna identificada como **(1)** se señalan cada una de las irregularidades cometidas por el sujeto obligado, en la columna **(2)** se indica si se trata de una omisión o una acción y en la columna **(3)** la norma vulnerada.<sup>3</sup>

Descripción de la Irregularidad observada (1)	Acción u omisión (2)	Normatividad vulnerada (3)
(...)		
(...)		
10. El sujeto obligado presento en forma extemporánea 10 avisos de contratación.	Omisión	Artículo 261 bis, numeral 1 del RF
(...)		

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El sujeto obligado incurrió en las irregularidades señaladas en el cuadro que antecede, identificadas con el número **(1)**, contraviniendo, en cada caso, la normatividad señalada en la columna **(3)**.

<sup>3</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003.

**Tiempo:** Las irregularidades atribuidas al sujeto obligado surgieron del estudio a través del procedimiento de revisión de los informes de campaña, correspondientes al Proceso Electoral en el estado de Nayarit.

**Lugar:** La irregularidad se actualizó en el estado de Nayarit.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer las faltas referidas y con ello, obtener el resultado de la comisión de irregularidades mencionadas con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Es importante señalar que con la actualización de faltas formales no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.

Lo anterior se confirma, ya que con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas, así como los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, se viola el mismo valor común y se afecta a la misma persona jurídica indeterminada (la sociedad), por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, esto es, se impide y obstaculiza la adecuada fiscalización del financiamiento de los sujetos obligados<sup>4</sup>.

En las conclusiones (...), **10** y (...) el candidato independiente en comento vulneró lo dispuesto en los artículos 33, numeral 1, inciso i); 204; 246, numeral 1, inciso

---

<sup>4</sup> En la sentencia dictada el 22 de diciembre de 2005, en el recurso de apelación identificado con el expediente SUP-RAP-62/2005, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación señala textualmente:

*"En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, y los errores en la contabilidad y documentación soporte de los ingresos y egresos de las agrupaciones políticas, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, **porque con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos**, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas.*

*En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad **por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público**, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financiamiento de la agrupación."*

e); 261 bis, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, mismos que a la letra señalan:

**Reglamento de Fiscalización**

**“Artículo 33.**

**Requisitos de la contabilidad**

1. *La contabilidad de los sujetos obligados, deberá observar las reglas siguientes:*

*(...)*

*i) Si de la revisión desarrollada por la autoridad se determinan errores o reclasificaciones deberán realizarlas en sus registros contables dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación. Si las aclaraciones o rectificaciones realizadas no se subsanan, las aplicaciones en la contabilidad se deberán realizar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de notificación. Tratándose de revisión de informes de precampaña o campaña, se deberán realizar de acuerdo a los plazos otorgados en los propios oficios de errores y omisiones, es decir, siete o cinco días, según corresponda en términos de lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Partidos.*

*(...)”*

**“Artículo 204.**

**Propaganda utilitaria**

1. *Los gastos de propaganda utilitaria comprenden los artículos promocionales utilitarios que contengan imágenes, signos, emblemas y expresiones que tengan por objeto difundir la imagen y propuestas del partido político, coalición, precandidatos, aspirantes, candidatos o candidatos independientes beneficiados, los cuales sólo podrán ser elaborados con material textil, estos pueden ser: banderas, banderines, gorras, camisas, playeras, chalecos, chamarras, sombrillas, paraguas y otros similares elaborados con material textil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209, numerales 3, 4 y 5 de la Ley de Instituciones.*

2. *Los gastos señalados en el numeral anterior deberán cumplir con lo establecido en el artículo 76, numeral 1, incisos e), f) y g) de la Ley de Partidos.”*

**“Artículo 246.**

**Documentación anexa de informes presentados**

1. *Junto con los informes de campaña deberán adjuntarse a través del Sistema de Contabilidad en Línea:*

*(...)*

e) *En el caso de la propaganda colocada en las páginas de Internet y redes sociales, tales como banners, videos, spots publicitarios, y otras similares, los contratos y facturas correspondientes, junto con los registros contables correspondientes. Además deberá presentar una relación, impresa y en medio magnético que detalle lo siguiente:*

*I. La empresa o empresas con las que se contrató la elaboración y exhibición de la propaganda.*

*II. Las fechas en las que se colocó la propaganda.*

*III. Las direcciones electrónicas o en su caso los dominios en los que se colocó la propaganda.*

*IV. El número de póliza de diario con la que se creó el pasivo correspondiente.*

*V. El valor unitario de cada tipo de propaganda colocada, así como el Impuesto al Valor Agregado de cada uno de ellos.*

*VI. El candidato, y la campaña beneficiada con la propaganda colocada.*

*VII. Las muestras del contenido de la propaganda colocada en Internet.*

*(...)”*

#### **“Artículo 261 Bis.**

##### **Especificaciones para la presentación de avisos de contratación**

*1. Los sujetos obligados durante precampañas y campañas contarán con un plazo máximo de tres días posteriores a la suscripción de los contratos, para la presentación del aviso de contratación, previa entrega de los bienes o a la prestación del servicio de que se trate.*

*Los bienes y servicios contratados que tengan como finalidad la precampaña o campaña y sean contratados antes del inicio de los periodos de precampaña o campaña y por los cuales deba presentarse un aviso de contratación, deberán avisarse en un plazo máximo de seis días naturales siguientes al inicio del periodo que corresponda a cada cargo de elección.*

*Cuando con el ejercicio ordinario concurren procesos electorales, los avisos de contratación que correspondan al ejercicio ordinario, se deberán presentar en el plazo a que se refiere el primer párrafo del presente artículo.*

*2. Los sujetos obligados en los procesos electorales y el ejercicio ordinario, deberán presentar aviso de contratación en los casos siguientes:*

*a) Contratación de todo tipo de propaganda incluyendo la utilitaria y publicidad, así como espectáculos, cantantes y grupos musicales, sin importar el monto de la contratación.*

*b) Cuando el monto de lo contratado supere las 1,500 UMA en bienes y servicios contratados para la realización de eventos, distintos a los descritos en el inciso a).*

*Para determinar el monto superior a las mil quinientas UMA, se deberá considerar el monto total pactado en el contrato.*

*3. Los sujetos obligados que así lo deseen, podrán presentar los avisos de contratación que celebren, independientemente del monto y del bien o servicio contratado.*

*4. Cuando exista modificación a los contratos enviados el sujeto obligado deberá presentar a través del aplicativo, el aviso modificatorio correspondiente dentro de los tres días siguientes a la fecha en la que se suscriba el convenio modificatorio.*

*En todos los casos se deberá adjuntar el contrato, con las firmas autógrafas, y deberá contener al menos la información establecida en el artículo 62, numeral 2, de la Ley de Partidos.”*

De la valoración de los artículos señalados, se contemplan disposiciones cuya finalidad es que la Unidad Técnica de Fiscalización tenga conocimiento del debido control contable de las operaciones que el sujeto obligado, realice, es decir, los ingresos y egresos reportados deberán acreditarse conforme a la documentación establecida en el reglamento, acuerdos, manuales o Lineamientos emitidos para ello, por la autoridad, lo anterior con el objeto de contar con los elementos idóneos para llevar a cabo la función de la fiscalización.

La normatividad arriba trasunta constituye el instrumento jurídico a través del cual los sujetos obligados deben rendir cuentas respecto del origen, destino y aplicación de recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, coadyuvando a que la autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Al respecto, debe señalarse que el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las diversas funciones que le fueron encomendadas a la autoridad fiscalizadora, a fin de que ejecute sus facultades de revisión, comprobación e investigación, que tienen por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados. Ello implica tener certeza del origen y destino de los recursos que los sujetos obligados utilizan como parte de su financiamiento.

En este orden de ideas, por lo que hace a los ingresos, los sujetos obligados tienen dos deberes: 1) Registrar contablemente todos los ingresos que reciban a través de financiamiento público o privado, ya sea en efectivo o en especie y, 2) Acreditar la veracidad de lo registrado con la documentación soporte establecida para ello en cumplimiento a los requisitos señalados para su comprobación, para que la autoridad fiscalizadora pueda verificar con certeza que cumplan en forma transparente con la normativa establecida para la rendición de cuentas.

Así, se tiene como propósito fijar las reglas de control a través de las cuales se aseguren los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, por ello se establece la obligación de registrar contablemente y sustentar con documentación original la totalidad de los ingresos que reciban los sujetos obligados por cualquier clase de financiamiento, especificando su fuente legítima.

Por otro lado, de la misma manera se establecen obligaciones respecto a sus egresos, consistentes en: 1) El deber de los sujetos obligados de registrar contablemente los gastos realizados; 2) Soportar todos los egresos con documentación original que se expida a nombre del sujeto obligado, por parte de los proveedores o prestadores de servicios a quienes el ente efectuó el pago; 3) La obligación de entregar la documentación con los requisitos fiscales que exigen las disposiciones aplicables y, 4) Los registros deberán hacerse en términos de la normatividad de la materia.

En síntesis, la norma señalada regula, entre otras, la obligación de los candidatos independientes de realizar bajo un debido control el registro de sus actividades, toda vez que las mismas se encuentran vinculadas con sus egresos, consecuentemente en ejercicio de sus atribuciones de verificación, la autoridad fiscalizadora puede solicitar en todo momento la presentación de dicha documentación, con la finalidad de comprobar la veracidad de lo reportado en sus informes. De esta manera, se otorga seguridad, certeza y transparencia a la autoridad electoral en su actividad fiscalizadora.

Lo anterior, para lograr un orden y control adecuado de las operaciones contables llevadas a cabo por los sujetos obligados y permitir que realicen el registro de sus operaciones de forma clara.

Del análisis anterior, se concluye que con la inobservancia de los artículos referidos no se vulnera directamente los principios de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, ya que, únicamente se trata de la puesta en peligro de los principios en comento, sin que ello obstaculice la facultad de revisión de la



autoridad electoral, esto es, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo certeza respecto a las actividades realizadas por el candidato independiente, así como del origen, destino y aplicación de los recursos utilizados por el sujeto obligado, máxime que no se vio impedida para llevar a cabo la revisión a los ingresos y egresos de origen público o privado del candidato independiente.

En consecuencia, el incumplimiento de las citadas disposiciones, únicamente constituye una falta de cuidado del sujeto obligado al rendir cuentas, toda vez que dicha norma ordena un correcto registro de los eventos que se lleven a cabo por parte del sujeto obligado, a través del sistema Integral de Fiscalización, y exhibir toda la documentación soporte, de conformidad con el precepto previamente citado.

Esto es, se trata de diversidad de conductas e infracciones las cuales solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, consistente en el adecuado control de recursos, sin afectarlo directamente, lo cual trae como resultado el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas de manera adecuada de los recursos de los entes políticos.

Así, es deber de los candidatos independientes informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los candidatos independientes, rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, derivada de la revisión del Informe de los ingresos y gastos de Campaña en el marco del Proceso Electoral mencionado, por sí misma constituye una mera falta formal, porque con esa infracción no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación del adecuado control en la rendición de cuentas.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto, deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobación las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto), evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

El bien jurídico tutelado por las diversas normas infringidas por distintas conductas, es el adecuado control en la rendición de cuentas de los recursos de los entes políticos, por lo que la infracción expuesta en el apartado del análisis temático de las irregularidades reportadas en el Dictamen Consolidado, consistentes en los errores en la contabilidad y formatos, así como la falta de presentación de la totalidad de la documentación soporte de los ingresos y egresos del sujeto obligado, no se acredita la vulneración o afectación al aludido bien jurídico protegido, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de un adecuado control, vulnerando el principio del adecuado control de rendición de cuentas.

En ese entendido, en el presente caso las irregularidades se traducen en conductas infractoras imputables al ente político, la cual puso en peligro (peligro abstracto) el bien jurídico tutelado al vulnerar el principio, consistente en el adecuado control de rendición de cuentas.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que sólo contribuye a agravar el reproche, pero no con la máxima intensidad con la que podría contribuir.

**f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.**

El sujeto obligado cometió irregularidades que se traducen en la existencia de **FALTAS FORMALES**, en las que se viola el mismo valor común, toda vez que,

como se expuso en el inciso d), solamente configuran un riesgo o peligro de un solo bien jurídico, el adecuado control de recursos, sin que exista una afectación directa.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis de las irregularidades ya descritas, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

**Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que las conductas deben calificarse como **LEVES**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso e) del presente considerando.

(...)

**e) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

**Por lo que hace a las conclusiones (...), (...), (...), (...), (...), (...), 10, (...) y (...).**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, deberá ser acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.

Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, y 4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a las infracciones cometidas por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

**a) Conclusiones (...), (...), 10 y (...).**

- Que las faltas se calificaron como **LEVES**.
- Que con la actualización de faltas formales, no se acredita la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización del sujeto obligado, sino únicamente su puesta en peligro.
- Que el candidato independiente conocía los alcances de las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos referidos.
- Que el candidato independiente, no es reincidente.
- Que aun cuando no hay elementos para considerar que la conducta infractora fue cometida con intencionalidad o dolo, sí se desprende falta de cuidado por parte del candidato independiente, para dar cabal cumplimiento a las obligaciones establecidas por el reglamento de la materia.

**b) Conclusión 3.**

(...)

**c) Conclusión 7.**

(...)

**c) Conclusión 8.**

(...)

### **c) Conclusión 12.**

(...)

### **d) Conclusión 9.**

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales<sup>5</sup>.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el candidato independiente se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de las faltas y las circunstancias particulares del caso.

---

<sup>5</sup> "(...) d) Respecto de los Candidatos Independientes: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal; III. Con la pérdida del derecho del candidato independiente infractor a ser registrado como Candidato Independiente o, en su caso, si ya hubiera sido registrado, con la cancelación del mismo; IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos tendientes a recabar el apoyo ciudadano, no podrá ser registrado en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable, y V. En caso de que el Candidato Independiente omita informar y comprobar a la unidad de fiscalización del Instituto los gastos de campaña y no los reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de las responsabilidades que, en su caso, le resulten en términos de la legislación aplicable. (...)")

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	2, 5, 10 <sup>6</sup> y 11	Formas	N/A	40 UMA'S (10 UMA'S por conclusión)	\$3,019.60
b)	3	Eventos registrados con posterioridad a su realización	N/A	660 (10 UMA'S por cada evento posterior)	\$49,823.40
c)	7	Egreso no reportado	\$230,163.32	140%	\$322,191.32
c)	8	Egreso no reportado	\$115,081.66	140%	\$161,095.66
c)	12	Egreso no reportado	\$34,427.39	140%	\$48,162.62
d)	9	Operaciones fuera de tiempo real	\$129,879.40	3%	\$3,849.99
<b>Total</b>					<b>\$588,142.59<sup>7</sup></b>

<sup>6</sup> Ahora bien, para el caso concreto resulta relevante advertir que el **monto involucrado** no es un elemento relevante para determinar el monto de la sanción en las faltas formales, sino que existen distintos parámetros que se consideran al momento de imponerla, debiendo atenderse a la naturaleza de las faltas implicadas, por lo que la autoridad al momento de individualizar la sanción debe considerar otros elementos.

Así, al individualizar la sanción respectiva, se tomó en cuenta la necesidad **de desaparecer los efectos o consecuencias de la conducta infractora**. Ahora bien, en el caso concreto, se tratan de faltas formales que solamente se califican como faltas leves, aunado a que la observación en sí misma persiste, lo único que el órgano jurisdiccional dejó sin efectos fue 6 avisos de contratación que no fueron presentados de forma extemporánea, pero la irregularidad quedó intocada respecto de 10 avisos de contratación.

<sup>7</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete.

Cabe referir que los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, son aplicables *mutatis mutandis*, al derecho administrativo sancionador electoral, porque ambos son manifestaciones del *ius puniendi* estatal. Estos principios deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas.

Al respecto, el artículo 14 párrafo tercero, establece el principio de exacta aplicación de la ley, al señalar que “*En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una Ley exactamente aplicable al delito de que se trata*”; esto es, la ley de manera previa, clara y descriptiva debe contemplar la conducta infractora y su respectiva consecuencia jurídica.

Para el caso concreto de los candidatos independientes, el artículo 456, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece las consecuencias jurídicas a que puede hacerse acreedor un candidato al infringir la normatividad de la materia, señalando como máximo una multa de **5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización**.

En consecuencia, puesto que la sanción a imponer en el presente caso supera el monto máximo que la legislación establece para los candidatos independientes, con el ánimo de cumplir con los principios de legalidad y exacta aplicación de la ley previstos en la norma fundamental del país, se estima que lo procedente es fijar la sanción al monto máximo previsto en la norma, es decir, una multa equivalente a **5,000 (cinco mil) Unidades de Medida y Actualización**.

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del sujeto infractor, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, con el fin de recabar la información necesaria **y actual** para comprobar la capacidad económica del sujeto infractor esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/6527/2018 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado correspondientes a los meses transcurridos del año dos mil diesciocho.

En este sentido, mediante oficio 214-4/7425676/2018, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta de los meses de noviembre de 2017 a enero de 2018, de la cuenta bancaria radicada en la institución bancaria denominada HSBC México, a nombre del C. Antonio Ayón Bañuelos, informando lo siguiente:

Institución Bancaria	Mes	Saldo final
HSBC México	Noviembre (2017)	\$1,133,167.55
	Diciembre (2017)	\$1,200,000.00
	Enero (2018)	\$1,200,000.00

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 se considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la capacidad económica del aspirante, con la finalidad de conocer la capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se cuenta, el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el documento que permite tener una capacidad **real y actual** del aspirante infractor, por lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará como



base la información contenida en el estado de cuenta del mes de enero de 2018<sup>8</sup>, el cual reporta un saldo final de **\$1,200,000.00 (un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.)**.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del sujeto obligado**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de justicia del país, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica, por lo que se obtienen la siguientes cantidades.

Saldo final (A) 31 de enero de 2017	Capacidad Económica (30% de A)
\$1,200,000.00	\$360,000.00

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato y tomando en consideración que la imposición de la sanción correspondiente a las

---

<sup>8</sup> Lo anterior, en razón que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta un retraso natural supeditado al flujo de datos que las entidades del sector financiero proporcionan a la misma, de esta forma, resulta pertinente tomar en consideración la información que comprende el último trimestre fiscal, a efecto de dar celeridad a lo mandatado por el órgano jurisdiccional.

conductas aquí analizadas es mayor al saldo máximo a imponer a un Candidato Independiente, este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Antonio Ayón Bañuelos** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **4,768 (cuatro mil setecientos sesenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$359,936.32 (trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos 32/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Que las sanciones originalmente impuestas al otrora candidato independiente, en la Resolución **INE/CG301/2017** consistieron en:

Nombre	Cargo	Monto de la sanción impuestas en el INE/CG301/2017	Sentencia que se acata	Sanciones en Acatamiento a la sentencia correspondiente
Antonio Ayón Bañuelos	Gobernador	\$377,450.00 (trescientos setenta y siete mil cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N.)	SUP-RAP-453/2017	\$359,936.32 (trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos 32/100 M.N.).

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **otrora Candidato Independiente C. Antonio Ayón Bañuelos**, la siguiente sanción:

## “R E S U E L V E

(...)

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **28.1.1** de la presente Resolución, se impone al **C. ANTONIO AYÓN BAÑUELOS**, en su **carácter de a candidato independiente**, las sanciones siguientes:

- a) 4 Faltas de carácter formal: **Conclusiones (...), (...), 10 y (...).**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión (...).**
- c) 3 Faltas de carácter sustancial: **Conclusiones (...), (...) y (...).**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión (...).**

Una **multa** equivalente a **4,768 (cuatro mil setecientos sesenta y ocho)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$359,936.32 (trescientos cincuenta y nueve mil novecientos treinta y seis pesos 32/100 M.N.).**

(...)”

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG299/2017** y la Resolución **INE/CG301/2017**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, con relación a los Informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputado Local, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit, (Candidatos Independientes) en los términos precisados en los considerandos **6, 7 y 8** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-453/2017**, remitiéndole para ello las constancias atinentes.

**TERCERO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **C. Antonio Ayón Bañuelos** dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**. Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Superior y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento del Consejo Estatal Electoral de Nayarit, a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas al otrora candidato independiente, **C. Antonio Ayón Bañuelos**, en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando ocho del presente Acuerdo, con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.

**QUINTO.** Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

**SÉPTIMO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**OCTAVO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-35/2017, INTERPUESTO POR EL C. JUAN MANUEL HERMOSILLO MATIARENA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG170/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO DE LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE DIPUTADOS LOCALES, PRESIDENTES MUNICIPALES Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT**

## **A N T E C E D E N T E S**

**I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución.** El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión ordinaria la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen Consolidado INE/CG169/2017, de los informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, identificada como INE/CG170/2017.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el dos de junio de dos mil diecisiete, el C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG170/2017**, radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), en el expediente identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-35/2017**.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, determinando en el resolutivo primero, lo que a continuación se transcribe:

*“**PRIMERO.** Se **revocan parcialmente** la resolución impugnada, conforme a lo precisado en la presente ejecutoria.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SG-RAP-35/2017, si bien es cierto, tuvo por efecto **únicamente revocar parcialmente la resolución INE/CG170/2017**, también es cierto que el Dictamen Consolidado forma parte de la motivación de la Resolución que por esta vía se acata e interviene para los efectos ordenados por la Sala Regional, por lo que con fundamento en los artículos 425; 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; por lo que, la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## **C O N S I D E R A N D O**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit.

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el veintiocho de junio de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar únicamente la resolución INE/CG170/2017, no obstante lo anterior los efectos de la ejecutoria que por esta

vía se acata de igual manera impacta en el Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG169/2017, ambos emitidos por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace al aspirante a candidato independiente, C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, en tal sentido se procede a la modificación de dichos documentos, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar el Dictamen y Resolución referidos, observando a cabalidad las bases establecidas en las referidas ejecutorias.

**3. Alcances del cumplimiento.** Que por lo anterior y en razón del Considerando TERCERO de la sentencia identificada con las clave alfanumérica SG-RAP-35/2017, relativo al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

*“**TERCERO. Estudio de fondo.** Del análisis de la demanda se advierte que el recurrente expresa esencialmente los siguientes motivos de disenso:*

*(...)*

***Incongruencia y retraso en la habilitación del SIF.***

*(...)*

*Se estima **parcialmente fundado** el presente motivo de disenso únicamente por lo que ve a la incongruencia que alude el actor respecto a la fecha en que recibió las claves de acceso al SIF, ello porque al margen de señalar que la contradicción en los días se encuentra en las páginas 2, 3 y 5 de la revisión del informe de apoyo ciudadano y no adjuntar dicho documento, lo cierto es que sí presentó los escritos de la aprobación de su candidatura donde se advierte que ésta se dio el veintiséis de marzo y no el veintitrés como lo afirma la autoridad responsable.*

*Así, dado que la autoridad responsable no demostró haber entregado la cuenta y clave de acceso en la fecha que indicó —veintitrés de abril de dos mil diecisiete— y el actor presentó documentos que, al menos indiciariamente acreditan que tal suceso se dio por lo menos el veintiséis del mismo mes, atendiendo al principio indubio pro civitatis (en caso de duda estar a favor del ciudadano) es que se concede razón al actor respecto al momento en que recibió dichas claves.*

(...)

*Por el contrario, respecto a la conclusión 3, debemos tener presente que si dichas claves fueron entregadas el veintiséis de marzo y, conforme al artículo 143 Bis del RF el registro de la agenda política se tiene que realizar el primer día hábil de cada semana y con una antelación de al menos siete días a la fecha en que se lleven a cabo, lo cual apunta que el lunes veintisiete de marzo fue el primer día hábil en que el candidato pudo iniciar el registro de sus eventos, de manera que, los eventos del propio veintisiete al tres de abril no debieron ser sancionados (...)*

*Atento a lo anterior, resultaba correcto que no debió ser sancionado por los eventos que omitió registrar antes del cuatro de abril pues le era imposible que sus registros se realizaran con siete días de antelación a la fecha en que se celebraron (...)*

*Consecuentemente, lo procedente conforme a derecho es revocar la Resolución para el efecto de que la autoridad responsable proceda a individualizar la sanción que le corresponde al actor sin tomar en cuenta los once eventos políticos que fueron realizados entre el treinta y uno de marzo y el tres de abril.*

(...)

#### **Efectos.**

*Al haberse demostrado que la cuenta y clave de acceso al SIF del actor fueron entregadas un día antes del inicio del periodo para la obtención de apoyo, lo conducente es **REVOCAR** la resolución reclamada para el efecto de que la autoridad responsable proceda a individualizar la sanción que le corresponde al actor sin tomar en cuenta los **once eventos** políticos que fueron realizados entre el treinta y uno de marzo y el tres de abril.*

*Cabe precisar que, si bien la sanción originalmente impuesta al recurrente fue disminuida en poco más del cincuenta y siete por ciento en virtud de su capacidad económica; a fin de que la presente revocación tenga un impacto real en la esfera jurídica del sujeto sancionado y conforme al principio de non reformatio in peius (no reformar para empeorar), debe precisarse que la nueva sanción que, en su caso imponga debe reducirse en igual proporción, aun cuando ésta resulte inferior a su capacidad de pago.”*



4. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.

5. **Alcances de la revocación.** Que de la lectura del SG-RAP-35/2017, se desprende que la Sala Regional dejó intocadas las demás consideraciones que sustentan el Dictamen **INE/CG169/2017** y la Resolución identificada como **INE/CG170/2017**, este Consejo General únicamente se abocará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el apartado **3.2.20, conclusión 3** del Dictamen Consolidado y Considerando **29.4.2, conclusión 3** de la respectiva Resolución, en cumplimiento a lo expresamente ordenado, para el efecto de que la autoridad responsable proceda a individualizar la sanción que le corresponde al actor sin tomar en cuenta los once eventos que fueron realizados entre el treinta y uno de marzo y el tres de abril de dos mil diecisiete, así como disminuir en un cincuenta y siete por ciento la sanción que resulte, aun cuando esta sea inferior a su capacidad de pago.

#### 6. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a la **conclusión 3** del Dictamen Consolidado correspondiente al **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, esta autoridad electoral emite una nueva determinación.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la sentencia:

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
Revoca parcialmente la resolución impugnada, en la <b>conclusión 3</b> que se precisa en la sentencia.	Se revoca parcialmente la resolución impugnada respecto de la <b>conclusión 3</b> .	<b>Conclusión 3:</b> Se deja <b>sin efectos</b> , once de los eventos sancionados derivado de los argumentos vertidos por la Sala Regional, toda vez que el aspirante estuvo imposibilitado para cumplir en tiempo	En el Dictamen y en la Resolución.

Sentencia	Efectos	Acatamiento	Modificación
		con su obligación. Adicionalmente, se debe considerar el principio <i>non reformato in peius</i> y disminuir en un cincuenta y siete por ciento la sanción.	

Derivado de la valoración realizada en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General modifica el **Dictamen Consolidado** número INE/CG169/2017, así como la Resolución identificada con el número INE/CG170/2017, relativa a las irregularidades encontradas respecto de la revisión de los Informes de Ingreso y Gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano de los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Presidentes Municipales y Regidores, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit, en la parte conducente al **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, en los términos siguientes:

#### A. Modificación al Dictamen Consolidado.

##### “3.2.20 Juan Manuel Hermosillo Matiarena, aspirante al cargo de Presidente Municipal.

(...)

#### Revisión de Gabinete

#### Agenda

(...)

- ◆ *El sujeto obligado registró 29 eventos fuera del plazo de siete días de antelación a su realización, como se muestra en el siguiente cuadro:*

Consecutivo	Nombre del Evento	Fecha del evento	Fecha de registro	Días Previos al evento
1	Recorrido casa por casa	06/04/2017	31/03/2017	6
2	Apoyo ciudadano casa por casa	11/04/2017	05/04/2017	6
3	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5

<b>Consecutivo</b>	<b>Nombre del Evento</b>	<b>Fecha del evento</b>	<b>Fecha de registro</b>	<b>Días Previos al evento</b>
4	Apoyo ciudadano casa por casa	07/04/2017	05/04/2017	2
5	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5
6	Recorrido casa por casa	01/04/2017	31/03/2017	1
7	Recorrido casa por casa	03/04/2017	31/03/2017	3
8	Apoyo ciudadano casa por casa	09/04/2017	05/04/2017	4
9	Apoyo ciudadano casa por casa	08/04/2017	05/04/2017	3
10	Apoyo ciudadano casa por casa	11/04/2017	05/04/2017	6
11	Apoyo ciudadano	06/04/2017	05/04/2017	1
12	Apoyo ciudadano casa por casa	07/04/2017	05/04/2017	2
13	Apoyo ciudadano casa por casa	09/04/2017	05/04/2017	4
14	Recorrido casa por casa	01/04/2017	31/03/2017	1
15	Recorrido casa por casa	02/04/2017	31/03/2017	2
16	Recorrido casa por casa	03/04/2017	31/03/2017	3
17	Recorrido casa por casa	04/04/2017	31/03/2017	4
18	Recorrido casa por casa	04/04/2017	31/03/2017	4
19	Apoyo ciudadano casa por casa	05/04/2017	05/04/2017	0
20	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5
21	Recorrido casa por casa	01/04/2017	31/03/2017	1
22	Recorrido casa por casa	31/03/2017	31/03/2017	0
23	Recorrido casa por casa	01/04/2017	31/03/2017	1
27	Recorrido casa por casa	02/04/2017	31/03/2017	2
25	Recorrido casa por casa	05/04/2017	31/03/2017	5
26	Recorrido casa por casa	05/04/2017	31/03/2017	5
27	Recorrido casa por casa	06/04/2017	31/03/2017	6
28	Recorrido casa por casa	31/03/2017	31/03/2017	0
29	Recorrido casa por casa	02/04/2017	31/03/2017	2

Con la finalidad de salvaguardar la garantía de audiencia del sujeto obligado, la observación antes citada le fue notificada mediante el oficio INE/UTF/DA-L/5229/17, de fecha 30 de abril de 2017, recibido por el sujeto obligado el mismo día.

En cuanto a este punto, el sujeto obligado manifestó lo siguiente:

*“En cuanto a los 29 eventos de la agenda de actos públicos que se registraron fuera de plazo; el motivo fue porque no se llevaron a cabo las capacitaciones correspondientes en forma completa y eficaz.*

*Y fueron eventos en los que no realice ningún gasto porque fueron recorridos de casa por casa adicional a los ya mencionados en los apartados correspondientes y en los que se detalle lo que se compró a las agencias de publicidad.*

*Por otra parte, las claves de usuario y contraseña no llegaron de manera oportuna”.*

Aun cuando el sujeto obligado manifestó que el curso de inducción al conocimiento de la plataforma del SIF no fue en forma completa y eficaz, esto no lo exime de la obligación de reportar con antelación a la realización de los eventos reportados en el SIF todas las actividades realizadas durante el periodo para la obtención de apoyo ciudadano para que la UTF tuviera oportunidad de fiscalizarlos, además de que, ya contaba con su clave y contraseña a partir del 23 de marzo de 2017, por tal razón la observación no quedó atendida.

Al registrar 29 eventos fuera del plazo de los siete días de antelación a su realización establecidos en la normatividad aplicable, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 143 Bis del RF. **(Conclusión Final 3)**

Con la finalidad de atender lo mandatado por la Sala Regional Guadalajara mediante la Resolución SG-RAP-35/2017 de Juan Manuel Hermosillo Matiarena, respecto a dejar sin efecto once eventos políticos que fueron realizados entre el treinta y uno de marzo y el tres de abril.

Por lo anterior, se procedió a valorar nuevamente la información determinando que solo 18 eventos se encuentran fuera del plazo de los siete días de antelación a su realización, de conformidad con lo siguiente:

<b>Consecutivo</b>	<b>Nombre del Evento</b>	<b>Fecha del evento</b>	<b>Fecha de registro</b>	<b>Días Previos al evento</b>
1	Recorrido casa por casa	06/04/2017	31/03/2017	6
2	Apoyo ciudadano casa por casa	11/04/2017	05/04/2017	6
3	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5
4	Apoyo ciudadano casa por casa	07/04/2017	05/04/2017	2
5	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5
6	Apoyo ciudadano casa por casa	09/04/2017	05/04/2017	4
7	Apoyo ciudadano casa por casa	08/04/2017	05/04/2017	3
8	Apoyo ciudadano casa por casa	11/04/2017	05/04/2017	6
9	Apoyo ciudadano	06/04/2017	05/04/2017	1
10	Apoyo ciudadano casa por casa	07/04/2017	05/04/2017	2
11	Apoyo ciudadano casa por casa	09/04/2017	05/04/2017	4
12	Recorrido casa por casa	04/04/2017	31/03/2017	4
13	Recorrido casa por casa	04/04/2017	31/03/2017	4
14	Apoyo ciudadano casa por casa	05/04/2017	05/04/2017	0
15	Apoyo ciudadano casa por casa	10/04/2017	05/04/2017	5
16	Recorrido casa por casa	05/04/2017	31/03/2017	5
17	Recorrido casa por casa	05/04/2017	31/03/2017	5
18	Recorrido casa por casa	06/04/2017	31/03/2017	6

En consecuencia, al informar 18 eventos fuera del plazo de los siete días de antelación a su realización, el sujeto obligado incumplió con lo establecido en el artículo 143 Bis del RF. **(Conclusión Final 3)**

(...)

**Conclusiones finales de la revisión a los informes de ingresos y gastos para la obtención del apoyo ciudadano al cargo de Presidente Municipal presentado por el aspirante el C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit.**

Los errores y omisiones que se reflejan en este Dictamen se hacen del conocimiento del Consejo General del INE, en términos de lo establecido en los artículos 446, en relación con el 456, numeral 1, inciso c) de la LGIPE.

(...)

### **Agenda**

3. La autoridad electoral tuvo conocimiento de 18 eventos fuera del plazo de siete días de antelación a su realización.

Tal situación incumple con lo establecido en el artículo 143 Bis, del RF

(...)”

#### **A. Modificación a la Resolución.**

Previo a la modificación, resulta de vital importancia destacar que el órgano jurisdiccional determinó confirmar las seis irregularidades en las que incurrió el **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, por lo que dichos montos quedaron intocados.

Adicionalmente, por lo que hace a la **conclusión 3**, la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, únicamente ordenó no considerar 11 eventos como extemporáneos, sin embargo la observación y sanción persisten.

Por lo anterior, la Sala Superior, al haber dejado intocadas en la sentencia recaída al expediente SG-RAP-35/2017 las demás consideraciones que sustentan la Resolución INE/CG170/2017 relativas al **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, este Consejo General únicamente se abocará a la modificación de la parte

conducente del Considerando **28.1.1**, inciso **c)** relativo a la conclusión **3**, en los términos siguientes:

## **“29.2 PRESIDENTES MUNICIPALES**

(...)

### **29.2.20 JUAN MANUEL HERMOSILLO MATIARENA**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe del Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017, en el estado de Nayarit se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos. De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí realizadas, se desprende que las irregularidades en las que incurrió del aspirante a candidato independiente son las siguientes:

(...)

**c) 1** Falta de carácter sustancial o de fondo: conclusión **3**.

(...)

**c)** En el capítulo de conclusiones finales de la revisión de los informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora del artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización: **conclusión 3**

No.	Conclusión
3	<i>“3. La autoridad electoral tuvo conocimiento de 18 eventos fuera del plazo de siete días de antelación a su realización”.</i>

De la falta descrita en el presente apartado, se desprende que se respetó la garantía de audiencia contemplada en el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 431, numeral 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 291, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, toda vez que al

advertirse el incumplimiento de una obligación por parte del aspirante, la autoridad debe de hacer de su conocimiento el supuesto que se actualiza con su conducta, en la especie la de informar eventos de manera extemporáneamente; en este orden de ideas, dicha conducta se hizo del conocimiento del sujeto obligado a través del oficio de errores y omisiones respectivo, por el cual la Unidad Técnica de Fiscalización le notificó que contaba con un plazo de siete días para que presentara las aclaraciones o rectificaciones que estimara pertinentes.

### **INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Ahora bien, toda vez que en este inciso se ha analizado una conducta que vulnera el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización, se procede a la individualización de la sanción, atento a las particularidades que en el caso se presenten.

En consecuencia, se procederá a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior dentro de la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010.

En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General procederá a calificar la falta determinando lo siguiente:

- a)** Tipo de infracción (acción u omisión).
- b)** Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.
- c)** Comisión intencional o culposa de la falta.
- d)** La trascendencia de las normas transgredidas.
- e)** Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
- f)** La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
- g)** La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción considerando además que la misma no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa su subsistencia.

## **CALIFICACIÓN DE LA FALTA.**

### **a) Tipo de infracción (acción u omisión).**

Con relación a la irregularidad identificada en la conclusión de mérito, se identificó que el sujeto obligado registró en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, 18 eventos antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una **omisión** consistente en registrar extemporáneamente en el Sistema Integral de Fiscalización dieciocho eventos, al haber sido registrados de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>1</sup>

### **b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretizaron.**

**Modo:** El sujeto obligado reportó dentro del módulo de agenda de actos públicos del aspirante a candidato independiente en el Sistema Integral de Fiscalización extemporáneamente a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, dieciocho eventos con anterioridad a su realización, de acuerdo a lo señalado en el Dictamen Consolidado.

Dicha irregularidad se llevó a cabo durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, concretándose en dicha entidad federativa, y detectándose en el marco de la revisión de los informes de ingresos y gastos de obtención de apoyo ciudadano relacionados con el Proceso Electoral mencionado.

### **c) Comisión intencional o culposa de la falta.**

No obra dentro del expediente elemento probatorio alguno con base en el cual pudiese deducirse una intención específica del sujeto obligado de cometer la falta referida y con ello, obtener el resultado de la comisión de la irregularidad mencionada con anterioridad, por lo que en el presente caso existe culpa en el obrar.

---

<sup>1</sup> Lo anterior considerando lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el SUP-RAP-98/2003



#### **d) La trascendencia de las normas transgredidas.**

Ahora bien, por lo que hace a la normatividad transgredida es importante señalar que, al actualizarse una falta sustantiva se presenta un daño directo y efectivo en los bienes jurídicos tutelados, así como la plena afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización de los sujetos obligados, y no únicamente su puesta en peligro.

Esto es, al actualizarse una falta sustancial al registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización dieciocho eventos con anterioridad a la realización de los mismos, pero de forma extemporánea se vulnera sustancialmente el principio de legalidad y transparencia en la rendición de cuentas.

Así las cosas, la falta sustancial de mérito obstaculizó las funciones de verificación de la autoridad electoral, toda vez que al no presentar en el tiempo establecido el registro de los eventos, la autoridad no se encontró en posibilidad de efectuar sus atribuciones de verificación.

En la conclusión que se analiza, el sujeto obligado en comento vulneró lo dispuesto en el artículo 143 bis del Reglamento de Fiscalización.<sup>2</sup>

De la lectura del citado artículo, se advierte que el deber del sujeto obligado de registrar en el Sistema de Contabilidad en Línea, la agenda de los eventos políticos que los sujetos obligados llevarán a cabo en el período de obtención de apoyo ciudadano.

Lo anterior, con la finalidad de que la autoridad electoral fiscalizadora tenga conocimiento, **de forma oportuna**, de la celebración de tales actos públicos y, en su caso, pueda asistir a dar fe de la realización de los mismos, verificando que se lleven a cabo dentro de los cauces legales y, fundamentalmente, que los ingresos y gastos erogados en dichos eventos hayan sido reportados en su totalidad. Esto, a fin de preservar los principios de la fiscalización, como son la transparencia y rendición de cuentas.

---

<sup>2</sup> "Artículo 143 bis. 1. Los sujetos obligados deberán registrar el primer día hábil de cada semana y con antelación de al menos 7 días a la fecha en que se lleven a cabo los eventos, a través del Sistema de Contabilidad en Línea en el módulo de agenda de eventos, los actos de precampaña, periodo de obtención de apoyo ciudadano, y campaña que realicen desde el inicio y hasta la conclusión del periodo respectivo. 2. En caso de cancelación de un evento político, los sujetos obligados deberán reportar dicha cancelación, a más tardar 48 horas después de la fecha en la que iba a realizarse el evento."

Ahora bien, el procedimiento de fiscalización comprende el ejercicio de las funciones de comprobación, investigación, información y asesoramiento; teniendo por objeto verificar la veracidad de lo reportado por los sujetos obligados, así como el cumplimiento de las obligaciones que impone la normativa de la materia y, en su caso, la imposición de sanciones.

En el caso, el registro extemporáneo de los eventos de los aspirantes, impide garantizar de forma idónea el manejo de los recursos **de manera oportuna durante la revisión de los informes respectivos, e inclusive impide su fiscalización absoluta**, si los sujetos obligados llevan a cabo actos que no son reportados **en tiempo y forma**, pues ocasiona que la autoridad fiscalizadora no pueda acudir y verificar, de forma directa, cómo se ejercen los recursos a fin de llevar a cabo una fiscalización más eficaz.

En efecto, uno de los principales deberes que tienen los sujetos obligados, que se persigue con la fiscalización, es la rendición de cuentas de manera transparente, y dentro de los plazos previstos para ello, de ahí que, el incumplimiento a esa obligación se traduce en una lesión al modelo de fiscalización.

En esa vertiente, no se puede catalogar a la conducta desplegada como una falta de índole formal, porque con ella se impide que la fiscalización se realice, generando un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la legislación aplicable en materia de fiscalización, sobre todo, porque se impide a la autoridad verificar, de forma directa y oportuna, el manejo y destino de los recursos.

En efecto, cualquier dilación en la presentación de documentación, relacionada con los ingresos y gastos derivados de sus campañas, y sobre todo la ausencia de documentación, vulnera el modelo de fiscalización, porque ello, en los hechos, se traduce en un obstáculo en la rendición de cuentas, lo que trae como consecuencia impedir que se garantice, de manera oportuna, la transparencia y conocimiento del manejo de los recursos públicos.

Cabe precisar que la norma prevista en el artículo 143 Bis del Reglamento de Fiscalización, establece claramente que se debe informar la agenda de actividades llevadas a cabo por los aspirantes respecto de todos los actos que lleven a cabo, lo anterior de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al **SUP-RAP-369/2016**.

**e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.**

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser infracciones de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la legalidad y transparencia en la rendición de cuentas, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable al sujeto obligado se traduce en **una falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real del bien jurídico tutelado, arriba señalado.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, en razón de que la infracción en cuestión genera una afectación directa y real de los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

**f) La singularidad o pluralidad de la falta acreditada.**

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO o de FONDO**, que vulnera el bien jurídico tutelado la legalidad y la certeza en la rendición de cuentas.

**g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).**

Del análisis a la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que el sujeto obligado no es reincidente respecto de la conducta a estudio.

### **Calificación de la falta.**

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA**.

Los elementos para la imposición de la sanción serán analizados en el inciso **f)** del presente considerando.

(...)

### **f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.**

#### **Por lo que hace a las conclusiones (...) 3, (...)**

A continuación se procede a establecer la sanción que más se adecúe a cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

Al efecto, la Sala Superior estimó mediante el SUP-RAP-454/2012 que una sanción impuesta por la autoridad administrativa electoral, será acorde con el principio de proporcionalidad cuando exista correspondencia entre la gravedad de la conducta y la consecuencia punitiva que se le atribuye.

Para ello, al momento de fijarse su cuantía se deben tomar en cuenta los siguientes elementos: 1. La gravedad de la infracción, 2. La capacidad económica del infractor, 3. La reincidencia, 4. La exclusión del beneficio ilegal obtenido, o bien, el lucro, daño o perjuicio que el ilícito provocó, y 5. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.

Es importante destacar que si bien la sanción administrativa debe tener como una de sus finalidades el resultar una medida ejemplar, tendente a disuadir e inhibir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, no menos cierto es que en cada caso debe ponerse particular atención en las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como en las condiciones subjetivas, a efecto de que las

sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

Al individualizar la sanción, se debe tener en cuenta la necesidad de desaparecer los efectos o consecuencias de las conductas infractoras, pues es precisamente esta disuasión según lo ha establecido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de la sentencia identificada con la clave SUP-RAP-114/2009 la finalidad que debe perseguir una sanción.

Ahora bien, no sancionar conductas como las que ahora nos ocupan, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la Legislación Electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Por lo anterior, a continuación se detallan las características de cada falta analizada.

(...)

### **c) Conclusión 3.**

#### **Evento extemporáneo previo su realización.**

Del análisis realizado a la conducta infractora cometida por el sujeto obligado, se desprende lo siguiente:

- Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.
- Que por lo que hace a las **circunstancias de modo, tiempo y lugar**, respectivamente, se tomó en cuenta que la irregularidad atribuible al sujeto obligado consistió en registrar en el módulo de eventos del Sistema Integral de Fiscalización, dieciocho eventos antes de su realización, esto es, de forma extemporánea a los siete días previos a su realización en los que tiene obligación de informar a la autoridad, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, incumpliendo con la obligación que le impone la normatividad electoral.

- Que con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.
- Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas, así como los oficios de errores y omisiones emitidos por la autoridad el plazo de revisión del informe de obtención de apoyo ciudadano correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017.
- Que el sujeto obligado no es reincidente.
- Que el sujeto obligado reportó dieciocho eventos con anterioridad a su fecha de realización.
- Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede al estudio de la capacidad económica del infractor, así como la elección de la sanción que corresponda para cada uno de los supuestos analizados en este inciso, las cuales están contenidas dentro del catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso c) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>3</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta cinco mil unidades de medida y actualización, (antes días de salario mínimo general vigente para la Ciudad de México), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el aspirante se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Por lo anterior, este Consejo General determina que la sanción que debe imponer debe ser aquella que guarde proporción con la gravedad de la falta y las circunstancias particulares del caso.

---

<sup>3</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, y III. Con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo. Cuando las infracciones cometidas por aspirantes o precandidatos a cargos de elección popular, cuando sean imputables exclusivamente a aquéllos, no procederá sanción alguna en contra del partido político de que se trate. Cuando el precandidato resulte electo en el proceso interno, el partido político no podrá registrarlo como candidato.

Así, la graduación de la multa se deriva del análisis a los elementos objetivos que rodean cada una de las irregularidades, las cuales han quedado plasmadas en los párrafos precedentes, por lo que el objeto de la sanción a imponer tiene como finalidad se evite y fomente el tipo de conductas ilegales o similares cometidas.

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	6 y 10	(...)	(...)	(...)	\$1,509.80
b)	2	(...)	(...)	(...)	\$41,519.50
c)	3	Evento extemporáneo previo su realización	18 eventos	10 UMA's POR EVENTO	\$13,588.20
d)	4	(...)	(...)	(...)	\$1,660.78
e)	8 y 9	(...)	(...)	(...)	\$12,984.28
<b>Total</b>					<b>\$71,262.56<sup>4</sup></b>

En este sentido, la Sala Regional Guadalajara en la ejecutoria SG-RAP-35/2017, ordenó a este Consejo General reducir la sanción a imponer hasta en un cincuenta y siete por ciento, lo anterior en atención al principio *non reformato in peius*, de tal manera que la sanción a imponer sería de \$30,642.90 (treinta mil seiscientos cuarenta y dos pesos 90/100 M.N.).

Ahora bien, esta autoridad no es omisa en considerar que para la imposición de la sanción debe valorar entre otras circunstancias la intención y la capacidad económica del sujeto infractor; así como, la valoración del conjunto de bienes, derechos y cargas y obligaciones del aspirante a candidato independiente, susceptibles de estimación pecuniaria, al momento de individualizar la sanción.

Respecto de la capacidad económica del aspirante a candidato independiente, el artículo 223 bis, numeral 3 del Reglamento de Fiscalización, establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de

<sup>4</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete.

documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.

En este sentido, con el fin de recabar la información necesaria y **actual** para comprobar la capacidad económica del sujeto infractor esta autoridad mediante oficio INE/UTF/DRN/6528/2017 solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores proporcionara los estados de cuenta bancarios del sujeto obligado correspondientes del mes de octubre del año dos mil diecisiete al último generado a la fecha de atención de la solicitud.

En este sentido, mediante el oficio 214-4/7905358/2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores remitió los estados de cuenta correspondientes del periodo octubre a diciembre de dos mil diecisiete en la institución bancaria denominada Banco Mercantil del Norte, S.A., a nombre del C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, informando lo siguiente:

Institución Bancaria	Mes (2017)	Saldo final
Banco Mercantil del Norte, S.A.	Octubre	\$2,461.29
	Noviembre	\$2,264.09
	Diciembre	\$2,066.89

En términos de lo establecido en el artículo 16, numeral 1, fracción I del Reglamento de Procedimientos en Materia de Fiscalización, los documentos presentados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores son pruebas documentales públicas que tienen pleno valor probatorio.

De lo anterior y de conformidad con la sentencia recaída al SUP-RAP-432/2016 se considera la temporalidad como un aspecto principal a valorar dentro de la capacidad económica del aspirante a candidato independiente, con la finalidad de conocer la capacidad económica real y actual del infractor, es por ello que esta autoridad considera que para cumplir con el mandato de la ley y el criterio sostenido por los órganos jurisdiccionales, es dable concluir que de la información con que se cuenta, el último estado de cuenta remitido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es el documento que permite tener una capacidad **real y actual** del aspirante a candidato infractor, por lo que para efectos de considerarse una sanción se tomará como base la información contenida en el estado de cuenta



del mes de diciembre de 2017<sup>5</sup>, el cual reporta un saldo final de **\$2,066.89 (dos mil sesenta y seis pesos 89/100 M.N.)**.

Ahora bien, tal como lo señala la sentencia recaída al SG-RAP-37/2016, es pertinente tener en cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció en la contradicción de tesis número 422/2013, que los gravámenes realizados sobre las percepciones de una persona en un treinta por ciento son concordantes con lo determinado, tanto en la Constitución como en instrumentos internacionales que actualmente son fundamento de los derechos humanos reconocidos por la Ley Fundamental, en los que se refleja la proyección que debe tener el Estado para garantizar que el ciudadano pueda allegarse de los elementos necesarios para tener una calidad de vida digna y decorosa.

Por tanto, se considera que una métrica acertada que de igual manera puede garantizar el objeto del castigo, puede basarse en parámetros inferiores, en un **techo del treinta por ciento del valor del ingreso del quejoso**, tal como lo interpretó el Alto Tribunal de Justicia del País, ello, ya que su imposición reprimiría la conducta, a la vez de que hace accesible su pago; de lo contrario podría darse el hecho de que la multa ponga al accionante en la encrucijada de cubrirla o no hacerlo para garantizar su subsistencia y la de sus dependientes.

Lo anterior es relevante porque la capacidad de pago debe surgir una vez que se han satisfecho los elementos fijos de las necesidades primarias, personales y familiares, además de ponderar el costo de la vida, el grado de bienestar y la situación económica, por lo que se obtienen las cantidades siguientes:

Saldo final último estado de cuenta (A) 31 de diciembre de 2017	Capacidad Económica (30% de A)
\$2,066.89	\$620.06

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del aspirante a candidato y a con el objetivo de atender los **efectos** precisados en la sentencia de mérito que indica:

---

<sup>5</sup> Lo anterior, en razón que la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores presenta un retraso natural supeditado al flujo de datos que las entidades del sector financiero proporcionan a la misma, de esta forma, resulta pertinente tomar en consideración la información que comprende el último trimestre fiscal, a efecto de dar celeridad a lo mandatado por el órgano jurisdiccional.

*“(...) Cabe precisar que, si bien la sanción originalmente impuesta al recurrente fue disminuida en poco más del cincuenta y siete por ciento en virtud de su capacidad económica; a fin de que la presente revocación tenga un impacto real en la esfera jurídica del sujeto sancionado y conforme al principio de **non reformatio in peius** (no reformar para empeorar), debe precisarse que **la nueva sanción que, en su caso imponga debe reducirse en igual proporción, aun cuando ésta resulte inferior a su capacidad de pago.**”*

Este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **8 (ocho) Unidades de Medida y Actualización** para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$603.92 (seiscientos tres pesos 92/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

7. Que la sanción originalmente impuesta al aspirante a candidato independiente C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, en la Resolución **INE/CG170/2017**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG170/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-35/2017
<b>QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando <b>29.2.20</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, en su carácter de aspirante a candidato independiente</b> , las sanciones siguientes:  <b>a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 6 y 10.</b> <b>b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 2.</b> <b>c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3.</b> <b>d) 1 Falta de carácter sustancial:</b>	Al haberse demostrado que la cuenta y clave de acceso al SIF del actor fueron entregadas un día antes del inicio del periodo para la obtención de apoyo ciudadano, no debió ser sancionado por los eventos que omitió registrar antes del cuatro de abril pues le era imposible que sus registros se realizaran con siete días de antelación a la fecha en que se celebraron, por lo que se individualiza la sanción que le corresponde al actor sin tomar en cuenta los once eventos políticos que fueron realizados entre el treinta y uno de marzo y el tres de	<b>QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando <b>29.2.20</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena, en su carácter de aspirante a candidato independiente</b> , las sanciones siguientes:  <b>a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 6 y 10.</b> <b>b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 2.</b> <b>c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3.</b> <b>d) 1 Falta de carácter sustancial:</b>

Sanciones en resolución INE/CG170/2017	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-35/2017
<b>conclusión 4.</b> <b>e) 2 Faltas de carácter sustancial: conclusiones 8 y 9.</b>  Una multa equivalente a <b>450 (cuatrocientos cincuenta)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a <b>\$33,970.50 (treinta y tres mil novecientos setenta pesos 50/100 M.N.).</b>	abril.	<b>conclusión 4.</b> <b>e) 2 Faltas de carácter sustancial: conclusiones 8 y 9.</b>  Una multa equivalente a <b>8 (ocho)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a <b>\$603.92 (seiscientos tres pesos 92/100 M.N.).</b>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, la siguiente sanción:

#### “R E S U E L V E

(...)

**QUINCUAGÉSIMO OCTAVO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando **29.2.20** de la presente Resolución, se impone a la **C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena**, en su carácter de aspirante a candidato independiente, las sanciones siguientes:

- a) 2 Faltas de carácter formal: conclusiones 6 y 10.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 2.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 3.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: conclusión 4.**
- e) 2 Faltas de carácter sustancial: conclusiones 8 y 9.**

Una multa equivalente a **8 (ocho)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, cuyo monto equivale a **\$603.92 (seiscientos tres pesos 92/100 M.N.).**

(...)”

En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35,

**numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número **INE/CG169/2017** y de la Resolución **INE/CG170/2017**, aprobados en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos **4, 5 y 6** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-35/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Nayarit y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al C. Juan Manuel Hermosillo Matiarena dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**; por lo que se solicita al Organismo Público Local remita a este Instituto y a la Sala Regional Guadalajara, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG417/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-76/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG520/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS**

### **A N T E C E D E N T E S**

**I.** En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG519/2017**, así como la Resolución **INE/CG520/2017** respecto de las irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación para controvertir la citada Resolución **INE/CG520/2017**.

**III. Recepción en la Sala Regional y turno.** El siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió acuerdo de escisión de la demanda a fin de que la problemática jurídica de cada una de las entidades federativas involucradas fuera analizada en recursos de apelación por separado, integrándose así el expediente identificado

con la clave **SM-RAP-76/2017** y turnándose a la ponencia de la Magistrada Claudia Valle Aguilasochó.

**IV.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, determinando en sus Resolutivos **SEGUNDO** y **TERCERO**, lo que se transcribe a continuación:

***“SEGUNDO.** Se **revocan**, en la parte conducente, las conclusiones **5, 7, 8 y 10**, del apartado de referencia.*

***TERCERO.** Se **ordena** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia”.*

**V.** Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena **revocar y emitir una nueva resolución** en lo que fue materia de impugnación respecto de la Resolución **INE/CG520/2017**, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

**1.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión

de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis presentados por el Partido de la Revolución Democrática.

2. Que el diecinueve de enero del dos mil dieciocho la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución, para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número **INE/CG520/2017**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el **Partido de la Revolución Democrática**, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SM-RAP-76/2017**.

4. Que por lo anterior y en razón en su Considerando 4 de la sentencia **SM-RAP-76/2017**, denominado **EFFECTOS**, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

#### **4. EFECTOS.**

(…)

**4.2. Revocar**, en la parte conducente, las conclusiones **5, 7, 8 y 10 del apartado 17.2.12** de la citada Resolución, para que el Consejo General emita una nueva y fije la sanción con base en la UMA vigente en dos mil dieciséis.

**4.3.** Realizado lo anterior, dentro de las **veinticuatro horas siguientes**, el Consejo General del INE deberá informar a esta Sala Regional la decisión que emita, remitiendo las constancias respectivas.

(...)"

**5.** Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez que le fueron asignados los siguientes recursos por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018:

Entidad	Acuerdo	Financiamiento de las actividades ordinarias permanentes 2018
Guanajuato	CGIEEG/038/2017	\$12,380,373.19

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática**, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:



Entidad	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas a febrero de 2018	Montos por saldar	Total de montos por saldar
Guanajuato	INE/CG520/2017	\$585,201.23	0.00	\$585,201.23	\$585,201.23

6. Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la Resolución identificada como **INE/CG520/2017**, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando **17.2.12**, inciso **a)** conclusiones **5, 7, 8, y 10**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.

**7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las modificaciones a las conclusiones previamente señaladas en el considerando **17.2.12**, relativo a la contabilidad de Guanajuato, correspondiente al Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la cual se reajusta el cálculo realizado para la imposición de las multas y determina la sanción correspondiente.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la resolución:

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Se <b>revocan</b> las conclusiones <b>5, 7, 8 y 10</b> .	Guanajuato.  Conclusiones <b>5, 7, 8 y 10</b> .	Se ordena emitir una nueva resolución y fijar la cantidad equivalente con base a la Unidad de Medida vigente en	Se reajusta la imposición de la sanción determinada de las faltas formales enunciadas, fijándose la cantidad

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
		el dos mil dieciséis.	equivalente con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio 2016,

Previo a exponer los términos en los cuales esta autoridad procederá a acatar la sentencia de origen, se considera indispensable realizar la salvedad siguiente:

**En la sentencia** del recurso de apelación que se cumplimenta, se aduce se revocan **4** conclusiones sancionatorias referenciadas con los números: **5, 7, 8 y 10** del Considerando **17.2.12**, inciso **a)** de la Resolución **INE/CG520/2017**. Lo anterior guarda congruencia con las referencias materia de la resolución impugnada y revocada.

**En el Dictamen Consolidado (INE/CG519/2017)** que forma parte integral de la resolución impugnada y revocada, en específico la parte relativa al Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato, se advierte que las faltas formales acreditadas se identifican con los números 5, 7, 8 y 9.

Lo anterior evidencia una discrepancia aparente entre las referencias materia de la sentencia que se acata y el Dictamen correlativo a la resolución revocada. Sin embargo, tras analizarse el contenido de las conclusiones que dan cuenta de las *irregularidades formales*, se podrá advertir coincidencia entre su contenido. En otras palabras, si bien se advierte discrepancia entre los numerales **9** y **10**, lo cierto es que **resultan ser conclusiones idénticas**.

Lo anterior lleva a esta autoridad a dejar en claro que, en el cuerpo del presente Acuerdo, cuando se haga referencia a la conclusión 9, deberá entenderse a su vez la referencia a la conclusión 10 que es materia de la sentencia que se acata.

Una vez precisado lo anterior, este Consejo General procede a acatar la sentencia de mérito en los términos siguientes:

### 17.2.12 Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato

(...)

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones **5, 7, 8 y 9**

(...)

a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 46, 98, I 127, numeral 1; 129; 132; 257, numeral 1, inciso a); del RF **conclusiones 5, 7, 8 y 9.**

(...)

### IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medida y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al recurso de apelación **SM-RAP-76/2017**, la autoridad judicial ordenó fijar la cantidad equivalente para la imposición de la multa conforme al valor vigente en dos mil dieciséis, esto es \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **36 (treinta y seis)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)**.

8. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de la Revolución Democrática, en la Resolución **INE/CG520/2017** consistieron en:

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Modificación	Sanción en Acatamiento a SM-RAP-76/2017
<p><b>DÉCIMO TERCERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>17.2.12</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato (...)</b></p> <p><b>a)</b> 4 faltas de carácter formal: Conclusiones <b>5, 7, 8 y 9.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>36 (treinta y seis)</b> Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete (sic), equivalente a <b>\$2,717.64 (dos mil setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.)</b>.</p>	<p>Se ajusta la sanción con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el ejercicio 2016.</p>	<p><b>DÉCIMO TERCERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>17.2.12</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato (...)</b></p> <p><b>a)</b> 4 faltas de carácter formal: Conclusiones <b>5, 7, 8 y 9</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>36 (treinta y seis)</b> Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a <b>\$ 2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)</b></p>

9. Que, de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo **DÉCIMO TERCERO**, respecto de su inciso a), de la Resolución **INE/CG520/2017**, por tanto se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, la sanción siguiente:

(...)

**DÉCIMO TERCERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **17.2.12** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Guanajuato** (...):

**a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 5, 7, 8 y 9.**

Una multa equivalente a **36 (treinta y seis)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)**

(...)

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se **modifica**, lo conducente en la Resolución **INE/CG520/2017**, aprobada en sesión ordinaria, celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la revisión a los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del **Partido de la Revolución Democrática**, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos **7 y 9** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** - Infórmese a la **H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-76/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Local Electoral en Guanajuato, y dicho organismo, a su vez, esté en posibilidad de notificar al sujeto interesado a la brevedad posible, por lo que se solicita al Organismo Público Local en cita, remita a este Instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Guanajuato, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinadas al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**QUINTO.** Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Guanajuato, que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo.

**SEXTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días posteriores, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SÉPTIMO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG418/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL MONTERREY DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SM-RAP-79/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG520/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS**

### **A N T E C E D E N T E S**

**I.** En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG519/2017**, así como la Resolución **INE/CG520/2017** respecto de las irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación para controvertir la citada Resolución **INE/CG520/2017**.

**III. Recepción en la Sala Regional y turno.** El siete de diciembre de dos mil diecisiete la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió acuerdo de escisión de la demanda a fin de que la problemática jurídica de cada una de las entidades federativas involucradas fuera analizada en recursos de apelación por separado, integrándose así el expediente identificado con la clave **SM-RAP-79/2017** y turnándose a la ponencia de la Magistrada Claudia Valle Aguilasochó.

IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, determinando en los Resolutivos **SEGUNDO y TERCERO**, lo que se transcribe a continuación:

***“SEGUNDO. Se **revocan**, en la parte conducente, las conclusiones 2, 4, 8 y 9, del apartado de referencia.***

***TERCERO. Se **ordena** al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a lo señalado en el apartado de efectos de esta sentencia.”***

V. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena **revocar y emitir una nueva resolución** en lo que fue materia de impugnación respecto de la Resolución **INE/CG520/2017**, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis presentados por el Partido de la Revolución Democrática.



2. Que el diecinueve de enero del dos mil dieciocho la Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar la Resolución para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número **INE/CG520/2017**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el **Partido de la Revolución Democrática**, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SM-RAP-79/2017**.

4. Que por lo anterior y en razón del Considerando 4 de la sentencia **SM-RAP-79/2017**, apartado denominado **EFFECTOS**, la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

#### **4. EFECTOS.**

(…)

**4.2. Revocar**, en la parte conducente, las conclusiones **2, 4, 8 y 9** del **apartado 17.2.32** de la citada Resolución, para que el Consejo General emita una nueva y fije la sanción con base en la UMA vigente en dos mil dieciséis.

**4.3. Realizado lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes**, el Consejo General del INE deberá informar a esta Sala Regional la decisión que emita, remitiendo las constancias respectivas.

(…)”

5. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez que le fueron asignados los siguientes recursos por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018:

Entidad	Acuerdo	Financiamiento de las actividades ordinarias permanentes 2018
Zacatecas	ACG-IEEZ-003/VII/2018	\$ 6,485,007.19

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática**, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

Entidad	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al febrero de 2018	Montos por saldar	Total de montos por saldar
Zacatecas	INE/CG810/2016	\$260,138.11	\$189,945.41	\$70,192.70	\$2,436,510.13
	INE/CG874/2016	\$ 51,985.53	0.00	\$ 51,985.53	
	INE/CG520/2017	\$2,314,331.9	0.00	\$2,314,331.9	

**6.** Que en tanto la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la Resolución identificada como **INE/CG520/2017**, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando **17.2.32**, inciso **a)**, conclusiones **2, 4, 8 y 9**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Regional Monterrey, materia del presente Acuerdo.

**7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las modificaciones a las conclusiones previamente señaladas en el considerando **17.2.32.**, relativo a la contabilidad de Zacatecas, correspondiente al Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la cual se reajusta el cálculo realizado para la imposición de las multas y determina la sanción correspondiente.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la resolución:

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Se <b>revocan</b> las conclusiones <b>2, 4, 8 y 9.</b>	Zacatecas  Conclusiones 2, 4, 8 y 9,	Se ordena emitir una nueva resolución y fijar la cantidad equivalente con base a la Unidad de Medida vigente en el dos mil dieciséis.	Se reajusta la imposición de la sanción determinada de las faltas formales enunciadas, fijándose la cantidad equivalente con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio 2016.

Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General procede a acatar la sentencia en los términos siguientes:

### 17.2.32 Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas

(...)

**a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 4, 8 y 9.**

(...)

**a)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 46; 98; 127, numeral 1; 129; 132; 257, numeral 1, inciso a); del Reglamento de Fiscalización. **Conclusiones: 2, 4, 8 y 9.**

(...)

### IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al recurso de apelación **SM-RAP-79/2017**, la autoridad judicial ordenó fijar la cantidad equivalente para la imposición de la multa conforme al valor vigente en dos mil dieciséis, esto es \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **36 (treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización** vigentes para el dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)**

**8.** Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de la Revolución Democrática, en específico al Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, en la Resolución **INE/CG520/2017**, consistieron en:

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Modificación	Sanción en Acatamiento a SM-RAP-79/2017
<p><b>TRIGÉSIMO TERCERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.32 correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas (...)</b></p> <p>a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones <b>2, 4, 8 y 9</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>36 (treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización</b> vigentes para el dos mil dieciséis (sic), equivalente a <b>\$2,717.64 (dos mil setecientos diecisiete pesos 64/100 M.N.)</b>.</p>	<p>Se ajusta la sanción con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el ejercicio 2016.</p>	<p><b>TRIGÉSIMO TERCERO.</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el Considerando 17.2.32 correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas (...)</b></p> <p>a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones <b>2, 4, 8 y 9.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>36 (treinta y seis) Unidades de Medida y Actualización</b> vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a <b>\$ 2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)</b></p>

9. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo **TRIGÉSIMO TERCERO**, respecto de su inciso a), de la Resolución **INE/CG520/2017**, por tanto se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, en específico a su Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, la sanción siguiente:

(...)

**TRIGÉSIMO TERCERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **17.2.32** correspondiente al **Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas** (...):

a) 4 faltas de carácter formal: Conclusiones **2, 4, 8 y 9**

Una multa equivalente a **36 (treinta y seis)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de **\$2,629.44 (dos mil seiscientos veintinueve pesos 44/100 M.N.)**

(...).

En atención a los **Antecedentes y Consideraciones** vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se **modifica** en lo conducente la Resolución **INE/CG520/2017**, aprobada en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la revisión a los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del **Partido de la Revolución Democrática**, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos **7 y 9** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **H. Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, dentro de las **veinticuatro horas** siguientes a la aprobación del presente, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SM-RAP-79/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto, remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto que sea notificada al Organismo Público Local Electoral en Zacatecas, y dicho organismo, a su vez, este en posibilidad de notificar al sujeto interesado a la brevedad posible, por lo que se solicita al Organismo Público Local en cita, remita a este Instituto las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento al Organismo Público Local Electoral de Zacatecas, a efecto que la sanción determinada sea pagada en dicho Organismo Público Local Electoral, la cual en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado; y los recursos obtenidos de la sanción económica impuesta en este Acuerdo, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**QUINTO.** Se solicita al Organismo Público Local Electoral de Zacatecas, que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en el presente Acuerdo.

**SEXTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días posteriores, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**SÉPTIMO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**INE/CG419/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SUP-RAP-759/2017, INTERPUESTO POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN IDENTIFICADA CON EL NÚMERO INE/CG520/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y GASTOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DOS MIL DIECISÉIS**

### **A N T E C E D E N T E S**

**I.** En sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el Dictamen Consolidado **INE/CG519/2017**, así como la Resolución **INE/CG520/2017** respecto de las irregularidades derivadas de la revisión de los informes anuales de los ingresos y gastos del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente al ejercicio dos mil dieciséis.

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con lo anterior, el veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, el Partido de la Revolución Democrática interpuso recurso de apelación para controvertir la citada Resolución **INE/CG520/2017**.

**III. Recepción y turno.** El cinco de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recibió la demanda y en la misma fecha la Magistrada Presidenta ordenó integrar el expediente identificado con la clave **SUP-RAP-759/2017**, turnándolo a su vez a la ponencia del Magistrado Felipe de la Mata Pizaña.



IV. Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el recurso referido en sesión pública celebrada el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, determinando en su Resolutivo **PRIMERO**, lo que se transcribe a continuación:

***“Primero. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación y análisis, la resolución impugnada, para los efectos precisados en la ejecutoria.”***

V. Derivado de lo anterior, en la sentencia se ordena **revocar y emitir una nueva resolución** en lo que fue materia de impugnación respecto de la resolución **INE/CG520/2017**, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son definitivas e inatacables, se presenta el proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, incisos a), n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j) y aa); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c) y d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis presentados por el Partido de la Revolución Democrática.

2. Que el veinte de diciembre de dos mil diecisiete, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió revocar la Resolución para los efectos precisados en la ejecutoria, identificada con el número **INE/CG520/2017**, dictada por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, misma que fue impugnada por el **Partido de la Revolución**

**Democrática**, para los efectos precisados en el presente Acuerdo. A fin de dar cumplimiento a los mismos, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la ejecutoria precisada.

3. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso del recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica **SUP-RAP-759/2017**.

4. Que por lo anterior y en razón del **Apartado IV**, denominado **“Efectos de la ejecutoria”**, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

*Toda vez que la sanción de 99 Unidades de Medida y Actualización vigentes a 2017, correspondiente a las faltas referidas en las conclusiones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35 debe quedar sin efectos, porque indebidamente se consideró el valor de la época en la que se emitió la Resolución, lo procedente es:*

*1. Revocar la resolución impugnada, exclusivamente, en cuanto a la determinación de esta sanción.*

*2. Ordenar al Consejo General del INE que emita una nueva resolución en la que especifique que la sanción de 99 Unidades de Medida y Actualización **debe ser al valor vigente en 2016 cuando se actualizó la infracción.***

*3. Hecho lo anterior, la autoridad deberá informar a este Tribunal sobre el cumplimiento.*

*(…)”*

5. Que debe considerarse que el partido político cuenta con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que en su caso se le imponga, toda vez que le fueron asignados los siguientes recursos por concepto de financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2018:

Partido político	Financiamiento público actividades ordinarias 2018
Partido de la Revolución Democrática CEN	\$496,199,686.00

En este tenor, es oportuno mencionar que el partido político en comento está legal y fácticamente posibilitado para recibir financiamiento privado, con los límites que prevé la Constitución General y las Leyes Electorales. En consecuencia, la sanción determinada por esta autoridad en modo alguno afecta el cumplimiento de sus fines y al desarrollo de sus actividades.

No pasa desapercibido para este Consejo General el hecho de que para valorar la capacidad económica del partido político infractor es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se ha hecho acreedor con motivo de la comisión de diversas infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas del infractor no pueden entenderse de una manera estática, pues es evidente que van evolucionando de acuerdo con las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

En este sentido, obran dentro de los archivos de esta autoridad electoral los siguientes registros de sanciones que han sido impuestas al **Partido de la Revolución Democrática** por este Consejo General, así como los montos que por dicho concepto le han sido deducidas de sus ministraciones:

ID	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de marzo de 2018	Montos por saldar	Total montos por saldar
CEN	INE/CG771/2015-TERCERO-e)-14	\$1,205,291.60	\$37,214.98	\$384,760.33	\$1,097,723.15

ID	Resolución de la Autoridad	Monto total de la sanción	Montos de deducciones realizadas al mes de marzo de 2018	Montos por saldar	Total montos por saldar
CEN	INE/CG771/2015-DECIMO SEGUNDO-b)-15	\$2,068,308.31	\$66,159.40	\$609,588.44	

6. Que en tanto la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó intocadas las demás consideraciones que sustenta la Resolución identificada como **INE/CG520/2017**, este Consejo General únicamente se centrará al estudio y análisis de lo relativo a las modificaciones ordenadas por el órgano jurisdiccional, que se encuentran en el Considerando **17.1.1**, inciso **a)**, conclusiones **2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35**, en cumplimiento a lo expresamente ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, materia del presente Acuerdo.

#### **7. Determinación derivada del cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación.**

En cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional, por lo que hace a las modificaciones a las conclusiones previamente señaladas en el Considerando **17.1.1**, relativos a la contabilidad del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, esta autoridad electoral emite una nueva determinación en la cual en la cual se reajusta el cálculo realizado para la imposición de las multas y determina la sanción correspondiente.

En consecuencia, esta autoridad electoral procedió a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizaron las siguientes acciones en congruencia con el sentido de la resolución:

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
Se <b>revocan</b> las conclusiones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13,	CEN Conclusiones 2, 8,	Se ordena que se emita una nueva resolución en la que especifique que	Se reajusta la imposición de la sanción determinada de las faltas formales enunciadas, fijándose la cantidad

Sentencia	Conclusión	Efectos	Acatamiento
15, 16, 20 y 35.	9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35	la sanción de 99 Unidades de Medida y Actualización debe ser al valor vigente en 2016 cuando se actualizó la infracción.	equivalente con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el ejercicio 2016.

Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, este Consejo General procede a acatar la sentencia en los siguientes términos:

#### 17.1.1 Comité Ejecutivo Nacional.

(...)

**a) 11 faltas de carácter formal: Conclusiones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35.**

(...)

**a)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal infractoras de los artículos 33, numeral 1, inciso a); 164; 170 numeral 3; 173 numerales 3 y 4; 175; 256; numeral 1; 261 y 277 numeral 1, inciso e), todos del Reglamento de Fiscalización: **Conclusiones 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35.**

(...)

#### IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

(...)

En este tenor, una vez que se han calificado las faltas, se han analizado las circunstancias en que fueron cometidas, la capacidad económica del infractor y los

elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo a los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.<sup>1</sup>

Así pues, tomando en consideración las particularidades anteriormente analizadas, este Consejo General considera que la sanción prevista en la citada fracción II consistente en una multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, (ahora Unidades de Medidas y Actualización), es la idónea para cumplir una función preventiva general dirigida a los miembros de la sociedad en general, y fomentar que el participante de la comisión, en este caso el partido político se abstenga de incurrir en la misma falta en ocasiones futuras.

Ahora bien, resulta necesario señalar que, con motivo de la sentencia recaída al recurso de apelación **SUP-RAP-759/2017**, la autoridad judicial ordenó fijar la cantidad equivalente para la imposición de la multa conforme al valor vigente en dos mil dieciséis, esto es \$73.04 (setenta y tres pesos 04/100 M.N.).

En consecuencia, este Consejo General concluye que la sanción que se debe imponer al instituto político es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una multa equivalente a **99 (noventa y nueve) Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a \$7,230.96 (siete mil doscientos treinta pesos 96/100 M.N.).**

**8. Que las sanciones originalmente impuestas al Partido de la Revolución Democrática, en la Resolución INE/CG520/2017 consistieron en:**

---

<sup>1</sup> Mismo que en sus diversas fracciones señala: I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución; IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado, por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; y V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

Sanciones en Resolución INE/CG520/2017	Modificación	Sanción en Acatamiento a SUP-RAP-759/2017
<p><b>17.1.1</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Nacional</b> de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p><b>a) 11</b> faltas de carácter formal: Conclusiones <b>2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>99 (noventa y nueve)</b> Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete equivalente a <b>\$7,473.51 (siete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 51/100 M.N.).</b></p>	<p>Se ajusta la sanción con base en el valor de la Unidad de Medida y Actualización en el ejercicio 2016.</p>	<p><b>17.1.1</b> correspondiente al <b>Comité Ejecutivo Nacional</b> de la presente Resolución, se imponen al instituto político, las sanciones siguientes:</p> <p><b>a) 11</b> faltas de carácter formal: Conclusiones <b>2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>99 (noventa y nueve)</b> Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis equivalente a <b>\$7,230.96 (siete mil doscientos treinta pesos 96/100 M.N.).</b></p>

**9.** Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se modifica el Resolutivo **PRIMERO**, respecto de su inciso a), de la Resolución **INE/CG520/2017**, por tanto se impone al **Partido de la Revolución Democrática**, en específico a su Comité Ejecutivo Nacional, la sanción siguiente:

(...)

**PRIMERO.** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **17.1.1** correspondiente al **Comité Ejecutivo Nacional** (...):

**a) 11** faltas de carácter formal: Conclusiones **2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20 y 35.**

Una multa equivalente a **99 (noventa y nueve)** Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil dieciséis, equivalente a **\$7,230.96 (siete mil doscientos treinta pesos 96/100 M.N.)**

(...)

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se **modifica** en lo conducente la Resolución **INE/CG520/2017**, aprobada en sesión ordinaria celebrada el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, respecto de la revisión a los Informes Anuales de Ingresos y Gastos del **Partido de la Revolución Democrática**, correspondientes al ejercicio dos mil dieciséis, en los términos precisados en los Considerandos **7 y 9** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SUP-RAP-759/2017**.

**TERCERO.** En términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la sanción determinada se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en el que el presente Acuerdo haya causado estado, siendo los recursos obtenidos por la aplicación de la misma, destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

**CUARTO.** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.



**INE/CG420/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL GUADALAJARA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RECAÍDA AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO IDENTIFICADO CON EL NUMERO DE EXPEDIENTE SG-JDC-105/2018, INTERPUESTO POR EL C. PABLO ARANA PÉREZ EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO INE/CG198/2018**

## **ANTECEDENTES**

**I. Aprobación de la Resolución.** El veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió en sesión extraordinaria la resolución **INE/CG198/2018**, respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

**II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.** Inconforme con lo anterior, el cinco de abril del dos mil dieciocho, el C. Pablo Arana Pérez presentó ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco (en adelante, Sala Regional), escrito de demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales, quedando registrado bajo el número de expediente **SG-JDC-105/2018** mediante proveído de esa misma fecha.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, en sesión pública celebrada el veinte de abril del presente año, la Sala Regional resolvió el juicio referido, determinando lo que a la letra se transcribe:

## RESUELVE

**ÚNICO.** Se **revoca** la resolución impugnada en lo que fue materia de este juicio, para los efectos y en los términos precisados en la parte final de la presente sentencia.

IV. Derivado de lo anterior, en la ejecutoria antes citada, la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG198/2018**, en lo que fue materia de estudio, a efecto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con plenitud de jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita una nueva resolución en la que deberá tomar en consideración la particularidad del caso.

## CONSIDERANDO

1. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, inciso a) , n) y s) de la Ley General de Partidos Políticos; así como los artículos 44 numeral 1, incisos j), aa), y jj); 190, numeral 1 y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de los ingresos y egresos de los partidos políticos.

2. Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso la recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado con el número de expediente **SG-JDC-105/2018**.

3. Que la Sala Regional resolvió revocar la Resolución **INE/CG198/2018** en los términos referidos por el citado fallo, por lo que, a fin de dar debido cumplimiento a la sentencia de mérito, se procederá a atender a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

4. En ese sentido, en el apartado de **ESTUDIO DE FONDO** de la ejecutoria dictada en el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificado bajo el número de expediente **SG-JDC-105/2018**, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

## **“6. ESTUDIO DE FONDO**

*El agravio reseñado en el punto 5.1, es **fundado** y suficiente para revocar la Resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones:*

*El actor aduce que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral indebidamente de manera general lo incluyó en un grupo de aspirantes a candidatos que no presentaron su informe de ingresos y egresos sin ponderar su caso en concreto; no obstante que, a diferencia del resto de los candidatos, respecto de los cuales dijo que no habían presentado su informe de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano a través del sistema integral de fiscalización, en el caso particular él sí lo presentó el quince de febrero de dos mil dieciocho, a través de ese sistema, lo que no pudo completar por fallas que se presentaron en el mismo sistema, así como por las dificultades de carácter técnico en el empleo de éste, su falta de experiencia y práctica, y la complejidad que involucra la utilización del aludido sistema; por lo que, con posterioridad, a saber, el veintiuno de febrero siguiente, ante la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, allegó por escrito el informe de mérito; y que por ende, asevera haber cumplido cabalmente con la presentación del informe de referencia.*

*De la resolución controvertida se advierte que efectivamente como lo asevera el actor, la responsable procedió a especificar de manera general las hipótesis en las que se ubicaban cada uno de los aspirantes a candidatos, a saber:*

- A. Omisos sin informe y registro de operaciones en el SIF.*
- B. Omisos sin informe y con registro de operaciones en el SIF.*
- C. Omisos sin informes y sin registro de operaciones en el SIF, con gastos detectados por la UTF.*

*De este modo, precisó que el actor se encontraba en el supuesto identificado en el inciso “B”, es decir, que fue omiso en presentar el informe de ingresos y gastos en el tiempo establecido en la ley, no obstante contar con registros en el sistema integral de fiscalización.*

*Por otra parte, señaló que el actor no cumplió en tiempo y forma con el requerimiento que le formuló el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización de ese instituto, mediante oficio INE/UTF/DA/16552/18, de*

*doce de febrero del año en curso, en el que se le requirió a efecto de que proporcionara además del informe de ingresos y gastos, diversa información dentro del término improrrogable de tres días naturales, que transcurrirían del trece al quince de febrero del año en curso, término en el que, incluso, se habilitó el sistema integral de fiscalización con la finalidad de que, durante ese plazo extraordinario, presentara el informe de ingresos y gastos requerido.*

*Según puede apreciarse, la autoridad responsable al resolver en los términos en que lo hizo no tomó en consideración todas las circunstancias que rodearon el asunto sometido a su consideración.*

*Se asevera lo anterior, en virtud de que según se analizó, la autoridad señalada como responsable se limitó a determinar que el aquí actor incumplió con su obligación de presentar el informe de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano, sin que tomará en consideración, como debió haberlo hecho, las circunstancias atinentes a que dicho actor, por una parte, el quince de febrero del año en curso, pretendió presentar el referido informe a través del Sistema Integral de Fiscalización, lo que no pudo concretar debido a una serie de fallas técnicas que el propio sistema presentó, tal y como lo narró en su escrito de demanda.*

*Por otra parte, el hecho de que el accionante a través del escrito que presentó ante la Unidad Técnica de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Chihuahua, con fecha veintiuno de febrero del año en curso, adjuntó de manera física y material el informe de ingresos y gastos que le fue requerido, debido a que precisamente estuvo imposibilitado para presentarlo por medio del Sistema Integral de Fiscalización por las fallas técnicas que dicho sistema presentó, y por las demás circunstancias a que hizo referencia en el mismo ocurso.*

*Ahora bien, de las constancias que integran el presente juicio, obra entre otras, el formato "IPR", relativo al informe de obtención de apoyo ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos del cual, se desprende la intención del actor de dar cumplimiento a lo establecido en la ley; pues de su contenido se aprecia que dicho formato se incorporó al Sistema Integral de Fiscalización a las veintiún horas con treinta y seis minutos del quince de febrero pasado, esto es, dentro del plazo que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral le había otorgado para cumplir con el requerimiento antes aludido.*

*El anterior informe que se reproduce a continuación:*

(IMÁGENES)

*Al respecto, cabe precisar que, el Manual de usuario del Sistema Integral de Fiscalización (versión 4.0), señala en el apartado “XII. 1.4 Vista Previa y Envío a Firma” lo siguiente:*

- *Que las secciones que conforman el informe se visualizan cerradas y que para revisar su contenido deberán seleccionarse.*
- *Que una vez revisado el contenido del informe, deberá oprimirse el botón “Enviar a Firma”.*
- *Que una vez enviado a firma, el sistema muestra el mensaje “Exitoso”.*

*Lo anterior pone de manifiesto, como lo alega el actor en sus motivos de disenso, que efectivamente pretendió dar cumplimiento al requerimiento que se le efectuó, pues es incuestionable que ingresó al Sistema Integral de Fiscalización a efecto de presentar el informe de que se trata, lo que no pudo completar, tal como se advierte de lo propio formato “IPR” que ofrece como prueba, ya que dicho trámite se quedó en el segundo paso descrito en el referido manual.*

*En ese orden de ideas, es incuestionable que el actor pretendió dar cumplimiento a lo peticionado por la Unidad Técnica de Fiscalización; sin embargo, no culminó el respectivo trámite.*

*No obstante lo anterior, el actor a fin de cumplir con la presentación del informe de referencia, el veintiuno de febrero de este año, presentó escrito ante la referida unidad técnica de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Chihuahua, en el que acompañó de manera física el formato “IPR” relativo al informe en cuestión, como se evidencia con la siguiente imagen del escrito de recepción:*

(IMAGEN)

*En dicho escrito, realizó diversas manifestaciones en relación con los problemas que tuvo al tratar de ingresar al sistema, así como las dificultades para enviar el multicitado informe de ingresos y gastos, el cual*

*tampoco tomó en cuenta la autoridad al momento de emitir la resolución atinente, según se precisó con anterioridad.*

*Bajo esta tesitura, es evidente que la resolución reclamada carece de los principios de congruencia y exhaustividad que se encuentran inmersos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.*

*Aunado a lo mencionado, tal como lo indica el actor en su escrito de demanda, de las constancias aportadas tanto por él como de las diversas allegadas por la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado, se aprecia que el promovente incorporó al sistema: tres pólizas de ingresos y once de egresos, acompañadas con sus respectivos documentos de soporte; una balanza de comprobación a nivel auxiliar; un reporte diario; un reporte mayor; y, el reporte de una cuenta bancaria.*

*Documentales que debieron tomarse en consideración al momento de analizar el caso particular del aspirante a candidato independiente, pues como ya se mencionó, de estos elementos probatorios se advierte que los actos desarrollados por el aquí actor, fueron con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido legalmente y como consecuencia obtener su respectivo registro.*

*No obstante lo anterior, la autoridad responsable determinó en la resolución recurrida, que al no haber dado cumplimiento a lo solicitado, lo procedente era negarle el derecho al registro de la candidatura atinente; lo anterior, de conformidad con lo previsto en los artículos 378, párrafo 1, 380, numeral 1, inciso g) y 430, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin que haya tomado en consideración, según se analizó, las circunstancias a que se ha hecho referencia en los párrafos que anteceden.*

*De este modo, tal como se explicó en esta sentencia, al no haberse tomado en consideración los elementos antes aludidos, resulta evidente que la resolución controvertida transgrede los principios de congruencia y exhaustividad, lo que se traduce en una indebida fundamentación y motivación que el artículo 16 Constitucional exige debe contener todo acto de autoridad.*

*(...)*

Asimismo, en los párrafos vigésimo, vigésimo primero y vigésimo segundo del apartado “**6. ESTUDIO DE FONDO**” de la ejecutoria dictada en el recurso en comento, la Sala Regional determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

*En consecuencia, dicho lo anterior y al resultar fundado y suficiente el agravio hecho valer ante esta instancia jurisdiccional, lo procedente es **revocar la Resolución** impugnada en lo que fue materia de estudio, a efecto de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con plenitud de jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita una nueva resolución en la que deberá tomar en consideración todos y cada uno de los aspectos a que se hizo mención a lo largo de la presente sentencia.*

*Se le otorga un plazo de siete días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación que se practique de la presente Resolución, para que, resuelva de conformidad con lo establecido en la presente sentencia.*

*Hecho lo anterior, deberá informar dentro del término improrrogable de **veinticuatro horas** a esta Sala Regional, así como al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, el sentido de la resolución que pronuncie al respecto.”*

Ahora bien, de la lectura a la resolución recaída al multicitado juicio ciudadano, se desprende que con relación al **Punto 5.1**, la Sala Regional declaró fundado el agravio vertido por el aspirante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta respecto del citado considerando, por lo que este Consejo General procederá a acatar la sentencia referida, para lo cual se realizarán las siguientes modificaciones en congruencia con el sentido de la ejecutoria de mérito:

Considerando 25.1	
Considerando original	<b>25.1 ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL, AYUNTAMIENTOS Y SINDICOS, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO</b>

Considerando 25.1					
	<p><b>CIUDADANO.</b></p> <p>(...)</p> <p>Visto lo anterior, a continuación se presentan a los 11 aspirantes a candidatos independientes omitieron presentar su informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano entre ellos el <b>C. Pablo Arana Pérez</b>, quien dentro de la Resolución <b>INE/CG198/2018</b> entro en el supuesto siguiente:</p> <p>(...)</p> <p><b>B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF</b></p> <p>Se precisan, los sujetos obligados que no presentaron su informe de ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley ni en el requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado por la UTF, pero que tienen registrada alguna operación en el SIF.</p>				
	<b>Cons.</b>	<b>Entidad</b>	<b>Cargo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Ingreso</b>
	1	Chihuahua	Diputado Local MR	Pablo Arana Pérez	\$94,530.00
Efectos	<p>(...)</p> <p>En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, los aspirantes a candidatos independientes multicitados, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.</p>				
	<p>Que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, con plenitud de jurisdicción, y a la luz de lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, emita una nueva resolución en la que deberá tomar en consideración</p>				



<b>Considerando 25.1</b>	
	todos y cada uno de los aspectos y las particularidades del caso.
Acatamiento	En acatamiento a la Sentencia de la Sala Regional, en plenitud de jurisdicción se analiza de nueva cuenta las particularidades del caso concreto, para emitir una nueva determinación.

## **5. Modificación a la Resolución INE/CG198/2018.**

Por lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional, este Consejo General modifica la Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, de en el Estado de Chihuahua, relativo al considerando 25.1, en los términos siguientes:

### **25.1 ASPIRANTES A CANDIDATOS INDEPENDIENTES A LOS CARGOS DE DIPUTADO LOCAL, AYUNTAMIENTOS Y SINDICOS, QUE OMITIERON PRESENTAR SU INFORME DE INGRESOS Y GASTOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE APOYO CIUDADANO.**

(...)

#### **B. Omisos sin informe con registro de operaciones en el SIF**

En este apartado se precisa el sujeto obligado que no presentó su informe de ingresos y gastos en el tiempo señalado por la Ley ni en el requerimiento ordenado por la Comisión de Fiscalización y enviado por la UTF, pero que tiene registrada alguna operación en el SIF.

Ahora bien, se detallan las operaciones registradas por el aspirante son:

Cons.	Entidad	Cargo	Nombre	Ingreso	Egresos
1	Chihuahua	Diputado Local MR	Pablo Arana Pérez	\$94,530.00	\$74,762.74.

No obstante lo anterior y tomando en consideración el criterio seguido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral al omitir presentar el informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo

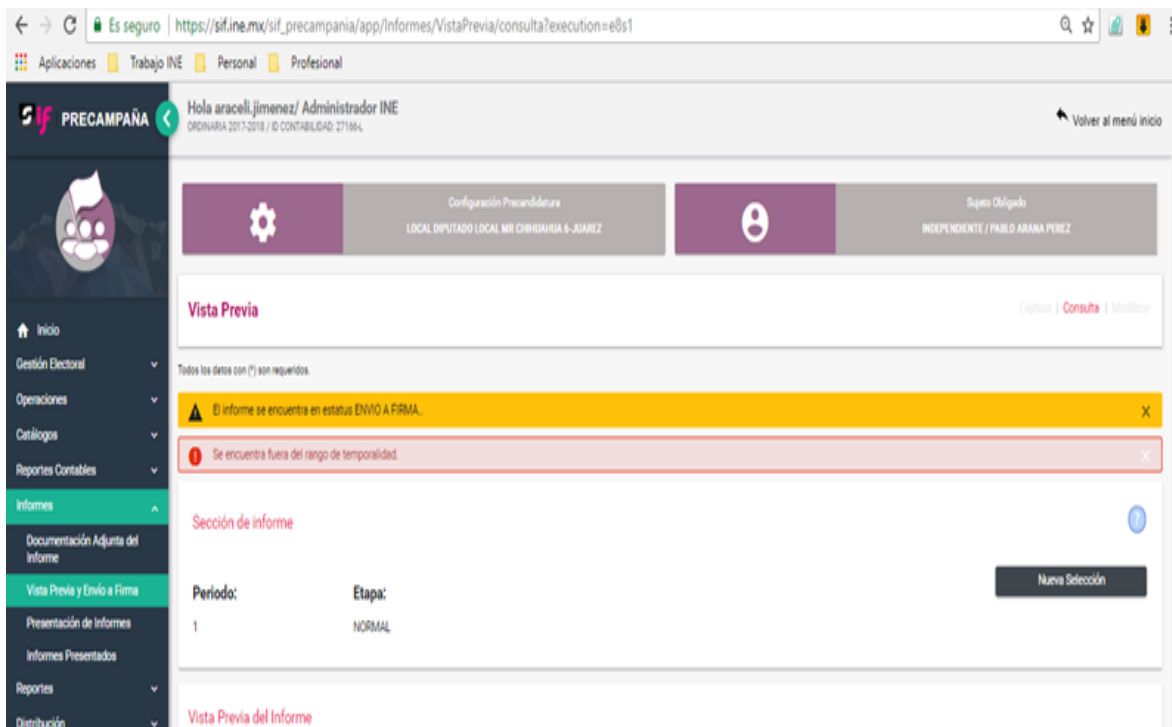
ciudadano, el aspirante a candidato independiente antes referido, incumplió con lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; tal y como se expondrá en lo sucesivo.

Lo anterior es así, ya que en atención a lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, y al encontrarse el C. Pablo Arana Pérez en el supuesto de omisión de presentación de informe, mediante oficio INE/UTF/DA/16552/18, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al sujeto obligado, que se habilitaría el Sistema Integral de Fiscalización para que en un plazo extraordinario de tres días naturales subsanara la mencionada omisión, asimismo se le hizo del conocimiento que la consecuencia jurídica de tal incumplimiento sería la negativa de su registro como candidato, con independencia de que hubiera registrado operaciones o no en el SIF.

En ese sentido, esta autoridad abrió dicho Sistema del trece al quince de febrero del dos mil dieciocho; sin embargo, el aspirante en comento fue omiso en presentar el informe solicitado en el Sistema Integral de Fiscalización, en el plazo aludido; siendo que el día **veintiuno** del mismo mes y año, es decir, **seis días después** de que feneció el **plazo extraordinario** que esta autoridad le otorgó, el C. Pablo Arana Pérez presentó ante la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Chihuahua, un escrito por medio del cual realizó diversas manifestaciones en relación con el requerimiento que se le efectuó, informando que tuvo problemas técnicos con el Sistema Integral de Fiscalización, solicitando que éste se le habilitara de nueva cuenta.

Asimismo, el sujeto obligado presentó de manera impresa la vista previa del formato "IPR", relativo al informe de obtención de apoyo ciudadano sobre el origen, monto y destino de los recursos, del que se aprecia que dicho formato se incorporó al Sistema Integral de Fiscalización a las **veintiún horas con treinta y seis minutos del quince de febrero pasado**; no obstante, el sujeto obligado fue omiso en concluir el trámite de firma del multicitado informe.

En ese orden de ideas, en ánimo de esclarecer el dicho del aspirante, se realizó una búsqueda en el Sistema Integral de Fiscalización respecto del informe de obtención de apoyo ciudadano del aspirante a Diputado Local en Chihuahua y, se identificó que el informe del sujeto obligado se encuentra en estatus de "Enviado a Firma", pero fuera de temporalidad; tal y como se advierte a continuación:



En ese sentido, en la resolución aprobada por el Consejo General se consideró como no presentado el informe respectivo; asimismo, se verificó la existencia de reporte de incidencias conforme a los esquemas de contingencia señalados en el manual del SIF; para lo cual, el veinte de abril se solicitó vía correo electrónico a la Dirección de Programación Nacional, informará si el Sistema Integral de Fiscalización presentó fallas el día quince de febrero del presente año que pudieran imposibilitar la presentación del informe de ingresos y egresos del aspirante en comento y si el entonces aspirante generó un reporte de incidencias sobre algún caso en particular. Mediante correo electrónico del veintitrés de los corrientes, la titular de dicha dirección manifestó que no se identificó reporte alguno conforme a los esquemas de contingencia señalados en el manual.

Adicionalmente, la citada Dirección precisó que al momento del vencimiento del periodo extraordinario de presentación del informe, es decir, el quince de febrero del año en curso, el aspirante de mérito tenía designado como responsable de finanzas al usuario identificado como miriam.delgado.ext, siendo que el día dieciséis del mismo mes y año, lo sustituyó por jesus.quinonesd.ext1; razón por la cual se puede constatar que el aspirante no tuvo obstáculo alguno para acceder al

SIF. No obstante, ya se encontraba fuera de temporalidad para la presentación del informe mencionado, toda vez que ya había vencido el plazo para la presentación del mismo.

Por lo anterior, se desprende que el C. Pablo Arana Pérez no dio cumplimiento al requerimiento realizado por esta autoridad, toda vez que si bien intentó entregar a la autoridad el informe de obtención de apoyo ciudadano de manera impresa, el mismo debe de ser capturado de manera digital dentro del Sistema Integral de Fiscalización; sin que pase desapercibido, que dicha entrega la hizo el veintiuno de febrero del año en curso, es decir, **seis días después de fenecido el plazo de tres días extraordinarios otorgado por la autoridad**. Esto es, el sujeto obligado optó por tomarse tres veces el plazo otorgado para presentar el escrito aludido, siendo que, de haber tenido problemas de carácter técnico con el Sistema Integral de Fiscalización debió levantar el reporte (incidencia) correspondiente al momento, y no así cuando le había vencido en exceso el plazo otorgado por esta autoridad.

Al respecto debe señalarse, que el admitir y analizar un informe presentado de manera física y extemporánea, representaría un retroceso en materia de fiscalización, pues se permitiría la fiscalización de los sujetos obligados de manera impresa, lo que deviene en una sobrecarga procesal para la autoridad responsable de la materia, un trato diferencia respecto a otros sujetos obligados que sí cumplieron en tiempo y forma y dificultaría el manejo de la información; lo anterior, ya que de conformidad al marco jurídico aplicable, la autoridad electoral hizo una transición a un nuevo modelo de fiscalización que se basa en la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados.

En conclusión, toda vez que se corroboró que el aspirante no presentó en el SIF el informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano en el plazo establecido y, que se constató que no existió imposibilidad técnica alguna para la correcta captura por parte del C. Pablo Arana Pérez, el informe mencionado se tiene como no presentado.

En consecuencia, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano, los aspirantes a candidatos independientes multicitados, incumplieron con lo dispuesto en los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

## INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN

Ahora bien, toda vez que la conducta señalada vulnera los artículos 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se procede a individualizar la sanción correspondiente, atenta a las particularidades que en el caso se presentan.

En primer lugar, es importante señalar que la individualización de la sanción es por cuanto hace a la omisión de presentar en tiempo y forma el informe de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención de apoyo ciudadano del aspirante al cargo de Diputado Local, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua.

Resulta relevante destacar que en consideración a las reformas en materia político electoral realizadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de febrero de dos mil catorce; así como la entrada en vigor de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, se crea un sistema de fiscalización nacional sobre los ingresos y egresos de los partidos políticos, los precandidatos, candidatos independientes y aspirantes; el cual atiende a la necesidad de expedites del nuevo modelo de fiscalización integral - **registro contable en línea-, el cual debe ser de aplicación estricta a los sujetos obligados.**

En este orden de ideas, los aspirantes a candidaturas independientes tienen la obligación de conformidad con los artículos 378, numeral 1; 380, numeral 1, inciso g) y 430, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 250, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, de presentar ante la autoridad electoral, los informes correspondientes a sus actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano para obtener el registro a una candidatura independiente para un cargo de elección popular, a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, situación que en la especie no aconteció.

Al respecto, de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, aprobado por la Comisión de Fiscalización, mediante el cual se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los

avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), por lo que la Unidad Técnica procedió a requerir a los aspirantes a los cargos de Diputado Local, Ayuntamientos y Síndicos que se ubicaban en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe.

Sobre el particular, es de precisar que el citado acuerdo se emitió con la finalidad la de garantizar el debido proceso de cada uno de los entes fiscalizados, pues hacerlos sabedores del incumplimiento registrado, así como de las consecuencias que éste puede generar, les permite actuar de inmediato a efecto de razonar lo que a su derecho corresponda y, en su caso, subsanar el incumplimiento; lo que en la especie no aconteció.

Cabe destacar que el artículo 223, numeral 2, del Reglamento de Fiscalización, establece que los aspirantes podrán nombrar como responsable de finanzas al representante legal o tesorero de la asociación civil y en caso de no hacerlo serán ellos mismos los responsables de la información reportada.

Por tanto, la responsabilidad de presentar informes de ingresos y gastos de las actividades desarrolladas para obtener el apoyo ciudadano y de incorporar la documentación en el Sistema en Línea, es original y es en un primer plano para el aspirante como sujeto principal de la obligación.

En este orden de ideas, los aspirantes, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, acredite la imposibilidad para cumplir con su obligación en materia de fiscalización y en su caso, para subsanar las faltas señaladas o de presentar las aclaraciones o la documentación necesaria para desvirtuar lo observado por el órgano fiscalizador.

En este contexto y bajo la premisa de que se observen diversas irregularidades a los aspirantes, es menester que ante los requerimientos de la autoridad fiscalizadora para presentar documentación relacionada con gastos e ingresos encontrados en los informes de ingresos y gastos de actividades desarrolladas para la obtención de apoyo ciudadano, y cuando éstos se enfrenten ante la situación de no contar con la documentación solicitada, que los aspirantes presenten acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, para

acreditar que requirió a los aspirantes y que les haya dado vista de la presunta infracción.

A mayor abundamiento, el sistema normativo electoral regula los distintos procedimientos electorales bajo un sistema de etapas y plazos a fin de que los actores políticos cuenten con una mayor seguridad jurídica respecto de la actuación de la autoridad y de su propia actividad política. Esto resulta relevante en el caso específico, porque el periodo de obtención del apoyo ciudadano forma parte de un sistema mayor, esto es, el Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua.

En este contexto, las prerrogativas y las obligaciones establecidas en la ley, respecto del periodo de obtención de apoyo ciudadano, se encuentran fijadas conforme a los plazos que configuran esta etapa del Proceso Electoral. **Por tal motivo, resulta fundamental subrayar que el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma a cargo de los actores políticos, resulta esencial para dotar de mayor certeza el desarrollo de los procesos electorales.**

En el caso concreto, al omitir presentar el Informe respectivo, el aspirante a candidato independiente provocó que la autoridad se vea imposibilitada de verificar el origen, manejo y destino de los recursos de manera oportuna y de forma integral, elementos indispensables del nuevo modelo de fiscalización.

Lo anterior obstaculizó alcanzar la finalidad perseguida por el nuevo modelo de fiscalización, pues impidió realizar una revisión e intervención más ágil de la información reportada, de forma tal que la autoridad estuviera en condiciones de auditar con mayor precisión a los aspirantes a candidatos independientes. Esto es, la omisión del sujeto obligado impidió que la autoridad pudiera ejercer sus funciones en tiempo y forma.

Lo anterior cobra especial importancia, en virtud de que la certeza y la transparencia en el origen y destino de los recursos de los sujetos obligados, es uno de los valores fundamentales del estado constitucional democrático de derecho, de tal suerte que el hecho de que un aspirante no presente los Informes de ingresos y gastos, vulnera de manera directa el principio antes referido, pues al tratarse de una fiscalización en tiempo real, integral y consolidada, tal incumplimiento arrebató a la autoridad la posibilidad de verificar de manera pronta y expedita el origen y destino de los recursos que fiscaliza.

Bajo las condiciones fácticas y normativas apuntadas, al omitir presentar el informe de ingresos y gastos tendentes a la obtención del apoyo ciudadano en tiempo y forma, el aspirante a candidato independiente obstaculizó la transparencia y la rendición de cuentas en el origen y destino de los recursos al obstruir la verificación pertinente en el momento oportuno, elemento esencial del nuevo modelo de fiscalización.

En otras palabras, si los sujetos obligados son omisos en presentar los informes de ingresos y gastos, impiden que la fiscalización se realice oportunamente, provocando que la autoridad se encuentre imposibilitada de realizar un ejercicio consolidado de sus atribuciones de vigilancia sobre el origen y destino de los recursos, atentando así sobre lo establecido en la normatividad electoral.

De conformidad con la sentencia recaída al recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-05/2010, la Sala Superior ha sostenido que el régimen legal para la individualización de las sanciones en materia administrativa electoral, es el siguiente:

- a) Valor protegido o trascendencia de la norma.
- b) La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto.
- c) La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla.
- d) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado.
- e) La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta.
- f) Su comportamiento posterior, con relación al ilícito administrativo cometido.
- g) Las demás condiciones subjetivas del infractor al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma.
- h) La capacidad económica del sujeto infractor.

Ahora bien, en apego a los criterios establecidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una vez acreditada la infracción cometida y su imputación subjetiva, la autoridad electoral debe, en primer lugar, llevar a cabo la calificación de la falta, para determinar la clase de sanción que legalmente corresponda y, finalmente, si la sanción elegida contempla un mínimo y un máximo, proceder a graduarla dentro de esos márgenes.



En este sentido, para imponer la sanción este Consejo General considerará los siguientes elementos: 1. La calificación de la falta o faltas cometidas; 2. La entidad de la lesión o los daños o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta; 3. La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (reincidencia) y, finalmente, que la imposición de la sanción no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades del sujeto obligado de tal manera que comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o subsistencia.

Por lo que hace a la individualización de la sanción correspondiente, debe señalarse que la omisión de la presentación del Informe del origen y monto de los ingresos y egresos de las actividades que se desarrollan para la obtención del apoyo ciudadano a los cargos de Diputado Local, Ayuntamientos y Síndicos correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado Chihuahua, implica una trasgresión directa a las disposiciones, bienes y principios jurídicos tutelados por las normas mencionadas con antelación y reflejó la deliberada intención de los aspirantes de no someterse a la fiscalización de sus recursos, con lo cual obstaculizaron la posibilidad de verificar de manera eficaz que se hayan ajustado a la normatividad aplicable en materia de financiamiento y generaron incertidumbre sobre la legalidad del origen y destino de los recursos con los que contaron durante la etapa de apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua, lo que resulta inadmisibles en un Estado de derecho como es el que conduce las actividades de los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos, como consecuencia, deben ser sujetos de la imposición de una sanción ejemplar.

En el caso a estudio, la falta corresponde a una omisión de dar cabal cumplimiento en tiempo a las obligaciones establecidas en las disposiciones aplicables en la materia, misma que se actualizó al concluir el plazo para la presentación del informe de actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018 en el estado de Chihuahua.

Visto lo anterior, se desprende que el aspirante a candidato independiente referido incumplió con su obligación, al acreditarse la afectación al bien jurídico tutelado de certeza y transparencia en la rendición de cuentas, la cual se traduce en la especie, en la imposibilidad de ejercer las facultades de fiscalización de manera eficaz y en el tiempo establecido para ello.

Al respecto resulta necesario señalar que el artículo 378 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que los aspirantes a candidatos independientes deben presentar los Informes de ingresos y gastos a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, situación que en la especie no aconteció.

Es pertinente señalar que el periodo de actos tendentes a obtener el apoyo ciudadano concluyó en las fechas previamente señaladas, por lo que los aspirantes a candidatos independientes debieron presentar su correspondiente informe de ingresos y gastos a más tardar conforme a lo señalado en el calendario aprobado por el Consejo General.

Aunado a lo anterior, se reitera que de conformidad con lo ordenado en el Punto de Acuerdo SEGUNDO del Acuerdo identificado con la clave alfanumérica CF/001/2018, se ordenó a la Unidad Técnica de Fiscalización requiera a aquellos sujetos obligados que se ubiquen en el supuesto de omisión en el reporte de operaciones y/o presentación de informe, para que en un plazo improrrogable de 3 días naturales, registren operaciones, presenten los avisos de contratación y agenda de eventos, suban evidencia y presenten el informe atinente a sus ingresos y gastos en el SIF (con la e.Firma del responsable de finanzas designado), sin embargo, el sujeto obligado fue omiso en presentar dentro del plazo otorgado y a través del Sistema en Línea, el informe requerido.

En razón de lo anterior, y toda vez que el aspirante en comento omitió presentar el informe correspondiente, esta autoridad considera que se vulneraron directamente los valores sustantivos y bienes jurídicos tutelados por el artículo 378 y 380 numeral 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como se observa en la normativa aplicable, la autoridad electoral hizo una transición entre el modelo de fiscalización anterior y la adecuación del mismo a las leyes generales emitidas por el Congreso de la Unión derivadas de la reforma en materia electoral, ese nuevo modelo de fiscalización descansa en la existencia de medios electrónicos confiables y en el cumplimiento de tiempos acotados, por lo tanto, para que este modelo funcione hay conductas que no pueden tener lugar, tales como la **no presentación de información o documentación**, como es el caso concreto.

Aunado a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 429, numeral 1 y 431, numeral 3 de la Ley General Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 80, numeral 1, inciso c), fracción II de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con lo dispuesto en el diverso 291, numeral 2 del Reglamento de Fiscalización, la revisión de los informes de aspirantes se deberá realizar de acuerdo a los plazos establecidos; es decir, una vez que se cumpla la fecha límite para la presentación de los informes, a través del SIF, la autoridad fiscalizadora cuenta con treinta días para revisar los informes de mérito, y si durante la revisión de los mismos se advierte la existencia de errores u omisiones, el órgano fiscalizador lo notificará al sujeto obligado, para que en un plazo de siete días naturales, contados a partir del día siguiente a su aclaraciones o rectificaciones que estimen pertinentes.

Así, este Consejo General concluye que en el caso concreto el aspirante conocía con la debida anticipación el plazo dentro del cual debía presentar su informe y conocía también la obligación legal y reglamentaria de hacerlo; es decir, es deber de los sujetos obligados, en el caso de los aspirantes, de presentar en tiempo (dentro de los plazos legales previstos en la normatividad) y forma (a través del Sistema Integral de Fiscalización) el informe de los ingresos y egresos, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras con eficacia y prontitud y así, esta autoridad esté en aptitudes de garantizar que la actividad de dichos sujetos se desempeñe en apego a los cauces legales.

De todo lo anterior se desprende que los informes de los aspirantes a un cargo de elección popular no se traducen en una potestad discrecional del sujeto obligado, sino que, por el contrario, constituye un deber imperativo de ineludible cumplimiento.

Así, la satisfacción del deber de entregar los informes en materia de fiscalización, no se logra **con la presentación de cualquier documento que tenga la pretensión de hacer las veces de informe, ni presentarlo fuera de los plazos legales**, sino que es menester ajustarse a los Lineamientos técnico-legales relativos a la presentación de estos informes y los inherentes al registro de los

ingresos y egresos y a la documentación comprobatoria sobre el manejo de los recursos, para así poder ser fiscalizables por la autoridad electoral.

En conclusión, la falta de presentación de los informes de ingresos y gastos tendientes a obtener apoyo ciudadano, o su presentación fuera de los plazos legales establecidos, o través de mecanismos diversos a los estipulados en la normatividad electoral, transgrede directamente las disposiciones, bienes jurídicos y principios tutelados por las normas mencionadas con antelación y genera incertidumbre sobre el legal origen y destino de los recursos que los sujetos obligados hubieren obtenido.

Así, a juicio de esta autoridad, dada la gravedad de la conducta desplegada por el aspirante al cargo de Diputado Local, el **C. Pablo Arana Pérez**: Conclusión 1

La sanción a imponer es la prevista en la legislación de la materia, consistente en la **pérdida del derecho de las y los aspirantes infractores a ser registradas(os) o, en su caso, si ya está hecho el registro, con la cancelación del mismo como candidatos independientes al cargo respectivo en el marco del Proceso Electoral Local 2017-2018.**

Visto lo anterior, esta autoridad considera a lugar a dar vista a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, así como a los Organismos Públicos Locales en las 32 entidades, para los efectos conducentes.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...)

**En atención a los Antecedentes y Consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); y 191, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se **modifica** inciso **B**, del Considerando **25.1** de la Resolución **INE/CG198/2018**, aprobada en sesión ordinaria celebrada el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, respecto a las irregularidades encontradas de la revisión de los informes de ingresos y gastos para el desarrollo de las actividades para la obtención del apoyo ciudadano de las y los aspirantes a los cargos de Diputados Locales, Ayuntamientos y Síndicos correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2017-2018, en el estado de Chihuahua.

**SEGUNDO.** Se ordena a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral que, por su conducto remita el presente Acuerdo a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, a efecto de que sea notificado al Organismo Público Local en Chihuahua, en términos de lo precisado en el considerando 5. Lo anterior con la finalidad de que ante el incumplimiento a las obligaciones en materia de fiscalización del ciudadano Pablo Arana Pérez, se haga efectiva la sanción impuesta por este órgano colegiado en el ámbito de su competencia y no se les permita ser registrado como candidato en el marco del Proceso Electoral

**TERCERO.** Notifíquese electrónicamente la presente el contenido del presente Acuerdo al C. Pablo Arana Pérez, a través del Sistema Integral de Fiscalización, informándosele que en términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CUARTO.** Infórmese a la **Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-JDC-105/2018** dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo.

**QUINTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Toca el turno de analizar, discutir y votar el Proyecto de Acuerdo, identificado en el orden del día con el número de apartado 18.4, el cual fue reservado por la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, quien tiene el uso de la palabra. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Iniciaré señalando que estoy de acuerdo con el sentido del Proyecto, porque me parece que acata en sus términos lo ordenado por la Sala Regional, sin embargo, me parece importante hacer una reflexión y tal vez incluso incorporar a la Resolución una reflexión sobre un tema y es la consecuencia que tiene la decisión adoptada por la Sala Regional. \_\_\_\_\_

¿Ante qué estamos? Es un aspirante a una Candidatura Independiente que reporta gasolina y, sin embargo, no reporta ningún vehículo que se asocie a esa gasolina. Si nosotros observamos el Dictamen correspondiente señala textualmente que se “observó registro de gastos por concepto de gasolina”, sin embargo, no se registraron vehículos en la contabilidad tal como se muestra en el cuadro. \_\_\_\_\_

Se manda el oficio de errores y omisiones al aspirante, no contesta nada sobre este punto, por lo tanto, se sanciona como un gasto no vinculado a los actos de obtención de apoyo ciudadano. Aquí hay una imprecisión en la Resolución que emitimos nosotros, porque a pesar de que es muy clara cuál es la conducta, en la Resolución me parece por error se incorpora que utilizó recurso público para el pago de esta gasolina, el tema es que el recurso público no es la infracción, la infracción el que no tenía, no estaba vinculado con las actividades propias del Proceso Electoral, el gasto. \_

Esto se impugna ante la Sala Regional de Guadalajara y la Sala Regional nos ordena textualmente revocar la penalidad impuesta sobre esta conclusión, por lo que nos ordena modificarla. ¿Qué estamos haciendo? Acatando en sus términos la sentencia, revocando la sanción, pero ¿por qué nos revoca la sanción la Sala Regional? Porque nos señala que nosotros en la Resolución dijimos que usó Financiamiento Público y nunca recibió Financiamiento Público. El problema es que ése no era el tema, el tema era el uso de gasolina sin que estuviera asociada a actividades propias del aspirante, de la obtención de apoyo ciudadano.\_\_\_\_\_

Aquí hay un elemento un tanto contradictorio, porque la propia sentencia señala que, si bien es cierto en el caso concreto indebidamente se sancionó al promovente, también lo es que en términos de la norma citada existe el deber de usar y destinar los recursos para los fines de la campaña, lo que implica hacer del conocimiento de la autoridad administrativa el destino de cada peso involucrado en la campaña, sin que resulte relevante su procedencia.\_\_\_\_\_

De aquí, pareciera desprenderse que lo que tendríamos que hacer es sancionar bien, es decir, sancionar por un gasto sin objeto vinculado, que no fue recurso público, sin embargo, porque la Sala Regional nos revoca, lizo y llano, lo que estamos haciendo es dejando sin efectos la sanción, en la penalidad como nos lo ordena la Sala Regional.\_\_\_\_\_

Me parece que lo que valdría la pena es señalar eso; no pasa inadvertido que la observación que se formuló fue ésta, y que esto fue lo que señaló la Sala Regional, pero la orden que nos da es revocar, lizo y llano, y estamos acatando en sus términos. Pero, me parece que esto se vuelve importante porque estamos imposibilitados ahora a sancionar una conducta que de hecho, está comprobada, que de hecho, no fue desvirtuada, pero que en un acatamiento no podemos ir más allá de lo que la propia Sala Regional nos está ordenando.\_\_\_\_\_

Entonces, plantearía que incorporáramos un argumento así, manteniendo el sentido del Proyecto, precisamente en acatamiento a la sentencia de la Sala Regional Guadalajara. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Al no haber más intervenciones. \_\_\_\_\_

Secretario del Consejo, tome la votación que corresponde, tomando en consideración el planteamiento de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el apartado 18.4, tomando en consideración los argumentos de la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Procederé a realizar el engrose de conformidad con los argumentos expuestos. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG421/2018) Pto. 18.4** \_\_\_\_\_



**INE/CG421/2018**

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE LA H. SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL, RECAÍDA AL RECURSO DE APELACIÓN IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE SG-RAP-196/2017, INTERPUESTO POR EL C. PASCUAL MIRAMONTES PLASCENCIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INE/CG301/2017, RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES DE CAMPAÑA DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LOS CANDIDATOS A LOS CARGOS DE GOBERNADOR, DIPUTADOS LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y REGIDORES CORRESPONDIENTE AL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2016-2017, EN EL ESTADO DE NAYARIT (CANDIDATOS INDEPENDIENTES)**

## **ANTECEDENTES**

**I. Aprobación de Dictamen Consolidado y Resolución.** El catorce de julio de dos mil diecisiete, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Dictamen Consolidado y la Resolución, identificados con los números **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017**, sobre la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**II. Recurso de apelación.** Inconforme con la resolución mencionada, el veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, el **C. Pascual Miramontes Plascencia** interpuso recurso de apelación para controvertir la parte conducente de la Resolución **INE/CG301/2017**, así como el Dictamen Consolidado identificado con el número

**INE/CG299/2017**, mismo que fue radicado en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco (en adelante Sala Regional Guadalajara), en el expediente identificado con la clave alfanumérica **SG-RAP-196/2017**.

**III. Sentencia.** Desahogado el trámite correspondiente, la Sala Regional Guadalajara resolvió el recurso referido, en sesión pública celebrada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, determinando en el Resolutivo **ÚNICO**, lo que a continuación se transcribe:

*“**ÚNICO.** Se revocan parcialmente la resolución y el Dictamen impugnados, para los efectos precisados en la ejecutoria.”*

**IV.** Derivado de lo anterior, la ejecutoria recaída al recurso de apelación SG-RAP-196/2017 tuvo por efecto **revocar parcialmente la Resolución INE/CG301/2017**, así como la parte conducente del Dictamen Consolidado, por lo que con fundamento en los artículos 191, numeral 1, incisos c) y d); 199, numeral 1, incisos c), d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y toda vez que conforme al artículo 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las sentencias que dicten las Salas del Tribunal Electoral serán definitivas e inatacables; la Unidad Técnica de Fiscalización presenta el Proyecto de mérito.

## **CONSIDERANDO**

**1. Competencia.** Que de conformidad con lo establecido en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44, numeral 1, inciso aa); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; es facultad de este Consejo General conocer de las infracciones e imponer las sanciones administrativas correspondientes por violaciones a los ordenamientos legales y reglamentarios derivadas de la revisión de los Informes de Campaña de los Ingresos y Gastos de los Candidatos a los

cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes).

**2. Determinación del órgano jurisdiccional.** Que el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió revocar tanto el Dictamen Consolidado como la Resolución, identificados con los números de Acuerdo **INE/CG299/2017** e **INE/CG301/2017** respectivamente, dictados por este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por lo que hace a el candidato independiente **C. Pascual Miramontes Plascencia**, por lo que se procede a la modificación correspondiente, para los efectos precisados en el presente Acuerdo.

A fin de dar cumplimiento al mismo, se procederá a modificar la Resolución referida, observando a cabalidad las bases establecidas en la referida ejecutoria.

**3. Alcances del cumplimiento.** Que por lo anterior y en razón del Considerando CUARTO y QUINTO de la sentencia recaída en el expediente SG-RAP-196/2017, relativo al **estudio de fondo y efectos**, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó lo que a continuación se transcribe:

“(…)

#### **CUARTO. ESTUDIO DE FONDO**

(…)

#### **TEMA 6. No utilizó recursos públicos**

*Se estima **FUNDADO** el agravio y suficiente para absolver sobre la penalidad impuesta en la observación 12, pues la responsable reconoció que no se había ejercido financiamiento público en tanto que la sanción tiene que ver con el uso de este para un fin distinto según se expone.*

(...)

*Esto es, inculpó al promovente por haber gastado capital del erario público para la adquisición de vales de gasolina, por lo que determinó imponer una penalidad igual a \$19,929.36 diecinueve mil novecientos veintinueve pesos y 36/100 centavos.*

*Sin embargo, desde su escrito inicial desconoció tal cargo y solicitó a esta autoridad que verificara si había utilizado dinero público, para ello con fecha catorce de septiembre de este año se realizó el requerimiento pertinente obteniéndose esta respuesta.*



RECURSO DE APELACIÓN  
EXPEDIENTE: SG-RAP-196/2017  
RECURRENTE: PASCUAL MIRAMONTES  
PLASCENCIA  
AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO  
GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL  
ELECTORAL

Oficio No. INE/SCG/2461/2017

Ciudad de México, a 15 de septiembre de 2017.

**Magistrado Eugenio Isidro Gerardo Partida  
Sánchez,**  
integrante de la Sala Guadalajara del Tribunal  
Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
Presente

El que suscribe Secretario del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a lo ordenado en el requerimiento de fecha catorce de septiembre del presente año, dictado en el expediente al rubro citado, me permito informar lo siguiente:

El otrora candidato independiente Pascual Miramontes Plascencia, como quedó constado en el dictamen consolidado, no recibió el financiamiento público, por lo que no realizó gastos con este tipo de recurso.

Lo anterior, queda confirmado con el oficio IEEN/SG/2266/2017 del 17 de junio de 2017, en el cual el Instituto Estatal Electoral de Nayarit, no consideró a dicho candidato dentro de los que si recibieron financiamiento público.

No omito mencionar que tanto el dictamen como el oficio y anexos, se encuentran compilados en disco compacto (CD) certificado.

Por lo anteriormente expuesto solicito:

ÚNICO. Tener por cumplido el requerimiento de mérito.

El Secretario del Consejo General

Lic. Edmundo Jacobo Molina

C.c.p. Dr. Lorenzo Córdova Vianello - Consejero Presidente del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. - Para su superior conocimiento. - Presente.

Atento:	Lic. Edmundo Jacobo Molina
Por:	Edmundo Jacobo Molina

*Del documento en cuestión se hace evidente que el candidato independiente no utilizó dinero público y de todas maneras, la entidad fiscalizadora, lo escarmentó, cuestión que se estima indebida, ya que su reprimenda se sustenta en el agotamiento indebido de un recurso que no dispuso, por lo que debe ser liberado de esta carga indebidamente asignada.*

*Sin embargo, no inadvierte esta autoridad, que acorde con lo previsto en los numerales 394, numeral 1, inciso e), 405, 410 y 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, existe la obligación ineludible por parte de los candidatos independientes de asociar y reportar las erogaciones que hagan.*

*Esto es, si bien es cierto en el caso concreto, indebidamente se sancionó al promovente, también lo es que, en términos de la norma citada, existe el deber de usar y destinar los recursos para los fines de la campaña, lo que implica hacer del conocimiento de la autoridad administrativa el destino de cada peso involucrado en la campaña, sin que resulte relevante su procedencia.*

*(...)*

#### **QUINTO. EFECTOS.**

**Primero.** *Se revoca la penalidad impuesta sobre la conclusión 12 de la resolución.*

**Segundo.** *Se modifican la resolución impugnada, confirmando el resto de las consideraciones y sanciones en estudio.*

*(...)."*

**4. Efectos de la revocación.** Que de la lectura del SG-RAP-196/2017, se desprende que con relación a la **conclusión 12** la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que determinó revocar la sanción

impuesta derivada de la conclusión citada, así de una lectura sistemática e integral de los argumentos vertidos por el órgano jurisdiccional en el considerando correspondiente al estudio de fondo, se desprenden que la **conclusión 12** queda revocada y en consecuencia la sanción impuesta por dicha infracción quedo sin efectos, en tal sentido, si bien es cierto en el Punto Resolutivo único de la sentencia que por esta vía se acata se revoca el Dictamen y Resolución correspondientes, también es cierto que lo efectos únicamente impactan en la Resolución identificada con el INE/CG301/2017.

Es necesario aclarar que si bien es cierto el candidato independiente no utilizó recursos públicos dentro de su campaña, también es cierto que era deber del candidato usar y destinar la totalidad de los recursos para fines de la campaña, sin importar la procedencia pública o privada del financiamiento. Además tenía la obligación de hacer del conocimiento de la autoridad administrativa el destino de todos los recursos involucrados en la campaña, así como vincularlos con actividades propias para la obtención del voto, sin que resulte relevante su procedencia. En el caso que nos ocupa la infracción quedó acreditada al reportar gastos por concepto de gasolina y no vincularlo a las actividades propias de la campaña electoral del entonces candidato.

De esta forma, se enfatiza que esta autoridad electoral acata la determinación de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a la revocación de la penalidad impuesta por la conclusión 12, sin que el presente Acuerdo genere precedente sobre los criterios adoptados por este Instituto.

**5.** Que conforme al artículo 5 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este Consejo General está obligado a acatar las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en este caso el Recurso de Apelación identificado en el antecedente II del presente Acuerdo.

**6. Modificación a la Resolución.** Que en cumplimiento a la determinación de la autoridad jurisdiccional en el expediente **SG-RAP-196/2017**, por lo que hace a la **Resolución** respecto a las irregularidades encontradas en el Dictamen

Consolidado sobre la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos a los cargos de Gobernador, Diputados Locales, Ayuntamientos y Regidores correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2016-2017, en el estado de Nayarit (candidatos independientes), este Consejo General modifica el Acuerdo **INE/CG301/2017**, en la parte conducente al candidato independiente **C. Pascual Miramontes Plascencia**, específicamente en la individualización de la sanción derivada de las irregularidades acreditadas por esta autoridad, para quedar en los términos siguientes:

“(…)

#### **28.2.25 C. PASCUAL MIRAMONTES PLASCENCIA**

Previo al análisis de las conclusiones sancionatorias descritas en el Dictamen Consolidado correspondiente, cabe hacer mención que por cuestión de método y para facilitar el estudio de las diversas irregularidades encontradas en la revisión del Informe de Campaña en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2017 en el estado de Nayarit, se procederá a realizar su demostración y acreditación por subgrupos temáticos.

De la revisión llevada a cabo al Dictamen referido y de las conclusiones ahí reflejadas, se desprende que las irregularidades en que incurrió el candidato independiente son las siguientes:

- a) 7 Faltas de carácter formal: Conclusiones 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 13.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 2.**
- c) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 10.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 14.**
- e) 1 Falta de carácter sustancial: Conclusión 15.**
- f) Imposición de la sanción.**

A continuación se desarrollan los apartados en comento:

- a) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se establecieron las**

siguientes conclusiones sancionatorias de carácter formal. **Conclusiones 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 13.**

(...)

**b)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora de los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127 del Reglamento de Fiscalización. **Conclusión 2.**

(...)

**c)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatorias, infractora del artículo 127 Reglamento de Fiscalización. **Conclusión 10.**

(...)

**d)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria infractora de los artículos 431, numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 127, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización. **Conclusión 14.**

(...)

**e)** En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión de los Informes, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se estableció la siguiente conclusión sancionatoria, infractora del artículo 38, numerales 1 y 5 del Reglamento de Fiscalización: **Conclusión 15.**

(...)



## f) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

**Por lo que hace a las conclusiones 3, 5, 6, 8, 9,11 y 13<sup>1</sup>.**

En este sentido, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a las particularidades de cada infracción cometida, a efecto de garantizar que en cada supuesto se tomen en consideración las agravantes y atenuantes; y en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a cada una de las faltas cometidas.

(...)

Cabe señalar que de acuerdo a las particularidades de cada conducta, la imposición de la sanción puede incrementarse de forma sustancial de acuerdo a los criterios de la autoridad y de la vulneración a los elementos analizados en párrafos precedentes. Considerando lo anterior, los montos a imponer serían los siguientes:

Inciso	Conclusión	Tipo de conducta	Monto Involucrado	Porcentaje de sanción	Monto de la sanción
a)	3, 5, 6 8, 9, 11 y 13	Forma	N/A	70 UMAS (10 UMAS por conclusión)	\$5,284.30
b)	2	Gasto no reportado	\$42,827.80	140%	\$59,939.06
c)	10	Gasto no comprobado	\$58,794.0	100%	\$58,731.22
d)	14	No reporte con veracidad	\$58,000.00	180%	\$104,327.18
e)	15	Falta de veracidad en el registro de temporalidad de la operación	\$115,828.00	3%	\$3,472.54
Total					\$231,754.30 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Se destaca que el órgano jurisdiccional determinó confirmar la determinación de esta autoridad, por lo que dichos montos quedaron intocados y únicamente se elimina la sanción respecto de la **conclusión 12**.

<sup>2</sup> Cabe señalar que la diferencia entre el importe correspondiente a los porcentajes indicados y los montos señalados como final puede presentar una variación derivado de la conversión a Unidades de Medida y Actualización vigentes para el dos mil diecisiete.

(...)

Visto lo anterior, toda vez que esta autoridad electoral cuenta con los elementos antes señalados para determinar la capacidad económica del candidato este Consejo General concluye que la sanción a imponer al **C. Pascual Miramontes Plascencia** por lo que hace a las conductas observadas es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso d), fracción II de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales consistente en una multa equivalente a **3070 (tres mil setenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$231,754.30 (doscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)**.

Con base en los razonamientos precedentes, este Consejo General considera que la sanción que por este medio se impone atiende a los criterios de proporcionalidad, necesidad y a lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

(...).”

7. Que la sanción originalmente impuesta al **candidato independiente C. Pascual Miramontes Plascencia**, en la Resolución **INE/CG301/2017**, consistió en:

Sanciones en resolución INE/CG301/2016	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-196/2017
<b>VIGÉSIMO OCTAVO</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>28.2.25</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. PASCUAL MIRAMONTES PLASCENCIA</b> en su carácter de a candidato independiente, las sanciones siguientes:	La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó declarar fundado el agravio vertido por la apelante, por lo que determinó revocar la sanción impuesta derivada de la <b>conclusión 12</b> , por lo que se estima que la <b>conclusión 12</b> se	<b>VIGÉSIMO OCTAVO</b> Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando <b>28.2.25</b> de la presente Resolución, se impone al <b>C. PASCUAL MIRAMONTES PLASCENCIA</b> en su carácter de a candidato independiente, las sanciones siguientes:

Sanciones en resolución INE/CG301/2016	Modificación	Sanciones en Acatamiento a SG-RAP-196/2017
<p>a) 7 Faltas de carácter formal: <b>Conclusiones 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 13</b></p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 2</b></p> <p>c) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 10</b></p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 12</b></p> <p>e) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 14</b></p> <p>f) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 15</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>3,334</b> (tres mil trescientos treinta y cuatro) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de <b>\$251,683.66</b> (Doscientos cincuenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos 66/100 M.N.).</p>	<p>revoca lisa y llanamente.</p>	<p>a) 7 Faltas de carácter formal: <b>Conclusiones 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 13</b></p> <p>b) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 2</b></p> <p>c) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 10.</b></p> <p>d) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 14.</b></p> <p>e) 1 Falta de carácter sustancial: <b>Conclusión 15.</b></p> <p>Una multa equivalente a <b>3,070 (tres mil setenta)</b> Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de <b>\$231,754.30 (Doscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 30/100 M.N.)</b>.</p>

8. Que de conformidad con los razonamientos y consideraciones establecidas en el presente Acuerdo, se impone al **C. Pascual Miramontes Plascencia**, la siguiente sanción:

### “R E S U E L V E

(...)

**VIGÉSIMO OCTAVO** Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando **28.2.25** de la presente Resolución, se impone al **C. PASCUAL MIRAMONTES PLASCENCIA** en su carácter de a **candidato independiente**, las sanciones siguientes:

- a) 7 Faltas de carácter formal: **Conclusiones 3, 5, 6, 8, 9, 11 y 13.**
- b) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 2.**

- c) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 10.**
- d) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 14.**
- e) 1 Falta de carácter sustancial: **Conclusión 15.**

Una multa equivalente a **3,070 (tres mil setenta)** Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil diecisiete, misma que asciende a la cantidad de **\$231,754.30 (Doscientos treinta y un mil setecientos cincuenta y cuatro pesos 30/100 M.N.).**

(...).”

**En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso jj); 426, numeral 1 y 427, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **A C U E R D A**

**PRIMERO.** Se modifica la parte conducente de la Resolución **INE/CG301/2017**, aprobado en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el catorce de julio de dos mil diecisiete, en los términos precisados en los Considerandos **4, 6 y 8** del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.** Infórmese a la **Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Primera Circunscripción Electoral Plurinominal con sede en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco dentro de las veinticuatro horas siguientes a la aprobación del presente Acuerdo**, sobre el cumplimiento dado a la sentencia emitida en el expediente **SG-RAP-196/2017**.

**TERCERO.** Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales, notifique el presente Acuerdo al Instituto Estatal Electoral de Nayarit, para que dicho organismo esté en posibilidad de notificar al **C. Pascual Miramontes Plascencia** dentro de las **cuarenta y ocho horas siguientes a la**

**aprobación del presente Acuerdo.** Derivado de lo anterior, se solicita al Organismo Público Local remita a la Sala Regional Guadalajara y a este Instituto, las constancias de notificación correspondientes en un plazo no mayor a veinticuatro horas siguientes después de haberlas practicado.

**CUARTO.** Hágase del conocimiento del Instituto Estatal Electoral de Nayarit a efecto de que procedan al cobro de las sanciones impuestas a la otrora candidata independiente, **C. Pascual Miramontes Plascencia**, en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, de conformidad con lo establecido en el considerando ocho del presente Acuerdo, con relación al Acuerdo INE/CG61/2017.

**QUINTO.** Se instruye al Instituto Estatal Electoral de Nayarit que en términos del artículo 458, numeral 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los recursos obtenidos de las sanciones económicas impuestas, sean destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

**SEXTO.** Se solicita al Organismo Público Local que informe al Instituto Nacional Electoral respecto de la ejecución de la sanción impuesta en la presente Resolución, en términos de lo dispuesto en el Artículo Transitorio PRIMERO del Acuerdo INE/CG61/2017.

**SÉPTIMO.** En términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación los recursos que proceden en contra de la presente determinación son los denominados “recurso de apelación” y “juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano”, según sea el caso, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**OCTAVO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Le pido informe el contenido de los Acuerdos aprobados a la Sala Superior, así como a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que corresponde para los efectos conducentes. \_\_\_\_\_

Del mismo modo, Secretario del Consejo, le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe sobre el registro de operaciones de ingresos y gastos de los candidatos del Proceso Electoral Federal 2017-2018, con corte al 22 de abril de 2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Ciro Murayama. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Ciro Murayama Rendón:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Se presenta hoy ante el Consejo General el Primer Informe del registro de ingresos y gastos de los candidatos a cargos de elección Federal con corte al 23 de abril, este Informe muestra lo que los candidatos y sus equipos han reportado en el Sistema Integral de Fiscalización, recuérdese, si hay algo nuevo en esta campaña presidencial es que la calificación de la elección va a tomar en cuenta el comportamiento financiero de los actores políticos, este Instituto deberá votar los Dictámenes y Proyectos de Resolución en materia de fiscalización unas semanas después de la Jornada Electoral. \_\_\_\_\_

Por ello los candidatos deben presentar sus Informes en tiempo real y tienen hasta 72 horas después de realizado un acto para reflejar los costos del mismo y de dónde salió el recurso involucrado. En nuestro Portal de Transparencia, cada día actualizamos la información conforme la van reportando los equipos de campaña,

ojalá que haya una suerte de sana competencia entre las opciones políticas para demostrar una cultura de rendición de cuentas y de transparencia en el origen, destino y uso del dinero involucrado en sus campañas, la rendición de cuentas debe ser el espejo financiero de las actividades proselitistas. \_\_\_\_\_

El Informe circulado tiene corte del 23 de abril, pero me voy a referir al último corte, el de ayer 24 de abril, los 2 mil 172 candidatos de partidos políticos e independientes registrados a cargos federales, han reportado ingresos por 453.4 millones de pesos y gastos por 355.4 millones de pesos, los candidatos a la Presidencia han reportado ingresos por 165.3 millones de pesos y gastos por 157.2 millones de pesos, en términos porcentuales esto significa que hasta el momento, y según lo que declaran los actores, el 36.5 por ciento de los ingresos y el 44.2 por ciento de los gastos en campañas federales se concentra en la Presidencia; los candidatos al Senado han ingresado 180 millones de pesos, el 39.8 por ciento de los ingresos reportados, para gastos federales se han gastado 127 millones, equivalentes al 35.7 por ciento de los gastos. \_\_\_\_\_

Finalmente, los candidatos a la Cámara de Diputados han reportado ingresos por 107 millones de pesos y gastos por 71.2 millones de pesos, esto es el 23.7 y el 20 por ciento respecto al total, respectivamente. \_\_\_\_\_

Un análisis más detenido de los reportes de los Candidatos a la Presidencia permite observar que en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) se han reflejado 165.3 millones de ingresos y 157.2 millones de gastos. \_\_\_\_\_

Por candidato, Ricardo Anaya da cuenta de ingresos por 134 millones, José Antonio Meade por 9.5 millones, Andrés Manuel López Obrador 9 millones Margarita Ester Zavala 8.5 millones, y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 2.9 millones de pesos. \_\_\_\_\_

En los gastos, Ricardo Anaya informa erogaciones por 118 millones de pesos, el 75 por ciento de lo gastado por los 5 candidatos; José Antonio Meade 26.6 millones, el 17 por ciento del gasto total a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador 9.9

millones, el 6.3 por ciento; Margarita Ester Zavala 1.5 millones, el 1 por ciento; y Jaime Heliodoro Rodríguez 780 mil pesos, 0.5 por ciento.\_\_\_\_\_

Advierto que el que los distintos candidatos lleguen a tener más gastos que ingresos no es irregular en términos contables en el transcurso de las campañas, como los candidatos deben dar cuenta de sus gastos desde que firman un Contrato, es viable que gastos a concretarse en el futuro se puedan registrar desde ahora, de hecho, eso sería lo ideal, que cada gasto previsto comprometido con los distintos proveedores en las semanas por venir se vaya cargando desde ahora en el Sistema, eso nos permitirá fiscalizar de mejor forma.\_\_\_\_\_

En cambio, ir retrasando la rendición de cuentas o subir al Sistema Integral de Fiscalización (SIF) información con demora conspira contra la fiscalización porque dificulta la verificación.\_\_\_\_\_

Por ello, quiero enfatizar que hasta el 23 de abril los candidatos a la Presidencia habían reportado 728 operaciones: Ricardo Anaya llevaba 167 operaciones, el 23 por ciento del total; José Antonio Meade 377 operaciones, el 52 por ciento del total, Andrés Manuel López Obrador 38 operaciones, el 5 por ciento del total; Margarita Ester Zavala 137 operaciones, el 19 por ciento; y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón 9 operaciones, el 1 por ciento.\_\_\_\_\_

Además, el 13 por ciento de las operaciones de Ricardo Anaya son extemporáneas, mientras que ninguna lo es en el caso de José Antonio Meade; el 70 por ciento de las de Andrés Manuel López Obrador se cargan con retraso, fuera del plazo normativo, Margarita Ester Zavala tiene solo el 2.4 por ciento de sus operaciones fuera de tiempo y Jaime Heliodoro Rodríguez realiza de forma extemporánea el 55 por ciento de su rendición de cuentas en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF).\_\_\_\_\_

En lo que toca a eventos públicos, actos de campaña, Ricardo Anaya ha realizado 53, con un costo promedio de 2.2 millones de pesos por cada evento; José Antonio Meade 67 eventos, costo medio de 397 mil pesos; Andrés Manuel López Obrador con 49 eventos, costo promedio de 203 mil pesos; Margarita Ester Zavala una erogación



promedio de 46 mil pesos; y 55 mil en el caso de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.\_\_\_\_\_

Hasta ahora se han realizado 1 mil 744 recorridos en todas las calles y carreteras del país y se han detectado 16 mil 495 testigos de propaganda.\_\_\_\_\_

Únicamente de los candidatos a la Presidencia se ha recabado información de 5 mil 185 testigos de publicidad. Pero, desde ahora es posible detectar omisiones en la rendición de cuentas, por ejemplo, al candidato de la Coalición “Juntos Haremos Historia” se le han detectado 1 mil 727 testigos de propaganda en vía pública, sin embargo, el candidato ha reportado gastos en este rubro de tan solo 53 mil 500 pesos, lo que significa que cada propaganda, cada anuncio, barda, espectacular, en promedio le ha costado 31 pesos.\_\_\_\_\_

José Antonio Meade tienen detectados 2 mil 053 testigos de propaganda en vía pública, y como ha reportado 185 mil 600 pesos, tiene un promedio de gasto de 90 pesos por anuncio, por barda.\_\_\_\_\_

Mientras que el candidato de la Coalición “Por México al Frente” tiene detectados 1 mil 384 testigos, y ha reportado gastos de 31.8 millones en este rubro, esto es 22 mil 950 pesos por espectacular.\_\_\_\_\_

Finalmente, los candidatos independientes a la Presidencia de la República no han reportado gastos de propaganda en vía pública a pesar de que ya hemos recopilado 21 testigos de la candidata Margarita Ester Zavala.\_\_\_\_\_

Esta campaña ya implica 129 visitas a eventos de los candidatos.\_\_\_\_\_

Esta campaña debe ser la más fiscalizada por el Instituto Nacional Electoral, pero tengan conciencia de que será también la más monitoreada por la sociedad. Cumplir con la rendición de cuentas no es una opción al gusto de los actores políticos, es su obligación. Siguiendo el principio de máxima publicidad, esta autoridad no cejará en transparentar cómo informan de sus ingresos y gastos a lo largo de las campañas en curso.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Ciro Murayama.

Permítanme intervenir en este punto. \_\_\_\_\_

Estamos recibiendo el Primer Informe sobre los Ingresos y Gastos de Campaña que han reportado los partidos políticos, candidatas y candidatos durante el Proceso Electoral de 2018. Se trata del dinero ejercido en 23 días de los 90 que durará la competencia por el voto de las y los ciudadanos. \_\_\_\_\_

Permítanme subrayar algunos datos con fecha del corte del 24 de abril que pueden ser consultados por cualquier usuario interesado en los gastos de las campañas en la página del Instituto Nacional Electoral. \_\_\_\_\_

El primer dato que quiero señalar es que, como ya mencionaba el Consejero Electoral Ciro Murayama, las operaciones registradas al día de hoy, reflejan una vez más, una notable diferencia entre las actividades registradas y los gastos que reportan las distintas fuerzas políticas. \_\_\_\_\_

En segundo lugar, ello se comprueba comparando, como ya también mencionaba el Consejero Electoral Ciro Murayama, solamente los eventos realizados con los datos reportados por la y los candidatos a la Presidencia de la República, no hablemos de lo que tiene que ver, como se ha mencionado también, con la propaganda electoral. \_\_\_\_\_

No pretendo detenerme en las cifras en concreto de este Informe que han sido previamente analizadas por el Consejero Electoral Ciro Murayama, para destacar la importancia del enfoque integral con el cual el Instituto Nacional Electoral está verificando que la disputa por los poderes públicos transcurra con equidad, y que el dinero utilizado provenga exclusivamente de fuentes autorizadas por la Ley y conforme a la reglamentación aplicable. \_\_\_\_\_

Es por ello que el Informe que está a nuestra consideración, proviene de 3 fuentes conforme a lo establecido en el Reglamento de Fiscalización. \_\_\_\_\_

Primer lugar, la información contable que registran los partidos políticos y contendientes en dicho Sistema, en el Sistema de Fiscalización. \_\_\_\_\_

Segundo lugar, las visitas de verificación efectuadas para identificar directamente en campo por parte de nuestros auditores los gastos realizados tanto en los actos públicos como en la propaganda electoral, que constituye en tercer lugar, el monitoreo que se realiza para tal efecto, tanto de la vía pública como de medios impresos y de redes sociales por parte de esta institución. \_\_\_\_\_

Adicionalmente, para fortalecer el principio constitucional de equidad en las contiendas en este 2018, estamos utilizando una herramienta adicional. Me refiero a la colaboración institucional en grados no antes explotados. \_\_\_\_\_

En efecto, derivado del enfoque de inteligencia financiera para evaluar las operaciones que directa e indirectamente involucran a las operaciones de los partidos políticos, hemos establecido acuerdos con las autoridades financieras, hacendarias y bancarias de nuestro país para obtener oportunamente información que se considere irregular o inusual para los actores políticos y sus proveedores. \_\_\_\_\_

Además, con la finalidad de darle certeza a la sociedad sobre el dinero invertido en la política y propiciar un mayor vínculo de la ciudadanía con el curso de las campañas, fortaleceremos aún más el contexto de exigencia de la sociedad hacia los partidos, coaliciones, candidatos y candidatas mediante la difusión en línea de los datos de ingresos y egresos que cotidianamente deben estar reportando en el Sistema Integral de Fiscalización de todos quienes pretenden obtener un cargo de representación del Estado en las urnas. \_\_\_\_\_

El Instituto Nacional Electoral, lo digo sin medias tintas, pretende que en las tareas de Fiscalización la Sociedad Civil, particularmente la Sociedad Civil organizada y en concreto aquellas organizaciones que han sido emblemáticas en el combate a la corrupción, sean aliados estratégicos de esta propia institución y en tiempo real, así como la fiscalización opera, también ellos desde la calle, desde sus ámbitos de influencia puedan generar contextos de exigencia. \_\_\_\_\_

De eso se trata al final precisamente la democracia de que la exigencia como parte, digámoslo así, de la actuación de los actores que interactúan en política, efectivamente se concrete desde distintos ámbitos y perspectivas. \_\_\_\_\_

El Instituto Nacional Electoral lo hará desde el ámbito institucional, la sociedad aspiramos a que así queremos que ocurra, lo hará desde el ámbito de la sociedad misma. \_\_\_\_\_

Se trata de que la sociedad conozca día a día directamente en la pantalla del Instituto Nacional Electoral cómo evolucionan los ingresos y egresos que reportan los contendientes de este Proceso Electoral, tanto a nivel Federal como a nivel Local. \_\_\_\_

La información contenida en el acceso de fiscalización que está en la página principal del Instituto Nacional Electoral, facilita a la ciudadanía organizaciones de la sociedad o medios de comunicación dar seguimiento diariamente, si fuera el caso, al dinero invertido a la competencia electoral o al menos en el reporte que las y los contendientes hagan, sin tener que esperar a que se presenten los Informes que periódicamente estaremos presentando al Consejo General. Este es el primero de muchos que vendrán. \_\_\_\_\_

Con estas medidas lo que pretendemos, para decirlo de una vez, es inhibir las conductas contables y financieras irregulares de quienes buscan el poder en las urnas o, en todo caso, encarecerlas. \_\_\_\_\_

Esta es la primera vez en nuestra historia que la sociedad mexicana podrá conocer día a día cómo evolucionan los ingresos y gastos de las y los candidatos y, en particular, de quienes aspiran a la Presidencia de la República. \_\_\_\_\_

Dar a conocer en este Consejo General los Informes de ingresos y gastos, estrechar los mecanismos de comunicación con las autoridades financieras y fiscales y elevar el contexto de exigencia de la sociedad, desde la sociedad a las y los candidatos, son medidas preventivas que buscan alertar oportunamente a los contendientes sobre el desempeño administrativo y contable de sus campañas, por un lado, pero también contribuir a que la sociedad conozca mejor a quienes aspiran a integrar los cargos de representación del Estado mexicano pidiéndoles su voto. \_\_\_\_\_

La rendición de cuentas, no solamente es cumplir con un mandato y un pilar del listado democrático, es también proveer a quienes deciden en democracia, las y los

electores, de información importante para poder decidir eventualmente el sentido del voto.\_\_\_\_\_

La rendición de cuentas pasa también por las urnas, no son pocos los teóricos que han señalado a las elecciones en democracia no solo como un mecanismo para integrar la representación popular, sino también como un mecanismo para que el principio de rendición de cuentas opere, el Instituto Nacional Electoral está del lado de la sociedad en esta lógica y facilitando el cumplimiento de ese rol.\_\_\_\_\_

Concluyo agradeciendo el intenso trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización y el de la y los integrantes de la Comisión de Fiscalización respectiva, por las importantes tareas que están realizando para garantizar la equidad en el dinero invertido en las contiendas electorales de este año y contribuir a la transparencia de la Elección más grande que haya vivido la sociedad mexicana.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra, el Licenciado Javier Náñez Pro, representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón.\_\_\_\_\_

**El C. representante del Candidato Independiente Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el C. Javier Náñez Pro:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Solo hacer una precisión muy rápida, en cuanto al reporte de los ingresos y gastos que fue mencionado en esta mesa que se realizó en más del 50 por ciento de manera extemporánea, sí destacar que no se contó con acceso al Sistema Integral de Fiscalización, sino hasta alrededor de 2 o 3 días después de haberse hecho formalmente el registro. Entonces, fue físicamente imposible para el candidato a quien represento hacer reportes antes de que tuviera acceso a este propio Sistema de Fiscalización.\_\_\_\_\_

En ese tipo de casos sí quisiera puntualizarlo en la mesa para que cuando sea el momento de hacer el Dictamen Consolidado de todo lo reportado por parte de los Candidatos Independientes, ya cercando la fecha de cuando se vaya terminando la Elección. Que se tome esto en cuenta para que no se vaya a caer en el error de imponerle una sanción a mi Candidato cuando le era físicamente imposible hacer el

reporte de los gastos del inicio, porque el personal del Sistema Integral de Fiscalización, no estaba preparado para el registro de Jaime Heliodoro Rodríguez como Candidato Independiente a la Presidencia de la República. \_\_\_\_\_

Por su atención, muchas gracias. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Diputada Mariana Benítez, Consejera del Poder Legislativo del Partido Revolucionario Institucional. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera del Poder Legislativo, Diputada Mariana Benítez Tiburcio:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Quisiéramos sobre este punto llamar la atención de algunos aspectos de este Informe sobre el Registro de Operaciones de Ingresos y Gastos. Primero dejar muy claro que, como se desprende de la propia información, de los propios cuadros que vienen ahí, José Antonio Meade tiene el 100 por ciento del registro de operaciones hechas en tiempo y forma, es decir, no tenemos registros extemporáneos. \_\_\_\_\_

Por otro lado, sí remarcar algo que salta a la vista que es que el 70.27 por ciento del registro de operaciones de Andrés Manuel López Obrador son extemporáneas. Ahí me llama la atención, porque el Consejero Electoral Ciro Murayama, apunté las cifras que reportó y decía que Ricardo Anaya había reportado 117 millones, de pesos, más/menos, José Antonio Meade 26.6 millones de pesos y que Andrés Manuel López Obrador el 6.3 por ciento, o sea 9.9 millones de pesos; pero de la información que se advierte en las gráficas tenemos que es solamente 1 millón 429 mil pesos. \_\_\_\_\_

De cualquier forma, advertir el incumplimiento que ha venido manejando Andrés Manuel López Obrador al subir esta información, retomo el comentario del Consejero Presidente en el sentido de que esta información es importante para que la ciudadanía vaya viendo cómo se está gastando en esta campaña. Sí llama de la extemporaneidad con la que se están reportando los gastos, en este caso de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. \_\_\_\_\_

Por otro lado, también llama la atención que todos los candidatos han reportado su lista de proveedores, menos precisamente Andrés Manuel López Obrador, no aparecen quiénes son los proveedores de él, sí aparece, por ejemplo, Ricardo Anaya, aparecen de José Antonio Meade, aparecen de Margarita Ester Zavala y de Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, no así de él. \_\_\_\_\_

No quisiéramos pensar que va a pasar lo mismo que lo que pasó en el Estado de México que después fue saliendo que los proveedores eran familiares de Delfina Gómez, la candidata, ahí empezaba una serie de circunstancias que se fueron ventilando en la opinión pública. \_\_\_\_\_

Me parece que es importante que esta información se conozca en tiempo. \_\_\_\_\_

Concluyo reiterando que nosotros seguiremos dando cumpliendo oportunamente en términos de la Legislación. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Diputada Mariana Benítez. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe. \_\_\_\_\_

Le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente punto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Informe de avances del Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero en el Proceso Electoral 2017-2018, marzo de 2018. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias. Señoras y señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Informe mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

De manera breve, el Informe que hoy se pone a su consideración de este Consejo General da cuenta de los trabajos correspondientes al Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero relacionados con el mes de marzo, engloba todas las acciones y actividades tendientes al registro, promoción del voto y credencialización desde el extranjero, en cumplimiento a las facultades de la Comisión Temporal de Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero. \_\_\_\_\_

El documento especifica el desarrollo de los trabajos para la recepción, clasificación y resguardo de los sobres-voto, así como los aspectos relativos a la integración de las Mesas de Escrutinio y Cómputo a instalarse en el local único. Es preciso añadir que el próximo mes estaremos integrando estos paquetes electorales postales que serán enviados a más tardar el 21 de mayo a los ciudadanos en el extranjero que quedaron debidamente registrados. \_\_\_\_\_

En este propósito se han llevado a cabo 8 reuniones con los Organismos Públicos Locales de las entidades con procesos coincidentes para coordinar conjuntamente fechas para la entrega de documentación y materiales electorales, así como atender consultas de los Organismos Locales, relacionadas al Registro, Capacitación y Organización Electoral. \_\_\_\_\_

Cabe destacar que del 1 de septiembre al 31 de marzo de 2018, la ciudadanía solicitó su inscripción en la Lista Nominal de Residentes en el Extranjero a través del Sistema Informático dispuesto para tal efecto. \_\_\_\_\_

Los registros verificados y dictaminados positivos con fecha al 23 de abril pasado ascienden a 161 mil 188. \_\_\_\_\_

Es importante señalar que los ciudadanos en el extranjero que tramitaron su credencial entre el 1 de septiembre al 31 de marzo de 2018 y firmaron su intención de votar en la solicitud de su Credencial en el Consulado, tienen hasta las 24:00 horas del 30 de abril próximo para confirmar que la recibieron y quedar así registrados para votar. En virtud de lo anterior, el registro no ha concluido en su totalidad y de esta forma las cifras de solicitudes para votar desde el extranjero podrán variar todavía. \_\_\_\_



Hasta ahora de Estados Unidos proceden el 80.3 por ciento de las solicitudes para votar, de Canadá el 4.67, de España el 2.5 por ciento, Alemania, Francia y Reino Unido más del 1 por ciento, y del resto de los 121 países en donde hay mexicanos con intención de votar, menos del 1 por ciento, pero con por lo menos una solicitud de registro para votar.\_\_\_\_\_

Quiero resaltar el apoyo de organizaciones de migrantes, instituciones académicas, medios de comunicación, ciudadanos, identidades de la administración pública que se han sumado en este esfuerzo, para que más mexicanos se hayan podido registrar y voten en las próximas elecciones; tal es el caso de la Secretaría del Trabajo a través de su apoyo para inscribir a ciudadanos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos mediante conferencias de difusión en sus 65 plazas comunitarias en el extranjero, el Instituto Nacional de Migración con el Programa Paisano, y especialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, que dispuso que los Consulados ampliaran sus horarios y laboraran hasta la madrugada de la Jornada del 31 de marzo.\_\_\_\_\_

Estamos por iniciar la etapa final, para que las mexicanas y los mexicanos desde el extranjero, puedan ejercer su derecho al voto.\_\_\_\_\_

Tendremos que seguir trabajando con los Institutos Locales para llegar a buen puerto, y hasta ahora, se tienen registrados para votar en la Ciudad de México 25 mil 956 ciudadanos, para Jalisco 14 mil 461, Guanajuato 9 mil 824, Puebla 9 mil 301, Morelos 3 mil 74, Chiapas 2 mil 128, y Yucatán 945.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade.\_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe que nos ocupa, y le pido al Secretario del Consejo, que continúe con el siguiente asunto del orden del día.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determina el número adicional de boletas para las elecciones a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y Senadurías que se imprimirán para que las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero, emitan su voto durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Señoras, señores Consejeros y representantes, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.\_\_\_\_\_

Dado que no hay intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto 21.\_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo.\_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG422/2018) Pto. 21**\_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DETERMINA EL NÚMERO ADICIONAL DE BOLETAS PARA LAS ELECCIONES DE PRESIDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SENADURÍAS QUE SE IMPRIMIRÁN PARA QUE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EMITAN SU VOTO DURANTE EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018, ASÍ COMO SU RESGUARDO Y DESTRUCCIÓN EN LOS TÉRMINOS DEL LIBRO SEXTO DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**

## **G L O S A R I O**

**CNV:** Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.

**Consejo General:** Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

**CPEUM:** Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

**CPVE:** Credencial para Votar desde el Extranjero.

**DEOE:** Dirección Ejecutiva de Organización Electoral.

**DERFE:** Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.

**Instituto:** Instituto Nacional Electoral.

**Juicio Ciudadano:** Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano.

**Junta General Ejecutiva:** Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral.

**LGIPE:** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

**Lineamientos:** Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

**LNERE:** Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.

**OPL:** Organismos Públicos Locales Electorales.

**PEF:** Proceso Electoral Federal 2017-2018.

**PEP:** Paquete Electoral Postal.

**Procedimiento:** Procedimiento para la integración y envío del Paquete Electoral Postal, y recepción del Sobre-Postal-Voto, Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.

**Reglamento:** Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral.

**Tribunal:** Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

**VMRE:** Voto de las y los Mexicanos Residentes en el Extranjero.

## **ANTECEDENTES**

- I. El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la CPEUM en materia político-electoral.
- II. El 23 de mayo de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la LGIPE.
- III. El 7 de septiembre de 2016, mediante el Acuerdo INE/CG661/2016, este Consejo General aprobó el Reglamento.
- IV. El 7 de septiembre de 2016, a través del Acuerdo INE/CG655/2016, este Consejo General estableció la creación de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
- V. El 28 de junio de 2017, mediante el Acuerdo INE/CG193/2017, en sus puntos Segundo y Tercero, este Consejo General aprobó los plazos para la actualización del Padrón Electoral y los cortes de la Lista Nominal de Electores, con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
- VI. El 28 de junio de 2017, este Consejo General, mediante el Acuerdo INE/CG194/2017, aprobó el Plan Integral de Trabajo del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero en los Procesos Electorales 2017-2018.

- VII.** El 28 de junio de 2017, mediante Acuerdo INE/CG195/2017, este Consejo General aprobó los Lineamientos para la conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
- VIII.** El 28 de junio de 2017, vía el Acuerdo INE/CG196/2017, este Consejo General aprobó los Lineamientos para la organización del voto postal de las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, mismos que fueron incorporados al Reglamento como su Anexo 21.
- IX.** El 5 de septiembre de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG390/2017, el Plan y Calendario Integral del PEF, a propuesta de la Junta General Ejecutiva.
- X.** El 8 de septiembre de 2017, en sesión extraordinaria, el Consejero Presidente de este Consejo General emitió el pronunciamiento para dar formal inicio al PEF.
- XI.** El 8 de septiembre de 2017, por medio del Acuerdo INE/CG408/2017, este Consejo General aprobó la integración de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral a partir de la fusión de las Comisiones de Organización Electoral y de Capacitación Electoral y Educación Cívica, así como la ratificación de la presidencia de la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero.
- XII.** El 5 de octubre de 2017, a través del Acuerdo INE/CG450/2017, este Consejo General aprobó el diseño y la impresión de la boleta y demás documentación electoral para el PEF.
- XIII.** El 15 de noviembre de 2017, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero, por medio del Acuerdo INE/CVMRE-05SO: 15/11/2017, aprobó la modificación al Anexo 21 del Reglamento.

- XIV.** El 31 de enero de 2018, vía el Acuerdo INE/CG49/2018, este Consejo General aprobó el diseño y contenido de los elementos que conforman el PEP para el VMRE en los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
- XV.** El 21 de febrero de 2018, por medio del Acuerdo INE/CVMRE-03SE: 21/02/2018, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó el Procedimiento, en cumplimiento del Punto cuarto del Acuerdo INE/CG49/2018.
- XVI.** El 30 de marzo de 2018, mediante el Acuerdo INE/CG301/2018, este Consejo General aprobó las modificaciones a los formatos de la diversa documentación electoral, con motivo del registro de la coalición denominada “Coalición por México al Frente” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano; la coalición denominada “Juntos Haremos Historia” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: del Trabajo, Morena y Encuentro Social; y la coalición “Todos por México” integrada por los Partidos Políticos Nacionales: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, así como de candidaturas independientes a la Presidencia de la República, senadurías y diputaciones federales por el principio de mayoría relativa para el PEF.
- XVII.** El 5 de abril de 2018, mediante el Acuerdo INE/JGE56/2018, la Junta General Ejecutiva ordenó la impresión de las Boletas Electorales y demás documentación y materiales que se utilizarán en la conformación y envío de los Paquetes Electorales Postales para el ejercicio del VMRE durante los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
- XVIII.** El 19 de abril de 2018, mediante el Acuerdo INE/CVMRE-04SE: 19/04/2018, la Comisión Temporal del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobó someter a este órgano superior de dirección el Proyecto de Acuerdo del Consejo General, por el que se determina el número adicional de boletas para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías que se imprimirán para que las y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto durante el PEF, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la LGIPE.

## **CONSIDERANDO**

### **Competencia**

Este Consejo General es competente para determinar el número adicional de boletas para las elecciones de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos y senadurías que se imprimirán para que las y los mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto durante el PEF, así como su resguardo y destrucción en los términos del Libro Sexto de la LGIPE, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso b), numeral 3 de la CPEUM; los artículos 32, numeral 1, inciso b), fracción IV; 44, numeral 1, inciso gg), y 339, numeral 4 de la LGIPE, así como el numeral 20 del Anexo 21 del Reglamento.

### **Fundamentación**

1. En el artículo 41, Base V de la CPEUM se determina que la organización de las elecciones es una función estatal que se realiza a través del Instituto y los OPL.
2. Para los Procesos Electorales Federales, entre otras cosas, corresponde al Instituto la impresión de documentos y la producción de materiales electorales, según lo fijado en el artículo 41, Base V, Apartado B, inciso b), numeral 3 de la CPEUM y el artículo 32, numeral 1, inciso b), fracción IV de la LGIPE.
3. El artículo 329, numeral 1 de la LGIPE, establece que las y los ciudadanos que residen en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para las elecciones de Presidencia y senadurías, así como de Gubernaturas de las entidades federativas y Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, siempre y cuando así lo determinen las Constituciones de los estados.
4. De conformidad con lo expuesto en el artículo 330 de la LGIPE, para que las y los ciudadanos que residen en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto, además de cumplir lo dispuesto en el artículo 34 de la CPEUM y el párrafo 1 del artículo 9 de la LGIPE, deben solicitar a la DERFE su inscripción en el Padrón Electoral y en la LNERE, y manifestar el domicilio en

el extranjero en el que se les harán llegar las boletas electorales o el medio electrónico en el que podrán recibir información en relación al Proceso Electoral.

5. El VMRE, según lo dispuesto en el artículo 329, numeral 2 de la LGIPE, puede hacerse por correo, mediante la entrega de la boleta en forma personal en módulos que se instalen en embajadas o consulados, o por vía electrónica.
6. Corresponde a este Consejo General determinar la forma en que las y los ciudadanos que residen en el extranjero remitirán su voto al Instituto, de acuerdo con lo señalado en el artículo 343, numeral 1 de la LGIPE.
7. En virtud de lo expuesto en el artículo 339, numeral 1 de la LGIPE, a más tardar el 31 de diciembre del año anterior al de la elección, el Consejo General debe aprobar el formato de boleta electoral impresa que utilizarán las y los ciudadanos residentes en el extranjero para la elección de que se trate, además de los formatos de las actas para escrutinio y cómputo, y demás documentos y materiales electorales.
8. El numeral 2 del artículo 339 de la LGIPE establece que tras la aprobación del formato de las boletas y materiales electorales para el VMRE, la Junta General Ejecutiva ordenará su impresión.
9. En el numeral 4 del mismo artículo se mandata que el número de boletas que se impriman para el VMRE deberá ser igual al número de electores inscritos en las listas nominales correspondientes, además de que este Consejo General tendrá que determinar la impresión de un número adicional de estas boletas.
10. De acuerdo con el artículo 102, numeral 1 del Reglamento, para el VMRE este Consejo General emitirá los Lineamientos a fin de establecer los mecanismos para la inscripción en el listado nominal correspondiente, el envío de documentos y materiales electorales, la modalidad de emisión del voto, así como el escrutinio y cómputo del voto proveniente del extranjero para las elecciones federales y, en su caso, para las elecciones locales en las entidades federativas cuyas legislaciones también lo prevean, de conformidad con el Libro Sexto de la LGIPE.



11. Por su parte, el numeral 4 del mismo artículo del Reglamento, refiere que las características, contenidos, especificaciones, procedimientos y plazos para la elaboración y, en su caso, impresión de la documentación y material electoral para garantizar el VMRE, tanto en los Procesos Electorales Federales como en los locales cuyas legislaciones permitan este voto, se ajustarán a lo establecido en los Lineamientos que emita este Consejo General y los convenios generales de coordinación y colaboración y sus anexos técnicos.
12. La DEOE, según lo expuesto en el numeral 4 del artículo 149 del Reglamento, es la responsable de establecer las características, condiciones, mecanismos y procedimientos de los diseños, elaboración, impresión, producción, almacenamiento y distribución de la documentación y materiales electorales para las elecciones federales y locales, tomando en cuenta lo dispuesto en el Anexo 4.1 del mismo Reglamento.
13. En tanto, el numeral 2 del artículo 105 del Reglamento menciona que las y los ciudadanos que deseen ser incorporados en la LNERE para ejercer su derecho al voto en las elecciones federales y en las locales de las entidades federativas cuyas legislaciones contemplen el VMRE, deberán cumplir los requisitos fijados en el artículo 330 de la CPEUM y los artículos 9, numeral 1 y 330, numeral 1 de la LGIPE, además de lo dispuesto por este Consejo General.
14. Para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, en el numeral 11 del anexo 21 del Reglamento se determina que el VMRE se realizará a través de la modalidad postal.
15. En el numeral 14 del Anexo citado, se define al PEP como el conjunto de documentación y materiales que el Instituto enviará a las y los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto desde el extranjero por la vía postal para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018.
16. Dicho PEP, de acuerdo con lo establecido en el numeral 15 del mismo Anexo, se integra por los siguientes elementos: Boleta electoral, Instructivo para votar vía postal desde el extranjero, Instructivo para el envío al Instituto del Sobre-Postal-Voto con el Sobre-Voto y la Boleta Electoral, Sobre-PEP,

Sobre-Postal-Voto, Sobres-Voto e Información sobre las plataformas políticas electorales y/o propuestas de candidatos, partidos políticos y/o coaliciones.

17. El numeral 16 de dicho Anexo, en su inciso b), señala que la DEOE será responsable del diseño y supervisión de la elaboración de las boletas electorales que serán remitidas a las y los ciudadanos residentes en el extranjero.
18. Según lo dispuesto en el numeral del 21 de este Anexo, la documentación y material electoral de las elecciones federales debe ponerse disposición de la Junta General Ejecutiva para la integración del PEP a más tardar el 15 de mayo de 2018.
19. En los numerales 23 y 26 del Anexo referido, se indica que una vez sean integrados los PEP, el Instituto realizará los actos necesarios para enviarlos a las y los ciudadanos que residen en el extranjero y que dicho envío debe concluir el 21 de mayo de 2018.
20. En el mismo numeral 26 se estipula que, debido a resoluciones dictadas por el Tribunal, el Instituto podría enviar el PEP fuera del plazo establecido.
21. De acuerdo con el numeral 14 de los Lineamientos, las y los ciudadanos residentes en el extranjero que quieran emitir su voto para las elecciones de Presidencia y senadurías deben solicitar su registro en la LNERE entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018.
22. Conforme al numeral 11 de los Lineamientos, las y los ciudadanos que solicitaron su inscripción en la LNERE y manifestaron su intención de emitir su voto para el PEF, además de lo fijado en el artículo 34 de la CPEUM y los artículos 9, numeral 1 y 330 de la LGIPE, deben cumplir con lo siguiente:
  - a) Para las y los ciudadanos que tramitaron su CPVE entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, manifestar su decisión de votar desde el extranjero a través de la Solicitud Individual de Inscripción o Actualización a la Sección del Padrón Electoral de las Ciudadanas y los Ciudadanos Residentes en el Extranjero llenada al realizar el trámite para solicitar la CPVE en los consulados, con la manifestación expresa de su decisión para votar desde el extranjero

para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, y su Comprobante de Solicitud Individual;

- b)** Para las y los ciudadanos que tramitaron su CPVE hasta el 31 de agosto de 2017, comunicar entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 su decisión de votar desde el extranjero por medio de la Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero, siguiendo distintas indicaciones según si hubieran confirmado o no la obtención de su credencial y hubieran cambiado o no el domicilio utilizado durante el trámite de la credencial, y
  - c)** Para las y los ciudadanos que cuentan con Credencial para Votar vigente emitida en territorio nacional, comunicar entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 su decisión de votar desde el extranjero utilizando la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero.
- 23.** A más tardar el 11 de abril de 2018, la DERFE entregará la LNERE para Revisión en medio óptico a las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante la CNV para sus observaciones, las cuales deberán versar sobre hechos y casos concretos e individualizados, y remitirse a la DERFE a más tardar el 24 de abril de 2018; se harán las modificaciones a que hubiere lugar y se presentará el informe respectivo a este Consejo General, a la CNV y los Consejos de los OPL respectivos a más tardar el 4 de mayo de 2018. Lo anterior, conforme a lo previsto en los numerales 60, 62, 63 y 64 de los Lineamientos.
- 24.** La LNERE que se usará el día de la Jornada Electoral para el escrutinio y cómputo del voto proveniente del extranjero para las elecciones de Presidencia y senadurías, siguiendo lo fijado en el numeral 74 de los Lineamientos, se integrará por:
  - a)** Las y los ciudadanos que tramitaron su CPVE entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, habiendo quedado inscritos en la LNERE al confirmar la recepción (activación) de la CPVE, siempre y cuando dicha confirmación se haya realizado a más tardar el 30 de abril de 2018;

- b)** Las y los ciudadanos que tengan CPVE y cuya Solicitud Individual para Votar desde el Extranjero haya sido dictaminada como procedente;
  - c)** Las y los ciudadanos que cuenten con Credencial para Votar vigente emitida en territorio nacional cuya Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores Residentes en el Extranjero haya sido dictaminada como procedente, y
  - d)** Las y los ciudadanos que sean incorporados a la LNERE en cumplimiento de sentencias que para tal efecto hayan sido notificadas por el Tribunal.
- 25.** Conforme al Punto Tercero del Acuerdo INE/CG193/2017, fueron aprobados, entre otros, los siguientes plazos para la conformación y los cortes de la LNERE con motivo de la celebración de los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018:
- a)** Las y los ciudadanos que soliciten su incorporación a la LNERE y manifiesten su decisión de votar desde el extranjero, deberán presentar la solicitud respectiva del 1º de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018;
  - b)** Las y los ciudadanos podrán subsanar la inconsistencia que en su caso notifique la DERFE, a más tardar el 5 de abril de 2018; en caso de que la aclaración respectiva sea recibida con posterioridad a esa fecha, ésta se tendrá por no recibida y se notificará a las y los ciudadanos sobre la improcedencia de su inscripción en la LNERE;
  - c)** El periodo para el análisis y dictaminación de las solicitudes individuales que presenten las y los ciudadanos para solicitar su inscripción en la LNERE y manifestar su decisión de votar desde el extranjero, así como los documentos de subsane que, en su caso, se envíen para aclarar alguna inconsistencia, finaliza el 8 de abril de 2018;
  - d)** La DERFE verificará la situación registral final de todos los ciudadanos que hubieran solicitado votar desde el extranjero para las elecciones respectivas, a más tardar el 30 de abril de 2018;

- e) Las y los ciudadanos que tramitaron su CPVE entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, y que se haya confirmado la recepción de su credencial a más tardar el 30 de abril de 2018, integrarán la LNERE para fines de envío del PEP y el escrutinio y cómputo de la votación proveniente del extranjero, y
  - f) La DERFE hará las modificaciones a que hubiere lugar, derivado de las observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión, y presentará el informe respectivo a este Consejo General, a la CNV y los Consejos de los OPL correspondientes a más tardar el 4 de mayo de 2018.
26. En el apartado 3 del Procedimiento, se estipula que, para su integración en el PEP que se remitirá a las y los ciudadanos residentes en el extranjero, la DEOE deberá entregar a la DERFE las boletas electorales de Presidencia y senadurías entre el 28 y el 30 de abril de 2018.
27. De conformidad con el Punto Primero del Acuerdo INE/JGE56/2018, la Junta General Ejecutiva ordenó a la DEOE inicie los trabajos de impresión de boletas electorales de las elecciones de Presidencia y senadurías para las y los ciudadanos inscritos en la LNERE al 30 de abril de 2018, atendiendo a los cortes y las fechas de entrega del número de electores que se incorporen en el referido listado nominal y que defina de manera conjunta con la DERFE.
28. En el Punto Segundo del Acuerdo anteriormente referido, se ordenó a la DERFE inicie los trabajos de integración de los Sobres-PEP e impresión de Sobres-Postales-Voto, Sobres-Voto, los instructivos respectivos y demás documentos y materiales electorales que se utilizarán para el ejercicio del VMRE de las y los ciudadanos que solicitaron su inscripción en la LNERE con corte al 31 de marzo de 2018, y quedaron inscritos en ella, así como de aquellos ciudadanos que tramitaron su CPVE y manifestaron su intención de sufragar en el periodo del 1º de septiembre de 2017 al 31 de marzo de 2018.

### **Motivación**

29. En el PEF, las y los ciudadanos que residen en el extranjero podrán emitir su voto para las elecciones de Presidencia y senadurías, a través de la modalidad postal.

30. Para ejercer este derecho, entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, las y los ciudadanos residentes en el extranjero debieron haber solicitado su registro en la LNERE y manifestado su intención de votar en las elecciones federales de 2018.
31. De conformidad con lo previsto en el Anexo 21 del Reglamento y los Lineamientos, las y los ciudadanos que integren la LNERE serán aquellos cuya solicitud individual de inscripción a la misma haya resultado procedente, y a ellos se les deberá enviar el PEP a más tardar el 21 de mayo de 2018.
32. El número de PEP que deberán integrarse y la cantidad de elementos que lo conforman que deberán producirse y, en el caso específico de las boletas electorales, tendrán que ser iguales al número de ciudadanas y ciudadanos que estén registrados en la LNERE.
33. En el caso específico de las boletas electorales que formarán parte del PEP, en la LGIPE se mandata específicamente que el número de boletas que se impriman debe ser igual al número de personas inscritas en la LNERE.
34. Tomando en cuenta lo dispuesto en los Lineamientos, respecto a los diversos escenarios previstos para las solicitudes de registro en la LNERE, será hasta los primeros días de mayo que se sabrá con certeza el número total de personas registradas en ese listado nominal, que podrán votar para las elecciones de Presidencia y senadurías, y a las que se deberá enviar el PEP para que puedan ejercer su derecho al voto.
35. Según lo estipulado en el Procedimiento, a finales del mes de abril de 2018 deben entregarse a la DERFE los distintos elementos que integran el PEP, para su conformación y posterior envío a las y los ciudadanos residentes en el extranjero.
36. Lograr la conformación y envío del PEP en las fechas fijadas, requiere que días antes de iniciar esas actividades la instancia responsable cuente con todos los elementos para integrar el PEP. Para que ello suceda, dichos elementos deberán producirse o imprimirse días antes de su fecha de entrega.

37. Respecto a las boletas electorales que formarán parte del PEP, se tiene planeado imprimirlas al mismo tiempo que las boletas y demás documentación electoral que se va a utilizar en territorio nacional; por ello, deberán imprimirse días antes de su entrega a la DERFE y según el total de ciudadanas y ciudadanos que se prevea queden registrados en la LNERE.
38. Conforme a los numerales 63 y 64 de los Lineamientos, la DERFE hará las modificaciones procedentes de las observaciones que realicen a la LNERE para Revisión las representaciones partidistas acreditadas ante la CNV, a efecto de que se incluyan en dicho listado nominal los registros que resultaron indebidamente excluidos.
39. Según lo dispuesto en el numeral 79 de los Lineamientos, las y los ciudadanos cuya solicitud haya sido dictaminada como improcedente, podrán impugnar esta decisión ante el Tribunal. Deberán preverse los casos en los que el Tribunal emita una resolución favorable a las y los ciudadanos que promovieron el Juicio Ciudadano para impugnar la decisión de la autoridad electoral, en la que se ordene su inscripción en la LNERE.
40. En las fechas previstas para la impresión de las boletas no se dispondrá de una cifra definitiva sobre el total de registros en la LNERE por lo que, a fin de que las boletas se puedan producir en tiempo y forma, además de contar con el número de registros en la LNERE con corte al 31 de marzo de 2018 que fueron dictaminados procedentes, la DERFE proporcionará a la DEOE el estimado de los registros en ese listado nominal que podrían tener lugar durante el mes de abril, además de aquellos que sean incorporados por registros indebidamente excluidos derivados de las observaciones que realicen los partidos políticos a la LNERE para Revisión, por resoluciones favorables del Tribunal respecto de impugnaciones presentadas por las y los ciudadanos, así como previsiones por casos de extravío, pérdida o devolución de los PEP en los que se encuentran contenidas las boletas electorales.
41. La DERFE debe contar con los elementos necesarios para conformar los PEP que tendrán que enviarse a dichas ciudadanas y ciudadanos, de actualizarse el caso. De esta manera, se brinda certeza sobre el adecuado cumplimiento de las obligaciones del Instituto para garantizar el ejercicio de su derecho al voto extraterritorial.

42. Para mejor referencia, en la organización del VMRE en el Proceso Electoral Federal 2005-2006, bajo el auspicio del otrora Instituto Federal Electoral, en el Acuerdo CG41/2006 se determinó que el número adicional de boletas a imprimir sería del diez por ciento del total de las solicitudes de inscripción a la LNERE que no subsanaron las deficiencias en su solicitud.

En consecuencia, se ordenó la impresión de 1,413 boletas adicionales de las 14,125 solicitudes que se dictaminaron improcedentes. Finalmente, no se formularon observaciones al listado nominal y únicamente se interpusieron 88 Juicios Ciudadanos ante el Tribunal para exigir su incorporación en la LNERE.

PEF	Boletas adicionales	Solicitudes improcedentes	Juicios Ciudadanos	Observaciones a LNERE	Porcentaje
2005-2006	1,413	14,125	88	0	6.23%

**Nota:** El porcentaje corresponde a la proporción de registros de ciudadanas y ciudadanos que interpusieron un Juicio Ciudadano ante el Tribunal para exigir su incorporación en la LNERE, así como el número de observaciones a la LNERE para Revisión que fueron procedentes, respecto de las boletas adicionales impresas.

43. En el Proceso Electoral Federal 2011-2012, mediante Acuerdo CG186/2012, el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral ordenó que el número de boletas adicionales a imprimir se determinara con base en el número de solicitudes de inscripción a la LNERE cuyas inconsistencias no hubieran sido subsanadas por la ciudadanía al 19 de marzo de 2012, considerando que se podrían subsanar las inconsistencias de la solicitud hasta el 31 de marzo del año de la elección.

Se imprimieron 3,809 boletas adicionales, considerando las 1,937 solicitudes de inscripción que no habían sido subsanadas por las y los ciudadanos al 19 de marzo de 2012; que aproximadamente 200 solicitudes que se encontraban en proceso de dictaminación podrían ser incluidas dentro del universo de boletas adicionales, y un 3 por ciento adicional del total de registros incluidos en la LNERE para prever el probable deterioro o destrucción de esas boletas al momento de su impresión o empaque. Al final,



se contabilizaron 2,494 solicitudes improcedentes y solo se presentaron 12 incorporaciones a la lista nominal derivado de observaciones procedentes y 474 Juicios Ciudadanos.

PEF	Boletas adicionales	Solicitudes improcedentes	Juicios Ciudadanos	Observaciones a LNERE	Porcentaje
2011-2012	3,809	2,494	474	12	12.76%

**Nota:** El porcentaje corresponde a la proporción de registros de ciudadanas y ciudadanos que interpusieron un Juicio Ciudadano ante el Tribunal para exigir su incorporación en la LNERE, así como el número de observaciones a la LNERE para Revisión que fueron procedentes, respecto de las boletas adicionales impresas.

44. Con base en el número máximo de boletas adicionales que se utilizaron en los Procesos Electorales Federales 2005-2006 y 2011-2012, y atendiendo el hecho de que, a partir de la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014, el INE tiene a su cargo la organización del VMRE mediante un modelo operativo novedoso, que considera el trámite de solicitudes individuales de inscripción o actualización en el Padrón Electoral en las representaciones de México en el exterior, la aprobación por parte de la CNV de los medios de identificación para obtener la CPVE, la entrega de la credencial por el servicio de mensajería en el domicilio de las y los ciudadanos, la incorporación de medios electrónicos para el procesamiento de los expedientes individuales de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, la emisión del voto extraterritorial para renovar más cargos de elección popular en los ámbitos federal y local y, por consiguiente, el incremento en el número de registros en la LNERE; por tales razones se estima que para este PEF pudiera multiplicarse la cantidad de resoluciones favorables del Tribunal y de probables observaciones procedentes a la LNERE para Revisión.
45. Aunado a lo anterior, al 8 de abril de 2018 la DERFE dictaminó como procedentes 65,670 solicitudes individuales, y se confirmó la recepción de 68,492 CPVE, por lo que el total de registros inscritos en la LNERE asciende a 134,162 ciudadanas y ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

- 46.** De las solicitudes individuales presentadas al 31 de marzo de 2018, un total de 20,968 fueron dictaminadas improcedentes al 8 de abril de 2018 por diversas causas, entre ellas, por haberse recibido en el INE después de esa fecha, por no haber cumplido alguno de los requisitos establecidos en los Lineamientos, o por no haber sido subsanadas las inconsistencias notificadas dentro del plazo establecido. Dichos dictámenes son notificados por la DERFE a las y los ciudadanos involucrados, en cumplimiento del numeral 56 de los Lineamientos.
- 47.** Derivado de lo anterior, en términos del artículo 339, numeral 4 de la LGIPE y del numeral 20 del Anexo 21 del Reglamento, este Consejo General determina que el número adicional de boletas a imprimir de las elecciones de Presidencia y senadurías para que las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero emitan su voto en el PEF, respecto de las solicitudes individuales que fueron dictaminadas improcedentes al 8 de abril de 2018, se realice con base en las siguientes estimaciones:
- a)** Número de resoluciones favorables del Tribunal derivadas de las demandas de Juicio Ciudadano que en su caso promuevan las y los ciudadanos para impugnar el Dictamen de no procedencia de su solicitud individual;
  - b)** Número de observaciones procedentes a la LNERE para Revisión que en su caso realicen las representaciones de los partidos políticos acreditadas en la CNV, para que sean incluidas en la LNERE para escrutinio y cómputo de la votación proveniente del extranjero, y
  - c)** La previsión de posibles casos de extravío, pérdida o devolución de uno o varios PEP que impliquen el reenvío a las y los ciudadanos de tales paquetes que contienen, entre otros documentos y materiales, las boletas electorales, de conformidad con el Procedimiento.
- 48.** Tomando en cuenta las características del modelo de VMRE referidas en el numeral 44 y los supuestos establecidos en el numeral 47 de este Considerando, un mayor número de ciudadanos que solicitaron su inscripción en la LNERE para este PEF cuentan con una CPVE, lo que redujo la dictaminación de solicitudes improcedentes, así como el número de

personas que votarán con una credencial emitida en territorio nacional, como se advierte en el siguiente cuadro:

**Solicitudes dictaminadas improcedentes por tipo de credencial**

TIPO DE CREDENCIAL PARA VOTAR								TOTAL DE SOLICITUDES DICTAMINADAS			
CPVE EMITIDA EN EL EXTRANJERO				CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA EN TERRITORIO NACIONAL							
R	P	I	%	R	P	I	%	R	P	I	%
33,046	32,008	1,038	3.14	53,592	33,662	19,930	37.19	86,638	65,670	20,968	24.21

(R) Solicitudes recibidas.

(P) Solicitudes dictaminadas como procedentes.

(I) Solicitud dictaminadas como improcedentes.

(%) Porcentaje de solicitudes improcedentes respecto del total de solicitudes recibidas.

**Nota:** El total de solicitudes dictaminadas como improcedentes se obtiene a partir de las 1,038 solicitudes que presentaron las y los ciudadanos que obtuvieron una CPVE antes del 1º de septiembre de 2017 y manifestaron su intención de votar desde el extranjero hasta el 31 de marzo de 2018, así como de las 19,930 solicitudes de ciudadanos que residen en el extranjero y cuentan con una Credencial para Votar vigente emitida en territorio nacional, en cuyos casos se dictaminó la improcedencia por alguna causal establecida en el numeral 56 de los Lineamientos. No se consideran las solicitudes tramitadas entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018, cuyo plazo para confirmar la recepción de la CPVE vence el 30 de abril de 2018 (al 8 de abril de 2018, se ha confirmado la recepción de 68,492 credenciales, y existe un universo de 138,232 ciudadanos en posibilidad de confirmar la recepción de su CPVE hasta el 30 de abril de 2018).

Estas son razones que permiten afirmar que se verificaría una disminución en el número de Juicios Ciudadanos que se interpondrían, así como de registros indebidamente excluidos de la LNERE. Tampoco debe escapar a este Consejo General que la impresión de boletas adicionales para el PEF deberá corresponder a un porcentaje similar a procesos electorales anteriores, a fin de que se optimicen los recursos que sean utilizados en esta etapa del Proceso Electoral, así como en el resguardo y destrucción de las boletas electorales que no sean utilizadas.

En consecuencia, el número de boletas adicionales a imprimir para las elecciones de Presidencia y senadurías para este PEF corresponde a la estimación de registros que se obtendría de las solicitudes improcedentes que se incorporarían en la LNERE, por posibles resoluciones favorables del Tribunal, por observaciones procedentes a la LNERE para Revisión que en su caso realicen las representaciones partidistas acreditadas en la CNV, así como la previsión por casos de extravío, pérdida y devolución de boletas contenidas en los PEP; dicha cantidad ascenderá por lo menos a 1,000 boletas, con base en la siguiente información:

**Estimación de la cantidad mínima de boletas a imprimir para el PEF**

PEF	Solicitudes dictaminadas improcedentes	Cantidad mínima de boletas adicionales	Porcentaje
2017-2018	20,968	1,000	4.77%

**Nota:** No se consideran las 138,232 solicitudes individuales en posibilidad de ser confirmadas a más tardar el 30 de abril de 2018.

La cantidad de 1,000 boletas adicionales será el mínimo a imprimir, previo a la determinación del cálculo de su distribución por entidad federativa.

49. Ahora bien, toda vez que las boletas de las elecciones de Presidencia y senadurías están referidas por entidad federativa, las boletas adicionales deberán distribuirse entre cada una de ellas; por lo tanto, es importante considerar la cantidad mínima de 1,000 boletas adicionales como el factor con el que se obtendrá la cantidad de boletas para cada entidad, con base en las solicitudes dictaminadas procedentes y las confirmaciones de recepción de la CPVE al 8 de abril de 2018, por tratarse de la cifra de la que se tiene certeza de la distribución por entidad federativa de las y los ciudadanos incorporados en la LNERE y cuya proporción se espera que no varíe de forma significativa. Adicionalmente, el resultado se redondeará hacia arriba a fin de obtener números enteros de boletas adicionales para cada entidad.

En este sentido, se considera conveniente la impresión, tanto para la elección de Presidencia como de senadurías, de un total de 1,015 boletas

electorales adicionales, de conformidad con el siguiente desglose por entidad federativa:

**Número adicional de boletas electorales a imprimir para el PEF**

<b>Entidad federativa</b>	<b>Registros en la LNERE al 08.04.2018</b>	<b>Porcentaje respecto del total nacional</b>	<b>Factor 1,000 para boletas adicionales</b>	<b>Total de boletas adicionales</b>
01 Aguascalientes	1,299	0.97%	9.68	<b>10</b>
02 Baja California	2,086	1.55%	15.55	<b>16</b>
03 Baja California Sur	187	0.14%	1.39	<b>2</b>
04 Campeche	269	0.20%	2.01	<b>3</b>
05 Coahuila	2,323	1.73%	17.31	<b>18</b>
06 Colima	889	0.66%	6.63	<b>7</b>
07 Chiapas	1,819	1.36%	13.56	<b>14</b>
08 Chihuahua	3,535	2.63%	26.35	<b>27</b>
09 Ciudad de México	23,013	17.15%	171.53	<b>172</b>
10 Durango	3,495	2.61%	26.05	<b>27</b>
11 Guanajuato	8,223	6.13%	61.29	<b>62</b>
12 Guerrero	6,342	4.73%	47.27	<b>48</b>
13 Hidalgo	2,945	2.20%	21.95	<b>22</b>
14 Jalisco	12,181	9.08%	90.79	<b>91</b>
15 México	7,996	5.96%	59.60	<b>60</b>
16 Michoacán	9,994	7.45%	74.49	<b>75</b>
17 Morelos	2,648	1.97%	19.74	<b>20</b>
18 Nayarit	1,509	1.12%	11.25	<b>12</b>
19 Nuevo León	4,997	3.72%	37.25	<b>38</b>
20 Oaxaca	6,017	4.48%	44.85	<b>45</b>
21 Puebla	7,670	5.72%	57.17	<b>58</b>
22 Querétaro	1,960	1.46%	14.61	<b>15</b>
23 Quintana Roo	641	0.48%	4.78	<b>5</b>
24 San Luis Potosí	3,593	2.68%	26.78	<b>27</b>
25 Sinaloa	2,129	1.59%	15.87	<b>16</b>
26 Sonora	1,567	1.17%	11.68	<b>12</b>
27 Tabasco	791	0.59%	5.90	<b>6</b>

Entidad federativa	Registros en la LNERE al 08.04.2018	Porcentaje respecto del total nacional	Factor 1,000 para boletas adicionales	Total de boletas adicionales
28 Tamaulipas	3,020	2.25%	22.51	<b>23</b>
29 Tlaxcala	920	0.69%	6.86	<b>7</b>
30 Veracruz	5,863	4.37%	43.70	<b>44</b>
31 Yucatán	838	0.62%	6.25	<b>7</b>
32 Zacatecas	3,403	2.54%	25.36	<b>26</b>

<b>Total</b>	<b>134,162</b>	<b>100%</b>	<b>1,000</b>	<b>1,015</b>
--------------	----------------	-------------	--------------	--------------

**Nota:** Para obtener el número de boletas adicionales por entidad federativa se realizó la siguiente operación: en primer lugar, se calcula el porcentaje estatal de registros en la LNERE al 8 de abril de 2018 respecto del total nacional (134,162, que resulta de sumar las 65,670 solicitudes procedentes y las 68,492 confirmaciones de recepción de la CPVE); enseguida, la proporción se multiplica por el factor de 1,000 boletas adicionales; por último, el resultado que se obtiene se redondea hacia arriba para tener números enteros en cada entidad federativa. De esta manera, el total asciende a 1,015 boletas adicionales a imprimir.

50. A las y los ciudadanos cuya solicitud de registro a la LNERE se dictamine como procedente, se les deberá enviar el PEP dentro del plazo establecido en el Anexo 21 del Reglamento.
51. Para el envío del PEP, también debe considerarse a las y los ciudadanos que tramitaron su CPVE entre el 1º de septiembre de 2017 y el 31 de marzo de 2018 y que confirmen la recepción de su credencial a más tardar el 30 de abril, además de los registros que en su caso se incorporen derivado de las observaciones que se realicen a la LNERE para Revisión, así como aquellas ciudadanas y ciudadanos que obtuvieron una resolución favorable del Tribunal para incorporarse en la LNERE.
52. Cuando inicie la impresión de las boletas electorales no se contará con una cifra definitiva de registros en la LNERE derivada del total de ciudadanos con solicitud individual dictaminada procedente —la DERFE deberá presentar el informe sobre la atención de las observaciones procedentes a la LNERE para Revisión a más tardar el 4 de mayo, conforme a lo señalado en el numeral 25 de este Acuerdo— o con resolución favorable del Tribunal.

- 53.** Con el propósito de que el Instituto envíe en tiempo y forma los PEP a las y los ciudadanos inscritos en la LNERE, así como a los registros adicionales con base en los supuestos anteriormente referidos, se considera necesaria la impresión, tanto para la elección de Presidencia como la de senadurías en el PEF del 1º de julio de 2018, de 1,015 boletas adicionales, definidas a partir de la estimación proporcionada por la DERFE sobre la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que se incorporarían a la LNERE tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los numerales 47, 48 y 49 del presente Considerando.
- 54.** Al determinar la impresión de este número adicional de boletas electorales, se da cumplimiento a lo mandado en el numeral 4 del artículo 339 de la LGIPE, respecto a que la cantidad de boletas que se impriman para el VMRE debe ser igual al número de electores inscritos en la LNERE y que el Consejo General debe determinar la impresión de una cantidad adicional de boletas.
- 55.** La DEOE deberá enviar a la DERFE las boletas electorales adicionales a fin de atender las actividades referidas en el Procedimiento, por cuanto hace a la integración de las boletas electorales en el PEP, a partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta el 14 de mayo de 2018.
- 56.** Finalmente, con base en el Procedimiento, la DERFE deberá resguardar las boletas electorales adicionales que no se hayan utilizado y, posteriormente, procederá a la destrucción de las mismas. La destrucción de esas boletas adicionales deberá realizarse a más tardar el 30 de junio de 2018, en presencia de las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. De esta actividad se levantará la constancia oficial correspondiente.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, párrafo 1, inciso k) de la LGIPE, este órgano superior de dirección considera conveniente que el Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho anteriormente vertidas, este Consejo General en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

## **ACUERDOS**

**PRIMERO.** El número adicional de boletas para la elección de Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos que se imprimirán para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, será de 1,015 boletas electorales, de conformidad con las razones expuestas en los numerales 47 y 48, así como el total nacional y el desglose por entidad federativa precisados en el numeral 49.

**SEGUNDO.** El número adicional de boletas para la elección de Senadurías que se imprimirán para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, durante el Proceso Electoral Federal 2017-2018, será de 1,015 boletas electorales, de conformidad con las razones expuestas en los numerales 47 y 48, así como el total nacional y el desglose por entidad federativa precisados en el numeral 49.

**TERCERO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral efectúe las acciones necesarias para la impresión de las boletas electorales adicionales para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero y su entrega a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a fin de que se integren en los Sobres-PEP respectivos previo a su envío a las y los ciudadanos registrados en la LNERE, a partir de la aprobación del presente Acuerdo y hasta el 14 de mayo de 2018.

**CUARTO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores lleve a cabo el resguardo de las boletas electorales adicionales para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, así como la destrucción de aquellas que no se hayan utilizado. La actividad de destrucción de boletas adicionales deberá efectuarse a más tardar el 30 de junio de 2018, con la presencia de las representaciones de los partidos políticos y de las candidaturas independientes, en el que se deberá levantar la constancia oficial correspondiente.

**QUINTO.** El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por parte del Consejo General.

**SEXTO.** Publíquese el presente Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Electoral del Instituto.



**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo, sírvase proceder a lo conducente para la publicación del Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación, así mismo continúe con el siguiente asunto del orden del día.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente asunto es relativo al Informe de Actividades del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para los Procesos Electorales Federal y Locales 2017-2018, marzo 2018.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Señoras y señores integrantes del Consejo General permítanme intervenir para presentar el Informe Mensual correspondiente al mes de marzo que las y los integrantes del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos nos entregan el día de hoy.\_\_\_\_\_

A 66 días de la Jornada Electoral los trabajos encaminados de esta Comité son congruentes con los avances del Proceso Electoral en su conjunto, avanzan conforme a los calendarios establecidos y avanzan bien.\_\_\_\_\_

Esto es relevante porque significa que día a día este grupo de científicos y especialistas, progresa en la elaboración de las herramientas técnicas e informáticas que permitirán estimar, con precisión, la misma noche de la Jornada Electoral los rangos de la votación obtenida por quienes aspiran a la Presidencia de la República, así como a cada una de las 9 gubernaturas en disputa.\_\_\_\_\_

En este sentido, cabe señalar que, durante las sesiones de trabajo celebradas en el mes de marzo, el Comité Técnico del Conteo Rápido determinó que, debido a la diferencia horaria en Baja California y en Sonora, con respecto al horario del centro del país, el tamaño de las muestras de dichas entidades, se incrementará de la

siguiente forma: 50 por ciento más en Baja California y 100 por ciento, el doble en Sonora. \_\_\_\_\_

Este incremento en el tamaño de la muestra, permitirá robustecer la precisión para que el desfase de horario no merme la certeza de las estimaciones. \_\_\_\_\_

Concluyo esta breve intervención, agradeciendo el profesionalismo, una vez más, con el que los integrantes del Comité Técnico del Conteo Rápido, siguen avanzando paso a paso, en la conformación de los mecanismos que permitirán al Instituto Nacional Electoral dar a conocer, al término de la Jornada Electoral, los rangos de votación obtenida por cada contendiente a cada una de las 9 gubernaturas y a la Presidencia de la República y, con ello, contribuir a la estabilidad política del país y a la gobernabilidad democrática de México. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, damos por recibido el Informe y le pido al Secretario del Consejo, que dé cuenta del siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo, señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Solo para pedir algunas modificaciones estrictamente de forma en la página 13 en el cuarto párrafo, en lugar de que diga: "...y cuando no versen sobre modificaciones de fondo a dicho ordenamiento -cambiar- y cuando no contravengan el sentido de los presentes Lineamientos..." \_\_\_\_\_

En la página 14, en el Punto Segundo, ajustar: "...y cuando no versen sobre modificaciones de fondo a dicho ordenamiento normativo por y cuando no contravenga en el sentido de los presentes Lineamientos. \_\_\_\_\_

Sería cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

Si no hay, más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación correspondiente. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral identificado en el orden del día como el punto número 23. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presente durante la votación el Consejero Electoral, Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG423/2018) Pto. 23** \_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS “LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES”**

**A N T E C E D E N T E S**

- 1. Aprobación del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.** El 19 de noviembre de 2014, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG268/2014, el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
- 2. Expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.** El 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
- 3. Aprobación del proyecto de reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.** El 24 de agosto de 2017, la Comisión Temporal de Reglamentos aprobó someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el proyecto de Acuerdo por el que se reforma el Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
- 4. Reforma al Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.** El 5 de septiembre de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG392/2017, la reforma a diversas disposiciones del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral.
- 5. Aprobación del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales.** El 22 de noviembre de 2017, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG557/2017, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales.

6. **Presentación del proyecto de Lineamientos en el Grupo de Trabajo de la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 17 de enero y 17 de abril de 2018, en sendas reuniones del Grupo de Trabajo de la Comisión del Registro Federal de Electores, se presentó y discutió la propuesta de los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
7. **Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 19 de abril de 2018, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó, mediante Acuerdo INE/CRFE-02SE-URG: 19/04/2018, someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se aprueban los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.
8. **Presentación de los anexos del proyecto de Lineamientos en el Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos.** El 23 de abril de 2018, en reunión extraordinaria del Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos de la Comisión Nacional de Vigilancia, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores presentó los formatos que conforman los anexos del proyecto de Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cabe precisar que la información de referencia también fue notificada a los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores.

## **CONSIDERANDOS**

### **PRIMERO. Competencia.**

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente para aprobar los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en

términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales” (Lineamientos), conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44, párrafo 1, incisos gg) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 1º de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPD); 4, numeral 1, fracción I, Apartado A, inciso a); 5, numeral 1, inciso w); 67, párrafo 1, inciso j); Transitorio Único del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior); 2; Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales (RPDP).

## **SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.**

Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo 1 de la CPEUM, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Adicionalmente, el párrafo tercero del artículo referido, decreta que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así, el artículo 6, párrafo cuarto, Apartado A, fracción II de la CPEUM, mandata que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

El artículo 16, párrafo segundo de la CPEUM determina que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.

Por su parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) de la LGIPE señala que son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

De igual modo, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto de la LGIPE y las demás que le confiera ese ordenamiento legal.

El artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE prevé que el INE prestará, por conducto de la DERFE y de las Vocalías del Registro Federal de Electores (VRFE) en las Juntas Locales Ejecutivas (JLE) y las Juntas Distritales Ejecutivas (JDE), los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto por el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

Bajo esta lógica, el párrafo 3 del artículo previamente citado, señala que los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la CPEUM y la LGIPE, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el INE fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esa ley en materia electoral y por la Ley General de Población, en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

Por otra parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE establece que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 128, párrafo 1 de la LGIPE, en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de la LGIPE, agrupados en dos secciones: ciudadanos residentes en México y ciudadanos residentes en el extranjero.

En ese contexto, el artículo 129, párrafo 1 de la LGIPE dispone que el Padrón Electoral se formará mediante la aplicación de la técnica censal total o parcial; la inscripción directa y personal de las y los ciudadanos, así como la incorporación de los datos que aporten las autoridades competentes relativos a fallecimientos o habilitaciones, inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de las y los ciudadanos.

A su vez, el artículo 130, párrafo 1 de la LGIPE aduce que las y los ciudadanos están obligados a inscribirse en el Registro Federal de Electores y a informarle de su cambio de domicilio dentro de los 30 días siguientes a que éste ocurra. Asimismo, el párrafo 2 del mismo artículo indica que las y los ciudadanos participarán en la formación y actualización del Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.

De conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE, el INE se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

El artículo 135, párrafo 1 de la LGIPE, prescribe que para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía de la o del ciudadano, en los términos del artículo 140 de la propia LGIPE. Cuando se trate de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) brindarán las facilidades para que la recepción de la firma y las huellas dactilares se haga desde el extranjero.



Acorde a lo dispuesto en el artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE, la solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

- a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa correspondiente a su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento de la o del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;
- c) Edad y sexo;
- d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
- e) Ocupación;
- f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y
- g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía de la o del solicitante.

Ahora bien, acorde a lo previsto en el artículo 1º de la LGPDP, son sujetos obligados de dicha ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

En ese sentido, el INE, al encontrarse en el supuesto de órgano constitucional autónomo, está obligado a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, tal y como lo establece artículo 16 de la LGPDP.

De igual forma, el artículo 31 de la LGPDP prevé que con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Es importante resaltar que de conformidad con el régimen transitorio de la LGPDP, el INE al tratarse de un sujeto obligado regulado por dicha Ley, particularmente en el Artículo Séptimo Transitorio, tiene la obligación de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna en materia de protección de los datos personales a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la LGPDP, de tal suerte que la aprobación de los Lineamientos materia del presente Acuerdo atienden a lo mandado.

Por otra parte, el artículo 2 del RPDP establece que son sujetos de dicho Reglamento, los órganos y servidores públicos del INE, así como toda persona o institución vinculada con el tratamiento de datos personales que realice el propio Instituto.

El artículo 6, párrafo 1 del RPDP dispone que el acceso, verificación y entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral se regirá por los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales (Lineamientos AVE), emitidos por este Consejo General.

El párrafo 2 del mismo artículo indica que también se estará a lo dispuesto por este Consejo General en relación con los plazos, términos y condiciones en los que se les proporcionará la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los OPL, para la instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas.

En esa arista, el artículo 7, párrafo 1 del RPDP advierte que los sujetos obligados que intervengan en el tratamiento de datos personales deberán garantizar la protección en el manejo de los mismos, por lo que no podrán

comunicarlos a terceros, salvo en los casos previstos por alguna ley o el propio RPDP.

Así, el párrafo 2 del mismo artículo estipula que las comunicaciones de datos personales que efectúen los órganos del INE deberán seguir las disposiciones previstas en la LGPDP y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.

Aunado a ello, el artículo 8 del RPDP aduce que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable, o bien, que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial.

Asimismo, el Artículo Cuarto Transitorio del RPDP prevé que el INE deberá actualizar los Lineamientos, plazos, términos y condiciones a que se refiere el artículo 6 del mismo ordenamiento, dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del RPDP, en la inteligencia de que deberá ajustarse al Artículo Séptimo Transitorio de la LGIPE. Sobre este punto, es pertinente precisar que el RPDP está vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de diciembre de 2017.

Por otra parte, en términos del artículo 67, párrafo 1, inciso j) del Reglamento Interior, la Dirección Jurídica estará adscrita a la Secretaría Ejecutiva y tendrá, entre otras, la atribución de tener acceso en los términos de los Lineamientos que para tal efecto apruebe este Consejo General, al Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE), en coordinación con la DERFE.

Finalmente, no es óbice señalar que en la primera sesión ordinaria de la Comisión Temporal de Reglamentos, celebrada el 24 de agosto de 2017, se determinó que a través de la Comisión del Registro Federal de Electores (CRFE), se sometería a consideración de este Consejo General la aprobación de Lineamientos para el acceso de funcionarios del INE al SIIRFE para atender las solicitudes de información que realicen las autoridades competentes.

Para tal efecto, a través del Transitorio Único del Acuerdo INE/CG392/2017, este Consejo General consideró que, a más tardar el 31 de diciembre de 2017, se deberían aprobar los Lineamientos para el acceso al SIIRFE, para la atención de solicitudes de información por parte de las autoridades competentes.

En esa dirección, se ha resaltado en párrafos precedentes sobre la importancia de que los Lineamientos para el acceso SIIRFE se apeguen en estricto sentido a la normatividad en materia de protección de datos personales, con la finalidad de asegurar la debida protección de ese derecho humano a las y los ciudadanos que otorgan sus datos personales a este Instituto.

No obstante, fue hasta el 15 de diciembre de 2017 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el nuevo RPDP, el cual era necesario para que el contenido del proyecto de los Lineamientos para el acceso del SIIRFE fuera homologado con el mismo, respecto de las obligaciones de este Instituto en materia de protección de datos personales.

Siguiendo ese orden de ideas, con motivo de la entrada en vigor del nuevo RPDP y toda vez que la última sesión de este Consejo General del año 2017 se llevó a cabo el 22 de diciembre; aunado además, a que el proyecto de Lineamientos tendría que analizarse previamente en una sesión de la CRFE, se estimó conveniente prolongar el plazo para su aprobación con la finalidad de integrar los aspectos necesarios que consagra la normatividad en materia de protección de datos personales y, con ello, garantizar el tratamiento que se otorgue sobre los mismos.

Con base en las consideraciones expuestas, se considera que válidamente este Consejo General se encuentra facultado para aprobar los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

**TERCERO. Motivos para aprobar los Lineamientos del INE para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE.**

El artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE señala que los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la CPEUM y la propia LGIPE, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el INE fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esa ley en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

De esta manera, la LGIPE establece la viabilidad jurídica de atender de manera favorable los requerimientos de información y documentación confidencial referida en el párrafo precedente a las autoridades jurisdiccionales correspondientes, así como a aquellas autoridades ministeriales cuando se trate de asuntos donde el INE sea parte.

Así, para poder dar cumplimiento a la disposición normativa citada, el INE a través de la DERFE dispone de una herramienta informática denominada SIIRFE, en cuyo Subsistema de Monitoreo y Consultas (SIIRFE-Consultas) se pueden efectuar consultas individualizadas al Padrón Electoral y a la Lista Nominal de Electores, a partir de la incorporación de datos específicos de búsqueda que se proporcionen respecto de alguna ciudadana o ciudadano, y del cual se obtendrán resultados inmediatos, de existir coincidencia con los datos previamente incorporados.

El SIIRFE-Consultas fue diseñado para que se dispusiera de manera inmediata de la información que requieren las autoridades jurisdiccionales y/o ministeriales, cuando versen sobre asuntos donde el INE sea parte y estuviera en condiciones de atenderlos dentro de los plazos concedidos por ellas, atendiendo el marco normativo aplicable.

Con ese fin, la DERFE aplica, desde el 1º de octubre de 2015, el “Procedimiento para la Gestión de Usuarios del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE)”, con los objetivos de establecer las actividades para el registro de alta, baja y modificaciones de usuarios con acceso al SIIRFE, en cada uno de sus subsistemas,

describiendo los instrumentos a emplear y los tramos de autorización para las solicitudes de claves de usuario; definir los criterios de autorización y/o dictaminación de procedencia de las solicitudes de claves de usuario y contraseña para el acceso al sistema; gestionar con eficiencia la atención de las solicitudes de usuarios y la asignación de funcionalidad con base a perfiles establecidos; atender las directrices de seguridad para el control de acceso a usuarios y mantener un control eficiente del inventario de usuarios con acceso, y comunicar a las áreas involucradas su responsabilidad dentro del procedimiento y los roles que les corresponde realizar.

Asimismo, en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD) de la DERFE, se encuentran los expedientes integrados con las solicitudes de los trámites de inscripción y actualización al Padrón Electoral que realizaron las y los ciudadanos para la obtención de su Credencial para Votar, documentos que en algunos casos son utilizados para dar atención a los requerimientos formulados en términos del artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE.

Es importante resaltar que, para el tratamiento de los documentos referidos, el CECyRD cuenta con medidas de seguridad físicas, administrativas y tecnológicas, a través de las cuales se puede asegurar la integridad de la información que se dispone en el mismo.

En ese orden de ideas, resulta conveniente que se implementen diversas acciones para que la DERFE, la Dirección Jurídica, las VRFE de las JLE y de las JDE cuenten con los elementos necesarios para atender con oportunidad los requerimientos formulados por las autoridades competentes y, con ello, se evite la imposición de medidas de apremio.

De esta manera, se estima oportuno la emisión de los Lineamientos que se proponen a través del presente Acuerdo, cuyo objeto versa en establecer el ámbito de actuación y los criterios que deberán observar las y los servidores públicos del INE, en el ámbito de sus funciones, para la atención de los requerimientos de información y documentación formulados por autoridades competentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE.

Adicionalmente, con los referidos Lineamientos se define el procedimiento para la atención de requerimientos; se establecen los criterios de procedencia para proporcionar información y documentación, con

fundamento en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE, y se contemplan los mecanismos de control y seguimiento en las áreas del INE implicadas en el marco de la atención de requerimientos de las autoridades.

Ahora bien, es preciso señalar que, derivado de que la reforma al Reglamento Interior, se prescindió de establecer de manera expresa la atribución de la Dirección Jurídica de coadyuvar con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE para gestionar la información y documentación que las y los ciudadanos proporcionan al Registro Federal de Electores, considerando necesario establecer en los Lineamientos referidos la posibilidad de que la UTCE tenga acceso al SIIRFE, así como la atribución de solicitar por conducto de la DERFE, la información y documentación con datos del Padrón Electoral en el marco de los procedimientos que se sustancien por ella, con base en sus facultades.

De la misma forma, se estima conveniente que a través de estos Lineamientos se determine que la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, en el ámbito de su respectiva competencia, cuente con acceso al SIIRFE y se le designe la facultad de solicitar por conducto de la DERFE, la información y documentación con datos del Padrón Electoral para la sustanciación de los procedimientos administrativos sancionadores en materia de fiscalización, a efecto de dotar de manera más expedita la referida información.

A su vez, se destaca que en los citados Lineamientos se regula la entrega a los OPL de información y/o documentación electoral que resulte necesaria para tramitar procedimientos administrativos sancionadores; ello, en atención a la Tesis XXXII/2012 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que a la letra menciona:

**INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. EL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEBE PROPORCIONARLA A LAS AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES PARA LA INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES.-** De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 6, párrafo segundo, fracción II, 16, párrafo segundo, 41, párrafo segundo, Base V, párrafos primero, noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128, párrafo 1, incisos d) y f), 171, párrafos 1, 2, 3, 175, 184, párrafo 1, incisos a) al g) y 186, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, debe resguardar los datos que los ciudadanos le proporcionen, mismos que están protegidos por los principios de confidencialidad y finalidad y

que, entre otras excepciones, pueden proporcionarse con motivo de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Federal Electoral sea parte, para cumplir con sus obligaciones en la materia. En congruencia con lo anterior, cuando las autoridades electorales locales soliciten al Registro Federal de Electores información que resulte necesaria para tramitar procedimientos administrativos sancionadores, aún cuando la misma se considere confidencial, ésta debe proporcionarse, pues dicha calificación no rige en los procedimientos tendientes a sancionar la infracción a normas electorales.

Quinta Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-456/2012.—Actor: Instituto Electoral del Distrito Federal.—Autoridad responsable: Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.—3 de octubre de 2012.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: David Cetina Menchi.

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil doce, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede.

Aunado a ello, no sobra indicar que con los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, se da cumplimiento a la normatividad en materia de protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados establecidos en la LGPDP y el RPDP; además, se atiende a los deberes de seguridad y confidencialidad, así como a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

En tal virtud, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan las y los ciudadanos, entre otros, los relacionados con la formación del Padrón Electoral en cuanto a la inscripción y actualización, en la elaboración de la Lista Nominal de Electores y la emisión de la Credencial para Votar, para lo cual deberá tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, particularmente por lo que refiere la atención a los requerimientos de información y documentación



formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE.

En conclusión, los presentes Lineamientos, los cuales se encuentran en el **Anexo** que forma parte integral del presente Acuerdo, contribuirán a una mejor coordinación en el desarrollo de las actividades de las áreas del INE implicadas en la atención de los requerimientos formulados por las autoridades competentes, sin que se pierdan de vista las medidas necesarias que deben observarse en todo momento para el tratamiento de la información y documentación, así como la salvaguarda de la protección de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, en estricto apego al mandato constitucional y legal aplicable.

Por otra parte, se estima conveniente que la DERFE pueda ajustar los formatos que se encuentran anexos a los presentes Lineamientos, siempre y cuando no contravengan el sentido de los mismos.

Además, resulta apropiado instruir a la DERFE, a efecto de que reporte trimestralmente a la Comisión Nacional de Vigilancia la información estadística sobre los requerimientos formulados en términos de los citados Lineamientos.

En virtud de las consideraciones anteriormente señaladas, este Consejo General válidamente puede aprobar los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación Padrón Electoral formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo y fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43; 45, párrafo 1, inciso o) y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este órgano superior de dirección considera conveniente que el Consejero Presidente instruya al Secretario Ejecutivo de este Consejo General, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

## ACUERDOS

**PRIMERO.** Se aprueban los “Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales”, de conformidad con el **Anexo** que se acompaña al presente Acuerdo y forma parte integral del mismo.

**SEGUNDO.** La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá ajustar los formatos que se encuentran anexos a los Lineamientos aprobados en el punto Primero de este Acuerdo, siempre y cuando no contravengan el sentido de los mismos.

**TERCERO.** Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, reporte trimestralmente a la Comisión Nacional de Vigilancia, la información estadística sobre los requerimientos formulados en términos de los Lineamientos aprobados en el Punto Primero del presente Acuerdo.

**CUARTO.** El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

**QUINTO.** Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

## TRANSITORIO

**ÚNICO.** Hasta en tanto las y los Vocales Secretarios de las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales Ejecutivas no cuenten con el sistema para la consulta de las denuncias que permita identificar si el Instituto Nacional Electoral es parte de algún procedimiento de investigación, la Dirección Jurídica a través de la Dirección de Servicios Legales será el área que atienda los requerimientos de información y documentación que realicen las autoridades ministeriales, por lo que, todas aquellas que se presenten a partir de la vigencia de los presentes Lineamientos ante las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, deberán ser remitidas por las mismas de manera inmediata a la Dirección Jurídica para su atención.

**LINEAMIENTOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN FORMULADOS EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 126, PÁRRAFO 3 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES**

**CAPÍTULO I  
DISPOSICIONES GENERALES**

**Artículo 1. Objeto**

1. Los presentes Lineamientos tienen por objeto establecer el ámbito de actuación y los criterios que deberán observar las y los servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, en el ámbito de sus funciones, para la atención de los requerimientos de información y documentación formulados por autoridades jurisdiccionales, ministeriales y administrativas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
2. Los presentes Lineamientos también establecen los supuestos en los que las Unidades Técnicas de lo Contencioso Electoral y de Fiscalización, ambas del Instituto Nacional Electoral, tendrán acceso a la información y documentación con datos del Padrón Electoral, incluyendo la documentación soporte e información histórica bajo resguardo del Instituto, para la sustanciación de los procedimientos que inicien en el ámbito de su competencia.

**Artículo 2. Ámbito de aplicación**

1. Las disposiciones contenidas en estos Lineamientos son de observancia obligatoria para:
  - a) La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
  - b) La Dirección Jurídica;
  - c) La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral;
  - d) La Unidad Técnica de Fiscalización;

- e) Las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Locales Ejecutivas;
- f) Las Vocalías del Registro Federal de Electores de las Juntas Distritales Ejecutivas, y
- g) Las y los Vocales Secretarios de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas.

### Artículo 3. Glosario

#### 1. Para los efectos de estos Lineamientos se entenderá por:

##### a) Respecto a las definiciones:

- I. **Autoridades administrativas:** Todas aquellas que no realicen funciones materialmente jurisdiccionales, es decir, que no resuelvan conflictos de intereses que se presenten entre los particulares y entre éstos y algún órgano del Estado;
- II. **Autoridades jurisdiccionales:** Todas aquellas que realicen funciones materialmente jurisdiccionales y que tengan a su cargo dirimir controversias, a través de la aplicación de la ley al caso concreto;
- III. **Autoridades ministeriales:** Ministerio Público de la Federación, incluida la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como los Ministerios Públicos de las entidades federativas;
- IV. **Detalle del Ciudadano:** Ficha que se obtiene del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores, a través del Subsistema de Monitoreo y Consultas, que contiene los datos de la o el ciudadano proporcionados al Instituto Nacional Electoral, al realizar su último trámite registral, así como la situación de su registro en el Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores;
- V. **Expediente electoral:** Corresponde a las solicitudes de trámites registrales para la inscripción o actualización al Padrón Electoral

y para la obtención de la Credencial para Votar de cada ciudadana y ciudadano, así como la copia digitalizada de los medios de identificación presentados para la realización de los referidos trámites;

- VI. **Lineamientos:** Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- VII. **Manual de Organización General:** Manual de Organización General del Instituto Nacional Electoral;
- VIII. **Reglamento Interior:** Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, y
- IX. **Solicitante:** Servidora o servidor público del Instituto Nacional Electoral que cuenta con autorización para acceder al Subsistema de Monitoreo y Consultas del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores.

b) Respecto a las siglas y acrónimos:

- I. **CECyRD:** Centro de Cómputo y Resguardo Documental de la Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
- II. **CFPC:** Código Federal de Procedimientos Civiles;
- III. **CPT:** Coordinación de Procesos Tecnológicos de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;
- IV. **CURP:** Clave Única del Registro de Población;
- V. **DERFE:** Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral;
- VI. **DJ:** Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral;

- vii. **DSL:** Dirección de Servicios Legales de la Dirección Jurídica;
- viii. **FEPAD:** Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales;
- ix. **INE:** Instituto Nacional Electoral;
- x. **JDE:** Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral;
- xi. **JLE:** Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral;
- xii. **LGDE:** Ley General en Materia de Delitos Electorales;
- xiii. **LGIPE:** Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales;
- xiv. **LGPDP:** Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados;
- xv. **OCR:** Reconocimiento Óptico de Caracteres (Optical Character Recognition, por sus siglas en inglés). Elemento compuesto de la Credencial para Votar, integrado por cuatro dígitos que corresponden a la clave de la sección electoral del domicilio de las ciudadanas y los ciudadanos y ocho o nueve caracteres del número consecutivo asociado al registro de las ciudadanas y los ciudadanos a través de la Clave de Elector;
- xvi. **RPDP:** Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales;
- xvii. **RTAIP:** Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
- xviii. **SIIRFE-Consultas:** Subsistema de Monitoreo y Consultas del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores;
- xix. **STN:** Secretaría Técnica Normativa de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores;

**xx. UTCE:** Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral;

**xxi. UTSI:** Unidad Técnica de Servicios de Informática del Instituto Nacional Electoral;

**xxii. UTF:** Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y

**xxiii. VRFE:** Vocalías del Registro Federal de Electores.

#### **Artículo 4. Información y documentación con datos del Padrón Electoral**

**1.** Los datos, información y documentación que revisten el carácter de confidencial, y de los cuales se deberá determinar si procede o no su entrega, de acuerdo a los criterios que establecen estos Lineamientos, son los siguientes:

**a)** Datos e información biométrica que forman parte del Padrón Electoral:

**I.** Nombre(s);

**II.** Apellido paterno;

**III.** Apellido materno;

**IV.** Sexo;

**V.** Edad;

**VI.** Fecha y lugar de nacimiento; en su caso, la entidad federativa del(los) progenitor(es) mexicano(s) de las y los ciudadanos mexicanos que nacieron en el extranjero;

**VII.** Domicilio;

**VIII.** Entidad federativa, municipio, localidad y manzana que corresponden al domicilio;

**IX.** Sección;

- x. Tiempo de residencia en el domicilio;
  - xi. Ocupación;
  - xii. Escolaridad;
  - xiii. Firma;
  - xiv. Fotografía;
  - xv. Huellas dactilares;
  - xvi. CURP;
  - xvii. Número y fecha del certificado de naturalización, en su caso;
  - xviii. País de nacimiento;
  - xix. Años de residencia en el extranjero, en su caso, y
  - xx. Meses de residencia en el extranjero, en su caso;
- b) Datos generados por la DERFE a partir de la información proporcionada por las y los ciudadanos al Registro Federal de Electores:
- I. Clave de elector, y
  - II. OCR;
- c) Expediente electoral, y
- d) Documentos generados en las actividades de incorporación, actualización, exclusión y reincorporación de los registros de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores, que contengan información y documentación a que se refiere el presente artículo.



## **Artículo 5. Autoridades Requirentes**

1. Toda autoridad jurisdiccional, de cualquier orden de gobierno, con atribuciones y facultades legales para ello, de manera fundada y motivada, podrá requerir al INE información y documentación relativa a los datos del Padrón Electoral en los términos de los presentes Lineamientos.
2. En el caso de requerimientos que se reciban en la DERFE o bien, en las JLE y JDE, y provengan de autoridades respecto de las cuales se tenga duda sobre sus facultades para requerir información y/o documentación relativa a los datos del Padrón Electoral, la STN y las VRFE correspondientes, en el ámbito de su competencia, deberán realizar la consulta a la DJ por conducto de la DSL dentro de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, a través de correo electrónico en el que se adjunte copia del requerimiento en cuestión.

La DJ responderá por la misma vía, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción de la consulta, indicando la calidad de la autoridad requirente y si resulta procedente entregar o no la información solicitada.

3. Tratándose de autoridades ministeriales y administrativas con las que el INE actúe dentro de procedimientos de investigación en que forme parte, se podrá entregar la información y documentación relativa a los datos del Padrón Electoral.
4. Para el resto de las autoridades ministeriales y administrativas que requieran información y/o documentación con datos del Padrón Electoral, no será procedente su entrega, y únicamente se les podrá brindar información relativa a la verificación de los datos y de la autenticidad de Credenciales para Votar.
5. Para el caso de que los Organismos Públicos Locales requieran información y/o documentación con datos del Padrón Electoral, ésta se entregará, siempre y cuando sea para la tramitación de procedimientos administrativos sancionadores.

## **Artículo 6. Solicitud de acceso o consulta a la información y documentación**

1. Las peticiones que realicen las autoridades requirentes al INE, serán recibidas en la DJ por conducto de la DSL, la DERFE por conducto de la

STN, y las JLE o JDE a través de las VRFE, según corresponda, las cuales dictaminarán la procedencia de la petición de información y/o documentación respectiva, dentro del término de los 3 días hábiles siguientes a su recepción.

2. En caso de que los requerimientos se reciban en alguna oficina del INE distinta a las áreas enunciadas en el numeral anterior, deberán remitirse dentro del término de los 3 días hábiles siguientes a su presentación a la DJ por conducto de la DSL.

La DJ dictaminará la procedencia de la petición de información y/o documentación de la autoridad requirente que reciba en términos de lo señalado en el párrafo anterior, dentro del término de los 3 días hábiles siguientes a su recepción, en los siguientes términos:

- a) En caso de que el Dictamen sea procedente, en razón de la competencia, facultades o razones fundadas de la autoridad requirente, la DJ señalará las circunstancias para la entrega de la información y/o documentación, y
  - b) Si el Dictamen es negativo, la DJ de manera fundada y motivada señalará las razones de ello, para que se emita la respuesta a la autoridad requirente.
3. Las y los servidores públicos de la DERFE, la DJ, la UTCE, la UTF, así como las JLE y JDE que, de acuerdo a las funciones establecidas en la LGIPE, Reglamento Interior, Manual de Organización General y el Catálogo de Cargos y Puestos de la Rama Administrativa del INE, requieran información relacionada con los presentes Lineamientos para el correcto desarrollo de esas áreas, podrán solicitar a la CPT el acceso al SIIRFE-Consultas.
4. Para disponer del acceso al SIIRFE-Consultas, las y los solicitantes de las áreas que regulan los presentes Lineamientos, deberán atender los requisitos y etapas que establece la DERFE en el “Procedimiento para la Gestión de Usuarios del Sistema Integral de Información del Registro Federal de Electores (SIIRFE)”, para otorgar el referido acceso.

La DERFE, por conducto de la CPT y la STN, serán las áreas encargadas de realizar el análisis técnico y jurídico respectivamente para determinar la procedencia del acceso solicitado al SIIRFE-Consultas.

5. En el caso de resultar procedente el acceso al SIIRFE-Consultas, las y los solicitantes obtendrán un usuario y contraseña personalizados, a fin de que la o el solicitante pueda disponer del acceso a la referida herramienta de consulta de información y documentación con datos del Padrón Electoral, en el ámbito territorial que corresponda.

El adecuado manejo de los datos de acceso al SIIRFE-Consultas será responsabilidad de cada solicitante.

6. El acceso al SIIRFE-Consultas que realicen las y los solicitantes, deberá justificarse en cada uno de los requerimientos que se formulen al área competente o, de ser el caso, en los procedimientos de investigación que se sustancien por las referidas áreas.

El acceso al SIIRFE-Consultas por parte de las y los solicitantes será registrado por la CPT en las bitácoras diseñadas para tal efecto.

#### **Artículo 7. Confidencialidad de la información y documentación**

1. Las y los solicitantes que participen en las actividades que refieren los presentes Lineamientos, tendrán acceso al SIIRFE-Consultas únicamente para desahogar los requerimientos formulados por las autoridades solicitantes, en los términos señalados en los presentes Lineamientos, y deberán conservar cada requerimiento como el soporte que justifique el tratamiento que se realizó de la información y documentación referida.

Una vez que se haya desahogado la solicitud, las y los solicitantes integrarán el expediente con las constancias relativas a la solicitud y la propia respuesta, así como la documentación con datos personales que se utilizó para ello, con la finalidad de que se conserven en el archivo correspondiente.

Las y los solicitantes usarán el equipo de cómputo con la diligencia debida, a fin de que no se mantenga abierta la sesión del SIIRFE-Consultas mientras no se encuentren en su lugar de trabajo, y tendrán prohibido proporcionar su clave de acceso a otra persona.

2. Las y los solicitantes deberán adoptar las medidas necesarias conforme a la legislación de la materia, para que la información y documentación sean utilizadas para el objeto de estos Lineamientos y no sean reproducidas, almacenadas o transmitidas de manera no autorizada.

3. La violación a la confidencialidad de la información y documentación con datos del Padrón Electoral por parte de las y los servidores públicos de la DERFE, la DJ, la UTF, la UTCE, las JLE y JDE, será sancionada en términos de la LGIPE, la LGPDP y, en su caso, la LGDE.
4. En el caso de las comunicaciones que se realicen a través de correo electrónico institucional para la atención de los requerimientos a que se refieren los presentes Lineamientos, las y los solicitantes y, en general, cualquier servidor público del INE deberán incluir las advertencias sobre la consulta y revelación de información clasificada como confidencial en términos de los artículos 126, párrafos 3 y 4 de la LGIPE; 2, 12, 32, 35 y 36 del RTAIP; 7 y 8 del RPDP.

## **CAPÍTULO II**

### **PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS**

#### **Artículo 8. Recepción y registro del requerimiento**

1. Para la recepción y registro del requerimiento formulado por alguna de las autoridades requirentes a que se refieren estos Lineamientos, se deberá considerar lo siguiente:
  - a) El requerimiento deberá versar sobre información y/o documentación con datos del Padrón Electoral. En caso de que se trate de algún requerimiento de materia diversa a la que se regula en los presentes Lineamientos, se deberá realizar la orientación correspondiente, para que sea presentado ante el área competente del INE, de ser el caso;
  - b) El requerimiento deberá estar dirigido al área competente del INE, en términos de lo establecido en el artículo 9 de los presentes Lineamientos. Cuando el requerimiento esté dirigido a alguna área del INE diversa a las referidas en los presentes Lineamientos, ésta lo recibirá y, a través de la vía más expedita, deberá remitirlo al área competente, y
  - c) Deberá verificarse que se entreguen los anexos que en su caso refiera el oficio de requerimiento formulado, señalando en el acuse de recepción si se trata de documentos originales o copias.

2. Una vez que se verificaron los aspectos señalados en el numeral anterior, los requerimientos recibidos deberán registrarse en el formato de control (**Anexo 1**) que emite la DERFE para tal efecto, los cuales deberán incorporar al menos los siguientes datos:
  - a) Fecha de recepción;
  - b) Número de oficio de requerimiento;
  - c) Nombre de la autoridad requirente;
  - d) Información y/o documentación requerida;
  - e) Nombre de la(s) y/o el(los) ciudadano(s) sobre los que versa el requerimiento, y
  - f) En su caso, término concedido para atender el requerimiento.

#### **Artículo 9. Ámbito de competencia para la atención de requerimientos**

1. La DERFE, por conducto de la STN, tendrá a su cargo la atención de los requerimientos de información y documentación dirigidos a cualquier área del INE a nivel central, formulados por:
  - a) Autoridades jurisdiccionales;
  - b) Autoridades jurisdiccionales, administrativas y ministeriales que soliciten la verificación de la emisión y autenticidad de Credenciales para Votar y la corroboración de los datos que se obtengan de las referidas credenciales, y
  - c) La FEPADE, para la realización de inspecciones ministeriales en el CECyRD, así como los requerimientos que de manera excepcional le formule de manera directa, para solicitar información y documentación, exclusivamente dentro de los procedimientos de investigación donde el INE sea parte.
2. La DJ, por conducto de la DSL, atenderá los requerimientos de información y documentación que sean dirigidos a cualquier área del INE a nivel central, que no están contemplados en el numeral anterior, y que son formulados por:

- a) Autoridades administrativas;
  - b) Autoridades ministeriales, y
  - c) La FEPADE.
3. Las VRFE de las JLE y JDE serán responsables de atender los requerimientos de información y documentación, en el ámbito de su competencia, dirigidos a las JLE en las entidades y las JDE en los Distritos que correspondan, de conformidad con lo dispuesto en los presentes Lineamientos, formulados por:
- a) Autoridades jurisdiccionales;
  - b) Autoridades administrativas que soliciten la verificación de la emisión y autenticidad de Credenciales para Votar y la corroboración de los datos que se obtengan de las referidas credenciales, y
  - c) Autoridades ministeriales y administrativas, respecto de la verificación de Credenciales para Votar.
4. Las y los Vocales Secretarios de las JLE y las JDE otorgarán el apoyo que se requiera en la certificación y/o cotejo documental para atender los requerimientos de información y documentación que sean formulados a las Vocalías de su adscripción, para lo cual deberán sujetarse a las disposiciones previstas en el artículo 5 de los presentes Lineamientos.

**Artículo 10. Localización de la información y documentación para atención del requerimiento**

1. Para la atención de los requerimientos de información y documentación con datos del Padrón Electoral se utilizarán, cuando resulte procedente, los datos y la impresión del Detalle del Ciudadano que se obtiene del SIIRFE-Consultas.

La DJ, la DERFE, las VRFE de las JLE y las y los Vocales Secretarios de las JLE respectivas, por conducto de las y los solicitantes correspondientes, dispondrán de acceso al SIIRFE-Consultas a nivel nacional, para que estén

en condiciones de obtener información de la totalidad de los registros en la base de datos del Padrón Electoral.

En el caso de las VRFE de las JDE, las y los solicitantes respectivos sólo dispondrán de acceso al SIIRFE-Consultas a nivel distrital, por lo que de requerirse alguna búsqueda a nivel nacional, dichas Vocalías deberán realizar vía correo electrónico la solicitud respectiva a la VRFE de la JLE en la entidad que corresponda, la cual les proporcionará en su caso la información solicitada con la mayor celeridad posible.

Con la información que se obtenga del SIIRFE-Consultas, deberá atenderse el requerimiento formulado en el plazo que en su caso sea concedido para ello, siempre que conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos resulte procedente la entrega de información y/o documentación solicitados.

2. Tratándose de requerimientos de documentación o información que no se obtenga del SIIRFE-Consultas, la STN será la encargada de gestionar ante el CECyRD, o ante las áreas de competencia de la DERFE, la documentación e información solicitada.

En el caso de requerimientos formulados a la DJ, las VRFE y las y los Vocales Secretarios de las JLE, éstos deberán solicitar por correo electrónico a la STN la documentación e información requerida, remitiendo copia del referido requerimiento.

La STN, la DJ, las VRFE y las y los Vocales Secretarios de las JLE, deberán solicitar a la autoridad requirente que se conceda una prórroga al plazo otorgado para el desahogo del requerimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 del CFPC, cuando se considere que es necesario en razón de la distancia de la sede donde se encuentra la información y documentación solicitadas, y deberán exponer las acciones que se realizarán para ello.

Una vez que la STN cuente con la información y documentación necesarias para atender el requerimiento, procederá al desahogo del mismo o, en su caso, la remitirá a la DJ por oficio, y a las VRFE y las y los Vocales Secretarios de las JLE vía correo electrónico, a través del personal designado en esa área para ello, tratándose de datos, imágenes y copias digitalizadas, o por mensajería para el caso de las copias certificadas u original de expedientes electorales, siempre que resulte procedente la

entrega de la información conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos.

3. Para los requerimientos que versen sobre documentos generados en el marco de los procedimientos de actualización y depuración del Padrón Electoral que contengan datos del referido instrumento electoral, y que obren en los archivos de las VRFE de las JLE o las JDE correspondientes, la VRFE de la JLE respectiva deberá remitirlos al Vocal Secretario de la JLE de la entidad de que se trate, a efecto de que realice la certificación de la misma.

Cuando los documentos sean requeridos a la DJ, la DERFE o la VRFE de la JDE que corresponda, previo requerimiento que se formule por correo electrónico, las VRFE de las JLE, en colaboración con las y los Vocales Secretarios correspondientes, deberán proporcionarles las copias certificadas de la documentación solicitada para el desahogo del requerimiento formulado, siempre que resulte procedente la entrega de la información conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos.

De ser el caso, y con la finalidad de que la autoridad requirente no aplique una medida de apremio, la DJ, la DERFE o la VRFE de la JDE que corresponda, deberán solicitar una prórroga del plazo otorgado, de conformidad con lo establecido en el artículo 289 del CFPC, por razón de la distancia donde se encuentra la información y documentación solicitada y exponiendo las acciones que se realizarán para ello.

### **CAPÍTULO III**

#### **CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL REQUERIMIENTO**

#### **Artículo 11. Solicitud de datos e información del Padrón Electoral obtenida del SIIRFE-Consultas**

1. Los requerimientos de información formulados por autoridades jurisdiccionales, así como aquellas formuladas por la autoridad ministerial donde el INE sea parte en el procedimiento de investigación, son procedentes.
2. Cuando la autoridad requirente solicite que se proporcione copia certificada de las constancias que soporten la información que le sea remitida, y ésta corresponda a datos obtenidos del SIIRFE-Consultas, se deberá proporcionar el Detalle del Ciudadano, señalando en el oficio de respuesta



que corresponde a una impresión obtenida de la búsqueda realizada en el SIIRFE-Consultas.

Las VRFE de las JLE y JDE deberán remitir el Detalle del Ciudadano a la o al Vocal Secretario de la JLE que corresponda, para su certificación.

3. En caso de que del resultado de la búsqueda realizada con los datos que proporcione la autoridad jurisdiccional o ministerial competente, se localice uno o varios homónimos en el Padrón Electoral, se deberá informar de esta situación a la autoridad requirente y, sin proporcionar datos ni documentos, se le solicitará mayores elementos de identificación como fecha y/o entidad de nacimiento o, en su caso, clave de elector, folio nacional u OCR de la Credencial para Votar respectiva (**Anexo 2**), con la finalidad de identificar plenamente a la o al ciudadano del que se requiera información, y así estar en condiciones de atender favorablemente la solicitud.

Si la autoridad requirente manifiesta no tener mayores datos de la o del ciudadano y reitera la solicitud de que se le proporcione la información de todos los registros localizados, se procederá a dar atención a lo ordenado por la autoridad requirente, obteniendo del SIIRFE-Consultas los datos requeridos de todos los registros localizados, los cuales deberán integrarse en un documento que se anexará al oficio de respuesta (**Anexo 3**), el cual deberá ser resguardado en un sobre cerrado y sellado, para proceder a su entrega a la autoridad requirente, aun cuando no se haya solicitado de esta manera por ella.

En el oficio de respuesta deberán incorporarse las disposiciones normativas que establecen las obligaciones que tiene el INE y la autoridad receptora en materia de protección de datos personales del Padrón Electoral, así como de las obligaciones de cuidado de los datos de las y los ciudadanos que se están proporcionando y que no guardan relación con el juicio o procedimiento en que se actúa, solicitando se realicen las acciones correspondientes para asegurar el debido tratamiento y custodia de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en la LGPDP.

4. Si el requerimiento versa sobre la obtención de una copia de la Credencial para Votar, la respuesta será en sentido negativo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136, párrafo 4 de la LGIPE, en razón de que la Credencial para Votar es un documento único que se entrega a su titular y del cual el INE no conserva copia.

5. Por lo que hace a los requerimientos de información formulados por autoridades administrativas en asuntos en los que el INE no sea parte, serán improcedentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE.

En estos casos, se atenderá en sentido negativo el requerimiento formulado, (**Anexo 4**), y se señalará que en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la LGIPE dicha autoridad no se encuentra dentro de los supuestos de excepción que permiten proporcionar la información y documentación.

6. Para la atención de los requerimientos de autoridades ministeriales, la DJ y las y los Vocales Secretarios de las JLE y JDE deberán realizar una búsqueda detallada de las denuncias que hayan sido presentadas por el INE en los niveles central y desconcentrado, a efecto de identificar si el requerimiento es formulado dentro de un procedimiento de investigación donde el INE es parte.

Para efecto de agilizar la atención de los requerimientos y sistematizar la información de las denuncias presentadas de manera directa por las JLE y JDE, las y los Vocales Secretarios deberán requisitar los datos de las averiguaciones previas integradas con motivo de las vistas referidas, en el sistema de registro que para tal efecto implemente la DJ con el apoyo de la UTSI.

De ser positivo el resultado de la búsqueda en el sistema referido en el párrafo anterior, será procedente la entrega de información y documentación solicitada. En el caso de requerimientos de información de la FEPADE formulados a las JLE y JDE, la o el Vocal Secretario respectivo deberá marcar copia del oficio de respuesta a la DJ por conducto de la DSL.

En caso de no resultar positiva la búsqueda por parte de las y los Vocales Secretarios de las JLE correspondientes, el requerimiento deberá remitirse de manera inmediata a la DSL, a efecto de que analice el requerimiento respectivo y lo atienda en los términos que corresponda. La o el Vocal Secretario deberá informar a la autoridad requirente por oficio que su solicitud fue remitida a la DSL, para la atención que proceda.

Cuando la autoridad ministerial que actúe en un procedimiento donde el INE sea parte, requiera se le informe si una persona determinada aparece registrada en el Padrón Electoral o en la Lista Nominal de Electores, se deberá informar únicamente si aparece registro o no de la ciudadana o del ciudadano en cuestión, o bien, si existen dos o más ciudadanos registrados con el mismo nombre (homonimias), sin proporcionar mayor información y documentación.

En los casos en que la autoridad ministerial, en procedimientos de investigación en que el INE sea parte, solicite información de todos los homónimos, únicamente se deberá proporcionar la información estadística; es decir, el número de las personas registradas con el mismo nombre, y se solicitarán datos adicionales para su identificación, sin proporcionar mayores datos o elementos.

## **Artículo 12. Solicitud de expedientes electorales originales**

1. Si el requerimiento consiste en que se proporcione el expediente electoral original, se deberá solicitar en primer término la prórroga correspondiente (**Anexo 5**), argumentando que no se dispone del mismo y que será solicitado al CECyRD, a fin de que se conceda un plazo razonable para el desahogo del mismo, en términos del artículo 289 del CFPC, por razón de la distancia donde se encuentra la información y documentación solicitada y exponiendo las acciones que se realizarán para ello.

Asimismo, se deberá informar a la autoridad requirente, de ser el caso, que con la finalidad de asegurar la integridad y salvaguarda de los documentos que forman el expediente electoral, y evitar que en su traslado y entrega a instancias ajenas al INE sea expuesto a su extravío, el acceso al mismo se proporcionará en las oficinas del INE a través de las y los peritos que se designen para tal efecto (**Anexo 6**), por lo que se deberá seguir el procedimiento que se establece en el numeral 2 del presente artículo.

Para el caso de requerimientos de expedientes electorales originales por parte de la FEPADE, en el marco de procedimientos de investigación donde el INE sea parte, éstos se digitalizarán previo a su entrega y serán remitidos mediante oficio a esa autoridad ministerial, solicitando que se tomen las medidas de seguridad que estime pertinentes para el resguardo y conservación de la documentación original que se le proporciona, la cual no deberá ser rubricada, foliada, sellada, enmendada, perforada ni, en general,

modificada o alterada en modo alguno, a fin de que se siga conservando en el mismo estado en el que le fue entregada y no se altere la integridad de la misma.

De igual forma se solicitará que la documentación original remitida, una vez que haya cumplido la finalidad por la cual fue solicitada, sea devuelta a la STN o a la DJ, según sea el caso, en el mismo estado en que se entregó originalmente, para que a su vez se realice el reintegro al CECyRD y se cumpla con la obligación que establece la LGIPE de conservarla por un periodo de diez años.

Cuando la documentación electoral original requerida haya sido destruida en términos del artículo 155, párrafo 10 de la LGIPE, por haber cumplido diez años de antigüedad, se informará esta situación a la autoridad requirente y le proporcionará copia del expediente electoral electrónico de los movimientos del Padrón Electoral.

Si el requerimiento de documentación electoral original involucra alguna Solicitud Individual de Inscripción o Actualización al Padrón Electoral y Recibo de la Credencial en formato electrónico, se le proporcionará la impresión de la solicitud requerida, obtenida directamente del SIIRFE-Consultas, siempre que sea procedente en términos de los presentes Lineamientos.

2. Para permitir el acceso a peritos para toma fotográfica del expediente electoral original, se solicitará, en primer término, la prórroga referida en el numeral anterior, en caso que se haya establecido un término para el desahogo del requerimiento.

La STN deberá solicitar al CECyRD el expediente electoral original correspondiente e informará de manera directa a la autoridad requirente el lugar y el periodo en el que se encontrará a disposición de las y los peritos autorizados el expediente electoral solicitado, siempre que resulte procedente conforme a lo dispuesto en los presentes Lineamientos. Las VRFE de las JLE deberán solicitar a la STN realice las actividades antes señaladas, remitiendo por correo electrónico copia del requerimiento formulado.

Con la finalidad de restringir la salida de expedientes electorales originales del CECyRD y para garantizar su debido resguardo, las diligencias periciales

formuladas por las autoridades jurisdiccionales en las entidades federativas que se citan a continuación, serán desahogadas en la sede del CECyRD, cuya dirección se informará a la autoridad requirente:

- a) Ciudad de México;
- b) Hidalgo;
- c) Estado de México;
- d) Morelos;
- e) Puebla, y
- f) Tlaxcala.

Las actividades realizadas para el desahogo de las diligencias periciales serán coordinadas por personal de la STN, quienes también fungen como coadyuvantes con el personal del CECyRD, en el caso de las inspecciones ministeriales realizadas por la FEPADE.

Para el resto de las entidades federativas, la diligencia respectiva se realizará en la sede de la JLE respectiva, en cuyo caso, la documentación deberá digitalizarse para que sea extraída del CECyRD y entregada a través de la STN al personal de las VRFE de las JLE. Cuando exista imposibilidad material para que el personal de las VRFE acuda al CECyRD a fin de atender la diligencia, y no se pueda cumplir el término concedido por la autoridad requirente, la STN remitirá el expediente electoral por mensajería.

Una vez que las VRFE de las JLE respectivas y el personal de la STN cuenten con el expediente electoral original, deberán implementar las medidas necesarias para asegurar el debido resguardo del mismo, durante el plazo de los 30 días otorgados para que se realice el peritaje.

En el momento en que la o el perito acuda a desahogar la diligencia correspondiente, deberá acreditar su personería ante el personal de la VRFE de la JLE o de la STN que fue designado para atender la misma, presentando una identificación oficial así como el nombramiento que emitió la autoridad requirente para tal efecto. Hecho lo anterior, se dará inicio a la diligencia levantando el acta respectiva (**Anexo 7**).

El personal de la VRFE de la JLE responsable para llevar acabo la diligencia, así como el propio de la STN, proporcionará a la o al perito los documentos que comprende el expediente electoral, con el objeto de que tome las muestras uno a uno de dicha documentación. La o el funcionario responsable de la diligencia deberá estar atento durante el desarrollo de la misma, para asegurar el uso adecuado del expediente electoral, evitando su manipulación, maltrato, sustracción o extravío.

Cuando la o el perito haya concluido con la toma de las muestras de la documentación que se puso a su disposición, el personal designado verificará que la misma esté completa para proceder a su resguardo.

Para concluir la diligencia, se utilizará el acta correspondiente (**Anexo 7**) y se imprimirá por duplicado, firmándose ambos tantos por la o el perito y el personal de la VRFE de la JLE o de la STN que fue designado para atender la diligencia, de los cuales uno le será entregado a la o al perito.

El acta deberá acompañarse de la copia de los documentos que haya presentado la o el perito como medio de identificación.

La VRFE de la JLE respectiva, así como la STN, deberán devolver el expediente electoral original a la brevedad posible, para que se proceda a su reintegro al CECyRD. La VRFE de la JLE deberá marcar copia del oficio de reintegro de documentación electoral a la STN, para efecto de que se integre al expediente en que se actúa y pueda ser concluido.

Si transcurrido el plazo de 30 días que se determinó para el desahogo de la diligencia, no se presentara el perito autorizado, se deberá informar a la autoridad requirente de esta situación y se procederá a la devolución inmediata del expediente electoral original, para su reintegro al CECyRD.

3. Para el caso de los requerimientos formulados por la FEPADE, respecto de la realización de inspecciones en el CECyRD a fin de obtener evidencias para la sustanciación de sus investigaciones, relativas a la presunta alteración del Padrón Electoral y/o la expedición ilícita de Credenciales para Votar, serán atendidos por personal de la Dirección de Operaciones del CECyRD en coadyuvancia con el personal de la STN.

Recibido el requerimiento de la FEPADE para la realización de diligencias en el CECyRD, la STN señalará a la autoridad requirente la fecha en que tendrá verificativo la misma, solicitando se comuniquen los datos de las y los agentes del Ministerio Público que desahogarán esa inspección.

Para el desahogo de la diligencia correspondiente, la o el agente del Ministerio Público de la FEPADE deberá acreditar su personería ante el personal del INE que fue designado para atender la misma, presentando una identificación oficial.

El personal del CECyRD y de la STN proporcionará al Ministerio Público de la FEPADE la información y documentación necesarias para atender el requerimiento formulado. Las y los funcionarios del INE responsables de la diligencia deberán estar atentos durante el desarrollo de la misma, para asegurar el uso adecuado de la información y documentación registral que se disponga.

4. Para la atención oportuna a los requerimientos formulados a las JLE y JDE, las y los Vocales Secretarios de las JLE serán responsables de expedir las copias certificadas de los documentos que se citan a continuación:
  - a) Documentos que integran el expediente electoral, cuando se encuentre en las oficinas de la JLE respectiva;
  - b) Documentos generados con motivo de la aplicación de los procedimientos de actualización y depuración del Padrón Electoral;
  - c) Detalle del Ciudadano obtenido del SIIRFE-Consultas, y
  - d) Productos cartográficos.

Si se requiere copia certificada de algún documento distinto a los enunciados en el párrafo anterior, que contenga datos del Padrón Electoral, la DJ por oficio y las VRFE de las JLE por correo electrónico, solicitarán a la STN realizar las gestiones necesarias para su obtención, remitiendo copia del requerimiento formulado.

En el caso de las copias certificadas de documentación con datos personales del Padrón Electoral que requieran la DJ y la STN para la atención de requerimientos, las citadas áreas realizarán las gestiones para la obtención

de la misma, ante la Secretaría Ejecutiva o la Dirección del Secretariado, ambas del INE, de conformidad con las atribuciones que la LGIPE y la normatividad reglamentaria en la materia les confiere.

### **Artículo 13. Solicitud de verificación de Credenciales para Votar**

1. Con relación a los requerimientos de las autoridades que versen sobre la verificación de la autenticidad o emisión de alguna Credencial para Votar, ya sea que se proporcione el original o copia de la misma, éstos serán procedentes, para lo cual deberá realizar la búsqueda de los datos de la Credencial para Votar que se remita para verificación en el SIIRFE-Consultas.
2. En caso de localizarse un registro vigente en el SIIRFE-Consultas que coincida con todos los datos, fotografía y firma de la o el ciudadano en cuestión, así como el número de emisión de la Credencial para Votar, se comunicará a la autoridad requirente que se localizó un registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral con los datos que se advierten de la credencial y de la cual se tiene registro de su expedición (**Anexo 8**).
3. Si derivado de la verificación en el SIIRFE-Consultas se tiene como resultado un registro dado de baja del Padrón Electoral, el cual coincide con todos los datos e imágenes de la Credencial para Votar que se coteja, se responderá a la autoridad requirente que con los datos que se advierten de la Credencial para Votar remitida, se tiene registro de la expedición de la misma, aunque ésta ya no es vigente en términos de la LGIPE, en virtud de que su registro fue excluido del Padrón Electoral, indicándole el concepto de baja que arroje el SIIRFE-Consultas.
4. Adicionalmente, se solicitará a la autoridad requirente que, de ser posible, por su conducto se haga del conocimiento de la o del ciudadano, para que acuda a cualquier Módulo de Atención Ciudadana del INE, para obtener una nueva Credencial para Votar.
5. La STN solicitará el expediente electoral para verificar si se trata de una Credencial para Votar no vigente, derivado de que la o el ciudadano en cuestión realizó algún trámite posterior y cuenta con una nueva credencial o, en su defecto, si se trata de un documento apócrifo o una credencial generada a partir de datos presuntamente irregulares y/o falsos.



Con la finalidad de obtener elementos para el desahogo del requerimiento, la DJ vía oficio y las VRFE de las JLE por correo electrónico, remitirán a la STN copia digitalizada del requerimiento, de la Credencial para Votar así como de las constancias que integran el expediente electoral. De la misma forma deberán indicar cuáles son los datos no coincidentes con el SIIRFE-Consultas, o los elementos irregulares identificados, con la finalidad de que la STN disponga de los elementos para la revisión del caso.

La STN podrá solicitar el apoyo de la CPT en la verificación de la autenticidad de la Credencial para Votar con base en los elementos de seguridad que debe presentar ese documento de identificación.

6. La STN remitirá a la DJ y a la VRFE de la JLE respectiva, según corresponda, los resultados de la revisión del expediente electoral, a efecto de que se atienda a la autoridad requirente en los siguientes términos:
  - a) Para las Credenciales para Votar no vigentes por movimiento posterior, se informará que se tiene registro de la expedición y entrega de la misma y que ésta ya no es vigente, toda vez que la o el ciudadano en cuestión solicitó una nueva Credencial para Votar, la cual es válida y vigente en términos de la LGIPE (**Anexo 9**), y
  - b) Para documentos apócrifos presentados como Credencial para Votar, se informará que con los datos que se desprenden del documento que se remite para verificar, no se localizó registro vigente en la base de datos del Padrón Electoral y por lo tanto no se tiene registro de la expedición de la misma, por lo que se trata de un documento apócrifo (**Anexo 10**). En este caso, se seguirá el siguiente procedimiento:
    - I. Las VRFE de las JLE deberán remitirlo a la STN de manera inmediata, con la finalidad de que sea enviado a la DJ;
    - II. La STN solicitará a la DJ presente la denuncia de hechos correspondiente, remitiéndole copia del oficio de requerimiento, copia del documento presentado como Credencial para Votar y, en su caso, original del documento;
    - III. La DJ presentará la denuncia de hechos ante la autoridad ministerial correspondiente, y

- IV. Las acciones descritas en las fracciones anteriores, deberán informarse a la autoridad requirente, por parte de las VRFE de las JLE o de la STN, según corresponda, en el oficio de atención que se formule.
- 7. En ningún caso para la atención del requerimiento de verificación de Credenciales para Votar, se deberá proporcionar información, datos o documentos confidenciales; únicamente se validará la existencia del registro, la coincidencia con los datos proporcionados y la indicación de si existe soporte de la expedición del referido instrumento electoral.
- 8. Las áreas del INE deberán tomar las medidas necesarias para el resguardo y custodia de las Credenciales para Votar originales que les sean remitidas durante el proceso de verificación. Una vez que concluya su verificación, se deberá atender de manera prioritaria el requerimiento, con la finalidad de que las citadas credenciales sean devueltas, en su caso, a las autoridades requirentes a la brevedad posible.
- 9. En los casos donde las autoridades ministeriales adjuntan al requerimiento la cadena de custodia de la respectiva Credencial para Votar, deberá realizarse el requisitado de la misma por todas aquellas personas que tuvieron en su poder el documento de referencia y reintegrarla junto con la Credencial para Votar, en el momento en que se desahogue el requerimiento.

#### **Artículo 14. Solicitud de información específica en materia del Registro Federal de Electores**

- 1. En los casos de requerimientos formulados por las autoridades en procedimientos donde el INE sea parte, y que puedan implicar información y documentación relacionada con Lineamientos, procedimientos y acuerdos adoptados por diversos órganos colegiados del INE para la actualización y depuración del Padrón Electoral, la Lista Nominal de Electores y la Cartografía Electoral, se procederá conforme a lo siguiente:
  - a) La DERFE, la DJ, las VRFE y las y los Vocales Secretarios de las JLE y JDE, deberán verificar si la información y documentación solicitada obra en sus archivos. De ser así, se procederá al desahogo del requerimiento de manera directa, y

- b) Para el caso de que la información solicitada pueda obtenerse de los documentos normativos invocados previamente, se procederá a realizar la búsqueda de información requerida, y se dará atención al requerimiento formulado.
- 2. La o el Vocal Secretario de la JLE o JDE respectiva, en todo momento, proporcionará el apoyo jurídico que le soliciten las VRFE de su adscripción, para el adecuado desahogo de los requerimientos formulados por las autoridades.
- 3. La DJ, las VRFE y las y los Vocales Secretarios de las JLE y JDE, deberán utilizar todas las herramientas de información disponibles en el portal de internet e intranet del INE, así como las circulares y los comunicados remitidos por las Oficinas Centrales del INE, para atender el requerimiento de manera oportuna, directa y sin mayor trámite.

#### **CAPÍTULO IV**

### **ACCESO Y ENTREGA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN**

#### **Artículo 15. Acceso al SIIRFE-Consultas por parte de la UTCE y la UTF**

- 1. La UTCE y la UTF, en el marco de los presentes Lineamientos y en el ámbito de sus respectivas competencias, tendrán acceso al SIIRFE-Consultas por conducto de las y los solicitantes respectivos, para obtener información que resulte necesaria para la sustanciación de los procedimientos de investigación que realicen.
- 2. Para tener acceso al SIIRFE-Consultas, el personal de la UTCE y la UTF deberá realizar ante la CPT las gestiones correspondientes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de los presentes Lineamientos.

#### **Artículo 16. Solicitudes de información y documentación**

- 1. La UTCE y la UTF, por conducto de su titular, podrán solicitar a la DERFE la información y documentación con datos del Padrón Electoral que no se obtenga del SIIRFE-Consultas, para la sustanciación de los procedimientos que realicen.

2. El requerimiento de información y documentación deberá formularse por oficio dirigido al titular de la DERFE, en el que se señalen los datos del procedimiento de investigación en que se actúa, la descripción de la información y documentación que se requiere.
3. La DERFE, una vez que determine la procedencia del requerimiento, a partir de la revisión de los datos descritos en el numeral anterior, éstos se digitalizarán previo a la entrega de la información y documentación solicitadas.
4. En caso de que el requerimiento verse sobre documentación original, una vez cumplida la finalidad para la que fue requerida, la UTCE y la UTF, según corresponda, deberán reintegrarla a la DERFE en el mismo estado de conservación en que se les proporcionó, para que a su vez sea reintegrada al CECyRD y de esa forma cumplir con la obligación que establece la LGIPE de conservarla por un periodo de diez años.

## ANEXO 1



**Área Responsable:**

Periodo que se reporta:

[illegible]

**ANEXO 2**  
**FORMATO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN ADICIONAL EN EL CASO DE**  
**LOCALIZAR HOMONIMIAS**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No.**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... (Cita textual de la petición)...”*

Al respecto, me permito comentarle que de la búsqueda realizada con el nombre de \_\_\_\_\_, dato proporcionado por Usted, se localizaron [número de homonimias] registros en la base de datos del Padrón Electoral.

En razón de lo anterior y con la finalidad de mantener la confidencialidad de la información de los demás ciudadanos que no tienen injerencia alguna en el presente juicio, pero que cuentan con el mismo nombre y apellidos, y que pueden verse afectados en su intimidad; atendiendo su derecho constitucional de protección de datos personales, es necesario identificar plenamente al(a) referido(a) ciudadano(a) en la base de datos del Padrón Electoral.

En ese sentido, con fundamento en el artículo 11, numeral 3, primer párrafo de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, agradeceré se sirva proporcionar mayores datos de identificación del(a) ciudadano(a) en comento, tales como fecha y/o entidad de nacimiento, clave de elector, folio nacional u OCR de la Credencial para Votar respectiva, con la finalidad de que esta (Área Responsable) se encuentre en posibilidad de atender su petición.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**  
**TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

**ANEXO 3**  
**FORMATO PARA PROPORCIONAR LOS REGISTROS HOMÓNIMOS LOCALIZADOS, CUANDO LA**  
**AUTORIDAD REQUIRENTE NO CUENTE CON MAYORES DATOS DE IDENTIFICACIÓN**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No:**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... Cita textual de la petición...”*

Al respecto y como previamente se hizo del conocimiento de ese Juzgado, de la búsqueda realizada en la base de datos del Padrón Electoral, con el nombre de \_\_\_\_\_, dato proporcionado por Usted, se localizaron [número de homonimias] registros vigentes en referido instrumento electoral.

En ese sentido, tomando en consideración que esa autoridad jurisdiccional manifiesta no contar con mayores datos del(a) ciudadano(a) del cual se requiere información y atendiendo a lo ordenado en el oficio que nos ocupa, respecto de proporcionar la información de **todos** los registros homónimos localizados, con fundamento en el artículo 11, numeral 3, segundo párrafo de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, adjunto al presente se remite en un **sobre debidamente cerrado y sellado**, los datos de los \_\_\_\_\_ registros identificados y que fueron solicitados.

No obstante lo anterior, en relación con la entrega de la información a que se hace referencia en el párrafo anterior, resulta importante señalar que en términos del artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta autoridad electoral tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las y los ciudadanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

El artículo 6°, en relación con el artículo 16 de la constitución federal, señala como derecho humano de toda persona, la garantía a la protección de sus datos personales y vida privada, para los cuales deberán establecerse mecanismos que aseguren su salvaguarda.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero del ordenamiento constitucional, mandata que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

En ese contexto, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, este Instituto se encuentra obligado a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales de las y los ciudadanos, teniendo la responsabilidad de proteger y custodiar dicha información debiendo tomar las medidas necesarias para garantizar su seguridad y evitar su alteración, pérdida, transmisión o acceso no autorizado.

Así, de acuerdo a lo aducido en el artículo 3° de la ley referida, se entiende por datos personales a la información concerniente a una persona física identificada o identificable, considerando que es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información.

De esta forma, este Instituto deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, de conformidad con el artículo 31 de la ley en comento.

Cabe señalar que, en términos del artículo 67 de la citada ley, cuando la transferencia de datos personales sea de carácter nacional, como lo es el caso que nos ocupa, el receptor de la información, en este caso esa H. autoridad jurisdiccional, deberá tratar los datos personales de las y los ciudadanos de tal manera que se comprometa a garantizar su confidencialidad y únicamente los utilizara para los fines en que fueron transferidos.

Asimismo, los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto Nacional Electoral fuese parte o por mandato de juez competente, esto en cumplimiento al artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Igualmente, me permito hacer de su conocimiento que de conformidad con lo señalado en el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, son sujetos obligados los órganos y servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, así como toda persona o institución vinculada con el tratamiento de datos personales que realice este Instituto.

En tal sentido, los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir, reproducir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de las funciones de este Instituto, salvo que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial.

De la misma forma, los Lineamientos para el Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Validación de Datos Personales en Posesión de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, establecen que los datos personales que las y los ciudadanos proporcionen a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, en cumplimiento con las obligaciones que les impone la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, serán estrictamente confidenciales, y no podrán comunicarse o darse a conocer a terceros, ni a instancias públicas y privadas que lo soliciten, con excepción de lo dispuesto en la ley de la materia.

En razón de todo lo expuesto, se informa a esa autoridad jurisdiccional que la información que se proporciona de los registros homónimos localizados, obedece a la excepción de confidencialidad que la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece, es decir, atender un mandato de juez competente, como sucede en el caso que nos ocupa.

Por ello y toda vez que el tratamiento inadecuado de la información confidencial que se remite, podría vulnerar los derechos fundamentales de los demás ciudadanos que no tienen injerencia alguna en el presente juicio, pero que cuentan con el mismo nombre y apellidos, se solicita atentamente a ese H. Juzgado que se tomen las medidas necesarias para garantizar su debido tratamiento y resguardo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

C.c.p \_\_\_\_\_.- Consejero de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura \_\_\_\_\_ (Autoridad o cargo homólogo en el ramo la materia dependiendo la jurisdicción o entidad de que se trate).- Para su conocimiento.- Presente



**ANEXO 4**  
**FORMATO PARA NEGAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN A AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS O MINISTERIALES**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No:**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**

**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... Cita textual de la petición...”*

Al respecto, me permito comentarle que de la búsqueda realizada con el nombre de \_\_\_\_\_, dato proporcionado por usted, se localizó (aron) (número de registros localizados) en la base de datos del Padrón Electoral. (En caso de que se solicite).

No obstante lo anterior, por lo que hace a su requerimiento de que le sea proporcionado el dato del \_\_\_\_\_, correspondiente al ciudadano de mérito, le comento que el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece lo siguiente: *“Los documentos, datos e informes que los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la Constitución y esta Ley, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que el Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por esta Ley, en materia electoral y por la Ley General de Población en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente”.*

En ese sentido, tomando en consideración que la solicitud que por esta vía se atiende, no encuadra en alguno de los supuestos de excepción contenidos en el artículo citado en el párrafo precedente, con fundamento en el referido precepto normativo, así como en el artículo 11, numeral 5 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, nos encontramos legalmente impedidos para proporcionar la información solicitada por usted.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

**ANEXO 5  
FORMATO DE SOLICITUD DE PRÓRROGA**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No.**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)  
P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... (Cita textual de la petición)...”*

Al respecto, hago de su conocimiento que a efecto de atender lo solicitado y dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Instituto Nacional Electoral, a través de esta (Área Responsable), necesita llevar a cabo la consulta en los documentos y registros del ciudadano de mérito, mismos que se encuentran resguardados en el Centro de Cómputo y Resguardo Documental, situado en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo.

De esta manera, con fundamento en el artículo 12, numeral 1, primer párrafo de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se solicita atentamente acordar una prórroga razonable, que contemple un nuevo plazo para el debido cumplimiento a su requerimiento, tomando en consideración la distancia existente entre el referido Centro de Cómputo y Resguardo Documental, las oficinas que ocupa esta (Área Responsable), así como la de ese H. Juzgado, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 289 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser la norma que rige dentro del procedimiento en que se actúa.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

**ANEXO 6**  
**FORMATO DE ENTREGA DE EXPEDIENTE ELECTORAL ORIGINAL SOLICITANDO SU**  
**REINTEGRO UNA VEZ QUE HAYA SIDO UTILIZADO PARA LOS FINES QUE FUE**  
**REQUERIDO**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No:**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... Cita textual de la petición...”*

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que la documentación en la que los ciudadanos plasman su firma autógrafa al momento de solicitar la expedición de una Credencial para Votar, constituye documentación única, que no es susceptible de reemplazo en caso de deterioro o extravío, y de la cual la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores tiene la obligación de conservar por un periodo de diez años, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 155, párrafo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que su extracción del área de resguardo y su traslado genera un riesgo de pérdida o extravío.

El resguardo y custodia de la referida documentación electoral, resulta de suma importancia para esta autoridad, ya que respalda la realización de cada uno de los trámites que los ciudadanos realizan para su inscripción y actualización al Padrón Electoral y obtención de su correspondiente Credencial para Votar, aunado a que es el soporte documental que acredita que los ciudadanos cumplieron con los requisitos legales para ello.

Asimismo, al contener datos personales que son proporcionados por los ciudadanos para el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales respectivas, surge la obligación por parte de este Instituto de establecer medidas que garanticen el debido resguardo y la confidencialidad que detentan, en cumplimiento a lo dispuesto en la propia Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En ese sentido, este Instituto cuenta con el Centro de Cómputo y Resguardo Documental (CECyRD), en el cual se concentra toda la información y documentación de los trámites que los ciudadanos realizan al momento de solicitar la expedición de la Credencial para Votar; el cual cuenta con las medidas de seguridad y con el acondicionamiento físico para el resguardo y conservación de dicha documentación.

De esta forma, con la finalidad de asegurar la integridad y salvaguarda de los documentos que forman el expediente electoral de los ciudadanos, y evitar que en su traslado y entrega a instancias externas a esta Institución sea expuesto a su extravío, se hizo del conocimiento de ese H. Juzgado

que se disponía el acceso al mismo, a través los peritos que se designen para tal efecto, en las oficinas del(a) CECyRD/Junta Local Ejecutiva.

No obstante ello, toda vez que a través del oficio que se atiende se ordena se remita a ese H. Juzgado, el expediente electoral original del(a) ciudadano(a) que nos ocupa, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se remite el expediente **ORIGINAL** electoral del C. \_\_\_\_\_, el cual se integra con los documentos que se describen a continuación:

Nombre: \_\_\_\_\_  
Clave de Elector: \_\_\_\_\_

DOCUMENTO	NO. DE FOLIO/OCR/FORMA	FECHA DE TRÁMITE

En ese sentido, agradeceré que se tomen las medidas de seguridad necesarias para el resguardo y conservación de la documentación original que se le remite, la cual **no deberá ser rubricada, foliada, sellada, enmendada y/o perforada**, a fin de que se siga conservando en el estado en que actualmente se encuentra, no se altere la integridad de la misma **y no se realice la reproducción del referido expediente electoral para fines distintos a las diligencias o actuaciones para las que fueron solicitadas dentro del juicio en que se actúa.**

De igual forma, solicito a Usted que una vez que la documentación original en comento, haya cumplido la finalidad por la cual fue solicitada, sea devuelta a esta (Área Responsable), a la brevedad posible, en el mismo estado de conservación en que se encuentra actualmente, para a su vez remitirla al CECyRD y de esa forma cumplir con la obligación legal de conservarla por un periodo de diez años, como ya se ha señalado y salvaguardar la confidencialidad de los datos personales contenidos en el expediente original que se remite.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

C.c.p. \_\_\_\_\_.- Consejero de la Comisión de Transparencia del Consejo de la Judicatura \_\_\_\_\_ (Autoridad o cargo homólogo en el ramo la materia dependiendo la jurisdicción o entidad de que se trate).- Para su conocimiento.-  
Presente

**ANEXO 7  
FORMATO DE ACTA PARA EL ACCESO A PERITOS A EXPEDIENTE ELECTORAL**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Acta No.**

En \_\_\_\_\_, siendo las \_\_\_\_\_ horas del día \_\_\_\_\_ del año dos mil dieciocho, se presentó en las oficinas que ocupa esta (Área Responsable), sito en \_\_\_\_\_, el C. \_\_\_\_\_, en su carácter de perito designado por el Juez, identificándose en este acto con \_\_\_\_\_, con el objeto de practicar el estudio pericial solicitado por el \_\_\_\_\_ Juez \_\_\_\_\_ a la documentación del C. \_\_\_\_\_.

Acto seguido, el perito \_\_\_\_\_, en presencia de personal adscrito a esta (Área Responsable), así como del testigo de asistencia (funcionario adscrito a este órgano electoral), procedió al análisis y estudio del expediente electoral de la documentación original descrita a continuación:

Nombre:

Clave de Elector:

CONS.	DOCUMENTO	NO. DE FOLIO/OCR/FORMA	FECHA DE TRÁMITE

Una vez concluido el análisis realizado sobre los documentos mencionados en el párrafo anterior, son devueltos al C. \_\_\_\_\_ (personal adscrito al área responsable), siendo las \_\_\_\_\_ horas del mismo día en que comenzó la presente diligencia, por lo que se da por terminada la misma, firmando al calce los que en ella intervinieron. (Se anexa copia de identificación presentada por el perito)

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL PERSONAL  
ENCARGADO DE LA DILIGENCIA**

**NOMBRE Y FIRMA DEL PERITO**

**NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL TESTIGO  
DE ASISTENCIA**

**ANEXO 8  
FORMATO PARA INFORMAR QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR FUE EXPEDIDA POR EL  
INSTITUTO**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No:**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... Cita textual de la petición...”*

Al respecto, me permito comentarle que con el nombre de \_\_\_\_\_, con clave de elector \_\_\_\_\_, año de registro \_\_\_\_\_, número de emisión \_\_\_\_\_ y OCR \_\_\_\_\_, datos que se desprenden del original/copia de la Credencial para Votar que anexó a su oficio, se localizó un registro coincidente en la base de datos del Padrón Electoral, el cual se encuentra incluido en la Lista Nominal de Electores.

En ese sentido, con fundamento en el artículo 13, numeral 2 de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se informa que se localizó soporte de expedición de la Credencial para Votar que se remitió para verificación.

Asimismo, se hace de su conocimiento que, una vez que el área de competencia de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electoral llevó acabo el análisis de la Credencial para Votar original que fue remitida, se concluye que ésta cumple con el contenido, diseño y características aprobadas por el Consejo General de este Instituto y se puede apreciar que la firma de autorizar que consta en la Credencial para Votar corresponde a la del Secretario Ejecutivo del Instituto y que la fotografía contenida coincide con la que obra en los registros de este órgano. (Para el caso de verificación de autenticidad de credenciales para votar originales).

Finalmente, se reintegra de forma adjunta al presente original de la Credencial para Votar a nombre de \_\_\_\_\_, para que a través de su conducto sea entregada a su titular. (Para el caso de que se haya verificado credencial para votar original)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL  
TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

**ANEXO 9**  
**FORMATO PARA INFORMAR QUE LA CREDENCIAL PARA VOTAR PERDIÓ SU VIGENCIA POR**  
**MOVIMIENTO POSTERIOR**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No.**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... (Cita textual de la petición)...”*

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, numeral 6, inciso a) de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comentarle que con el nombre de \_\_\_\_\_, clave de elector \_\_\_\_\_, año de registro \_\_\_\_\_, número de emisión \_\_\_\_\_ y OCR \_\_\_\_\_ datos que se desprenden de la **copia/original** de la Credencial para Votar que anexó a su oficio, se tiene soporte de la expedición del documento en cita, sin embargo la referida Credencial para Votar ya no es vigente para este Instituto.

Lo anterior, en razón de que el (la) ciudadana(o) realizó un trámite de \_\_\_\_\_ (tipo de trámite) el día \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ (fecha), el cual fue procesado de manera exitosa, generándose con ello un nuevo instrumento electoral, el cual fue entregado a su titular y con el que se encuentra incluida(o) en la Lista Nominal de Electores.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**  
**TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**

**ANEXO 10**  
**FORMATO PARA INFORMAR QUE EL DOCUMENTO PRESENTADO COMO CREDENCIAL PARA**  
**VOTAR CORRESPONDE A UN DOCUMENTO APÓCRIFO**

**(Área Responsable)**

**EXPEDIENTE:**

**Oficio No.**

**Fecha:**

**(Autoridad Requirente)**  
**P R E S E N T E**

En atención a su oficio \_\_\_\_\_, relacionado con el expediente citado al rubro, a través del cual solicita lo siguiente:

*“... (Cita textual de la petición)...”*

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, numeral 6, inciso b) de los Lineamientos del Instituto Nacional Electoral para la atención de requerimientos de información y documentación formulados en términos de lo dispuesto en el artículo 126, párrafo 3 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito comentarle que de la búsqueda del documento presentado como Credencial para Votar a nombre de \_\_\_\_\_ con Clave de Elector \_\_\_\_\_ y OCR \_\_\_\_\_, que se anexo(a) a su oficio, no se localizó soporte de expedición del mismo, por lo que se concluye que se trata de un documento apócrifo.

En ese sentido, se hace de su conocimiento que el original/copia del documento presentado como Credencial para Votar a nombre de \_\_\_\_\_, se remitirá a la Dirección Jurídica de este Instituto, con la finalidad que de considerarlo procedente, presente denuncia ante la autoridad ministerial competente. (Para requerimientos formulados por autoridades administrativas diversas a ministeriales)

En ese sentido, adjunto al presente se reintegra el documento original denominado como Credencial para Votar que se remitió para verificación, con la finalidad de que se continúe con la indagatoria correspondiente. (Para requerimientos formulados por autoridades ministeriales donde remitan documento original)

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E**

**NOMBRE Y FIRMA DEL**  
**TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE**



**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Sírvase proceder a, realizar las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

Del mismo modo, le pido que continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente asunto es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los “Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Integrantes del Consejo General, está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Licenciado Enrique Andrade González:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

El Proyecto de Acuerdo que se nos presenta, es en cumplimiento de lo mandatado en el Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, el cual determina que los Lineamientos A-B, debían ser actualizados a más tardar 90 días después de la publicación de dicho Reglamento en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

En este sentido, este Instituto analizó que la normatividad contenida en los Lineamientos de referencia, está en concordancia con lo establecido en los principios y deberes en Materia de Protección de Datos Personales de la Ley General de

Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y el Reglamento del Instituto en la materia. \_\_\_\_\_

Además, en este Proyecto de Acuerdo se refiere que los Lineamientos A-B, ya consideran las medidas necesarias para el tratamiento y protección de los datos personales en poder del Registro Federal de Electores y detallan las obligaciones y responsabilidades que tienen los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia, tanto Nacionales como Locales, y los Organismos Públicos Locales en ejercicio de sus atribuciones. \_\_\_\_\_

Es por tales razones que el Proyecto de Acuerdo plantea la ratificación del contenido de los Lineamientos A-B, aprobados en el Acuerdo INE/CG314/2016. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Consejero Electoral Enrique Andrade. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, le pido que tome la votación que corresponde a este Proyecto de Acuerdo. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 24. \_\_\_\_\_

Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Maestro Marco Antonio Baños Martínez y Doctor Benito Nacif Hernández), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG424/2018) Pto. 24** \_\_\_\_\_

**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, POR EL QUE SE DA CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO TRANSITORIO CUARTO DEL REGLAMENTO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, APROBADO EN EL ACUERDO INE/CG557/2017, REFERENTE A LOS “LINEAMIENTOS PARA EL ACCESO, VERIFICACIÓN Y ENTREGA DE LOS DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES POR LOS INTEGRANTES DE LOS CONSEJOS GENERAL, LOCALES Y DISTRITALES, LAS COMISIONES DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES Y LOS ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES”**

### **ANTECEDENTES**

- 1. Principios, criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección de datos personales.** El 4 de mayo de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG312/2016, los principios, criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección de datos personales en posesión del Instituto Nacional Electoral y partidos políticos.
- 2. Aprobación de los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores.** El 4 de mayo de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG314/2016, los “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.
- 3. Sentencia que confirma los Lineamientos para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores.** El 15 de junio de 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-251/2016 y Acumulados, confirmó el Acuerdo INE/CG314/2016, por el que este Consejo General aprobó los “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.

4. **Procedimientos y Protocolos relacionados con el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.** El 21 de diciembre de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG860/2016, el Protocolo de seguridad para el acceso y manejo de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores; el Protocolo de seguridad para la entrega, devolución y destrucción de las relaciones de ciudadanos con solicitud de trámite cancelada; el Procedimientos y Protocolo de seguridad para la generación, entrega, devolución o reintegro, borrado seguro y destrucción de las Listas Nominales de Electores para revisión, y el Procedimiento y Protocolo de seguridad para la generación, impresión, entrega, devolución y destrucción de las Listas Nominales de Electores para su uso en las Jornadas Electorales.
5. **Expedición de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.** El 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En el Transitorio Séptimo del citado ordenamiento, se determina que los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esa misma Ley.

6. **Opinión del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales sobre el proyecto de Reglamento en Materia de Protección de Datos Personales.** El 4 de octubre de 2017, mediante oficio INAI/SPDP/641/17, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales emitió una opinión técnica por conducto de la Dirección General de

Normatividad y Consulta, adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales, sobre el proyecto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales.

7. **Aprobación del Reglamento en materia de Protección de Datos Personales.** El 22 de noviembre de 2017, este Consejo General aprobó, mediante el Acuerdo INE/CG557/2017, el Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales.

En el Artículo Transitorio Cuarto de dicho Reglamento se estableció que este Instituto deberá actualizar los Lineamientos, plazos, términos y condiciones a que se refiere el artículo 6 del mismo ordenamiento, dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento, el cual deberá ajustarse al artículo séptimo transitorio de la Ley General de Protección de los Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

8. **Grupo de Trabajo de la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 17 de abril de 2018, en reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión del Registro Federal de Electores, se presentó y discutió el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.
9. **Aprobación del Proyecto de Acuerdo en la Comisión del Registro Federal de Electores.** El 19 de abril de 2018, la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó, mediante Acuerdo INE/CRFE-03SE-URG: 19/04/2018, someter a la consideración de este órgano superior de dirección, el proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los

“Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.

## **C O N S I D E R A N D O S**

### **PRIMERO. Competencia.**

Este Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es competente para emitir el Acuerdo por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales (RPDP), aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales” (Lineamientos AVE), conforme a lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 34, párrafo 1, inciso a); 35; 36; 44 párrafo 1, incisos a), gg) y jj) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 4, numeral 1, fracción I, Apartado A, inciso a); 5, numeral 1, inciso w) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral (Reglamento Interior), así como Artículo Transitorio Cuarto del RPDP.

### **SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación.**

El artículo 1, párrafo primero de la CPEUM, prescribe que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicho ordenamiento federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma establece.

De igual forma, el párrafo segundo del propio precepto jurídico, mandata que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Adicionalmente, el párrafo tercero de artículo en comento, dispone que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Así, el artículo 6, párrafo cuarto, Apartado A, fracción II de la CPEUM, mandata que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

Se resalta que el artículo 16, párrafo segundo de la CPEUM, determina que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.

Como lo señala el artículo 34 de la CPEUM, son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

En esta dirección, el artículo 41, párrafo segundo, Base V, Apartado B, inciso a), numeral 3 de la CPEUM, en relación con el artículo 32, párrafo 1, inciso a), fracción II de la LGIPE, para los Procesos Electorales Federales y locales,

corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), en los términos que establecen la propia CPEUM y las leyes en la materia, el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

Por su parte, el artículo 30, párrafo 1, incisos a), c), d) y f) de la LGIPE señala que son fines del INE, contribuir al desarrollo de la vida democrática; integrar el Registro Federal de Electores; asegurar a las y los ciudadanos el ejercicio de sus derechos políticos y velar por la autenticidad y efectividad del sufragio.

De igual modo, con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos b), c) y d) de la LGIPE, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) tiene, entre otras atribuciones, la de formar, revisar y actualizar el Padrón Electoral, así como expedir la Credencial para Votar, conforme al procedimiento establecido en el Libro Cuarto y las demás que le confiera la LGIPE.

El artículo 126, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, prevé que el INE prestará, por conducto de la Dirección Ejecutiva competente y de sus Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Registro Federal de Electores, el cual es de carácter permanente, de interés público y tiene por objeto cumplir con lo previsto por el artículo 41 de la CPEUM sobre el Padrón Electoral.

Bajo esta lógica, el párrafo 3 del artículo previamente citado, señala que los documentos, datos e informes que las y los ciudadanos proporcionen al Registro Federal de Electores, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la CPEUM y la LGIPE, serán estrictamente confidenciales y no podrán comunicarse o darse a conocer, salvo cuando se trate de juicios, recursos o procedimientos en los que este Instituto fuese parte, para cumplir con las obligaciones previstas por la propia ley y por la Ley General de Población, en lo referente al Registro Nacional Ciudadano o por mandato de juez competente.

El párrafo 4 del precepto jurídico en cita, dispone que los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, así como de las Comisiones de



Vigilancia tendrán acceso a la información que conforma el Padrón Electoral, exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones y no podrán darla o destinarla a finalidad u objeto distinto al de la revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores.

Por otra parte, el artículo 127, párrafo 1 de la LGIPE, establece que el Registro Federal de Electores será el encargado de mantener actualizado el Padrón Electoral.

De acuerdo con lo prescrito en el artículo 128, párrafo 1 de la LGIPE, en el Padrón Electoral constará la información básica de las mujeres y los varones mexicanos, mayores de 18 años que han presentado la solicitud a que se refiere el párrafo 1 del artículo 135 de dicho ordenamiento, agrupados en dos secciones: de las ciudadanas y ciudadanos residentes en México, así como de las ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero.

En términos de lo dispuesto en el artículo 132, párrafo 1 de la LGIPE, la técnica censal es el procedimiento que este Instituto instrumentará para la formación del Padrón Electoral. Esta técnica se realiza mediante entrevistas casa por casa, a fin de obtener la información básica de los mexicanos mayores de 18 años de edad, consistente en:

- a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- b) Lugar y fecha de nacimiento;
- c) Edad y sexo;
- d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
- e) Ocupación, y
- f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización.

El párrafo 2 del precepto jurídico en cita, establece que la información básica contendrá la entidad federativa, el municipio, la localidad, el Distrito Electoral

uninominal y la sección electoral correspondiente al domicilio, así como la fecha en que se realizó la visita y el nombre y la firma del entrevistador. En todos los casos se procurará establecer el mayor número de elementos para ubicar dicho domicilio geográficamente.

En ese tenor, de conformidad con el artículo 133, párrafo 1 de la LGIPE, este Instituto se encargará de formar y administrar el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores.

El párrafo 2 del precepto jurídico señalado en el párrafo que antecede, prevé que el INE emitirá los Lineamientos en los que se establezcan los plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores en los Procesos Electorales Locales.

Asimismo, el artículo 135, párrafo 1 de la LGIPE, prescribe que para la incorporación al Padrón Electoral se requerirá solicitud individual en que consten firma, huellas dactilares y fotografía de la o el ciudadano, en los términos del artículo 140 de dicha ley. Cuando se trate de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el INE y los Organismos Públicos Locales (OPL) brindarán las facilidades para que la recepción de la firma y las huellas dactilares se haga desde el extranjero.

El artículo 136, párrafo 1 de la LGIPE, mandata que las y los ciudadanos tendrán la obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine este Instituto, a fin de solicitar y obtener su Credencial para Votar.

En términos del artículo 137, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, una vez llevado a cabo el procedimiento referido en el Libro Cuarto de dicho ordenamiento, se procederá a formar las Listas Nominales de Electores del Padrón Electoral con los nombres de aquéllas y aquéllos a los que se les haya entregado su Credencial para Votar. Los listados se formularán por Distritos y por secciones electorales. En el caso de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de residencia y por entidad federativa de referencia, si la Credencial para Votar se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral que aparece en su Credencial para Votar, si fue expedida en territorio nacional.

Asimismo, conforme al párrafo 3 del artículo anterior, las Listas Nominales de Electores se pondrán a disposición de los partidos políticos para su revisión y, en su caso, para que formulen las observaciones que estimen pertinentes.

No es óbice señalar que en términos de lo dispuesto en el artículo 140, párrafo 1 de la LGIPE, la solicitud de incorporación al Padrón Electoral se hará en formas individuales en las que se asentarán los siguientes datos:

- a) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- b) Lugar y fecha de nacimiento. En el caso de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, deberán acreditar la entidad federativa correspondiente a su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;
- c) Edad y sexo;
- d) Domicilio actual y tiempo de residencia;
- e) Ocupación;
- f) En su caso, el número y fecha del certificado de naturalización, y
- g) Firma y, en su caso, huellas dactilares y fotografía del solicitante.

De igual manera, el artículo 147, párrafo 1 de la LGIPE establece que las Listas Nominales de Electores son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral, agrupadas por Distrito y sección, a quienes se ha expedido y entregado su Credencial para Votar.

El artículo 148, párrafo 2 de la LGIPE mandata que los partidos políticos tendrán acceso en forma permanente a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, exclusivamente para su revisión, y no podrán usar dicha información para fines distintos.

En ese sentido, el artículo 151, párrafo 1 de la LGIPE establece que el 15 de febrero del año en que se celebre el Proceso Electoral Ordinario, la DERFE entregará en medios magnéticos, a cada uno de los partidos políticos las Listas Nominales de Electores divididas en dos apartados, ordenadas alfabéticamente y por secciones correspondientes a cada uno de los Distritos electorales. El primer apartado contendrá los nombres de los ciudadanos que hayan obtenido su Credencial para Votar al 15 de diciembre y el segundo apartado contendrá los nombres de las y los ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral que no hayan obtenido el instrumento electoral de referencia a esa fecha.

El artículo 152, párrafo 1 de la LGIPE, señala que los partidos políticos contarán en este Instituto con terminales de computación que les permitan tener acceso a la información contenida en el Padrón Electoral y en las Listas Nominales de Electores. Igualmente y conforme a las posibilidades técnicas, los partidos políticos tendrán garantía de acceso permanente al contenido de la base de datos, base de imágenes, documentos fuente y movimientos del Padrón, exclusivamente para su revisión y verificación.

El párrafo 2 de dicho artículo, mandata que la DERFE instalará centros estatales de consulta del Padrón Electoral para su utilización por los representantes de los partidos políticos ante las comisiones locales de vigilancia, y establecerá además, mecanismos de consulta en las oficinas distritales del propio Registro, a los cuales tendrá acceso cualquier ciudadana o ciudadano para verificar si está registrado en el Padrón Electoral e incluido debidamente en la Lista Nominal de Electores que corresponda.

De igual forma, el artículo 153, párrafo 1 de la LGIPE refiere que la DERFE, una vez concluidos los procedimientos a que se refieren el Libro Cuarto de dicha ley, elaborará e imprimirá las Listas Nominales de Electores Definitivas con fotografía que contendrán los nombres de las y los ciudadanos que

obtuvieron su Credencial para Votar hasta el último día de febrero inclusive, ordenadas alfabéticamente por Distrito y por sección electoral para su entrega, por lo menos treinta días antes de la Jornada Electoral, a los Consejos Locales para su distribución a los Consejos Distritales y a través de éstos a las mesas directivas de casilla en los términos señalados en esa ley.

El párrafo 2 del precepto jurídico citado, establece que a los partidos políticos les será entregado un tanto de la Lista Nominal de Electores Definitiva con fotografía a más tardar un mes antes de la Jornada Electoral.

Así, el artículo 155, párrafo 1 de la LGIPE, prescribe que las solicitudes de trámite realizadas por las y los ciudadanos residentes en territorio nacional, que no cumplan con la obligación de acudir a la oficina o módulo del INE correspondiente a su domicilio a obtener su Credencial para Votar, a más tardar el último día de febrero del segundo año posterior a aquél en que se hayan presentado, serán canceladas.

Por su parte, el párrafo 2 del propio precepto jurídico señalado, dispone que en el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, la DERFE elaborará las relaciones con los nombres de las y los ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas, ordenándolas por sección electoral y alfabéticamente, a fin de que sean entregadas a los representantes de los partidos políticos acreditados ante las comisiones distritales, locales y nacional de vigilancia, en lo que corresponde, a más tardar el día 30 de marzo de cada año, para su conocimiento y observaciones.

Es importante resaltar que en términos de lo dispuesto en el artículo 156, párrafo 1 de la LGIPE, la Credencial para Votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos de la o del ciudadano:

- a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento. Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad federativa de nacimiento del

progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la de su elección, en definitiva;

- b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de las y los ciudadanos residentes en el extranjero no será necesario incluir este requisito;
- c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
- d) Domicilio;
- e) Sexo;
- f) Edad y año de registro;
- g) Firma, huella digital y fotografía del elector;
- h) Clave de registro, y
- i) Clave Única del Registro de Población.

El artículo 333, párrafo 1 de la LGIPE, establece que las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero son las relaciones elaboradas por la DERFE que contienen el nombre de las personas incluidas en el Padrón Electoral que cuentan con su Credencial para Votar, que residen en el extranjero y que solicitan su inscripción en dichas listas.

Asimismo, el artículo 336, párrafos 1 y 2 de la LGIPE, señala que concluido el plazo para la recepción de solicitudes de inscripción, la DERFE procederá a elaborar las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero con las solicitudes recibidas y tramitadas y los registros contenidos en la sección del Padrón Electoral de ciudadanas y ciudadanos residentes en el extranjero. Las listas se elaborarán en dos modalidades:

- a) En el caso de las y los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, el listado se formulará por país de residencia y por entidad

federativa de referencia, si la credencial para votar se expidió o renovó desde el extranjero, o por el Distrito Electoral aparece en su credencial si fue expedida en territorio nacional, y

- b) Conforme al criterio de domicilio en México de las y los ciudadanos residentes en el extranjero, por entidad federativa y Distrito Electoral, ordenados alfabéticamente. Estas listas serán utilizadas por el INE para efectos del escrutinio y cómputo de la votación.

En ese sentido, el artículo 337, párrafo 1 de la LGIPE menciona que los partidos políticos, a través de sus representantes en la Comisión Nacional de Vigilancia, tendrán derecho a verificar las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero.

El artículo 338, párrafo 1 de la LGIPE, impone que a más tardar el 15 de febrero del año de la elección que corresponda, la DERFE pondrá a disposición de los partidos políticos las Listas Nominales de Electores en el Extranjero, salvaguardando la protección de los datos personales que en ellas se contengan.

Ahora bien, acorde a lo previsto en el artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPD), son sujetos obligados de dicha ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.

Así, el INE, al encontrarse en el supuesto de órgano constitucional autónomo, está obligado a observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, tal y como lo establece artículo 16 de la LGPD.

De igual forma, el artículo 31 de la LGPD prevé que con independencia del tipo de sistema en el que se encuentren los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable deberá establecer y mantener las

medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Al tratarse de un sujeto obligado regulado por la LGPDP, en el Transitorio Séptimo de dicha ley se indica que el INE tiene la obligación de tramitar, expedir o modificar su normatividad interna en materia de protección de los datos personales a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de la LGPDP, de tal suerte que la aprobación de los Lineamientos materia del presente Acuerdo atienden a lo mandado.

Por otra parte, el artículo 2 del RPDP, establece que son sujetos de dicho Reglamento, los órganos y servidores públicos del INE, así como toda persona o institución vinculada con el tratamiento de datos personales que realice el propio Instituto.

El artículo 6, párrafo 1 del RPDP dispone que el acceso, verificación y entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral se registrará por los Lineamientos AVE, emitidos por este Consejo General.

El párrafo 2 del mismo artículo indica que también se estará a lo dispuesto por este Consejo General en relación con los plazos, términos y condiciones en los que se les proporcionará la entrega de la información contenida en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores a los OPL, para la instrumentación de las actividades en el marco de los Procesos Electorales Locales de sus respectivas entidades federativas.

El artículo 7, párrafo 1 del RPDP advierte que los sujetos obligados que intervengan en el tratamiento de datos personales deberán garantizar la protección en el manejo de los mismos, por lo que no podrán comunicarlos a terceros, salvo en los casos previstos por alguna ley o el propio RPDP. El párrafo 2 del mismo artículo estipula que las comunicaciones de datos personales que efectúen los órganos del INE deberán seguir las disposiciones previstas en la LGPDP y demás normatividad que resulte aplicable en la materia.



Aunado a ello, el artículo 8 del RPDP aduce que los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de datos personales, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable, o bien, que ello atienda a una obligación legal o a un mandato judicial.

Asimismo, el Transitorio Cuarto del RPDP prevé que el INE deberá actualizar los Lineamientos, plazos, términos y condiciones a que se refiere el artículo 6 del mismo ordenamiento, dentro del plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del RPDP, en la inteligencia de que deberá ajustarse al Transitorio Séptimo de la LGIPE.

Con base en las disposiciones normativas citadas, se considera que válidamente este Consejo General se encuentra facultado para emitir el Acuerdo por el que da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del RPDP, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los Lineamientos AVE.

**TERCERO. Motivos para emitir el Acuerdo por el que se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del RPDP, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, referente a los Lineamientos AVE.**

El 4 de mayo de 2016, este Consejo General aprobó, mediante Acuerdo INE/CG314/2016, los Lineamientos AVE, cuyo objeto estriba en regular lo siguiente:

- a) El acceso a datos personales contenidos en el Padrón Electoral y la Lista Nominal de Electores a las y los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia;
- b) La entrega en medios magnéticos de las Listas Nominales de Electores para observaciones de los partidos políticos;

- c) La entrega en medios impresos de las Listas Nominales de Electores Definitivas con Fotografía, para su utilización por parte de los representantes de los partidos políticos con registro nacional y, en su caso, de las y los candidatos independientes ante los Consejos Distritales y las Mesas Directivas de Casilla, conforme a lo dispuesto en el artículo 153, párrafo 1, de la LGIPE;
- d) La entrega en medios impresos y/o magnéticos, para el conocimiento y observaciones, de los listados de ciudadanos cuyas solicitudes hubiesen sido canceladas a los integrantes de las Comisiones Nacional, Locales y Distritales de Vigilancia y a los partidos políticos con registro nacional, conforme al artículo 155 de la LGIPE;
- e) La entrega de instrumentos y documentos electorales con datos personales contenidos en el Padrón Electoral a los OPL en apoyo a sus procesos electorales y de participación ciudadana, y
- f) Garantizar a los titulares que sus datos personales contenidos en el Padrón Electoral, las Listas Nominales de Electores y demás instrumentos, bases de datos y documentos electorales relacionados, serán tratados conforme a la normatividad aplicable.

Posteriormente, al emitir el RPDP, este Consejo General determinó que debía analizarse la actualización de los Lineamientos AVE, con la finalidad de verificar que su contenido se ajustara a lo dispuesto en esa norma reglamentaria, así como en la LGPDP.

En ese sentido, del análisis de los Lineamientos AVE se advierte que esta normativa contempla aspectos tendientes a garantizar la protección de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, a través de diversos mecanismos empleados para salvaguardar la seguridad de la información de las y los ciudadanos incorporada en dichos instrumentos, con la finalidad de evitar su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Lo anterior es así, ya que los Lineamientos AVE fueron aprobados por este órgano superior de dirección, verificando que atendieran lo mandatado en la LGIPE y la normatividad en materia de protección de los datos personales, respecto del cumplimiento a los deberes de seguridad y confidencialidad, así como a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales.

De esta forma, fue atendido el principio de licitud, en razón de que el tratamiento de los datos personales contenidos en los instrumentos electorales, se encuentra circunscrito a las facultades y atribuciones que la normatividad aplicable le confiere a los sujetos regulados en los Lineamientos AVE.

Con relación al principio de finalidad, los Lineamientos AVE establecen que los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores serán tratados exclusivamente para la revisión de los referidos instrumentos electorales, lo cual se encuentra justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas.

El principio de lealtad es observado por los Lineamientos AVE, en el sentido de que el INE deberá privilegiar en todo momento la protección de los intereses de la ciudadanía y la expectativa razonable de privacidad, apeguándose en todo momento al marco normativo aplicable.

Asimismo, los Lineamientos AVE atienden el principio de consentimiento previo de la o el titular de los datos que realizará la solicitud, el cual se otorga en forma libre, específica e informada, a partir de las disposiciones contenidas en la LGIPE, que refieren la manifestación expresa de las y los ciudadanos al momento de realizar su trámite para inscribir o actualizar sus registros en el Padrón Electoral.

Siguiendo esa línea, se cumple con el principio de calidad de los datos personales, pues se busca que los procedimientos que se realicen para el acceso, verificación y entrega de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, se realicen con datos exactos, completos, correctos y actualizados.

En lo atinente al principio de proporcionalidad de los datos personales, la información que se tratará en el marco de los Lineamientos AVE, es proporcional a lo previsto en la LGIPE, de manera que dichos datos son adecuados, relevantes y estrictamente necesarios para el cumplimiento de las funciones que en ellos intervienen, a efecto de lograr la minimización en la afectación de esos datos.

Por cuanto refiere al principio de información, los titulares de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y en la Lista Nominal de Electores, tienen conocimiento de la existencia y características principales del tratamiento al que serán sometidos sus datos personales en el marco de los Lineamientos AVE, a través del Aviso de Privacidad que se encuentra disponible en la página de internet del INE.

En consecuencia, el INE por tratarse de un órgano constitucional autónomo del Estado Mexicano, es responsable de los datos personales que proporcionan las y los ciudadanos, entre otros, los relacionados con la formación del Padrón Electoral en cuanto a la inscripción y actualización, en la elaboración de la Lista Nominal de Electores y la emisión de la Credencial para Votar, para lo cual deberá tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido, así como adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

A su vez, los Lineamientos AVE dan cuenta de las previsiones del INE por conducto de la DERFE, para establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales contra daño, pérdida, alteración, destrucción o, bien, su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y disponibilidad, en los casos que así corresponda, cumpliendo en todo momento con los deberes de seguridad y confidencialidad de la información.

En ese mismo tenor, es imprescindible resaltar la importancia de que a través de los Lineamientos AVE se da cabal cumplimiento a las funciones que tiene encomendadas el INE, ajustándose plenamente a lo previsto en la LGIPE, y al mismo tiempo a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y máxima publicidad que rigen el actuar de este mismo.

Asimismo, por conducto del acceso permanente que se brinda a los partidos políticos en el legal ejercicio de sus funciones de revisión del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, se garantiza que éstos se encuentren en aptitud de formular las observaciones que estimen pertinente y, con ello, el desahogo de las tareas de revisión en salvaguarda de la certeza y confiabilidad de dichos instrumentos electorales registrales.

Lo anterior, toda vez que a través de los Lineamientos AVE se instrumentan simultáneamente, tanto el derecho de acceso permanente de los sujetos autorizados, entre ellos los partidos políticos a la información de mérito para el desarrollo de sus funciones, como la obligación de proteger y custodiar la información privada y los datos personales de las y los ciudadanos.

Para tal efecto, es importante manifestar que el la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través de la sentencia recaída dentro del expediente SUP-RAP-251/2016 y acumulados, confirmó que el INE, al emitir los Lineamientos AVE, consideró el derecho de los partidos políticos, al precisar que con las medidas previstas se cumplía su derecho de acceso permanente para obtener la información para el desarrollo de sus funciones, así como la obligación de proteger y custodiar la información privada y los datos personales de los ciudadanos, realizando una ponderación de ambos derechos.

Aunado a lo expuesto, es oportuno mencionar que el TEPJF determinó que con el acceso permanente a la base de datos del Padrón Electoral y las Listas Nominales de Electores, se garantiza el derecho de vigilancia de los partidos, pues el INE cuenta con terminales de computación y la instalación de centros estatales de consulta del Padrón Electoral para su utilización por parte de las representaciones de los partidos políticos acreditadas ante los órganos respectivos.

Incluso, el TEPJF argumentó que tal acceso a los partidos políticos es exclusivamente para su revisión y verificación, así como para que estén en posibilidad de manifestar sus observaciones, estableciendo que si bien los partidos políticos deben tener acceso a la información reservada y confidencial en poder de la autoridad electoral para el único efecto del ejercicio de sus funciones, la disponibilidad de esa información puede ser acotada mediante su consulta *in situ*, es decir, en el lugar que para tal fin determine la propia autoridad, sin ser necesaria la entrega física de aquélla a los partidos políticos, a fin de alcanzar su debida custodia y protección; todo ello, conforme al marco constitucional, convencional y legal aplicable en las materias de derecho electoral y del derecho de acceso a la información, transparencia y protección de datos personales.

Para tal efecto, por lo que refiere a la entrega de datos personales, concretamente, sobre los datos del domicilio y la clave de elector de las y los ciudadanos, el TEPJF sostuvo en la sentencia aludida que, “[...] si bien la autoridad responsable determinó no incluir el dato del domicilio en los listados que se entregan en medios magnéticos a los partidos políticos, ello atendió a razones de seguridad y protección de datos personales previstas constitucional y legalmente, aunado a que, contrariamente a lo que alega el apelante, al margen de dicha determinación lo cierto es que conserva acceso a esa información, a través de los centros de consulta establecidos para ese fin por la autoridad administrativa electoral, donde permanentemente están a su disposición la totalidad de datos que les permiten llevar a cabo de manera exhaustiva e integral los mencionados trabajos de revisión y vigilancia”.

De la misma manera, el órgano jurisdiccional electoral abundó al señalar que, “[...] de la medida adoptada por la autoridad responsable consistente en no incluir esa información específica en los listados nominales que se entregan en medios magnéticos para su revisión a los partidos políticos, no se desprende que la responsable estableció una total negativa de acceso a los referidos datos concretos, pues lo cierto es que, de acuerdo con lo previsto en la ley electoral, los partidos políticos siguen teniendo permanentemente a su disposición la mencionada información, con la única acotación, justificada constitucional y legalmente con base en la obligación de proteger y custodiar datos personales, de que deben acudir para su revisión a los centros de

consulta establecidos precisamente para ese fin, como lo establece el artículo 152 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por ende, contrariamente a lo alegado, la autoridad administrativa electoral ha implementado mecanismos para que los partidos políticos tengan acceso permanente a los listados nominales a nivel nacional, local y distrital”.

No obstante, conviene señalar que a través del oficio INAI/SPDP/641/17, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) emitió una opinión técnica sobre el contenido del RPDP, en el que precisó que no siempre las leyes en materia de protección de datos personales resultan ser la vía idónea para atender las solicitudes a los sujetos obligados, no obstante que la petición esté relacionada específicamente con el tratamiento de los datos personales. Así, dependiendo de las implicaciones que las solicitudes produzcan en un contexto jurídico determinado, se estará en posibilidades de calificar la idoneidad de la vía.

Aunado a ello, el INAI refiere que si el tratamiento a los datos personales implica que se generen una serie de efectos que impacten sustantivamente en la definición de cuestiones jurídicas vinculadas a aspectos civiles, administrativos, mercantiles, electorales, entre otros, debe ser conocida y resuelta por la instancia o autoridad competente que corresponda, ya que de otro modo se correría el riesgo de que las autoridades garantes de protección de datos personales conozcan sobre cuestiones que desborden su propia competencia.

Ahora bien, el 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la LGPGP. En el Transitorio Séptimo del citado ordenamiento, se determinó que los sujetos obligados correspondientes deberán tramitar, expedir o modificar su normatividad interna a más tardar dentro de los dieciocho meses siguientes a la entrada en vigor de esa misma Ley.

También, el 22 de noviembre de 2017, mediante Acuerdo INE/CG557/2017, este Consejo General aprobó el RPDP, en cuyo Artículo Transitorio Cuarto determinó que el INE deberá actualizar los Lineamientos, plazos, términos y condiciones a que se refiere el artículo 6 del mismo Reglamento, dentro del

plazo de noventa días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de ese ordenamiento, el cual deberá ajustarse al artículo séptimo transitorio de la LGPDP.

De esta manera, es preciso señalar que el artículo 6, párrafo 1 del RPDP dispone que el acceso, verificación y entrega de datos personales contenidos en el Padrón Electoral se registrará por los Lineamientos AVE emitidos por este Consejo General.

Derivado de lo anterior, con la finalidad de verificar el cumplimiento a los preceptos normativos descritos, se realizó un análisis de cada una de las disposiciones de los Lineamientos AVE vigentes, determinándose lo siguiente:

- a) Cada artículo mantiene su concordancia con lo establecido en la LGIPE;
- b) Se encuentran alineados con los principios y deberes en materia de protección de datos personales, que se establecen en la LGPDP y el RPDP;
- c) Se adoptan las medidas necesarias en el tratamiento y protección de los datos personales en posesión del Registro Federal de Electores, en estricto apego a lo previsto en la LGIPE y la normatividad en materia de protección de los datos personales;
- d) Los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los OPL, son responsables de la protección de los datos personales que obren en su poder dentro del ámbito de sus responsabilidades, de conformidad con lo dispuesto en la CPEUM, la LGIPE, la Legislación Electoral local, la LGPDP, el RPDP, así como los convenios y tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, y
- e) Los sujetos autorizados respecto del tratamiento o destino de los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y las Listas



Nominales de Electores, son responsables de la salvaguardar de la información a la que tengan acceso, sin poder darle un uso distinto al de la revisión del instrumento electoral registral de que se trate.

Por las razones expuestas en los Antecedentes y Considerandos anteriores, se ratifica el contenido de los Lineamientos AVE, aprobados mediante el Acuerdo INE/CG314/2016 y, con ello, se da cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del RPDP, aprobado por este Consejo General en el Acuerdo INE/CG557/2017.

De ser el caso que este Consejo General apruebe el presente Acuerdo, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43, párrafos 1 y 2; 45, párrafo 1, inciso o), y 46, párrafo 1, inciso k) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es conveniente que el Consejero Presidente instruya al Secretario de este Consejo General, a efecto de que provea lo necesario para que el presente Acuerdo sea publicado en la Gaceta Electoral del Instituto y en el Diario Oficial de la Federación.

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de sus facultades emite los siguientes:

## **ACUERDOS**

**PRIMERO.** En cumplimiento al Artículo Transitorio Cuarto del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Protección de Datos Personales, aprobado en el Acuerdo INE/CG557/2017, se ratifica el contenido de los “Lineamientos para el Acceso, Verificación y Entrega de los Datos Personales en posesión del Registro Federal de Electores por los integrantes de los Consejos General, Locales y Distritales, las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y los Organismos Públicos Locales”.

**SEGUNDO.** El presente Acuerdo entrará en vigor a partir del día de su aprobación por este órgano superior de dirección.

**TERCERO.** Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Electoral del Instituto Nacional Electoral y en el Diario Oficial de la Federación.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Muchas gracias, Secretario del Consejo.\_\_\_\_\_

Por favor, realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación y continúe con el siguiente asunto del orden del día. \_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo al Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Señoras y señores Consejeros y representantes está a su consideración el Proyecto de Acuerdo mencionado.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Muchas gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

El día de hoy estamos conociendo varias sustituciones y me voy a referir, en primer lugar, al texto que se circuló originalmente, y posteriormente al engrose que se realizó y que tiene que ver con 2 casos específicos: por un lado, el caso del Partido de la Revolución Democrática que hizo una sustitución de hombre por mujer en un segmento, digamos, de mayor participación, y de mujer por hombre en un segmento de media participación. Bajo esta lógica de compensación global, determina en el engrose que se envía que esto es una sustitución válida, porque en lo global, a partir de los distintos segmentos se beneficia a las mujeres, se generan las condiciones para que las mujeres participen en los segmentos de más alta votación, digamos, del partido político.\_\_\_\_\_

Esta discusión es muy parecida a la discusión que tuvimos el día 17 de abril pasado, me parece el caso del Partido de la Revolución Democrática, en el que conocimos el caso de Nueva Alianza que había pasado, digamos, la sustitución la había hecho

entre un segmento bajo y uno intermedio, mejorando a las mujeres en el intermedio y ahora el Partido de la Revolución Democrática presenta del intermedio al alto, mejorando a las mujeres en el alto. \_\_\_\_\_

Me parece que el supuesto es el mismo del día 17 de abril. En este sentido, en los mismos términos que no acompañé la propuesta del día 17 de abril, o la postura del Consejo General del día 17 de abril, a partir del criterio que el día anterior había adoptado este Consejo General, no acompañaré la propuesta que se trae a la mesa en el engrose por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática. \_\_\_\_\_

No reiteraré los argumentos que trajimos a la mesa el día 17 de abril, solo señalar insisto, que el día 16, al devolver el Proyecto para que se hiciera un engrose, se establecieron criterios claros, y en estos criterios claros lo que se tenía que conservar eran los segmentos intactos, en cuanto a la conformación de hombres, mujeres, respecto de lo que se había aprobado el día 29 de marzo pasado, es decir, al aprobar cuándo no había un sesgo evidente entre hombres y mujeres en los distintos bloques; y, a partir de ello, mantener siempre la distribución de los segmentos con 2 consideraciones: siempre y cuando no se beneficiara a mujeres dentro del mismo segmento, o siempre y cuando no hubiese un sesgo evidente en los distintos bloques. Esto es lo que acordamos el día 16 de abril. \_\_\_\_\_

El día 17 de abril, hubo una postura mayoritaria del Consejo General para que se pudiera hacer un intercambio entre bloques, siempre y cuando esto fuera favorable a las mujeres. \_\_\_\_\_

Me parece que no es lo que originalmente se había planteado, atenta contra la certeza que la autoridad debe dar a los partidos políticos a no modificar sus propias determinaciones. \_\_\_\_\_

Por lo que, insisto, en el caso del Partido de la Revolución Democrática no acompañaría la modificación que se hace con el engrose en congruencia al voto que emití el día 17 de abril pasado. \_\_\_\_\_

Ahora entraré al tema del Partido Revolucionario Institucional, que me parece, éste sí me preocupa más, y me preocupa más porque ahora nuevamente este Consejo General, con la propuesta que trae el engrose, estaría nuevamente modificando su criterio, porque reconozco que si la mayoría de los integrantes del Consejo General votan a favor del engrose del Partido de la Revolución Democrática, es el criterio que la mayoría de los integrantes adoptaron el día 17 de abril. \_\_\_\_\_

Pero, el caso del Partido Revolucionario Institucional es distinto, el caso del Partido Revolucionario Institucional en lo que tiene que ver con el Distrito 31, expresamente ordenamos el día 17 que se hiciera un requerimiento porque estaba incluyendo a una mujer más en el segmento más bajo, es decir, en el segmento de los 20 por ciento más bajos, incluyendo una mujer más, con lo que quedaba una proporción 7-2, 7 mujeres, 2 hombres. Esto genera exactamente un sesgo evidente a favor de un género, aunque sea el género masculino, y eso fue lo que este Consejo General ordenó que se requiriera al partido político para que sustituyera y no se generara este sesgo. \_\_\_\_\_

Ahora, el partido político a partir de otra modificación que hace en otro segmento a favor de mujeres señala, el engrose que se trae a esta mesa, “con eso se compensa”.

---

Pero, hay un problema, un tema era el segmento superior, “¡santo y bueno!”, ese se corrigió, no tenemos discusión sobre éste; pero un requerimiento que este Consejo General ordenó es que no hubiera un sesgo evidente en los más bajos. Este Consejo General consideró que ese sesgo evidente era 7-2. \_\_\_\_\_

Hoy se está trayendo el Proyecto de Acuerdo con exactamente el mismo sesgo evidente, con exactamente la misma conformación, porque no se modificó, no se realizó la sustitución correspondiente, y lo que hace una semana se dijo que no se podía, hoy el engrose señala que sí se puede. El Proyecto de Acuerdo originalmente circulado, señalaba que se debía establecer una amonestación pública en términos de los Lineamientos que hemos aprobado y un requerimiento de 24 horas al Partido

Revolucionario Institucional para que llevara a cabo la sustitución correspondiente en términos del requerimiento que ya se le había formulado el día 17 de abril.\_\_\_\_\_

De pronto se sube al Consejo General una propuesta de engrose en la que el Consejo General desdice lo que dijo, porque cuando el día 17 dijo que no se valía un sesgo evidente, el día de hoy se está proponiendo que sí se pueda valer un sesgo evidente. \_

Me separaría también del caso del Partido Revolucionario Institucional, me parece que tenemos que ser congruentes con la decisión que este Consejo General ya tomó, podríamos haber discutido el día 17, si derivado de que el sesgo era favorable para las mujeres, podríamos haber aceptado un sesgo favorable para las mujeres; pero no se discutió, se aprobó en sus términos el sí requerir, porque nuestro Reglamento de Elecciones expresamente lo que señala es que no se permite ningún sesgo evidente en ninguno de los bloques, en particular, por supuesto, en el de menor votación, digamos, el de menos fuerza electoral del propio partido político, si bien el día 17 de abril, esa discusión nos podría haber llevado a una conclusión distinta, el día de hoy lo que estamos conociendo es una consecuencia de lo que votamos el 17 de abril, porque no es una sustitución distinta, es esa misma sustitución que el día 17 le ordenamos al Partido Revolucionario Institucional que realizara, no la llevó a cabo y ahora decimos que está bien.\_\_\_\_\_

Me parece que sí tiene que haber, en este sentido, una congruencia de las decisiones que toma esta autoridad. Si el día 17 ordenamos requerirle para que hiciera una sustitución, si no se llevó a cabo la sustitución tenemos que proceder conforme a nuestros propios Lineamientos, establecer una amonestación pública y requerir para que en un plazo de 24 horas se realice la sustitución correspondiente como en el Proyecto de Acuerdo originalmente circulado.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Por supuesto.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, ¿no cree usted que con la sustitución que se está presentando por parte del Partido Verde Ecologista de México en esa lógica integral de la Coalición en el Distrito 11, que se cambia mujer por hombre, ya no estaríamos en ese sesgo?\_\_\_\_\_

Por su respuesta, gracias, Consejera Electoral Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

No, no estoy de acuerdo que con esa sustitución ya no estaríamos en esa lógica, porque la razón del requerimiento no era incumplimiento a paridad como tal, era la existencia de un sesgo evidente en los Distritos de menor votación, en el 20 por ciento de menor votación, y este Distrito 11 al que usted hace referencia no está en ese 20 por ciento, está en el segmento completo de menor votación. Por lo que se hizo el requerimiento fue por esa fracción del menor que es el 20 por ciento, que traía 7.2 y sigue conservando 7.2 porque no se llevó a cabo esa sustitución.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Creo que, en este asunto es importante que hagamos un ejercicio de memoria, para que recordemos cuál fue el criterio original que aprobamos aquí; cuando se nos presentó el día 16 de abril la posibilidad de hacer sustituciones, se aprobó el siguiente criterio: primero, que por bloques de competitividad se iba a mantener la proporcionalidad que nosotros en su momento habíamos aprobado el 29 de marzo. \_\_\_\_ Después dijimos que esto iba a tener una salvedad, solo cuando favoreciera a las mujeres, es decir, en cada uno de estos bloques se podría variar la paridad o esta distancia entre géneros siempre y cuando fuera para favorecer a las mujeres, para que hubiera más mujeres. Pusimos también otra excepción, esto siempre y cuando no implicara que en los bloques de menor votación hubiera un sesgo en perjuicio de las mujeres, es decir, si se pensaba aumentar mujeres pero en los bloques de votación menores y eso implicaba que un género iba a estar en el bloque de votación inferior, eso no lo íbamos a permitir. \_\_\_\_\_

Al día siguiente, el 17 de abril, se hizo una interpretación teleológica de este criterio y se dijo que sí se iban a permitir algunas compensaciones, entonces, a lo mejor se podría sustituir en un bloque a una mujer por un hombre siempre y cuando en otro bloque se metiera al revés y entonces se pudiera ahí hacer una compensación. \_\_\_\_\_

No obstante, lo que sí seguimos manteniendo, es que no se iba a permitir que hubiera más mujeres en el bloque de votación inferior, de tal suerte que advirtiéramos un sesgo que expresamente no lo prohíbe la Ley General de Partidos Políticos. \_\_\_\_\_

Ahora, el Proyecto de Acuerdo que originalmente se nos circuló para esta sesión, lo que estaba proponiendo era hacer un requerimiento a la Coalición “Por México al Frente” para que cambiara una sustitución que estaba solicitando en el bloque de votación intermedia, en donde implicaba que iba a bajar una fórmula de mujeres e iba a subir una fórmula de hombres; aún y cuando en el bloque de votación mayor se iban a subir a más mujeres, porque, recordemos, no se iban a permitir las compensaciones, por lo menos en el criterio original, no obstante, entiendo que ese no fue el criterio mayoritario, entonces se hace un engrose y esto se modifica y ya no

se va a hacer este requerimiento a la Coalición “Por México al Frente”, no compartiría eso porque es contrario a lo que originalmente sostuve en la sesión pasada, pero entiendo que eso es acorde a lo que la mayoría aprobó la sesión anterior. \_\_\_\_\_

Sin embargo, tenemos otro asunto que tiene que ver con la Coalición “Todos por México”, en este caso, se había hecho un requerimiento para que rectificara una sustitución en el bloque de votación menor, en donde se pensaba sustituir a una fórmula de hombres por mujeres, a pesar de que se iban a tener más mujeres compitiendo, lo que nosotros determinamos aquí es que, como era en el bloque de votación más desfavorable para el partido político no lo podíamos permitir, porque eso iba a implicar que hubiera 7 fórmulas de mujeres y 2 fórmulas de hombres, lo cual evidenciaba un sesgo en perjuicio de las mujeres en el bloque de votación inferior, entonces aprobamos por unanimidad hacer un requerimiento al partido político, en el Proyecto original que se nos circuló, se estaba haciendo de nuevo este requerimiento, pero ahora para que fuera atendido en 24 horas, y adicionalmente se estaba proponiendo hacer una amonestación pública al partido político porque no había atendido el otro requerimiento, sin embargo, cuando se circula el engrose, esto se modifica, y entonces ya no se va a hacer este requerimiento que en principio nosotros habíamos aprobado por unanimidad y que era acorde al criterio que nosotros consideramos que se tenía que aplicar para las sustituciones, y que, más allá de eso, está velando porque se cumpla lo que dice expresamente el artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, que señala que: “...en ningún caso se admitirán criterios que tenga como resultado que a alguno de los géneros les sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los que el partido político haya obtenido los porcentajes de votación más bajo...” \_\_\_\_\_

Ahora, más allá de eso, quiero hacer énfasis en que este requerimiento por el sesgo que habíamos advertido ya había sido motivo de que nosotros lo aprobáramos por unanimidad en el Acuerdo 391, en el Punto Octavo específicamente de ese Acuerdo, si se permite hacer esa sustitución, además de que es contrario a lo que nosotros



habíamos aprobado, es expresamente contrario a lo que establece la Ley General de Partidos Políticos, por lo tanto, no podría acompañar estas 2 cuestiones y pediría una votación diferenciada por lo que hace al Punto de Acuerdo Cuarto, únicamente respecto a la sustitución solicitada por la Coalición “Todos por México” en el Distrito 31 del Estado de México, y respecto a la solicitud de sustitución de la Coalición “Por México al Frente”, en el Distrito 34 del Estado de México, ahora, reconozco y lo había planteado en su momento en la sesión anterior, que este es un tema límite en el sentido de que sí vamos por esta ocasión a evitar que más mujeres compitan, sin embargo, la Ley es expresa, no se puede mandar solamente a las mujeres o preponderantemente a las mujeres a los Distritos menos favorables. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, estaría de acuerdo en que se hiciera la sustitución, se hiciera el requerimiento, como originalmente lo había propuesto el área y que después se modificó con el engrose que se circuló. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Jaime Rivera. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Maestro Jaime Rivera Velázquez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Buenas tardes. \_\_\_\_\_

Estamos aquí en este punto en el que la aplicación de un principio que buscando la equidad en la representación política, ha establecido ya además por Ley una regla general de paridad. Paridad en las candidaturas como algo obligatorio para los partidos políticos. \_\_\_\_\_

Aquí lo importante es, por un lado, ver cómo se logra cumplir mejor este principio y, además, qué implica la regla, la regla de paridad. \_\_\_\_\_

Por definición la regla de paridad tiene que verse en conjunto no en cada caso en lo individual, porque la paridad implica igualar 2 o más valores entre sí. Entonces, tiene que verse en conjunto. \_\_\_\_\_

En el caso del Partido de la Revolución Democrática o la Coalición “Por México al Frente”, en este caso lo registra el Partido de la Revolución Democrática, el cambio que produce, que presenta las 2 sustituciones, producen un beneficio evidente en la probabilidad de representación política efectiva de las mujeres, porque incorpora a una mujer en un Distrito de alta competitividad, que por cierto no es de alta competitividad solo del Partido de la Revolución Democrática, sino de su partido coaligado, el Partido Acción Nacional, es un Distrito que reúne esas características donde estos 2 partidos son altamente competitivos. \_\_\_\_\_

De tal manera que, es la probabilidad de representación política efectiva es muy alta y este es un beneficio evidente para el principio, el propósito de fortalecer la representación política de las mujeres. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, me parece correcto, me parece pertinente y que está de acuerdo tanto con la norma general establecida en la Ley como los criterios que hemos venido estableciendo. \_\_\_\_\_

En el caso de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, el primer dato que hay que destacar es que el Partido Revolucionario Institucional estaría agregando a 2 mujeres candidatas. O sea, sustituyendo a 2 hombres por 2 mujeres en sendos Distritos; y, por lo tanto, está elevando la presencia de mujeres en las candidaturas y podríamos decir también la probabilidad de representación política, porque en elecciones son probabilidades, los precedentes sirven, pero sabemos que esto puede cambiar en la competencia y por la decisión de los ciudadanos, de los votantes. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, es algo que en el fondo es semejante al otro caso, al que me acabo de referir, al del Partido de la Revolución Democrática, porque mejora la representación política de las mujeres; ésta se fortalece. \_\_\_\_\_

En un caso, el Distrito 39, un Distrito de competitividad intermedio, por lo tanto, no solo presenta una candidatura femenina, sino que tiene una probabilidad considerable de convertirse en elección, por lo tanto, en representación política efectiva.\_\_\_\_\_

En el otro caso, en el Distrito 31 que está en el estrato más bajo de competitividad, efectivamente se agrega una mujer. Donde tenemos un impedimento claro por Ley es que en el estrato más bajo haya candidatos exclusivamente de un género, no es el caso, porque habría 2, con eso ya no es exclusivo. Sesgo, bueno sí, aunque no sería sesgo, es decir, que no haya sesgo no necesariamente implica que sea exactamente paritario; no está bien definido eso.\_\_\_\_\_

Pero, veamos otro aspecto de esta cuestión. Si para no agregar a una mujer en un estrato de competitividad baja se impidiera esta sustitución, retirar a un hombre candidato sustituirlo por una mujer, en realidad, a fin de cuentas, estaría impidiendo a una mujer ser candidata. Es decir, en el conjunto lo que tendríamos es: en las candidaturas del Partido Revolucionario Institucional podemos tener 2 mujeres más o ninguna más o solo una mujer más. En la medida en que se está agregando a una mujer en un Distrito de competitividad intermedia y además se está agregando a una mujer en un Distrito de competitividad baja, el resultado neto es 2 mujeres candidatas adicionales y diría ninguno de estos cambios va en detrimento de las mujeres, porque no se está eliminando a ninguna mujer de la candidatura y menos de uno de los estratos que tuviera más probabilidad de competir.\_\_\_\_\_

Por esa razón, me parece que este Proyecto de Acuerdo tal como viene cumple el principio y no tiene un efecto en detrimento de la representación política de las mujeres, sino todo lo contrario, la fortalece.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Jaime Rivera.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Estoy de acuerdo con la mayor parte del Proyecto de Acuerdo, pero me preocupan exactamente las mismas cuestiones que ya han expresado la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín en el sentido de la Coalición “Todos por México”. Efectivamente, nosotros en el Acuerdo anterior le pedimos a esa Coalición, o se aprobó por este Consejo General un requerimiento y el requerimiento era: no podemos hacer esos cambios que tú estás solicitando en relación con el Distrito 31, que es del bloque de 20 por ciento de los menores, o sea de los más bajos y también con el Distrito 39 que es el bloque de intermedios, porque al momento en que tú estás haciendo esta sustitución estás afectando a las mujeres. \_ En el caso anterior, era porque de un bloque intermedio, que teníamos a una mujer, la estaban sustituyendo por un hombre, y para mantener la paridad estaban poniendo a una mujer en el bloque de votación más bajo de todos los Distritos entonces dijimos que no puede ser esto, porque estás causando un perjuicio. \_\_\_\_\_

La mayoría de las personas que estamos aquí en este Consejo General y de los que votamos, precisamente llegamos a la conclusión de que sí se podían hacer cambios entre los bloques siempre y cuando beneficiara a las mujeres. Por eso no aprobamos el Acuerdo anterior, y por eso se hizo el requerimiento. \_\_\_\_\_

Pero, ahora resulta que sí lo vamos aprobar, esa es la última propuesta que nos están formulando. \_\_\_\_\_

Es cierto que en relación con los bloques de votación intermedia ahora el partido político decía: Del Distrito 39, que originalmente tenía una mujer, ahora voy a poner un hombre en el bloque de votación intermedia, pero para compensar este cambio, en otro Distrito, que es el 17 de votación intermedia, donde tenía un hombre voy a poner una mujer. Entonces esta cuestión de los bloques de votación intermedia ya la salvamos. \_\_\_\_\_

Pero, desde mi punto de vista subsiste el problema en relación con el Distrito 31, ¿por qué? Porque en el Distrito 31 del Estado de México, originalmente teníamos un hombre, y ahora se está proponiendo una mujer, y son de los Distritos de más baja votación, menos del 20 por ciento de votación, o sea que son Distritos perdedores en su máxima expresión. \_\_\_\_\_

También el partido político nos está pidiendo que en el Distrito 11 del Estado de México, donde antes teníamos una mujer, y ahora se está proponiendo un hombre, que es de votación baja, pero no de las más bajas. Lo que se propone en el Proyecto es que avalemos estos cambios. \_\_\_\_\_

Creo que no deberíamos de votar a favor del Proyecto de Acuerdo en los términos que ahora se está presentando, porque sí estaría en detrimento de las mujeres. \_\_\_\_\_

Cosa distinta es que se hubiera cambiado el número global, por ejemplo, de mujeres y hombres, en este caso la Coalición "Todos por México" tiene 133 candidatos a Diputaciones Federales, registró a 67 mujeres y 66 hombres. Si en vez de esta proporción que puso desde el principio, ahora fueran 70 mujeres y menos hombres, estaría muy bien y no importaría que lo registrara en los Distritos de votación más baja. \_\_\_\_\_

Pero, aquí en este caso, seguimos exactamente con la misma proporción de hombres y mujeres que presentaron desde un inicio, y que nosotros avalamos, pero ahora con la complicación de que en los Distritos que corresponde al 20 por ciento de los menores. Ahora en vez de tener una referencia un poco más equilibrada, que tampoco lo era tanto, pero era un poco más equilibrada que teníamos antes, ahora lo vamos a dejar en 2 hombres y 7 mujeres. \_\_\_\_\_

Realmente estamos propiciando que esa mujer, con la sustitución que se quiera hacer, vaya a competir por uno de los Distritos más perdedores que se tienen por parte de esta Coalición. Creo que eso iría precisamente en detrimento de las mujeres, pero también sería contradictorio con lo que nosotros aprobamos en el Acuerdo anterior. \_\_\_\_\_

Entonces, también me iría por quedarnos con la versión anterior del Acuerdo, la que se circuló el día de ayer a las 11:00 horas, donde precisamente se sancionaba a la Coalición por no haber cumplido con el requerimiento y haber actuado en consecuencia, y se le daba un nuevo plazo breve de 24 horas para hacer los ajustes correspondientes, entonces por eso estamos dividiendo los distritos de votación más alta, votación intermedia y votación más baja, pero además del de más baja, también estamos sacando los de la votación del menos del 20 por ciento, precisamente para propiciar que ahí no sean registradas exclusivamente mujeres. \_\_\_\_\_

Claro, me van a decir tal vez, “bueno, es que van a quedar 7 hombres, digo, 7 mujeres y 2 hombres, entonces no es exclusivo de las mujeres”, sí, pero antes la proporción que había era mucho más favorable, y creo que debemos de seguir tratando de propiciar una participación, más viable para las propias mujeres. \_\_\_\_\_

La referencia que ahora tenemos de los 20 distritos, de los menores que son 9, tenemos 3 hombres y 6 mujeres, ya hay, obviamente, una mayoría de mujeres en ese bloque, pero ahora si se acepta este cambio, entonces tendríamos 2 hombres y 7 mujeres, entonces se estaría volviendo la brecha mucho más larga. \_\_\_\_\_

También tengo algunas cuestiones de forma, que espero que ya estén circulando la errata. \_\_\_\_\_

Primero tenía una errata inicialmente con el Proyecto de ayer, que ya se corrigió el error, porque antes en la página 3 decía en el Considerando 5 que se hacía referencia al Licenciado Horacio Duarte y se le estaba poniendo que era representante de Nueva Alianza. Entonces, digo, claro que eso no es cierto, pero que bueno que ya se corrigió en el nuevo Proyecto de Acuerdo. \_\_\_\_\_

Pero, tengo otras erratas que creo que sí debemos de atender. \_\_\_\_\_

En la página 4, en el Considerando 8, se está diciendo que la ciudadana María del Rocío Flores Cervantes es candidata propietaria Senadora, y más bien es candidata suplente, y eso lo podemos constatar en la página 24 donde estamos diciendo que precisamente la persona que la va a sustituir va para una candidatura suplente al Senado. \_\_\_\_\_

Igual en la página 11 dice que la ciudadana Natalia del Carmen Montero Córdova es candidata propietaria a Diputada, y es suplente a Diputada y también si lo quieren corroborar para que en la página 27, precisamente con la persona que la va a sustituir estamos diciendo que es suplente.\_\_\_\_\_

Igual en la página 13 hay otro error, estamos diciendo que el señor Everardo José de la O Martínez es candidato suplente a Diputado, cuando realmente es propietario, y para corroborarlo tenemos la página también 28, donde Arturo Charles Pérez, que es la persona que lo va a sustituir, estamos precisamente proponiendo que sea registrado como propietario.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, la Consejera Electoral Claudia Zavala desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Claro que sí.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Claudia Zavala.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Consejera la tesis que propone aquí me parecería que partiendo de la base de que podría existir el sesgo en 7-2 en el de menores, menores, me parecería que no sería entonces accesible la propuesta del Distrito 11, si no se tiene la mirada integral no sería posible la propuesta del Distrito 11 del Partido Verde Ecologista de México, porque entonces nos modifica el bloque integral con menos mujeres en los menores, en esta parte nos cambia y el criterio que seguimos con una mirada integral la sesión del 17 de abril, fue que no hubiera estas modificaciones salvo si había un beneficio, creería, lo leería igual que en esta medida.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Sí entendí bien, efectivamente, ahora los problemas que tenemos es en el Distrito 11 del Estado de México que está una mujer, y se quiere sustituir por un hombre y en el Distrito 31 del Estado de México donde está un hombre y se quiere sustituir por una mujer, pero estamos hablando de los Distritos de más baja votación, entonces no deberíamos de aprobar estas sustituciones, ni del Distrito 11 ni del Distrito 31.\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Consejera Electoral Adriana Favela, el Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid representante del Partido de la Revolución Democrática desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Sí claro, con gusto\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática el C. Camerino Eleazar Márquez.\_\_\_\_\_

**El representante del Partido de la Revolución Democrática, Ciudadano Camerino Eleazar Márquez Madrid:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Brevemente Consejera Electoral para preguntarle, en razón de la propuesta del cambio que nosotros estamos realizando del Distrito 09 de Uruapan, Michoacán, que es de alta competitividad y que estamos subiendo una propuesta de mujer, esto no altera el porcentaje global y vamos maximizando la acción afirmativa de género, ¿está usted de acuerdo en ese cambio del Distrito 09?, porque no se manifestó al respecto,



y estamos subiendo de un Distrito de mediana a alta competitividad, si en ese sentido estaría de acuerdo en el engrose.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Para responder, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Si, estaría de acuerdo, no me referí porque dije que estaba de acuerdo en lo general con el Proyecto de Acuerdo y me fui a la parte con lo que no estaría de acuerdo, pero sí, ese es un buen ejemplo, precisamente aquí ya obviamente hay un cambio en relación con un bloque donde se está cambiando a una mujer a un bloque de una competitividad mayor y claro que eso siempre es posible y es muy bueno, y en su lugar se está yendo a un bloque de menos competitividad un hombre, entonces eso creo que sí lo debemos de propiciar, pero no el caso que se está dando en el Estado de México con la Coalición “todos por México”\_\_\_\_\_

Es cuanto, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Tonatiúh Medina, representante del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Este órgano solicitó la sustitución de los ciudadanos Carlos Rangel Aquino y José Alberto Cortés Ávila, candidatos propietarios y suplentes, respectivamente a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, en el Distrito 17 del Estado de México, por las ciudadanas Verónica Solís y Sandra Noemí Moreno Ayala, con esta postulación consideramos que complementamos la diversa hecha en el Distrito 39, y

con ella dimos puntual cumplimiento al principio de paridad en el bloque intermedio, ya que existe una relación proporcional entre los géneros. \_\_\_\_\_

Consideramos que el partido político ha dado cumplimiento en sus términos al requerimiento formulado por esta autoridad, la razón fundamental consistió en que no podía realizarse una sustitución que implicara modificar una candidatura del género femenino para pasarla a un bloque de competitividad menor. \_\_\_\_\_

Es claro que con la inclusión de una nueva fórmula de candidatos en el Distrito 17, quedó satisfecha dicha finalidad. Con ello mantenemos el equilibrio en el bloque intermedio de competitividad. \_\_\_\_\_

Ahora bien, con la sustitución complementaria en el Distrito 17, colmamos lo ordenado por esta autoridad. \_\_\_\_\_

Es claro que no existía ninguna razón para ajustar la sustitución hecha en el Distrito 31 del Estado de México, por el contrario, en aras de privilegiar el principio de paridad de género y dada la voluntad de las candidatas, cosa muy importante, debe sustituirse la postulación de referencia. \_\_\_\_\_

Ciertamente, si bien es cierto que con la sustitución de referencia se genera que en el bloque de competitividad más bajo haya una mayor proporción del género femenino, lo cierto es que desde una visión integral el partido político está postulando un número de candidaturas mujeres superior al 50 por ciento y en los bloques de competitividad mayores existe una relación proporcional entre los géneros, lo cual lejos de ser contrario al principio de igualdad real lo fortalece. \_\_\_\_\_

Es un punto de partida y es un punto de arranque. Buscamos establecer las condiciones mínimas para que las mujeres puedan desplegar sus atributos y capacidades, especialmente cuando así lo deseen ellas en la competencia política. \_\_\_\_

Desde este punto de vista, el establecimiento concreto de una acción afirmativa, no limita que puedan adoptarse acciones adicionales que puedan fortalecer la búsqueda del valor substancial que es justamente el de la igualdad real en la participación política. \_\_\_\_\_

Esta ha sido la postura que ha adoptado esta autoridad electoral. Por ejemplo, al incluir los bloques de competitividad, o bien, al haber reservado distritos para población indígena, donde también tenía que respetarse el principio de paridad de género, las cuales si bien no se encuentran previstas en la normatividad electoral, sin duda abonan a la consecución del valor sustancial, por lo que son constitucionalmente aceptables. \_\_\_\_\_

En esta dirección, inscribimos la postulación de candidaturas hecha por este Instituto Político, al reiterar la hecha en el Distrito 31, lo que busca es incrementar la posibilidad de que las mujeres puedan alcanzar la igualdad real, con ello se estaría postulando un mayor porcentaje de candidaturas del género femenino, superior al 50 por ciento que como mínimo establece la Legislación Electoral. \_\_\_\_\_

Cabe precisar que no existe ninguna obligación de integrar la mitad de las candidaturas de un partido político por personas de género masculino. Esto es, no existen acciones afirmativas a favor de los hombres. \_\_\_\_\_

Los fines que persiguen las normas de paridad, es proteger que se encuentra en desventaja histórica, por tanto, hasta que no se corrija esta situación de vulnerabilidad y disparidad a que se han enfrentado las mujeres. \_\_\_\_\_

No puede hacerse una exigencia de paridad absoluta, como lo comentaba el Consejero Electoral Jaime Rivera, a favor del grupo que ha sido históricamente predominante, es obvio. \_\_\_\_\_

Sostener lo contrario, conduciría al extremo de considerar que para cumplir con el principio de paridad de género que es una acción afirmativa en favor del género femenino, se vinculara al Instituto Político que represento a sustituir una fórmula de candidatas mujeres por otra del género masculino, lo que por sentido común sería contrario al derecho fundamental a una igualdad real que se busca tutelar con la acción afirmativa de referencia, es lógico que entre mayor número de postulaciones del género femenino haya, mayor será la probabilidad de que alcance una representación política. \_\_\_\_\_

Independientemente de los bloques de menor competitividad la suerte no está echada y todo puede cambiar; es por eso que aumentamos el número de mujeres.\_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Señor representante, la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela desea hacerle una pregunta. ¿La acepta usted?\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Si.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Usted dice que se aumentó el número de mujeres, pero según las cuentas que tengo son 133 candidaturas a Diputados Federales y tenemos, desde un inicio, solamente 66 hombres y 67 mujeres, y así lo aprobamos, y además esto tampoco fue como una concesión realmente de la propia Coalición, sino que nosotros dijimos: “como es un número impar todos los números, o sea, impares tienen que terminar con, o sea, tienen que favorecer a las mujeres”. Entonces, así lo tendrían que hacer no tanto por una convicción, sino por una cuestión de legalidad.\_\_\_\_\_

Entonces, y ahora con los cambios seguimos teniendo 66 hombres y 67 mujeres, no veo dónde haya aumentado en las candidaturas que ustedes están proponiendo la participación de las mujeres, lo único que han hecho, en este caso, desde mi punto de vista, es: de una mujer que estaba en el distrito de menor votación, ahora va hasta los Distritos de menos de 20 por ciento de votación.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Para responder tiene el uso de la palabra el representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Con gusto, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela.\_\_\_\_\_

Aumentamos 2 mujeres en el bloque intermedio y mantuvimos una mujer en el bloque de menor competitividad, porque ella así lo decidió, o sea, perdón, pero es una candidatura que pusimos a disposición de esta candidata y ha decidido jugar bajo esas condiciones.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante.\_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel.\_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas:** Gracias, Consejero Presidente.\_\_\_\_\_

Nada más para hacer énfasis que si permitimos esta sustitución que está requiriendo el Partido Revolucionario Institucional, lo que vamos a tener es que en el bloque de votación del 20 por ciento de los menores, el 77 por ciento de las fórmulas sería para mujeres.\_\_\_\_\_

Es cierto que el artículo 3, numeral 5, de la Ley General de Partidos Políticos, habla expresamente de que no se va a permitir que se envíe exclusivamente a un género a los Distritos perdedores, sin embargo, este artículo ya ha sido interpretado por la Sala Superior para determinar en qué casos debemos de considerar que estamos ante un sesgo. Por ejemplo, en el SUP-RAP-134/2015, la Sala Superior consideró que como una diferencia razonable el 10 por ciento entre ambos géneros en la postulación de Distritos de votación más bajos de los partidos políticos en Elección anterior; ello es así, porque tiende a radicar un sesgo evidente entre los géneros, cosa que en este momento nosotros no estamos haciendo, nosotros estamos permitiendo que haya un sesgo en perjuicio de las mujeres en el bloque de menor competitividad, contrario a lo

que establece expresamente la Ley General de Partidos Políticos, contrario a lo que ha señalado la Sala Superior en criterios y contrario también a lo que nosotros habíamos adoptado como determinación, porque hicimos un requerimiento al partido político para que corrigiera esta conducta. \_\_\_\_\_

Entonces, originalmente el Proyecto de Acuerdo que nos había presentado el Área estaba atendiendo esto, le estaba dando 24 horas para que hiciera la sustitución, para que atendiera el requerimiento que le habíamos hecho, y además le estamos imponiendo una amonestación pública. \_\_\_\_\_

Ahora se van a revertir todas estas acciones que habíamos hecho, me parece, de manera adecuada, y vamos a tomar una determinación que es contrario a lo que expresamente dice el artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos. \_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Continuando con la conversación, no estoy de acuerdo con lo que dice el representante del Partido Revolucionario Institucional, porque desde un inicio en el bloque de Distritos con votación intermedia tienen 21 hombres y 23 mujeres. Con los cambios que se han hecho quedan exactamente los mismos, 21 hombres y 23 mujeres, o sea no se está favoreciendo a las mujeres, así ya se había hecho desde un inicio. \_\_\_\_\_

Como lo dije desde mi primera intervención, en el Distrito 39 que es de votación intermedia antes estaba una mujer, se está cambiando por un hombre, y para compensarlo en el Distrito 17, que es también de votación intermedia, antes había un hombre y se está cambiando por una mujer. Entonces esos números quedan exactamente igual, pero seguimos con el problema del Distrito 31. \_\_\_\_\_

Qué bueno que ya en el Distrito de los bloques de votación intermedia ya hicieron esa compensación, y está bien, pero tenemos el problema del Distrito 31 porque, igual, teníamos un hombre, ahora se está postulando una mujer, estos son los Distritos más bajos de votación de menos del 20 por ciento. \_\_\_\_\_

En el Distrito 11, que antes teníamos una mujer, ahora se está postulando un hombre, el hombre está subiendo dentro de ese bloque de menor votación a una condición mejor dentro de ese bloque y se está perjudicando a una mujer. \_\_\_\_\_

Desde mi punto de vista aceptar esta situación, además de perjudicar a las mujeres, sería aceptar que no se cumpliera con el requerimiento que nosotros formulamos a la Coalición “Todos por México”, porque no se está cumpliendo con ese requerimiento en los términos que son factibles y que irían en relación con el requerimiento y en cumplimiento con este criterio que nosotros también aprobamos aquí en el Consejo General. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Creo que, se ha planteado una parte adicional sobre la mesa, no solamente es un problema de que nosotros requerimos la sesión pasada que se corrigiera el Distrito 31 por el sesgo evidente, es que la corrección o la forma como se está buscando compensar es en perjuicio de las mujeres. Lo único que sí se había dicho con mucha claridad el 17 de abril es todo bien siempre y cuando sea en beneficio de las mujeres, todo se vale, “China libre”, siempre en beneficio de mujeres. Se había puesto la salvedad del sesgo evidente, pero, incluso, en este momento obviemos el sesgo evidente, obviémoslo un segundo, incluso, obviemos el requerimiento que hicimos,

que me cuesta trabajo obviarlo porque lo hizo esta autoridad, pero por un instante obviémoslo. \_\_\_\_\_

La modificación que se nos está planteando es si tenemos Distritos que tienen mayor votación y Distritos que tienen menor votación, el hombre sube, la mujer baja. No estoy segura de eso cómo es favorable de género, porque puedo entender perfecto el caso de Nueva Alianza que se fue de bajo a intermedio, mejoró la mujer. Puedo entender el caso Partido de la Revolución Democrática, se fue de medio a alto, bien. \_ En ése, el criterio que se estaba señalando, la acción afirmativa es para beneficiar a las mujeres, y el fondo y el propósito de la medida que se adoptó es ésa, más allá de las diferencias que ya manifestamos el día 17 de abril, no importa, pero esto está yendo en contra de ese criterio, porque aquí el hombre sube, la mujer baja, y además obviarnos un requerimiento que ya hizo esta autoridad. \_\_\_\_\_

En verdad aquí sí, ya no solamente es que estamos desdiciendo nuestras propias Resoluciones sobre un Distrito concreto, porque el requerimiento no se hizo sobre cualquier Distrito, el requerimiento se hizo sobre el Distrito 31, específicamente, y el requerimiento que no se cumplió fue sobre el Distrito 31, específicamente, pero también estamos alterando esta, cómo lo llamaron, interpretación teleológica del criterio del 16 de abril, en el que dijimos algo, pero no quisimos decir eso, entonces, como quisimos decir una cosa distinta y al final del día lo que sí dijimos es que teníamos que beneficiar a las mujeres. \_\_\_\_\_

La propuesta que está en el engrose en relación al Distrito 31 y el Distrito 11 en la Coalición "Todos por México" está llevándonos exactamente a la conclusión contraria. \_ Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Consejero Electoral, Benito Nacif. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Electoral, Doctor Benito Nacif Hernández:** Muchas gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_



Entiendo el problema, estamos ante un movimiento, sustituciones dentro de un mismo bloque, es el bloque de menor competitividad donde están los 100 Distritos donde tienen el menor nivel de competitividad medido como la agregación de la votación de los partidos políticos coaligados, y dentro de este bloque, la propuesta de la Coalición es subir, bajar a una mujer y subir a un hombre en un Distrito donde la votación en la elección de hace 3 años fue el 43 por ciento, y meter a una mujer y sacar a un hombre en un Distrito donde la votación hace 3 años fue del 27 por ciento. \_\_\_\_\_

Son diferencias muy grandes entre un Distrito y otro a pesar de que están en el mismo bloque, es una diferencia de más del 80 por ciento, más o menos, en la votación. \_\_\_\_\_

Ciertamente aunque es una sustitución dentro del mismo bloque, si la autorizamos estamos yendo en contra del principio que aprobó este Consejo General, que las sustituciones si implicaban modificaciones en género, debían ser a favor de las mujeres. Evidentemente este cambio es en contra de las mujeres porque las pone en, la baja a un Distrito de, digo, no estamos hablando de la misma persona, pero pones a una mujer en un Distrito de menor competitividad, en la Coalición. \_\_\_\_\_

Entiendo la razón de las Consejeras Electorales Dania Paola Ravel, Alejandra Pamela San Martín y Adriana Margarita Favela, de que esto viola la lógica del Acuerdo que propuso el Consejo General en los Acuerdos anteriores. \_\_\_\_\_

Simpatizo con su posición y creo que tendremos que revisar este asunto, porque autorizarlo tal como lo pide ahora la Coalición, significaría ir en contra del principio que adoptó este Consejo General. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejero Electoral Benito Nacif. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Comparto el criterio que ha sido propuesto por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, porque es el que resulta congruente con la posición que asumía en la sesión pasada. \_\_\_\_\_

Me aparto de las primeras razones de la Consejera Electoral Dania Paola Ravel y la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín, obviamente porque tenemos el criterio teleológico que subyace a este punto. \_\_\_\_\_

Por eso fue la pregunta directa. Si nosotros estamos considerando que aquí está el sesgo debido al requerimiento, con mayor razón no debemos aprobar la sustitución que se presenta en el Distrito 11, efectivamente porque nos cambiaría incluso la regla primera que pusimos que fuera mayor número de mujeres cuando fuera impar en global. \_\_\_\_\_

Entonces, mi voto será, y ya no abundaré más en este sentido por las razones y siendo congruente con mi voto de la sesión pasada, del 17 de abril por las razones expuestas por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Sería cuanto, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral, Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Nada más para otro detalle. Creo que, el argumento en el sentido de que fueron las mujeres las que pidieron este cambio de irse a los Distritos de más baja votación, tampoco creo que sea tan aceptable. Porque era lo mismo que pasaba con esas mujeres llamadas “Juanitas” que resulta que aceptaban la candidatura, ser las propietarias y luego también aceptaban renunciar, propiciando que los hombres ocuparan su lugar en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. \_\_\_\_\_

Entonces, creo que por eso en este caso la voluntad aparentemente expresada por las mujeres, aunque hayan ido a ratificar que renunciaban a la candidatura, desde mi punto de vista no sería suficiente. \_\_\_\_\_

Entonces, creo que aquí no podríamos autorizar estos cambios del Distrito 31 y 11. Eso sería lo que quisiera dejar ahí muy claro. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Adriana Margarita Favela. \_\_\_\_\_

Tiene el uso de la palabra el Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza, representante del Partido Revolucionario Institucional. \_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Entiendo de alguna forma el argumento que pone sobre la mesa la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, sin embargo, nuestras candidatas no están pidiendo ir a Distritos con condiciones específicas. Están pidiendo poder participar en sus espacios de origen. \_\_\_\_\_

Entonces, ustedes al impedir esto con la votación que más o menos se ve que se está conformando, técnicamente están impidiendo que mujeres que han querido ganar su representación en lugares de origen, no puedan ni siquiera participar como candidatas. Eso es verdad. \_\_\_\_\_

Entonces, puedo entender el lado de la autoridad, pero también hay que entender el lado político, son ciudadanas que legítimamente buscan encontrar los cauces de la participación política y poder eventualmente ganar un Distrito. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Si no hay más intervenciones, Secretario del Consejo, tome la votación correspondiente. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Hasta donde tengo mis registros la discusión además de las fe de erratas que señalaba la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela que eso debe entrar en el paquete en lo

general, la discusión se ha centrado en torno, por el caso de la Coalición “Por México al Frente”, por lo que hace al Distrito 34.\_\_\_\_\_

La Coalición “Todos por México” son los Distritos 31 y 11, hasta donde lo tengo referido, y “México al Frente” el 34, que es lo del Partido de la Revolución Democrática, ¿Cierto? Ésos son los 3 Distritos que han estado en la discusión.\_\_\_\_\_

Entiendo que las intervenciones de las Consejeras Electorales Adriana Margarita Favela, Alejandra Pamela San Martín, la Consejera Electoral Dania Paola Ravel, incluso en este caso la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala acompañan la propuesta que se hizo para lo que hace a los Distritos 31 y 11, ahí irán las 4, que es el criterio también de la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela; 31 y 11 la Coalición “Todos por México”, que involucra al Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Hay una moción del representante del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Más o menos viendo cómo viene la votación, pediría respetuosamente si para ustedes es posible otorgarnos un mayor plazo, digo, 24 horas no es exactamente algo posible en el mundo político, especialmente cuando son mujeres a las que les vamos a negar la posibilidad de participar.\_\_\_\_\_

Entonces, les pediría nos puedan dar 48, 72 horas, en caso de que sea posible. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Sí, creo que, permítanme primero que el Secretario del Consejo, termine la explicación del sentido de la votación, por favor.\_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Sí, porque todavía no terminaba de poner sobre la mesa cuál es el sentido de la votación.\_\_\_\_\_

Creo que, en eso todas las intervenciones coincidieron en el caso de los Distritos 31 y 11, “Todos por México”, y tendría como consecuencia la amonestación y hasta ahora como está sugerido el requerimiento para la modificación de 24 horas. Hasta ahí, antes de la moción que hace el representante del Partido Revolucionario Institucional.\_\_\_\_\_

Entiendo que por el caso de la Coalición “México al Frente”, que involucra en particular la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, aquí sí no hay una coincidencia, en particular el caso de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, que ella sí acompañaría el engrose como fue propuesto y esa votación, y también la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, y esa votación la pondría en lo particular. \_\_\_\_\_

Hasta ahí entiendo que todo lo demás podría ir en lo general, excepto el caso de “México al Frente”, que iría en lo particular. \_\_\_\_\_

En todo caso después separaría en lo particular el tiempo para cumplir con el requerimiento correspondiente, viene una propuesta por 24 horas y el representante del Partido Revolucionario Institucional pide una propuesta por 48 horas. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Para una moción, tiene el uso de la palabra la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Absolutamente de acuerdo con el sentido de las votaciones, solo para señalar una cuestión, hay una razón por la que se estableció un plazo de 24 horas, hay un requerimiento previo, no empezaron las 24 horas. \_\_\_\_\_

Ahora después de que no se cumplió el requerimiento previo, nuestros Lineamientos dicen que se amonesta y se dan 24 horas, no es algo que haya surgido el día de hoy y que se esté dando un plazo súper corto para cumplir. \_\_\_\_\_

Solo lo que decía en mi moción. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Hay una moción de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Solo para aclarar, porque se hizo un cambio en el Distrito 39 por la propia Coalición “Todos por México” 37-17, que también estoy de acuerdo con ese en la misma lógica del razonamiento de la Coalición “por México al Frente”. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Hay una moción del representante del Partido Revolucionario Institucional. \_\_\_\_\_

**El C. representante suplente del Partido Revolucionario Institucional, Licenciado Ramón Tonatiúh Medina Meza:** Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Perdón, pero nosotros sí cumplimos con el requerimiento, ustedes lo van a votar en contra, eso queda claro, pero sí cumplimos eventualmente, incluso, el Proyecto de Acuerdo venía a favor de nuestra propuesta que ahora van a votar en contra. \_\_\_\_\_

Gracias, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, señor representante. \_\_\_\_\_

Proceda con la votación, Señor Secretario. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Señoras y señores Consejeros Electorales, se consulta si se aprueba en lo general el Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, identificado en el orden del día como el punto número 25, excluyendo en esta votación en lo general por lo que hace a la Coalición “México al Frente”, en particular el Distrito 34 que será sometido en la votación en lo particular e incluyendo en esta votación en lo general la fe de erratas señalada por la Consejera Electoral Adriana Margarita Favela, así como la propuesta de las 4 Consejeras Electorales en particular para las modificaciones de acuerdo al engrose circulado por lo que hace a la Coalición “Todos por México” que afectan a los Distritos 31 y 11. \_\_\_\_\_

Esto implicaría un engrose, las consecuencias es amonestación y el requerimiento de 24 horas para subsanar esto. \_\_\_\_\_

En lo particular separo lo del nombramiento de 24 horas y los Distritos que ya había señalado la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala, que ya estaba de acuerdo con ellos. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Una moción de la Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**La C. Consejera Electoral, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez:** Creo que, en el caso del Partido Verde Ecologista de México no aplica amonestación, estamos en el primer momento de sustitución, no hay amonestación, y son 48 horas. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Consejera Electoral Beatriz Claudia Zavala. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Quienes estén a favor, de aprobarlo en estos términos, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobado por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Ahora someto a su consideración en lo particular por lo que hace al Partido de la Revolución Democrática particularmente, aunque está dentro de la Coalición “Por México al Frente”, por lo que hace al Distrito 34. Primero, como se circuló el último engrose, y en caso de que no procediera sometería a votación la propuesta que hicieron la Consejera Electoral Alejandra Pamela San Martín y la Consejera Electoral Dania Paola Ravel. \_\_\_\_\_

Entonces en el sentido de como viene el engrose, los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

6 votos. \_\_\_\_\_

¿En contra? 3 votos. \_\_\_\_\_

Aprobado como viene en el engrose por 6 votos a favor (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello) y 3 votos en contra (de los Consejeros Electorales, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña y Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles; asimismo no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Falta una votación en lo particular. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** Falta una votación en lo particular por lo que hace al tiempo para atender el requerimiento. \_\_\_\_\_

La propuesta inicial es 24 horas, quienes estén a favor de esa propuesta sírvanse manifestarlo. \_\_\_\_\_

Aprobada por unanimidad de los presentes (de los Consejeros Electorales, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, no estando presentes durante la votación los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González y Maestro Marco Antonio Baños Martínez), Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Por lo tanto, el requerimiento deberá atenderse en el plazo de 24 horas, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

Tal y como lo establece el Reglamento de Sesiones, Consejero Presidente, procederé a realizar el engrose de conformidad a los argumentos expuestos. \_\_\_\_\_

**(Texto del Acuerdo aprobado INE/CG425/2018) Pto. 25** \_\_\_\_\_



**ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVO A LAS SOLICITUDES DE SUSTITUCIÓN DE CANDIDATURAS A SENADURÍAS Y DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES**

**ANTECEDENTES**

- I. En sesión especial celebrada el día veintinueve de marzo de dos mil dieciocho, fue aprobado el *Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Senadoras y Senadores por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018*, identificado con el número INE/CG298/2018.
- II. En la referida sesión especial, fue aprobado el *Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Diputadas y Diputados al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Diputadas y Diputados por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018*, identificado con el número INE/CG299/2018.
- III. En sesión extraordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil dieciocho, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo al cumplimiento al Punto Tercero del diverso INE/CG299/2018, por el que se registraron las candidaturas a diputadas por el principio de mayoría relativa presentadas por el Partido de la Revolución Democrática en el

Distrito 10 de Nuevo León, y de Movimiento Ciudadano en el Distrito 04 de Morelos, identificado con el número INE/CG381/2018.

- IV. En sesión extraordinaria celebrada el día dieciséis de abril de dos mil dieciocho, fue presentado y discutido el “Proyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones”. En la discusión de dicho punto, se determinó devolver el Proyecto para realizar una nueva verificación de los bloques de candidaturas, bajo el criterio de que deben mantenerse conforme a lo aprobado por el Consejo General en los Acuerdos INE/CG298/2018 e INE/CG299/2018, en sesión especial celebrada el 29 de marzo de 2018, con la salvedad de que las sustituciones que se soliciten impacten los bloques de tal suerte que beneficien al género femenino.
- V. En sesión extraordinaria celebrada el día diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se aprobó el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas a Senadurías y Diputaciones por ambos principios, presentadas por los Partidos Políticos Nacionales y Coaliciones, identificado con la clave INE/CG391/2018.

## **CONSIDERANDO**

- 1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en relación con el numeral 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
- 2. El artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, establece que los partidos políticos y coaliciones podrán sustituir a sus candidatos libremente dentro del plazo establecido para el registro, y que vencido dicho plazo,

exclusivamente podrán hacerlo por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el Punto Décimo tercero del Acuerdo INE/CG208/2017, las sustituciones de candidaturas por causa de renuncia, sólo podrán realizarse si ésta es presentada a más tardar el 1 de junio de 2018; a partir de esa fecha el Consejo General procederá a la cancelación del registro de la persona que renuncia.

### **Sustituciones de candidaturas a Senadurías de mayoría relativa**

3. Mediante oficio RNA/130/2018, recibido con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
  - Del ciudadano Mario Alberto Hernández Corona, candidato propietario a Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la lista correspondiente al estado de Guanajuato, por el ciudadano **José Humberto Muñoz Torres**. (Bloque de intermedios)
  - Del ciudadano Mario Adolfo Ramírez Partida, candidato propietario a Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista correspondiente al estado de Puebla, por el ciudadano **Emilio Salgado Néstor**. (Bloque de intermedios)
4. Mediante escritos recibidos los días cinco y diecinueve de abril del presente año, la C. Joanna, Alejandra Felipe Torres, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa, por la coalición Por México al Frente, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
  - Del ciudadano José Arturo Ramírez Alanis, candidato suplente a Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista correspondiente al estado de Colima, por el ciudadano **Óscar Manuel Gutiérrez Valencia**. (Bloque de menores)

- De la ciudadana Martha Adriana Durán Espinoza, candidata suplente a Senadora por el principio de mayoría relativa, en el número 2 de la lista correspondiente al estado de Chihuahua, por la ciudadana **Maritere Yñárritu Salgado**. (Bloque de menores)
5. Mediante oficio REPMORENAINE-181/2018, recibido con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de mayoría relativa por la coalición Juntos Haremos Historia, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
- Del ciudadano Gilberto Herrera Solórzano, candidato suplente a Senador por el principio de mayoría relativa, en el número 1 de la lista correspondiente al estado de Baja California, por el ciudadano **Gerardo Novelo Osuna**. (Bloque de intermedios)

#### **Sustituciones de candidaturas a Senadurías de representación proporcional**

6. Mediante escrito recibido el día diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
- De la ciudadana Verónica Pérez Pérez, candidata propietaria a Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 3 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana **Giselle Yunueen Arellano Ávila**.
7. Mediante oficio PVEM-INE-245/2018, recibido con fecha diecinueve de abril de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria Ejecutiva, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio

de representación proporcional, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De las ciudadanas Karla Irina Martínez de Aguilar Velásquez y Guieshoba Isabel Ríos Santos, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Senadoras por el principio de representación proporcional, en el número 5 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por las ciudadanas **Geraldine González Cervantes y Adilene Angulo Gastelum.**
8. Mediante oficio ES/CDN/INE-RP/0228/2018, el Lic. Berlín Rodríguez Soria, Representante Propietario de Encuentro Social ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna senaduría por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
- De la ciudadana María del Rocío Flores Cervantes, candidata suplente a Senadora por el principio de representación proporcional, en el número 5 de la lista correspondiente a la circunscripción única, por la ciudadana **Ma del Rocío Avonce Trujillo.**

#### **Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de mayoría relativa**

9. Mediante escrito recibido el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:
- De los ciudadanos Álvaro Martínez Hernández y Luis Francisco Gálvez Paulin, candidatos propietario y suplente a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del estado de Hidalgo, por los ciudadanos **Pascual Charrez Pedraza y Juan Omar Cruz Nopal.** (Bloque de menores)
10. Mediante oficios PVEM-INE/244/2018, PVEM-INE/246/2018 y PVEM-INE-249/2018, recibidos con fechas diecinueve y veinte de abril de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario

Técnico y Secretaria Ejecutiva, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De las ciudadanas Perla María Valles Cota y Dania Berenice Méndez Amao, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del estado de Baja California Sur, por las ciudadanas **María de Jesús Cruz Medina y Linda Joanna Peralta Ceseña**. (Bloque de 20% de menores)
- Del ciudadano José Luis Cortez Rodarte, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 01 del estado de Jalisco, por el ciudadano **José Juan González Pérez**. (Bloque de menores)
- Del ciudadano Héctor Carbajal Peraza, candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del estado de Querétaro, por el ciudadano **Christian Orihuela Gómez**. (Bloque de mayores)

11. Mediante oficios MC-INE-198/2018 y MC-INE-210/2018, recibidos los días veinte y veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De la ciudadana Keila Abundez Anzures, candidata suplente a diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado de Morelos, por la ciudadana **Julia Zapatero Vergara**. (Bloque de menores)
- De las ciudadanas Laura Gutiérrez Urquidez y Rosalba Zúñiga Figueroa, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 04 del estado de Morelos, por las ciudadanas **Ana María Escobar Román y Anahí Batalla Carranza**. (Bloque de intermedios)

12. Mediante oficio RNA/130/2018 recibido con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De las ciudadanas Santa Marlen Villeda García y Melissa Aryanee Herrera Meza, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 02 del estado de Querétaro, por las ciudadanas **Melissa Aryanee Herrera Meza y Gabriela Ruiz Bahena**. (Bloque de menores)
- Del ciudadano Diego Ricardo Reyes Mena, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 05 del estado de Querétaro, por el ciudadano **Marco Antonio Magaña Figueroa**. (Bloque de intermedios)

13. Mediante escrito recibido el día dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, así también, mediante oficios CEMM-363/2018, CEMM-401/2018 y CEMM-407/2018, recibidos los días trece, diecinueve y veinte de abril de dos mil dieciocho, el Mtro. Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, así como el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, a través de los oficios MC-INE-189/2018 y MC-INE-191/2018, recibidos con fechas diecinueve y veinte abril de dos mil dieciocho, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la coalición Por México al Frente para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- Del ciudadano José Baldovinos Sánchez, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado de Chiapas, por el ciudadano **Fernando Jiménez Aguilar**. (Bloque de 20% de menores)

- De la ciudadana Mónica del Carmen Escobar González, candidata propietaria a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 12 del estado de Chiapas, por la ciudadana **María de Lourdes Santos Zozaya**. (Bloque de menores)
- De la ciudadana Martina Luna Sánchez, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 22 de la Ciudad de México, por la ciudadana **Mariana Cruz Velázquez**. (Bloque de intermedios)
- De la ciudadana Mirna Ayala Acevedo, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 05 del estado de Guerrero, por la ciudadana **Dulce Suleyma Gómez Soriano**. (Bloque de intermedios)
- De la ciudadana Erika Bravo Contreras, candidata propietaria a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado de Hidalgo, por la ciudadana **Nancy Janeth Luna Zúñiga**. (Bloque de menores)
- De las ciudadanas Itzel Yarith López Ruiz y Alejandra Trejo Valdez, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 04 del estado de Hidalgo, por las ciudadanas **Liliana Villavicencio Ruiz y Leticia Lira Lira**. (Bloque de menores)
- De la ciudadana María Petrita del Carmen Olivares Orozco, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 20 del estado de Jalisco, por la ciudadana **María del Refugio Alvarado Romo**. (Bloque de mayores)
- Del ciudadano Erick Jair Miranda Hernández, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 01 del estado de México, por el ciudadano **Luis Fernando Anaya Martínez**. (Bloque de intermedios)



- Del ciudadano Armando Flores Heredia, candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 32 del estado de México, por el ciudadano **Ramón Montalvo Hernández**. (Bloque de intermedios)
  - De las ciudadanas María Elena Preza Martínez y María del Carmen Martínez Romero, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 34 del estado de México, por los ciudadanos **Mauricio López Chávez y Christian Daniel Espinosa Brito**. (Bloque de intermedios)
  - De la ciudadana Ana Belinda Hurtado Marín, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 01 del estado de Michoacán, por la ciudadana **Rosa Angélica Rico Cendejas**. (Bloque de mayores)
  - De los ciudadanos Víctor Manuel Manríquez González y Miguel Ángel Paredes Melgoza, candidatos propietario y suplente a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 09 del estado de Michoacán, por las ciudadanas **Edna Gisel Díaz Acevedo y Joanna Margarita Moreno Manzo**. (Bloque de mayores)
  - Del ciudadano Ernesto Camarillo Díaz, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 13 del estado de Puebla, por el ciudadano **Ernesto Javier Cázares Rodríguez**. (Bloque de menores)
  - De la ciudadana María Paula Durán Medina, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 03 del estado de Quintana Roo, por la ciudadana **Berenice Sosa Osorio**. (Bloque de menores)
14. Mediante oficios PVEM-INE-236/2018, PVEM-INE/237/2018, PVEM-INE-239/2018, PVEM-INE/243/2018, PVEM-INE/250/2018, PVEM-INE-251/2018 y PVEM-INE/312/2018, recibidos con fechas dieciocho, diecinueve, veinte y veintiuno de abril de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria Ejecutiva, respectivamente,

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la coalición Todos por México para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De los ciudadanos Ariosto Raúl Castillejos Acuña y Marco Antonio Barajas Campos, candidatos propietario y suplente, respectivamente a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 07 del estado de Chiapas, por los ciudadanos **Raciel López Salazar y Francisco Grajales Palacios**. (Bloque de mayores)
- Del ciudadano José Luis López Coutiño, candidato propietario a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 08 del estado de Chiapas, por el ciudadano **Juan Carlos Gómez Aranda**. (Bloque de mayores)
- De los ciudadanos Emmanuel Belisario de Jesús Palacios Dahmlow y Armando Carrasco Salazar, candidatos propietario y suplente, respectivamente a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 10 del estado de Chiapas, por los ciudadanos **Jorge Alberto Betancourt Esponda y Bernardo Jacobo Cuesy Muñoz**. (Bloque de mayores)
- De la ciudadana Diocelina Pérez Hernández, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 01 del estado de Guerrero, por la ciudadana **Alitzel Guerrero Sotelo**. (Bloque de menores)
- De la ciudadana María de la Flor García Vargas, candidata suplente a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 06 del estado de Guerrero, por la ciudadana **Ma. de Jesús Astudillo González**. (Bloque de menores)
- De las ciudadanas Susana Pichardo Pereyra y Eréndira Rodríguez Mosqueda, candidatas propietaria y suplente, respectivamente a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 11 del

estado de México, por los ciudadanos **Tassio Benjamín Ramírez Hernández y Ramiro Cisneros Tremear. (Bloque de menores)**

- De la ciudadana Laura Ibeth Arredondo Velázquez, candidata propietaria a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 19 del estado de México, por la ciudadana **Perla Guadalupe Monroy Miranda.** (Bloque de menores)
- Del ciudadano Guillermo Teutli Ramírez, candidato suplente a Diputado por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 23 del estado de México, por el ciudadano **Jesús King Flores.** (Bloque de intermedios)

**15.** Mediante oficios REPMORENAINE-171/2018 y REPMORENAINE-189/2018, recibidos los días dieciséis y veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Lic. Horacio Duarte Olivares, Representante Propietario de Morena ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas por la coalición Juntos Haremos Historia para alguna diputación por el principio de mayoría relativa, solicitó la sustitución de las mismas al tenor de lo siguiente:

- De los ciudadanos Pedro Vázquez González y Juan Manuel Martínez Alemán, candidatos propietario y suplente, respectivamente a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 05 del estado de Nuevo León, por los ciudadanos **Santiago González Soto y Pedro Vázquez González.** (Bloque de mayores)
- De la ciudadana Claudia Lizeth Garza Cavazos, candidata propietaria a Diputada por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 12 del estado de Nuevo León, por la ciudadana **Sandra Paola González Castañeda.** (Bloque de intermedios)

#### **Sustituciones de candidaturas a Diputaciones de representación proporcional**

**16.** Mediante escrito recibido con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, la C. Joanna Alejandra Felipe Torres, Representante Suplente del Partido Acción Nacional ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la

renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- Del ciudadano Hugo Josué Soriano Patraca, candidato suplente a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 19 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **Ricardo Omar Rodríguez Corte**.

17. Mediante oficio CEMM-401/2018, recibido con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el Maestro Camerino Eleazar Márquez Madrid, Representante Propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- Del ciudadano Israel Soto Peña, candidato propietario a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 10 de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **J. Guadalupe Valdivia Vital**.
- De las ciudadanas Carolina Contreras Pérez y Rocío Granados Arreguín, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 27 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, por las ciudadanas **Cristina Judith Rodríguez Araiza y María Ramona Araiza Martínez**.
- Del ciudadano Juan Carlos Lara Alcantar, candidato suplente a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 1 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **Alejandro Mendoza Olvera**.
- Del ciudadano Gonzalo Adrián Rosales Olascoaga, candidato propietario a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 21 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **José Alfredo Sánchez Reyes**.

18. Mediante oficios REP-PT-INE-PVG-081/2018, REP-PT-INE-PVG-086/2018, REP-PT-INE-PVG-088/2018 y REP-PT-INE-PVG-091/2018 recibidos con fechas diecisiete, diecinueve y veintitrés de abril de dos mil dieciocho, el Mtro. Pedro Vázquez González, Representante Propietario del Partido del Trabajo ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas al tenor de lo siguiente:

- De la ciudadana Zandra Bañuelos de la Torre, candidata propietaria a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 02 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, por la ciudadana **Margarita Alicia Arellanes Cervantes**.
- De las ciudadanas Blanca Lilia Ramírez Hernández y Delta Lizeth Jasso Sustaita, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 4 de la lista correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal, por las ciudadanas **Renata Libertad Ávila Valadez y Claudia Guadalupe Córdova Rojas**.
- De la ciudadana Natalia del Carmen Montero Córdova, candidata suplente a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 13 de la lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral plurinominal, por la ciudadana **Soledad Marlene Guillén García**.
- De los ciudadanos José Luis Villanueva Pérez e Israel Severo Martínez Merlín, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados por el principio de representación proporcional, en el número 3 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal por los ciudadanos **Rafael Ochoa Guzmán y Gerardo David Rodríguez López**.

19. Mediante oficios PVEM-INE-228/2018 y PVEM-INE-193/2018, recibidos con fecha dieciséis de abril de dos mil dieciocho, Antonio Xavier López Adame y Pilar Guerrero Rubio, Secretario Técnico y Secretaria Ejecutiva, respectivamente, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista

de México, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitaron la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De la ciudadana Naxelly Guerrero Castillo, candidata suplente a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 4 de la lista correspondiente a la tercera circunscripción electoral plurinominal, por la ciudadana **Ingrid Cristal Osorio Priego**.
- De la ciudadana Brígida Bolado García, candidata suplente a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 5 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por la ciudadana **Astrid Sontoya Muller**.

20. Mediante oficio MC-INE-202/2018, recibido el día 20 de abril de dos mil dieciocho, el Lic. Juan Miguel Castro Rendón, Representante Propietario de Movimiento Ciudadano ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- De la ciudadana María de los Ángeles Lozano Mac Donald, candidata suplente a Diputada por el principio de representación proporcional, en el número 3 de la lista correspondiente a la cuarta circunscripción electoral plurinominal, por la ciudadana **María Guadalupe Loyo Malabar**.

21. Mediante oficio RNA/130/2018, recibido con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho el Profr. Roberto Pérez de Alva Blanco, Representante Propietario de Nueva Alianza ante el Consejo General de este Instituto, en virtud de la renuncia de las personas postuladas para alguna diputación por el principio de representación proporcional, solicitó la sustitución de las mismas, al tenor de lo siguiente:

- Del ciudadano Raymundo Valdivia Hernández, candidato propietario a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 1

de la lista correspondiente a la primera circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **Juan Díaz de la Torre**.

- Del ciudadano Carlos Enrique Rugerio Islas, candidato suplente a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 3 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **Yeshua Sanyassi López Valdez**.
- De las ciudadanas Ligia Rosalía Requeses Espinosa y Nancy Montes Vilchis, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el principio de representación proporcional, en el número 4 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por las ciudadanas **Ruth Gabriela Goldschmied Guasch y Stefany Santuario Gutiérrez**.
- Del ciudadano Everardo José de la O Martínez, candidato propietario a Diputado por el principio de representación proporcional, en el número 37 de la lista correspondiente a la quinta circunscripción electoral plurinominal, por el ciudadano **Arturo Charles Pérez**.

**Cumplimiento al Punto Octavo del Acuerdo INE/CG391/2018, y análisis de la sustitución de candidaturas exhibida por la Coalición Todos por México, respecto del Distrito 11 del Estado de México**

- 22.** En el Punto Octavo del Acuerdo INE/CG391/2018, este Consejo General determinó lo siguiente:

**OCTAVO.-** *En razón de lo expuesto en el considerando 24 del presente Acuerdo, no se presenta la solicitud de sustitución de candidaturas exhibida por la coalición Todos por México, respecto de los Distritos 31 y 39 del Estado de México, hasta en tanto dicha coalición atienda el requerimiento que le fue formulado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos de este Instituto.*

El requerimiento formulado por la referida Dirección Ejecutiva, fue del tenor siguiente:

*“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 46, párrafo 1, inciso p) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral, me refiero a su oficio número*

PRI/REP-INE/0296/2018, recibido el día 10 del mes y año en curso, mediante el cual solicita la sustitución de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa en los Distritos 31 y 39 del Estado de México, conforme a lo siguiente:

- De los ciudadanos José Luis Montero Ramos y Mario Fernández Galindo, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a Diputados por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 31 del estado de México, por las ciudadanas **Alma Angélica Quiles Martínez e Irene Toribio Soriano. (Bloque de 20% de los menores)**
- De las ciudadanas Belén Domínguez de Jesús y Yubia Yolanda Jiménez Ávila, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 39 del estado de México, por los ciudadanos **Fernando González Mejía y Félix Báez Saca. (Bloque de Intermedios)**

Al respecto, le comunico que de llevarse a cabo las sustituciones que solicita, la integración de los bloques de candidaturas se modificaría conforme a lo siguiente:

Bloque	No. Distritos	Hombres	Mujeres
Menores	45	15	30
20% de los menores	9	2	7
Intermedios	44	22	22
Mayores	44	29	15
Total		66	67

De lo anterior se desprende que la sustitución de candidaturas en los términos solicitados, tendría como consecuencia la modificación del bloque que corresponde al 20% de los Distritos de menor votación (que pertenece a su vez al bloque de menores), así como la modificación del bloque de intermedios; en el primer caso se identifica un claro sesgo en perjuicio del género femenino, puesto que de los 9 Distritos que conforman el bloque, 7 están asignados a mujeres, lo que contraviene lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 282, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones; en el segundo caso, se disminuye el número de mujeres postuladas en el bloque de intermedios, lo que no es acorde con el criterio aprobado por el Consejo General en su sesión celebrada el 16 de abril del presente año, al discutir el proyecto de Acuerdo relativo a las solicitudes de sustitución de candidaturas.



*En razón de lo anterior, se requiere a la coalición “Todos por México”, integrada por el partido que representa, a efecto de que en un plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente, rectifique las solicitudes de sustitución referidas de modo que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior, sin dejar de cumplir el resto de los criterios de paridad que deben ser observados en la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa.*

De lo anterior se desprende lo siguiente:

**a) Bloque de intermedios.**

a.1) En el Acuerdo INE/CG391/2018, se dejó en condición suspensiva la sustitución relativa al Distrito 39 del estado de México, en virtud de que se pretendía sustituir una fórmula de mujeres por una fórmula de hombres, lo que tenía como consecuencia la modificación del bloque en perjuicio de las mujeres.

a.2) Mediante oficio PRI/REP-INE/0296/2018, la C. Claudia Pastor Badilla, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, en atención al requerimiento que le fue formulado por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Político, solicitó la sustitución de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa postuladas por la coalición Todos por México al tenor de lo siguiente:

- De los ciudadanos Carlos Rangel Aquino y José Alberto Cortés Ávila, candidatos propietario y suplente, respectivamente, a diputados por el principio de mayoría relativa en el Distrito 17 del Estado de México, por las ciudadanas **María Verónica Solís García y Sandra Noemí Moreno Ayala**. (Bloque de intermedios)

a.3) Con la solicitud de sustitución relativa al Distrito 17 del Estado de México, perteneciente al mismo bloque que el Distrito 39 de dicha entidad, se compensa el número de hombres y mujeres del bloque de intermedios para quedar como fue aprobado por este Consejo en el acuerdo INE/CG299/2018,

por lo que se cumple con lo requerido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas por lo que hace al bloque mencionado.

a.4) En consecuencia, resulta procedente presentar para su registro la sustitución de la fórmula que se encontraba en condición suspensiva, correspondiente al Distrito 39 del Estado de México, conforme a lo siguiente:

- De las ciudadanas Belén Domínguez de Jesús y Llubia Yolanda Jiménez Ávila, candidatas propietaria y suplente, respectivamente, a Diputadas por el principio de mayoría relativa, en el Distrito 39 del Estado de México, por los ciudadanos **Fernando González Mejía y Félix Báez Saca**. (Bloque de intermedios)

**b) Bloque de 20% de los menores.**

b.1) En el Acuerdo INE/CG391/2018, se dejó en condición suspensiva la sustitución relativa al Distrito 31 del estado de México, en virtud de que se pretendía sustituir una fórmula de hombres por una fórmula de mujeres, lo que tenía como consecuencia un sesgo evidente en perjuicio de las mujeres, puesto que incrementaba el número de ellas en los Distritos de menor votación.

b.2) Mediante oficio PRI/REP-INE/318/2018, la C. Claudia Pastor Badilla, Representante Propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General de este Instituto, por lo que hace a la solicitud de registro relativa al Distrito 31 del Estado de México, manifestó lo siguiente:

*“(…) si bien es cierto que con la sustitución de referencia se genera que en el bloque de competitividad más bajo haya una mayor proporción del género femenino, lo cierto es que, desde una visión integral, el partido político estaría postulando un número de candidaturas mujeres superior al 50%, y en los bloques de competitividad mayores existe una relación proporcional entre los géneros, lo cual, lejos de ser contrario al principio de igualdad real, lo fortalece*

*(…)*

*(…) al reiterar la hecha en el Distrito 31, lo que busca es incrementar la posibilidad de que las mujeres puedan alcanzar la igualdad real, pues con ello*

*se estaría postulando un mayor porcentaje de candidaturas del género femenino, superior al 50% que, como mínimo establece la Legislación Electoral.*

*(...)*

*Sostener lo contrario, conduciría al extremo de considerar que, para cumplir con el principio de paridad de género, que es una acción afirmativa en favor del género femenino, se vinculara al instituto político que represento a sustituir una fórmula de candidatas mujeres por otra del género masculino, lo que, por sentido común, sería contrario al derecho fundamental a una igualdad real, que se busca tutelar con la acción afirmativa de referencia, pues es lógico que, entre mayor número de postulaciones del género femenino haya, mayor será la probabilidad de que alcance una representación política.”*

Como se advierte, el partido mencionado pretende justificar el sesgo en el bloque del 20% de los Distritos de menor votación, bajo el argumento de que la coalición que encabeza ha postulado un número de mujeres candidatas a diputadas federales que resulta superior al 50%. Al respecto, esta autoridad aclara que el hecho de que la coalición Todos por México esté postulando 67 mujeres como candidatas a diputadas federales de mayoría relativa, y 66 hombres como candidatos a ese cargo de elección popular; es decir, postula más mujeres que hombres, ello deriva de que como coalición está registrando 133 candidaturas a diputaciones federales, y al tratarse de un número impar de candidaturas, entonces se encuentra obligada a registrar un mayor número de mujeres como acción afirmativa conforme al punto Quinto de la resolución INE/CG07/2018. Lo que evidencia que dicha coalición no ha concedido en forma voluntaria más espacios a las mujeres, pues únicamente se concretó a cumplir con lo establecido en la referida Resolución INE/CG07/2018.

Por lo que hace al argumento en el sentido de que en los bloques de competitividad mayores existe una relación proporcional entre los géneros; esta autoridad considera que es incorrecta la apreciación de la representante de la coalición, ya que en el BLOQUE DE MAYORES que comprende 44 Distritos, se registraron 29 hombres y 15 mujeres, lo que implica que la coalición determinó conceder al género masculino el 65.90% de las candidaturas que contienden en los Distritos con mayores probabilidades de

triunfo, mientras que a las mujeres solamente les concedió el 34.10% de las candidaturas en ese bloque.

Por lo que hace al BLOQUE DE INTERMEDIOS, que en el caso de la coalición comprende 44 Distritos, postuló 21 hombres y 23 mujeres, lo que implica que el 52.28% de las candidaturas las concedió a las mujeres y el 47.72% para los hombres, y si bien en este bloque registró 2 mujeres más en relación con las candidaturas de hombres, lo cierto es que resulta irrelevante porque, como ya se evidenció, en el Bloque de Mayores registró 14 hombres respecto de las mujeres.

Mientras que en el BLOQUE DE MENORES que constituyen 45 Distritos, postuló 16 hombres (35.56%) y 29 mujeres (64.44%), lo que implican 13 mujeres más respecto de los hombres en los Distritos con menos posibilidad de triunfo.

Los datos antes precisados muestran la tendencia de la citada coalición a registrar un número mayor de mujeres en los Distritos perdedores y más hombres en los Distritos ganadores, generando mayores oportunidades de que los hombres accedan a las diputaciones federales. Todo lo anterior, desvirtúa la afirmación de la coalición en el sentido de que está fortaleciendo el principio de igualdad real.

Por otra parte, resulta inatendible el argumento del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la coalición Todos por México, en el sentido de que con la sustitución complementaria en el Distrito 17 del Estado de México se colmó lo ordenado por esta autoridad en el requerimiento que se le formuló, por lo que, supuestamente, es claro que no existía ninguna razón para ajustar la sustitución hecha en el Distrito 31 de la misma entidad; ya que esta autoridad considera que aun con la sustitución al Distrito 17 no es factible validar la sustitución que pretende al Distrito 31, porque se trata de Distritos que pertenecen a distintos bloques, ya que el Distrito 17 se ubica en el Bloque de Intermedios, mientras que el Distrito 31 pertenece al BLOQUE DE MENORES – concretamente al 20% DE LOS MENORES, lo que implica que es un Distrito de mínimas posibilidades de triunfo.

Además, la sustitución solicitada por el Partido Revolucionario Institucional, integrante de la coalición Todos por México, en el Distrito 17 del Estado de México que pertenece al BLOQUE INTERMEDIO, implica que la fórmula de candidatos hombres sea sustituida por una fórmula de candidatas mujeres, solamente sirve para compensar la sustitución, que también, solicitó de una fórmula de mujeres por hombres en el Distrito 39 del Estado de México que también pertenece al BLOQUE INTERMEDIO. Sustitución que se considera factible porque en este caso se trata de dos Distritos que pertenecen al Bloque Intermedio, y no genera afectación alguna para el género femenino porque no disminuye su participación.

En cambio, no es admisible la sustitución solicitada respecto del Distrito 31 en el Estado de México que pertenece al Bloque de Menores (específicamente al de 20% menores), ya que se pretende sustituir a una fórmula integrada por hombres con una fórmula conformada por mujeres, lo que generaría un incremento de mujeres en los Distritos de menor competitividad.

Antes es importante aclarar que de acuerdo con el artículo 282, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones, los Distritos Electorales Federales se clasifican en distintos bloques de acuerdo con el porcentaje de votación emitida en el Proceso Electoral anterior; se divide la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de los Distritos enlistados. El primer bloque con los Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo bloque con los Distritos en los que se obtuvo una votación media y el tercer bloque con los Distritos en los que se obtuvo la votación más alta.

Además, dentro del Bloque de los Distritos de menor votación se identifican los últimos 20 Distritos de este bloque, es decir, los 20 Distritos en los que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favorezca o perjudique significativamente a un género en particular, es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.

Actualmente, en el caso concreto de la Coalición Todos por México (integrada por el Partido Revolucionario Institucional, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza), 45 Distritos están ubicados en el BLOQUE DE MENORES, y en ellos postuló 16 hombres y 29 mujeres, y dentro de ese bloque en la subclasificación denominada 20% DE LOS MENORES que se refiere a los Distritos con más baja votación en la elección anterior se ubican 9 Distritos, en los que registró originalmente 3 hombres (33.33%) y 6 mujeres (66.67%), lo que implica que dicha coalición postuló a un mayor número de mujeres en ese segmento, pues compiten en las dos terceras partes de los Distritos con mínima votación.

Como ya se dijo, el Distrito 31 en el Estado de México pertenece al Bloque de Menores (específicamente al de 20% menores), y en ese Distrito la coalición Todos por México registró originalmente una fórmula de candidatos integrada por hombres, misma que ahora se pretende sustituir por una fórmula conformada por mujeres, lo que ocasionaría que en el segmento de los 20% menores se tuvieran 2 hombres (22.22%) y 7 mujeres (77.78%), generando un sesgo que perjudica significativamente al género femenino y beneficia al género masculino, en tanto que las mujeres estarían participando en más de las tres cuartas partes de los Distritos con mínima votación.

Para evidenciar lo antes razonado, a continuación se insertan los cuadros siguientes:

**TODOS POR MÉXICO (133 Distritos)**  
**Acuerdo INE/CG299/2018**

(considerando la errata aprobada en el Acuerdo INE/CG391/2018)

Bloque	No. Distritos	Hombres	Mujeres
Menores	45	16	29
20% de los menores	9	3	6
Intermedios	44	21	23
Mayores	44	29	15
Total	133	66	67
Porcentaje		49.62%	50.38%

### **Propuesta de sustituciones**

**(Incluyendo sustituciones solicitadas de Distritos 11 y 31 del Estado de México)**

<b>Bloque</b>	<b>No. Distritos</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Menores	45	16	29
20% de los menores	9	<b>2</b>	<b>7</b>
Intermedios	44	21	23
Mayores	44	29	15
Total	133	66	67
Porcentaje		49.62%	50.38%

Además, la sustitución que se pretende en el Distrito 31 del Estado de México (20% DE LOS MENORES), en el sentido de sustituir una fórmula de hombres por una fórmula integrada por mujeres tampoco genera algún beneficio numéricamente, ya que en el BLOQUE DE MENORES conformado por 45 Distritos en el caso de la coalición Todos por México, se seguirían conservando 16 candidaturas para hombres y 29 para mujeres, como se autorizó en el Acuerdo INE/CG299/2018 de fecha 29 de marzo de 2018. Es decir, la referida sustitución no genera la participación de un mayor número de mujeres como candidatas, aunque sea en Distritos con menor votación, y tampoco en forma global se incrementa el número de mujeres postuladas por la coalición Todos por México, pues se seguiría contando con 67 mujeres y 66 hombres.

Ello es así, porque el Partido Verde Ecologista de México, integrante de la referida coalición, también solicitó la sustitución de una fórmula de mujeres por una fórmula integrada por hombres en el Distrito 11 del Estado de México (BLOQUE DE MENORES); circunstancia que no toma en cuenta la representante del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la coalición Todos por México, al formular sus argumentos en el oficio PRI/REP-INE/318/2018 de fecha 24 de abril de 2018.

Se insiste, si solamente se tratara de la sustitución de la fórmula de candidatos hombres por una fórmula integrada por mujeres en el Distrito 31 del Estado de México (BLOQUE DE MENORES – 20% DE LOS MENORES), y ello implicara que en el BLOQUE DE MENORES disminuyera a 15 el número de hombres y aumentara a 30 el número de mujeres, y que además en forma global aumentara el número de mujeres postuladas por la coalición Todos por México de 67 a 68 y, en consecuencia, disminuyera el número de

hombres de 66 a 65 para lograr un total de 133 candidaturas, podría ser factible dicha sustitución, al aumentar el número global de las mujeres. Sin embargo, ello no sucede en la especie, pues lo cierto es que, como ya se dijo, se pretende dicha sustitución en el Distrito 31 del Estado de México (BLOQUE DE MENORES – 20% DE LOS MENORES), a condición de que en el Distrito 11 de la misma entidad (BLOQUE DE MENORES) se sustituya una fórmula de mujeres por una integrada por hombres, lo que perjudica a las mujeres.

Esto es, la representante del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la coalición Todos por México, no toma en consideración que la referida coalición registró 133 candidaturas a diputaciones federales por el principio de mayoría relativa, y que los 133 Distritos electorales en los que participa en forma coaligada se clasificaron en diversos bloques: Menores y la subclasificación 20% de los menores, intermedios y mayores; y que al momento de solicitar alguna sustitución debe verificar si la fórmula se sustituye por personas del mismo género o no, y en caso de que la sustitución sea por un género distinto, entonces debe revisar a qué bloque pertenecen los distintos Distritos en los que se solicita la sustitución, para el efecto de velar que las mujeres no sean sustituidas por hombres en los Distritos que pertenecen a los BLOQUES DE MAYORES E INTERMEDIOS, salvo que se compense con sustituciones de hombres por mujeres en esos mismos bloques o se aumente la participación de las mujeres en tales bloques; y que las mujeres no sustituyan a hombres en el BLOQUE DE MENORES ni en el segmento de 20% DE LOS MENORES, a cambio de que se disminuya el número de mujeres en los BLOQUES DE MAYORES Y MENORES y se aumente el número de hombres en esos bloques, salvo que esas sustituciones de hombres por mujeres implique un incremento de éstas en el BLOQUE DE MENORES y en el número global.

Asimismo, la representante del Partido Revolucionario Institucional no toma en cuenta que forma parte de la coalición Todos por México y, por tanto, debe estar al pendiente de las sustituciones que también solicitan los otros partidos que conforman dicha coalición (PVEM y Nueva Alianza), porque los tres partidos en su conjunto y como integrantes de la referida coalición, están obligados a velar por la paridad de género en las candidaturas que registraron en coalición y que en los bloques no existan sesgos que perjudiquen a uno de los géneros y perjudiquen a otro.



Por tales razones, carece de sustento la afirmación de la representante del Partido Revolucionario Institucional, integrante de la coalición Todos por México, en el sentido de que con la sustitución que solicitó en el Distrito 17 del Estado de México (BLOQUE INTERMEDIO), se compensaría la sustitución que requiere en el Distrito 31 de la misma entidad (BLOQUE MENORES – 20% DE LOS MENORES), pues como ya se dijo, la sustitución del referido Distrito 17 (BLOQUE INTERMEDIO) que implica la sustitución de una fórmula de hombres por mujeres, se compensa con la sustitución del Distrito 39 del Estado de México (BLOQUE INTERMEDIO) al admitirse la sustitución de una fórmula de mujeres por hombres, y cuya sustitución también fue solicitada por la misma representante del Partido Revolucionario Institucional como integrante de la coalición Todos por México.

Por todo lo antes expuesto, no es factible la sustitución que se pretende en el Distrito 11 del Estado de México (BLOQUE DE MENORES), que solicitó el Partido Verde Ecologista de México como integrante de la coalición Todos por México, que pretende que la fórmula integrada por mujeres Susana Pichardo Pereyra y Eréndira Rodríguez Mosqueda, por una fórmula conformada por hombres Tassio Benjamín Ramírez Hernández y Ramiro Cisneros Tremear, en tanto que permitir esa sustitución genera la necesidad de autorizar otra sustitución para compensar el hecho de que se sustituya una fórmula de mujeres por una de hombres y velar por que se conserve la paridad entre los géneros.

Y hasta este momento, sólo se cuenta con la solicitud presentada por la representante del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la coalición Todos por México, de llevar a cabo la sustitución que pretende en el Distrito 31 del Estado de México (BLOQUE DE MENORES – 20% DE LOS MENORES), para el efecto de que una fórmula de hombres (José Luis Montero Ramos y Mario Fernández Galindo) sea sustituida por una fórmula integrada por mujeres (Alma Angélica Quiles Martínez e Irene Toribio Soriano).

Sin que sea viable acceder a las solicitudes de sustitución presentadas, porque de hacerlo implicaría el aumento del número de mujeres postuladas como candidatas en los Distritos en los que la elección anterior se obtuvo una mínima votación, pasando de 6 a 7 mujeres de los 9 Distritos que están

en esa condición de 20% DE LOS MENORES, lo que podría perjudicar la participación real de las mujeres; máxime que en el caso concreto, dicha sustitución implica que se disminuya el número de hombres en ese rango, porque pasaría de 3 a 2, lo que generaría un sesgo en perjuicio de las mujeres y a favor de los hombres, en tanto que en ese rango de 20% DE LOS MENORES las posibilidades de triunfo son mínimas.

Además, aceptar las sustituciones solicitadas, implicaría incumplir con la ratio essendi de las normas contenidas en el artículo 3, párrafo 5, de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 282, párrafo 3, del Reglamento de Elecciones, que tienen como finalidad evitar que uno de los géneros sea postulado exclusivamente en los Distritos de menor votación o que exista un sesgo que perjudique o favorezca significativamente a un género en particular, es decir, cuando se encuentre una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el otro; como en el caso sucede, al pretender postular 7 mujeres dentro de los 9 Distritos de menor votación.

En este caso, se recomienda que los integrantes de la coalición Todos por México, sustituyan por personas del mismo género a las personas que ya renunciaron a continuar en las candidaturas o que formulen sustituciones en otros Distritos que tengan como consecuencia que se mantenga el número de 3 hombres y 6 mujeres postuladas en el segmento de 20% DE LOS MENORES al que pertenecen 9 Distritos, o bien, que se sustituya una fórmula de hombres en los BLOQUES DE MAYORES Y MENORES para postular una fórmula de mujeres. Otra opción sería que en el Distrito 11 del Estado de México se sustituya a las mujeres que ya renunciaron a la candidatura, por una fórmula también integrada por mujeres, para hacer viable la sustitución que le interesa a la representante del Partido Revolucionario Institucional como integrante de la coalición Todos por México, en el Distrito 31 de la misma entidad federativa.

Aunado a lo anterior, dicha sustitución no puede admitirse bajo el argumento de que los hombres que integraban la fórmula postulada en el Distrito 31 del Estado de México, ya renunciaron a las candidaturas y las ratificaron en forma presencial ante las oficinas del INE, y que las mujeres con las que se pretende sustituir esa fórmula de candidatos, han expresado su voluntad de ser registradas para participar en el referido Distrito, en tanto que esta

autoridad considera que con independencia de que las mujeres con las que se pretende sustituir a la fórmula de candidatos del referido Distrito, hayan expresado su voluntad de ser registradas para contender por ese Distrito, lo cierto es que la coalición Todos por México es responsable de la postulación de las candidaturas y deben observar el principio de paridad, y cuidar que no exista un sesgo en perjuicio de las mujeres en los Distritos de mínima votación.

Con base en todo lo considerado, se puede afirmar que, contrario a lo que sostiene la representante del Partido Revolucionario Institucional, como integrante de la coalición Todos por México, la reiteración de la sustitución relativa al Distrito 31 del Estado de México, no tiene como finalidad incrementar la posibilidad de las mujeres para alcanzar la igualdad real; pues, como ya se dijo, el Distrito 31 de Estado de México pertenece no sólo al bloque de los menores, sino que se encuentra entre el 20% de los de porcentaje más bajo (de hecho es el segundo menor).

Así las cosas, por lo que hace a la sustitución relativa al Distrito 11 del Estado de México, en virtud de encontrarse en el bloque de menores, al que pertenece el Distrito 31 de la misma entidad, y al solicitarse la sustitución de una fórmula de mujeres por una fórmula de hombres, se mantiene en condición suspensiva hasta en tanto se atienda el requerimiento formulado por esta autoridad.

b.3) En razón de lo anterior, de conformidad con lo establecido por el punto vigésimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, dado que ya se otorgó a la coalición un plazo de 48 horas para rectificar la solicitud de sustitución aludida, lo conducente es sancionar a la coalición Todos por México con una amonestación pública y otorgarle un plazo de 24 horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, para que rectifique la solicitud de sustitución relativa al Distrito 31 del Estado de México, de modo que se dé cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, en relación con el artículo 282, párrafo 3 del Reglamento de Elecciones, sin dejar de cumplir el resto de los criterios de paridad que deben ser observados en la postulación de candidaturas a diputaciones por el principio de mayoría relativa. Lo anterior, apercibida de que en caso de no hacerlo, se procederá a la negativa de la solicitud de sustitución respectiva.

Ahora bien, por lo que hace a la sustitución relativa al Distrito 11 del Estado de México y, toda vez que es la primera vez que se le apercibe por dicha sustitución, se le requiere a la coalición Todos por México para que, en un plazo de 48 horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, rectifique la solicitud presentada, a efecto de dar cabal cumplimiento a los criterios de paridad aprobados por este Consejo General.

Cabe mencionar que las personas que ocupaban las fórmulas de candidaturas correspondientes a dichos Distritos, han presentado y ratificado su renuncia al cargo mencionado; por esa razón, es importante que se lleven a cabo las sustituciones correspondientes, respetando todas las reglas antes precisadas.

**c) Conformación de bloques.**

Para mayor claridad, en primer lugar, se muestra la integración de los bloques de candidaturas de la coalición Todos por México, conforme al Acuerdo de registro de candidaturas INE/CG299/2018 aprobado el 29 de marzo de 2018 (considerando la errata respectiva), y en segundo lugar, se muestra la forma en que quedarían integrados los bloques una vez efectuadas las sustituciones que sí resultan procedentes, sin incluir las relativas a los Distritos 11 y 31 del Estado de México que no se aprobaron.

**TODOS POR MÉXICO (133 Distritos)**

**Acuerdo INE/CG299/2018**

(considerando la errata aprobada en el Acuerdo INE/CG391/2018)

<b>Bloque</b>	<b>No. Distritos</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Menores	45	16	29
20% de los menores	9	3	6
Intermedios	44	21	23
Mayores	44	29	15
Total	133	66	67
Porcentaje		49.62%	50.38%

### Propuesta de sustituciones

(Sin incluir sustituciones solicitadas de Distritos 11 y 31 del Estado de México)

Bloque	No. Distritos	Hombres	Mujeres
Menores	45	16	29
20% de los menores	9	3	6
Intermedios	44	21	23
Mayores	44	29	15
Total	133	66	67
Porcentaje		49.62%	50.38%

### Requisitos y ratificación de renunciaciones

23. Las solicitudes de sustitución se presentaron acompañadas de la información y documentación a que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal.

Al respecto, cabe mencionar que de conformidad con lo establecido por el último párrafo del Punto Décimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, “Para que resulte procedente la solicitud de sustitución de candidatura por renuncia es necesario que ésta sea ratificada ante el Instituto por la persona interesada, de lo cual se levantará acta circunstanciada que se integrará al expediente respectivo.”

Lo anterior, cobra sustento en lo establecido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia 39/2015, que a la letra indica:

**“RENUNCIA. LAS AUTORIDADES Y ÓRGANOS PARTIDISTAS DEBEN CONFIRMAR SU AUTENTICIDAD.—**De la interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 35, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 16, numeral 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con los principios de certeza y seguridad jurídica, se concluye que para salvaguardar el derecho de voto, de participación y afiliación de la ciudadanía, la autoridad u órgano partidista encargado de aprobar la **renuncia** de una persona debe cerciorarse plenamente de su autenticidad, toda vez que trasciende a los intereses personales de un candidato o del instituto político y, en su caso, de quienes participaron en su elección. Por ello, para que surta efectos jurídicos, se deben

*llevar a cabo actuaciones, como sería la ratificación por comparecencia, que permitan tener certeza de la voluntad de **renunciar** a la candidatura o al desempeño del cargo y así garantizar que no haya sido suplantada o viciada de algún modo.*

**Quinta Época:**

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1122/2013.— Actora: Gabriela Viveros González.—Responsable: Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.— Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—Voto concurrente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: Berenice García Huante y Jorge Alberto Medellín Pino.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1132/2013.—Actor: Bernardo Reyes Aguilera.—Órgano responsable: Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática.—20 de noviembre de 2013.—Unanimidad de votos.— Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Mauricio Huesca Rodríguez.*

*Recurso de reconsideración. SUP-REC-585/2015 y acumulado.—Recurrentes: Partido Encuentro Social y otra.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—28 de agosto de 2015.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Ausente: Manuel González Oropeza.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.*

**La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinticinco de noviembre de dos mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.**

**Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 48 y 49.”**

En ese sentido, esta autoridad verificó que todas y cada una de las renunciaciones que han sido mencionadas en los considerandos que anteceden, hayan sido ratificadas ante este Instituto.

## **Paridad de género**

24. De conformidad con lo establecido por el artículo 232 párrafo 3, de la ley de la materia, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones que solicitaron la sustitución de candidaturas promovieron y garantizaron la paridad de género, siendo el caso que todos cumplieron con dicho principio, toda vez que mantuvieron sus porcentajes tal y como han sido aprobados por este Consejo General.

25. Asimismo, se constató que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 232, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las fórmulas de candidatos se encontraran integradas por personas del mismo género.
26. **Paridad horizontal.** Por lo que hace a la paridad horizontal, toda vez que no existió modificación alguna en el género que encabeza las listas de candidaturas a Senadurías de mayoría relativa todos los partidos políticos y coaliciones continúan en cumplimiento a las disposiciones aplicables.
27. **Paridad transversal.** Asimismo, se verificó la integración de los bloques de candidaturas en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, numeral 5 de la Ley de Partidos, siendo que los que se vieron modificados después de las sustituciones, son los siguientes:

### **DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA**

#### **POR MÉXICO AL FRENTE (283 Distritos) Acuerdo INE/CG299/2018**

<b>Bloque</b>	<b>No. Distritos</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Menores	95	45	50
20% de los menores	18	6	12
Intermedios	94	48	46
Mayores	94	48	46
Total	283	141	142
Porcentaje		49.82%	50.17%

#### **Por México al Frente Propuesta de sustituciones**

<b>Bloque</b>	<b>No. Distritos</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Menores	95	45	50
20% de los menores	18	6	12
Intermedios	94	<b>49</b>	<b>45</b>
Mayores	94	<b>47</b>	<b>47</b>
Total	283	141	142
Porcentaje		49.82%	50.17%

De lo anterior, se desprende que si bien por lo que hace al Distrito 34 del Estado de México, al solicitarse la sustitución de una fórmula de mujeres por una fórmula de hombres disminuye el número de mujeres que integran el bloque de intermedios, al solicitarse la sustitución de una fórmula de hombres por una fórmula de mujeres en el Distrito 09 de Michoacán, perteneciente al bloque de mayores, se aumenta la probabilidad de que las candidatas sean elegidas y se promueve la participación efectiva de éstas en la vida política del país.

En consecuencia, las sustituciones relativas se apegan al criterio aprobado por el Consejo General de este Instituto según se refiere en el antecedente IV del presente Acuerdo.

En razón de lo anterior, y a efecto de otorgar certeza sobre el criterio de esta autoridad respecto a la modificación de los bloques que surjan a partir de las solicitudes de sustitución presentadas por los partidos políticos y coaliciones, en la tabla siguiente se muestra el sentido en que los bloques podrán verse compensados en favor de las mujeres.

Bloque	La disminución del número de mujeres postuladas puede ser compensada en los bloques
20% menores	menor, intermedio y alto
Menores	intermedio y alto
Intermedio	alto
Alto	No puede disminuir el número de mujeres

- 28. Paridad vertical.** Los partidos políticos que realizaron cambios en sus listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, observaron lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

#### **Alcance del presente Acuerdo**

- 29.** Cabe destacar que el presente Acuerdo deriva de la necesidad de maximizar la participación de los partidos políticos, a través de sus candidatas y candidatos en situaciones extraordinarias. En efecto, el artículo 241 de la LGIPE establece que las sustituciones procederán en este período únicamente por fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. Así, los criterios adoptados buscan maximizar el ejercicio de los derechos político-



electorales de ciudadanos y partidos en tales circunstancias. Por ello, no debe entenderse que éstos sean aplicables, ni generen un precedente para pretender cumplir los requisitos para la postulación de candidaturas en futuros procesos electorales.

## **Sobrenombres**

30. La Jurisprudencia 10/2013, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la letra indica:

**BOLETA ELECTORAL. ESTÁ PERMITIDO ADICIONAR EL SOBRENOMBRE DEL CANDIDATO PARA IDENTIFICARLO (LEGISLACIÓN FEDERAL Y SIMILARES).**—De la interpretación sistemática de los artículos 35, fracciones I y II, 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 252 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que la autoridad administrativa electoral aprobará el modelo de boleta que se utilizará en una elección, con las medidas de certeza que estime pertinentes y que las boletas electorales deben contener, entre otros, apellido paterno, materno y nombre completo del candidato o candidatos, para permitir su plena identificación por parte del elector. No obstante, la legislación no prohíbe o restringe que en la boleta figuren elementos adicionales como el sobrenombre con el que se conoce públicamente a los candidatos, razón por la cual está permitido adicionar ese tipo de datos, siempre y cuando se trate de expresiones razonables y pertinentes que no constituyan propaganda electoral, no conduzcan a confundir al electorado, ni vayan en contravención o detrimento de los principios que rigen la materia electoral, dado que contribuyen a la plena identificación de los candidatos, por parte del electorado.

### **Quinta Época:**

Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.—Actor: Partido Nueva Alianza.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—9 de mayo de 2012.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.—Secretario: Carlos Vargas Baca. Recurso de apelación.

SUP-RAP-232/2012.—Actor: Nueva Alianza.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.—23 de mayo de 2012.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

SUP-JDC-911/2013.—Actor: Francisco Arturo Vega de Lamadrid.—Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California.—15 de mayo de 2013.—Unanimidad de cinco votos.—Ponente: Manuel González Oropeza.—Secretarios: Carmelo Maldonado Hernández, Edson Alfonso Aguilar Curiel y Javier Aldana Gómez.

**La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de julio de dos mil trece, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.**

**Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 13 y 14**

Con base en lo anterior, los partidos políticos y coaliciones solicitaron adicionar el sobrenombre de algunos de sus candidatos para que así se plasmara en la boleta electoral.

Al respecto, la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente identificado con el número SUP-RAP-188/2015, consideró que la inclusión en la boleta electoral de la denominación con la que se le conoce públicamente a un candidato, no puede sustituir o eliminar el nombre y apellidos del ciudadano, por lo que el sobrenombre debe incluirse después de dichos elementos.

En consecuencia, será en ese sentido como serán incluidos los sobrenombres de las candidatas y los candidatos correspondientes.

31. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 267, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo establecido en el punto vigésimo noveno del acuerdo INE/CG508/2017, aprobado por este Consejo General, no habrá modificación a las boletas electorales en caso de cancelación del registro, sustitución de uno o más candidatos, o corrección de datos si éstas ya estuvieren impresas.
32. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General solicitará la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* de los nombres de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.

En razón de los Considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafo 5; 23, párrafo 1, inciso e); y 85, párrafo 2; de la Ley General de Partidos Políticos; 30, párrafo 2; 44, párrafo 1, inciso j); 232, párrafos 1, 2 y 3; 238, párrafos 1, 2 y 3; y 240, párrafo 1; de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 44, párrafo 1, inciso t); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente:

## **A C U E R D O**

**PRIMERO.-** Se dejan sin efecto las constancias de registro de las candidaturas referidas en los Considerandos 3 al 22 del presente Acuerdo.

**SEGUNDO.-** Se registran las candidaturas a Senadurías por el principio de mayoría relativa presentadas por Nueva Alianza, así como por las coaliciones Por México al Frente y Juntos Haremos Historia, conforme a lo siguiente:

### **NUEVA ALIANZA**

**Entidad:** Guanajuato

<b>No. de Lista</b>	<b>Propietario</b>
1	José Humberto Muñoz Torres

**Entidad:** Puebla

<b>No. de Lista</b>	<b>Propietario</b>
2	Emilio Salgado Néstor

### **POR MÉXICO AL FRENTE**

**Entidad:** Colima

<b>No. de Lista</b>	<b>Suplente</b>
2	Óscar Manuel Gutiérrez Valencia

**Entidad:** Chihuahua

<b>No. de Lista</b>	<b>Suplente</b>
2	Maritere Yñárritu Salgado

### **JUNTOS HAREMOS HISTORIA**

**Entidad:** Baja California

<b>No. de Lista</b>	<b>Suplente</b>
1	Gerardo Novelo Osuna

**TERCERO.-** Se registran las candidaturas a Senadurías por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y Encuentro Social, conforme a lo siguiente:

#### **PARTIDO DEL TRABAJO**

<b>No. de Lista</b>	<b>Propietario</b>	<b>Suplente</b>
03	Giselle Yunueen Arellano Ávila	-----

#### **PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

<b>No. de Lista</b>	<b>Propietario</b>	<b>Suplente</b>
05	Geraldine González Cervantes	Adilene Angulo Gastelum

#### **ENCUENTRO SOCIAL**

<b>No. de Lista</b>	<b>Propietario</b>	<b>Suplente</b>
05	-----	Ma del Rocío Avonce Trujillo

**CUARTO.-** Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de mayoría relativa presentadas por el Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia, conforme a lo siguiente:

#### **PARTIDO DEL TRABAJO**

**Entidad:** Hidalgo

<b>Distrito</b>	<b>Propietario</b>	<b>Suplente</b>
02	Pascual Charrez Pedraza	Juan Omar Cruz Nopal

## PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

**Entidad:** Baja California Sur

<b>Distrito</b>	<b>Propietaria</b>	<b>Suplente</b>
02	María de Jesús Cruz Medina	Linda Joanna Peralta Ceseña

**Entidad:** Jalisco

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
01	José Juan González Pérez

**Entidad:** Querétaro

<b>Distrito</b>	<b>Propietario</b>
02	Christian Orihuela Gómez

## MOVIMIENTO CIUDADANO

**Entidad:** Morelos

<b>Distrito</b>	<b>Propietaria</b>	<b>Suplente</b>
03	-----	Julia Zapatero Vergara
04	Ana María Escobar Román	Anahí Batalla Carranza

## NUEVA ALIANZA

**Entidad:** Querétaro

<b>Distrito</b>	<b>Propietaria</b>	<b>Suplente</b>
02	Melissa Aryannee Herrera Meza	Gabriela Ruiz Bahena
05	-----	Marco Antonio Magaña Figueroa

## POR MÉXICO AL FRENTE

**Entidad:** Chiapas

<b>Distrito</b>	<b>Propietario/a</b>	<b>Suplente</b>
03	-----	Fernando Jiménez Aguilar
12	María de Lourdes Santos Zozaya	-----

**Entidad:** Ciudad de México

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
22	Mariana Cruz Velázquez

**Entidad: Guerrero**

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
05	Dulce Suleyma Gómez Soriano

**Entidad: Hidalgo**

<b>Distrito</b>	<b>Propietaria</b>	<b>Suplente</b>
03	Nancy Janeth Luna Zúñiga	-----
04	Liliana Villavicencio Ruiz "Lila"	Leticia Lira Lira

**Entidad: Jalisco**

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
20	María del Refugio Alvarado Romo

**Entidad: México**

<b>Distrito</b>	<b>Propietario</b>	<b>Suplente</b>
01	-----	Luis Fernando Anaya Martínez
32	Ramón Montalvo Hernández	-----
34	Mauricio López Chávez	Christian Daniel Espinosa Brito

**Entidad: Michoacán**

<b>Distrito</b>	<b>Propietaria</b>	<b>Suplente</b>
01	-----	Rosa Angélica Rico Cendejas
09	Edna Gisel Díaz Acevedo	Joanna Margarita Moreno Manzo

**Entidad: Puebla**

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
13	Ernesto Javier Cázares Rodríguez

**Entidad: Quintana Roo**

<b>Distrito</b>	<b>Suplente</b>
03	Berenice Sosa Osorio

**Conformación de bloques de la Coalición Por México al Frente**

<b>Bloque</b>	<b>No. Distritos</b>	<b>Hombres</b>	<b>Mujeres</b>
Menores	95	45	50
20% de los menores	18	6	12
Intermedios	94	49	45
Mayores	94	47	47
Total	283	141	142
Porcentaje		49.82%	50.17%

## TODOS POR MÉXICO

### Entidad: Chiapas

Distrito	Propietario	Suplente
07	Raciel López Salazar	Francisco Grajales Palacios
08	Juan Carlos Gómez Aranda	-----
10	Jorge Alberto Betancourt Esponda "Betancourt"	Bernardo Jacobo Cuesy Muñoz

### Entidad: Guerrero

Distrito	Propietario	Suplente
01	-----	Alitzel Guerrero Sotelo
06	-----	Ma. de Jesús Astudillo González

### Entidad: México

Distrito	Propietario/a	Suplente
17	María Verónica Solís García	Sandra Noemí Moreno Ayala
19	Perla Guadalupe Monroy Miranda	-----
23	-----	Jesús King Flores
39	Fernando González Mejía	Félix Báez Saca

## Conformación de bloques de la coalición Todos por México

Bloque	No. Distritos	Hombres	Mujeres
Menores	45	16*	29*
20% de los menores	9	3*	6*
Intermedios	44	21	23
Mayores	44	29	15
Total	133	66	67
Porcentaje		49.62%	50.38%

\*No se contemplan las sustituciones solicitadas respecto de los Distritos 11 y 31 del Estado de México

## JUNTOS HAREMOS HISTORIA

### Entidad: Nuevo León

Distrito	Propietario/a	Suplente
05	Santiago González Soto	Pedro Vázquez González
12	Sandra Paola González Castañeda	-----

**QUINTO.-** Se registran las candidaturas a Diputaciones por el principio de representación proporcional presentadas por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza conforme a lo siguiente:

**PARTIDO ACCIÓN NACIONAL**

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Cuarta	19	-----	Ricardo Omar Rodríguez Corte

**PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA**

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Primera	10	J. Guadalupe Valdivia Vital	-----
Segunda	27	Cristina Judith Rodríguez Araiza	María Ramona Araiza Martínez
Quinta	01	-----	Alejandro Mendoza Olvera
Quinta	21	José Alfredo Sánchez Reyes	-----

**PARTIDO DEL TRABAJO**

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Segunda	02	Margarita Alicia Arellanes Cervantes	-----
Segunda	04	Renata Libertad Ávila Valadez	Claudia Guadalupe Córdova Rojas
Tercera	13	-----	Soledad Marlene Guillén García
Cuarta	03	Rafael Ochoa Guzmán	Gerardo David Rodríguez López

**PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO**

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Tercera	04	-----	Ingrid Cristal Osorio Priego
Quinta	05	-----	Astrid Sontoya Muller

**MOVIMIENTO CIUDADANO**

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Cuarta	03	-----	María Guadalupe Loyo Malabar



### NUEVA ALIANZA

Circunscripción	No. de Lista	Propietaria/o	Suplente
Primera	01	Juan Díaz De la Torre	-----
Quinta	03	-----	Yeshua Sanyassi López Valdez
Quinta	04	Ruth Gabriela Goldschmied Guasch	Stefany Santuario Gutiérrez
Quinta	37	Arturo Charles Pérez	-----

**SEXTO.-** Expídanse las constancias de registro de las fórmulas de candidaturas referidas en los cuatro puntos que anteceden.

**SÉPTIMO.-** En razón de lo expuesto en el considerando 22 del presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido por el punto vigésimo tercero del Acuerdo INE/CG508/2017, se sanciona a la coalición Todos por México con una amonestación pública y se le otorga un plazo de 24 horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, para que rectifique la solicitud de sustitución relativa al Distrito 31 del Estado de México, apercibida de que en caso de no hacerlo, se procederá a la negativa del registro respectivo.

**OCTAVO.** En razón de lo expuesto en el considerando 22 del presente Acuerdo, se le otorga a la coalición Todos por México para que un plazo de 48 horas contadas a partir de la aprobación del presente Acuerdo, rectifique la solicitud de sustitución relativa al Distrito 11 del Estado de México.

**NOVENO.-** El criterio establecido en el considerando 22 del presente Acuerdo respecto del bloque del 20% de los menores, es un criterio exclusivo para el caso en él analizado, sin que pueda sentar un precedente para la postulación de candidaturas en procesos electorales futuros.

**DÉCIMO.-** Comuníquense vía correo electrónico las determinaciones y los registros materia del presente Acuerdo a los correspondientes Consejos del Instituto Nacional Electoral. Asimismo, a través del Secretario del Consejo General, remítase a los Consejos Locales y Distritales copia de los expedientes respectivos.

**DÉCIMO PRIMERO.-** Publíquese el presente Acuerdo en el *Diario Oficial de la Federación*.

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Gracias, Secretario del Consejo. \_\_\_\_\_

Le pido que continúe con el siguiente punto del orden del día, luego de pedirle que realice las gestiones necesarias para publicar el Acuerdo aprobado en el Diario Oficial de la Federación. \_\_\_\_\_

**El C. Secretario del Consejo, Licenciado Edmundo Jacobo Molina:** El siguiente punto del orden del día, es el relativo a Asuntos Generales, Consejero Presidente. \_\_\_\_\_

**El C. Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello:** Integrantes del Consejo General, en términos del artículo 14, párrafo 17 del Reglamento de Sesiones de este órgano colegiado, les consulto si desean agendar algún asunto en lo general. \_  
Al no haber asuntos generales, Señoras y señores Consejeros y representantes, se han agotado los asuntos del orden del día, agradezco a todos ustedes su presencia, buenas tardes. \_\_\_\_\_

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 17:35 horas. \_\_\_\_\_

La presente Acta fue aprobada en sesión ordinaria del Consejo General celebrada el 28 de mayo de dos mil dieciocho, por votación unánime de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Maestra Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello. \_\_\_\_\_

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**